Gaceta del Senado

Año I SEGUNDO PERIODO ORDINARIO	Legislatura LXII	Martes 30 de Abril de 2013	No. 134 TOMO I

CONTENIDO TOMO I

ORDEN DEL DÍA…….. **4**

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR……..…… **10**

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES

Una, de la Sen. Arely Gómez González, con la que remite el Informe Anual de Actividades del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, correspondiente a 2012. … **22**

Una, de la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, con la que remite el Informe de actividades de la delegación del Congreso Mexicano que acudió a la 128ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria y reuniones conexas, del 22 al 27 de marzo de 2013, en Quito, Ecuador. ……..… **23**

Una, de la Comisión de Derechos Humanos, con la que remite su Informe de Actividades correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura. ……..……..… **23**

Una, del Sen. Ricardo Barroso Agramont, con la que remite el Informe de la Comisión de Marina respecto a la audiencia pública "Retos y Perspectivas de la Construcción en México", celebrada el 24 de abril del año en curso. ……..……..… **24**

SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL

Consulta la Gaceta del Senado en ***www.senado.gob.mx***

CÁMARA DE DIPUTADOS

Oficios con los que remite:

- Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, devuelto con modificaciones, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional. .....…… **25**

- Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 32, inciso D. de la Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de fomento de la convivencia sin violencia. **29**

- Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 215 Bis al Código Penal Federal. **31**

- Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, fracción XVI; 82; y se adiciona la fracción XXVII, recorriéndose en su orden las subsecuentes del artículo 2 de la Ley General de Protección Civil. ……..… **33**

- Proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 3 del artículo 218 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. ……..… **36**

- Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Capítulo VI, denominado "De las Sanciones", de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de sanciones. ……..… **38**

- Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de violencia escolar. ……..……..… **42**

INICIATIVAS PARA TURNO DIRECTO A COMISIONES

De los Senadores Arely Gómez González, Roberto Gil Zuarth, Manuel Camacho Solís, Pablo Escudero Morales, Angélica De La Peña Gómez, Omar Fayad Meneses, Luis Armando Melgar Bravo y Dolores Padierna Luna, la que contiene proyecto de decreto por el que se expide el Código Procesal Penal para la República Mexicana. ……..……..… **51**

De la Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se expide una nueva Ley Minera, que abroga la Ley Minera publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 1992. ……..……..… **413**

MESA DIRECTIVA

PRESIDENTE, SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO; **VICEPRESIDENTE,** SEN. JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES; **VICEPRESIDENTE,** SEN. ENRIQUE BURGOS GARCÍA; **VICEPRESIDENTE,** SEN. LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ; **SECRETARIA,** SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO REZA; **SECRETARIA,** SEN. ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA; **SECRETARIA,** SEN. IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA; **SECRETARIA,** SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA; **SECRETARIA**, SEN. MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ.

.

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

PRESIDENTE SEN. EMILIO GAMBOA PATRÓN, COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO, COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; SEN. LUIS MIGUEL GERÓNIMO BARBOSA HUERTA, COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA; SEN. JORGE EMILIO GONZÁLEZ MARTÍNEZ, COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO; SEN. MANUEL BARTLETT DÍAZ, COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO; SEN. MIGUEL ROMO MEDINA, GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; SEN. ANA LILIA HERRERA ANZALDO, GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; SEN. FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN, GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

De la Sen. Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de trabajo infantil. …… **449**

Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5 y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de abolición del servicio militar nacional. …… **454**

Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, de la Ley Orgánica de la Armada de México, del Código de Justicia Militar y se abroga la Ley del Servicio Militar. …… **458**

Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, para crear el programa Prepa Sí a nivel nacional y evitar la deserción escolar. … **462**

Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona el inciso XVIII al artículo 3 y se reforman los artículos 7, 9-A y 50 de la Ley Federal de Telecomunicaciones. …… **489**

De la Sen. Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se crea la Ley General para la Salud Alimentaria y la Prevención y Atención Integral de la Obesidad, el Sobrepeso y los Trastornos de la Conducta Alimentaria. …… **493**

De la Sen. Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Civil Federal, de la Ley de Asistencia Social, de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. …… **507**

De los Senadores Angélica de la Peña Gómez y Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que el que se derogan, adicionan y reforman diversos artículos de la Ley General de Salud, en materia de reproducción humana asistida. …… **517**

CONTINÚA TOMO II

ORDEN DEL DÍA

Acta de la sesión anterior.

TOMA DE PROTESTA DE LOS CIUDADANOS MARGARITA MARÍA ZORRILLA FIERRO, EDUARDO BACKHOFF ESCUDERO, TERESA BRACHO GONZÁLEZ, GILBERTO RAMÓN GUEVARA NIEBLA Y SYLVIA IRENE SCHMELKES DEL VALLE, INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES

Una, de la Sen. Arely Gómez González, con la que remite el Informe Anual de Actividades del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, correspondiente a 2012.

Una, de la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, con la que remite el Informe de actividades de la delegación del Congreso Mexicano que acudió a la 128ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria y reuniones conexas, del 22 al 27 de marzo de 2013, en Quito, Ecuador.

Una, de la Comisión de Derechos Humanos, con la que remite su Informe de Actividades correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.

Una, del Sen. Ricardo Barroso Agramont, con la que remite el Informe de la Comisión de Marina respecto a la audiencia pública "Retos y Perspectivas de la Construcción en México", celebrada el 24 de abril del año en curso.

Comunicaciones oficiales

CÁMARA DE DIPUTADOS

Oficios con los que remite:

- Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, devuelto con modificaciones, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.
- Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 32, inciso D. de la Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de fomento de la convivencia sin violencia.
- Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 215 Bis al Código Penal Federal.
- Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, fracción XVI; 82; y se adiciona la fracción XXVII, recorriéndose en su orden las subsecuentes del artículo 2 de la Ley General de Protección Civil.
- Proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 3 del artículo 218 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
- Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Capítulo VI, denominado “De las Sanciones”, de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de sanciones.
- Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de violencia escolar.

INICIATIVAS PARA TURNO DIRECTO A COMISIONES

De los Senadores Arely Gómez González, Roberto Gil Zuarth, Manuel Camacho Solís, Pablo Escudero Morales, Angélica De La Peña Gómez, Omar Fayad Meneses, Luis Armando Melgar Bravo y Dolores Padierna Luna, la que contiene proyecto de decreto por el que se expide el Código Procesal Penal para la República Mexicana.

De la Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se expide una nueva Ley Minera, que abroga la Ley Minera publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 1992.

De la Sen. Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de trabajo infantil.

Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5 y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de abolición del servicio militar nacional.

Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, de la Ley Orgánica de la Armada de México, del Código de Justicia Militar y se abroga la Ley del Servicio Militar.

Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, para crear el programa Prepa Sí a nivel nacional y evitar la deserción escolar.

Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona el inciso XVIII al artículo 3 y se reforman los artículos 7, 9-A y 50 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

De la Sen. Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se crea la Ley General para la Salud Alimentaria y la Prevención y Atención Integral de la Obesidad, el Sobrepeso y los Trastornos de la Conducta Alimentaria.

De la Sen. Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Civil Federal, de la Ley de Asistencia Social, de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

De los Senadores Angélica de la Peña Gómez y Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que el que se derogan, adicionan y reforman diversos artículos de la Ley General de Salud, en materia de reproducción humana asistida.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN

De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Comunicaciones y Transportes, de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, con opinión de las Comisiones de Gobernación y de Justicia, el que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos

6o.; 7o.; 27; 28; 73; 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones.

De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXIX-U al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 4º y se reforma la fracción XXIX-P del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Comercio, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, de la Ley de Sociedades de Inversión, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de la Ley Federal de Derechos y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

De las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto que reforma la fracción XII del artículo 6o. de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

De las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 27 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

De las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4o. de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

De las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo y se adiciona un párrafo tercero, un párrafo cuarto y un párrafo quinto, todos del artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 30, 222 y 464 Ter de la Ley General de Salud.

De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 225 y se adiciona un artículo 225 Bis a la Ley General de Salud.

De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 115 de la Ley General de Salud.

De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo 36 de la Ley General de Salud.

De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

De las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Gobernación, el que contiene punto de acuerdo por el que la Cámara de Senadores comunica al Presidente de la República, no haber objeción alguna

al nombramiento expedido en favor del ciudadano Alejandro Ramos Esquivel para ocupar el cargo de Director General de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano.

De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia, el que contiene puntos de acuerdo para dejar sin efectos el dictamen aprobado por el Pleno de la Cámara de Senadores el 26 de abril de 2012 sobre la no ratificación del ciudadano José Lima Cobos como Magistrado Numerario del Tribunal Superior Agrario, para posteriormente reponer el procedimiento.

De las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Procampo. *(Dictamen en sentido negativo)*

De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de decreto por el que se reformaba el artículo 3 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica. *(Dictamen en sentido negativo)*

De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de decreto por el que se reformaba el artículo 76 bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor. *(Dictamen en sentido negativo)*

De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto por el que se adicionaba un segundo párrafo al artículo 1406 y se reformaba el artículo 1410 del Código de Comercio. *(Dictamen en sentido negativo)*

De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Ley para incrementar la Competitividad Internacional de México. *(Dictamen en sentido negativo)*

De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto por el que se reformaban diversos artículos de la Ley de Propiedad Industrial. *(Dictamen en sentido negativo)*

De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto por el que se reformaban los artículos 31, 43, 115 y 123 de la Ley General de Salud. *(Dictamen en sentido negativo)*

De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto por el que se reformaba la fracción II del artículo 163 de la Ley General de Salud, en materia de auto-asientos. *(Dictamen en sentido negativo)*

Uno, de la Comisión de Vivienda, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a las Comisiones de Puntos Constitucionales, de Vivienda y de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial a realizar una revisión integral de los instrumentos legales de sus respectivas materias, con el objeto de analizar e identificar las modificaciones necesarias para atender los objetivos establecidos en el artículo 4° constitucional.

Dos, de la Comisión de Cultura, los que contienen puntos de acuerdo:

- Que exhorta al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a evaluar la posibilidad de llevar a cabo el *tercer congreso internacional la experiencia intelectual de las mujeres en el siglo XXI*.
- Que solicita al Instituto Nacional de Antropología e Historia informe sobre el eventual riesgo a que pudieran estar sujetas las estructuras arquitectónicas localizadas en el Cerro del Jumil, en Temixco, estado de Morelos, con motivo de la explotación minera a cargo de la compañía Esperanza Resources Corporation.

Cinco, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, los que contienen puntos de acuerdo:

- Por el que el Senado de la República se congratula por el cuadragésimo sexto aniversario del Tratado de Tlatelolco y por la revitalización política del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe.
- Que exhorta al Ejecutivo Federal a instruir a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que remita a esta Soberanía el memorándum de antecedentes de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, adoptada por la Organización Iberoamericana de los Jóvenes el 11 de octubre de 2005.
- Que exhorta al Ejecutivo Federal a declarar el reconocimiento del Estado mexicano de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas.
- Que exhorta al Ejecutivo Federal a suscribir el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica.
- Que exhorta al Ejecutivo Federal a suscribir el Convenio para la Protección de los Niños contra la Explotación y el Abuso Sexual, conocido como Convenio de Lanzarote.

Dos, de la Comisión de Energía, los que contienen puntos de acuerdo:

- Por el que se desecha la proposición que exhortaba al Director General de Pemex a comparecer para dar un informe sobre las acciones implementadas para mejorar la regulación en materia de seguridad industrial.
- Por el que se desecha la proposición que solicitaba convocar a un foro nacional sobre la reforma energética.

Uno, de la Comisión de Justicia, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a promover que la Junta de Gobierno y Administración de ese Tribunal formule los estudios de viabilidad y, en su caso, se proponga al Pleno la reforma al Reglamento Interior de ese órgano jurisdiccional, a fin de que se cree una sala especializada en materia ambiental.

Siete, de la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo:

- Que exhorta a las entidades federativas que aún no cuentan con programas relativos a la prevención de accidentes automovilísticos a causa del consumo del alcohol, a implementar el llamado "alcoholímetro" de forma permanente.
- Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a integrar al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, las políticas públicas de salud y educación, tendientes a inhibir la pandemia de obesidad que azota al país.
- Que exhorta al Director del Instituto Nacional de Salud Pública a sumarse a los trabajos de instituciones y organismos no gubernamentales nacionales e internacionales, en favor de transformar las condiciones que propicien que las generaciones infantiles reduzcan el consumo de alimentos con alto contenido calórico que ocasionan el sobrepeso y la obesidad.
- Que exhorta al Gobierno Federal para que la Comisión Nacional de Bioética y su Consejo remitan un informe de las funciones realizadas durante el último periodo de gestión.
- Que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer e implementar acciones de difusión de las consecuencias del cáncer colorrectal.
- Que exhorta al Ejecutivo Federal a realizar acciones de información, vigilancia epidemiológica y prevención de la gripe aviar.
- Que exhorta al Ejecutivo Federal a diseñar una estrategia integral de capacitación a técnicos radiólogos, para la correcta interpretación de las mastografías y detección oportuna del cáncer de mama.

Uno, de las Comisiones Unidas de Asuntos Fronterizos, Norte y de Asuntos Fronterizos, Sur, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que, en el marco de los trabajos de elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, convoque a las dependencias competentes de la administración pública federal, a los gobiernos de los estados fronterizos y a los sectores comercial, de servicios y

empresarial, a efecto de reunir propuestas que fortalezcan el esquema de desgravación arancelaria para la empresas fronterizas, como parte de las políticas de desarrollo económico regional en el país.

Uno, de la Comisión de Seguridad Social, el que contiene punto de acuerdo por el que se remite al congreso del estado de Tlaxcala y al órgano superior de fiscalización de dicho estado el punto de acuerdo que exhorta a realizar una minuciosa auditoría al organismo Pensiones Civiles del estado de Tlaxcala, a efecto de que, en su caso, se establezcan las responsabilidades civiles, administrativas y penales que procedan.

PROPOSICIONES PARA TURNO DIRECTO A COMISIONES

De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República a promover con la Colegisladora la creación de la comisión bicamaral que dé seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y participe en la definición de la agenda global para los Objetivos de Desarrollo del Milenio Post 2015.

De los Senadores Fernando Herrera Ávila y Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a atender y resolver el problema que está afectando el desarrollo de la Feria Nacional de San Marcos.

De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor a comparecer ante esta Soberanía con el objeto de que rinda un informe sobre los fundamentos para imponer sanciones al restaurante "Máximo Bistrot".

Del Sen. Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo del estado de Nuevo León a instruir a las autoridades correspondientes a respetar la proporción en la asignación de los recursos del Fondo Metropolitano para la zona metropolitana de Monterrey aplicada en los años 2011 y 2012, para este año 2013.

De la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que el Senado de la República expresa su beneplácito y apoyo a la candidatura del Doctor Herminio Blanco Mendoza para dirigir la Organización Mundial del Comercio.

ELECCIÓN DE SENADORES INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE PARA EL SEGUNDO RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA

AGENDA POLÍTICA

De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse al comportamiento del titular de la PROFECO, Humberto Benítez Treviño, ante el caso de la clausura del establecimiento mercantil denominado: "Máximo Bistrot".

EFEMÉRIDES

Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con motivo de la conmemoración del Día del Niño.

DECLARATORIA DE CLAUSURA

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL LUNES VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL TRECE.

PRESIDE EL SENADOR
ERNESTO CORDERO ARROYO

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las diecinueve horas con treinta y cinco minutos del día lunes veintinueve de abril de dos mil trece, encontrándose presentes ochenta y un ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión.

(Acta de la sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del jueves veinticinco de abril de dos mil trece.

Los Senadores del estado de Campeche, hicieron uso de la palabra para referirse al 150 Aniversario de la fundación del estado.- *Intervinieron los Senadores: Raúl Aarón Pozos Lanz del PRI y Jorge Luis Lavalle Maury del PAN.*

(Comunicaciones)

Se recibió del Senador Aarón Irízar López, Presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, el Informe del Foro Regional de Consulta sobre la Ley de Agua Potable y Saneamiento, celebrado el 24 de abril de 2013 en Guanajuato.- *Quedó de enterado.*

Se recibió de la Comisión contra la Trata de Personas, el Informe de la instalación de la Conferencia Nacional de Legisladoras y Legisladores contra la Trata de Personas, realizada el 22 de abril de 2013, en el recinto del Senado de la República.- *Quedó de enterado.*

Se recibió del Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el Informe de actividades realizadas durante la sesión de la Tercera Reunión de la Comisión Interparlamentaria de Probidad y Transparencia del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y el Caribe, celebrada el 18 de abril del 2013, en la sede del Senado de la República.- *Quedó de enterado.*

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, la designación del ciudadano Alejandro Ramos Esquivel como Director General de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano.- *El Presidente de la Mesa Directiva informó de su recepción y turno directo a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Gobernación, el pasado viernes 26 de abril.*

Se recibió del Banco de México, copia del dictamen de los estados financieros de la institución al 31 de diciembre de 2012 y 2011 y el Informe sobre el Ejercicio del Presupuesto de Gasto Corriente e Inversión en Activos Fijos y de Inversión en Activo Circulante, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012.- *Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.*

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 6o.; 7o.; 27; 28; 73; 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, devuelto con modificaciones, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.- *El Presidente de la Mesa Directiva informó de su recepción y turno directo a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Comunicaciones y Transportes, de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, con opinión de las Comisiones de Gobernación y de Justicia, el pasado viernes 26 de abril.*

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 71 a la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores.- *Se turnó a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos.*

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Minera y de la Ley de Coordinación Fiscal.- *Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, de Hacienda y Crédito Público, de Energía y de Estudios Legislativos, Primera.*

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al Sector Social de la Economía.- *Se turnó a las Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Estudios Legislativos, Segunda.*

Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto que reforma el artículo 27 y deroga el artículo 32 de la Ley del Seguro Social.- *Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, Primera.*

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno directo a las siguientes iniciativas:

Del Senador Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un Capítulo IX al Título Décimo Tercero del Libro Segundo del Código Penal Federal.- *Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública, de Justicia y de Estudios Legislativos.*

Del Senador José Rosas Aispuro Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 333, 334, 335, 336 y 337 de la Ley Federal del Trabajo.- *Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera.*

Del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Minas.- *Turno a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos.*

Del Senador Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo y se recorren los subsecuentes de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- *Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera.*

Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 6º de la Ley Federal de Radio y Televisión.- *Se turnó a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, Primera.*

Del Senador Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 7, 50 Bis, 64, 67, 68, 68 Bis 1, 69 y 94 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.- *Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda.*

De los Senadores Francisco Salvador López Brito y Ernesto Javier Cordero Arroyo, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que adiciona una fracción XXIX-R al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- *Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera.*

Del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que establece un Derecho Minero al Valor de la Producción.- *Se turnó a la Cámara de Diputados.*

Del Senador Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se expide el Código Único del Procedimientos Penales.- *Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.*

Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que adiciona una fracción IX al artículo 5º de la Ley General de Asentamientos Humanos.- *Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial y de Estudios Legislativos, Segunda.*

De los Senadores Ernesto Ruffo Appel, Francisco Salvador López Brito y Ricardo Barroso Agramont, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Puertos.- *Se turnó a las Comisiones Unidas de Pesca y de Estudios Legislativos.*

De los Senadores Ángel Benjamín Robles Montoya, Adolfo Romero Lainas y Eviel Pérez Magaña, con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación.- *Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.*

Del Senador Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Turismo.- *Se turnó a las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera.*

Del Senador Félix González Canto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero de la fracción XX del artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- *Se turnó a la Cámara de Diputados.*

Del Senador Octavio Pedroza Gaitán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo de la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- *Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera.*

De la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 157 Bis de la Ley General de Salud.- *Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.*

De los Senadores Carlos Mendoza Davis, Roberto Gil Zuarth, Raúl Gracia Guzmán y José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Justicia Alternativa.- *Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.*

Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXXVI del artículo 3 y se adiciona un párrafo a la fracción I al artículo 90 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.- *Se turnó a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos, Primera.*

Del Senador Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma la fracción VIII del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- *Se turnó a la Cámara de Diputados.*

Del Senador Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 5 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.- *Se turnó a la Cámara de Diputados.*

Del Senador Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 73 de la Ley del Seguro Social.- *Se turnó a la Cámara de Diputados.*

(Dictámenes de Primera Lectura)

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Comercio, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, de la Ley de Sociedades de Inversión, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de la Ley Federal de Derechos y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.- *Quedó de primera lectura.*

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto que reforma la fracción XII del artículo 6o. de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.- *Quedó de primera lectura.*

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 27 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.- *Quedó de primera lectura.*

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4o. de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.- *Quedó de primera lectura.*

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo y se

adiciona un párrafo tercero, un párrafo cuarto y un párrafo quinto, todos del artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.- *Quedó de primera lectura.*

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 30, 222 y 464 Ter de la Ley General de Salud.- *Quedó de primera lectura.*

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 225 y se adiciona un artículo 225 Bis a la Ley General de Salud.- *Quedó de primera lectura.*

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 115 de la Ley General de Salud.- *Quedó de primera lectura.*

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo 36 de la Ley General de Salud.- *Quedó de primera lectura.*

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud.- *Quedó de primera lectura.*

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Comunicaciones y Transportes, de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, con opinión de las Comisiones de Gobernación y de Justicia, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 6o.; 7o.; 27; 28; 73; 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones.- *Quedó de primera lectura.*

(Dictámenes a discusión)

El Presidente de la Mesa Directiva puso a votación el dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones, así como la denominación de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria; y se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Migración.- *Con las modificaciones que había autorizado la Asamblea, fue aprobado el dictamen por 100 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados.*

PRESIDE EL SENADOR
JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 210, fracción I; 218, fracción III; 235; y se adiciona un último párrafo al artículo 213 de la Ley Federal del Derecho de Autor.- *Intervino la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, por las comisiones, para presentar el dictamen. Fue aprobado por 101 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal.*

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Marina y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas.- *Intervino el Senador Francisco García Cabeza de Vaca del PAN en pro. Fue aprobado por 103 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados.*

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18, inciso a) de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.- *Sin discusión, fue aprobado por 105 votos en pro. Se remitió al Ejecutivo Federal.*

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto que reforma los artículos 6°, 65, 67, 69, 75 y 76; y adiciona los artículos 69, 75 y 76 de la Ley General de Educación.- *Intervino el Senador Juan Carlos Romero Hicks, por las comisiones, para presentar el dictamen. Para fijar la posición de los grupos parlamentarios hicieron uso de la tribuna los Senadores: Gerardo Flores Ramírez del PVEM; Manuel Bartlett Díaz del PT; y Fidel Demédicis Hidalgo del PRD. Para la discusión en lo general intervinieron los Senadores: Pablo Escudero Morales del PVEM, a favor; Raúl Aarón Pozos Lanz del PRI, a favor; Martha Palafox Gutiérrez del PT, a favor; Benjamín Robles Montoya del PRD, a favor; Sofío Ramírez Hernández del PRD, a favor; y Mario Delgado Carrillo del PRD, a favor. Fue aprobado por 112 votos en pro. Se remitió a la Cámara de Diputados.*

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, de Estudios Legislativos, Primera y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- *Los Senadores Pablo Escudero Morales, Arely Gómez González y María del Pilar Ortega Martínez solicitaron insertar sus intervenciones en el Diario de los Debates. Intervino el Senador Roberto Gil Zuarth del PAN. Fue aprobado por 103 votos en pro y 6 en contra. Se remitió a la Cámara de Diputados.*

El Presidente de la Mesa Directiva dio turno directo a las siguientes proposiciones:

Del Senador Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional para la Defensa de Usuarios de las Instituciones Financieras elaborar un diagnóstico e informar sobre la situación de "cobros no reconocidos".- *Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.*

De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a rendir un informe y evaluación del impacto ambiental por el daño ocasionado por el gusano descortezador en los bosques de diversos estados de la República Mexicana.- *Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería.*

De la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores a crear la comisión especial de seguimiento al uso de recursos públicos destinados a programas sociales federales durante los procesos electorales y a las denuncias que por su uso indebido se presenten; y exhorta al titular del Ejecutivo Federal a instituir el observatorio ciudadano para el seguimiento y evaluación de la Cruzada Nacional Contra el Hambre.- *Se turnó a la Junta de Coordinación Política el primer resolutivo y a la Comisión de Desarrollo Social el segundo de ellos.*

De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Director General del Instituto Nacional de Salud a acordar y mantener reuniones frecuentes con las comisiones pertinentes del Senado para que las acciones a desarrollar respecto al control y gobierno de la epidemia de obesidad, se coordinen y coadyuven ejecutiva y legislativamente a controlar e inhibir las causales que propiciaron una epidemia de proporciones históricas.- *Se turnó a la Comisión Salud.*

De la Senadora Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal para que el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos se adhiera formalmente al Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil de la Organización Internacional del Trabajo.- *Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales.*

Del Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a considerar la enfermedad quística como una enfermedad de gasto catastrófico y se incluya como intervención cubierta por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular para los menores de 18 años.- *Se turnó a la Comisión de Salud.*

De los Senadores Alejandro Encinas Rodríguez, Sofío Ramírez Hernández y Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo en torno a la grave afectación social y al medio ambiente, consecuencia de la construcción del proyecto denominado "Marina Turística, Puerto Majahua".- *Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.*

Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a realizar las acciones necesarias para que el nopal y el maguey sean reconocidos como patrimonio de la Nación.- *Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería.*

Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Relaciones Exteriores a realizar las gestiones diplomáticas conducentes con el Gobierno de los Estados Unidos de América para que se implementen políticas y acciones que redunden en la calidad de espacio y procedimientos en los trámites de internamiento de viajeros que ingresen legalmente a ese país por vía terrestre a través de la frontera con nuestro país, con el compromiso de reciprocidad.- *Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.*

De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República rechaza categóricamente las expresiones denigrantes vertidas el día 17 de abril de 2013 por el Secretario de Estado de los Estados Unidos de América, John Kerry.- *Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte.*

De las Senadoras Ana Gabriela Guevara Espinoza, Layda Sansores San Román y Adriana Dávila Fernández, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a realizar adecuaciones a los acuerdos por los que se crea el Consejo Consultivo de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación y por el que se define la estructura, organización y funcionamiento del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración.- *Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios.*

De los Senadores Ricardo Barroso Agramont, José Francisco Yunes Zorrilla, Francisco García Cabeza de Vaca y Ernesto Ruffo Appel, con punto de acuerdo que exhorta al titular

del Ejecutivo Federal a integrar al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 a la industria naval, como un subsistema para la creación de un marco jurídico, programas, recursos y capacidades productivas que lo transformen en una actividad económica generadora de empleos, ingresos, impulso y desarrollo del sector marítimo nacional.- *Se turnó a la Comisión de Marina.*

Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a informar sobre el cumplimiento del artículo 101 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, relativo al etiquetado de organismos genéticamente modificados o productos que lo contengan.- *Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería.*

Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar con equidad e igualdad los trámites para obtener la carta de naturalización.- *Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios.*

Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a revisar estricta y minuciosamente la situación que guardan las zonas afectadas del estado de Oaxaca a causa del descenso de temperaturas por las intensas lluvias de los últimos días del mes de abril.- *Se turnó a la Comisión de Protección Civil.*

La Presidencia dio por concluida la sesión a las veintiún horas con treinta minutos y citó a la siguiente el martes treinta de abril a las once horas.

Fin de la sesión.

REGISTRO DE ASISTENCIA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2013

De conformidad con los artículos 63 y 64 del Reglamento del Senado de la República, se presenta la siguiente relación:

SENADORES ASISTENTES, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 58 DEL REGLAMENTO:

AISPURO TORRES JOSÉ ROSAS
ALBORES GLEASON ROBERTO ARMANDO
ALCALÁ RUIZ BLANCA
ÁLVAREZ GARCÍA IVONNE LILIANA
AMADOR GAXIOLA DANIEL
ARAUJO LARA ANGÉLICA
ARRIOLA GORDILLO MÓNICA
ÁVILA RUIZ DANIEL GABRIEL
BARBOSA HUERTA MIGUEL
BARRALES MAGDALENO ALEJANDRA
BARRERA TAPIA MARÍA ELENA
BARROSO AGRAMONT RICARDO
BARTLETT DÍAZ MANUEL
BLASQUEZ SALINAS MARCO A.
BURGOS GARCÍA ENRIQUE
BÚRQUEZ VALENZUELA FRANCISCO
CALDERÓN HINOJOSA LUISA MARÍA
CAMACHO SOLÍS MANUEL
CASILLAS ROMERO JESÚS
CAVAZOS LERMA MANUEL
CERVANTES ANDRADE RAÚL
CHICO HERRERA MIGUEL ÁNGEL
CORDERO ARROYO ERNESTO
CORRAL JURADO JAVIER
COTA JIMÉNEZ MANUEL HUMBERTO
CUÉLLAR CISNEROS LORENA
CUEVAS BARRÓN GABRIELA
DÁVILA FERNÁNDEZ ADRIANA
DE LA PEÑA GÓMEZ ANGÉLICA
DELGADO CARRILLO MARIO
DEMEDICIS HIDALGO FIDEL
DÍAZ LIZAMA ROSA ADRIANA
DÍAZ SALAZAR MARÍA CRISTINA
DOMÍNGUEZ SERVIÉN FRANCISCO
ENCINAS RODRÍGUEZ ALEJANDRO
ESCUDERO MORALES PABLO
FAYAD MENESES OMAR
FERNÁNDEZ AGUIRRE BRAULIO M.
FLORES ESCALERA HILDA ESTHELA
FLORES RAMÍREZ JUAN GERARDO
FLORES SÁNCHEZ MARGARITA
GAMBOA PATRÓN EMILIO
GÁNDARA CAMOU ERNESTO

GARCÍA CABEZA DE VACA FRANCISCO
GARCÍA GÓMEZ MARTHA ELENA
GARZA GALVÁN SILVIA GUADALUPE
GASTÉLUM BAJO DIVA
GIL ZUARTH ROBERTO
GÓMEZ DEL CAMPO GURZA MARIANA
GÓMEZ GONZÁLEZ ARELY
GONZÁLEZ CANTO FÉLIX
GRACIA GUZMÁN RAÚL
GUERRA CASTILLO MARCELA
GUEVARA ESPINOZA ANA GABRIELA
HERMOSILLO Y CELADA VÍCTOR
HERNÁNDEZ DERAS ISMAEL
HERNÁNDEZ LECONA LISBETH
HERRERA ALE JUANA LETICIA
HERRERA ANZALDO ANA LILIA
HERRERA ÁVILA FERNANDO
IRIZAR LÓPEZ AARÓN
JUÁREZ CISNEROS RENÉ
LAVALLE MAURY JORGE LUIS
LÓPEZ BRITO FRANCISCO S
LÓPEZ HDZ. ADÁN AUGUSTO
LOZANO ALARCÓN JAVIER
MARTÍNEZ ESPINOZA MARÍA VERÓNICA
MARTÍNEZ GARCÍA PATRICIO
MARTÍNEZ MARTÍNEZ JOSÉ MARÍA
MAYANS CANABAL HUMBERTO
MELGAR BRAVO LUIS ARMANDO
MENDOZA DAVIS CARLOS
MENDOZA DÍAZ SONIA
MENDOZA MENDOZA IRIS VIANEY
MERODIO REZA LILIA GUADALUPE
MONREAL ÁVILA DAVID
MORÓN OROZCO RAÚL
NEYRA CHÁVEZ ARMANDO
ORIHUELA BÁRCENAS JOSÉ ASCENCIÓN
ORTEGA MARTÍNEZ MARÍA DEL PILAR
ORTIZ DOMÍNGUEZ MAKI ESTHER
ORTIZ GONZÁLEZ GRACIELA
PALAFOX GUTIÉRREZ MARTHA
PAVLOVICH ARELLANO CLAUDIA
PEDRAZA CHÁVEZ ISIDRO
PEDROZA GAITÁN CÉSAR OCTAVIO
PENCHYNA GRUB DAVID
PINEDA GOCHI MA. DEL ROCÍO
POZOS LANZ RAÚL AARÓN
PRECIADO RODRÍGUEZ JORGE LUIS
PUENTE SALAS CARLOS ALBERTO
RAMÍREZ HERNÁNDEZ SOFÍO
RÍOS DE LA MORA ITZEL SARAHÍ

RÍOS PITER ARMANDO
ROBLEDO ABURTO ZOÉ
ROBLES MONTOYA BENJAMÍN
ROJAS HERNÁNDEZ LAURA
ROMERO CELIS MELY
ROMERO DESCHAMPS CARLOS
ROMERO HICKS JUAN CARLOS
ROMERO LAINAS ADOLFO
ROMO MEDINA MIGUEL
ROSAS GONZÁLEZ ÓSCAR ROMÁN
RUFFO APPEL ERNESTO
SALAZAR FERNÁNDEZ LUIS F
SALAZAR SOLORIO RABINDRANATH
SALDAÑA PÉREZ LUCERO
SÁNCHEZ GARCÍA GERARDO
SÁNCHEZ JIMÉNEZ LUIS
SANSORES SAN ROMÁN LAYDA
TELLO CRISTERNA ALEJANDRO
TORRES CORZO TEÓFILO
TORRES GRACIANO FERNANDO
TORRES PEIMBERT MARCELA
VEGA CASILLAS SALVADOR
YUNES MÁRQUEZ FERNANDO
YUNES ZORRILLA JOSÉ FRANCISCO

SENADORES QUE SE ENCUENTRAN EN LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES II A IV DEL ARTÍCULO 61 DEL REGLAMENTO:
BERISTAIN NAVARRETE LUZ MARÍA
LARIOS CÓRDOVA HÉCTOR

Los Senadores que no asistieron cuentan, en su caso, con el plazo establecido en el artículo 62 del Reglamento para remitir su solicitud de justificación

ATENTAMENTE

SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO REZA
SECRETARIA

REPORTE DE JUSTIFICACION DE INASISTENCIA

De conformidad con los artículos 62, 63 y 66 del Reglamento del Senado de la República, se presenta la siguiente relación:

SENADORES QUE JUSTIFICARON SU INASISTENCIA A LAS SIGUIENTES SESIONES:

LA CELEBRADA EL DIA MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DE 2013
DELGADO CARRILLO MARIO

LA CELEBRADA EL DIA JUEVES 25 DE ABRIL DE 2013
DELGADO CARRILLO MARIO

ATENTAMENTE

SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO REZA
SECRETARIA

29/04/2013

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES

UNA, DE LA SEN. ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ, CON LA QUE REMITE EL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE GARANTÍA DE ACCESO Y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN, CORRESPONDIENTE A 2012.



SEN. ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ

ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ
SENADORA DE LA REPÚBLICA

México, D. F. a 29 de abril de 2013

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
PRESENTE

De conformidad con el artículo 18 del Acuerdo Parlamentario para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en la Cámara de Senadores, el Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, que tengo el honor de presidir, debe rendir anualmente un informe público al Pleno de la Cámara sobre el acceso a la información. Este informe fue aprobado en la Segunda Reunión Ordinaria del COGATI el pasado miércoles 17 de abril del presente.

En tal virtud, le solicito respetuosamente sea publicado en la Gaceta Parlamentaria del día martes 30 de abril del presente, el Informe Anual de Actividades de Transparencia y Acceso a la Información 2012, que adjunto al presente en versión impresa y electrónica.

Asimismo, le solicito sea incluida una intervención de cinco minutos en el orden del día de la Sesión de Pleno de la misma fecha, a efecto de presentar el Informe a nombre de los integrantes del COGATI

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA.

UNA, DE LA SEN. GABRIELA CUEVAS BARRÓN, CON LA QUE REMITE EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DELEGACIÓN DEL CONGRESO MEXICANO QUE ACUDIÓ A LA 128ª ASAMBLEA DE LA UNIÓN INTERPARLAMENTARIA Y REUNIONES CONEXAS, DEL 22 AL 27 DE MARZO DE 2013, EN QUITO, ECUADOR.



SEN. GABRIELA CUEVAS BARRÓN

EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA.

UNA, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, CON LA QUE REMITE SU INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA LXII LEGISLATURA.



SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ

EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA.

UNA, DEL SEN. RICARDO BARROSO AGRAMONT, CON LA QUE REMITE EL INFORME DE LA COMISIÓN DE MARINA RESPECTO A LA AUDIENCIA PÚBLICA "RETOS Y PERSPECTIVAS DE LA CONSTRUCCIÓN EN MÉXICO", CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO.



EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO DE ESTE DÍA.

SEN. RICARDO BARROSO AGRAMONT

CÁMARA DE DIPUTADOS

OFICIOS CON LOS QUE REMITE:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, DEVUELTO CON MODIFICACIONES, PARA LOS EFECTOS DE LA FRACCIÓN E) DEL ARTÍCULO 72 CONSTITUCIONAL.

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
Of. No. DGPL 62–II-8-1627
Exp. No. **6103/2a. LXI Leg.**

Secretarios de la
H. Cámara de Senadores,
P r e s e n t e s.

Tenemos el honor de devolver a ustedes para efectos del Artículo 72, Fracción E de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, aprobada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

México, D. F., a 29 de abril de 2013.

Dip. Merilyn Gómez Pozos
Secretaria

RECIBIDO
2013 ABR 29 PM 6 50
003589

JPV/jgnc**

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

M I N U T A
PROYECTO
DE
DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

Artículo Único.- Se reforman la fracción I del artículo 7; las fracciones I; II y III del artículo 9, y el primer párrafo del artículo 26, y se adiciona una fracción IX al artículo 19, recorriendo la actual fracción IX para que pase a ser fracción X del mismo artículo; una fracción IV al artículo 28, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue:

Artículo 7.- ...

I. Formular, conducir y evaluar la política nacional en materia de residuos así como elaborar el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, **el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos de Manejo Especial** y el **Programa Nacional** de Remediación de Sitios Contaminados **y coordinar su instrumentación con las entidades federativas y municipios**, en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática, establecido en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II. a XXVI. ...

Artículo 9.- ...

I. Formular, conducir y evaluar la política estatal, **así como elaborar de manera coordinada con la Federación** los programas en materia de residuos de manejo especial, acordes al Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, **el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos de Manejo Especial** y **el Programa Nacional** de Remediación de Sitios Contaminados, en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática, establecido en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II. Expedir conforme a sus respectivas atribuciones, y de acuerdo con las disposiciones de esta Ley, **en coordinación con la Federación y de conformidad con el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos de Manejo Especial y el Programa Nacional de Remediación de**

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

Sitios Contaminados, los ordenamientos jurídicos que permitan darle cumplimiento conforme a sus circunstancias particulares, en materia de manejo de residuos de manejo especial, así como de prevención de la contaminación de sitios con dichos residuos y su remediación;

III. Autorizar el manejo integral de residuos de manejo especial, e identificar los que dentro de su territorio puedan estar sujetos a planes de manejo, **en coordinación con la Federación y de conformidad con el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos de Manejo Especial y el Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados;**

IV a XXI. ...
...
...

Artículo 19.- ...

I. a VIII. ...

IX. Pilas que contengan litio, níquel, mercurio, cadmio, manganeso, plomo, zinc, o cualquier otro elemento que permita la generación de energía en las mismas, en los niveles que no sean considerados como residuos peligrosos en la norma oficial mexicana correspondiente, y

X. Otros que determine la Secretaría de común acuerdo con las entidades federativas y municipios, que así lo convengan para facilitar su gestión integral.

Artículo 26.- Las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias **y en coordinación con la Federación,** deberán elaborar e instrumentar los programas locales para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, de conformidad con esta Ley, con el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos y demás disposiciones aplicables. Dichos programas deberán contener al menos lo siguiente:

I. a VI. ...

Artículo 28.- ...

I. ...

*JPV/gelc***

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

-3-

II. ...

III. ...

IV. Los grandes generadores y los productores, importadores, exportadores y distribuidores de pilas y baterías eléctricas que sean considerados como residuos de manejo especial en la norma oficial mexicana correspondiente.

Transitorios

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, realizará las modificaciones necesarias en la Norma Oficial Mexicana correspondiente y demás disposiciones que considere aplicables a fin de adecuarlas al contenido del presente decreto, **en un plazo no mayor de 180 días posteriores a la entrada en vigor.**

S A L Ó N DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN.- México, D. F., 29 de abril de 2013.

Dip. Francisco Arroyo Vieyra
Presidente

Dip. Merilyn Gómez Pozos
Secretaria

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 32, INCISO D. DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, EN MATERIA DE FOMENTO DE LA CONVIVENCIA SIN VIOLENCIA.

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
Of. No. DGPL 62-II-5-715
Exp. No. 1436

Secretarios de la
H. Cámara de Senadores
P r e s e n t e s.

Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos constitucionales el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 32, inciso D, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de fomento de la convivencia sin violencia, aprobada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

México, D. F., a 29 de abril de 2013.

Dip. Fernando Bribiesca Sahagún
Secretario

RECIBIDO
2013 ABR 29 PM 4 45
CÁMARA DE SENADORES
SECRETARÍA GENERAL
SERVICIOS PARLAMENTARIOS
003584

JJV/jg*

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

M I N U T A

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 32, INCISO D, DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, EN MATERIA DE FOMENTO DE LA CONVIVENCIA SIN VIOLENCIA

Artículo Único.- Se reforma el artículo 32, inciso D, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 32.- **...**

A. a C. **...**

D. Se impulse la enseñanza y respeto de los derechos humanos. En especial la no discriminación y de la convivencia sin violencia **física, psicológica o emocional, incluyendo aquella que se manifiesta a través de los medios electrónicos.**

E. a G. **...**

Transitorio

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

S A L Ó N DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN.- México, D. F., a 29 de abril de 2013.

Dip. Francisco Arroyo Vieyra
Presidente

Dip. Fernando Bribiesca Sahagún
Secretario

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 215 BIS AL CÓDIGO PENAL FEDERAL.

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
OF. No. D.G.P.L. 62-II-1-0929
Exp. 1211

Secretarios de la
H. Cámara de Senadores
P r e s e n t e s.

Tenemos el honor de remitir a ustedes, para sus efectos constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 215 Bis al Código Penal Federal, aprobada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

México, D. F., a 29 de abril de 2013.

Dip. Fernando Bribiesca Sahagún
Secretario

RECIBIDO
2013 ABR 29 PM 6 50
SECRETARÍA GENERAL DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
003588

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

M I N U T A
P R O Y E C T O
D E
D E C R E T O

POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 215 BIS AL CODIGO PENAL FEDERAL

Artículo Único.- Se adiciona al Código Penal Federal un artículo 215 Bis, para quedar como sigue:

Artículo 215 Bis.- Se sancionará con multa de uno a trescientos días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, a quien en el ejercicio de funciones de autoridad escolar impida el ingreso, ó retenga documentación ó condicione la permanencia de cualquier alumno en los centros de educación del Estado en los que se imparta la enseñanza en los niveles básico o medio superior, a cambio de la entrega de contraprestaciones económicas en dinero o en especie.

Transitorio

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN.- México, D. F., a 29 de abril de 2013.

Dip. Francisco Arroyo Vieyra
Presidente

Dip. Fernando Bribiesca Sahagún
Secretario

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, FRACCIÓN XVI; 82; Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXVII, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL.

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
Of. No. DGPL 62-II-5-717
Exp. No. 1422

Secretarios de la
H. Cámara de Senadores
P r e s e n t e s.

Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos constitucionales el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2, fracción XVI; 82; y se adiciona la fracción XXVII, recorriendo el orden de las fracciones subsecuentes del artículo 2, de la Ley General de Protección Civil, aprobada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

México, D. F., a 29 de abril de 2013

Dip. Xavier Azuara Zúñiga
Secretario

RECIBIDO
2013 ABR 29 PM 6 50
003590

JJV/jg*

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

M I N U T A

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, FRACCIÓN XVI, 82; Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXVII, RECORRIENDOSE EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES AL ARTÍCULO 2 DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL.

Artículo Único.- Se reforman los artículos 2, fracción XVI, 82; y se adiciona la fracción XXVII, recorriendo el orden de las fracciones subsecuentes del artículo 2 de la Ley General de Protección Civil, para quedar como sigue:

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

I. a XV. ...

XVI. Desastre: Al resultado de la ocurrencia de uno o más agentes perturbadores severos y o extremos, concatenados o no, de origen natural, de la actividad humana o **aquellos provenientes del espacio exterior**, que cuando acontecen en un tiempo y en una zona determinada, causan daños y que por su magnitud exceden la capacidad de respuesta de la comunidad afectada;

XVII. a XXVI. ...

XXVII. Fenómeno Astronómico: Agente perturbador que se genera por la actividad del espacio exterior y que al interactuar con la Tierra ocasiona fenómenos destructivos, como pueden ser tormentas magnéticas solares y meteoritos;

XXVIII. a LXI. ...

Artículo 82. El Gobierno Federal, con la participación de las entidades federativas y el Gobierno del Distrito Federal, deberán buscar concentrar la información climatológica, geológica, meteorológica **y astronómica** de que se disponga a nivel nacional.

JJV/jg*

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

- 2 -

Transitorio

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

S A L Ó N DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION.- México, D. F., a 29 de abril de 2013.

Dip. Francisco Arroyo Vieyra
Presidente

Dip. Xavier Azuara Zúñiga
Secretario

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 3 DEL ARTÍCULO 218 DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES.

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
Of. No. DGPL 62-II-5-719
Exp. No. 1074

Secretarios de la
H. Cámara de Senadores
P r e s e n t e s.

Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos constitucionales el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el numeral 3 del artículo 218 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, aprobada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

México, D. F., 29 de abril de 2013.

Dip. Tanya Rellstab Carreto
Secretaria

CÁMARA DE DIPUTADOS
SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
2013 ABR 29 PM 6 50
RECIBIDO
003591

JJV/jg*

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

M I N U T A

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 3 DEL ARTÍCULO 218 DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES.

Artículo Único.- Se reforma el numeral 3 del artículo 218 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 218. ...

1. y 2. ...

3. Los partidos políticos promoverán y garantizarán en los términos del presente ordenamiento, la igualdad de oportunidades, y procurarán la paridad de género **así como la participación de los ciudadanos integrantes de los pueblos indígenas** en la vida política del país, a través de postulaciones a cargos de elección popular en el Congreso de la Unión, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional.

4. ...

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

S A L O N DE SESIONES DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION.- México, D. F., 29 de abril de 2013.

Dip. Francisco Arroyo Vieyra
Presidente

Dip. Tanya Rellstab Carreto
Secretaria

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CAPÍTULO VI, DENOMINADO "DE LAS SANCIONES", DE LA LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS, EN MATERIA DE SANCIONES.

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
Of. No. DGPL 62-II-8-1626
Exp. No. **5346/2a. LXI Leg.**

Secretarios de la
H. Cámara de Senadores,
P r e s e n t e s.

Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos constitucionales el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Capítulo VI, denominado "De las Sanciones", de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de sanciones, aprobada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

México, D. F., a 29 de abril de 2013.

Dip. Merilyn Gómez Pozos
Secretaria

RECIBIDO
2013 ABR 29 PM 4:56
003581

*JPV/gpdc***

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

M I N U T A
PROYECTO
DE
DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CAPÍTULO VI, DENOMINADO "DE LAS SANCIONES", DE LA LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS, EN MATERIA DE SANCIONES.

Artículo Único.- Se reforman los artículos 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53 y 55, y se adiciona el artículos 53 Bis de la Ley Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para quedar como sigue:

Artículo 47.- Al que **por cualquier medio** realice trabajos materiales de exploración arqueológica, en monumentos arqueológicos inmuebles, o en zonas de monumentos arqueológicos, sin la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se le impondrá prisión de **tres a diez años y multa de cien a tres mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal**.

Al que ordene, induzca, dirija, organice o financie las conductas descritas en el presente artículo, se les incrementará hasta por una mitad las penas antes señaladas.

Artículo 48.- Al que valiéndose del cargo o comisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia o de la autorización otorgada por éste para la ejecución de trabajos arqueológicos, disponga para sí o para otro de un monumento arqueológico mueble, se le impondrá prisión de **dos a doce años y multa de mil a cinco mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal**.

Si los delitos previstos en esta Ley, los cometen funcionarios encargados de la aplicación de la misma, las sanciones relativas se les aplicarán independientemente de las que les correspondan conforme a la **Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos**.

Artículo 49.- Al que efectúe cualquier acto traslativo de dominio de un monumento arqueológico**, histórico o artístico** mueble**, que** comercie con él, **o** que lo trasporte, exhiba o reproduzca, sin el permiso y la inscripción correspondiente, se le impondrá prisión de **tres a doce años y multa de mil a tres mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal**.

Al que ordene, induzca, dirija, organice o financie los actos descritos en este artículo, se le incrementará hasta por una mitad las penas antes señaladas.

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

Artículo 50.- Al que ilegalmente tenga en su poder un monumento arqueológico, histórico o **artístico mueble, se le impondrá prisión de tres a doce años y multa de mil a tres mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal**.

Artículo 51.- Al que se apodere de un monumento mueble arqueológico, histórico o artístico sin consentimiento de quien puede disponer de él con **apego** a la Ley, se le impondrá prisión de **tres a doce años y multa de mil a tres mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal**.

Artículo 52.- Al que **por cualquier medio,** dañe**, altere** o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá prisión de **cinco a doce** años**, multa de mil a tres mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal y el cargo del costo de la reparación** del daño causado.

Cuando el daño no sea intencional, se estará a lo dispuesto en el capítulo de aplicación de sanciones a los delitos culposos del Código Penal Federal.

Artículo 53.- Al que por cualquier medio pretenda sacar o saque del país un monumento arqueológico, artístico o histórico, sin permiso del Instituto competente, se le impondrá prisión de **cinco a doce años y multa de dos mil a cuatro mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal**.

Al que ordene, induzca, dirija, organice o financie las conductas descritas en el párrafo anterior, se les incrementará hasta por una mitad las penas antes señaladas.

Artículo 53 Bis.- Al que introduzca al territorio nacional bienes culturales considerados como patrimonio cultural artístico, histórico, arqueológico o paleontológico por el país de origen, sin que cuenten con el permiso correspondiente por parte de las autoridades competentes del Estado de origen, se le impondrá prisión de tres a doce años y multa de dos mil a cuatro mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

El bien de que se trate será incautado y se pondrá a disposición del país de origen.

*JJV/gcdl***

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

Artículo 55.- Cualquier infracción a esta Ley o a su Reglamento, que no esté prevista en este capítulo, será sancionada por los Institutos competentes, con multa de **doscientos a mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal,** la que podrá ser impugnada mediante el recurso de **revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo**.

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN.- México, D. F., 29 de abril de 2013.

Dip. Francisco Arroyo Vieyra
Presidente

Dip. Merilyn Gómez Pozos
Secretaria

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, EN MATERIA DE VIOLENCIA ESCOLAR.

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
OFICIO No.: D.G.P.L. 62-II-2-592
EXP. 305

Cc. Secretarios de la Cámara
de Senadores,
P r e s e n t e s .

Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de Violencia Escolar, aprobado en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

México, D.F., a 29 de abril de 2013.

Dip. Tanya Rellstab Carreto
Secretaria

JJV/gym*

RECIBIDO
2013 ABR 29 PM 4 45
SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
003580

10

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

MINUTA

PROYECTO DE

DECRETO

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, EN MATERIA DE VIOLENCIA ESCOLAR.

Artículo Único. Se reforma el artículo 49, primer párrafo; y se adicionan los artículos 14, con una fracción XIII, recorriéndose la actual en su orden; se crean la Sección 1, denominada "Disposiciones Generales", que comprende los artículos 32 a 36 y la Sección 2, denominada "De la Seguridad Escolar", que comprende los artículos 36 A al 36 K, del Capítulo III, De la Equidad en la Educación; 33, con las fracciones XVI y XVII; 66, con una fracción VI; 69, con un inciso ñ; 70, con un inciso m), recorriéndose el inciso m) a ser inciso n), y 75, con una fracción XVII todos de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 14. ...

I. a XI.- ...

XII. Promover prácticas cooperativas de ahorro, producción y consumo, de acuerdo a lo establecido en la ley de la materia y el Reglamento de Cooperativas Escolares;

XIII. Garantizar la seguridad y convivencia escolar, así como prevenir, controlar y corregir la violencia, el acoso y la discriminación escolar; y

XIV. ...

...

CAPITULO III
DE LA EQUIDAD EN LA EDUCACION
Sección I.- Disposiciones generales

Artículo 32.- ...

Artículo 33.- ...

I. a XV. ...

1

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

XVI. Desarrollar e implementar programas y acciones para prevenir, detectar y atender el acoso escolar o cualquier otra forma de maltrato físico y/o psicológico entre y hacia los estudiantes, que incluyan a todas las personas involucradas en el entorno escolar, a fin de impulsar el derecho a una educación libre de violencia, para lo que se establecerán en los reglamentos escolares las medidas necesarias para su atención y solución.

XVII. Realizarán programas de difusión de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes orientados a la prevención, detección y atención del acoso escolar o cualquier otra forma de maltrato físico y/o psicológico entre y hacia los estudiantes.

...

Sección 2.- De la seguridad escolar

Artículo 36 A. La protección de los alumnos contra la violencia, en cualquier tipo de sus manifestaciones, es condición para una formación escolar equitativa.

Artículo 36 B. Es obligación de las autoridades educativas salvaguardar la integridad física y psicológica de los educandos dentro de los planteles educativos y, en su caso, solicitar a las autoridades correspondientes la protección que garantice la seguridad de los educandos en los alrededores de los planteles educativos.

Artículo 36 C. La violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, será considerada como indisciplina. Es violencia escolar el hostigamiento e intimidación entre estudiantes, y se puede presentar de las siguientes formas:

I. Física: Empujones, golpes o lesiones;

2

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

II. Verbal: Insultos, discriminación y menosprecio que se realice por un estudiante a otro, de manera pública o privada;

III. Psicológica: Persecución, intimidación, sometimiento, chantaje, manipulación o amenazas, incluidas las gesticulaciones y obscenidades mediante señas, miradas o expresiones corporales;

IV. Exclusión social: El estudiante víctima es notoriamente excluido y aislado de la convivencia escolar;

V. Sexual: Podrá manifestarse mediante comentarios de índole sexual, ya sea de forma verbal o escrita, miradas o señas que denoten obscenidad, tocamientos, hostigamiento, acoso o abuso de orden sexual, y

VI. Cibernética: Por medios electrónicos como Internet, páginas Web, redes sociales, blogs, correo electrónico, mensajes de teléfono celular o videograbaciones.

Artículo 36 D. Para que exista acoso o violencia escolar se requiere que se presente alguna de las siguientes condiciones:

I. Se trate de una acción agresiva e intencional;

II. Se produzca en forma reiterada, entendiéndose la agresión dada en dos o más ocasiones por un mismo victimario aunque se trate de distintas víctimas; para el caso del acoso previsto en las fracciones V y VI del artículo que antecede, así como cuando se trate del maltrato físico manifestado mediante golpes o lesiones, bastará con que se presenten una sola vez para que se tenga como presumible el acoso;

III. Exista desequilibrio de poder entre el agresor y la víctima, aún siendo estudiantes ambos, a causa de condiciones físicas, psicológicas o emocionales de la víctima, y

3

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

IV. Provoque en la víctima daño emocional, psicológico o físico.

Artículo 36 E. Cuando maestros y directivos detecten alumnos con conductas de indisciplina escolar que consideren anómalas o extraordinarias en razón de sus circunstancias, deberán canalizarlos a los servicios de salud correspondientes.

Artículo 36 F. Las autoridades educativas locales deberán emitir las reglas de conducta dirigidas a crear una cultura de convivencia en la comunidad escolar y a inculcar el respeto y la tolerancia como componentes básicos de las relaciones entre todos los miembros de la comunidad escolar.

Cada centro educativo emitirá su reglamento interno con base en las reglas de conducta dictadas por la autoridad educativa correspondiente.

Artículo 36 G. Al aplicarse medidas disciplinarias para preservar la seguridad y convivencia escolar, habrá de tomarse en cuenta lo siguiente:

I. Deberán ser armónicas con el principio del interés superior del menor;

II. Se aplicarán conforme a lo establecido en los reglamentos vigentes;

III. Serán proporcionales a la conducta que se atribuya al alumno;

IV. Las circunstancias personales, familiares y sociales del alumno, así como la reincidencia en el actuar de éste si la hubiere, y

V. Cuando un alumno incurra en indisciplina escolar, el hecho deberá hacerse del conocimiento del padre o tutor, así como la medida correctiva que vaya a aplicarse.

4

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

Artículo 36 H. Las medidas disciplinarias emitidas por las autoridades educativas serán aplicables cuando la indisciplina escolar se cometa en cualquiera de los siguientes supuestos:

I. Mientras los educandos permanezcan dentro de la institución educativa, de autobuses escolares o transporte alquilado por el centro educativo correspondiente;

II. Mientras participen en actividades escolares, y

III. Estando fuera del centro educativo en actividades extraescolares.

Artículo 36 I. Cuando lo solicite el padre o tutor de la víctima de violencia y un especialista así lo recomiende, podrá trasladarse a dicho alumno a otra institución educativa, para efecto de que pueda desarrollarse en un ambiente escolar adecuado.

En cualquier caso que amerite el traslado de un alumno a diverso centro escolar, tal circunstancia deberá ser previamente notificada tanto al alumno como al padre o tutor. Al preparar la reinscripción del alumno en diverso plantel escolar, se procurará tomar las medidas necesarias para evitar que éste pierda el ciclo escolar.

Artículo 36 J. Las autoridades educativas, en sus diferentes niveles de competencia, deberán generar actividades de capacitación u orientación al personal docente y de apoyo, para la prevención y atención de la violencia escolar.

Artículo 36 K. Las escuelas deben registrar en el expediente de cada alumno los reportes levantados por conductas especificadas en esta sección.

De los reportes señalados en el párrafo anterior deberá enterarse de forma inmediata al padre o tutor del alumno que corresponda.

5

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

Artículo 49. El proceso educativo se basará en los principios de libertad, responsabilidad, **tolerancia y derecho a una educación libre de violencia, acoso escolar o discriminación,** que aseguren la armonía de relaciones entre educandos y educadores y promoverá el trabajo en grupo para asegurar la comunicación y el diálogo entre educandos, educadores, padres de familia e instituciones públicas y privadas. De igual manera se fomentará el uso de todos los recursos tecnológicos y didácticos disponibles.

...

Artículo 66.- ...

I. a V.- ...

VI. Promover desde el hogar la cultura de convivencia, respeto y tolerancia escolar y participar en las actividades programadas para prevenir, controlar y corregir la violencia y el acoso escolar.

Artículo 69.- ...

...

...

a) a m) ...

n) Respaldará las labores cotidianas de la escuela;

ñ) Propondrá medidas para la divulgación de la cultura de convivencia, respeto y tolerancia escolar, así como para prevenir y controlar la violencia, el acoso y la discriminación escolar, y

o) ...

...

6

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

Artículo 70.- ...

...

a) a k) ...

l) Procurará la obtención de recursos complementarios para el mantenimiento físico y para proveer de equipo básico a cada escuela pública;

m) El apoyo para garantizar la seguridad y convivencia de los alumnos fuera de las escuelas y su participación en las actividades para la prevención y control de la violencia y el acoso escolar, y

n) En general, podrá realizar actividades para apoyar y fortalecer la educación en el municipio.

...

...

Artículo 75.- ...

I. a XIV.- ...

XV.- Promover en los educandos, por cualquier medio, el uso de medicamentos que contengan sustancias psicotrópicas o estupefacientes;

XVI.- Expulsar o negarse a prestar el servicio educativo a niñas, niños y adolescentes que presenten problemas de aprendizaje, condicionar su aceptación o permanencia en el plantel a someterse a tratamientos médicos específicos; presionar de cualquier manera a los padres o tutores para que acudan a médicos o clínicas específicas para la atención de problemas de aprendizaje de los educandos, **y**

7

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

XVII.- Incumplir las disposiciones de prevención y control de la violencia y el acoso escolar que deriven de la aplicación de la presente ley.

...

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor a los treinta días naturales siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las Legislaturas locales deberán adecuar, conforme a las prevenciones contenidas en este Decreto, las disposiciones normativas locales en materia de prevención y control de la violencia, el acoso y la discriminación escolar, a más tardar un año después de la entrada en vigor del presente Decreto.

Tercero. Las autoridades educativas federal y locales, en sus respectivos ámbitos de competencia, establecerán los instrumentos y mecanismos necesarios para dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en el presente Decreto, en un plazo no mayor a ciento ochenta días, contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

S A L Ó N DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN. México, D.F., a 29 de abril de 2013.

Dip. Francisco Arroyo Vieyra
Presidente

Dip. Tanya Rellstab Carreto
Secretaria

8

INICIATIVAS PARA TURNO DIRECTO A COMISIONES

DE LOS SENADORES ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ, ROBERTO GIL ZUARTH, MANUEL CAMACHO SOLÍS, PABLO ESCUDERO MORALES, ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, OMAR FAYAD MENESES, LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO Y DOLORES PADIERNA LUNA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL CÓDIGO PROCESAL PENAL PARA LA REPÚBLICA MEXICANA.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE EL CÓDIGO PROCESAL PENAL PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

CÁMARA DE SENADORES

LXII LEGISLATURA

P R E S E N T E

ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ, ROBERTO GIL ZUARTH, MANUEL CAMACHO SOLIS, PABLO ESCUDERO, ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, OMAR FAYAD MENESES, LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, DOLORES PADIERNA, LAYDA SANSORES SAN ROMAN Senadores de la República integrantes de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° numeral 1, fracción I, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE EL CÓDIGO PROCESAL PENAL PARA LA REPÚBLICA MEXICANA[1], conforme a la siguiente:

[1]La denominación de éste Código como Código **Procesal Penal** y **no** como Código **de Procedimientos Penales** obedece a las siguientes razones. 1) La Constitución Política en su reforma de 18 de junio de 2008 no previó las bases de creación de *procedimientos penales acusatorios*, sino de un ***proceso***penal cuya única posibilidad es la de un acusatorio. 2) El artículo 20 Constitucional en la reforma de 18 de junio de 2008, claramente establece: **El proceso penal será acusatorio** y oral....y no se refiere a *procedimientos penales* ante lo absurdo que ello implicaría; 3) Además, como refiere MONTERO AROCA, Juan. *El Derecho Procesal en el Siglo*

1

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE EL CÓDIGO PROCESAL PENAL PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I.- EL PROCEDIMIENTO PENAL MEXICANO EN SU CONTEXTO HISTÓRICO Y EL CONGRESO DE LA UNIÓN.

Cuando en 1917 el entonces presidente de la república Venustiano Carranza, promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el texto original de su artículo 73 no sólo se le otorgaba la facultad al Congreso de la Unión, conforme a su fracción XXI, de legislar en el ámbito penal para definir los delitos federales y faltas contra la Federación, así como para fijar los castigos que por ellos debían imponerse[2], sino que a la vez, la entonces fracción VI del mismo precepto le otorgaba a este órgano legislativo la facultad para legislar en todo lo relativo al Distrito y Territorios Federales. Existía entonces el Territorio de Baja California y, posteriormente el de Tepic que fueron abarcados dentro de esa competencia.

A su vez, y en lo que correspondía a los Estados de la República, legislar en materia penal y de procedimiento penal fue una facultad que se entendió

XX. tirant lo blanch, Valencia, 2000. p. 40, ante la evidente razón de que, para que los órganos jurisdiccionales puedan cumplir con la función que tienen constitucionalmente encomendada, necesitan de la realización de una serie de actos sucesivos en el tiempo, cada uno de los cuales es consecuencia del anterior y presupuesto del siguiente, a dichos actos en sus conjunto se le llama ***proceso***; entonces, el ***proceso*** –y *no procedimientos*– es la vía jurídica o el instrumento jurídico del que se valen los órganos jurisdiccionales para cumplir con la función jurisdiccional que constitucionalmente tiene asignada. Y, 3) porque, como refiere MONTERO AROCA. ob.cit. pp. 106 y 107, el único ***proceso*** que existe es el acusatorio –que es un verdadero proceso *y no, procedimientos (el agregado es nuestro)*– pues en el mismo existe un juez imparcial ante el que acuden dos partes parciales que se enfrentan entre sí, en pie de igualdad y con plena contradicción planteando un conflicto para que aquél lo resuelva. El ***proceso acusatorio es una unidad***, en que existe una parte escrita que es la de investigación y una oral compuesta de distintas audiencias, y en el que cabe la consideración de determinadas tramitaciones sujetas a reglas particulares –como en caso de salidas alternas, procedimientos especiales– cuya presencia no le quitan el carácter de ***proceso***, para convertirle en *procedimientos penales* y, de esa manera, asignarle una denominación como la de Código de Procedimientos Penales resultaria ser un absurdo jurídico.

[2] Los Derechos del Pueblo Mexicano. México a través de sus Constituciones. T. VIII (artículos 73-81) Cámara de Diputados, LVIII Legislatura, p. 654.

concedida a los mismos en tanto nuestra Carta Magna no la otorgó a este Congreso[3].

Después de transitar por una revolución y estando el país pacificado; en el año de 1931[4] nuestro Congreso Federal promulgó el entonces Código Penal para el Distrito y Territorios Federales en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal[5], que con el tiempo y habiéndose convertido los existentes Territorios Federales en entidades federativas; desde su origen y con múltiples reformas que le sucedieron, fue el instrumento penal que aplicó por un espacio de sesenta años en nuestro país tanto para los delitos federales, como para los del fuero común del Distrito Federal. Ello así perduró hasta la importante reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 1993 mediante la cual se reubicó el contenido de esa fracción VI pasando al artículo 122 para prever en términos generales que el Congreso de la Unión tendría la facultad para expedir el estatuto y legislar en lo relativo al Distrito Federal, salvo en las materias expresamente concedidas a la Asamblea de Representantes, las que quedaron plasmadas en la fracción VI del

[3] Los Derechos del Pueblo Mexicano. México a través de sus Constituciones. T. XII (artículos 123-136 y transitorios) Cámara de Diputados, LVIII Legislatura, pp. 963 a 967.En términos del artículo 124 que establece que: las facultades que no estén expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los estados.

4 Anteriormente, en 1871, existió el Código Penal para el Distrito Federal y Territorio de la Baja California y Federación promulgado el 7 de diciembre de dicho año, entrando en vigor el 1 de abril de 1872. Este ordenamiento, fue abrogado el 2 de septiembre de 1929 con la entrada en vigor del entonces Código Penal para el Distrito y Territorios Federales que se habría promulgado el 2 de septiembre de 1929 y cuyo inicio de vigencia fue a partir del día 15 de diciembre de 1929. A su vez, éste código fue abrogado el 17 de septiembre de 1931, con la entrada en vigor del Código Penal para el Distrito Federal y Territorios Federales en Materia de Fuero Común y para Toda la República en Materia de Fuero Federal, el cual, mediante Decreto del 23 de diciembre de 1974 se reformó para cambiar de denominación a la de Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para Toda la República en Materia de Fuero Federal. Por último, y con motivo de la reforma constitucional que otorgó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la facultad para legislar en materia penal, su denominación se cambió el 18 de mayo de 1999 mediante Decreto a la de Código Penal Federal.

[5] Este vino a abrogar el Código Penal de 1929.

artículo 122[6], entre las cuales se estableció la materia penal[7]. Con ello, la facultad que conforme al texto original del artículo 73 de nuestra Constitución Política vigente tenía el Congreso de la Unión de legislar en materia penal y de procedimiento penal para el Distrito Federal cesó, quedando en manos de la hoy Asamblea Legislativa.

La situación fue muy diferente en el ámbito del procedimiento penal. Nuestra historia nos demuestra que no obstante que México había logrado su independencia, durante muchos años continuó la aplicación en el territorio nacional de normas provenientes de España, de manera muy especial las Siete Partidas que estructuraban el procedimiento penal en forma inquisitiva[8]. La naciente República mexicana a partir de 1824[9] y durante los años de 1831[10] y 1840[11] expidió leyes para mejorar la administración de justicia y los

---

[6] Los Derechos del Pueblo Mexicano, T. VIII. p. 17 y *s*.

[7] El artículo 122 constitucional en su inciso C, BASE PRIMERA, fracción V, inciso H) otorga a la Asamblea Legislativa en términos de su Estatuto de Gobierno, la facultad para legislar en las materias Civil y Penal, entendiéndose ésta última en sentido *lato* y, por consiguiente, comprendiendo el legislar para el Distrito Federal en materia de procedimiento penal y de ejecución de sanciones.

[8] vid. GONZÁLEZ BUSTAMANTE, Juan José. *Principios de Derecho Procesal Penal Mexicano*. 3a ed. Porrúa, México, 1959. p. 17, quién refiere que, además de ellas continuaron su aplicación algunas otras normas y disposiciones que rigieron en la época Colonial, como algunas pragmáticas, cédulas y disposiciones acordadas por el Consejo de Indias. cfr. RODRÍGIUEZ, Ricardo. *El Procedimiento Penal*. Tribunal Superior de Justicia, México, 2003. p. 202 y *s*, que destaca el hecho, al señalar que no fue sino hasta la Constitución de 1857 y con la Ley de Jurados de 15 de junio de 1869, que hasta ese entonces la legislación española había sido la que informaba toda nuestra jurisprudencia y por tanto la aplicada en los tribunales en materia procesal, pero con todos sus defectos, inconvenientes y atraso de una época histórica tan refractaria a los progresos de las ciencias jurídicas.

[9] Así, se expidió la primera Ley para Mejorar la Administración de Justicia y los Procedimientos Judiciales.

[10] Ley del 16 de mayo de 1831.

[11] Ley del 18 de mayo de 1840.

procedimientos judiciales, no obstante, las mismas fueron modificadas durante el régimen centralista de Antonio López de Santa Ana, bajo cuya administración surgió la Ley de 23 de mayo de 1937 que se ocupaba preferentemente del procedimiento penal, pero que sin embargo y bajo cuya vigencia, se continuaron aplicando las leyes españolas que ni se ajustaban ni respondían a las necesidades de la época y menos a las aspiraciones de un pueblo que había luchado contra el extranjero por consolidar sus libertades.

Los cambios frecuentes de los gobiernos que se sucedían y las revoluciones y cuartelazos que ocurrieron en la República, así como la lucha sostenida contra la Intervención y el Imperio, mantuvieron en un estado letárgico a nuestras instituciones procesales sin que se pudiera lograr una efectiva labor de codificación en la materia procesal penal no obstante ser una necesidad ineludible, pues a pesar de numerosas leyes que surgieron pretendiendo regular la cuestión procesal[12], esa falta de codificación originaba que los jueces dirigiesen los procesos a su modo, invocando diversos preceptos y siendo común encontrar en sus sentencias de juicios penales disposiciones contenidas en las Leyes de Partidas[13].

Durante la presidencia de Ignacio Comonfort, bajo el sentimiento liberal impulsado por la filosofía de la Ilustración, se hizo manifiesta la preocupación por

[12] Así, el Decreto de 6 de julio de 1848 sobre homicidas y ladrones que establecía una forma particular de enjuiciamiento a cierta clase de delitos sin aplicar a otros; las Leyes de 23 de noviembre de 1855 que derogaron las disposiciones vigentes en la época del centralismo y de 5 de enero de 1857 –conocida como la Ley Montes por haber sido su autor Don Ezequiel Montes Ministro de Justicia del Gabinete del presidente Benito Juárez– para juzgar a homicidas, heridores y vagos; así como la Ley de 4 de mayo de 1857 que estableció cómo deberían practicarse las visitas a las cárceles, no fueron sino *meramente circunstanciales y transitorias* sin ocuparse del procedimiento penal para el cual siguió aplicándose la legislación española.

[13] GONZÁLEZ BUSTAMANTE. ob.cit. pp. 18 y 20.

implementar el Jurado Popular para delitos del orden común[14]. Ello no aconteció sino, bajo circunstancias muy especiales hasta el año de 1869, en que siendo presidente de la república el licenciado Benito Juárez por Decreto del mismo, el día 15 de junio de 1869 se expidió la Ley de Jurados en Materia Criminal para el Distrito Federal[15].

Esto perduró hasta la expedición del Código Penal de 1871[16], que representa el primer intento de codificación seria en nuestro país y que propició la necesidad de contar con una Ley en materia de procedimiento penal acorde a ello. Fue así que el Congreso de la Unión autorizó al entonces jefe del Ejecutivo, el licenciado Benito Juárez, para expedir el Código de Procedimientos Penales y organizar la administración de justicia en el Distrito Federal y en el Territorio de Baja California, pero su repentina muerte y los disturbios que acaecieron, conllevaron a que el Proyecto ya elaborado[17] fuera sometido nuevamente a revisión y sujeto a observaciones hasta que fue promulgado en 1880 bajo la presidencia de Porfirio Díaz, con la denominación de Código de Procedimientos Penales de 1880[18] quién

---

[14] La encomienda había recaído en Don Mariano Contreras que debía realizar un estudio para determinar esa posibilidad.

[15] Una explicación sobre su contenido y las circunstancias de su expedición puede verse en: "Del Sistema Inquisitorio al Moderno Sistema Acusatorio en México". (investigación y redacción del Dr. Héctor Arturo Hermoso Larragoti). Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1ed, México, 2011. pp. 337 a 347.

[16] Conocido como "Código Martínez de Castro" por haber sido obra del jurista mexicano Don Antonio Martínez de Castro.

[17] La comisión redactora se integró por los juristas Don Manuel Dublán, Don Manuel Ortiz de Montellano y Don Luis Méndez, a los que posteriormente se sumaron los licenciados Don José Linares y Don Manuel Siliceo, fungiendo como Secretario Don Pablo Macedo. Dicha comisión había elaborado un Proyecto de Código de Procedimientos Penales y lo había presentado a la Secretaría de Justicia el 18 de diciembre de 1872, no obstante, ante la muerte súbita del presidente Juárez no logró su publicación.

[18] El mismo fue promulgado el 15 de septiembre de 1880 y entró en vigor el 1 de noviembre de ese año. Este Código se caracterizó por su clara orientación a la doctrina francesa de la época en la

de igual manera, lo expidió habiéndole sido concedida esa facultad por el Congreso de la Unión[19].

Después de once años de vigencia, tras la inconformidad de los mexicanos en contra de la Institución del Jurado que venía operando desde 1869, en razón de veredictos escandalosos que dejaron ver los inconvenientes que presentaba para una correcta administración de justicia, señalamientos de corrupción y abusos[20], nuevamente el Congreso de la Unión, el día 3 de junio de 1891, autorizó al entonces presidente de la república Porfirio Díaz para reformar ese Código en lo que se relacionaba con la Institución del Jurado Popular[21]. Surgió así el 24 de junio de 1891, la Segunda Ley de Jurados en Materia Criminal para el Distrito

---

que se destacaba a la figurar de los jueces teniéndose a los mismos como los más altos funcionarios en la jerarquía de la policía judicial y, conformando un sistema mixto de enjuiciamiento.

[19] vid. GONZÁLEZ BUSTAMANTE. ob. cit. p. 21, la autorización del Congreso al Ejecutivo Federal fue de fecha 1 de junio de 1880 y el Código fue *promulgado* el 15 de septiembre de 1880, para entrar en vigor el 1 de noviembre de ese año. vid. RODRÍGUEZ, Ricardo. ob. cit. p. 207, refiere que la autorización que el Congreso de la Unión otorgó al Ejecutivo fue mediante Decreto de 1 de *junio* de 1808 para que, durante el receso de las Cámaras y usando la autorización concedida en la Ley del 7 de diciembre de 1871, promulgara el Código de Procedimientos Penales, organizara provisionalmente los Juzgados y Tribunales del Distrito Federal y Territorio de la Baja California y reformara el Código de Procedimientos Civiles.

[20] Sobre los argumentos en *pro* y en *contra* del Jurado Popular, con amplitud *véase:* Sodi, DEMETRIO. *El Jurado En México*. Ediciones Botas, México 1909. pp. 355 a 478. De acuerdo con SPECKMAN GUERRA, Elisa. "El Jurado Popular para Delitos Comunes: Leyes, ideas y prácticas. Distrito Federal 1869-1929", en: *Historia de la Justicia en México, siglos XIX y XX*. Suprema Corte de Justicia de la Nación, México 2005. p. 761, el alcance más amplio de esta Institución –para delitos comunes– aconteció de entre 1869 y 1880, coincidiendo su auge con el vigor de las ideas y las instituciones liberales y vivió su etapa de mayor debilidad en los periodos de 1907 a 1919 y de 1922 a 1928, siendo que su peso y competencia comenzó a restringirse en 1880.

[21] A pesar de ello, como refiere GONZÁLEZ BUSTAMANTE ob. cit. p. 21, no se consideró conveniente abolir esta Institución, optándose por llevar a cabo reformas substanciales a su funcionamiento.

Federal[22] y, posteriormente en base a la autorización que concedió el Congreso de la Unión a Porfirio Diaz, según Decreto de 3 de junio de 1891 para reformar total o parcialmente el Código de Procedimientos Penales del Distrito y Territorios Federales, se expidió el Código de Procedimientos Penales de 1894[23] que mantuvo su orientación hacia la doctrina francesa, como la había hecho el Código de 1880[24]. Catorce años después se expidió el Código Federal de Procedimientos Penales de 1908 que seguiría la orientación del de 1894 y que, de la misma manera, fue expedido por el titular del Ejecutivo Porfirio Díaz en razón de la autorización que para ello le otorgó el Congreso de la Unión por Decretos de 24 de mayo de 1906 y 13 de diciembre de 1907[25].

La fuerza del Jurado Popular para *delitos comunes*, se veía entonces ya disminuida: aquel entusiasmo liberal que había inspirado en la época juarista la Ley que le dio origen, se vio truncado por la ideología positivista de la época que suprimió su práctica dejando sólo su operación para los delitos de prensa[26].

---

[22] vid...*Del Sistema Inquisitorio al*, ob. cit. pp. 353 a 362, destacándose la influencia que dicha Ley vendría a tener en el futuro Código de Procedimientos Penales de 1894, como en el Código de Procedimientos Penales de 1931 y en el Código Federal de Procedimientos Penales de 1934.

[23] Según sus artículos 1. y 2. Transitorios, el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y Territorios Federales, entró en vigor el 15 de septiembre de 1894 y, derogó el Código de Procedimientos Penales expedido el 15 de septiembre de 1880 y la Ley de Jurados de 24 de junio de 1891. Se caracterizó por restringir las facultades del Jurado y aumentar considerablemente las atribuciones de los Jueces de lo criminal al presidir los debates. Al respecto...*Del Sistema Inquisitorio al*, ob. cit. p. 362 y *ss*. Un estudio amplio de dicho ordenamiento procesal puede verse en RODRÍGUEZ, Ricardo. ob. cit. pp. 223 a 635.

[24] vid. supra nota a pie 17. *Véase* igualmente,...*Del Sistema Inquisitorio al*, ob. cit. p. 367.

[25] Este Código es de fecha 16 de diciembre de 1908 y según su artículo 1. Transitorio, inició su vigencia el 5 de febrero de 1909.

[26] De hecho, bajo el Decreto 34 surgido de las facultades que otorgaba el Plan de Guadalupe, Venustiano Carranza expidió la Ley de 30 de septiembre de 1914 suspendiendo los jurados populares y asignando sus facultades a jueces de instrucción. Ello perduró hasta la expedición de la Ley Orgánica de los Tribunales del Fuero Común en el Distrito y Territorios Federales expedida en septiembre de 1919, que reinstaló el Jurado Popular para *delitos comunes* pues la Constitución

Con el texto ya vigente de la Constitución Política de 1917; en 1929 por considerar dichos ordenamientos contrarios a la Constitución Política y ser señalados de anticuados, siendo presidente de la república Emilio Portes Gil, no sólo se expidió un nuevo Código Penal amparado en el Decreto de fecha 9 de febrero de 1929 mediante el cual el Congreso de la Unión le otorgó esa facultad[27], sino también, soportado en ese mismo Decreto, expidió a la vez el Código de Organización, Competencia y Procedimientos en Materia Penal para el Distrito Federal y los Territorios[28]; ordenamientos ambos que tuvieron una vida muy efímera.

Sin que existiera alguna circunstancia especial, bajo el mandato constitucional del presidente Pascual Ortiz Rubio, en uso de facultades extraordinarias concedidas al mismo por Decreto del Congreso de la Unión de fecha 2 de enero de 1931, expidió el Código de Procedimientos Penales para el Distrito y Territorios Federales cuya publicación oficial aconteció el 29 de agosto de ese mismo año[29], abrogando el Código de Organización, Competencia y de Procedimientos en

---

Política contemplaba la Institución en su artículo 20 fracción VI. Sin embargo, el positivismo reinante en 1929, la expedición del Código Almaraz y del Código de Organización, Competencia y Procedimientos en Materia Penal para el Distrito Federal y los Territorios, ambos de 1929, inspirados en esa ideología llevaron a su fin práctico al Jurado Popular para *delitos comunes*, conservando solamente el mismo para delitos cometidos por la prensa. Una amplia exposición sobre ello puede verse en:...*Del Sistema Inquisitorio al*, ob. cit. pp. 373 a 404.

[27] El mismo es conocido como el Código Almaráz al ser que el jurista José Almaráz que participó en la comisión integrada para su elaboración por instrucciones del entonces presidente Emilio Portes Gil se le atribuye su elaboración.

[28] Dicho Código habría sido expedido el 4 de octubre de 1929. Según GONZALEZ BUSTAMANTE. ob.cit. 25, se trató de un Código referido también a los *territorios*, pues su denominación la de Código de Organización, Competencia y Procedimientos en Materia Penal para el Distrito Federal y los Territorios:cfr...*Del Sistema Inquisitorio al,passim*, según la cual, la denominación habría sido solamente la de Código de Organización, Competencia y Procedimientos en Materia Penal para el Distrito Federal. Ninguna de las dos referencias son del todo correctas. Acorde al artículo 2. Transitorio del Código de Procedimientos Penales para el Distrito y Territorios Federales que lo abroga, su denominación correcta es la de Código de Organización, Competencia y Procedimientos en Materia Penal para el Distrito Federal y Territorios Federales.

[29] Conforme a su artículo 1. Transitorio, inició su vigencia el día 17 de septiembre de 1931.

Materia Penal para el Distrito Federal y Territorios Federales de 1929[30]. Por su parte, no fue sino hasta el año de 1933 en que bajo el mandato constitucional del presidente substituto Abelardo L. Rodriguez, el día 27 de diciembre de ese mismo año el Congreso de la Unión expidió un Decreto concediendo facultades extraordinarias al entonces ejecutivo federal para la expedición del Código Federal de Procedimientos Penales con la finalidad de ajustar la nueva ley procesal al texto de la Constitución Política y, al Código Penal de 1931. Este ordenamiento fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 agosto de 1934 entrando en vigor el 1 de octubre de ese mismo año y es el que continúa su aplicación a la fecha, con múltiples reformas[31].

Se tiene así, que a lo largo de la existencia del Congreso de la Unión, nunca ha sido la sede para la discusión y aprobación de un instrumento legal de la importancia que tiene un Código de Procedimientos Penales en nuestro país; se trata de un instrumento indicador de la cultura jurídica y política de un pueblo. Han sido las circunstancias históricas y las facultades concedidas por el Congreso al ejecutivo federal en turno, las que en todo momento han sustituido en esa materia el ejercicio de la función natural de este cuerpo legislativo.

Hoy, por vez primera en su existencia; en un México muy distinto, en que las condiciones de seguridad y justicia así lo reclaman; en que las exigencias de un mundo globalizado en que estamos inmersos no pueden pasar por inadvertidas; se presenta la oportunidad histórica para que el Congreso Federal pueda dar a la nación mexicana un instrumento eficaz, pero a la vez respetuoso de los derechos humanos, de aplicación en todo el territorio nacional y por todos los operadores del sistema de justicia penal, que sea el que rija por igual el proceso penal a lo largo y ancho del territorio nacional.

[30] Este nuevo ordenamiento procesal, no obstante, entró en vigor hasta el 1 de octubre de 1934.

[31] Este Código Federal, vino a sustituir al viejo Código de 1908.

Se trata de un Código Único de Proceso Penal: el "Código Procesal Penal para la República Mexicana" que será el instrumento legal que venga a sustituir, fundamentado en el texto constitucional, a los treinta y tres Códigos de Procedimientos Penales que hoy, con una gran diversidad de contenidos, aplican según su ámbito competencial, en el territorio mexicano[32].

Con este Código Único, no sólo se acabará con esa diversidad jurídica en la materia, sino que se logrará cumplir con las exigencia de la sociedad mexicana de contar con un instrumento que de una vez por todas unifique criterios para la aplicación de la ley penal en nuestro pais y, proporcione a los mexicanos victimas de un delito o acusados de un delito, claridad y certeza sobre los contenidos de la ley.

La presente iniciativa emana y es congruente con el Pacto por México, que en uno de sus acuerdos plasmó la necesidad de implantar un Código Procesal Penal Único para todo el pais, con la finalidad de establecer elementos procesales homogéneos y congruentes con el establecimiento de un sistema penal acusatorio y oral; justo el sistema de justicia penal que el Constituyente en la importante reforma de 18 de junio de 2008 previó con bases claras en el texto constitucional. También es congruente, con la importante reforma constitucional en materia de Derechos Humanos del 10 de junio de 2011, pues su contenidos se ajustan cabalmente a las exigencias de la Constitución Politica y los Tratados de Derechos Humanos suscritos y ratificados por nuestro pais.

[32] Al respecto, conforme al Título Segundo, Capítulo II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Partes Integrantes de la Federación y del Territorio Nacional, son las referidas en los artículos 42 y 43 y, la distribución de competencias conforme al texto Constitucional para expedir un Código de Procedimientos Penales, al día de hoy es como sigue: Para el Congreso de la Unión en el ámbito federal, conforme al artículo 73 fracción XXI; para los Estados de la República conforme al artículo 124 y, para el Distrito Federal conforme al artículo 122 C, BASE PRIMERA, Fracción V, inciso H).

II.- REFORMA CONSTITUCIONAL DE 18 DE JUNIO DE 2008 Y EL DIAGNÓSTICO SOBRE LA REALIDAD EN MATERIA DE JUSTICIA EN MÉXICO.

La crisis del sistema de justicia en México se hizo patente en los años noventa. Nunca antes habia sido objeto de estudios empiricos ni de serias reflexiones.

Las investigaciones y trabajos emprendidos por las Comisiones de Derechos Humanos Federal y estatales, como la decidida participación de diversos grupos sociales que su vez llevaron a cabo estudios sobre ello, incluso, desde la perspectiva ciudadana; como estudios dogmáticos y empíricos emprendidos por algunas instituciones académicas sobre la justicia penal y sobre la eficacia de las instituciones de administración y procuración de justicia, mostraron lo que en ciertos sectores era de sobra conocido, pero que no habia sido objeto de un pronunciamiento público tan drástico; existía una profunda crisis en nuestro sistema de justicia penal, pues sin perjuicio que los datos objetivos así lo mostraban, se hacia evidente la percepción ciudadana sobre la baja efectividad y credibilidad de las instituciones encargadas de la procuración y administración de justicia, pero igualmente sobre las encargadas de la seguridad ciudadana.

Por otro lado, Latinoamérica se encontraba en un proceso de cambio en su sistema jurídico, arraigado, como en el nuestro, en la tradición heredada de España y la influencia del modelo mixto que se exportó por Francia; no se trataba de una moda, sino de reconocer la necesidad del cambio a un sistema de justicia penal respetuoso del debido proceso y de los derechos humanos[33].

[33] LANGER Máximo. *Revolution in Latin American Criminal Procedure: Diffusion of Legal Ideas FromthePeriphery*, consultable en 55 American Journal of CorporativeLaw Vol. 55, p. 656 y 657. 2007. Pleabargain in Enciclopedia of Law and Society. American and Global perspectives. David S. Clark, SagePublications, 2007. Consultable también en Bibliography/UCLA Law.

Destaca de manera muy especial el diagnóstico que muestra el Libro Blanco del Poder Judicial, surgido a raíz de la amplia convocatoria que hiciera la Suprema Corte de Justicia de la Nación, llamando a una Consulta Nacional para una Reforma Integral y Coherente del Sistema de Impartición de Justicia en el Estado Mexicano, que no sólo incluyó a operadores del sistema de justicia, sino a legisladores, organizaciones sociales, académicos, investigadores jurídicos, líderes sociales, estudiantes universitarios y, a la sociedad en general y de cuyo resultado se deja ver la crisis del sistema de justicia penal de nuestro país[34].

Ello se patentizó, con las observaciones que nuestro país recibió por parte de misiones internacionales que evaluaron la situación en algunos aspectos de los derechos humanos. Las más emblemáticas fueron las que se realizaron por: el Relator Especial Sobre Independencia de Magistrados y Abogados, efectuada del 13 al 23 de mayo de 2001; la del Grupo de Trabajo Sobre Detención Arbitraria llevada a cabo del 27 de octubre al 10 de noviembre de 2002 y, el Diagnóstico Sobre la Situación de los Derechos Humanos en México[35].

---

www.law.ucla.edu/home/index.asp?page=584. Con amplias referencias a los estudios realizados, véase...*Del Sistema Inquisitorio al*, ob.cit. pp. 525 a 536.

[34]vid. *Libro Blanco de la Reforma Judicial. Una agenda para la justicia en México*. Suprema Corte de Justicia de la Nación. México. 2006. Sobre la crisis del sistema de justicia penal *véanse* los pronunciamientos de, MORENO HERNÁNDEZ, Moisés. Política Criminal y Reforma Penal, 1999. pp. 27 y *ss*; 51 y *ss* y, 138 y *ss*. Del mismo, *Retos del Sistema Procesal Penal en México. Algunas propuestas para la transformación del sistema de justicia penal*; tomada de la conferencia dictada en el foro: "El Futuro del Ministerio Público ante los Retos en la Procuración e Impartición de Justicia y la Seguridad Pública en México", celebrado en el Auditorio "Franco Sodi" de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, los días 10 al 14 de noviembre de 2003, especialmente en sus páginas 26 a 41.

[35]vid...*Del Sistema Inquisitorio al,passim*, sobre las observaciones provenientes de: el Relator Especial Sobre la Cuestión de los Derechos Humanos a Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, en Particular la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en su reporte E/CN.4/1998/38/Add.2, del 14 de enero de 1998.

13

Lo anterior no podía ser desconocido por el Gobierno Federal en turno, lo que lo llevó a tomar dos acciones concretas: emitir el Programa Nacional de Derechos Humanos y, la Iniciativa con Proyecto de Reforma al Sistema de Seguridad Pública y Justicia Penal que modificaba diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y proponía la expedición de un nuevo Código Federal Procesal Penal, así como reformas y creación de al menos otras diez leyes y, cuya pretensión era transformar de fondo el sistema de justicia penal para pasar a uno de corte acusatorio. La iniciativa fue presentada el día 29 de marzo de 2004 por el Ejecutivo Federal por conducto de la Cámara de Senadores, siendo ampliamente cuestionada sin ser aprobada[36].

A pesar que la iniciativa de reforma constitucional no fue aprobada, otras importantes reformas relacionadas con la materia de justicia surgieron. Destaca principalmente, de la de 12 de diciembre de 2005 al artículo 18 constitucional que contempla un importante cambio en la forma de administrar justicia para los adolescentes[37] y, la del 14 de diciembre de 2005 a los artículos 14 y 22 constitucionales dirigidas a prohibir la imposición de la pena de muerte derivado de un juicio y, a prever en el catálogo de pena prohibidas, la pena de muerte[38].

---

[36]vid. GARCÍA RAMÍREZ, Sergio. "Iniciativa de la Reforma Constitucional del Ejecutivo Federal, del 20 de marzo de 2004" en, *La Reforma Penal Constitucional (2007-2008)*, México, Porrúa, 2008. pp. 399 a 419. También, en la Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar la Constitución Política que enviara el ex Presidente Vicente Fox Quezada a la Cámara de Senadores, en sus pp. 1 a 6, se hace reconocimiento de los pronunciamientos de las diferentes oficinas de la Organización de las Naciones Unidas, emitidos en diversos diagnósticos sobre el estado que guardaba el sistema de justicia penal en México. Y,en...*Del Sistema Inquisitorio al*, *passim*.

[37]vid...*Del Sistema Inquisitorio al*, passim.

[38]vid...*Del Sistema Inquisitorio al*, passim.

III.- JUSTIFICACIÓN DE UNA REFORMA CONSTITUCIONAL Y PROCESAL PARA UN CODIGO PROCESAL PENAL ÚNICO EN LA REPÚBLICA MEXICANA.

Situación en las entidades federativas antes de la reforma constitucional de 18 de junio de 2008.

El sistema de justicia penal imperante en nuestro país, había demostrado su carácter de arbitrario e ineficaz. Sin un debido proceso que se materializara y, con una tradición por violentar los derechos humanos, se discurría fácilmente por el camino de la corrupción en los conflictos penales. El sistema existente había contribuido así al deterioro de las instituciones de seguridad pública y de administración y procuración de justicia, pero no solo eso, la crisis abarcaba hasta la formación misma y, la efectiva y seria preparación de los operados del sistema.
Los primeros Estados en propiciar un cambio de estas latitudes fueron Oaxaca y Chihuahua, que desde antes de la reforma constitucional de 18 de junio de 2008, se dieron a la tarea de buscar transformar su sistema de justicia penal, para lo cual, elaboraron en el ámbito de sus competencias nuevos códigos de procedimientos penales pero de corte acusatorio. Otros trabajos no menos importantes, aunque no tuvieron ese alcance, se dieron en el Estado de México y en Nuevo León[39].

Bajo la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa, se presentó una nueva iniciativa de reforma constitucional que tocaba dos ejes fundamentales para la transformación del sistema de justicia penal; estableció las bases claras para

[39]Sobre la situación en el Estado de Nuevo León, *véase* MANCILLA RAMÍREZ, Jorge Luis. "Los Juicios Orales en el Estado de Nuevo León", en *Revista del Instituto de la Judicatura Federal,* No. 22, México, 2006. Una referencia a la situación de ese entonces en el Estado de México, puede verse en:..*Del Sistema Inquisitorio al, passim*..

implementar en el país un sistema de corte acusatorio en el ámbito del procedimiento penal y, abarcó igualmente el eje de seguridad. Tras ser sometida a discusión, la misma fue aprobada y finalmente publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 18 de junio de 2008, estableciendo como plazo máximo para su implementación en todo el territorio nacional el de ocho años después de iniciada su vigencia, esto es, el día 19 de junio de 2016[40].

Con esa reforma constitucional, se creó una instancia de Coordinación[41] cuyo objeto es establecer la política y la coordinación nacionales necesarias para implementar en los tres órdenes de gobierno el sistema de justicia penal que surge con aquélla y, se prevé también, que la misma contará con una Secretaría Técnica que será la encargada de operar y ejecutar los Acuerdos y Determinaciones del Consejo de Coordinación, así como de coadyuvar y apoyar a las autoridades locales y federales en lo concerniente a la reforma[42].

---

[40] Excepción hecha de las entidades federativas que al inicio de vigencia de ésta reforma constitucional, ya contaren con un código procesal penal de corte acusatorio, pues para las mismas conforme al Artículo Tercero Transitorio de la reforma, la misma entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

[41] Ello con sustento en el artículo Noveno Transitorio de la reforma constitucional que establece: **Noveno.-** Dentro de los dos meses siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto se creará una instancia de coordinación integrada por representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además del sector académico y la sociedad civil, así como las Conferencias de seguridad Pública, Procuración de Justicia y de Presidentes de Tribunales, la cual contará con una secretaría técnica, que coadyuvará y apoyará a las autoridades locales y federales, cuan así lo soliciten. Las atribuciones de esa instancia de Coordinación, que recibe el nombre de Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, han sido previstas en el artículo 13 del Decreto de su creación publicado en el Diario Oficial de la Federación del 13 de octubre de 2008.

[42] vid. Diario Oficial de la Federación del 13 de octubre de 2008, que, específicamente su artículo 11 crea la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación, siendo su objeto, operar y ejecutar los Acuerdos y Determinaciones del Consejo de Coordinación, así como coadyuvar y brindar apoyo a las autoridades locales y federales en la implementación del sistema y, en su artículo 13 con referencia específica a las mismas.

De acuerdo con los datos oficiales, no existe un Código Federal de Procedimientos Penales de corte acusatorio y, la situación al mes de mayo de 2013 en cuanto a la implementación del sistema acusatorio en las entidades federativas del país, es como sigue:

Entidad	Inicio 2013 <	Inicio 2013	Inicio > 2013	Operación Total Reglamentada
Aguascalientes	Sin fecha de arranque			
Baja California	11/8/2010			2015
Baja California Sur	Sin fecha de arranque			
Campeche	Sin fecha de arranque			
Chiapas	2012			2016
Chihuahua	Operación total			
Coahuila		1/6/2013		
Colima	Sin fecha de arranque			
Distrito Federal	Sin fecha de arranque			

17

Durango	14/12/2009			
Estado de México	Operación total			
Guanajuato	2011			1/1/2015
Guerrero	Sin fecha de arranque			
Hidalgo	Con código sin fecha de arranque definida			
Jalisco			1/1/2014	1/6/2016
Michoacán			3/2/2014	13/6/2016
Morelos	Operación total			
Nayarit	Sin fecha de arranque			
Nuevo León	1/1/2012			01/01/2016
Oaxaca	2007			2016
Puebla	15/1/2013			17/6/2016
Querétaro	Sin fecha de arranque			
Quintana Roo		15/10/2013		
San Luis Potosí			1/3/2014	

18

Sinaloa		1/12/2013		
Sonora			6/2014	6/2014
Tabasco	28/9/2012			7/3/2016
Tamaulipas		1/7/2013		
Tlaxcala		31/5/2013		
Veracruz		11/5/2013		
Yucatán	15/11/2011			6/9/2013
Zacatecas	5/1/2009			4/1/2016

*Se estiman dos años a partir de su inicio para lograr una operación total del sistema de justicia penal acusatorio.

Hasta el mes de abril de 2013 –a casi poco más de tres años que debe estar implementado el acusatorio en todo el país– veintitrés entidades federativas cuentan con un Código de Procedimientos Penales de corte acusatorio. Tres de ellas lo operan en todo su territorio[43] y, diez más, lo han implementado por regiones en un proceso que aún no culmina[44]. El Estado de Hidalgo cuenta con un Código ya promulgado pero el inicio de su vigencia depende de una declaratoria

[43]Son los Estados de Chihuahua, Estado de México y Morelos.

[44]Se trata de los Estados de Baja California, Chiapas, Coahuila, Guanajuato, Durango, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y Zacatecas

de la Comisión Interinstitucional para la Reforma Integral del Sistema de Justicia Penal[45]. Siete más, entrarán en operación parcial durante el 2013[46]. Otras dos, iniciarán su operación parcial en el 2014[47]. Siete entidades federativas, se encuentran discutiendo en sus legislaturas locales y, por ello, aun no han aprobado un Código de Procedimientos Penales de corte acusatorio[48], mientras que Colima y el Distrito Federal son las entidades federativas más retrasadas en este importante proceso de implementación[49].

A pesar que la implementación de la reforma constitucional de junio de 2008 está en curso, lo cierto es que, las entidades federativas que cuentan con códigos acusatorios, por lo general no son coincidentes en la regulación de ciertos aspectos, por ejemplo:

- Sobre el derecho del imputado de ofrecer medios de prueba en el plazo constitucional y que los mismos sean desahogados ante el juez de control;
- Sobre la validez y posibilidad de ser utilizadas en juicio, las declaraciones previas rendidas por un imputado cuando éste decide invocar su derecho a no declarar;

---

[45]vid. el Artículo Cuarto Transitorio del Decreto 582 que contiene el Código Procesal Penal para el Estado de Hidalgo, publicado en el periódico oficial de dicha entidad federativa el 14 de marzo de 2011.

[45] Son los Estados de Puebla, Coahuila, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.

[47]Los Estados de Michoacán y San Luis Potosí.

[48]Se trata de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Guerrero, Jalisco, Nayarit y Querétaro.

[49]Aunque el Distrito Federal ha trabajado en distintas Instituciones la elaboración de un Proyecto de Código de Procedimientos Penales; una, a cargo de un grupo de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y otra, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, ninguna ha sido adoptada hasta ahora, sin perjuicio de numerosas diferencias de fondo que existen entre una y otra.

- Sobre el deber que tiene el acusado si decide declarar en juicio, de contestar preguntas al órgano de acusación;
- Sobre la posibilidad de incorporar como prueba, mediante lectura en juicio, actos de investigación;
- Sobre la aceptación o no de la prueba de inspección con participación del tribunal de juicio oral;
- Sobre la posibilidad de aceptar excepciones a la comparecencia personal de testigos bajo ciertos y específicos supuestos;
- En figuras como los procedimientos abreviados;
- La acción penal por particular;
- En criterios de oportunidad por parte del Ministerio Público;
- En medios de impugnación;
- En la prisión preventiva y otras medidas cautelares;
- En mecanismos alternativos de solución de controversias; y
- En las atribuciones de la policía en la investigación del delito;

Con lo cual, esa indeseable disparidad jurídica, además de la inseguridad que genera, de arraigarse con el tiempo, podría desvirtuar uno de los fines de la reforma constitucional como lo es que, el debido proceso y la protección de los derechos humanos deben ser iguales en todo el territorio nacional.

Además, derivado de la experiencia ganada con la aplicación de los códigos acusatorios vigentes y, de la continua observación y críticas a que el sistema se ha sometido para buscar su mejora; es necesario atender otros aspectos hasta ahora inexistentes que garanticen una *igualdad de armas* entre las partes contendientes, lo que sólo se puede lograr bajo el mismo sentido con un ordenamiento procesal que unifique esos criterios. Tal es el caso del *descubrimiento probatorio* a cargo de la defensa con el objeto que, entre ésta y el órgano acusador exista un previo intercambio de los medios probatorios que

pretenden ofrecer para ser llevados a juicio, en términos de las reglas que se prevén para ello.

Continuar sosteniendo el modelo constitucional que propicia contar con treinta y tres códigos de procedimientos penales en el país, históricamente ha demostrado ser causa de la generación de criterios encontrados, tratamiento desigual, dispersión normativa o excesos entre una legislación y, discrepancia en cuanto a la interpretación, entre otros, que trasladado al modelo acusatorio, estos efectos se presentan con las codificaciones vigentes y se anuncia la misma perversión.

En el Libro Blanco de la Reforma Judicial, en una de sus conclusiones, específicamente la identificada como acción número 30, se hace referencia a la necesidad de adoptar una codificación uniforme en el sentido siguiente: "Una de las conclusiones unánimes de la consulta fue la necesidad de avanzar en el proceso de codificación uniforme…se han analizado tanto sus ventajas como el hecho de que este proceso no atenta contra la soberanía de las entidades federativas, y resulta perfectamente compatible con el federalismo, tal y como lo demuestran las experiencias de países federales como Brasil y Alemania[50]".

Por otro lado, la implementación de una codificación única en materia de proceso penal para todo el país, que se ajuste a los postulados de la reforma constitucional de 18 de junio de 2008, además de la unificación de criterios con el beneficio que ello acarrea para los usuarios y operadores del sistema; incidiría de manera positiva y más eficaz en otros aspectos como, en la capacitación de los operadores del sistema y, en los procesos de enseñanza y formación de los

[50] ob.cit. p. 407.

estudiantes de derecho y abogados dedicados al libre ejercicio de la profesión, toda vez que partirían en su estudio de una misma base aplicable en todo el país.

Adicionalmente, con la unificación referida, se podrán generar criterios jurisprudenciales uniformes al tener que analizar una misma normatividad en todo el territorio nacional, con independencia del correspondiente ámbito de competencia, así como se contaría con elementos más homogéneos para la planeación del rediseño institucional que requiere la reforma e incluso, se facilitaría igualmente el proceso de implementación de la reforma a nivel nacional, propiciando la unificación de criterios en términos de capacitación para los operadores del sistema.

A la par de ello, ésta reforma otorgaría una mayor certidumbre jurídica al ciudadano y al operador, al existir reglas claras respecto de las consecuencias jurídicas que en el ámbito procesal y de ejecución puede generar la actualización de la norma penal en todo el territorio nacional, con independencia en donde se hubiese actualizado el hecho delictivo.

Resulta entonces evidente advertir, que la dispersión y desigualdad normativa, los criterios legales contradictorios o las omisiones existentes entre una legislación y otra, puede constituir una puerta que sea aprovechada para generar impunidad, la cual a su vez propicia que la delincuencia prolifere.

Por ello, con la expedición de un Código Procesal PenalÚnico que aplique por igual en todo el territorio nacional se busca establecer un modelo jurídico uniforme, aplicable a todas las entidades federativas, incluido aquí el Distrito Federal y, al ámbito federal sobre la base de una política criminal coherente y congruente con las nuevas bases constitucionales, homogéneo y sistematizado que evite la

dispersión normativa, criterios encontrados o incluso inseguridad jurídica, y genere espacios de impunidad y el consecuente descrédito del sistema.

Así, tomando en cuenta que el establecimiento de las bases del debido proceso previstas por la citada reforma constitucional han constituido un paso fundamental y sin precedente en la confección del nuevo sistema de justicia penal en nuestro país, se estima que en consecuencia el siguiente paso obligatorio para su consolidación deberá de ser la adecuación de la legislación adjetiva penal[51], lo cual, tendrá que verse reflejado en la concreción de un modelo jurídico congruente con los postulados constitucionalmente establecidos que recojan el espíritu y alcance planteado por el Constituyente en el texto constitucional, sin llegar a desvirtuarlo o propiciar excesos en detrimento de los justiciables y demás intervinientes del proceso penal.

Por ello, no sólo resulta necesario terminar con esa diversidad jurídica, sino que es una exigencia ineludible contar con un instrumento que de una vez por todas unifique criterios para la aplicación de la ley penal en nuestro país y, proporcione a los mexicanos víctimas o acusados de un delito, claridad y certeza sobre los contenidos de la ley procesal penal.

[51] Ello, sin dejar de desconocer que se busca igualmente la generación de una codificación única en materia de ejecución de penas, como se ha plasmado en la reciente Iniciativa de Reforma al artículo 73 Fracción XXI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional.

IV.- CARACTERÍSTICAS DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL PARA LA REPÚBLICA MEXICANA.

Para fines de exposición de motivos del presente Código Procesal Penal se han desarrollado quince apartados que dan razón y sustento a su contenido.

1. Estructura.

El Código, tomando en consideración la forma en que los distintos códigos procesales ya vigentes de corte acusatorio, como los que se encuentran aprobados por distintas legislaturas estatales, pretende dar claridad en cuanto a la estructura que conforma un ordenamiento de este tipo, pues no sólo ello conlleva que el mismo sea congruente con el desarrollo de las distintas etapas procesales que contiene, sino que presenta un contenido sistematizado que permite su mejor comprensión. Además, estructuralmente, atiende a evitar la *sobre regulación* en distintos aspectos que no deben quedar comprendidos dentro de un código procesal penal y que más bien, su desarrollo ha de ser materia de regulación por las entidades federativas y la federación en su ámbito de competencia, a través de otras leyes de tipo orgánico, manuales, protocolos, etcétera.

Esto así se prevé para las materias identificadas como *residuales*, que sin perjuicio de ello, cuentan con una base normativa en el Código.

Del estudio comparado de los códigos estatales de tipo acusatorio existentes en México, se observan disparidades en sus estructuras, es decir, que ciertas figuras cuya naturaleza se ha debatido más frecuentemente en el contexto jurídico mexicano no son ubicadas de manera unánime en un determinado apartado de la codificación procesal. Esto ha impactado en la topografía de los códigos, en los que incluso, se aprecian variantes en la forma de clasificación de los temas que regulan. En ese contexto, es necesario que la estructura de un Código Único

responda a una clasificación congruente con la naturaleza intrínseca de las instituciones jurídicas, y que además, obedezca al orden lógico en que se va desarrollando el proceso penal.

Por ello, en el Código se prevé como un primer nivel de división, en dos Libros: el Primero, sobre "Disposiciones Generales", y el Segundo, relativo al "Proceso Penal".

El Libro Primero sobre "Disposiciones Generales", abarca aquellas materias procesales básicas que aplican de forma transversal a todo el proceso como son el ámbito de aplicación, los principios y derechos del proceso, las reglas sobre competencia y las normas generales sobre los actos procesales. También dentro de este Libro se establecen las normas básicas sobre los derechos y obligaciones, facultades y atribuciones de los sujetos procesales y sus auxiliares, así como la regulación de las providencias precautorias. En síntesis el contenido de este Primer Libro es el siguiente:

Libro Primero. Disposiciones generales

Título I. Disposiciones preliminares.

Título II. Principios y derechos.

Título III. Competencia

Título IV. Actos procesales.

Título V. Sujetos procesales y sus auxiliares.

Título VI. Providencias precautorias

A reserva que en el desarrollo específico del contenido de cada uno de los títulos mencionados se justifique su ubicación dentro del Código, es importante destacar algunos de los planteamientos de esta iniciativa. Se condideró congruente que en

un solo titulo se establezcan tanto los Principios, como los Derechos esenciales del debido proceso, ya que entre éstos existe una linea divisoria muy tenue y, la interpretación de ambos debe ser sistemática, de esta manera se contribuye a facilitar su comprensión y la relación que existe entre los mismos.

En el titulo sobre "Sujetos Procesales y sus Auxiliares", se contempla a la policia como sujeto del proceso y no como auxiliar, como se ha planteado en otras iniciativas o en códigos estatales vigentes. Por su parte, como "Auxiliar" se regula a los consultores técnicos, sin perjuicio de que en el Código se haga referencia a otros intervinientes del proceso, como los Servicios Previos al Juicio, los peritos, las autoridades penitenciarias y las autoridades especializadas en mediación conciliación y justicia restaurativa, entre otros, cuyas atribuciones pudieran derivarse de las funciones que este Código concede a las autoridades.

El Título VI sobre "Providencias precautorias, formas de conducción del imputado a proceso y medidas cautelares", también se incluye en el Libro Primero,en atención a que la naturaleza de estas figuras coincide en que implican actos de molestia contra la persona del imputado con el fin de llevarlo ante el órgano jurisdiccional, asegurar su presencia ante éste y conservar la materia del proceso. La descripción sintética de este Título es la siguiente:

> Título VI. Providencias precautorias, formas de conducción del imputado a proceso y medidas cautelares
>
> Capítulo I. Disposiciones generales
>
> Capítulo II. Providencias precautorias
>
> Capítulo III. Formas de conducción del imputado al proceso
>
> Sección I. Orden de comparecencia
>
> Sección II. Flagrancia y caso urgente

27

Capítulo IV. Medidas cautelares

Sección I. Medidas cautelares personales

Sección II. Medidas cautelares reales

Capítulo V. Servicios Previos al Juicio

De esta manera, se evitará que las normas tendientes a asegurar la presentación del imputado en audiencia y conservar la materia del resto del proceso, se encuentren dispersas, y por el contrario, se concentren en un solo título para su mejor y más fácil acceso.

El Libro Segundo del Código, agrupa las normas del "Proceso Penal" en la secuencia lógica de las distintas etapas que presupone un sistema acusatorio, y que, básicamente son: investigación, etapa intermedia y, etapa de juicio. A su vez, la regulación de cada una de estas etapas presupone el desarrollo de las fases que las componen. Así por ejemplo, la investigación se divide en inicial y complementaria; la etapa intermedia en fases escrita y oral; y la etapa de juicio, en debate, deliberación, fallo y sentencia.

Como Primer Título de este Libro, se establecen las formas anticipadas de terminación del proceso, que en algunos códigos han sido confundidas con formas de terminación de la investigación o con procedimientos especiales. Atendiendo a la naturaleza jurídica de las figuras, como formas anticipadas de terminación del proceso, en el Código se regulan: los acuerdos reparatorios (a los cuales se puede llegar vía mediación, conciliación o proceso restaurativo), y la suspensión condicional del proceso. Por otra parte, dentro del Capítulo de la Investigación, se regulan como formas de terminación de la misma: el archivo temporal, el no ejercicio de la acción penal y los criterios de oportunidad. Y, por su naturaleza, el

procedimiento abreviado se regula dentro del Título relativo a los procedimientos especiales.

El Título Segundo, trata del procedimiento penal ordinario, mientras que el Título Tercero, establece las reglas de los procedimientos especiales (abreviado, personas jurídicas, acción penal por particulares, asistencia jurídica en materia internacional).

En cuanto al procedimiento ordinario se establece el siguiente orden:

Título II. Procedimiento ordinario
- Capítulo I. Etapas del procedimiento
- Capítulo II. Etapa de investigación
  - Sección I. Disposiciones para la investigación
  - Sección II. Inicio de la investigación
  - Sección III. Actuaciones derivadas del conocimiento de un hecho delictuoso
  - Sección IV. Formas de terminación de la investigación
  - Sección V. Datos de prueba, medios de prueba y prueba
  - Sección VI. Actos de investigación
  - Sección VII. Prueba anticipada
  - Sección VIII. Audiencia inicial
  - Sección IX. Cierre de investigación
- Capítulo III. Etapa intermedia
  - Sección I. Objeto
  - Sección II. Fase escrita
  - Sección III. Fase oral.
- Capítulo IV. Etapa de Juicio
  - Sección I. Disposiciones previas

Sección II. Principios
Sección III. Dirección y disciplina
Sección IV. Disposiciones generales sobre la prueba
Sección V. Desarrollo de la audiencia de debate
Sección VI. Deliberación fallo y sentencia
Capítulo V. Ajustes al procedimiento ordinario
Sección I. Ajustes al procedimiento para personas con discapacidad
Sección II. Pueblos y comunidades indígenas

Como innovaciones que se proponen en el Código está, por ejemplo, una regulación más clara de las fases de la etapa intermedia y, en la etapa de juicio, la distinción entre la deliberación, el fallo y la sentencia que emite el órgano jurisdiccional. También es importante destacar a reserva de que se explicará en detalle en la parte relativa, que cuando intervienen personas con discapacidades, o pertenecientes a comunidades indígenas, más que seguir procedimientos "especiales", lo que de alguna manera remite a cierto grado de discriminación, lo que opera es hacer ajustes razonables al procedimiento ordinario para que cualquiera que sea la condición de las personas tengan acceso a la justicia.

De esta manera, el Código manteniendo la estructura descrita, que persigue un orden con una secuencia progresiva del desarrollo del proceso penal, sistematiza todas las figuras procesales de acuerdo a su naturaleza, incluyendo aquéllas sobre las cuales se han generado importantes debates, clarificando la cuestión.

A manera de síntesis, el Libro Primero, se refiere a las disposiciones generales, específicamente las que tienen aplicación independientemente del procedimiento penal, pero en relación con éste. Se compone de seis Títulos, cada uno dirigido a la reglamentación de los temas fundamentales de sistema acusatorio.

El Título I, se refiere a las disposiciones preliminares y en específico al ámbito de aplicación, en el que se clarifica que la iniciativa contiene un Código Procesal Penal Único, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que es parte el Estado Mexicano. Cabe destacar, que a lo largo de la iniciativa se reconocen *facultades residuales* a las entidades federativas en distintos temas, es decir, se distribuyen atribuciones que corresponderán a la Federación y a las entidades federativas, y en consecuencia deberán reglamentar en sus disposiciones sustantivas y administrativas. La emisión de un Código Procesal Penal Único no es obstáculo para que las autoridades de las entidades federativas desarrollen normas que la complementen y lo hagan viable.

El Título II, desarrolla los principios y derechos del sistema de justicia penal acusatorio y describe cada uno de ellos, a saber: publicidad, contradicción, concentración, continuidad, inmediación, responsabilidad, carga de la prueba, presunción de inocencia, juicio previo y debido proceso, protección de la intimidad, justicia pronta, justicia alternativa, defensa, respeto a la libertad personal, única persecución, libertad probatoria, interpretación restrictiva y aplicación de principio o derecho más favorable del imputado.

El Título III, se refiere a la competencia, la forma de resolver los conflictos que surjan a propósito de la misma, la acumulación y separación de procesos y los impedimentos, recusaciones y excusas.

En el Título IV, se regulan los actos procesales en cuanto a sus formalidades, desarrollo de audiencias, naturaleza y objeto de las resoluciones judiciales, formas

de comunicación entre autoridades, de notificación y citaciones, así como todo lo concerniente a plazos, y destacadamente a las nulidades.

El Título V, reglamenta los sujetos procesales y sus auxiliares, partiendo de lo que es común para todos ellos y dando paso, enseguida, a cada uno, a saber: víctima *u* ofendido, imputado, defensor, Ministerio Público, policía, autoridad judicial y auxiliares.

En el Título VI, como parte fundamental del sistema de justicia acusatorio, se regula lo concerniente a las providencias precautorias, formas de conducción del imputado al proceso y medidas cautelares. De la misma forma, se reglamenta lo que es general en esos casos y, en seguida, en forma destacada, lo que son y como aplican las providencias precautorias; cuáles son y cómo operan las formas de conducción del imputado al proceso, muy especialmente la orden de comparecencia, de aprehensión, la flagrancia y el caso urgente; y las medidas cautelares, tanto personales como reales. Por último, se reconocen y reglamentan los servicios previos a juicio; una buena práctica que ha sido documentada en algunas entidades federativas de la República Mexicana que cuentan ya con dichas oficinas.

(TEMAS DEL LIBRO PRIMERO)

2. Disposiciones preliminares

Como cualquier norma, la procesal penal tiene un ámbito de aplicación que debe estar precisado por el legislador y, para el caso del Código, se establece su observancia general en toda la República Mexicana, de conformidad con las reglas que a tal efecto se prevén.

3. Principios y derechos

Parte fundamental del proceso penal son los principios que lo rigen, ya que éstos definen un estándar mínimo, a partir del cual se establece la orientación de la regulación procesal. Así, el artículo 20 constitucional establece un sistema acusatorio y oral que tiene por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Esto implica una clara definición de las funciones de los actores dentro del proceso y en consecuencia, las decisiones del órgano jurisdiccional serán con base en la incitación y petición de las partes, limitando la actuación "oficiosa" del juez a partir de un control horizontal de éstas, además de que se obliga a un sistema de audiencias orales evitando que la tramitación del proceso se dé a través de escritos.

Al respecto, cinco son los principios rectores:

1. **Publicidad**: Dota de trasparencia al proceso, permitiendo no sólo la evaluación del mismo con el fin de generar la profesionalización de sus operadores, sino de incrementar la confianza y legitimidad entre la sociedad.
2. **Inmediación**: Exige la presencia ininterrumpida del juez y le obliga a resolver conforme a lo que ve y percibe en la propia audiencia. La inmediación legitima la decisión judicial, fundamentalmente en relación con la valoración de la prueba.
3. **Contradicción**: Las partes podrán debatir los hechos y argumentos de la contraparte, así como controvertir cualquier medio de prueba en la audiencia de juicio.
4. **Concentración**: Es la posibilidad de llevar en una sola audiencia de forma sucesiva y secuencial diversos actos procesales.
5. **Continuidad**: Dispone que las audiencias no se interrumpirán salvo en casos excepcionales.

33

Por lo que toca al debido proceso y a la persecución penal es posible identificar los siguientes principios:

1. **Legalidad**: Todo ejercicio del poder público debe estar sometido a la voluntad de la ley y de su jurisdicción, a fin de establecer seguridad jurídica.
2. **Igualdad**: Establece la necesidad de posibilitar las mismas oportunidades a las partes a fin de equilibrar el proceso, proveyendo idéntico acceso a la aplicación de los derechos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales y las leyes.
3. **Presunción de inocencia**: Establece la inocencia de la persona como regla, puesto que deberá ser considerado y tratado como tal durante el proceso, mientras no se declare su culpabilidad por sentencia firme.
4. **Tribunal natural**: Implica que el órgano judicial ha de preexistir al acto punible, teniendo un carácter permanente y creado mediante ley con competencia exclusiva, indelegable y universal para juzgar el hecho en cuestión. Supone además, una implícita prohibición de crear organismos *ad-hoc* o *post-facto*.
5. ***Non bis in idem***: La persona condenada, absuelta o cuyo juicio haya sido sobreseído definitivamente, no podrá ser sometida a un nuevo juicio penal por el mismo hecho. Implica que no pueda valorarse dos veces un mismo hecho para calificar la tipicidad de un delito o evaluar la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal.
6. **Interpretación restrictiva**: Impone el deber de interpreta restrictivamente las disposiciones legales que coarten o restrinjan de cualquier forma, incluso cautelarmente, la libertad personal, limiten el ejercicio de un derecho conferido a los sujetos del proceso, establezcan sanciones procesales o exclusiones probatorias.
7. **Legalidad/Oportunidad-Persecución penal**: La regla general dispone la obligatoriedad de la persecución penal de cara a la acusación y posterior

Juicio. No obstante, la misma se puede excepcionar a través de la adopción de ciertos criterios, soluciones alternas o modos de aceleración del proceso que responden a lineamientos puntuales de políticas de persecución criminal.

Finalmente, deben atenderse con precisión las dos especies de actos procedimentales en el esquema acusatorio: actos de investigación y actos procesales, ya que los principios contenidos en el párrafo inicial del artículo 20 Constitucional son relativos a los actos procesales, particularmente los de tipo audiencia.

En lo relativo a los actos de investigación, si bien es innegable la imperiosa necesidad de establecer estándares de operación y metodología en la investigación a fin de generar una constante de calidad en la misma, tales reglas no deben disponerse dentro de un código procesal y sí en manuales o reglamentos, puesto que dicha *sobre regulación* puede generar confusión en cuanto a temas relacionados con prueba preconstituida, prueba tasada o producir consecuencias procesales de ilicitud bajo el entendimiento del sistema *tradicional-escrito*.

En todo caso la policía, al realizar un acto de investigación, debe verificar para garantizar la calidad en la información y no para validar su actuación *procesalmente*: la legalidad del mismo –solo control judicial cuando la investigación implique un acto de molestia–; pertinencia y utilidad; aviso inmediato al Ministerio Público que dirige la investigación –metodología de operación– y, registro del acto de investigación como sustento de la información al interior de la carpeta o legajo.

Relativo al régimen probatorio, los principios son:

35

1. **Libertad de prueba**: Implica que pueda ser utilizado cualquier medio para el esclarecimiento de los hechos, siempre y cuando éste sea lícito. No existen medios de prueba excluidos o restringidos, ni tampoco existe la necesidad de probar ciertos hechos con determinados medios. Por tanto, es importante evitar la *sobre regulación* de actos de investigación que no impliquen actos de molestia o de técnicas de litigación en el desahogo de prueba en juicio.
2. **Licitud de prueba:** Este principio que no debe ser entendido o definido de la misma manera que en el sistema tradicional-escrito en el cual, al haber prueba preconstituida, los formalismos eran la parte medular. Dicho concepto se refiere por una parte, a la forma en cómo se obtuvo la información que constituye la prueba a partir del acto de investigación –sin vulnerar derechos fundamentales– y por otro lado, en cómo se desahoga la prueba en el juicio con base en las disposiciones relativas a su incorporación.
3. **Libre valoración de la prueba:** Debe ser con base en la sana crítica, observando las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos.

Por último, es necesario establecer conceptos básicos que rigen a la prueba a fin de generar una conceptualización diferenciada respecto a las distintas etapas procesales en cuestión. Al respecto, se debe entender que el antecedente o registro de investigación se refiere a la *fuente probatoria y al dato de prueba;* que, el resultado probatorio es *la información con la que el órgano jurisdiccional resuelve en audiencias previas al juicio*. Siendo que, el medio de prueba, *lo referido a la fuente probatoria* y, la prueba, al resultado probatorio, son propios del Juicio.



4. Jurisdicción y competencia

Jurisdicción

Una de las funciones del Estado consiste en administrar justicia resolviendo con fuerza vinculante, las controversias que se susciten respecto a la autoría o participación de una persona en un hecho que la ley considere constitutiva de delito. Esa es parte de la función jurisdiccional del Estado, que se encomienda por nuestra Constitución al poder judicial.

La jurisdicción consiste entonces en una atribución de los jueces y sólo de los jueces, para administrar justicia y en su caso para imponer penas, así como determinar su modificación o duración. Esta legislación procesal única reconoce que es atribución de los Poderes Judicial Federal, de los Estados y del Distrito Federal, imponer, modificar y precisar la duración de las penas, es decir, se reconoce en esos poderes la atribución jurisdiccional en materia penal.

Esa función del Estado, es distinta de la competencia, porque de acuerdo a ésta última sólo se determina en el caso concreto, si una autoridad investida ya de jurisdicción, puede conocer de ese asunto particular; que no sea competente un órgano jurisdiccional para conocer de un concreto en concreto no le quita la posibilidad de desarrollar esa función del Estado.

Competencia

Bajo el esquema de la unificación de los códigos procesales penales es necesario establecer nuevas normas que distribuyan la competencia entre la Federación y las entidades federativas, y entre éstas, la distribución debe partir de una regla constitucional que defina las facultades del Congreso de la Unión en la materia, y establezca las facultades residuales a ejercer por las entidades federativas.

Los conflictos competenciales deben resolverse de manera clara en la codificación única para que las responsabilidades de las autoridades federales y cada una de las estatales sean resueltas de manera expedita, sin lugar a dudas sobre la autoridad que se hará cargo. Así por ejemplo, el Código plantea como norma de competencia que ante una causa probable de delincuencia organizada, al menos provisionalmente, la competencia se defina a favor de las autoridades federales. Por otra parte, en los conflictos competenciales entre entidades federativas se propone que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea la autoridad resolutora en términos del artículo 106 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin duda, el tema de las competencias tendrá un impacto en la integración orgánica de las instituciones que operan el sistema de seguridad pública y justicia penal en México. En el Código, se hace una depuración de normas con carácter orgánico que tendrán que ser definidas por las autoridades competentes de cada fuero. A manera de ejemplo, actualmente, a nivel federal, los delitos del orden federal se establecen en la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, por lo que no sería necesario introducir una norma de ese carácter en el Código. Otras cuestiones como las causales para el planteamiento de una excusa o una recusación pueden estar en leyes orgánicas federales o estatales de procuradurías, defensorías o poderes judiciales, atendiendo a las atribuciones de cada función.

También, el Código prevé la necesidad de establecer normas que permitan cierta uniformidad orgánica en algunas instituciones básicas para el buen funcionamiento de un sistema acusatorio. Es el caso de la necesidad de constituir órganos colegiados para la etapa de Juicio. Otro elemento orgánico importante a definir para los poderes judiciales de ambos fueros, es el establecimiento de la

radicación de los casos por órgano jurisdiccional, es decir, que habrá jueces de control de turno, en vez de jueces de caso como en el sistema tradicional.

5. Actos procesales

En el Código, se regulan plenamente las formalidades que el proceso debe contener para que las actuaciones que en él se realicen estén acordes a los principios y características que el proceso acusatorio contempla, con la finalidad de no vulnerar derechos y garantías constitucionales.

Uno de los aspectos fundamentales del sistema de justicia penal adversarial es la oralidad. Así, se prevé que el proceso se desarrolle bajo un mecanismo de audiencias, en las que además de respetarse las formalidades del proceso, se asegure la presencia del juez y de las partes en igualdad de condiciones.

En materia de registros, se prevén reglas para los actos de la policía, Ministerio Público y Tribunal, mismos que se llevarán a cabo por cualquier medio que garantice fidedignamente su reproducción.

Respecto a los actos y resoluciones judiciales, se parte de la base que, los jueces, deben resolver en audiencia todas las peticiones o planteamientos de las partes que por su naturaleza o importancia deban ser debatidas o requieran desahogo de alguna prueba y, siempre bajo los principios de contradicción, inmediación y publicidad.

En materia de comunicaciones entre autoridades, se establecen reglas para atender las solicitudes o requerimientos de colaboración entre jueces o Ministerio Público, entre otros, a efecto de que se tramiten sin demora y en estricto apego a derecho.

En el tema de notificaciones, la regla es que éstas deben realizarse a la brevedad, llevándose a cabo de tal manera que se asegure el ejercicio del derecho de la defensa, así como de las demás partes; además de transmitirse con claridad, precisión y en forma completa el contenido de la resolución o acto respectivo. Asimismo, se prevé como regla que las resoluciones pronunciadas durante las audiencias se entenderán notificadas a las partes que hubieren asistido. Paralelamente, se prevé la posibilidad de realizar las notificaciones a través de mecanismos ágiles.

Con relación a los plazos, se dispone como regla que los plazos sujetos al arbitrio judicial sean determinados conforme a la naturaleza del proceso y a la importancia de la actividad que se deba de desarrollar, teniendo en cuenta los derechos de las partes.

Metodología de audiencias

De acuerdo a los principios constitucionales que fueron establecidos en la reforma constitucional de 18 de junio de 2008, las audiencias preliminares al juicio oral estarán disciplinadas por los mismos principios que gobiernan la existencia de éste. El Código prevé que todos los actos que impliquen desahogo de prueba sean realizados mediante la metodología de audiencias. Esta idea no excluye la posibilidad que exista un plazo de preparación para hacer más ágil la audiencia en cuestión, sin embargo, la decisión definitiva que recaiga a las peticiones de las partes deberá ser tomada al concluir la audiencia, una vez que el juez haya escuchado a todos los intervinientes legitimados para actuar en ella.

En el Código se pretende hacer una regulación de las audiencias de forma tal que se respeten todos los principios que son propios del sistema, es decir, que se realiza en presencia del juez y con la intervención de todas las partes. Habrá supuestos de excepción que están autorizados constitucionalmente, por ejemplo,

cuando el Ministerio Público deba solicitar autorizaciones para realizar órdenes de aprehensión, cateos e intervenciones de comunicaciones privadas, las cuales por su propia naturaleza requieren sigilo para poder tener éxito. La regla general del sistema acusatorio prescribe que todo lo que no ocurre en la audiencia no puede ser tomado en cuenta por el juzgador para adoptar la decisión respectiva.

También se propone que las audiencias no se reduzcan a meros actos protocolarios –tal como ocurre con otras propuestas–, en las que la tramitación se lleva a cabo prácticamente por escrito y la audiencia no es sino una simple ratificación de lo ya decidido por otra vía. El sistema tradicional actual está lleno de ejemplos de este tipo. Es esencial que en las audiencias se discutan cuestiones de fondo y no formales o administrativas.

Nulidades

La regulación de las nulidades tiene que atender también a diversos principios que son característicos del proceso penal acusatorio, señaladamente, la idea de la economía procesal y el consecuente saneamiento que se tienen que hacer de aquellos actos en los que se estime se actualiza un vicio procesal. Cuando a pesar de que se hubo señalado el vicio y las partes no lo corrigieron con oportunidad, el juez estará autorizado a decretar su nulidad siempre que haya sido solicitado por alguna de ellas, o incluso oficiosamente, cuando la nulidad afecte los derechos fundamentales del imputado.

El Código asume una perspectiva consecuencialista en la regulación de las nulidades, es decir, el vicio que se produzca en la tramitación del procedimiento o en la sentencia debe haber producido la afectación de derechos fundamentales de las partes, en tal sentido, los simples defectos formales que no trasciendan al resultado de la decisión pueden ser convalidados.

Otra cuestión de capital importancia es determinar aquellos actos que son susceptibles de nulidad. El Código apunta a cubrir estos actos, no solamente por lo que hace resoluciones judiciales propiamente dichas, sino los actos de investigación que se encuentran viciados y que produzcan un resultado contrario a los derechos de los intervinientes, tales como los actos recopilatorios de información que lleva a cabo la policía.

Así, se incluyen dentro de las posibilidades de anulación, no sólo las resoluciones judiciales sino también los actos realizados durante la investigación. Así, las consecuencias de una detención arbitraria, un cateo ilegal o la obtención de un medio de prueba que hayan sido obtenidos en contravención con las formalidades especiales, también pueden ser anulados. Se debe insistir en la necesidad de que dicha relación formal trascienda al fallo.

El texto constitucional reformado en junio de 2008 introduce de manera expresa la nulidad de actos que violen derechos fundamentales. Esta norma es de suma importancia porque no deja lugar a dudas que todo acto, en especial las pruebas, debe recabarse respetando siempre los derechos fundamentales de las personas. Respecto a la anulación de actuaciones procesales encontramos diversos grados de nulidad.

Están aquellos actos que, aún siendo contrarios a una norma procesal, no causan un perjuicio irreparable a las personas de tal manera que se pueden convalidar. En general en este rubro encontramos a los errores de forma. En una categoría distinta, se ubican aquellos actos que además de ser ilegales dada su naturaleza pueden llegar a causar indefensión, en especial para el imputado. Estos actos generan consecuencias graves en el transcurso del proceso ya que violan derechos fundamentales, por lo que no son susceptibles de convalidación. Tratándose de estos actos es necesario que cualquiera que sea el estado del

proceso se pueda solicitar su nulidad, ya que de lo contrario siempre estará latente la producción de un resultado procesal que estuvo basado en actos ilegales que violentan derechos fundamentales.

6. Sujetos procesales y sus auxiliares

El Título V del Libro Primero de esta iniciativa establece reglas generales que aplican a los distintos sujetos y auxiliares del proceso penal. En este Título se concentran algunas de las disposiciones más relevantes sobre las facultades y atribuciones, así como derechos y obligaciones que rigen para los mismos, sin que ello sea óbice para que en el resto del ordenamiento se regulen cuestiones especificas sobre su actuación.

Como sujetos procesales, se reconocen aquéllos que intervienen en el proceso penal, ya sea con carácter principal, o bien, con carácter eventual o accesorio, esto es, que se reconocen tan sólo como auxiliares.

Los intervinientes a quienes se les reconoce la calidad de sujetos procesales son:

- El imputado
- El defensor
- La víctima u ofendido y su asesor jurídico
- El Ministerio Público
- La policía
- El Tribunal

Los intervinientes reconocidos en calidad de sujetos procesales, a excepción de la policía, se reconocen como partes y, por consiguiente son los únicos que pueden llevar a cabo los actos propios de una parte procesal. Como auxiliares, el Código hace referencia a los consultores técnicos; aunque en se identifican otros, como

los peritos, los Servicios Previos al Juicio, los Centros de Justicia Alternativa y las autoridades penitenciarias

Sujetos procesales

Víctima u ofendido

La víctima u ofendido del delito a partir de la reforma constitucional de junio de 2008 adquiere un papel de la mayor relevancia en el proceso penal. Desde la Constitución en su artículo 20, apartado C se reconocen una serie de derechos que tienden a fortalecer su posición y participación en el proceso. En los hechos delictivos con mayor frecuencia acontece que la persona que resiente la conducta delictiva es a la vez titular del bien jurídico protegido por la norma; sin embargo, existen ocasiones en que esto no acontece así y, puede suceder que la persona respecto de la cual recae la acción delictiva no sea el titular del bien jurídico penalmente protegido[52]. Por ello, tratándose del caso en que ambas calidades coincidan en la misma persona, el Código se refiere a la víctima *u* ofendido equiparándolas, pero en aquéllos casos en que no sea así, el Código se refiere a la víctima o *a el* ofendido distinguiéndolas, tal cual lo hace el artículo 20 Constitucional en su apartado C que al respecto contempla los derechos de la víctima *o el* ofendido[53].

---

[52] vid. FÉLIX CÁRDENAS, Rodolfo. "Consideraciones en relación con las Garantías de la Víctima en el Procedimiento Penal Mexicano", en *Revista Criminalia,* año LXVII, No. 2 mayo-agosto 2002, Porrúa, México, p. 209 y *s*., En forma unánime la doctrina reconoce la distinción entre sujeto pasivo del delito y sujeto pasivo de la acción, siendo el primero el titular del bien jurídico penalmente protegido y, el segundo, quién reciente la acción típica, lo que implica no se titular del bien jurídico. Los conceptos de víctima y de ofendido son distintos, el primero se corresponde con el titular del bien jurídico penalmente protegido y, el segundo, con el sujeto pasivo de la acción que no tiene esa titularidad. En igual sentido, GARCÍA RAMÍREZ, Sergio. "Comentario al artículo 20 Constitucional" en, *Derechos del Pueblo Mexicano. México a través de sus Constituciones*, T. III, artículos 12-23, Porrúa, México 1994, p. 873. Del mismo autor *véase, El Nuevo Procedimiento Penal Mexicano. La reforma de 1993-1994,* Porrúa, México, 1994.p. 13.

[53] Al respecto vid. ampliamente FÉLIX CÁRDENAS, ob.cit. pp. 210 a 220 y, nota a pie 67, que refiere que, la equiparación de los conceptos de víctima y ofendido, que habría surgido con el inicio de vigencia de la reforma constitucional publicada el 3 de septiembre de ese año, en cuyo artículo

Tener clara ésta distinción, tiene trascendencia para el ejercicio de ciertos derechos ya que, sólo quién es víctima *u* ofendido puede, por ejemplo, constituirse como coadyuvante y nombrar un asesor jurídico; solicitar la reparación del daño e intervenir con tal carácter en juicio, entre otros. Mientras que, cuando la calidad de víctima y la calidad de ofendido no se reúnen en la misma persona, si bien éste último goza de una serie de derechos que le son reconocidos en el texto constitucional, solamente podrá acudir a juicio en calidad de testigo.

Por disposición constitucional, la víctima tiene el derecho de coadyuvar con el Ministerio Público desde la investigación y, para ello, no necesita sino acreditar su condición de víctima, pudiendo autorizar para su representación jurídica a profesionales del derecho pues en la actividad de investigación, e incluso en actos muy particulares –como por ejemplo, cuando el Ministerio Público decide no ejercitar acción penal–, la falta de conocimiento técnico de la víctima *u* ofendido no le permite comprender su alcance y cómo actuar frente a ellos. Distinto es, el derecho que tiene la víctima *u* ofendido de nombrar asesor jurídico para que le represente en los actos relacionados con la etapa intermedia y el juicio, lo cual debe hacer en el momento y plazo que el Código señala. El Código prevé la figura del asesor jurídico de la víctima para ello, quedando bajo su decisión designarlo. En caso que la víctima *u* ofendido no designe un asesor jurídico sus derechos estarán representados por el Ministerio Público.

Por ello, como parte fundamental de un sistema acusatorio se incorporan en el proceso figuras como el principio de justicia restaurativa cuyo fin es atender la

20 constitucional se hacía referencia a la víctima o el ofendido, lo que conllevó a referirlas como víctima *u* ofendido, desapareció con la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de septiembre de 2000 que entró en vigor a partir del 22 de marzo de 2001, en la que el Constituyente se refirió al respecto en su artículo 20 de la siguiente manera: Apartado B: De la víctima *o del* ofendido, dejando claro que se trataba de dos sujetos distintos.

esencia del conflicto derivado del hecho delictivo, con la consecuente participación y satisfacción de las víctimas u ofendidos. Como esa figura, se pueden encontrar otras en el código que revaloran el papel de las víctimas y cuya finalidad es que no sean simples espectadores del proceso penal, sino que realmente sientan que las soluciones penales que ofrece el Estado también atienden a la recuperación de sus bienes afectados. Sin duda, el Código además habrá de armonizarse con lo que establecen otras normas como la Ley General de Víctimas.

Imputado

El sujeto procesal por excelencia del proceso penal es el imputado por lo que la mayoría de las normas del Código precisamente se refieren a sus derechos y tratamiento en el transcurso del proceso. Por la relevancia de algunos de sus derechos se hace énfasis en ello mediante su inclusión en este Capítulo dedicado al imputado como sujeto procesal.

En este Código se utiliza de manera genérica la denominación de imputado a la persona que ha sido señalada por el Ministerio Público como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señale como delito. Sólo en algunas normas, que atienden a la situación procesal del imputado, se le denomina acusado o sentenciado. Lo anterior en el ánimo de ser congruentes con el lenguaje constitucional, y dejar a un lado denominaciones cuya utilidad pudiera ser más de carácter académico.

Se establece un catálogo de derechos del imputado que sin ser limitativo, enumera algunos de los más importantes como son el derecho a ser presumido inocente y ser tratado como tal, a la defensa y todo lo que ello implica, a tener acceso a los registros de investigación, a que se le reciban testigos y medios de prueba, a ser juzgado en tiempos razonables, a recibir asistencia de traductores e intérpretes cuando se requiera, a no ser expuesto a medios de comunicación

como culpable, a ser presentado ante autoridad competente inmediatamente después de la detención, entre otros.

Defensor

Si bien se reconoce en el imputado el derecho a la defensa material, uno de sus derechos esenciales es el relativo a contar con una defensa. Este derecho se traduce, entre otros, en el nombramiento de un defensor, que desde las reformas constitucionales de junio de 2008 en términos del artículo 20, apartado B, fracción VIII, además debe reunir ciertas cualidades como, *ser adecuada* y *ejercida por un profesional del derecho,* abogado o licenciado en derecho.

El derecho al nombramiento de un defensor puede ser ejercido desde la detención, momento en el cual se le hará saber al imputado el derecho que tiene a su nombramiento. El nombramiento puede recaer en el abogado o defensor de su confianza o en uno público. En este código se destierra la denominación de defensor de oficio que evoca al sistema inquisitivo en que son comunes las actuaciones *de oficio* por parte de las autoridades.

Para asegurar el cumplimiento de la norma constitucional que exige que el defensor sea un abogado, se exige que éste en el inicio de su intervención acredite su profesión mediante cédula profesional legalmente expedida.

Las reglas que se establecen en este Capítulo VI tienen como finalidad asegurar el ejercicio de una defensa adecuada o técnica en todo momento del proceso. La defensa técnica consiste en el derecho a ser asistido o defendido por un licenciado en derecho o abogado desde la primera actuación del procedimiento en que intervenga. Es, una derivación del derecho de defensa material que surge como consecuencia necesaria de la complejidad del proceso moderno, de su carácter eminentemente técnico-legal y de los intereses en juego. Su fundamento radica en la necesidad de garantizar lo más posible la igualdad de posiciones en el proceso

47



penal. Aunque igualar el poder de la organización estatal puesta al servicio de la persecución penal puede resultar imposible, la ley prevé una serie de mecanismos para mejorar la posición del imputado y garantizar una cierta *igualdad de armas*. El más importante de ellos es la defensa técnica, que permite al imputado contar con la asistencia necesaria cuando no posee conocimientos jurídicos suficientes o cuando, poseyéndolos, no pueda aplicarlos de forma idónea o adecuada.

En el Código se regula el caso de la renuncia y abandono del defensor, la posibilidad de intervención judicial para asegurar las capacidades técnicas de los defensores, la posibilidad de nombrar en todo momento a un defensor público, la forma de intervención en caso de defensores comunes, la imposibilidad del ejercicio de la defensa para quienes tienen conflicto de intereses y la posibilidad que el defensor tenga acceso a entrevistarse con el imputado o con otras personas, para lo cual incluso tendrá acceso al auxilio judicial.

El Código establece como principio básico del nuevo proceso penal, el derecho del imputado a formular los planteamientos y alegaciones que considere oportunos, así como a intervenir en todas las actuaciones judiciales y en las demás actuaciones del procedimiento, salvo las excepciones legales. Esto es lo que se conoce como defensa material. Asimismo, establece deberes e impone ciertos límites a la actividad de los órganos estatales que intervienen en la persecución penal y el enjuiciamiento, a fin de garantizar la intangibilidad del derecho de defensa del imputado, su dignidad y autonomía personal.

Ministerio Público

El Ministerio Público como sujeto procesal cuya función es la conducción de la investigación y la decisión sobre el ejercicio de la acción penal y una eventual acusación, debe guiar sus actuaciones por ciertos principios adicionales a los que rigen a todos los intervinientes, como son el deber de lealtad y el de objetividad.

48

En algunos códigos procesales de las entidades federativas estos principios se han confundido, por lo que en el Código se deja clara la distinción entre ambos, de tal manera que, la lealtad a la que está obligado el Ministerio Público se comprende como el deber que la información investigada sea veraz y, que el Ministerio Público no oculte a los demás intervinientes ningún elemento que pudiera ser favorable para la posición que ellos asumen; por su parte, la objetividad se refiere a que la investigación de la cual está a cargo el Ministerio Público debe referirse tanto a elementos de cargo como de descargo, lo cual lo obliga a que, si en el caso concreto observa que se actualiza un causal de sobreseimiento o de absolución deba actuar en consecuencia invocándolas.

En cuanto a sus obligaciones, el Código evita la *sobre regulación* de las funciones que se reconocen al Ministerio Público como acusador, ya que, reconociendo que la tradición inquisitiva en México se encuentra arraigada, bajo la misma el Ministerio Público ejerce algunas facultades *parajurisdiccionales* o policiales (como por ejemplo la posibilidad de que imponga cauciones para dejar en libertad a una persona) que no son propias de su intervención dentro de un proceso acusatorio, sino que son fuente de una alarmante corrupción. Por ello el Código, reconociendo el carácter de acusatorio en sus estructura, entre las atribuciones que se reconocen al Ministerio Público enumera en el Capítulo V, la recepción de denuncias, querellas o equivalente; la conducción y mando en la investigación de delitos; el dictado de medidas para impedir que se pierdan, destruyan o alteren medios de prueba; ordenar a la policía actos de investigación; hacer solicitudes al órgano jurisdiccional que impliquen actos de molestia; decidir sobre la aplicación de criterios de oportunidad; y promover la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias; entre otras, quitando viejas atribuciones propias de un inquisitivo que no encuentran sustento en un código de corte acusatorio.

Policía

En cuanto a la policía en su carácter de actor en el proceso penal, mucho se ha discutido sobre el papel que debe desempeñar y su relación con otros intervinientes del proceso, en especial con el Ministerio Público, así como entre distintos cuerpos policiales.

La policía como interviniente en el procedimiento penal tradicionalmente ha sido relegada, de tal manera que a pesar de ser el contacto más directo y con mayor cobertura con la ciudadanía ni siquiera se le han confiado las actuaciones básicas de conocimiento inmediato de hechos criminales. Incluso se le llega a negar el carácter de sujeto y se le confiere el de auxiliar, a pesar de que muchas normas del propio Código van dirigidas directamente a ellos, al margen de su relación con el Ministerio Público.

Con el fin de acentuar la relevancia de este actor procesal, en este Código se confiere a la policía la calidad de sujeto procesal, en el entendido que, su actividad es de enorme importancia en el acusatorio y siempre estará relacionada con el Ministerio Público; pero obviamente no se le reconocen los derechos de una parte procesal, como los del imputado y su defensa, o los de la víctima *u* ofendido y su asesor jurídico o los del tribunal, ya que la policía no puede ofrecer pruebas, interrogar en audiencia, alegar, etcétera.

Aunque en el Código no se pueden resolver problemas estructurales de las instituciones policiales, si resulta imperioso que se establezcan obligaciones básicas del nuevo e indispensable rol de la policía en el proceso penal, en particular, en la etapa de investigación e incluso en la propia etapa de juicio. Al igual que el resto de todos los actores del proceso penal además de clarificar sus atribuciones, se debe evitar la tentación de regular cuestiones que están fuera del

alcance de un código procesal. Esta cuestión es relevante sobre todo tratándose de la investigación.

Un sistema acusatorio presupone mayor flexibilidad para los actores que investigan, principalmente la policía bajo la supervisión jurídica del ministerio público. Por eso es necesario depurar normas sobre la actuación policial que sean estrictamente necesarias para el cumplimiento de funciones dentro del proceso penal. Así por ejemplo, las normas sobre el Informe Policial Homologado en realidad no son propias de un código procesal penal, de ahí que su contenido operativo corresponda a manuales y protocolos de investigación.

En este Código se hace la referencia genérica a *las policías*, con el fin de dejar al ámbito administrativo la distinción entre cuerpos policiales con funciones especificas en la normatividad del ramo. De tal manera que, el Código no hace referencia particular a las *policías preventivas*, *de investigación*, *científica*, *procesal*, etcétera, que pudieran constituirse también como intervinientes en el proceso penal, pues más allá que en ocasiones se suela utilizar distintos nombres para referir a la misma corporación, son las bases de su actuación en el acusatorio a las que debe atender el Código y no así, a regular dentro del mismo cuáles son las funciones que son propias a cada corporación policial.

Desde esa óptica, en este código se propone la enunciación de algunas obligaciones fundamentales de las policias como son la recepción de denuncias, la detención en flagrancia, realización de actos de investigación y en su caso solicitar a través del Ministerio Público las órdenes judiciales que se requieran, registrar la detención de personas, preservar el lugar de los hechos, entre otras; dejando a la legislación complementaria que se expida, defina a qué cuerpo policial corresponden.

51

Jueces y Magistrados

Como órganos jurisdiccionales a quienes se dirige el Código, se encuentran el Juez de Control, el Tribunal de Juicio y, el Tribunal de segunda instancia.

El Código no contempla como sujeto al Juez de Ejecución, en congruencia con la decisión que el procedimiento de ejecución de sanciones es materia de otra legislación.

De manera genérica, el Código hace referencia a *Tribunal* o *Tribunales*, cuando se trata de normas que genéricamente están destinadas a regular actos de órganos jurisdiccionales; y sólo en aquellos en que es un órgano jurisdiccional especifico es que se denomina al órgano jurisdiccional en particular.

Como atribuciones genéricas de los jueces se establecen, la resolución de asuntos sometidos a su consideración; la salvaguarda de derechos de los intervinientes en el proceso; el deber de guardar reserva en los asuntos relacionados con sus funciones; la atención de peticiones; entre otras.

Consultores técnicos

Como auxiliar del Ministerio Público y de la defensa se establece la figura del consultor técnico. Los consultores técnicos podrán intervenir a solicitud de las partes cuando consideren necesario ser asistidos por los mismos, sin que puedan tener una intervención directa en la audiencia de no ser el asesoramiento de la parte a la que asisten. Pueden fungir como consultores técnicos de las partes, sus peritos o prácticos.

Entre las finalidades de esta figura, está facilitar la comprensión de materias muy técnicas en las audiencias, de tal forma que el Ministerio Público y la defensa pueden ser asesoradas, por ejemplo, sobre la declaración de un perito en Juicio y

hacer accesibles lenguaje, conceptos o inconsistencias que permitan elevar la calidad del examen y contra examen de los peritos.

Otros intervinientes

Aun y cuando en el Titulo V del Código no se incluyen reglas específicas sobre otros actores del proceso penal, como son los Servicios Periciales, los Servicios Previos al Juicio, los Centros de Justicia Alterna y las autoridades penitenciarias, ello no implica que no cumplan una función esencial en la implementación de un sistema acusatorio.

El Código refiere a los mismos de manera genérica dentro de distintos apartados y, esto obedece a que, en un futuro es posible se detecten necesidades a cubrir que hoy no se han previsto y que, para el efecto, se requiera la generación de organismos que las operen. En esa lógica, tratar de hacer una enunciación exhaustiva de todos los actores o auxiliares institucionales que pueden llegar a intervenir en el proceso, restaría flexibilidad a la creación de nuevos organismos cuando se requiera, pues al no estar incluidos en el Título V de este Código, podría implicar que se vislumbraran fuera del contexto del funcionamiento del proceso penal.

Desde el punto de vista del Derecho Administrativo, es suficiente que en el Código procesal se señalen funciones y atribuciones del Estado, para fundamentar a su vez la expedición de legislación orgánica que cree órganos administrativos ubicados al interior de los distintos operadores del sistema de justicia penal (Procuradurías, Tribunales, Defensorías, Policías, entre otros).

De esta manera, se propone prescindir de una lista que pretenda ser exhaustiva de los auxiliares de proceso que hasta ahora se han identificado, y así evitar la sobrerregulación de carácter administrativo en el código procesal penal. Con ello,

además, se dejar abierta la posibilidad de creación de instituciones que atiendan necesidades emergentes del sistema.

Un claro ejemplo son los llamados Servicios Previos al Juicio, que a pesar de no estar específicamente previstos en la mayoría de los códigos procesales acusatorios de las entidades federativas, al dia de hoy se vislumbra la necesidad su implementación. En el caso de este Código, se optó por incluirlos expresamente, bajo el presupuesto de que será necesario emitir la regulación de los mismos en el ámbito orgánico-administrativo. Lo anterior no sólo por ser éste el espacio que corresponde, sino porque, las entidades federativas presentan distintas realidades, no sólo en términos de avances en esta materia, sino de estructura, recursos, etcétera.

En congruencia con lo anterior, la regulación de los Servicios Previos al Juicio, no está en el apartado de auxiliares del proceso, sino en el Capítulo V, del Título VI, del Libro Primero al referirse a las "Providencias Precautorias, Formas de Conducción del Imputado a Proceso y Medidas Cautelares". El objeto de los Servicios Previos al Juicio, es proporcionar a las partes información para que argumenten sobre la necesidad de imponer medidas cautelares, de modo que el imputado cumpla con sus obligaciones procesales.

En cuanto a los Servicios Periciales, el Código sigue la misma lógica de no *sobre regular* cuestiones administrativas e insertarlos como una Institución que se constituye como *Sujeto o Auxiliar del proceso*. Más bien, lo que se destaca a lo largo de todo el Código, es la importancia y funciones de los peritos, dejando siempre muy claro que lo que hará prueba es su declaración que rindan personalmente ante el Tribunal de Juicio. De esta manera se regula la actividad pericial como acto de investigación en el Capítulo de Investigación, pero también la declaración de los peritos dentro de las disposiciones generales sobre la prueba que se rinde en la etapa de juicio.

7. Formas de conducción del imputado al proceso, providencias precautorias y medidas cautelares

Orden de comparecencia

En el nuevo ordenamiento procesal único, se busca regular, en una sola sección, las providencias precautorias, las formas de conducción del imputado a proceso, es decir las órdenes de comparecencia y de aprehensión, la flagrancia y el caso urgente para, inmediatamente después, regular la cuestión de las medidas cautelares.

Todos los instrumentos señalados estarán disciplinados por los mismos principios de aplicación, a saber, existirá reserva de ley para su aplicación, la cual tendrá un carácter restrictivo e instrumental que se sujetará a revisiones periódicas y, salvo los casos expresamente señalados, deberán ser aplicados mediante resolución judicial.

En lo atinente a las providencias precautorias se pretende que tanto el Ministerio Público como la víctima u ofendido puedan solicitarlas durante la investigación para evitar la destrucción, alteración u ocultamiento de los indicios, la intimidación o amenaza o influencia a las víctimas, los testigos del hecho y para la protección de personas o bienes jurídicos. Se prevé asimismo que se pueda solicitar una providencia precautoria real para garantizar la reparación del daño. En términos generales se prevé que la imposición de las providencias precautorias sea una facultad exclusiva de los jueces que deberá ser adoptada en audiencia, escuchando previamente a la persona afectada y con observación de las reglas generales que son aplicables a las medidas cautelares. Se establece que la

duración de la provincia precautoria no puede ser mayor a dos meses, con la posibilidad de que se solicite una prórroga hasta por un mes más.

Con el objeto de prevenir la consumación irreparable de los riesgos que se pretenden evitar con la aplicación de la providencia precautoria, en casos excepcionales, cuando exista peligro en la demora, el Ministerio Público podrá proceder a su imposición y solicitar la celebración de una audiencia ante el juez de control, que tendrá lugar dentro de las dos horas siguientes, para efectos de que ratifique, modifique o cancele la providencia precautoria impuesta.

Por lo que hace a las formas de conducción del imputado al proceso, en este ordenamiento existirán cuatro diferentes formas. La primera es la comparecencia, misma que procede cuando se trate de delitos que sean sancionados con pena no privativa de la libertad, pena alternativa, o bien respecto de aquellos supuestos en los que aunque proceda pena privativa de la libertad se estime que la comparecencia del imputado no se verá demorada o dificultada. Para emitir una orden de comparecencia se requiere acreditar el supuesto material

Por lo que hace a las formas de conducción del imputado que implican detención, este código regula el título general jurídico que establece el artículo 16 constitucional, la orden de aprehensión, y sus dos excepciones, a saber, la flagrancia y el caso urgente.

La orden de aprehensión se regulará en los términos que prevé el artículo 16 constitucional y, por lo que hace a las dos excepciones, se establecerá la condición de inmediatez como requisito de validez de la detención por flagrancia, de forma tal que queden comprendidos los supuestos de flagrancia en estricto sentido, así como la cuasi flagrancia, las cuales son constitucionalmente admitidas. En lo atinente al caso urgente, se permitirá que las entidades

federativas conserven facultades residuales para decidir por qué delitos graves deberá ser procedente esta forma de detención.

En el CPPU se pretende que la regulación de las medidas cautelares, entre ellas la prisión preventiva, sea acorde con los principios constitucionales y con los instrumentos internacionales de derechos humanos que han sido ratificados por México y que ahora constituyen el bloque de regularidad constitucional, en virtud de la reforma de derechos humanos que fue publicada en junio de 2011.

La regulación de este componente de la reforma supone adoptar plenamente los principios de jurisdiccionalidad, instrumentalidad, excepcionalidad, proporcionalidad y subsidiariedad en la aplicación de las medidas cautelares. De acuerdo con estos principios la regla general –salvo las excepciones que prevé el propio Articulo 19 constitucional para el caso de la prisión preventiva oficiosa - es que la aplicación de medidas cautelares deberá determinarse únicamente cuando lo solicite la parte acusadora, siempre y cuando logre acreditar que existe riesgo de fuga, peligro de alteración de prueba, afectación inminente a la víctima u ofendido o la posibilidad de que el imputado cometa otro delito doloso. En caso de que no se den estas hipótesis la regla general debe ser el procesamiento en libertad, o bien, en atención al grado de riesgo, la aplicación de la medida cautelar menos restrictiva posible que resulte idónea para preservar la materia del proceso y la protección de la comunidad o los intervinientes.

Aunado a las medidas de carácter personal, también deben regularse las denominadas medidas cautelares de carácter real, es decir, aquellas que se aplican sobre las cosas.

Así pues, la aplicación de medidas cautelares, además de atender a las necesidades de cautela como criterio fundamental para su aplicación, debe

también suponer acreditar el supuesto material del delito que se está imputando, es decir, deben existir datos que establezcan la existencia del hecho y la probable autoría o participación del imputado. Cuando el juez, una vez que ha oído a las partes sobre este particular en la audiencia respectiva, estime que es necesario aplicar una medida cautelar, deberá hacer una apreciación de la información vertida por las partes y proceder a aplicar la medida que resulte idónea. La medida cautelar puede ser revisada en cualquier momento cuando surja nueva información que permita reconsiderar la medida impuesta, ya sea para imponer una más restrictiva o una que lo sea menos.

El momento procesal para aplicar la medida cautelar será una vez que se ha tomado la decisión de vincular a proceso al imputado, no obstante se podrá aplicar una providencia precautoria a solicitud del imputado, tanto en el plazo constitucional de 72 horas, como en el plazo de retención del Ministerio Público que puede ir de 48 a 96 horas. En caso de imputados detenidos, el título general jurídico que autoriza será la detención de la persona en la respectiva orden de aprehensión o la determinación de que ha sido legal la detención por flagrancia o caso urgente. En el curso de la retención que se determine cuando se actualicen estos supuestos, el Ministerio Público podrá determinar que no es necesaria la prisión preventiva y, conjuntamente con la defensa, concurrir ante el juez para que éste aplique una providencia precautoria.

En el CUPP también se regularán las funciones de las oficinas de los llamados servicios previos al juicio. Dichas unidades, que deberán ser instrumentadas en aquellas instituciones que permitan generar, entre las partes intervinientes y el público en general, una percepción de objetividad, y tendrán como función obtener toda la información necesaria que permita hacer una evaluación ponderada del riesgo que el imputado representa en términos de probabilidad de fuga, de la afectación de la víctima o de la comunidad. Una vez que han recopilado esta

información deberá ser distribuida entre las partes del proceso, para que éstas, a su vez, puedan estar en aptitud de proveer al juez con todos aquellos datos que sean necesarios para sustentar la aplicación de una medida cautelar idónea. Asimismo, para combatir la percepción de que el sistema es poroso y permite la impunidad, las oficinas de servicios previos al juicio estarán facultadas para hacer una supervisión puntual de las medidas cautelares impuestas por el juez y alertar a las agencias encargadas de hacer cumplir la ley cuando los imputados dejen de cumplir con sus obligaciones procesales.

De acuerdo a las buenas prácticas que han sido establecidas por los Códigos Estatales ya aprobados, en el CPPU se establecerán los 12 distintos tipos de medidas que es posible aplicar para que los imputados cumplan con sus obligaciones procesales, a saber, entre otras, la garantía económica, la prohibición de concurrir a determinados lugares, la prohibición de portar armas, la obligación de sujetarse la vigilancia de la autoridad, la separación del domicilio e incluso la prisión preventiva como la medida más grave.

(TEMAS DEL LIBRO SEGUNDO)

Respecto al contenido del Libro Segundo, regula lo que constituye propiamente el proceso penal. A manera de síntesis se compone de cuatro títulos, cada uno dirigido a determinada fase del proceso.

El Título I regula las formas anticipadas de terminación del proceso, distinguiendo entre acuerdos reparatorios y suspensión condicional del proceso. El Título II reglamenta el procedimiento ordinario en todas sus fases. En primer lugar, establece cuáles son las etapas del procedimiento, a saber: investigación, etapa intermedia, y etapa de juicio; y regula las formas y condiciones de cada una de ellas.

59

En la etapa de investigación, establece todas las disposiciones que la regulan, las formas de inicio, las actuaciones que derivan del conocimiento de los hechos delictuosos y las formas de terminación de la investigación. De manera destacada, regula lo que es y cómo operan los datos de prueba, medios de prueba y prueba; los actos de investigación y la prueba anticipada. Asimismo, la solicitud y desarrollo de la audiencia inicial y cómo se conducirá el resto de la investigación hasta su cierre.

En seguida, regula la etapa intermedia y distingue entre su objeto, la fase escrita y la fase oral.

A continuación, desarrolla la etapa del juicio, en cuanto a disposiciones previas, principios, dirección y disciplina, disposiciones generales sobre la prueba testimonial, pericial, declaraciones del acusado, documentales, materiales y otros medios de prueba; el desarrollo de la audiencia de debate y la deliberación, fallo y sentencia.

Por último, regula los ajustes en cuanto al procedimiento ordinario tratándose de personas inimputables.

8. Formas anticipadas de terminación del proceso

Desde su inclusión en los Códigos Procesales Modernos, las formas anticipadas de terminación del proceso se han visualizado como beneficios para la persona del imputado y, bajo este contexto, suponen una desprotección a los derechos procesales de la víctima de manera que, paulatinamente, se han ido reduciendo

60



en número, de tal forma que, de continuar esa dinámica, se podría llegar al desuso de las figuras jurídicas que regulan la terminación anticipada del proceso y la solución del conflicto penal por una vía distinta al Juicio, con toda su complejidad.

Desafortunadamente, esta tendencia se fortalecido a partir de una visión parcializada de la reforma constitucional del 2008, específicamente del artículo 20, apartado A, fracción VII, en donde se expone que la terminación anticipada del proceso prospera siempre y cuando no exista oposición del inculpado. Sin embargo, del apartado C del mismo precepto, deriva que, las figuras reguladoras de los casos de terminación anticipada del proceso, jamás pueden prosperar al margen de los derechos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano ha considerado para las víctimas en un proceso penal.

Este aparente conflicto se diluye cuando en el Código se prevé que los acuerdos reparatorios sean concebidos como un pacto informado, libre y equilibrado entre víctima u ofendido e imputado formalmente, sancionado por el Juez. Por otro lado, la procedencia en la suspensión condicional del proceso, también está sujeta a la oposición fundada de la víctima, y en los mismos términos se acepta la posibilidad de hacer ciertas concesiones en el procedimiento abreviado. Aunado a lo anterior, este Código también limita las hipótesis en las que pueden aplicarse las formas anticipadas de terminación del proceso, pero sin extinguir la posibilidad de beneficiarse en mayor medida de sus efectos descongestionantes directos o indirectos, a la vez de proponer la solución del conflicto penal bajo racionalidades distintas a las de un juicio ordinario.

Bajo estas reflexiones, es que este Código incorpora, la necesaria intervención de personal de las procuradurías, especializado en medios alternos en la generación de los acuerdos; la observación del Juez desde un punto de vista formal y siempre en tutela de los derechos fundamentales y, en todo caso, un sometimiento a los

61

principios de voluntariedad, confidencialidad, flexibilidad, neutralidad, imparcialidad, equidad, legalidad, honestidad y proporcionalidad.

Por naturaleza, las Formas Anticipadas de Terminación del Proceso, culminan con una decisión de sobreseimiento dictada por el Juez de Control. En las mismas, a diferencia de lo que acontece con los procedimiento especiales, el Juez no dicta una sentencia en que se absuelva o se condene, como es el caso del procedimiento abreviado, de ahí que éste último no sea tratado en este apartado, pues contrario a los acuerdos reparatorios y a la suspensión condicional del proceso, en el mismo el Juez de Control si dicta una sentencia teniendo por acreditado el delito materia de acusación y declarando la responsabilidad penal del imputado.

Acuerdos reparatorios.

Al tenor de lo anterior, el acuerdo reparatorio es en sí un convenio entre la víctima u ofendido y el imputado que una vez sancionado por el Juez de Control y cumplido en sus términos, tiene como efecto la conclusión del procedimiento. Es importante destacar que la actividad del órgano jurisdiccional en la audiencia respectiva se constriñe a verificar la legalidad del acuerdo y los principios de voluntariedad, confidencialidad, flexibilidad, neutralidad, imparcialidad, equidad, legalidad, honestidad y proporcionalidad.

Respecto a su procedencia, esta figura posibilita una solución alterna en los siguientes casos:

I.- Delitos cometidos por culpa;

II.- En los que proceda el perdón de la víctima u ofendido; y

III.- Delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas

62

Quedando expresamente exceptuados los casos que se sigan por delitos en contra de la libertad y seguridad sexuales y el normal desarrollo psicosexual, violencia familiar y los delitos cometidos por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas y los realizados por sujetos que pertenezcan a alguna asociación delictuosa u organización criminal. Tampoco procederán los acuerdos reparatorios en los casos en que el imputado haya celebrado anteriormente otros acuerdos por hechos de la misma naturaleza; quedan libres de esta excepción, los casos relativos a delitos culposos cometidos sin el uso de sustancias tóxicas.

Finalmente, de las experiencias de la entidades federativas en las cuales se encuentra vigente la reforma procesal penal y con el fin de garantizar la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto surgido como consecuencia del delito, para contribuir a restaurar la armonía social entre sus protagonistas, se dispone en este Código que en el proceso de negociación, mediación o conciliación de las partes, deberá participar personal especializado en métodos alternos a la solución del conflicto.

Suspensión Condicional del Proceso

Con el objetivo de contribuir de igual manera a garantizar una respuesta justa y efectiva ante la comisión de un delito y entendiendo que no necesariamente un juicio o una sentencia puede lograr de forma integral ser la solución a la pluralidad de circunstancias que se presentan en el ámbito penal, la posibilidad de que en ciertos casos se pueda poner a prueba al imputado a fin de que cumpla con ciertas condiciones y genere un plan de reparación del daño, con el incentivo de que en caso de cumplirlas se terminará el proceso, es una forma no solo de

racionalizar los recursos del Estado sino de contribuir a una solución calidad tanto para la víctima como para el imputado.

En este sentido, la suspensión condicional del proceso es el planteamiento formulado por el Ministerio Público o el imputado a través de su defensor que contiene un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento a una o varias de las condiciones que refiere este Código, que justifiquen, una efectiva tutela de los derechos procesales de la víctima y que en caso de cumplirse, permite la extinción de la acción penal.

Su procedencia se limita, a los casos en que el auto de vinculación a proceso se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena no exceda de cinco años, el imputado no haya sido condenado por delitos dolosos, no tenga o haya tenido otro proceso bajo suspensión condicional y no exista oposición fundada del Ministerio Público o de la víctima *u* ofendido.

9. Procedimiento ordinario

Al establecerse a nivel constitucional un sistema distinto de enjuiciamiento penal que plantea un modelo acusatorio y adversarial a partir de audiencias públicas y orales, el cambio en sí obliga a generar una dinámica diferente dentro de las etapas del procedimiento bajo una lógica que armonice con la forma de tramitar el mismo. Lógica que, necesariamente, imposibilita el plantear esquemas similares a los del procedimiento tradicional-escrito que se abandona, ya que sería un tanto absurdo pretender cumplir con los principios y normas establecidas en el artículo 20 constitucional a partir de su reforma de 18 de junio de 2008, y consolidar la reforma procesal penal siguiendo las mismas reglas de lo que se ha dejado atrás.

64

De esta manera, el Código en estricto apego a los objetivos planeados en la citada reforma constitucional y, atento a la dinámica de un modelo acusatorio y adversarial que se ha impuesto, establece de forma clara tres etapas del proceso.

La primera, relativa a **la investigación**, en la cual por regla general se obtiene toda la información necesaria que en su momento se podrá desahogar en juicio; es decir, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal y la eventual acusación contra el imputado.

Abarca, desde la presentación de la denuncia, querella o su equivalente y se agota en cada caso una vez concluido el plazo que conceda el Juez de Control para su finalización antes de la acusación, el sobreseimiento o la decisión de algún medio alternativo de solución de controversias. Es importante destacar, que en dicha etapa se pueden identificar dos fases al interior de la investigación. **La inicial,** que comprende desde la presentación de la denuncia, querella o su equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de Control y, **la complementaria**, que va desde el auto de vinculación a proceso y se agota una vez concluido el plazo que conceda el Juez de Control para su conclusión antes de la acusación, el sobreseimiento o la decisión de algún medio alternativo de solución de controversias.

No obstante, si bien se contemplan esos dos momentos en los cuales se desarrolla la investigación, se deja en claro que la misma no se interrumpe o se suspende durante el tiempo en que se lleva a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión, o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión, ni tampoco el Ministerio Público pierde su dirección cediéndosela al juez, puesto que la acción penal en un sistema acusatorio se extiende en el tiempo.

65

La segunda es la **etapa intermedia**, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura a juicio. Es en ella en donde se lleva a cabo el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio.

Y finalmente, **la tercera,** que es la **etapa de juicio,** en donde se decidirán las cuestiones esenciales del proceso sobre la base de la acusación, asegurando la concreción de los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, contradicción y continuidad. Audiencia en la cual se resolverá en definitiva sobre el caso, se desahogarán las pruebas para la decisión final y el momento en el cual se da cabal cumplimiento al derecho de todo imputado: un juicio oral y público en el cual pueda contradecir de viva voz las pruebas del Ministerio Público.

Investigación

A más de cinco años de verificar experiencias nacionales, punto medular para la consolidación de la reforma procesal en nuestro país es la investigación de los delitos y la eficacia de ésta, ya que si bien, la capacidad de respuesta de las instituciones del Ministerio Público en la mayoría de las entidades que operan el sistema superan las prácticas bajo el esquema tradicional-escrito, la investigación criminal no ha sido el rubro a seguir, puesto que gran porcentaje de las determinaciones corresponden a decisiones previas a la judicialización del caso o a la justicia alternativa.

Independientemente de lo anterior, las deficiencias institucionales en México y un procedimiento tradicional-escrito que privilegia la lógica de la tramitación y no la de una investigación metodológica y la forma sobre el fondo, ha generado que ésta sea exigua, poco eficiente y carente de eficacia, ya que sumado a lo anterior:

66

1. La cultura de la detención sobre la cual muchas veces se sostiene nuestro sistema de justicia.
2. La confesión como punto de partida de la investigación.
3. Las pocas exigencias que plantea un sistema escrito, pues éste descansa sobre prueba preconstituida.
4. Las reglas tasadas en torno a la prueba.
5. La fe pública del Ministerio Público.
6. El exceso de formalismos para la obtención de información y desahogo de prueba.
7. El no existir libertad probatoria y,
8. La poca claridad en la definición de roles entre ministerios públicos y policías.

Ha desembocado en lo que actualmente es: "Si no se detiene al delincuente en flagrancia, pocas posibilidades existen que, a través de una investigación profesional y científica se pueda enjuiciar a éste".

No obstante, si bien es primordial fortalecer la policía investigadora, diferenciándola claramente de la de prevención, incentivar su profesionalización mediante la capacitación permanente, evaluación periódica y dignificación de las condiciones laborales, fortalecer los servicios periciales, la constante capacitación y preparación de Ministerios Públicos y la implantación de modelos de gestión que surjan a consecuencia de una reingeniería institucional; un Código Procesal Penal que evite formulismos innecesarios; que ubique en protocolos y manuales la manera de llevar a cabo la investigación y, que incentive la calidad y creatividad en la investigación en base a la libertad probatoria es la respuesta en el plan normativo.

67

Así, el Código establece una investigación completamente diferente a la averiguación previa del sistema tradicional que México ha tenido desde principios de siglo. La averiguación previa desapareció con la reforma constitucional de 18 de junio de 2008 por tratarse de una investigación propia de un sistema mixto bajo la cual, el Ministerio Público practicaba y recibía pruebas, lo que es contrario a los principios del sistema del sistema acusatorio que se recogen en la mencionada reforma.

A diferencia de lo que ocurre con la averiguación previa, la cual es prácticamente una *cuasi instrucción* en que una de las partes *pre constituyen* la prueba que posteriormente era avalada por el juez; la investigación en el sistema acusatorio sólo está orientada a la obtención de información y medios de prueba que, para poder ser valorados desde el punto de vista de su resultado, deben ser desahogados y sometidos a un control de contradicción en la audiencia de juicio oral frente a jueces imparciales.

Teniendo en cuenta esta importante salvaguarda, la investigación debe ser libre, pero disciplinada por el principio de libertad probatoria, por lo que cualquier elemento que sea útil para el esclarecimiento de los hechos y haya sido obtenido sin vulnerar derechos fundamentales, puede ser utilizado, aun y cuando su procedimiento o regulación no se contenga de forma expresa en el Código.

La investigación podrá iniciarse por denuncia, por querella o por su equivalente cuando la ley lo exija. El Ministerio Público y la policía están obligados a proceder sin mayores requisitos a la investigación de los hechos que la ley señale como delitos de que tengan noticia. En este sentido, inmediatamente que el Ministerio Público, la policía o los funcionarios encargados de practicar en su auxilio de actos de investigación, tengan conocimiento de la probable existencia de un delito que deba perseguirse de oficio, dictarán todas las medidas y providencias necesarias para: proporcionar seguridad y auxilio a las víctimas y testigos; impedir que se

pierdan, destruyan o alteren los indicios, objetos, instrumentos o productos del delito; saber qué personas fueron testigos; evitar que el delito se siga cometiendo; y en general, impedir que se dificulte la investigación, procediendo a la detención de los que intervinieron en su comisión en los casos de delito flagrante y su registro inmediato.

Ahora bien, respecto su objetivo primordial que se enfoca directamente a la obtención de indicios para el esclarecimiento de los hechos, se regula de forma tal que se incluye como un procedimiento de obtención libre de la información no sujeta a formalismos y orientada a la obtención de resultados para el esclarecimiento de los hechos.

Un componente que en definitiva transforma la manera en que se desarrolla la investigación en el Código, es que permite que el Ministerio Público articule una política de persecución penal de naturaleza estratégica. De lo que se trata es que a partir de un análisis de la información de cada uno de los casos, se puedan determinar, desde una perspectiva que se oriente al resultado, las posibilidades de éxito que tiene la persecución penal. Ello permite que se establezca una metodología de priorización en la investigación para evitar el enorme volumen de casos, muchos de los cuales, no podrán esclarecerse por la falta de información y, la inefectividad implicaría iniciar diligencias de investigación, que eventualmente serían obstáculos para la tramitación de aquellos otros asuntos que tienen buenas oportunidades de ser perseguidos con resultados. Las ideas centrales para lograr lo anterior, que inspiran la investigación son: flexibilidad y desformalización.

Es por lo anterior, que se define de forma nítida la dinámica que de cara a un sistema acusatorio, que implica la coordinación que dentro de la investigación deben tener el Ministerio Público y las policías. Al respecto, y entendiendo que el

concepto acusatorio establece una clara definición de las funciones de los actores dentro del proceso, se puede concluir que:

1. Las policías serán quienes investiguen de forma material, es decir, recopilarán a través de actos de investigación la información que sustenta la propia investigación, a partir de una metodología científica y de operación; y

2. El Ministerio Público será quien dirija la investigación, es decir, el asesor jurídico de la misma, sin que tenga que estar presente en los actos de investigación o participar activamente en los mismos.

Además, si bien es importante y necesario establecer estándares de operación y metodología en la investigación, a fin de generar una constante de calidad y solidez en la misma; lo relativo a planes, operación, técnicas y cadena de custodia *lato sensu*, no se contienen dentro del Código, ya que son propias de reglamentos, manuales o protocolos, bajo la lógica del propio sistema acusatorio que como se ha mencionado, alude a la libertad probatoria, a la libre valoración de la prueba e identifica a la Audiencia de Juicio como el momento de mayor importancia durante el proceso.

Lo anterior, con el objetivo de no generar confusión en cuanto a temas relacionados con prueba preconstituida, prueba tasada o producir consecuencias procesales de ilicitud bajo el entendimiento del sistema tradicional. Por tanto, solo se deben de incluir aquellos actos de investigación en los cuales se requiera control judicial por constituir actos de molestia o, en los supuestos en que la flagrancia o en el marco de la investigación de un delito en concreto, se permita a la policía llevar a cabo inspecciones de personas o vehículos.

70

Al respecto, el Código desarrolla los postulados para que las policías, al realizar actos de investigación, verifiquen, para garantizar la calidad en la información y no para validar su actuación procesalmente:

a) La legalidad del acto de investigación (previo control judicial cuando se lleven a cabo actos de molestia);

b) Pertinencia y utilidad;

c) El aviso inmediato al Ministerio Público que dirige la investigación sin la necesidad de que en todos los casos haya una orden expresa y previa; y

d) El registro del acto de investigación.

En todo momento, los actos de investigación deben ser registrados y en ellos, en su caso, el juez de control funciona como autoridad ordenadora y nunca como ejecutora.

Por otro lado, respecto a la evidencia asegurada es primordial establecer un sistema de control y registro que se aplica al indicio u objeto, instrumento o producto del hecho delictuoso, desde su localización, descubrimiento o aportación, hasta que la autoridad competente ordene su conclusión, en los términos de los lineamientos manuales, protocolos y demás disposiciones aplicables que emitan las autoridades federales o de las entidades federativas, que se define como cadena de custodia, misma que es responsabilidad de los servidores públicos que entren en contacto con los indicios y su debida ejecución deberá ser verificada por el Ministerio Público.

Es así que el Código establece que, durante la investigación[54], en cualquiera de sus fases:

a) El Ministerio Público puede emitir actos de molestia, mismos que están sujetos a la evaluación o a la autorización del juez de control.

b) Las partes pueden practicar, excepcionalmente, pruebas anticipadas ante el juez de control. No constituye prueba anticipada la "confesión del imputado videograbada" o la prueba preconstituida aún y cuando se argumente que giran en torno a evitar la revictimización o poner en peligro a víctimas, testigos, policías o miembros de las fuerzas armadas.

c) El Ministerio Público puede asegurar bienes, objetos y productos del delito en investigación.

d) El Ministerio Público puede solicitar y obtener, del juez de control, providencias precautorias para evitar la destrucción, alteración u ocultamiento de los indicios, la intimidación o amenaza o influencia a las víctimas, los testigos del hecho o para la protección de personas o bienes jurídicos.

e) El Ministerio Público puede solicitar y obtener, del juez de control, autorización para la realización de actos de investigación que constituyan molestia, así como técnicas especiales de investigación tales como cateos, intervención de comunicaciones, obtención de fluidos, exhumación de cadáveres y otras; así como ordenar, sin

[54]NADER KURI, Jorge. *Consideraciones sobre la Implementación de la Reforma Penal 2008*. Colección Jurídica, Universidad La Salle y Centro de Análisis y Desarrollo del Derecho, Número 1, México, 2009.

necesidad de autorización, otras técnicas tales como infiltración de agentes, entregas controladas, revisión de personas y otras, todo ello en términos de los reglamentos y lineamientos de objetivos, metodología y alcances de dichas herramientas, a fin de generar certeza en el producto de la investigación y en los propios policías, debiéndose observar en todos los casos, las salvaguardas necesarias para evitar abusos.,

f) Las partes pueden plantear alguna salida alterna al proceso penal, en su caso, con supervisión judicial.

En particular, durante la investigación inicial, el Ministerio Público podrá: a) detener o retener al imputado hasta por 48 horas o 96 en casos de delincuencia organizada y, b) abstenerse, suspender o limitar el ejercicio de la acción penal mediante la aplicación de un criterio de oportunidad.

Durante la etapa inicial, y sin que la investigación se entienda suspendida, el Ministerio Público puede: a) solicitar el libramiento de órdenes de aprehensión o de comparecencia; b) formular la imputación; c) solicitar la aplicación de alguna medida cautelar, particularmente la prisión preventiva; d) solicitar el dictado de un auto de vinculación a proceso y, e) solicitar un plazo para complementar su investigación.

Lo anterior, porque el concepto de acción penal y su ejercicio es distinto al que se concibe en el sistema tradicional.

Por tanto, no se puede establecer que el Ministerio Público ejerce acción penal en un solo acto –como pudiera ser la imputación o la solicitud de vinculación a proceso– durante la audiencia inicial. En este sentido, los conceptos, objetivos y contenido de la imputación, vinculación a proceso y acusación, deben entenderse como sigue:

73

a) **Imputación:** El Ministerio Público hace del conocimiento al imputado el hecho en concreto por el cual se le investiga, la calificación jurídica del mismo, su grado de participación o intervención y la mención de las personas que deponen en su contra con el fin de que se pueda generar una adecuada defensa a partir del principio de congruencia.

b) **Vinculación a proceso:** Es la petición que realiza el Ministerio Público de forma argumentativa y con base en los antecedentes, considerando que el hecho por el cual imputó, la ley lo señala como delito y que el imputado participó o intervino en él de forma probable.

c) **Acusación:** Posterior al cierre de investigación, el Ministerio Público considera que tiene información suficiente dentro de la investigación para ir a juicio y por tanto formaliza dicha pretensión acusando. Así, con la presentación de la acusación se da inicio a la etapa intermedia, estableciéndose –de forma enunciativa al menos– el hecho que investigó y que será el que defina la calificación jurídica, medios de prueba que solicita sean admitidos para desahogarse en juicio, la pena y la reparación del daño en concreto.

Un elemento esencial del sistema acusatorio, es la igualdad de oportunidades para las partes, lo que supone que desde la detención, al momento de rendir cualquier declaración y de manera muy importante en la imputación, se podrá hacer efectiva la defensa adecuada.

Finalmente, si bien el Ministerio Público debe ejercer la acción penal en todos los casos en que sea procedente, con arreglo a las disposiciones de la ley. Existen diversas formas de terminación de la investigación que se definen de forma expresa en el Código. Así, el Ministerio Público podrá aplicar el criterio de oportunidad en los casos previstos por las disposiciones legales aplicables o no iniciar investigación cuando resulte evidente que no hay conducta que perseguir. Dichas posibilidades se contemplan dentro de la Facultad de Abstenerse de

Investigar, el Archivo Temporal, los casos en los que operan los criterios de oportunidad o el propio No Ejercicio de la Acción Penal.

Prueba

Datos de Prueba, Medios de Prueba y Prueba

El Código distingue entre la información obtenida de los actos de investigación y registrados en la carpeta de investigación, misma que puede ser usada para la toma de decisiones preliminares y no necesita desahogo, y aquella que se desahoga en el juicio oral para determinar la responsabilidad penal y, en su caso, la individualización de la pena.

Durante la investigación inicial, el Ministerio Público se allegará de los datos de prueba aptos para dar sustento al ejercicio o no de la acción penal, a las medidas cautelares, a la solicitud de orden de aprehensión, a la justificación de técnicas de investigación o a la acusación, y deberá recibir todos los elementos de prueba que ofrezcan o aporten la víctima u ofendido, el inculpado o su defensor. Estos datos no tendrán ningún efecto jurídico en el juicio oral al no ser considerados como prueba, salvo que se trate de prueba anticipada.

Durante la investigación complementaria, el Ministerio Público y, las partes en especial, se allegarán de los datos y elementos de prueba requeridos para la demostración de los extremos de la acusación o de las hipótesis de la defensa.

Los datos y las pruebas deberán ser obtenidos, producidos y reproducidos por medios lícitos. Por tanto, no tendrá valor alguno la prueba obtenida mediante torturas, amenazas o violación de los derechos humanos.

En todos los casos, el juez asignará libremente el valor correspondiente a cada uno de los datos y pruebas, con aplicación estricta de las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, a la luz de la sana

75

crítica, debiendo justificar adecuadamente el valor otorgado a los datos y pruebas y, con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios, deberá explicar las razones que le permiten arribar al hecho que se considere probado.

Prueba Anticipada

Finalmente, por lo que respecta a la Prueba Anticipada, es necesario y de primordial importancia no generar supuestos que desvirtúen su objetivo o la conviertan en prueba preconstituida, esto en base a la inmediación y contradicción que como principios rectores deben observase a cabalidad en la audiencia de juicio.

Al respecto, el Código establece reglas tendientes a garantizar su carácter excepcional, evitando por ejemplo, que se considere como objeto de prueba anticipada la declaración del testigo, perito u oficial de la policía que simplemente manifestaren la imposibilidad de concurrir a la audiencia de debate del juicio oral, por tener que ausentarse a lugar lejano, vivir en el extranjero o existir motivo que hiciere temer su muerte, su incapacidad física o mental que le impidiese declarar, su estado de persona en condición de vulnerabilidad o algún otro obstáculo análogo. Esto resultaría extraordinariamente abierto, teniendo como consecuencia que algo que se concibió con un *status excepcional*; en los hechos se convierta en regla, ya que lo que se persigue en el proceso acusatorio es que toda persona a la que le conste un hecho acuda a la audiencia de juicio oral y aporte al tribunal de juicio lo que le consta bajo los filtros de la contradicción, no sólo para garantizar el derecho de defensa, sino porque esto ayudará al juez tomar una mejor decisión sobre la veracidad o no del testimonio que presenció.

76

Por tanto el Código dispone que hasta antes de la celebración de la audiencia de juicio se podrá practicar anticipadamente cualquier medio de prueba pertinente, siempre que se satisfagan los siguientes requisitos:

I. Que sea practicada ante el Juez de Control;
II. Que sea solicitada por alguna de las partes, quienes deberán expresar las razones por las cuales el acto se debe realizar con anticipación a la audiencia de juicio a la que se pretende desahogar y se torna indispensable en virtud de que se estime probable que algún testigo no podrá concurrir a la audiencia de juicio, por vivir en el extranjero, por existir motivo que hiciere temer su muerte, su incapacidad física o mental que le impidiese declarar o algún otro obstáculo semejante;
III. Que sea por motivos fundados y de extrema necesidad y para evitar la pérdida o alteración del medio probatorio; y
IV. Que se practique en audiencia y en cumplimiento de las reglas previstas para la práctica de pruebas en el juicio.

Siendo condición final, que si el obstáculo que dio lugar a la práctica del anticipo de prueba no existiera para la fecha de la audiencia de juicio, se desahogará el medio de prueba correspondiente en la misma.

La prueba anticipada nunca puede practicarse por el Tribunal de Juicio, éste debe permanecer ajeno a todo medio de prueba antes del juicio, pues de lo contario se contaminaría con su conocimiento. Por ello, en caso que después de dictado el auto de apertura a juicio oral y antes que inicie la celebración del Juicio, sea necesario la práctica de una prueba anticipada respecto de aquéllas que hubieren sido admitidas en la etapa intermedia, la parte interesada deberá acudir ante el Juez de Control en turno solicitando la misma para que, con asistencia de las partes ésta tenga lugar.

77

Criterios de oportunidad

El Código se desarrolla a partir del presupuesto de que, en el ejercicio de la acción penal, el Ministerio Público deberá observar siempre el principio de legalidad; por lo que, si en el caso concreto se reúnen los requisitos legales para ello, debe ejercer la acción penal correspondiente para cumplir con los objetivos del proceso; en caso contrario, debe abstenerse de hacerlo.

No obstante, por razones estrictamente de política criminal en cuanto a la persecución penal, en el ejercicio de esta potestad, el Ministerio Público podrá aplicar, de manera excepcional, criterios de oportunidad para prescindir total o parcialmente de la misma, suspenderla, o limitarla sólo a ciertos hechos o a determinadas personas que participaron en su realización[55].

Lo anterior, siempre y cuando se trate de los supuestos y se cumplan con las condiciones que fije la ley, particularmente de los lineamientos o directrices de las distintas procuradurías o fiscalías que contengan de forma taxativa los supuestos de procedencia y para la toma de decisiones sobre el particular, por lo que, en este sentido, se deja una facultad residual a las entidades federativas y a la autoridad federal.

En este sentido la iniciativa plantea que el Ministerio Público deberá ejercer la acción penal en todos los casos en que sea procedente, con arreglo a las disposiciones de la ley. No obstante, siempre que esté satisfecha la reparación del daño, podrá prescindir total o parcialmente, de la persecución penal, limitarla a alguno o varios hechos delictivos o a alguna de las personas que participaron en los mismos en los casos que establezcan las disposiciones normativas de la

[55]NADER KURI, Jorge. *El principio de oportunidad en el ejercicio de la acción penal.* Revista Académica de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, año VI, número 12, enero de 2009. pp. 39 a 50.

Federación o de las entidades federativas, según corresponda, las que en todo caso deberán observar lo siguiente:

I. Se trate de un hecho socialmente insignificante o de mínima o exigua culpabilidad del imputado, salvo que afecte gravemente un interés público o lo haya cometido un servidor público en el ejercicio de su cargo o con motivo de él.

No podrá aplicarse el principio de oportunidad en los casos de delitos contra el libre desarrollo de la personalidad y de violencia familiar, por afectar gravemente el interés público.

II. Se trate de delitos que sean de investigación compleja, con independencia que ameriten prisión preventiva oficiosa, siempre y cuando el imputado colabore eficazmente con la misma y brinde información esencial para evitar que continúe el delito o se perpetren otros, ayude a esclarecer el hecho investigado u otros conexos o proporcione información útil para probar la participación de otros imputados, y siempre que, en todos los casos, su participación sea menos grave que la de estos últimos o los hechos delictivos por el cometido resulten considerablemente más leves que aquellos cuya persecución facilita o cuya continuación evita;

III. El imputado haya sufrido, a consecuencia del hecho, daño físico o psicológico grave que torne desproporcionada la aplicación de una pena;

IV. La pena o medida de seguridad que pueda imponerse por el hecho de cuya persecución se prescinde, carezca de importancia en consideración a la pena o medida de seguridad ya impuesta, o la que se le impuso en un proceso tramitado en otro fuero.

El agente del Ministerio Público aplicará los criterios de oportunidad sobre la base de razones objetivas y sin discriminación, valorando las pautas descritas en cada

caso individual, según los criterios generales que para tal efecto haya dictado el titular del Ministerio Público.

Con lo anterior, sobre las bases antes señaladas, se reconoce que la Federación, y las entidades federativas tendrán *competencia residual* para establecer los supuestos concretos de procedencia y para la aplicación de los criterios de oportunidad pues ello depende básica y esencialmente de la política de persecución penal que interese a cada sociedad en especial.

En cuanto al proceso penal, éste se regirá por el principio de legalidad, por lo que el juzgador no podrá aplicar criterios de oportunidad en el ejercicio de su función.

Audiencia inicial

Por su incidencia numérica, composición material y diversidad de supuestos, podemos afirmar que la audiencia inicial es uno de los actos procesales protagónicos en el nuevo sistema de justicia penal[56].

En el Código, la audiencia inicial respeta los principios constitucionales de publicidad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración.

La audiencia se ubica en un Capítulo específico en el que se definen con claridad, su naturaleza, objetivos, plazos, intervinientes y la actividad a realizar en este acto procesal sin que se incurra en una sobre regulación, con el propósito de evitar que la ley tome la forma de un manual operativo.

En esta audiencia se realizará el control de detención, si correspondiera; se formulará la imputación, se dará la oportunidad de declarar al imputado, se

[56] GUTIÉRREZ MUÑOZ, Jorge Arturo. "La investigación y la audiencia inicial en el procedimiento penal ordinario acusatorio y oral" en, *Nova Iustitia*, Revista digital de la Reforma Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Año I, No. 2, México, 2013, p. 110.

resolverá sobre las solicitudes de vinculación a proceso y medidas cautelares, y se definirá el plazo para el cierre de la investigación.

Cuando se encuentra justificada la flagrancia o el caso urgente, el juez de control ratificará la detención del imputado, de acuerdo a lo dispuesto por el séptimo párrafo del artículo 16 constitucional; de lo contrario, dispondrá la libertad con las reservas de ley.

Si el juez de control ratifica la detención, la audiencia continuará para que el Ministerio Público formule la imputación. Antes de ello, el juez de control verificará que el imputado conozca sus derechos y, en caso de que no sea así, se los dará a conocer.

La formulación de la imputación y la comunicación de derechos también tienen fundamento constitucional, están previstas en la fracción III, del Apartado B, del Artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual establece el derecho del imputado a que se le informen los hechos que se le atribuyen. La formulación de la imputación es la comunicación que hace el Ministerio Público al imputado en presencia del juez de control, de que se lleva a cabo una investigación en su contra respecto de uno o más hechos determinados[57].

Formulada la imputación, el juez de control preguntará al imputado si la entiende y si es su deseo declarar o guardar silencio. En todo momento se permitirá que el imputado consulte con su abogado para la toma de estas decisiones. La

[57] vid. HORVITZ LENNON, María Inés, y LÓPEZ MASLE, Julián. *Derecho Procesal Penal Chileno*, Tomo I, 1ª ed. Editorial Jurídica de Chile, Chile, 2003, pp. 540-541, que al respecto señalan que, ésta actuación, "*cumple una función esencialmente garantista, cual es la de informar al imputado de manera específica y clara acerca de los hechos atribuidos y su calificación jurídica, esto es, el contenido de la imputación jurídico-penal que se dirige en su contra*" [*cursivas añadidas*].

oportunidad para declarar es un derecho previsto en la fracción II, del Apartado B, del artículo 20 constitucional.

Después de haber otorgado al imputado la oportunidad para declarar, el juez de control permitirá que el Ministerio Público solicite la vinculación a proceso. La resolución de plazo constitucional se debe emitir en la misma audiencia inicial, cuando el imputado renuncia al plazo de 72 horas, computadas a partir de que se encuentra a disposición del juez; en caso contrario, se deberá resolver la situación jurídica conforme al referido plazo o la prorroga solicitada por el imputado, con lo que, dicha prórroga podrá ser de *hasta* el duplo de aquéllas, pudiendo ser menor en tiempo según lo solicite el imputado.

El imputado o su defensor, podrán solicitar la práctica de medios de prueba dentro del plazo constitucional que se hubiere prorrogado y éstos deberán de ser desahogados en presencia judicial.

Al formular la solicitud de vinculación a proceso, el Ministerio Público deberá proporcionar datos que establezcan un hecho que la ley señala como delito, y que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Al debatir, el imputado y su defensor podrán incorporar información contenida en datos de prueba de la investigación realizada por el Ministerio Público; o bien, de los medios de prueba que ofreció la defensa y que fueron desahogados en audiencia.

El nuevo estándar que se exige para vincular a proceso es un concepto procesal y no de la teoría del delito. La determinación sobre la existencia de datos, no se desprende de la discusión dogmática sobre la existencia del delito, la cual tendrá lugar en la etapa de juicio, sino de la presentación de indicios que permitan razonablemente suponer la existencia del hecho y la probable participación del imputado en él. Se trata de una resolución sustentada en la probabilidad, no de

decidir en definitiva sobre la responsabilidad penal del imputado que era lo que en la práctica ocurría en el procedimiento mixto, preponderantemente inquisitivo, en demérito de los derechos del imputado y de las condiciones para una persecución penal eficaz. Si bien es cierto, la vinculación a proceso es un auto dictado en el plazo constitucional, su naturaleza procesal no corresponde a la del auto de formal prisión que existió en el procedimiento anterior.

Concluido el debate sobre la vinculación a proceso, el juez determinará la decisión que corresponda. Si dicta auto de vinculación a proceso, se abrirá debate sobre la necesidad de aplicar alguna medida cautelar[58], en aquellos casos en los que no proceda oficiosamente la prisión preventiva; sin embargo, si el juez determina no vincular a proceso, dispondrá la libertad inmediata del imputado en caso de que se encuentre detenido. El auto de no vinculación a proceso no impide que el Ministerio Público continúe con la investigación, y si encuentra elementos posteriores que lo justifiquen, formule otra imputación y una nueva solicitud de vinculación a proceso.

Dictado el auto de vinculación a proceso, el juez de control abrirá debate sobre el plazo para el cierre de la investigación. Esta decisión se tomará sobre la base de los argumentos que viertan las partes en torno a las necesidades probatorias, así como a la complejidad del caso y siempre que no se rebasen los límites señalados para la duración de la investigación complementaria. Después de haber determinado el plazo judicial para el cierre de la investigación, los intervinientes

[58] vid. MAIER, Julio. *Derecho procesal penal argentino*, t.Ib Fundamentos Hammurabi, Buenos Aires, 1989, p. 249, quien refiere que esto implica *"la mediatez de la conminación penal, en el sentido de que el poder penal del Estado no habilita a la coacción directa, sino que la pena instituida por el Derecho Penal representa una previsión abstracta, amenazada, al infractor eventual, cuya concreción sólo puede ser el resultado de un procedimiento regulado por la ley, que culmine en una decisión formalizada, autorizando al Estado a aplicarla"* [*cursivas añadidas*].

podrán realizar nuevas solicitudes y una vez que el juez las ha atendido, cerrará la audiencia. Después de lo anterior, dará inicio la investigación complementaria

Investigación Complementaria.

Esta tiene su inicio y desarrollo después del auto de vinculación a proceso –a partir de que el juez de control fija su plazo– y concluye una vez agotado éste o bien, cuando el Ministerio Público solicita el inicio de la etapa intermedia,

Su objeto es que el Ministerio Público reúna los datos de prueba que le permitan sustentar una acusación o una salida alterna, y que la defensa desarrolle su estrategia y que, de la misma forma, obtenga los datos de prueba que pretenda presentar en la eventual audiencia de juicio oral. En la misma: a) El Ministerio Público puede seguir en la investigación del delito, pero sólo aquel que ha sido determinado en el auto de vinculación a proceso y hasta por el tiempo que fije el juez de control; b) Las partes pueden promover e intervenir en la aprobación de alguna salida alterna al proceso penal, en su caso con control judicial y, c) El Ministerio Público puede abstenerse de acusar o bien hacerlo en la forma en que determine de acuerdo a los datos de prueba obtenidos.

Solicitada la apertura de la etapa intermedia, el Ministerio Público cesa en sus atribuciones de investigar el hecho delictivo establecido en el auto de vinculación a proceso, todo lo cual, es objeto de desarrollo en el Código a efecto de garantizar el cumplimiento de las reglas sobre el debido proceso.

Etapa intermedia

Objeto

La etapa intermedia tiene por objeto el conocimiento de la acusación que se formula en contra de la persona considerada probable autor o partícipe del hecho delictivo; el descubrimiento de datos de prueba entre las partes; el ofrecimiento y

admisión de medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral. Esta se compondrá de dos partes, una escrita y otra oral.

Fase Escrita

La parte escrita iniciará con el escrito de acusación que formule el ministerio público y comprenderá todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. La acusación sólo podrá formularse por los hechos y en contra de personas señaladas en el auto de vinculación a proceso pudiendo la víctima adherirse a la misma. En la misma sólo se podrán corregir errores formales. Es en esta etapa, que la víctima u ofendido podrá constituirse en acusador coadyuvante y nombrar a un asesor jurídico para que le represente jurídicamente.

El proyecto recoge uno de los máximos reclamos del Ministerio Público derivado de la experiencia surgida en todas las Entidades Federativas que aplican en la totalidad o en parte de su territorio un código de procedimientos penales de corte acusatorio. Hasta ahora, el Ministerio Público ha venido siendo la única parte obligada a realizar la entrega material a la defensa de todos los datos de prueba existentes en su carpeta de investigación, y, más aún, de aquéllos que sean beneficiosos a la defensa. Por su parte, hasta hoy la defensa no ha tenido la misma obligación, lo cual se ha traducido en una desigualdad en perjuicio de la institución persecutora de los delitos. Se trata de una fase dentro de la parte escrita de la etapa intermedia que se conoce como *descubrimiento probatorio* que hasta ahora no se ha previsto en los códigos procesales acusatorios que aplican en el país y, que se muestra como necesaria para garantizar un principio de igualdad de armas entre el órgano acusador y la defensa.

Por otro lado, los años transcurridos y la experiencia ganada en los Estados de la República que aplican el acusatorio, acreditan que, no obstante el deber de

objetividad y lealtad que rigen en esta materia la actuación del Ministerio Público, acontece que las viejas prácticas influenciadas por la aplicación del inquisitivo demuestran a la vez, que el órgano acusador en no pocas ocasiones oculta total o parcialmente al imputado y/ a su defensa datos probatorios que obran en su carpeta de investigación, o bien, no le hace entrega oportuna de los mismos afectando la defensa del acusado. Ante tales situaciones, la defensa no ha contado tampoco con un mecanismo de control efectivo que le garantice no sólo que el Ministerio Público le hará entrega oportuna de todos los datos de prueba que le requiera y obren en su carpeta de investigación que le permitan poder preparar con oportunidad su prueba y el ofrecimiento de sus medios de prueba.

Por ello, se propone la regulación dentro de la parte escrita de la etapa intermedia y como condición para su celebración, el deber de las partes de hacerse entrega material de los datos de prueba con los que cuenten, debiendo ocurrir ello antes de la celebración de la audiencia intermedia, lo cual es referido como el *descubrimiento probatorio*.

Se establece para cumplir con tal cometido, que primero, el Ministerio Público entregue a la defensa absolutamente todos los registros de su investigación que obren en la carpeta del caso, ó, aquéllos que le solicitare, hecho lo cual, la

Las reglas del *descubrimiento probatorio* son que, ningún dato de prueba que no se haya descubierto por las partes *según corresponda*, podrá ser utilizado en juicio como prueba, quedando obligadas las mismas, si pretenden su desahogo en juicio, no sólo a su descubrimiento sino a su ofrecimiento en la audiencia intermedia. Se prevé entonces la obligación del Ministerio Público de hacer entrega material a la defensa de absolutamente todos y cada uno de los datos probatorios con los que cuente en su carpeta de investigación y que no le hubiere

86

hecho entrega anteriormente, o de aquéllos que le fueren solicitados, y de manera muy especial, los que le beneficien al acusado.

Por lo que toca a la defensa y una vez que se ha satisfecho con el *descubrimiento probatorio* a cargo del Ministerio Público, ésta deberá entregar a aquél sólo los datos de prueba con los que cuente y que pretenda ofrecer como medios de prueba para ser llevados a juicio oral, con lo que, la defensa no se obliga a descubrir ningún dato de prueba que sea en perjuicio de su defendido en razón del derecho a la no autoincriminación que le asiste.

Que la defensa no le descubra al Ministerio Público algún dato de prueba con el que cuente y que pretenda se desahogue en juicio como prueba, operará en perjuicio del acusado pues siendo así, bajo ningún concepto se podrá utilizar en juicio.

Fase oral

La segunda parte de la etapa intermedia, dará inicio con la celebración de la audiencia intermedia y culminará con el dictado del auto de apertura a juicio oral. Iniciada la audiencia las partes podrán deducir incidentes sobre competencia, cosa juzgada, extinción de la acción penal y falta de requisitos de procedibilidad, así como señalar para su corrección, vicios formales. Posteriormente el juez depurará la acusación, lo cual quiere decir que, se cerciorará de la existencia o no de un modo alternativo de terminación del proceso como, acuerdos reparatorios, suspensión condicional del proceso o bien, concluir el mismo mediante procedimiento abreviado. Concederá la palabra al Ministerio Público, el representante legal de la víctima u ofendido, del acusador privado y, en su caso, de la defensa para que expongan de manera sucinta los hechos y, se procederá al ofrecimiento de medios de prueba y debate sobre su pertinencia; acuerdos probatorios y al dictado del auto de apertura a juicio oral.

87

Etapa de juicio
Objeto

La etapa de juicio oral constituye la parte central del proceso acusatorio, pues en ella el Tribunal habrá de decidir sobre la responsabilidad penal del acusado en una audiencia en que se asegure el respeto a los principios de publicidad, oralidad, contradicción, inmediación, continuidad, concentración e igualdad, de suerte que el fallo y la sentencia habrán de emitirse con base en la prueba que fue desahogada en presencia del Tribunal, –con la salvedad del caso de la prueba anticipada, la que deberá ser incorporada en juicio conforme a las reglas procesales especificas– y, tomando en consideración las posiciones presentadas por el ministerio público y la defensa. Se ha recogido para la regulación de esta etapa, la Codificación y experiencia práctica estatal, proveyéndose de un mejor orden y claridad en su tratamiento.

Conocimiento del caso por el Tribunal

En el proceso acusatorio, el Tribunal conoce del caso al celebrarse la audiencia de juicio oral, por ello, quienes intervienen como jueces integrantes del Tribunal de Juicio Oral, no deben haber participado en etapas anteriores del mismo, garantizándose así su completa imparcialidad al no conocer previamente los actos de investigación o haber tomado decisiones en relación con el caso.

Al recibirse por los órganos administrativos el auto de apertura a juicio dictado por el Juez de control, se procede a designar a los integrantes del Tribunal y a citar a las personas que deban acudir a la audiencia, dándose aviso respecto de las medidas cautelares existentes.

Principios

Los principios del proceso acusatorio influyen en la audiencia de juicio oral y en algunos casos de manera especial han de entenderse para efectos de esta etapa, por ello, se hace referencia a los mismos en el apartado correspondiente.

En cuanto a la inmediación y la presencia de los sujetos procesales, se exige para su celebración de la presencia del imputado, su defensor, el ministerio público y los integrantes del tribunal, no asi de la víctima u ofendido y de su asesor jurídico. Se han considerado casos de excepción para el imputado, pues se reconoce el derecho que tiene de estar o no presente en la sala de audiencia, y, en el caso que decida no hacerlo ello asi ha de ser observado siempre que le sea garantizado su derecho de defensa. Si el imputado asiste a la audiencia, debe comparecer libre, y el tribunal puede disponer excepcionalmente se adopten medidas de vigilancia. El tribunal está facultado también, a modificar la medida cautelar que le hubiere sido impuesta. En caso que el imputado se encuentre en libertad y no comparezca a la audiencia, el tribunal puede hacerle comparecer a través de orden de aprehensión que libre.

La publicidad en proceso acusatorio es un principio de la mayor importancia. Como regla general se prevé que todas las audiencias sean públicas pudiendo acceder a ellas cualquier persona con las restricciones que se establezcan. El Código prevé los casos en los que la publicidad puede ser restringida; ello acontece por ejemplo respecto de la actividad de los medios de comunicación, a los cuales se les reconoce un privilegio de asistencia, pero se prevé que sólo existirá un único registro de la audiencia y que, sólo ese registro podrá reproducirse. La grabación de la audiencia por los medios y su trasmisión simultánea, está prohibida.

Bajo el principio de continuidad, se privilegia que el desarrollo de las audiencias sea continuo con el objeto de evitar prácticas de diferimiento por largos periodos de tiempo que puedan demeritar o desfavorecer la memoria de lo ocurrido en ellas

89

por el Tribunal y las partes. Se prevé la posibilidad de suspensión vía incidental, para los casos en que por razones graves o insuperables, pueda ponerse en riesgo la acusación o la defensa y que por ello, deba esperarse un tiempo máximo de diez días para poder continuar con la audiencia; trascurrido ese plazo sin reanudarse, deberá declararse su interrupción y ser reiniciada ante Tribunal diferente. Estos casos se distinguen de los del aplazamiento, decretado en su caso y no siempre, por razón de días inhábiles o de fines de semana.

Fundamentación y motivación de las decisiones del Tribunal

Para propiciar la agilidad y buena marcha de la audiencia, se ha decidido partir de la buena fe de las partes y del Tribunal para presumir la legalidad de sus decisiones. Así, se evita el vicio de recurrir a la expresión oral de fórmulas que se traducen en pérdida de tiempo en su desarrollo ante la referencia constante a la fundamentación de las decisiones. Por ello, el Código prevé que, salvo así sea solicitado por alguna de las partes, el tribunal no deba expresar la fundamentación de las resoluciones que asume en la audiencia cada vez que las dicta, pues se entiende que las partes y el Tribunal la conocen y entienden cuál es el fundamento. Lo anterior no exime al tribunal de motivar debidamente sus decisiones.

Dirección y Disciplina

El Tribunal debe contar con medios a través de los cuales pueda hacer cumplir sus determinaciones en la dirección del debate con respecto a las partes o cualquiera de los asistentes. Es el juez que preside la audiencia de juicio a quien corresponde dirigirla, pues de lo contrario se entorpece esa función haciéndole siempre depender de la decisión de todos los miembros del Tribunal, quienes sólo intervendrán en caso de inconformidad por las partes respecto de la determinación de quien preside. Las medidas establecidas en el Código, no son subsidiarias ni

existe ninguna clase de prelación entre ellas, pudiendo el Tribunal acudir a cualquiera de las establecidas, según el caso lo amerite, a su juicio.

La Prueba en la Audiencia de Juicio

Generalidades.

El eje central en la regulación de la prueba es la desaparición del *principio de permanencia* y la *prohibición de incorporar antecedentes de la carpeta de investigación*, tales como los informes periciales o policiales, así como las entrevistas de testigos, víctimas o imputado recabadas previo al juicio, pues el proceso acusatorio exige que el Tribunal conozca el hecho a través de la prueba rendida en juicio. Así, la prueba cumple su función de garantía para el imputado ya que éste sabrá que sólo con base en la prueba desahogada en juicio –incluida la prueba anticipada que debe ser rendida conforme a las reglas procesales específicas– y en presencia del Tribunal, será decidida su inocencia o responsabilidad.

Sin embargo, esta regla encuentra dos excepciones, a saber: la declaración de testigos o coimputados, cuya entrevista ha sido recibida en la etapa de investigación, pero que para la fecha en que tendrá lugar la audiencia de juicio, han perdido la vida o, la razón o la capacidad para declarar en juicio o, en caso de testigos, coimputados o peritos cuya incomparecencia sea atribuible al imputado[59]. En estos supuestos de excepción, se autoriza que su previa declaración o informe rendido durante la investigación, puedan ser utilizados en juicio en sustitución de la persona del testigo, perito o coimputado, observando para ello las reglas procesales para su incorporación como prueba.

[59]vid. "Comentarios Sobre el Anteproyecto de Código Federal de Procedimientos Penales Presentado por la SETEC", en: Revista Nuevo Sistema de Justicia Penal, Año 1 (nov. 2010) No. 2. Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. México, 2010. pp. 87 a 89.

La libertad probatoria es un tema fundamental, cuyo límite sólo puede encontrarse en la relación directa o indirecta con los hechos materia de la acusación y con su licitud. Se adopta como sistema de valoración de la prueba, el de sana crítica. Se establece que la condena ocurrirá sólo si el Tribunal, valorando la prueba de acuerdo a las reglas de la lógica, máximas de la experiencia y conocimientos científicos, se ha convencido más allá de la razonable de que el sujeto realizó o participó en un hecho que la ley sanciona como delito.

Testigos

Se prevé la obligación de todo testigo de declarar en juicio, sin que su declaración pueda ser sustituida por la lectura de documentos. Se reconoce que determinadas personas por su relación estrecha con el imputado o por motivos de otra índole, como por razones de relación de parentesco o secreto profesional, no se encuentran obligadas a rendir testimonio de así decidirlo. Se prevé la obligación de comparecencia y sus excepciones, para el caso de ciertos servidores públicos específicamente determinados, en razón del alto cargo que desempeñan en la administración pública, personas que gocen de inmunidad diplomática; quienes padezcan de enfermedad grave, y otros impedimentos calificados por el Tribunal.

En caso de víctimas menores de edad, o víctimas de secuestro o violación, se prevé que en el desahogo de su testimonio puedan ser utilizadas técnicas audiovisuales que eviten la confrontación directa con el acusado. También se prevé el uso del sistema de reproducción a distancia para el caso de personas que estén físicamente impedidas a trasladarse. Estas reglas aplican para el caso que tengan que comparecer a juicio determinados servidores públicos y, en caso de otros impedimentos calificados por el Tribunal, como podría suceder en supuestos de personas discapacitadas.

92

Las víctimas, testigos y sus familiares, cuya protección resulte necesaria podrán gozar de medidas especiales que tiendan a otorgar esa protección a juicio del Tribunal.

Peritos

En el proceso acusatorio, el dictamen pericial debe rendirse por el perito en la audiencia de juicio oral, sin que sea posible sustituir su presencia por la lectura de su informe, salvo en el caso de las excepciones que el Código prevé, como son por muerte o pérdida de capacidad para declarar por problemas mentales o de salud que impidan, a juicio del Tribunal, producir la prueba en juicio.

A los peritos se les exigirá que acrediten su calidad con la documentación oficial respectiva, salvo que se trate de personas que hayan presenciado el hecho y posean conocimientos especiales que permiten realizar preguntas sobre ello.

Reglas para declaraciones en Juicio

La prueba se deberá desahogar conforme a las reglas procesales y de prueba establecidas. Quién ofrece el medio de prueba tendrá el derecho de formular interrogatorio directo, mediante preguntas abiertas, quedando prohibidas las sugestivas. La parte contraria podrá formular contrainterrogatorio o contra examen en el cual se permiten las preguntas sugestivas al ser las que permiten ejercer contradicción y control del testigo adverso, sólo así puede cumplirse con las finalidades del contrainterrogatorio. Excepcionalmente, se permitirá tratar al testigo propio como hostil, cuando es reacio, disperso o contumaz en contestar las preguntas del oferente y para ese supuesto se autoriza al mismo a realizar preguntas sugestivas. De la misma manera, se prevén técnicas para el desarrollo de los interrogatorios, como la posibilidad de realizar procedimientos de apoyo de memoria o, para evidenciar o superar contradicciones.

El Código prevé la prohibición de realizar preguntas capciosas, confusas, argumentativas, vagas, conclusivas, hipotéticas –salvo el caso de los peritos o testigos expertos–, las que llamen a dar opinión personal de un testigo, las que son repetitivas, las impertinentes o irrelevantes.

Declaración del Acusado y sus derechos

Tratándose de la declaración del acusado en juicio, el Código prevé que, cuando es el acusado quién ha decidido declarar, su declaración podrá ser rendida en forma libre o a preguntas de las partes. Para ello, deberá ser advertido que si decide declarar deberá contestar a las preguntas que le formule el órgano de acusación, permitiéndose a éste efectuar su contra examen.

El Código prevé, en caso que el acusado decida no declarar en juicio, que declaraciones previas que éste hubiere rendido no puedan ser utilizadas bajo ningún concepto, pues ello vulneraria su más elemental derecho a guardar silencio. Por el contrario, en caso que el acusado decida declarar en juicio, sus declaraciones rendidas previamente podrán ser utilizadas únicamente para apoyar su memoria en caso de ser necesario o, para evidenciar o superar contradicciones. Esas entrevistas o declaraciones anteriores en ningún caso pueden incorporarse por lectura al juicio.

Prueba Documental y Material

Tratándose de documentos, se ha considerado que el método de incorporación de los mismos mediante lectura no excluye el derecho de las partes a someter la prueba a contradicción, y por ello, previo a la lectura de un documento para su incorporación el mismo debe ser acreditado. En materia de elementos materiales probatorios, de la misma manera estos deben ser acreditados, es decir, sometidos a contra examen previa su incorporación a juicio como prueba. Lo importante en

ambos casos, es garantizar la contradicción mediante la exigencia que, los documentos y los elementos materiales probatorios sean incorporados al debate sólo si un testigo ha informado al Tribunal sobre su relación con la prueba, su origen, sus características, etcétera; pues sólo de esa manera las partes están en condiciones de ejercer contradicción.

Otros elementos de prueba

La libertad probatoria implica la posibilidad de desahogar en juicio medios de prueba cuya naturaleza no es testimonial, pericial, documental o material. Esos medios de prueba de naturaleza distinta deberán ser incorporados por el método más análogo al que resulte de su naturaleza.

El Código también prevé, la posibilidad que el Tribunal se constituya en lugar distinto al de la Sala de Audiencias, si ello es pertinente para la apreciación de determinadas circunstancias relevantes al caso.

Por regla general, sólo los medios de prueba ofrecidos y admitidos en la audiencia Intermedia, son los que se pueden desahogar en juicio oral. Sin embargo, se prevé que en caso de prueba superveniente –que es aquélla que no existía antes del juicio o no se conocía de su existencia– y, de la prueba de refutación –aquélla cuya necesidad de ofrecimiento no podría haber sido prevista por el oferente al momento de celebración de la etapa intermedia–, es posible que las partes tengan una nueva oportunidad de probar para controvertir esas pruebas nuevas.

Desarrollo de la Audiencia de Debate.

Se ha previsto el orden de acuerdo en el que ha de desarrollarse la audiencia, comenzando por la instalación de la audiencia, verificación de la presencia de las partes, la concurrencia de testigos, peritos y elementos materiales probatorios que

habrán de ser exhibidos en el debate. Por regla general, los incidentes deberán resolverse en ese momento por el Tribunal. Una vez instalada la audiencia, se procede a la formulación de los alegatos de apertura por el ministerio público, la víctima a través de su asesor jurídico si lo desea, y, al final por el defensor si así lo considera adecuado.

Posteriormente se recibirán las pruebas para su desahogo en su orden, primero los del Ministerio Público; en su caso, las de la víctima *u* ofendido y finalmente, las de la defensa. El orden en que deberán ser recibidas las pruebas queda a elección de las partes pues ello está en razón de su teoría del caso y estrategia en su conducción. Desahogadas todas las pruebas, las partes expresarán sus alegatos de clausura en el mismo orden que los de apertura. Las partes podrán realizar réplica o dúplica si así lo solicitaren. El acusado tendrá siempre el derecho a la última palabra.

Un aspecto de particular importancia cuya definición y regulación corresponde a la etapa de juicio oral, es el relativo al cambio de calificación jurídica del hecho.

El Código prevé que el Ministerio Público pueda realizar el cambio de calificación jurídica de los hechos cuando mucho hasta el momento de formular su alegato de clausura. Se ha considerado que esto no afecta la defensa del acusado, pues es hasta el momento del juicio oral que las pruebas son producidas. Sin embargo, se prohíbe que el Ministerio Público varíe los hechos que han sido determinados desde el Auto de Vinculación a Proceso y acuse por hechos distintos o que, aumente nuevos hechos al formular su clausura. Frente al cambio de calificación jurídica así efectuado, la defensa podrá solicitar la suspensión de la audiencia que le será concedida hasta un plazo máximo de diez días para preparar su intervención en clausura.

El tribunal no podrá, bajo ningún concepto, cambiar la calificación jurídica formulada en los alegatos de clausura del Ministerio Público, por lo que el fallo que

emita se verá circunscrito a los hechos materia de acusación, a su calificación jurídica expresada en el alegato de clausura por el Ministerio Público y a la prueba legal producida e incorporada en juicio oral.

Deliberación, fallo y sentencia

Expresados los alegatos de clausura y, en su caso, ejerciendo el derecho a la última palabra por el imputado, el Tribunal se retirará a deliberar en privado para producir y enterar el sentido del fallo en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas que serán continuas a partir que el debate quede cerrado. Es función del Tribunal debatir y atender todo el material probatorio que se hubiese desahogado en juicio, considerando individualmente cada prueba para determinar su utilidad y, posteriormente su valoración conjunta para que, bajo la sana crítica y considerando las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos pronuncie su fallo deliberatorio y, posteriormente, de acuerdo al mismo, la sentencia del caso.

La continuidad y privacidad de esta etapa garantizará que existan menos distractores y que el recuerdo de lo escuchado y visto sea mejor, buscando evitar permen actos de corrupción y de injerencias externas provenientes de órganos superiores. Esa deliberación también funge como garantía para el imputado y la víctima, quienes estarán ciertos que sea cual fuere el sentido del fallo, éste habrá de obtenerse por la reflexión, debate y argumentación de los integrantes del Tribunal de Juicio.

La condena sólo habrá de realizarse si el Tribunal ha quedado convencido más allá de la duda razonable, sobre la responsabilidad penal del acusado a título de autor o de partícipe en la comisión del delito que se le imputó. La absolución comunicada desde la lectura del fallo deliberatorio producirá el efecto de ordenar

97

la inmediata libertad el acusado y el cese de toda medida cautelar que le hubiere sido impuesta, sin necesidad de esperar el trascurso del término previsto en el Código para recurrir la sentencia. Después de explicado el fallo, la sentencia ha de redactarse por escrito al igual que el voto particular que en su caso exista. De ser procedente, se abrirá debate sobre el *cuantum* de la pena a imponer y el monto de la reparación de daño; esto debe ocurrir previo a que se dicte la sentencia, pero después de escuchado el sentido del fallo. El ofrecimiento de los medios de prueba por la defensa para efectos de individualización de la sanción puede válidamente hacerse en audiencia intermedia o también, después de dictado el fallo condenatorio o en la misma audiencia de individualización de la sanción.

10. Ajustes al procedimiento ordinario para personas inimputables

Los instrumentos principales para discutir la cuestión de cómo debe ser tratada la imputabilidad en el procedimiento penal desde la perspectiva de los derechos humanos debe atender, en primer lugar, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad y, principalmente, a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas.

Todos los instrumentos internacionales indicados tienen un efecto jurídico vinculante, y para los países que han ratificado estos tratados debe entenderse que tienen las obligaciones que en ellos se establecen. Tanto el Pacto de San José como el Pacto Internacional De Derechos Civiles y Políticos, plantean la necesidad de establecer garantías del debido proceso. Ninguno de los instrumentos referidos prevé excepción alguna cuando se trata de las personas que tienen algún tipo de discapacidad intelectual o psicosocial, que son las que en definitiva pueden estar expuestas a ser declaradas inimputables en el

98

procedimiento penal. De esta realidad normativa se desprende que las personas que están en situación de imputabilidad deben ser sujetos de las garantías del debido proceso, las cuales están previstas tanto en el artículo 8 de la referida Convención Americana y 14 del Pacto Internacional De Derechos Civiles y Políticos.

En este sentido, debe entenderse que los instrumentos señalados prevén la reserva de ley, de acuerdo con la cual nadie puede ser sujeto a pena o mecanismo de control social como la medida de seguridad, si no es por la comisión de un hecho tipificado como delito en la ley, así como en cuanto se apliquen todas las garantías procesales y orgánicas que deben ser instrumentadas para la protección del justiciable.

Por su parte, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece, en su artículo 13, que los estados parte tendrán la obligación de realizar ajustes en el marco del procedimiento, con el objeto de que las personas con discapacidad tengan un acceso efectivo a la justicia, ya sea que intervengan en calidad de testigos, acusados, víctimas, o con cualquier título que los convierta en participantes en un procedimiento. En el caso que ahora nos ocupa se trataría de determinar el tipo de ajustes del procedimiento que se tienen que establecer para los efectos de que una persona con discapacidad, que ha sido acusada de la comisión del delito pueda, en caso de estar vinculada con el hecho, ser sometida a una forma de control social como lo son las llamadas medidas de seguridad.

Tradicionalmente han existido ajustes de procedimiento que son mucho más usuales de los que exige la Convención que venimos comentando, tal sería el caso, por ejemplo, de la utilización de los intérpretes de lengua de señas para los sordos, los cuales en general están incluidos en los códigos procesales como un

99

derecho de las personas que intervengan en el procedimiento y que tengan esta condición. Sin embargo, existen otro tipo de discapacidades que tradicionalmente han sido invisibles para el sistema de justicia y que, quienes las tienen, han sido normalmente excluidas del acceso a la justicia. Tal es el caso de las personas que tienen discapacidades intelectuales o psicosociales.

Tradicionalmente las medidas de seguridad no son consideradas como instrumentos punitivos, sino como medidas terapéuticas dirigidas a impedir que el inimputable realice conductas que son consideradas "peligrosas" para la propia persona o para terceros. El gran problema de estas "medidas terapéuticas" es que son aplicadas las más de las veces sin atender a las más mínimas garantías del debido proceso, en algunos casos, directamente se ordena abrir un incidente especial no nominado para la determinación de la procedencia de las medidas (esto es lo que en general ocurre en los códigos todavía no reformados). Una vez que estas medidas han sido individualizadas, en ocasiones su duración se establece de forma indeterminada, de forma tal que cualquier conducta puede convertirse en pretexto para privar de la libertad a una persona en un establecimiento psiquiátrico, prácticamente de por vida.

Otros procedimientos prevén la posibilidad de señalar un límite máximo para la duración de la medida de seguridad, el cual no podrá ser mayor que la pena máxima que se aplicaría en caso de personas consideradas imputables o con capacidad de responsabilidad penal. Si bien esta medida es conveniente, tomada por sí misma, sin atender a otros criterios de individualización, tampoco es la idónea porque permite un rango de discrecionalidad que no se establece con certidumbre y seguridad jurídicas, sino que depende del grado de "curación" o de "adaptabilidad" de la persona, términos que son claramente contrarios a la existencia de un debido proceso y del derecho penal de acto. En este último caso, algunos códigos prevén un máximo de duración con un límite, es decir, el máximo

de pena que correspondería aplicar por el delito de que se trate, pero el efecto es que el rango de aplicación de las medidas de seguridad continúa siendo indefinible entre el mínimo y el máximo de duración de la pena.

Los nuevos estándares, previstos en los artículos 12 y13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, establecen un nuevo paradigma para el procesamiento de estos casos. La propuesta de este ordenamiento procesal único es que para el caso de las personas con discapacidad, específicamente las que son consideradas inimputables, pueda existir un proceso ordinario, similar al que se seguiría a cualquier persona, con el objeto de que se cumplan con las garantías del debido proceso, pero con aplicación de los llamados ajustes razonables, que en el caso del contexto procesal, también son conocidos como ajustes de procedimiento.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad define el concepto de ajustes razonables como "las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada e indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales". A diferencia de las reglas generales de accesibilidad como el diseño universal o las adaptaciones generales, el concepto de ajustes razonables se establece caso por caso, de acuerdo a las necesidades y requerimientos de la persona en concreto. Puede ir desde la posibilidad de realizar el juicio sin las solemnidades propias de una sala de audiencias, hasta la designación de un asistente personal que apoye la persona en los distintos momentos procesales.

De lo que se trata es de hacer efectivo el mandamiento que ordena que todas las personas sean tratadas con igual consideración y respeto. De ahí que en las distintas audiencias se prevea la posibilidad de hacer ajustes y que se prohíba la

101

aplicación de medidas cautelares, incluido el internamiento, por motivos de discapacidad. En los casos de personas inimputables también deberá acreditarse la necesidad de cautela y el supuesto material de la conducta.

Una vez concluido el proceso, si se comprueba la existencia del hecho y la intervención del inimputable en él, el juez determinará la aplicación de la medida de seguridad aplicable, en caso de que ello sea necesario, y con los criterios de individualización establecidos en el código penal, entre los que debe existir también el criterio de proporcionalidad.

11. Pueblos y Comunidades Indígenas

Como se ha referido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no hace ningún distingo entre personas cuando se trata del proceso penal. No es acorde a la dignidad humana y si resulta discriminatorio, no sólo distinguir entre personas con distintos grados de capacidad para prever regímenes diferenciados para la procedencia de protección de derechos y garantías, sino también, de grupos como las Comunidades y Pueblos Indígenas para colocarles y darles trato bajo la denominación de un *procedimiento especial* cuando en realidad ello implica en sí mismo ya otorgarles un trato *discriminatorio*.

El artículo 1°, párrafo cuarto reformado de nuestra Carta Magna, establece una Cláusula *antidiscriminatoria* en los términos siguientes:

"Queda prohibida toda discriminación **motivada por origen étnico nacional**, el género, la edad, las discapacidades, **la condición social**, las condiciones de salud, religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas".

Los Pueblos indígenas y sus integrantes enfrentan situaciones de discriminación. El Proceso acusatorio debe prever que el debido proceso les sea asequible y garantizado. Por ello, reconociendo que una de las manifestaciones más evidentes de discriminación, es la lengua, debe procurarse que cuenten con un traductor que conozca su cultura y su lengua y, más aun, que la solución del conflicto pueda ser resuelta por las instituciones indígenas en caso que así se acordare en los términos que el Código establece.

12. Procedimientos especiales

Procedimiento abreviado

El procedimiento abreviado es una de las herramientas que presupone un sistema acusatorio. Aunque se le ha considerado como herramienta de despresurización del sistema procesal penal y, desde ese punto de vista cumple una función utilitarista; también ha forjado sus características como mecanismo procesal que no necesariamente agota todas las fases del proceso ordinario, pero que su esencia sigue siendo la impartición de justicia.

Uno de los grandes reclamos en la justicia ha sido la lentitud que entrañan los procesos. Al respecto y a fin de superar esta tardanza, los ordenamientos procesales han tendido a abreviar los procedimientos para definir anticipadamente el caso penal en juzgamiento, sin confundir esto con el otorgamiento en automático de penas mínimas.

El procedimiento abreviado responde a la necesidad de contar con una vía expedita y sencilla de resolver el conflicto penal, a través del adelgazamiento del trámite y de los costos y demoras en el mismo, en aquellos casos en que no sea necesario realizar un juicio oral debido a que no existe una controversia

fundamental entre el persecutor y el acusado respecto de los hechos que constituyen las imputaciones materia del proceso.

Esta figura descansa en la economía procesal: de manera directa refleja un ahorro en el recurso humano, financiero y material. Al disminuir los actos procesales, será menor la duración del procedimiento y en consecuencia, de las medidas cautelares, incluida la prisión preventiva; sin pasar por alto la reducción que se verá reflejada en los gastos operativos de persecución, de coadyuvancia y de defensa, entre otros. Por último, con motivo del acuerdo de voluntades que implica la condena, eventualmente será menor la pena.

Desde esta óptica, el procedimiento abreviado pretende generar "sentencias expeditas", dictadas en cumplimiento irrestricto de los derechos humanos, conforme a la selectividad que los agentes del Ministerio Público impriman en los asuntos que podrán ser objeto de esta institución procesal y, por el estímulo que significa para el imputado la oferta de una disminución sustancial en la pena.

A diferencia de lo que acontece con las Formas Anticipadas de Terminación del Proceso, que culminan con una decisión de sobreseimiento dictada por el Juez de Control, el procedimiento abreviado culmina con una sentencia dictada por dicha autoridad condenando o absolviendo al acusado.

El procedimiento abreviado se tramitará a solicitud del agente del Ministerio Público y procederá cuando no haya debate sobre la licitud de los registros de investigación; el acusado expresamente renuncie al juicio, consienta la aplicación de este procedimiento y admita su responsabilidad en el hecho materia de la acusación, siempre que existan datos de prueba que hagan verosímil la responsabilidad del imputado. La existencia de coimputados no impide la aplicación de estas reglas a alguno de ellos.

Siendo propio del procedimiento abreviado que el imputado acepte los hechos delictivos que se le atribuyen, el Código no prevé la necesidad ni existencia de debate probatorio alguno, pues la admisión de los hechos delictivos conlleva a tener por ciertos los datos en los que la acusación se sustenta siempre que hagan verosímil su responsabilidad.

Será necesario que la víctima *u* ofendido o en su caso, su asesor jurídico, no presenten oposición fundada; sin embargo, su incomparecencia injustificada a la audiencia, no impedirá que se resuelva sobre la procedencia del procedimiento abreviado y en su caso, se dicte la sentencia respectiva.

El Ministerio Público podrá solicitar la apertura de este procedimiento una vez dictado el auto de vinculación del imputado a proceso y hasta antes del pronunciamiento del auto de apertura de juicio. Si la solicitud se realiza antes de la etapa intermedia, la acusación podrá formularse oralmente. En caso de que el Juez rechace el procedimiento abreviado antes de la etapa intermedia, la acusación quedará sin efectos. Si la solicitud tiene lugar en la audiencia intermedia, se estará a la acusación formulada por escrito, salvo la solicitud de la pena.

Antes de resolver sobre la solicitud, el Juez de Control verificará que el imputado conoce su derecho a exigir un juicio, que renuncia voluntariamente a ese derecho y acepta ser juzgado con base en los antecedentes recabados en la investigación; entiende los términos del acuerdo y las consecuencias que éste pudiera implicarle; acepta su responsabilidad en los hechos de la acusación en forma inequívoca y de manera libre y espontánea; y presta su conformidad al procedimiento abreviado en forma libre, voluntaria e informada con la asistencia de su defensor.

El procedimiento abreviado procederá por cualquier delito, sin embargo, la pena que en el caso concreto solicite el Ministerio Público no podrá exceder de cuarenta años. El agente del Ministerio Público podrá solicitar la aplicación de una pena

105

inferior, cuya reducción podrá ser hasta de un tercio menos de la mínima señalada para el delito por el cual acusa; para tales efectos, los órganos ministeriales están obligados a establecer directrices o lineamientos en torno a la solicitud del procedimiento. Con esta regla, se impone al el Ministerio Público un piso mínimo del cual partir, pero que sin duda puede variar de acuerdo a las características del caso particular. El pacto sobre la pena vincula al juez, salvo que viole derechos fundamentales.

El juzgador aceptará la solicitud cuando considere actualizados los requisitos correspondientes; no obstante, dejará sin efecto la declaración de procedencia del procedimiento abreviado, y continuará con el procedimiento ordinario, en cualquier momento que advierta que hay debate sobre aquellos, eliminando así la práctica contradictoria de permitir debate en la audiencia en que se resuelve sobre el mismo. Por su naturaleza, el procedimiento abreviado implica que las partes antes de llegar a la audiencia deben estar conformes con los términos en que éste surgió, de lo contrario lo procedente es que se siga la vía ordinaria.

Autorizado el procedimiento abreviado, el Juez otorgará la palabra a las partes para que expongan lo que a su derecho convenga; pero en todo caso, la exposición final corresponderá siempre al acusado. Después de ello, emitirá su fallo de absolución o de condena en el mismo acto procesal. El Juez de Control sólo puede cuestionar el hecho cuando no existan elementos que hagan verosímil el reconocimiento. Emitido el fallo el Juez citará a una audiencia pública que tendrá verificativo dentro de las cuarenta y ocho horas posteriores, donde dará lectura y explicación de la sentencia.

Cuando por cualquier motivo de los previstos, el tribunal rechace el procedimiento abreviado, hará saber a los intervinientes que el requerimiento sobre la pena no vincula al Ministerio Público durante el juicio; además, que la aceptación de los hechos materia de acusación no podrá ser utilizada en perjuicio del imputado; y

106

que quedarán a salvo sus derechos para debatir la ilicitud de los medios de prueba.

El Juez de Control solo podrá conceder beneficios preliberacionales cuando los mismos sean procedentes tomando como base la pena mínima prevista en los códigos sustantivos para el delito de que se trate.

El Código deja en las Procuradurías, el encargo de expedir los lineamientos y directrices correspondientes para su solicitud por parte del Ministerio Público.

Lo anterior, porque siendo congruentes con la naturaleza de esta herramienta de política criminal en cuanto a la persecución penal, son las Procuradurías como órganos de gobierno encargadas de la persecución penal las que deben controlar al interior de la institución los casos en que proceda que un Ministerio Público pueda aceptar y solicitar un procedimiento abreviado. Esta decisión, se deja a las Procuradurías de cada entidad federativa, como en la de competencia federal, ya que el uso del procedimiento abreviado debe atender a la realidad de la incidencia delictiva en cada jurisdicción y, en su caso, a la situación de cada entidad federativa.

Procedimiento para Personas Jurídicas

El ámbito de actuación de cierto tipo de delincuencia que utiliza las estructuras sociales o corporativas para cometer delitos, especialmente con un gran impacto en el sector económico, financiero, ambiental, etcétera, es una realidad de la que nuestro país no escapa.

Continuamente, las personas jurídicas son vehículos a través de los cuales, ya sea aprovechando su estructura, o actuando bajo su nombre o representación, y más aun, amparados en el hecho que al día de hoy en México no existe posibilidad jurídica de perseguirles penalmente de forma directa, se cometen

delitos que normalmente causan un gran impacto en el sector económico, financiero, ambiental, etcétera. Un nuevo tipo de delincuencia ha hecho presencia en los últimos años y la misma, no sólo llega a tener efectos dentro del territorio nacional, sino que se reconoce su ámbito transnacional.

En ocasiones, es la incursión de la delincuencia organizada la que aprovecha las estructuras sociales en la comisión de delitos, pero esto no necesariamente es así. Es común encontrar que en todo tipo de empresa y de industria o de negocio, se toman decisiones que, en casos, conllevan a la comisión de hechos considerados como delitos. Grandes fraudes financieros, en materia bursátil, en materia fiscal, contrabandos, delitos en contra de la propiedad industrial e intelectual, entre otros, tienen su origen en decisiones asumidas y/o ejecutadas aprovechando estructuras sociales o, bajo el nombre y amparo de las personas jurídicas para beneficiarles con graves perjuicios a terceros.

La delincuencia económica, cuya asociación evidente con los llamados delitos de cuello blanco, actúa con absoluta libertad sin riesgo a ver afectadas sus estructuras sociales y, derivando siempre la responsabilidad penal imputada en personas físicas, en ocasiones de menor jerarquía que ninguna responsabilidad tienen en los hechos.

México se ha sumado a la tendencia mundial de responsabilizar penalmente a las personas jurídicas. Ello le permitirá cumplir de mejor manera con compromisos internacionales de los que ha tomado parte, como es el caso del Convenio Contra la Corrupción de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales del mismo organismo, así como la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción en las cuales se establecen compromisos para que el Estado parte

adopte acorde con su régimen interior, la responsabilidad penal de las personas jurídicas. De la misma manera como parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), México ha asumido el compromiso de incorporar en su legislación la responsabilidad penal de la persona jurídica derivado de la lucha contra el lavado de dinero.

Ello implica reconocer en la persona jurídica como sujeto de responsabilidad penal y, por lo mismo, reconocer en ella los derechos que le asisten a todo justiciable, pues se trata ahora que la misma pueda ser acusada penalmente y que deba enfrentar esa acusación sometida a un proceso penal, como si se tratara de una persona física, pero considerando su realidad jurídica.

En este sentido, ante un hecho delictivo que se considere la persona jurídica deba ser perseguida penalmente, el Código prevé que la misma deba tener derecho a contar con abogado que la defienda, que no necesariamente ha de ser quién ejerza la defensa de las personas físicas a la vez imputadas –miembros del consejo de administración, directivos, asesores, etcétera– reconociéndole los derechos de todo imputado, como lo son, entre otros, el de contar con abogado defensor, de ofrecer medios de prueba, de asistirse durante el juicio por un defensor de su elección, alegar, desahogar sus pruebas, ejercer contradicción respecto de las pruebas del Ministerio Público, etcétera.

El Código prevé que las personas jurídicas no podrán ser objeto de proceso penal, sin que se hubiere acusado a la vez, a las personas físicas que se considera realizaron las conductas imputadas como delito. Las personas jurídicas podrán ser objeto de aseguramiento de bienes cuando se consideran probables responsables del hecho delictivo.

Queda en el Código penal establecer las consecuencias jurídicas que les serán aplicables de resultar penalmente responsables de los hechos por los que les

acuse el ministerio público, de acreditarse el delito imputado y su responsabilidad penal.

Acción penal pública por particulares

La reforma constitucional en materia penal de 18 de junio de 2008,abre la posibilidad de ejercer directamente la acción penal por parte de los particulares en los casos que expresamente prevea la ley secundaria, sin perjuicio de que el Ministerio Público pueda intervenir en estos supuestos para salvaguardar el interés público.

La razón por la que se incorporó la figura de la acción penal pública ejercida por particulares fue para contribuir a elevar los niveles de acceso a la justicia en materia penal, estimando que dicha intervención debería ser evidentemente excepcional y sólo en aquellos casos en los que el interés afectado no sea general. Prever para qué delitos y bajo que reglas ha de proceder, es decisión del legislador ordinario.

La acción penal pública ejercida por particulares, se encuentra prevista en diversos códigos procesales penales de Latinoamérica (Chile, Bolivia, Costa Rica, Paraguay, entre otros) y en los mismos se observa la tendencia de considerar como delitos llamados de acción privada, a aquellos que afectan, entre otros, el honor o la intimidad personal, así como algunos delitos de carácter patrimonial e integridad personal menores.

La instrumentación de la acción penal pública ejercida por particulares en nuestro país, no ha sido objeto de acogimiento por algunos códigos acusatorios y, algunos otros la han regulado con relación a delitos contra el honor y la intimidad personal, constituidos básicamente por injurias, difamación, calumnias, revelación de secretos, adulterio, así como delitos de carácter patrimonial e integridad personal menores.

110

En el Código, la instrumentación de la acción penal por particulares, es cuidadosamente regulada con el fin de evitar que la misma se convierta en un instrumento de venganzas o actuaciones de personas con intereses particulares ajenos a los intereses del Estado, de la sociedad y de la justicia. En este contexto, se plantea que la misma proceda por delitos perseguibles únicamente por querella y que tengan como pena mínima tres años de prisión. Esto así se ha considerado, pues no deja de llamar la atención que abrir la puerta a este mecanismo podría conllevar a que las instituciones de impartición de justicia penal se van utilizadas por litigantes sin escrúpulos como verdaderas ventanillas de cobro y de presión para buscar hacer realidad asuntos de naturaleza mercantil o civil, familiar, laboral, convertidos o disfrazados en delitos en forma desmedida.

Los delitos de acción penal pública por particulares, deben constituir una excepción, pues estos hechos punibles son, la mayoría de las veces, los que afectan con menor gravedad el interés público; consecuentemente, los delitos a los que se aplique tendrán que ser aquellos en que sea menor el reproche social.

Con relación al nivel probatorio, la acción penal pública ejercida por particulares, exige del particular que sea el mismo quién reúna los elementos de prueba que apoyen su acusación, considerándose para tal efecto el mismo nivel probatorio que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige al Ministerio Público para ejercer la acción penal, esto es, deberá contar con datos que permitan establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y exista probabilidad de que el imputado lo cometió o participo en su comisión, supuesto en el cual se podrá acudir ante el Juez de Control directamente ejerciendo la acción penal correspondiente.

Respecto al momento de la acusación del particular, de igual forma, a éste le serán aplicables las mismas reglas previstas para la acusación del Ministerio Público; en este orden de ideas, la carga de la prueba para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad del imputado corresponde al particular que ejerza la acción penal.

La procedencia directa de la acción penal por particulares en los términos planteados en el proyecto de Código, sin duda, implica que por ninguna causa, el particular, de no ser exitoso en su acusación, podrá posteriormente acudir al Ministerio Público a solicitar su intervención para que investigue los mismos hechos. Tampoco es admisible la acusación paralela ante el Ministerio Público por los mismos hechos, ni conjunta, ni subsidiaria.

Asistencia Jurídica Internacional en Materia Penal

En materia de asistencia jurídica internacional, el Ministerio Público dará trámite a las peticiones para dicha asistencia formuladas por autoridades extranjeras en reciprocidad internacional, dándose de esta forma cumplimiento a diversos instrumentos jurídicos internacionales

Considerando el principio de reciprocidad internacional, el Código establece los requisitos que deben contener las solicitudes formuladas por la autoridad extranjera competente para ese efecto, esto es, que la solicitud de asistencia jurídica sea recibida por la vía diplomática y la Secretaría de Relaciones Exteriores la remita para su atención a la Procuraduría General de la República.

En este orden de ideas, se plantea que los documentos que conforman la solicitud de asistencia jurídica deben estar traducidos al español y no requerirán legalización alguna; por su parte, la solicitud del país requirente contendrá la manifestación de que el juez o tribunal resolutor ha tenido competencia para

conocer y juzgar el asunto y que durante el procedimiento se respetaron al sentenciado el derecho de audiencia y el ejercicio de su defensa, así como la manifestación del gobierno extranjero de que ofrece reciprocidad, fundada en su orden jurídico interno, en los casos análogos que le sean presentados por las autoridades mexicanas.

Así mismo, se considera que la ejecución de la solicitud no debe ser contraria al orden jurídico mexicano, como que el delito objeto de la investigación o proceso penal en el extranjero no sea considerado de carácter político, o se trate de delitos del fuero militar no previstos en la legislación penal ordinaria. También, se prevé que la atención de la solicitud no afecte algún proceso penal en curso, la soberanía, la seguridad, el orden público o el interés nacional de nuestro país. Finalmente, en este apartado, se establece que tratándose de solicitudes de ejecución de medidas cautelares, de apremio, cateos domiciliarios u otras medidas coercitivas, la conducta por la que se instruye el proceso penal en el extranjero esté tipificada como delito en nuestro país y se agoten los supuestos exigidos por el derecho mexicano para la ejecución de dichas medidas.

Complementariamente, el Código refiere a los procedimientos para decomiso de bienes, aseguramiento, vigencia, verificación, ejecución de la resolución extranjera, ratificación, oposición de los interesados, audiencias de ley, destino de los bienes decomisados, los exhortos y cartas rogatorias del extranjero.

13. Recursos

Uno de los grandes problemas con algunos de los códigos que ya han sido aprobados por las entidades federativas en México y, con algunas de las iniciativas con Proyecto de Código que se han presentado en la Cámara de Senadores, es que prevén un régimen recursivo conocido como de *doble instancia* es decir, se permite que por la vía del conocimiento de un recurso,

especificamente el de apelación, el Tribunal de alzada reconsidere los casos, incluso, que revalore la prueba que se desahogó en el juicio oral, sin haber estado presente en dicha audiencia. Ello implica el sacrificio del principio de inmediación y conlleva el riesgo de hacer irrelevante el juicio oral porque eventualmente el caso se resolverá, en su integridad, en la segunda instancia.

Debe tenerse presente, que el sistema de recursos es un desarrollo que se dio en la historia del proceso inquisitivo como una forma de control *vertical* de la justicia delegada, es decir, el recurso era el medio por el cual los órganos superiores de administración de justicia, señaladamente las monarquías en la Edad Media, vigilaban la manera en que los jueces inferiores cumplían con mandato delegado. No fue sino hasta entrada la modernidad que el recurso adquirió el carácter de derecho de las partes a una revisión de la sentencia definitiva.

El sistema acusatorio descansa en la idea que, la audiencia de juicio oral es la sede en la que se puede controlar la intervención de todas las partes en el proceso, así como la del juez, de forma tal que para la toma de las decisiones se basa en la racionalización de la información y en la inmediación de quienes presenciaron la prueba. Es justamente en la audiencia en la que se hace efectiva la concreción de todos los principios del proceso acusatorio. Las audiencias son la sede del control de los derechos y de la vigilancia de la legalidad. Esta característica no es compatible con un modelo de revisiones en el que las decisiones definitivas siempre o casi siempre son adoptadas por los tribunales superiores, los cuales tienen poderes para subrogarse a los jueces de primera instancia.

Por ese motivo, el Código establece una regulación de los recursos que permite ser una revisión de los aspectos legales que pudieron haber sido inobservados o aplicados erróneamente, para que se puedan anular aquellos actos procesales

viciosos y, en su caso, repetir el juicio. No obstante, la materia misma del juicio, es decir, la valoración de los hechos propiamente, debe de permanecer intangible.

Con el objeto que el modelo no se convierta en un sistema de revisiones sucesivas, y en el que la metodología prevaleciente sea nuevamente la del expediente, los recursos deben ser limitados en cuanto a sus alcances.

Lo anterior no excluye la posibilidad de una revisión integral de la sentencia, incluso, por lo que hace a sus elementos fácticos. La valoración propiamente dicha no es susceptible de revisión, pero si los enlaces lógicos que lleva a cabo el juez para arribar a la conclusión definitiva, así como la argumentación construida para justificarla y así hacer controlable dicha tarea valorativa. Con ello se garantiza el cumplimiento del Pacto de San José de Costa Rica, según la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contenida en el fallo conocido como Herrera Ulloa contra Costa Rica. En efecto, esta resolución exige que con independencia del nombre que se dé al recurso, debe existir un medio de impugnación para la sentencia definitiva que permita el examen integro de la cuestión planteada; en el entendido que el alcance de la revisión estará determinado por la expresión del agravio. Ello, para preservar los principios de imparcialidad y contradicción que rigen el sistema acusatorio y que conforman elementos esenciales del debido proceso. Por tanto, si se incluyera la facultad de actuar de oficio de cara a la protección de derechos fundamentales a favor del acusado, ésta facultad deberá estar restringida a casos excepcionales en los que, en términos de derechos humanos, el costo de no intervenir compense el sacrificio al debido proceso que implica toda intervención de oficio.

De lo anterior se desprende el por qué el Código contiene cuatro tipos de recursos en contra de decisiones judiciales, a saber:

a. El de **revocación**. Para decisiones de mero trámite, tomadas dentro o fuera de la audiencia; sin que en el primer supuesto haya precedido debate.

b. El de **apelación**. Para decisiones tomadas por jueces de control en etapas preliminares del procedimiento. En tales supuestos, cabe un recurso de plena jurisdicción (doble instancia) porque no se compromete el principio de inmediación en tanto que, la información valorada por el juez de origen –por regla general– no constituye prueba en sentido estricto, sino que se trata de elementos de investigación de los que el Juez tiene noticia, aunque de forma oral, por intermediación de las partes. En este caso, la calidad de la información descansa en el control horizontal de las partes.

c. El de **apelación con efectos restringidos**. Por violaciones al debido proceso ocurridas en la audiencia o manifestadas en la sentencia, incluidos defectos de justificación en la valoración de la prueba, pero sin la posibilidad de sustituir al tribunal de juicio en la valoración directa de los medios de convicción. Ello, con el efecto de anular, en su caso, el juicio y la sentencia para la realización de un nuevo juicio, o sólo la sentencia para que, en función de las circunstancias del caso, se dicte una de reemplazo parcial o total.

d. El de **revisión**. Para examinar, por causas extraordinarias, sentencias que tienen la calidad de cosa juzgada.

Finalmente, en cuanto a la operación del sistema de recursos, se propone establecer de manera expresa que el Tribunal de alzada estará impedido para ordenar que se le envíe la carpeta de investigación. Se trata de una norma que en sentido estricto es innecesaria, pero que conviene incluir en función de la problemática que se ha presentado en la operación de los recursos en algunos Estados que ya han implantado sistemas acusatorios. En todo caso, la excepción

a la regla, que también debería estar prevista, consiste en que las partes muestren al Tribunal la carpeta de investigación en la propia audiencia (es decir, sin envio directo al tribunal), cuando ello sea necesario para evidenciar contradicciones, siempre que también lo hayan hecho ante el tribunal de origen, o se trate de prueba sobre prueba.

El recurso de revisión, permite someter a un nuevo análisis el hecho que ya fue materia de condena bajo alguno de los supuestos que refiere. Entre otros, quedan aquí como posibles, cuestiones relacionadas con lo que anteriormente se denominó como reconocimiento de inocencia; derogación de leyes o de tipos penales cuando ello resulte ser más benigno al condenado; surgimiento de hechos nuevos o pruebas que no fueron analizadas en el proceso que permitan acreditar por si o a través de su análisis conjunto, que los hechos imputados no existieron, o que el condenado no los cometió, o se promulgue una Ley de Amnistia que abarque el supuesto materia de condena, o ésta se haya fundado en pruebas falsas, etcétera.

El recurso de revisión supone que el Tribunal competente para conocer del mismo asumirá para ello jurisdicción, y recibirá las pruebas que acrediten los extremos del supuesto invocado, para resolver sobre su procedencia o no y, en su caso, anular la sentencia condenatoria absolviendo al condenado o reducirla según proceda.

Por último, se hace notar que no se incluyen los recursos de denegada apelación y de queja. En el primer caso, porque el tribunal de origen no está facultado para calificar el recurso, por lo que es innecesario. Y en el segundo, porque se trata de un recurso para fincar responsabilidad administrativa, es decir, no propiamente jurisdiccional, cuya ubicación corresponde a una ley de responsabilidades y no a un Código de Procedimientos Penales.

14. Régimen transitorio

El Código Procesal Penal para la República Mexicana, será el ordenamiento único que aplicará al proceso penal en todo el territorio nacional, de conformidad con las distintas reglas para su aplicación que se prevén en los artículos transitorios.

Para ello, el Código toma en consideración, que hoy día existen en el país algunas entidades federativas que cuentan con códigos acusatorios aplicándolos en la totalidad de su territorio y que, a la vez, existen otras que teniendo códigos acusatorios sólo los aplican en algunas regiones de su territorio o bien, bajo el criterio de delitos. También, considera que en materia federal no existe un código de corte acusatorio en materia procesal penal.

De esta manera, entre otros aspectos, se prevé lo siguiente:

En materia federal, se prevé que la entrada en vigor del Código será gradualmente, y sus disposiciones se aplicarán a los hechos delictivos que ocurran en los Circuitos Judiciales indicados y a partir de las fechas que para ello se precisan.

En caso de entidades federativas que ya cuenten con un código acusatorio que aplique en todo su territorio, la entrada en vigor de éste Código será a los 180 días naturales siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Mientras que, en caso de entidades federativas que cuentan con un código acusatorio pero que éste aplica parcialmente en su territorio bajo alguna de las modalidades establecidas para tal efecto, el Código entrará en vigor en las regiones, delitos o demás modalidades en que ya se aplicaba el Código adjetivo penal de corte acusatorio anterior, dentro de los 180 días naturales siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Para el caso de entidades federativas que no cuenten con un código acusatorio vigente, o en los casos en que se trate de las regiones o delitos en donde no se aplica el código adjetivo penal de corte acusatorio vigente parcialmente en alguna entidad federativa, el Código entrará en vigor en los plazos, modalidades y términos que al efecto se establezca en la declaratoria a que se refiere el párrafo tercero del artículo Transitorio Segundo del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, teniendo como fecha máxima de inicio de vigencia en la totalidad de su territorio las cero horas del día diecinueve de junio de 2016.

Con la entrada en vigor de este Código, atendiendo a las gradualidades mencionadas, el Código Federal de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación, el jueves 30 de agosto de 1934, y los de las respectivas entidades federativas, seguirán rigiendo, en lo conducente, para los hechos ocurridos con anterioridad a la vigencia del presente Código y quedarán abrogados cuando los procedimientos iniciados para el conocimiento de dichos hechos, queden agotados. Así mismo, quedarán derogadas todas las normas que se opongan al presente decreto.

A su vez, no será procedente la acumulación de procesos sobre hechos delictuosos, cuando alguno de ellos esté sometido al presente Código y otro al abrogado.

Se prevé que, en caso de procesos iniciados bajo los códigos que se abrogan, que refieran a hechos delictuosos de carácter permanente, continuo o continuado, los mismos continuarán su desarrollo y tramitación después de la entrada en vigor del presente ordenamiento conforme a lo dispuesto en los códigos citados.

Igualmente se contiene la obligación de las entidades federativas y de la Federación para que en un plazo de seis meses después de publicado el presente

Decreto, publiquen las reformas a sus leyes orgánicas que resulten necesarias para la implementación de este Código.

15. Materias residuales y aspectos excluidos del contenido del Código

Materias Residuales

Uno de los aspectos que distingue a éste Código, no obstante tratarse de un ordenamiento procesal penal de aplicación única para todo el territorio nacional, es que se deja la posibilidad de legislar, tanto a las entidades federativas, como a la federación en determinados aspectos, que no son sino *materias residuales* con respecto a los contenidos del Código; lo que obedece, no sólo, a la desregulación que caracteriza la estructura y contenidos de éste Código, sino también, al reconocimiento de las realidades que se observan en sus respectivos ámbitos de actuación.

Estas facultades residuales, son limitadas a las expresamente previstas en el Código, sin que se entienda comprendida alguna otra de no ser las referidas a las siguientes materias:

1. Legislación orgánica de procuradurías, fiscalías y tribunales de justicia;
2. Regulación de los actos de investigación como tales, tanto del Ministerio Público como de su relación con la Policía y de ésta, a través de Manuales, Protocolos y Normatividad Administrativa;
3. Regulación de la Cadena de Custodia a través de esos Protocolos y Manuales;
4. Regulación en leyes secundarias en lo concerniente a la administración y custodia de bienes asegurados;
5. Determinación de los delitos graves para efectos de detención bajo el supuesto de caso urgente;

120

6. Determinación de los criterios de oportunidad y su aplicación;
7. Determinación y operación de los medios alternativos de solución de controversias; y
8. Ejecución y seguimiento de medidas cautelares.

A su vez, legislar sobre éstas *materias residuales*, no permite un ámbito de actuación plenamente libre para las entidades federativas y la Federación, ya que existe al respecto una base mínima en el Código, que sirve de marco para ello.

Aspectos excluidos del contenido del Código.

Delincuencia Organizada

Por otro lado, considerando que la reforma de 18 de junio de 2008 no sólo estableció las bases claras para un sistema de justicia penal de corte acusatorio, sino que, además trastocó otros aspectos, entre ellos, el relacionado con la delincuencia organizada convirtiéndola en materia federal de conformidad con lo que se estableció en el artículo 73 fracción XXI constitucional al concederle al Congreso de la Unión la facultad de legislar en ese ámbito[60] y que, en la Constitución Política ya se contenían normas específicas en materia de delincuencia organizada[61] a las que, la reforma en cita agregó otras para su observancia en el ámbito del proceso penal, tales como: prisión preventiva

[60] Vid. "Algunas Observaciones Críticas a la Futura Reforma Constitucional, con Especial Mención a la Delincuencia Organizada" en, Homenaje a Ricardo Franco Guzmán (50 años de vida académica). Instituto Nacional de Ciencias Penales, México, 2008. pp. 213 a 219. Del mismo autor, *Nueva Política Criminal para el Combate del Delito de Secuestro (documento de análisis para la discusión de la reforma legal de una Ley General para Prevenir y Sancionar el Delito de Secuestro)*. Colección: Sistema Acusatorio. No. 1. Ubijus, México, 2010. pp. 18 a 29.

[61] Como la duplicidad del plazo de retención de personas detenidas tratándose de delitos de delincuencia organizada que ya se encontraba previsto en el artículo 16 constitucional y que, se mantiene hoy en ese mismo precepto en su décimo párrafo.

oficiosa; la posibilidad de mantener en reserva por decisión judicial y en procesos por delincuencia organizada, el nombre y datos del acusador; el establecimiento por ley, de beneficios para el inculpado, procesado o sentenciado que preste ayuda eficaz para investigar y perseguir este tipo de delitos; así como que actos de investigación puedan tener validez probatoria, si no pueden ser reproducidos en juicio o exista riesgo para testigos o víctimas y, el derecho de las víctimas de resguardar su identidad y otros datos personales[62]; se consideró que la materia de delincuencia organizada debe quedar fuera de los contenidos de éste Código dado su especial tratamiento.

Lo anterior, no solo para evitar que con su inclusión en el Código se contaminen las disposiciones previstas para el proceso penal en casos que no son de delincuencia organizada, sino porque, siendo ésta última de competencia federal, sea el Congreso de la Unión como órgano competente para legislar en la materia el que expida una nueva ley en materia de delincuencia organizada que de manera estructurada y sistemática comprenda los aspectos relacionados con la reforma constitucional de 18 de junio de 2008 y, de manera muy particular los que específicamente se previeron para este tipo de delincuencia.

Procedimiento Simplificado

El Código buscar evitar la sobre-regulación y la generación de figuras procesales excesivas, por ello no se incorporó el procedimiento simplificado. Ello obedece a que, tanto el procedimiento abreviado como aquél comparten la misma naturaleza, al tratarse de trámites procedimentales que se sustentan en la incontroversia de los hechos materia de acusación, lo que torna innecesaria la prueba y en consecuencia, el juicio oral.

[62] vid. los artículos 19 segundo párrafo; 20 Aparatado B, fracciones III y V segundo párrafo y, Apartado C, fracción V, texto creados en la reforma constitucional de 18 de junio de 2008.

Ambos institutos jurídicos, no mantienen una diferencia sustancial entre sí, pues contienen las mismas reglas de tramitación, los mismos requisitos esenciales de procedencia y, los mismos efectos de aceleración y por ende descongestión del sistema como efecto secundario; la diferencia estriba en los casos en que procede uno u otro. Bajo esta perspectiva, se cuestiona: ¿para qué una doble regulación para el mismo procedimiento? Y ¿para qué una doble nomenclatura sobre la misma figura jurídica?

En cualquier caso, este mecanismo de aceleración es lo que da la categoría de procedimiento especial tanto al procedimiento abreviado como al llamado simplificado, al no tratarse de una salida alterna al conflicto penal, cuando en el más puro sentido es una decisión jurisdiccional expresada como sentencia aunque tenga como base la consideración a la negociación en términos de igualdad entre Ministerio Público, el acusado y su defensor.

Se tiene entonces que, a través del procedimiento abreviado se puede sustanciar cualquier tipo de delitos, sin necesidad de crear un procedimiento diverso -como es el caso del simplificado-, so pretexto de: 1) tratarse de ilícitos que tienen contemplada punibilidad diversa; 2) existir violencia en la comisión del delito; 3) permitir la reducción de hasta una mitad o dos terceras partes de la pena mínima que corresponda, según sea el caso; y 4) posibilitar o no la procedencia de beneficios otorgados en la sentencia.

Estas razones, no son suficientes para crear *ex profeso* un instrumento procesal adicional. Por ello, el Código establece cláusulas que posibilitan la unicidad y sencillez, en virtud a las cuales, el procedimiento abreviado: 1) procede en cualquier tipo de delitos; 2) no considera la violencia en el delito, como un elemento diferenciador en el ámbito adjetivo; 3) posibilita al agente del Ministerio Público, solicitar la aplicación de una pena inferior, cuya reducción podrá ser hasta de un tercio menos de la mínima señalada para el delito por el cual acusa; y 4)

123

autoriza al Juez de Control conceder beneficios preliberacionales, cuando los mismos sean procedentes, tomando como base la pena mínima prevista en los códigos sustantivos para el delito de que se trate, de ahí que, la creación de un procedimiento simplificado a la par del abreviado cuando con éste último se resuelven los aspectos considerados pro aquel, resulta carente de sustento.

V. Convocantes, expertos y colaboradores en la elaboración del Código

La Fundación México SOS es una de las organizaciones de la sociedad civil con más amplio prestigio y reconocimiento nacional en la promoción de temas relacionados con la seguridad y la justicia. Dada la trascendencia que tiene esta iniciativa para la sociedad mexicana, a través de esta organización se convocó y coordinó a un grupo de especialistas con amplia experiencia teórica y práctica en la operación del sistema acusatorio mexicano. El Código Procesal Penal para la República Mexicana representa más de dos mil horas de trabajo orientadas a la gestación, desde su concepción, de un Código Único en el que se consideran los principios del sistema acusatorio frente a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en donde se retoma la experiencia de los entidades federativas, lo que establece un proceso penal acorde a la realidad mexicana.

Expertos que participaron en la redacción del Código

Alejandro Ramírez Verdugo. Abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho, miembro de la Comisión de Derecho Penal de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, A.C., Sub-Coordinador de la Comisión Penal de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa; conferencista en materia de proceso penal acusatorio en diversos Estados de la República. Ha participado en el análisis y discusión de

temas relacionados con el nuevo sistema de justicia penal en foros y conferencias en México y en el extranjero (Panamá). Ha sido capacitado en sistema acusatorio en diversos países y por especialistas en litigio penal acusatorio de distintos países (Estados Unidos, Chile, Colombia) al igual que en México. Certificado por SETEC para capacitar en sistema acusatorio. Capacitador a nivel nacional en sistema acusatorio en México, para ministerios públicos, defensores y jueces. Profesor en la Especialidad en Procedimiento Penal Acusatorio en la Escuela Libre de Derecho, del INACIPE; miembro de la Red Nacional a favor de los Juicios Orales y Debido Proceso, y abogado litigante en sistema acusatorio. Socio del Despacho Félix Cárdenas S.C.

Carlos Ríos Espinosa. Es Maestro en Sistemas Penales Comparados por la Universidad de Barcelona y abogado por la Universidad Iberoamericana. Fue Consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito de 2003 a 2011. Ha sido profesor titular de asignatura de diversas universidades, entre ellas, la Universidad Iberoamericana, el ITAM y el CIDE. Ha publicado diversos artículos en materia de justicia penal, de seguridad pública y de derechos humanos en revistas especializadas, y ha libros sobre derecho procesal penal. Desde 2004 Carlos Ríos ha asesorado a diversas entidades federativas de la República, así como a instancias a nivel federal, para la adopción del sistema procesal penal acusatorio. También ha contribuido a la elaboración de leyes estatales en materia de sistemas de responsabilidad juvenil y ha impartido diversos cursos para la implementación del sistema de justicia para adolescentes.

Edgar Cortéz Morales. Abogado en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala y Licenciado en Filosofía y Ciencias Sociales por el Instituto Libre de Filosofía de Guadalajara. Es defensor de Derechos Humanos y ha participado activamente en la capacitación a personal de procuradurías en las entidades federativas en materia de derechos humanos en el sistema penal acusatorio.

125

También ha sido expositor en foros, seminarios y talleres relacionados con la reforma procesal penal en México y ha publicado artículos relacionados con el tema.

Fabio Valdés Bensasson. Abogado por la Universidad Autónoma de Chihuahua, con estudios concluidos en el Master Internacional en Sistemas Penales Comparados. Problemas Sociales y Prevención del Delito por la Universidad de Barcelona, España, Ha recibido cursos y talleres en Seguridad y gobierno impartido por la Policía Nacional de Colombia; en el Nuevo Sistema de Justicia Penal por el Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Chihuahua, Taller Intensivo de Entrenamiento en Argumentación Oral para Juicio impartido por National Institute of Trial Advocacy (NITA).Curso de Especialización en el Sistema de Justicia para Adolescentes impartido por especialistas de Chile y Costa Rica y, para Jueces Orales con la participación de Jueces, Defensores y Fiscales Chilenos. Curso de Justicia Penal Inglaterra y Gales (simulación de Juicios Orales)Reconocimiento otorgado por The President National Center for State Court of Albuquerque, Nuevo México dentro del Programa de Intercambio Judicial de Fronteras Ha sido abogado litigante, agente del ministerio público y jue3z penal del sistema mixto. Juez de Tribunal de Juicio Oral desde la implementación del sistema acusatorio en el Estado Chihuahua. Es miembro del equipo técnico de USAID/PRODERECHO y Director de PRODERECHO. Ha participado en asesorías en la elaboración de leyes reglamentarias y secundarias en los Estados de Morelos, Hidalgo, Baja California, Coahuila, Puebla y Zacatecas relacionado con el sistema acusatorio; también ha impartido capacitación en múltiples programas para Magistrados, Jueces, Defensores, Ministerios Públicos, Policía, Medios de comunicación y Universidades en diversos Estados de la República y Universidades. Actualmente se desempeña como Director General del Centro de Asesoría y Capacitación sobre el Sistema Adversarial Mexicano (CAFSA), fundada en 2010.

126



Jorge Arturo Gutiérrez Muñoz. Es licenciado y maestro en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua, obteniendo mención *Cum Laude*; se ha desempeñado como Juez de Garantía del Distrito Judicial Morelos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua; catedrático en la Universidad Autónoma de Chihuahua, Autónoma de Baja California, Universidad Panamericana, la Escuela Libre de Derecho y el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Es capacitador de aspirantes a jueces en el esquema procesal acusatorio y oral a nivel nacional; capacitador de aspirantes a jueces en el esquema oral en materias civil y mercantil en el Distrito Federal; profesor invitado por Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de diversas entidades federativas; asesor y capacitador de la Unidad Especial para la Implementación de las Reformas Constitucionales en Materia Penal (UNESIRP) del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal; consultor USAID | Programa de Apoyo en Seguridad y Justicia; consultor de American Bar Association, ABA ROLI México. Miembro de la Red Nacional a favor de los Juicios Orales y Debido Proceso y, actualmente es profesor-investigador en el Instituto Nacional de Ciencias Penales.

Jorge Emilio Iruegas Álvarez. Abogado por la Universidad de las Américas-Puebla con especialidad en Derecho Internacional, mención *Cum Laude*. Dentro del Sistema Acusatorio/Adversarial, fue Fiscal en Jefe de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca y participó como Ministerio Público en la primera Audiencia Preliminar, asi como en el primer Juicio Oral en la historia de Oaxaca; fue Consultor Técnico del Programa PRODERECHO/USAID para la implementación de la Reforma Penal en México; fungió como Asesor del C. Procurador General de Justicia de Baja California en temas relacionados con la implementación, capacitación, operación y evaluación de la reforma procesal respecto de la implementación del sistema acusatorio en dicho Estado; ha

participado en la redacción de Códigos Procesales de Corte Acusatorio/Adversarial en el país, y en la formación y capacitación dentro del nuevo sistema de justicia penal de policías investigadores, ministerios públicos, defensores y jueces en los estados de Oaxaca, Chihuahua, Morelos, Zacatecas, Hidalgo, Baja California, Coahuila y Puebla, así como de cadetes de la Policía Federal, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Defensoría Pública Federal y Províctima. Actualmente, además de ser Director Ejecutivo del Centro de Asesoría y Formación en el Sistema Adversarial CAFSA, se desempeña como consultor externo del Programa de Seguridad y Justicia de USAID, American Bar Association/ABA ROLI México, Institución RENACE, MEXICO S.O.S y es miembro de la Red Nacional a favor de los Juicios Orales y Debido Proceso.

Jorge Nader Kuri, Abogado por la Universidad La Salle con grado de Maestro en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, con Mención Honorífica. Desde el inicio de su carrera profesional se ha dedicado al estudio y ejercicio del Derecho Penal, como litigante, académico y en los últimos años como servidor público. Fue Director de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle durante nueve años, etapa en la que, por virtud del decreto de 18 de junio de 2008, llevó a cabo la modificación del Plan de Estudios de la licenciatura para incorporar los temas del sistema penal acusatorio, puso en marcha el aula de prácticas para juicios orales y creó la Maestría en Justicia Penal, con énfasis en el sistema acusatorio. Integrante de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y de otras instituciones. Ha participado en el análisis y discusión de los temas relacionados con el nuevo sistema de justicia penal en foros, conferencias y artículos diversos. Ha sido Director General Adjunto de Estudios y Proyectos Normativos y, Director General de Planeación Capacitación y Difusión de la Secretaría Técnica para la Implementación del Sistema de Justicia Penal SETEC, elaborando proyectos normativos, siendo el responsable de la emisión de los programas de capacitación para actores y operadores del sistema de justicia penal

128

l y de certificación docente de la SETEC hasta el año 2012.

Pablo Héctor González Villalobos. Es licenciado en Derecho. Cursó y acreditó los periodos de docencia e investigación del programa de doctorado en derecho de la Universidad de Navarra. Fue profesor ayudante de filosofia del derecho en la Universidad de Navarra. Maestro en derecho corporativo en el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua. Ha sido profesor de teoria del derecho, de filosofía del derecho, de derecho penal, de derecho procesal penal y de técnicas de litigio oral en el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua, en la Facultad de Derecho de la UACH y en el Centro de Formación y Actualización Judicial del Poder Judicial de Chihuahua. Es Magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua. Ha publicado recensiones, artículos y ensayos sobre filosofia del derecho y derecho procesal penal en revistas especializadas de España y México. Obtuvo la certificación por méritos como capacitador de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. Ha participado, como expositor, en los programas de capacitación para operadores del nuevo sistema de justicia penal en los estados de Morelos, Guanajuato, Baja California, Yucatán, Hidalgo y Michoacán. En estos cinco últimos estados contribuyó a la capacitación de los magistrados penales. Es presidente de la Comisión de Derecho Penal de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C., Capítulo Chihuahua.

Rodolfo Félix Cárdenas. Abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho con mención honorifica, Maestro en Constitución, Derechos Humanos y Derecho Penal por la Universidad Autónoma de Barcelona, Doctorando en Derecho Penal por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, España. Profesor en diversas instituciones académicas y Universidades del país, Miembro supernumerario de la Academia Mexicana de Ciencias Penales A.C., de la comisión penal de la Barra Mexicana Colegio de Abogados; Coordinador de la

Comisión Penal de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa y otras organizaciones. Ex Procurador General de Justicia del Distrito Federal. Ha sido capacitado en sistema acusatorio en diversos países y por especialistas en litigio penal acusatorio de distintos países (Estados Unidos, Chile, Colombia) al igual que en México. Certificado por SETEC para capacitar en sistema acusatorio. Capacitador a nivel nacional en sistema acusatorio en México, para ministerios públicos, defensores, jueces y policía de investigación. Conferencista sobre temas del sistema acusatorio en México y en distintos países (Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, España, Venezuela). Autor de diversos artículos y publicaciones especializadas en materia penal y procesal penal; Coordinador y Profesor en la Especialidad en Procedimiento Penal Acusatorio en la Escuela Libre de Derecho; Profesor de Derecho Procesal penal (Sistema Acusatorio) en la Escuela Libre de Derecho y en el Taller de Casos del Sistema Acusatorio en la Universidad Iberoamericana. Miembro de la Red Nacional a favor de los Juicios Orales y Debido Proceso. Abogado litigante en sistema acusatorio. Socio del Despacho Félix Cárdenas S.C. Socio fundador del Despacho Félix Cárdenas S.C. dedicado al litigio en materia penal tanto en el sistema vigente, como en el sistema acusatorio.

Salvador Sandoval Silva. Licenciado en derecho por la UNAM. Maestría en Política Criminal por la UNAM. Especialidad en Ciencias Penales INACIPE, diversidad de cursos en materias de proceso penal y procuración de justicia. Ha sido agente del Ministerio Público de la Federación en diversas áreas de PGR; Jefe de Unidad Fiscal Especializado en PGR; Director General Jurídico en materia de delitos electorales y, Director General de Averiguaciones Previas en materia de delitos electorales.

Susana G. Camacho Maciel. Es Abogada por la Escuela Libre de Derecho, Especialista en derecho penal fiscal por el INACIPE y Maestra en Derecho Penal

130

y Procesal Penal por la Universidad de Sevilla, España. Fue becaria del programa "Chevening Fellowship" en la Universidad de Birmingham, Reino Unido, y es certificada por el "Programa Interamericano de Capacitadores para la Reforma Procesal Penal" por el Centro de Estudios de Justicia para las Américas (CEJA) realizado en Santiago y Viña del Mar, Chile. En el ámbito de la reforma procesal penal en México, fue Directora de Estudios Legislativos en la Oficina de la Presidencia de la República y participó en la redacción de la iniciativa presidencial de reformas al sistema de seguridad pública y justicia penal que se presentó en 2004; en la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue asesora sobre estudios legislativos; se desempeñó como consultora nacional del CEJA para la elaboración del estudio sobre la implementación de la reforma penal en el Poder Judicial Federal; colaboró en la redacción del Código Procesal Penal Modelo de CONATRIB; participó en el diseño del paquete integral de reformas legislativas del Estado de Michoacán; asimismo se desempeñó como Directora General Adjunta de Coordinación Interinstitucional de la SETEC; ha participado en la redacción de diversas leyes relacionadas con la implementación de la reforma de justicia penal.

Colaboradores y Organizaciones Sociales

Al grupo redactor de la presente iniciativa, se han sumado como colaboradores importantes personalidades, organizaciones sociales e instituciones interesadas en la implementación de un sistema más justo y transparente.

Colaboradores

Alejandro Martí. Doctor Honoris Causa por la Universidad La Salle por su mérito en la lucha a favor de la Seguridad y justicia. Recibió el Premio Woodrow Wilson por su activismo Social en beneficio de México, noviembre de 2011. Miembro del consejo consultivo de la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos "Províctima" que procura la atención de víctimas de la delincuencia a nivel

131

nacional, puesto confirmado por el Presidente de la República. Es Presidente y Fundador de México SOS, que ha otorgado voz a los ciudadanos mexicanos a lo largo de la República Mexicana. SOS ha sido impulsor de la implementación a nivel nacional de la Reforma Penal constitucional, procurando un sistema judicial confiable y justo; así como promotor de Políticas Públicas y leyes que mejoren la Seguridad de los Ciudadanos y eliminen la impunidad y corrupción en el sistema judicial, tales como: Ley General Anti secuestro, Ley de Geolocalización, Ley de Amparo y la Ley General de Víctimas, entre otras.

Orlando Camacho Nacenta. Es médico Veterinario Zootecnista por la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha sido Director General del Instituto Mexicano para la Excelencia Educativa A.C. Es creador del programa de radio "Historias de todos" que se transmite diariamente en Radio Centro y del cual fue conductor por 4 años. Ha colaborado en la creación de programas y acciones que han favorecido la inclusión educativa en nuestro país. Actualmente es Director General de la Fundación México SOS donde destacan la coordinación del pacto ciudadano "Mi voto por tu compromiso"; la creación, dirección e implementación de la Red Ciudadana SOS, que comprende observatorios ciudadanos y mesas de seguridad y justicia, conformadas por líderes ciudadanos, empresarios y autoridades locales, con la finalidad de crear una agenda compartida para mejorar la seguridad y justicia; la coordinación, organización y promoción de los 4 foros de Seguridad y Justicia a favor de la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal; la promoción e impulso para la aprobación de diversas leyes federales entre las que se encuentran: Ley de Geolocalización, Ley General a favor de las víctimas de Secuestro. Reforma Política, Ley General de Víctimas, entre otras. Fue coordinador e impulsor de la Agenda México 12.18, que compila las principales acciones a realizar para la transformación de la seguridad y la justicia del país, firmada y legitimada por más de 40 organizaciones y expertos

132

especialistas en estos temas. Es convocante y coordinador del grupo de especialistas participantes en la elaboración directa del presente Código.

Leticia Aguiar Meugniot. Es licenciada en Filosofía con mención honorífica por la Universidad La Salle. Ha realizado diplomados sobre Análisis y Estrategia Política en el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y en la Universidad Iberoamericana. Ha realizado estudios, ponencias y ensayos en torno a la cultura cívica, democracia, legalidad y participación ciudadana. Entre sus publicaciones destacan: coordinación de Demos *ante el espejo. Análisis de la Cultura Política y Participación Ciudadana en México;* Cultura *de la legalidad y participación ciudadana;* y Confianza *y participación ciudadana: motores clave para el desarrollo democrático.* Se ha desempeñado como Enlace Intersecretarial con el Gabinete de Desarrollo Social y Humano de la Coordinación General de Comunicación Social de la Presidencia de la República; Directora de Cultura Democrática de la Dirección General de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación y Encargada de la Dirección General de Cultura Democrática y Fomento Cívico de la Secretaría de Gobernación. Actualmente colabora como Coordinadora de Cultura Ciudadana de la Fundación México SOS.

Alejandro González Gómez. Licenciado en Derecho, Universidad Michoacana (1988, mención honorífica) estudios de maestría, con especialidad en Derecho penal, Universidad Michoacana, (1992). Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1996, apto *cum laude* por unanimidad). Investigador nacional 1999-2001, Sistema Nacional de Investigadores CONACYT. Magistrado de la Primera Sala Penal, Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, 2002 a la fecha. Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, 2010-2013 (febrero). Presidente fundador del Consejo para

Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Michoacán, 2010-2013 (febrero).

Ana Pamela Romero Guerra. Licenciada en Derecho y especialista en Derecho Penal por la Universidad Nacional Autónoma de México., con estudios de Doctorado en Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Perito en Criminalística por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Se especializó en investigación empirica en el Diplomado en Metodología de la Investigación Social en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Capacitadora en sistema acusatorio acreditada por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA- 2008) y certificada por méritos por la SETEC-SEGOB (2010-actual). Investigadora de tiempo completo y catedrática del Instituto Nacional de Ciencias Penales (2008- actual). Ha desempeñado diversos trabajos en el ámbito jurídico, entre los que destaca el de analista legal de las iniciativas federales en la Dirección de Estudios Normativos de la Consejeria Jurídica del Ejecutivo Federal, en el cual participó en la reforma constitucional en materia de justicia penal. Se ha especializado en la teoría y práctica de la prueba, así como en la investigación científica del delito y la construcción de la teoría del caso. Ha realizado estancias de investigación en la ciudad de Nueva York, E.U.A. y en París, Francia para realizar estudios comparados sobre diferentes aspectos del sistema de justicia penal. Es autora y coautora de diversas publicaciones en materia de sistema penal acusatorio y ha capacitado agentes del Ministerio Público, defensores, policías y peritos en varias ciudades del país. Actualmente se desempeña como Profesora-Investigadora en el Instituto Nacional de Ciencias Penales.

Anabell Chumacero Corral. Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y Maestra en Procuración y Administración de Justicia por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Capacitadora certificada por la Agencia Española para la Cooperación Internacional y el Desarrollo (AECID), la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia del País (CONATRIB) y la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC). Se ha desempeñado como Jueza de Garantía y coordinadora de Jueces de Garantía en Ciudad Juárez, Chihuahua. Ha capacitado a los aspirantes a jueces en el modelo acusatorio y oral en materia penal, en los Estados de Baja California, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Puebla, Tabasco, Yucatán y Zacatecas. Ha impartido cátedra en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y en la Universidad Autónoma de Guadalajara, con sede en Villahermosa Tabasco. Asimismo, participó en la Mesa Redactora del nuevo Código Procesal Penal Acusatorio del Estado de Tabasco. Actualmente es Directora General de la Administración del Sistema Acusatorio en el Poder Judicial del Estado de Tabasco.

Alejandro Magno González Antonio. Licenciado en Derecho por la Universidad ISEC. Curso de capacitación para Jueces de Garantía y de Juicio Oral sobre el proceso penal adversarial.Maestro en Ciencias Penales por el INACIPE. Ha sido Juez del Tribunal de Juicio Oral en el Estado de Oaxaca, y, fue el Titular del órgano de Implementación para la reforma Constitucional penal del sistema acusatorio en el Estado de Oaxaca. Profesor y autor de diversos artículos relacionados con el sistema acusatorio adversarial.

Arturo L. León De La Vega. Magistrado de la Tercera Sala Penal del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Miembro de la Comisión Redactora del Código Procesal Penal de corte acusatorio, del Estado de Oaxaca. Realizó

estudios del Sistema Acusatorio en Cali, Colombia y en Santiago de Chile. Becario del Aula Iberoamericana en la Escuela Judicial de Barcelona, España. Capacitador certificado por méritos de la SETEC. Ha realizado funciones de capacitación sobre sistema acusatorio en diversos Estados de la República y especialmente en Oaxaca. Es autor de diversas obras jurídicas sobre sistema acusatorio.

Cynthia Matadamas Cruz. Es Abogada por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca con Maestría en Ciencias Penales por el INACIPE. Cuenta con Especialización en Juicio Oral otorgada por el H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, es Docente Certificada en el Sistema Acusatorio por la SETEC y fue certificada por el Departamento de Policía de Los Ángeles, California en lo relativo a Persecución y Coordinación en la Investigación Criminal. En el plano profesional, se desempeñó como Agente del Ministerio Público dentro del Sistema Acusatorio/Adversarial en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca tanto en la Región del Istmo y como en la Mixteca, y en el estado de Baja California fue Ministerio Público Consultor de la Procuraduría General de Justicia participando en ambas entidades de forma directa en más de 70 audiencias de juicio. Al respecto ha participado como ponente, capacitadora e instructora de jueces, ministerios públicos, policías y abogados en diversas entidades del país y el extranjero en temas relacionados a la reforma procesal penal. Actualmente es Subprocuradora Especializada en Justicia para Adolescentes en el estado de Oaxaca.

Emilio Rabasa P. Gamboa. Abogado y Doctor en Derecho por la UNAM. Profesor de Derecho constitucional en la UNAM, UAM, ITESM, ITAM y en la Universidad Iberoamericana. Fundador del primer salón de clases de juicios orales en el ITESM. Autor de la pre iniciativa del artículo 20 constitucional. Es docente e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es miembro de la Red Nacional a Favor de los Juicios Orales.

136

Ernesto Canales. Ernesto Canales Santos. El Lic. Ernesto Canales Santos realizó sus estudios profesionales de Derecho en la Escuela Libre de Derecho (Suma Cum Laude) en la Ciudad de México y continuó sus estudios de postgrado en Columbia University (Maestría en Derecho Comparado), Stanford University, Universidad de Texas e Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Administración y Negocios). Ha tenido una amplia práctica profesional como abogado de empresas y postulante y como árbitro en litigios internacionales. Es socio fundador del Despacho Canales y Socios Abogados, S.C. Es miembro de los Consejos de Administración de Xignux, S.A. de C.V., Axa Seguros, S.A. de C.V., Banco Nacional de México, S.A. (Consejo Consultivo Región Norte), Internacional de Inversiones, S.A. de C.V., Emprendedores Inmobiliarios Delta, S.A. de C.V., Terralta Dos, S.A. de C.V. e Inmobiliaria Holbox. Actualmente el Lic. Canales es Cónsul Honorario del Reino de Tailandia en Monterrey; Fundador y Coordinador de la Red Nacional de Organizaciones Civiles de Apoyo a los Juicios Orales y el Debido Proceso; Miembro de los Consejos de Institución Renace, A.B.P., Fundación Luis Barragán, Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Fundación Juan Soriano y del Instituto Mexicano para la Justicia, A.C. El Lic. Canales ha escrito en diversas publicaciones profesionales, así como en periódicos y revistas de prestigio; igualmente ha prologado varios libros sobre el Sistema Penal Acusatorio. Frecuentemente le invitan a participar en Foros y Conferencias Profesionales, así como en programas de televisión nacional para discutir cuestiones legales relevantes. Ha recibido premios y reconocimientos de parte del Centro Mexicano para la Filantropía, A.C. – Compromiso con los Demás 2009; Visionaris UBS – Emprendedor Social 2011; Ashoka - Emprendedor Social 2012; Iniciativa México 2012 – Proyecto Justicia para Todos; Asociación Nacional de Abogados de Empresa; Barra Mexicana de Abogados; Eugenio Garza Sada 2012 - Categoría Personas y Luis Elizondo 2012 – Categoría Humanitario; SELIDER 2012 – Por su trayectoria al servicio de la comunidad.

137

Ernesto López Saure. Licenciatura en Derecho en la Universidad Tecnológica de México; Máster en Derecho Penal, por la Universidad Autónoma de Barcelona, (2002-2004). Estudios de Doctorado en Derecho Penal en la Universidad de Barcelona, certificado por méritos de la SETEC, profesor de diversas universidades del país en el sistema acusatorio. Has sido Visitador General y Subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Subprocurador Regional de la Zona del Itsmo de Tehuantepec y, actualmente es Subprocurador General de Justicia del Estado de Oaxaca. Ha sido designado como el Coordinador para la Implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en las Regiones que aun no lo tienen en el Estado de Oaxaca.

Fernando Coronado Franco. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, estudios de maestría y doctorado con especialidad en derecho penal por la Universidad Nacional Autónoma de México. Investigador del INACIPE, profesor de la UNAM, UAM, fue Asesor del Tercer Visitador en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.Actualmente se desempeña como Consultor General Jurídico de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Gerardo A. Carmona Castillo. Licenciado en derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y doctor en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM y del INACIPE, Miembro de la comisión redactora del nuevo Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca. Magistrado integrante de la Segunda Sala Penal del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca.

Gabriela Ortíz Quintero. Abogada por la Universidad de Guadalajara con Master en Derecho y Litigación Oral por la *Southwestern Law School* en Los Ángeles,

California. Certificada del Programa Peruano de Capacitación en la Reforma Procesal Penal a través del Centro de Estudios de Justicia de las Américas y Especialista en Derechos Humanos por la Universidad del País Vasco. Actualmente realiza un posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad de Palermo en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Ha participado en cursos de litigación oral y de formador de formadores en el *National Institute for Trial Advocacy* tanto en los Estados Unidos como en México. Como capacitadora, igualmente ha trabajado en temas de litigación oral tanto en México, Perú y en la Argentina. Ha sido colaboradora con la USAID en los procesos de reforma procesal penal en México a través de los programas de Estado de Derecho (*Rule of law*) como coordinadora estatal e instructora de la reforma procesal penal y litigación oral. Participó cercanamente en los procesos de reforma en los estados de Zacatecas, Morelos, Oaxaca, Baja California y Jalisco en la República mexicana, desempeñándose como capacitadora de jueces, agentes del ministerio público, defensores y policías. Actualmente forma parte del staff de capacitadores de la *American Bar Association*, del Centro de Asesoría y Formación en el Sistema Adversarial S.C. (CAFSA) en México y del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) en Argentina.

Hugo Alejandro Concha Cantú. Licenciado en derecho por la UNAM, maestro en relaciones internacionales por la *Johns Hopkins University* y candidato a doctor en Ciencia Política por la *University of Washington*. Desde 1994 es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM así como profesor de derecho constitucional y sociología jurídica en varias universidades incluyendo actualmente el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Sus intereses tanto académicos como profesionales han girado en torno a la justicia y la democracia en México, y las instituciones encargadas de materializar estos principios. Además de su vida académica se ha desempeñado como consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial, y como servidor público en varias dependencias

139

gubernamentales. De 2005 a 2010, ocupó diversas posiciones dentro del Instituto Federal Electoral, principalmente como Director Ejecutivo de Capacitación y Educación Cívica, Vocero y encargado de la Secretaría Ejecutiva. De febrero de 2010 a enero de 2013 fue Coordinador de Asesores de la Secretaría Técnica para la Implementación del nuevo sistema de Justicia Penal y a partir de marzo de 2010, Coordinador de Asesores del Procurador General de la República. Es fundador y director de la Revista "Reforma Judicial. Revista mexicana de justicia", que en la actualidad es coeditada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ).

Israel Alvarado Martínez. Tiene estudios de Doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en Ciencias Penales y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) y en Administración y Gobierno del Poder Judicial por el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en colaboración con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ha sido Consejero de la Judicatura del Distrito Federal; Titular de la Unidad Especial para la Implementación de las Reformas Constitucionales en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (UNESIRP) y, Miembro del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el Distrito Federal. Actualmente es Profesor Investigador Invitado del INACIPE.

Iván de la Garza Santos. Licenciado en Derecho por la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Maestro en Derecho Público por la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública del Tecnológico de Monterrey. Maestro en Gobernabilidad y Gestión Pública por la Instituto Universitario Ortega y Gasset. Candidato a Doctor en Derecho Constitucional por la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Funcionario de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León (PGJNL) desde 2004.

140

Miembro del Comité Implementador de la reforma penal en la PGJNL. Actualmente es Director General de Atención Ciudadana y Justicia Penal Alternativa de la PGJNL.

Jahaziel Reyes Loaeza, Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Juez de Debate del Tribunal de Juicio Oral, Maestro en Ciencias Penales por el INACIPE, certificado por méritos de la SETEC, Catedrático en la especialidad de *juicio oral-sistema acusatorio adversarial* en el Instituto de Capacitación del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Ha sido designado en fecha reciente como Titular del órgano de Implementación para la reforma Constitucional penal del sistema acusatorio en el Estado de Oaxaca. Autor de diversos libros y artículos relacionados con el tema.

Luis F. Azaola Calderón. Licenciado en Derecho por la UNAM, aspirante a Doctor por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con certificación de la SETEC como capacitador en sistema acusatorio. Profesor del INACIPE y de diversas universidades del país en especialidades y maestrías relacionadas con el sistema acusatorio adversarial. Ha sido capacitado en sistema acusatorio en diversos países y por especialistas en litigio penal acusatorio de distintos países (Estados Unidos, Chile, Colombia) al igual que en México. Profesor en la Escuela Libre de Derecho en la especialidad en Sistema Acusatorio. Autor de diversos libros y artículos relacionados con el tema de sistema acusatorio adversarial. Abogado litigante de la firma Félix Cárdenas S.C., en sistema acusatorio.

Luis Fernando Pérez Hurtado. Es Licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana en la Ciudad de México, Maestro en Derecho por la Universidad de Harvard y la Universidad de Stanford y Doctor en Derecho por la Universidad de Stanford. Ha sido profesor de cátedra en la Universidad de Monterrey, la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Tecnológico de Monterrey, Campus

Monterrey. Fundador, director e investigador del Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho, A.C. (CEEAD), dedicado a la investigación independiente sin fines de lucro para mejorar la calidad de la educación jurídica y el ejercicio del Derecho en México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel 1. Ha trabajado en diversas firmas de abogados en México y New York. Actualmente se dedica a las actividades del CEEAD con enfoque en el tema de la reforma de justicia penal, y con el fortalecimiento de alumnos y capacitación de profesores a través de programas diseñados con su colaboración capacitando en la enseñanza del sistema acusatorio a más de 400 profesores en aproximadamente 130 escuelas de Derecho ubicadas en 10 Estados del país.

Luis Jorge Gamboa Olea. Licenciado en Derecho por el Centro Internacional de Estudios Superiores de Morelos. Maestría en Política Criminal por el INACIPE. Es capacitador certificado por CONATRIB, uno de los dos jueces a nivel nacional certificado por AECID (agencia española de cooperación internacional para el desarrollo), como capacitador de capacitadores, es capacitador certificado por la SETEC y es Juez de Primera Instancia, de Tribunal oral y de Ejecución de Morelos. Ha participado en seminarios y conferencias sobre temas relacionados con el sistema acusatorio en México como en el extranjero.

Marco Antonio Carrillo Maza. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con Maestría en Administración Pública en la Universidad del Sur de California, Maestría en Estudios Latinoamericanos por Georgetown University, estudios de Maestría en Economía en el ITAM y de Educación en la UPN, siendo además Doctor en Administración Pública por la Universidad LaSalle. Recibió el título de desarrollador económico por la Universidad de Oklahoma. Y como Green Belt en Six Sigma por la empresa Sony. Fue Director de Vinculación, de Posgrado y Vicerrector Académico de CETYS

Universidad en Baja California, ha sido catedrático diferentes instituciones de México y el extranjero y es autor de diversos articulos y libros en temas de valores y seguridad pública. Fue miembro del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, Vicepresidente de la Academia Nacional de Ciencias Administrativas y Consejero de COPARMEX en materia de Seguridad en Baja California. Como funcionario público laboró en el CISEN en la Dirección de Análisis en México y en la Embajada de México en Washington, DC. En la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California como Director de Prevención y como Subsecretario del Sistema Estatal de Seguridad, actualmente es el Director General de Seguridad Publica del Municipio de Mexicali, Baja California, ciudad en la cual tiene vigencia a partir de agosto del 2010 la reforma procesal penal.

María Alejandra Ramos Durán. Licenciada en Derecho y Maestría en Criminalística Ministerial por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Cuenta con estudios de postgrado en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y actualmente es candidata a doctora por la Universidad Autónoma de Chihuahua, en coordinación con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es capacitadora del nuevo sistema de justicia penal certificada por la SETEC. Formó parte de la comisión formada por la CONATRIB para elaborar y difundir el Código Modelo del Proceso Penal Acusatorio para los Estados de la Federación. Ha sido coordinadora de la Subprocuraduría Zona Centro, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua; coordinadora de Jueces de Garantía en Chihuahua, Chihuahua y Directora del Centro de Formación y Actualización Judicial del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua. Ha participado como docente y conferencista en diversas ciudades del Estado de Chihuahua y del país organizadas por diversas instituciones como CONATRIB, SETEC, Poderes Judiciales y Procuradurías de diversos Estados, Universidades Públicas y

Privadas y el Poder Judicial Federal. Actualmente es Jueza de Garantía del Distrito Judicial Morelos del Estado de Chihuahua.

María Luisa García Serrano. Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California y, Maestra en Ciencias Jurídico Penales en el Centro Universitario de Tijuana. Postgrado en Criminología en la Universidad de Salamanca, España. Mediadora Certificada por la Empresa Management System International. Participante en el Seminario Teórico-Práctico de Justicia Restaurativa en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de la Plata en Buenos Aires, Argentina, y en la "Clínica de Mediación" de la Facultad de Derecho de Universidad de Buenos Aires. Ha participado en debates relacionados con el Sistema de Mediación en el ámbito de la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas, organizado por el Consejo de la Magistratura de Buenos Aires, Argentina. Cuenta con un Diplomado en Gobierno Local Seguridad y Justicia por la Escuela de Estudios Superiores de la Policía Nacional de Bogotá, Colombia. Participante en Congresos y Seminarios Internacionales sobre Justicia Restaurativa y Mediación Penal en Burgos, España; Bogotá, Colombia y Asunción, Paraguay. Directora del Sistema Estatal de Justicia Alternativa Penal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California. Actualmente funge como Delegada en México de la Sociedad Científica de Justicia Restaurativa de Burgos, España.

María Maltos Rodríguez. Licenciada en Derecho y Maestra en Derecho Penal por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Diplomada en Sistema Acusatorio Oral por la UACh y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, así como en Procesos de Intervención para una Docencia Centrada en el Aprendizaje, por la misma Universidad.Capacitada como Mediadora y Formadora de Mediadores por el Programa de Apoyo al Estado de Derecho en México. Facilitadora de Procesos Restaurativos por la Policía de Surrey, Inglaterra y la

144

Embajada Británica en México. Capacitadora en "Estrategias para Sanar el Trauma y Aumentar la Resiliencia" (STAR), por Centro para la Justicia y Construcción de la Paz de la Universidad Menonita del Este de Virginia, Estados Unidos. Certificada como Docente en el Nuevo Sistema de Justicia Penal por la SETEC. Catedrática en la Universidad Autónoma de Chihuahua, en la Universidad Autónoma de Durango y en el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal. Se ha desempeñado como consultora en el Programa de Apoyo al Estado de Derecho en México y el Programa de Apoyo en Seguridad y Justicia, ambos de USAID.

Perla Guadalupe Ruiz González. Licenciada en Derecho y Maestra en Derecho Penal por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Pasante del Máster Internacional en Sistema Penales Comparados y Problemas Sociales, impartido por la Procuraduria General de Justicia del Estado de Chihuahua, en coordinación con la Universidad de Barcelona. Cuenta con una especialidad en el Sistema de Justicia para Adolescentes Infractores y diversos diplomados en el Sistema Penal Acusatorio, en Derechos Humanos, Violencia de Género, y en curso en los estudio de Maestría en Amparo. Ha impartido cátedra en la Universidad Autónoma de Chihuahua y en la Licenciatura en Procuración y Administración de Justicia de la Procuraduría General de Justicia de este Estado. Se ha desempeñado como docente de agentes del Ministerio Público, agentes policiales y abogados postulantes en Chihuahua, Durango, Hidalgo, Tlaxcala y Zacatecas. Colaboró como redactora para el Diplomado en Justicia para Adolescentes en línea, organizado por REJEM, AECID y CONATRIB. Se ha desempeñado como agente del Ministerio Público y coordinadora de las unidades especializadas de investigación en delitos diversos y robos en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua. Con el sistema acusatorio y, actualmente es Jueza Especializada en Justicia para Adolescentes con sede en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua.

145

Rafael Heredia Rubio. Ha participado en la elaboración de más de cinco proyectos de ley penal y procesal penal locales y federales. Ha sido catedrático de derecho penal de la Universidad iberoamericana y de la Facultad de Derecho de la UNAM. Participó directamente en el documental de "Presunto culpable" en apoyo a la reforma constitucional penal de 2008.

Rigoberto González Nava. Abogado por la Universidad Iberoamericana, con estudios de maestría en Comercio Internacional en el Tecnológico de Baja California y de Derecho Corporativo Internacional en CETYS Baja California. Diplomado sobre el Sistema Acusatorio, Litigación Oral y Experiencias Latinoamericanas por la Universidad de Santo Tomás en Bogotá, Colombia y, en Derecho Administrativo por la Universidad Autónoma de Baja California. Participante dentro del Curso de Litigación Oral impartido por Phoenix School of Law y del Curso Intensivo sobre el sistema acusatorio adversarial mexicano dirigido a Mandos Medios y Superiores de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, además de haber participado en diversos cursos impartidos por expertos relacionados con este tema por USAID/PRODERECHO. Fue abogado postulante y catedrático a nivel universitario en el Estado de Baja California, así como coordinador de la escuela de Derecho del Centro de Estudios Técnicos y Superiores del Noroeste y Director de la escuela de Derecho del Tecnológico de Baja California. Fungió como Asesor del C. Procurador General de Justicia del Estado de Baja California y representante de la PGJE en la Comisión Interinstitucional para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia en Baja California. Actualmente es Titular del Instituto de Capacitación y Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia de Baja California, habiendo desarrollado la matriz de capacitación integral para profesionalizar Ministerios Públicos, Policía Ministerial, Peritos y expertos en Métodos Alternos para la operación de la reforma procesal penal en dicha entidad federativa.

146

Verónica Batiz Álvarez, es Maestra en Derecho por la UNAM. En el Sistema de Justicia Penal es egresada del curso de actualización en el sistema de Justicia Penal Adversarial impartido por la American Bar Association. Fue Directora General Adjunta de Capacitación de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, participando en la elaboración de programas de capacitación y certificación para operadores del sistema.

Organizaciones Sociales que apoyan esta Iniciativa

México SOS

Red Nacional a Favor de los Juicios Orales

Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CIDAC)

Renace

Centro de Asesoria y Formación en el Sistema Adversarial

Consultoria Integral y Evaluación en el Sistema Adversarial

Observatorio Nacional Ciudadano

México Evalúa

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia

Instituto Mexicano del Juicio Oral

Jurimetría

Fundación Internacional para el Desarrollo de Gobiernos Confiables

Consejo Civico de Instituciones en Nuevo León (CINLAC)

México Unido Contra la Delincuencia

147



INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE EL CÓDIGO PROCESAL PENAL PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Centro de Estudios para la Gobernabilidad Institucional del IPADE Business School.

Escuela Libre de Derecho

Facultad de Derecho de la Universidad La Salle

Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal

Integralia

Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán

Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del DF

Observatorio Ciudadano de Prevención, Seguridad y Justicia de Chihuahua

Causa en Común

Asociación Nacional de Abogados de Empresa

Consejo Cívico de Instituciones Laguna

Red Social de Victimología

Consejo de Seguridad de Coatzacoalcos

Observatorio Ciudadano Coatzacoalcos

Observatorio Ciudadano con Seguridad de Oaxaca

Juarenses por la Paz

Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez

Parametría

Comisión Unidos vs. Trata

Universidad José Vasconcelos de Oaxaca

Mesa de Seguridad y Justicia de Los Cabos

Mesa de Seguridad y Justicia de Tijuana

Mesa de Seguridad y Justicia de Valle de Bravo

148

Michoacán SOS

Observatorio Ciudadano de León

Ángel Ciudadano de Cancún

Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla

Iluminemos México

Mexicanos Primero

Convivencia sin Violencia

Fundación NEMI

Por lo Derecho

Appleseed México

Sociedad en Movimiento

Movimiento Blanco

Red Social por un México Libre de Adicciones

Fundación Camino a Casa

Reintegra

Generación con Valores

Vinculación de Redes de Acción Local para la Transformación Nacional (VIRAL)

Por lo anterior, someto a consideración de esta Asamblea, el siguiente Proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL CÓDIGO PROCESAL PENAL PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

149

ÚNICO. Se expide el Código Procesal para la República Mexicana, para quedar como sigue:

CÓDIGO PROCESAL PENAL PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

TÍTULO I PRINCIPIOS Y DERECHOS

CAPÍTULO ÚNICO Principios y derechos

Artículo 1. Características y principios rectores.

El proceso penal será acusatorio y oral; en él se observarán los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, con las excepciones que la Constitución y las leyes establezcan.

Salvo que la Ley disponga otra cosa, todas las peticiones o planteamientos de las partes que, por su naturaleza o importancia, deban ser debatidas, requieran producción de prueba, se resolverán en audiencia.

Artículo 2. Principio de publicidad.

Las audiencias durante el proceso serán públicas, con el fin de que a ellas acceda el público en general. Los representantes de los medios de comunicación que expresen su voluntad de presenciar la audiencia, tendrán un privilegio de asistencia frente al público, con las excepciones previstas en este Código.

Artículo 3. Principio de contradicción.

Las partes podrán conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte, con las excepciones previstas en este Código.

150

Artículo 4. Principio de concentración.

En las audiencias las partes podrán debatir y el juez o tribunal deberá resolver los planteamientos formulados por aquéllas, con las excepciones previstas en este Código.

Artículo 5. Principio de continuidad.

El desarrollo de las audiencias será en forma continua, sucesiva y secuencial, preferentemente en un mismo día o en días consecutivos hasta su conclusión en los términos previstos en este Código, sin detrimento del derecho de defensa y del fin del proceso.

Artículo 6. Principio de inmediación.

Toda audiencia se desarrollará íntegramente en presencia del Juez o Tribunal, así como de las partes que deban de intervenir en la misma, con las excepciones previstas en este Código. El Juez o Tribunal no podrá delegar en ninguna persona la admisión, el desahogo y la valoración de las pruebas.

Cuando se garantice debidamente la identidad de los deponentes, testigos o sujetos que intervienen en el proceso solo en los casos de reserva previstos en este Código, la videoconferencia en tiempo real u otras formas de comunicación que se produjeren con nuevas tecnologías pueden ser utilizadas para la recepción y transmisión de medios de prueba y la realización de actos procesales.

Artículo 7. Igualdad ante la Ley.

Todas las personas son iguales ante la Ley y deben ser tratadas conforme a las mismas reglas.

Los juzgadores, el Ministerio Público y las policías deben tomar en cuenta las condiciones particulares de las personas y del caso. No deberán fundar sus decisiones sobre la base del origen étnico o la nacionalidad, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, credo o la religión, las opiniones, ideas políticas, las preferencias, el estado civil o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, posición económica o social u otra condición con implicaciones discriminatorias. Dichos servidores públicos deberán equilibrar las condiciones de desigualdad de los intervinientes. Asimismo, estarán obligados a la adopción de ajustes razonables para que las personas con discapacidad puedan participar en el proceso.

En el contexto del proceso penal, se entenderá por ajustes razonables, las adecuaciones necesarias que faciliten el desempeño de las funciones efectivas de las personas con discapacidad como intervinientes, incluida la declaración como testigos, en todos los procedimientos, así como en la etapa de investigación.

Artículo 8. Igualdad entre las partes.

Se garantiza a las partes, en condiciones de igualdad, el pleno e irrestricto ejercicio de las facultades y derechos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y los Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano.

Artículo 9. Responsabilidad de ejercer la acción penal.

La acción penal corresponde al Estado a través del Ministerio Público, quien está obligado a ejercerla, salvo las excepciones legales y sin perjuicio de la participación que este Código concede a la víctima u ofendido. Al Ministerio Público le incumbe su preparación para fundar y sostener la acusación o determinar el no ejercicio de la acción.

152

Su ejercicio no podrá suspenderse, interrumpirse ni hacerse cesar salvo expresa disposición legal en contrario.

Artículo 10. Carga de la prueba.

La carga de la prueba para demostrar la responsabilidad penal siempre corresponde a la parte acusadora.

Artículo 11. Presunción de inocencia.

El imputado deberá ser considerado y tratado como inocente en todas las etapas del proceso, mientras no se declare su responsabilidad penal por sentencia firme, conforme a las reglas establecidas en este Código. En caso de duda se estará a lo más favorable para el imputado.

Nadie podrá presentar a una persona como culpable, ni brindar información sobre ella en ese sentido, hasta la sentencia firme. En los casos de quienes se encuentren sustraídos a la acción de la justicia, se admitirá la publicación de los datos indispensables para su aprehensión por orden judicial.

Artículo 12. Juicio previo y debido proceso.

Nadie podrá ser condenado a una pena ni sometido a una medida de seguridad, sino después de una sentencia firme obtenida luego de un proceso tramitado con arreglo a este Código y con observancia estricta de las garantías y derechos previstos para las personas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

Artículo 13. Protección de la intimidad.

Se respetará el derecho a la intimidad del imputado y de cualquier otra persona, especialmente la libertad de conciencia, el domicilio, la correspondencia, los

153

papeles y objetos; así como, en general, las comunicaciones privadas. El cateo, decomiso o intervención sobre cualquiera de ellos, sólo podrá realizarse con autorización del Tribunal competente.

Ninguno de los intervinientes en el proceso podrá divulgar a personas ajenas, datos sensibles o información personalísima de la víctima u ofendido, imputado o testigos y esta prohibición se mantendrá incluso después de terminado el proceso.

Los registros de las audiencias serán públicos, no obstante deberán ser protegidos los datos personales así como la imagen de víctima, testigos e imputado.

Artículo 14. Justicia pronta.

Toda persona tendrá derecho a ser juzgada y a que se le resuelva en forma definitiva acerca de la imputación que recae sobre ella, dentro de los plazos que establece este Código. Se reconoce al imputado y a la víctima u ofendido, el derecho a exigir pronto despacho frente a la inactividad de la autoridad.

Los servidores públicos de las instituciones de procuración e impartición de justicia deberán atender las solicitudes de las partes con prontitud, sin causar dilaciones injustificadas.

Artículo 15. Justicia alternativa.

En los asuntos del orden penal se privilegiarán los mecanismos de justicia alternativa.

Artículo 16. Inviolabilidad de la defensa.

La defensa es un derecho inviolable en toda etapa del proceso. Corresponde a los Tribunales garantizarla sin preferencias ni desigualdades.

Toda autoridad que intervenga en los actos iniciales del proceso deberá velar porque el imputado conozca los derechos que, en esa condición, prevén la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y los Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano.

Artículo 17. Defensa técnica.

Desde el momento de su detención o comparecencia en calidad de imputado ante la policía, el Ministerio Público o la autoridad judicial y hasta el fin de la ejecución de la sentencia que imponga una pena o medida de seguridad, el imputado tendrá derecho a ser asistido y defendido por un licenciado en derecho o abogado, autorizado en los términos de la Ley.

El derecho a la defensa técnica es irrenunciable y su violación producirá la nulidad absoluta de las actuaciones que se deriven de ella.

Integra el derecho a la defensa, el derecho del imputado a comunicarse libre y privadamente con su defensor y a disponer del tiempo y de los medios razonables para prepararla, de acuerdo a la naturaleza del acto procesal de que se trate. Las comunicaciones entre el imputado y su defensor son inviolables, y no podrá alegarse, para restringir este derecho, la seguridad de los centros penitenciarios, el orden público o cualquier otro motivo.

Los derechos y facultades del imputado podrán ser ejercidos directamente por el defensor, salvo aquellos de carácter personal, o cuando exista una limitación a la representación legal o prohibición en la Ley.

Se procurará que los miembros de pueblos o comunidades indígenas a quienes se impute la comisión de un delito, cuenten además con un defensor que posea conocimiento de su lengua y cultura, así como de sus usos y costumbres.

Artículo 18. Derecho al respeto de la libertad personal.

155

Toda persona tiene derecho a que se respete su libertad personal, por lo que nadie podrá ser privado de la misma, sino en virtud de mandamiento dictado por la autoridad judicial o en los casos expresamente autorizados.

La autoridad judicial sólo podrá autorizar como medidas cautelares restrictivas de la libertad establecidas en la ley, mismas que serán de carácter excepcional y su aplicación se regirá en los términos previstos en este Código.

Artículo 19. Única persecución.

La persona condenada, absuelta o cuyo proceso haya sido sobreseído por sentencia ejecutoriada, no podrá ser sometida a otro proceso penal por el mismo hecho. Tampoco podrán seguirse a la vez en contra de una misma persona dos o más procesos por el mismo hecho.

Sin embargo, será admisible una nueva persecución penal, cuando la primera persecución haya sido desestimada por defectos en su promoción o en su ejercicio.

El procedimiento realizado por una autoridad disciplinaria o por un procedimiento administrativo no inhibirá la persecución penal derivada del mismo hecho.

Artículo 20. Prueba.

Cualquier hecho puede ser probado por cualquier medio, siempre y cuando sea licito.

Las pruebas serán valoradas por los jueces según la sana crítica, observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia.

Los antecedentes de la investigación recabados con anterioridad al juicio carecen de valor probatorio para fundar la sentencia definitiva, salvo las excepciones expresas previstas por este Código.

Artículo 21. Interpretación restrictiva.

Deberán interpretarse restrictivamente las disposiciones legales que coarten o restrinjan de cualquier forma, incluso cautelarmente, la libertad personal, limiten el ejercicio de un derecho conferido a los sujetos del proceso y establezcan sanciones procesales o exclusiones probatorias.

Artículo 22. Aplicación de principio o derecho del imputado.

La inobservancia de principios o derechos establecidos en favor del imputado no podrán hacerse valer en su perjuicio.

TÍTULO II COMPETENCIA

CAPÍTULO I Competencia

Artículo 23. Objeto del proceso.

En el desarrollo del proceso penal y la actuación de los sujetos procesales que intervienen en él, de acuerdo a sus respectivas atribuciones, se regirán por los principios y garantías procesales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados y Convenios Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, en este Código y en otras leyes penales federales.

El proceso será acusatorio y oral, y tendrá por objeto esclarecer los hechos motivo de la acusación y determinar la culpabilidad o inocencia de su autor o partícipe; asimismo, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune y así como la reparación del daño causado.

157

Artículo 24. Jurisdicción penal.

Es facultad propia y exclusiva de la autoridad judicial de la Federación y de las entidades federativas la imposición de las sanciones penales, su modificación y duración, por los delitos de su competencia de conformidad con el presente Código.

Artículo 25. Competencia.

Es Tribunal competente para conocer de un delito el que ejerza jurisdicción en el lugar en donde éste se cometa.

Artículo 26. Competencia por delitos cometidos en el extranjero.

En los casos de los articulos 2, 4 y 5, fracción V, del Código Penal Federal, será competente el Tribunal en cuya jurisdicción territorial se encuentre el imputado, pero si éste se hallare en el extranjero, será competente el que ejerza jurisdicción en el Distrito Federal ante quien el Ministerio Público ejerza la acción penal.

Artículo 27. Competencia por delitos cometidos a bordo de buques y aeronaves.

En los casos de las fracciones I y II del artículo 5 del Código Penal Federal, es competente el juez o tribunal a cuya jurisdicción corresponda el primer punto del territorio nacional a donde arribe el buque, y en los casos de la fracción III del mismo artículo, el juez o tribunal a cuya jurisdicción pertenezca el puerto en que se encuentre o arribe el mismo.

Las mismas reglas serán aplicables en los casos análogos a los delitos a que se refiere la fracción IV del artículo 5 del Código Penal Federal.

Artículo 28. Competencia por delitos continuados y continuos o

158

permanentes.

Será competente para conocer de los delitos continuados y de los continuos o permanentes, el Tribunal, en cuyo territorio aquéllos produzcan efectos o se hayan realizado actos constitutivos de tales delitos ante quien el Ministerio Público ejercite la acción penal.

Artículo 29. Competencia en caso de conexidad.

El Ministerio Público Federal tendrá competencia para conocer de los delitos del fuero común que tengan conexidad con delitos federales, asimismo los tribunales federales tendrán competencia para juzgarlos.

Artículo 30. Competencia por razón de seguridad.

Será competente para conocer de un proceso, un Tribunal distinto al del lugar de la comisión del delito, o al que resultare competente con motivo de las reglas antes señaladas, cuando atendiendo a las características del hecho, por razones de seguridad en las prisiones o por otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso, el Ministerio Público considere necesario ejercer la acción penal ante otro Tribunal.

Lo anterior es igualmente aplicable para los casos en que, por las mismas razones la autoridad judicial, a petición de parte, estime necesario trasladar a un imputado a algún centro de reclusión de mayor seguridad, en los que será competente el Tribunal del lugar en que se ubique dicho centro.

Artículo 31. Competencia territorial.

La competencia territorial de los jueces que ejerzan funciones de control y de juicio, se establecerá de acuerdo a lo dispuesto por las leyes orgánicas de los poderes judiciales y demás disposiciones aplicables.

159

Artículo 32. Competencia auxiliar.

La autoridad judicial que se considere incompetente para conocer de un proceso, después de haber practicado los actos procesales más urgentes, remitirá los registros de la audiencia a la autoridad judicial que estime competente, quien previa audiencia se pronunciará si admite o no la competencia.

Artículo 33. Carácter improrrogable.

La competencia de los jueces en materia penal es improrrogable y se rige por las reglas previstas en las leyes orgánicas de los poderes judiciales y demás disposiciones que resulten aplicables.

Artículo 34. Medios de promoción.

Las partes, podrán promover una cuestión de competencia. Lo anterior sin perjuicio de la facultad delos jueces de examinar de oficio su propia competencia.

Artículo 35. Reglas de decisión de competencia.

Para decidir cuestiones de competencia se observarán las siguientes reglas:

A) Las que se susciten entre jueces de la Federación se decidirán conforme a las reglas previstas en este Código o en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y si hay dos o más competentes a favor del que haya prevenido;

B) Las que se susciten entre los jueces de la Federación y los de las entidades federativas, se decidirán por la autoridad competente que al efecto determine la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, declarando el fuero en que radica la jurisdicción;

160

C) Las que se susciten entre los tribunales de entidades federativas distintas se decidirán conforme a las leyes de esas entidades, si tienen la misma disposición respecto del punto jurisdiccional controvertido. En caso contrario, se decidirán conforme a lo dispuesto en la fracción II del inciso D) de este artículo; y

D) Las que se susciten entre tribunales de una misma entidad federativa se decidirán de conformidad con lo siguiente:

I. Los tribunales tendrán competencia sobre los hechos punibles cometidos dentro de la demarcación territorial en la que ejerzan sus funciones de acuerdo a su ley orgánica, salvo las excepciones previstas en este Código. Si existen varios jueces en una misma demarcación, dividirán sus tareas de modo equitativo, conforme la distribución establecida al efecto;

II. Cuando no conste el lugar donde se cometió el delito serán competentes, en el orden siguiente:

a) El Juez o Tribunal de la jurisdicción en que se descubran pruebas materiales del delito;

b) El de la jurisdicción donde el imputado sea aprehendido;

c) El de la residencia del imputado; y

d) El que prevenga.

III. Cuando se trate de delitos cometidos fuera dela entidad federativa que se sigan cometiendo en éste o surtan sus efectos en la misma, será competente la autoridad judicial en cuya jurisdicción se continua cometiendo el delito o surtió sus efectos; o

161

IV. Para conocer de los delitos continuos, es competente cualquier autoridad judicial en cuya jurisdicción se hayan ejecutado actos que por sí solos constituyan el o los delitos imputados.

Cuando los detenidos fueren reclamados por autoridades de dos o más entidades federativas y no hubiere conformidad entre las autoridades requirentes y la requerida, la Suprema Corte de Justicia de la Nación hará la declaración de preferencia. También resolverá lo procedente, en el caso de que la autoridad requerida se niegue a expedir un exhorto conforme a la ley, para la aprehensión de un imputado.

Artículo 36. Efectos de la resolución que dirime la competencia. Dirimida la competencia, el imputado, en su caso, será puesto inmediatamente a disposición del Tribunal competente, así como los registros que obren en poder de los demás jueces que hubieran intervenido.

Será válido todo lo actuado por las autoridades hasta la resolución que declara la incompetencia.

CAPÍTULO II Acumulación y separación de procesos

Artículo 37. Causas de acumulación.

Habrá acumulación de procesos en los siguientes casos:

A) Cuando se trate de hechos distintos atribuidos a un mismo imputado;

B) Cuando exista conexidad de delitos. Hay conexidad de delitos cuando:

I. Se trate de concurso de delitos;

II. Los hechos imputados hubieran sido cometidos simultáneamente por una o varias personas reunidas o cuando hubieran sido cometidos en distintos lugares o tiempos, siempre y cuando hubiese mediado un propósito común y acuerdo previo;

III. Uno de los hechos punibles hubiera sido cometido para perpetrar o facilitar la comisión de otro o procurar a un partícipe o a otros, el provecho o la impunidad; o

IV. Los hechos punibles imputados hayan sido cometidos recíprocamente.

Artículo 38. Competencia en la acumulación.

Será competente para conocer de todos los procesos que deban de acumularse, si se siguen por diversos Tribunales, el de la competencia del fuero que corresponda de conformidad con el artículo 35 (reglas de competencia), y en caso de que persista la duda el que conociere del delito que mereciere mayor pena y si los delitos merecieren la misma pena, el que conociere de los actos procesales más antiguos, y si éstos comenzaron en la misma fecha, el que hubiere prevenido primero. Se considerará que ha prevenido quien haya dictado la primera providencia o resolución del proceso.

Artículo 39. Término para la acumulación.

La acumulación podrá decretarse hasta antes de que se dicte el auto de apertura del juicio.

Artículo 40. Substanciación de la acumulación.

Promovida la acumulación, el Tribunal competente citará a las partes a una audiencia que deberá tener lugar dentro de los tres días siguientes, en la que podrán manifestarse y hacer las observaciones que estimen pertinentes respecto

de la cuestión debatida y sin más trámite, resolverá en la misma lo que corresponda.

Artículo 41. Efectos de la acumulación.

Si se resuelve la acumulación, se ordenará requerir al Tribunal donde se deba acumular la remisión de los registros y, en su caso, que ponga a su disposición inmediatamente al imputado o imputados, o bien que notifique a aquéllos que tienen una medida cautelar diversa a la prisión preventiva la obligación de presentarse en un término perentorio ante el Tribunal competente y notifique a la víctima u ofendido si hubiere.

Artículo 42. Separación de procesos.

Podrá ordenarse la separación de procesos cuando concurran las siguientes circunstancias:

I. Que la pida alguna de las partes antes del auto de apertura al juicio; y

II. Que el juez estime que de continuar la acumulación el proceso se demoraría.

La separación sólo podrá decretarse a petición de parte y la resolución del Tribunal que declare no haber lugar a la separación, no admitirá recurso alguno.

Decretada la separación, conocerá de cada asunto el Tribunal que conocía antes de haberse efectuado la acumulación. Si dicho Tribunal fuere diverso del que decretó la separación no podrá rehusarse a conocer del caso, sin perjuicio de que pueda suscitarse una cuestión de competencia.

La separación de procesos se promoverá en la misma forma que la acumulación. La separación se podrá promover hasta antes del debate de juicio.

CAPÍTULO III Impedimentos, recusaciones y excusas

Artículo 43. Excusa o recusación.

Los jueces y magistrados deberán excusarse o podrán ser recusados para conocer de los asuntos en que intervengan, por cualquiera de las causas de impedimento que se establecen en las leyes orgánicas de los poderes judiciales, mismas que no podrán dispensarse por voluntad de las partes.

Artículo 44. Excusa.

Cuando un Juez o Magistrado estimen cierta y legal la causa de impedimento, sin audiencia de las partes se declararán separados del proceso. Sólo en caso de conflicto con el Juez o Magistrado que recibe el proceso, conocerá de ello el superior jerárquico, de conformidad con la ley orgánica del poder judicial correspondiente.

Artículo 45. Recusación.

Cuando el Juez o Magistrado no se excuse a pesar de tener algún impedimento, procederá la recusación.

La recusación debe interponerse ante el propio Juez o Magistrado recusado por escrito dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a que se tuvo conocimiento del impedimento. Se interpondrá oralmente si se conoce en el curso de una audiencia y en ella se indicará bajo pena de inadmisibilidad, la causa en que se justifica y los medios de prueba pertinentes.

Toda recusación que fuere notoriamente improcedente o fuere promovida en forma extemporánea, será desechada de plano.

Artículo 46. Actos urgentes.

El juez que se excusa y el juez recusado que admita la causa de recusación sólo podrán practicar los actos urgentes, que no admitan dilación.

Artículo 47. Efectos.

Será válido todo lo actuado por las autoridades hasta la resolución que declara la existencia del impedimento que originó la excusa o recusación.

TÍTULO III ACTOS PROCESALES

CAPÍTULO I Formalidades

Artículo 48. Oralidad de las actuaciones procesales.

Las audiencias se desarrollarán de forma oral, pudiendo auxiliarse con documentos o cualquier otro medio. En la práctica de las actuaciones procesales se utilizarán los medios técnicos disponibles que permitan imprimir mayor agilidad y fidelidad, sin perjuicio de conservar registro de lo acontecido.

Artículo 49. Idioma.

Los actos procedimentales deberán realizarse en idioma español, observándose lo siguiente:

I. Cuando una persona que deba intervenir en un acto procedimental no comprenda o no se exprese con facilidad en español, se le brindará la ayuda necesaria para que el acto se pueda desarrollar en este idioma. Tratándose del imputado, éste deberá ser auxiliado para comunicarse con su defensor en las entrevistas que con él mantenga.

II. Deberá proveerse a petición de parte o de oficio traductor o intérprete, según corresponda, a las personas que no hablen o no entiendan el idioma español, a quienes se les permitirá hacer uso de su propia lengua o idioma, así como a quienes tengan algún impedimento para darse a entender.

166



III. El imputado podrá nombrar traductor o intérprete de su confianza, por su cuenta.

IV. Si se trata de una persona con algún tipo de discapacidad, tiene derecho a que se le facilite un intérprete o, aquellos medios tecnológicos que permitan obtener de forma comprensible la información solicitada o, a falta de éstos, a alguien que sepa comunicarse con ella.

En los actos de comunicación, deberán los tribunales tener absoluta seguridad de que la persona con discapacidad no solo haya sido impuesta formalmente de las decisiones jurisdiccionales que deba conocer, sino que comprenda su alcance. Para ello deberá utilizarse el medio que, según el caso, garantice que tal comprensión se ha dado.

V. Cuando a solicitud fundada de la persona con discapacidad o a juicio de la autoridad competente sea necesario adoptar otras medidas para salvaguardar su derecho a ser debidamente asistido, la persona con discapacidad podrá recibir asistencia en materia de estenografía proyectada, en los términos de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, por un intérprete de lengua de señas o a través de cualquier otro medio que permita una adecuada asistencia.

VI. Los documentos y las grabaciones en un idioma distinto al español deberán ser traducidos y a fin de dar certeza jurídica sobre las manifestaciones del declarante se dejará registro de su declaración en el idioma de origen.

VII. En el caso de los miembros de pueblos o comunidades indígenas, se les nombrará intérprete que tenga conocimiento de su lengua y cultura, aun cuando hablen el español, si así lo solicitan. En los procedimientos en los que intervengan personas que aduzcan tener la calidad de indígenas, la misma se acreditará con la sola manifestación de quien la haga.

Artículo 50. Declaraciones e interrogatorios con intérpretes y traductores.

Las personas serán interrogadas en idioma español o cuando corresponda mediante la asistencia de un traductor o intérprete.

El juez podrá permitir, expresamente, el interrogatorio directo en otro idioma o forma de comunicación, pero, en tal caso, la traducción o la interpretación procederán a cada pregunta o respuesta.

En ningún caso, las partes o los testigos podrán ser intérpretes.

Artículo 51. Lugar.

El Tribunal celebrará las audiencias y debates en la sala de audiencias, excepto si ello puede provocar una grave alteración del orden público o no garantiza la defensa de alguno de los intereses comprometidos en el juicio u obstaculiza seriamente su realización, en cuyo caso se celebrarán en el lugar que para tal efecto designe el Tribunal y bajo las medidas de seguridad que éste determine conforme lo establezcan las leyes.

Artículo 52. Tiempo.

Salvo disposición legal en contrario, los actos procedimentales podrán ser realizados en cualquier día y a cualquier hora, sin necesidad de previa habilitación. Se registrará el lugar, la hora y la fecha en que se cumplan. La omisión de estos datos no hará nulo el acto, salvo que no pueda determinarse, de acuerdo con los datos del registro u otros conexos, la fecha en que se realizó.

Artículo 53. Resguardos.

Cuando se pretenda utilizar registros de imágenes o sonidos, se deberá conservar el original en condiciones que aseguren su inalterabilidad.

Artículo 54. Registros de actuación.

Cuando uno o varios actos de la policía, del Ministerio Público o del juez deban hacerse constar, se registrarán por escrito, audio, video, fotografía o cualquier otro soporte, que garantice fidedignamente su reproducción, dejándose constancia de la hora, fecha y lugar de su realización.

Los actos se documentarán por escrito sólo cuando este Código lo exija en forma expresa o en aquellos casos en que no pueda utilizarse otro medio para dejar constancia de la actuación realizada.

Artículo 55. Regla general.

Cada acto de investigación se registrará por separado, y será firmado por quienes hayan intervenido. Si no quisieren o no pudieren firmar se imprimirá su huella digital. En caso de que esto no sea posible o la persona se niegue a imprimir su huella, se hará constar el motivo.

Si antes de que se pongan las firmas o huellas, los comparecientes hicieren algunas modificaciones o rectificaciones, se harán constar inmediatamente, expresándose los motivos que dicen tener.

Artículo 56. Acceso a los registros de audiencias.

Los intervinientes siempre tendrán acceso al contenido de los registros de las audiencias, salvo las excepciones expresamente previstas en la Ley.

Los registros podrán también ser consultados por terceros cuando dieren cuenta de actuaciones que fueren públicas de acuerdo con la Ley, a menos que, durante el proceso el Tribunal restrinja el acceso para evitar que se afecte su normal sustanciación o el principio de presunción de inocencia.

A petición de un interviniente o de un tercero, en los casos que así lo permita la Ley, el funcionario competente del Tribunal expedirá copias de los registros o de la

169

parte de ellos que le fueren solicitados, con sujeción a lo dispuesto en los párrafos anteriores.

CAPÍTULO II Audiencias

Artículo 57. Disposiciones comunes.

Salvo casos de excepción que prevea este Código, el proceso se desarrollará mediante audiencias. Las cuestiones debatidas en una audiencia deberán ser resueltas en ella.

Artículo 58. Desarrollo de las audiencias.

En las audiencias siempre deberá estar presente el Juez. Tratándose de ausencia del agente del Ministerio Público, el imputado o su defensor, la víctima u ofendido o su asesor jurídico se procederá en los términos que este código señale.

Antes y durante las audiencias, el imputado tendrá derecho a comunicarse con su defensor, pero no con el público. Si infringe esa disposición, el juzgador podrá imponerle una corrección disciplinaria. Si alguna persona del público se comunica o intenta comunicarse con alguna de las partes, será retirada de la audiencia y se le podrá imponer una corrección disciplinaria.

Toda persona que altere el orden en la audiencia será acreedora a una corrección disciplinaria sin perjuicio de su retiro de la sala de audiencias y su puesta a disposición de la autoridad competente. El orden en las audiencias, estará a cargo del juez.

Artículo 59. Identificación de declarantes.

Antes de las audiencias, se llevará a cabo la identificación de cualquier persona que vaya a declarar, la cual deberá proporcionar su nombre, apellidos, estado civil, oficio o profesión, domicilio y, en su caso, el vínculo de parentesco con el imputado. Dicho registro lo llevará a cabo el personal auxiliar de la sala.

170



INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE EL CÓDIGO PROCESAL PENAL PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Artículo 60. Restricciones para el acceso.

El Juez o Magistrado que presida la audiencia podrá por razones de orden o seguridad en el desarrollo de la misma, prohibir el ingreso a:

I. Personas armadas, salvo que cumplan funciones de vigilancia o custodia;

II. Personas que porten distintivos gremiales o partidarios, o

III. Cualquier persona que porte objetos peligrosos o prohibidos o que no observen las disposiciones del juez o del tribunal.

El Juez o Tribunal podrá limitar el ingreso del público a una cantidad determinada de personas, según la capacidad de la sala de audiencia, así como de conformidad con las disposiciones en materia de seguridad que dicte el Juez o Tribunal.

En el caso de representantes de los medios de comunicación que expresen su voluntad de presenciar la audiencia, el Juez o Tribunal preguntará a las partes su postura y en caso de admitir su presencia, procurará ubicarlos en un lugar adecuado para el ejercicio de sus funciones, pero la toma del rostro de la víctima u ofendido, de los testigos y del imputado, así como la divulgación de sus datos personales o la transmisión simultánea, oral o audiovisual de la audiencia o su grabación con esos fines, requieren la autorización previa del Juez o Tribunal , el consentimiento del Ministerio Público, del imputado, su defensor y, si estuviere presente, de la víctima u ofendido.

El Juez o Magistrado señalará en cada caso las condiciones en que se ejerce el derecho a informar y podrá prohibir mediante resolución fundada y motivada, la grabación, fotografía, edición o reproducción de la audiencia.

Artículo 61. Inmediación.

171

Las audiencias se realizarán con la presencia ininterrumpida del Juez o Tribunal y, salvo disposición expresa en contrario, de las partes que intervienen en el proceso.

Artículo 62. Ausencia o abandono de las audiencias.

En el caso de que estuvieren designados varios defensores o varios agentes del Ministerio Público, la presencia de cualquiera de ellos bastará para celebrar la audiencia respectiva.

Si el defensor no comparece a la audiencia o se aleja de la misma sin causa justificada se considerará abandonada la defensa y se procederá a su reemplazo inmediato por un defensor público, salvo que el imputado designe de inmediato otro defensor.

Cuando el abandono de la defensa ocurriere poco antes o durante la audiencia, si lo solicita el nuevo defensor para la adecuada preparación de la defensa del imputado, se podrá prorrogar su comienzo o suspenderse la ya iniciada por un plazo máximo de diez días.

Si el agente del Ministerio Público no comparece a la audiencia o se aleja de la misma, se procederá a su reemplazo dentro de la misma audiencia, para tal efecto se notificará por cualquier medio a su superior jerárquico para que lo sustituya de inmediato por otro agente, quien dispondrá del tiempo estrictamente necesario para que se imponga del asunto y se reanude la audiencia.

Artículo 63. Deberes de los asistentes.

Quienes asistan a la audiencia deberán permanecer respetuosamente y no podrán introducir instrumentos que permitan grabar imágenes de video, sonidos o gráficas, tampoco podrán portar armas o elementos aptos para molestar u

ofender, ni adoptar un comportamiento intimidatorio, provocativo, contrario al decoro, ni alterar o afectar el desarrollo de la audiencia.

Artículo 64. De las correcciones disciplinarias.

El Tribunal para asegurar el orden en las audiencias o restablecerlo cuando hubiere sido alterado, así como la observancia de sus decisiones en audiencia podrá aplicar indistintamente cualquiera de las correcciones disciplinarias:

I. Apercibimiento;

II. Multa de uno a cien salarios mínimos;

III. Expulsión de la sala de audiencia;

IV. Desalojo público de la sala de audiencia; y

V. Arresto hasta por treinta y seis horas.

Si el infractor fuere el Ministerio Público, el imputado, su defensor, la víctima u ofendido, o el acusador coadyuvante, y fuere necesario expulsarlos de la sala de audiencias, se aplicarán las reglas conducentes para el caso de su ausencia.

En caso de que, a pesar de las medidas adoptadas, no pueda reestablecerse el orden, quien preside la audiencia la suspenderá hasta en tanto se encuentren reunidas las condiciones que permitan continuar con su curso normal.

Salvo lo dispuesto en este código para el abandono de la defensa, cuando se compruebe que las partes o sus asesores han actuado con evidente mala fe, han realizado gestiones o han asumido actitudes dilatorias o litigado con temeridad, faltado el respeto al juez o a los intervinientes en las audiencias o alterado el orden, la autoridad judicial sancionará la falta, imponiendo alguna de las correcciones disciplinarias previstas en este artículo, dependiendo de su gravedad.

173

Artículo 65. Hecho delictivo en audiencia.

Si durante la audiencia se advierte que existen elementos que hagan presumir la existencia de un hecho punible distinto del que constituye la materia del proceso, el juez lo hará del conocimiento del Ministerio Público competente y le remitirá el respectivo registro correspondiente.

Artículo 66. Registros de las audiencias.

Todas las audiencias previstas en este Código serán registradas por cualquier medio tecnológico de reproducción, privilegiándose la grabación en audio y video.

La grabación o reproducción de imágenes o sonidos se considerará como parte de las actuaciones y registros y se conservarán en resguardo de los poderes judiciales para efectos del conocimiento de otros órganos distintos que conozcan del mismo proceso y de las partes.

Artículo 67. Asistencia del imputado a las audiencias.

El imputado asistirá a la audiencia libre en su persona. Sin embargo, cuando se requiera de medidas especiales de seguridad, el juez determinará los mecanismos necesarios para garantizar el adecuado desarrollo de la audiencia, impedir la fuga o la realización de actos de violencia de su parte o contra su persona. Si el imputado estuviere en libertad, bastará su citación para su presencia en el debate.

Artículo 68. Oralidad.

Las audiencias se desarrollarán de manera oral. Las resoluciones del juez serán pronunciadas oralmente, con expresión de sus fundamentos y motivaciones, quedando todos notificados de su emisión y constarán luego en el registro correspondiente en los términos previstos en este Código para cada caso, sin perjuicio de observar lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 70 de este Código (resoluciones judiciales).

Artículo 69. Intervención en la audiencia.

En las audiencias el imputado podrá defenderse por sí y por medio de un licenciado en derecho o abogado, con cédula profesional, que hubiera designado como defensor.

El Ministerio Público, el imputado o su defensor, así como la víctima u ofendido y su representante, podrán intervenir y replicar cuantas veces lo autorice el Tribunal.

El imputado y su defensor podrán hacer uso de la palabra en último lugar, por lo que el juez que preside la audiencia preguntará siempre al imputado, antes de cerrar el debate o la audiencia misma, si quiere hacer uso de la palabra, concediéndosela en caso afirmativo.

CAPÍTULO III Resoluciones judiciales.

Artículo 70. Resoluciones judiciales.

La autoridad judicial pronunciará sus resoluciones en forma de sentencias y autos. Dictará sentencia para decidir en definitiva y poner término al proceso y autos en todos los demás casos.

Las resoluciones judiciales deberán mencionar la autoridad que resuelve, el lugar y fecha en que se dictaron y demás requisitos que este Código prevea para cada caso.

Las resoluciones judiciales serán emitidas oralmente y cuando constituyan actos de privación o de molestia deberán transcribirse.

En ningún caso, la resolución escrita deberá modificar el sentido de la emitida oralmente.

Artículo 71. Firma.

Las resoluciones escritas serán firmadas por los jueces o magistrados.

175

No invalidará la resolución el hecho de que el juzgador no la haya firmado oportunamente, siempre que la falta sea suplida y no exista ninguna duda sobre su participación en el acto que debió suscribir, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria.

Artículo 72. Copia auténtica.

Cuando por cualquier causa se destruya, se pierda o sea sustraído el original de las sentencias o de otros actos procesales, el original del instrumento en que consten tendrá el valor de aquellos.

Para tal fin, la autoridad judicial ordenará, a quien tenga la copia, que se la entregue, sin perjuicio del derecho de obtener otra gratuitamente.

La reposición también podrá efectuarse utilizando los archivos informáticos o electrónicos del Tribunal.

CAPÍTULO IV Comunicación entre autoridades.

Artículo 73. Regla general.

El juez o el Ministerio Público de manera fundada y motivada, podrán solicitar el auxilio a otra autoridad para la práctica de un acto procesal. Dicha solicitud podrá realizarse por cualquier medio que garantice su autenticidad. La autoridad requerida colaborará con los Tribunales o el Ministerio Público y tramitará, sin demora, los requerimientos que reciba.

Artículo 74. Colaboración procesal.

Los actos de colaboración entre el Ministerio Público o la policía con autoridades federales o de alguna entidad federativa, se sujetarán a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a las disposiciones contenidas en otras normas y convenios que se hallen de acuerdo con ésta.

176

Artículo 75. Exhortos y requisitorias.

Cuando tengan que practicarse actos procesales fuera del ámbito territorial del Tribunal que conozca del asunto, solicitará su cumplimiento por medio de exhorto, si la autoridad requerida es de la misma jerarquía que la requirente, o por medio de requisitoria si aquélla es inferior. La comunicación que deba hacerse a autoridades no judiciales se hará por cualquier medio de comunicación expedito y seguro que garantice su autenticidad, siendo aplicable en lo conducente lo previsto en el artículo siguiente. En caso de existir disposiciones específicas para la práctica de actos de colaboración procesal, se estará en lo dispuesto en ellas.

Artículo 76. Empleo de los medios de comunicación.

Para el envío de oficios, exhortos o requisitorias, el Ministerio Público, el Tribunal o la policía, podrán emplear cualquier medio de comunicación como el fax, el correo electrónico, o cualquier otra tecnología, siempre y cuando esos medios ofrezcan las condiciones razonables de seguridad, de autenticidad y confirmación posterior en caso de ser necesario, debiendo expresarse, con toda claridad, la actuación que ha de practicarse, el nombre del imputado si fuere posible, el delito de que se trate, el fundamento de la providencia y, en caso necesario, el aviso de que se mandará el oficio de colaboración, exhorto o requisitoria que ratifique el mensaje. La autoridad requirente deberá cerciorarse de que el requerido recibió la comunicación que se le dirigió, y el receptor resolverá lo conducente, acreditando el origen de la petición y la urgencia del proceso.

Artículo 77. Plazo para el cumplimiento de exhortos y requisitorias.

Los exhortos o requisitorias se proveerán dentro de las veinticuatro horas siguientes a su recepción y se despacharán dentro de los tres días siguientes, a

177

no ser que las actuaciones que se hayan de practicar exijan necesariamente mayor tiempo, en cuyo caso, el Tribunal fijará el que crea conveniente y lo notificará al requirente, indicando las razones existentes para la ampliación. Si el juzgador requerido estima que no es procedente la práctica del acto solicitado, lo hará saber al requirente dentro de las veinticuatro horas siguientes a la recepción de la solicitud, con indicación expresa de las razones que tenga para abstenerse de darle cumplimiento.

Cuando se cumpla una orden de aprehensión, la autoridad judicial exhortada o requerida pondrá al detenido, sin dilación alguna, a disposición del Tribunal que libró aquella. Si no fuere posible poner al detenido inmediatamente a disposición del juez exhortante o requirente, el requerido dará vista al Ministerio Público para que formule la imputación; y en su caso, decidirá sobre las medidas cautelares que se le soliciten, resolverá su vinculación a proceso conforme al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y remitirá las actuaciones y, en su caso, al detenido, a quien libró el exhorto, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la determinación de fondo que adopte.

Cuando un juzgador no pueda dar cumplimiento al exhorto o requisitoria, porque la persona o las cosas que sean objeto del acto procesal se hallan en otra jurisdicción, lo remitirá al juzgador del lugar en que aquella o éstas se encuentren, y lo hará saber al exhortante o requirente dentro de las veinticuatro horas siguientes.

Si el Tribunal exhortado o requerido estimare que no debe cumplimentarse el acto solicitado, porque el asunto no resulta ser de su competencia o si tuviere dudas sobre este punto, podrá comunicarse con el Tribunal exhortante o requirente, oirá al Ministerio Público y resolverá dentro de los tres días siguientes, promoviendo, en su caso, la competencia respectiva.

Artículo 78. Exhortos de tribunales extranjeros.

Los exhortos que provengan de tribunales extranjeros deberán ser tramitados por la vía diplomática respectiva y deberán observar al efecto los requisitos que se establezcan en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado Mexicano y demás normas aplicables.

Todo exhorto que se reciba del extranjero en idioma distinto del español deberá acompañarse de su traducción.

Los exhortos internacionales que se reciban sólo requerirán homologación cuando implique ejecución coactiva sobre personas, bienes o derechos. Los exhortos relativos a notificaciones, recepción de pruebas y a otros asuntos de mero trámite se diligenciarán sin formar incidente.

Artículo 79. Exhortos de otras jurisdicciones.

Los exhortos de otras jurisdicciones serán diligenciados sin retardo siempre que no se afecte el desarrollo de la actividad jurisdiccional y se encuentren ajustados a derecho.

Artículo 80. Actos procesales en el extranjero.

Los exhortos que se remitan al extranjero serán comunicaciones oficiales escritas que contendrán la petición de realización de las actuaciones necesarias en el proceso en que se expidan. Dichas comunicaciones contendrán los datos informativos necesarios y las constancias y demás anexos procedentes según sea el caso.

Los exhortos o cartas rogatorias serán transmitidos al órgano requerido por vía judicial, a través de los funcionarios consulares o agentes diplomáticos o por la autoridad competente del Estado requirente o requerido según sea el caso.

Artículo 81. Retardo o rechazo.

179

Cuando la ejecución de un requerimiento de cualquier naturaleza fuere demorado o rechazado injustificadamente, la autoridad requirente podrá dirigirse al superior jerárquico de la autoridad que deba cumplimentar dicho requerimiento a fin de que, si procede, ordene o gestione la tramitación inmediata.

CAPÍTULO V Notificaciones y citaciones.

Artículo 82. Notificaciones.

Los actos que requieran una intervención de las partes o terceros se notificarán personalmente, por lista, por cédula, por fax, por correo electrónico o excepcionalmente, por teléfono o por cualquier otro medio, de conformidad con las disposiciones previstas en las leyes orgánicas de los poderes judiciales o, en su caso, los acuerdos emitidos por los órganos competentes.

En la notificación de las resoluciones judiciales podrán emplearse los medios digitales y se aceptará el uso de la firma digital, así como del correo electrónico si se acepta de manera expresa por las partes.

De practicarse la notificación por fax, correo electrónico o por teléfono, se procurará que estos medios ofrezcan condiciones suficientes de seguridad y de autenticidad y, en caso de ser necesario, de confirmación posterior.

Las normas a que hace referencia el párrafo primero de este artículo deberán asegurar que las notificaciones se hagan a la brevedad y ajustadas a los siguientes criterios:

I. Que transmitan con claridad, precisión y en forma completa el contenido de la resolución o de la actividad requerida y las condiciones o plazos para su cumplimiento;

II. Que contengan los elementos necesarios para asegurar la defensa y el ejercicio de los derechos y facultades de las partes;

III. Que adviertan suficientemente al imputado, a la víctima u ofendido, a los testigos y a los demás intervinientes sobre las consecuencias jurídicas que se seguirán en caso de no cumplir con el contenido de la notificación, cuando ello sea necesario; y

IV. Que adviertan al imputado o a su defensor y a la víctima u ofendido o a su asesor jurídico, según el caso, cuando el ejercicio de un derecho esté sujeto a plazo o condición.

Artículo 83. Regla general sobre notificaciones.

Las resoluciones deberán notificarse a quien corresponda, dentro de las veinticuatro horas después de ser dictadas, salvo que el juez disponga un plazo menor. No obligarán sino a las personas debidamente notificadas. Se tendrán por notificadas las personas que se presenten a la audiencia donde se emita la resolución correspondiente.

Cuando la notificación deba hacerse a una persona con discapacidad, a quien no sabe leer y escribir, a quien vive en situación de calle o cualquier otra que le impida comprender el alcance de la notificación, la misma deberá hacerse de forma que le permita acceder al proceso penal.

Artículo 84. Lugar para notificaciones.

Al comparecer en el proceso, las partes deberán señalar domicilio dentro del lugar donde se desarrolle el proceso **o** la forma para ser notificado. Cualquiera de las partes podrá ser notificada en las instalaciones del órgano jurisdiccional personalmente.

Los servidores públicos que intervienen en el proceso, serán notificados en sus respectivas oficinas, siempre que éstas se encuentren dentro de la jurisdicción del

órgano que ordene la notificación, salvo que hayan admitido ser notificadas por fax, por correo electrónico o excepcionalmente por teléfono.

Si el imputado estuviere detenido, será notificado en el lugar de su detención.

Las partes que no señalaren domicilio convencional o el medio para ser notificadas o no informen de su cambio, serán notificadas por cédula que se fijará en los estrados del juzgado.

Artículo 85. Notificaciones al defensor o al representante de la víctima.

Cuando se designe defensor o al representante de la víctima, las notificaciones deberán ser dirigidas a éstos.

Cuando el imputado tenga varios defensores, las notificaciones se entenderán con cualquiera de ellos. La misma disposición se aplicará a los representantes de la víctima u ofendido.

Artículo 86. Notificaciones personales.

Las notificaciones personales se practicarán, con el interesado o su representante, de conformidad con las reglas siguientes:

a) En el domicilio que para tal efecto se señale;

b) El notificador cerciorado de que es el domicilio señalado, requerirá la presencia del interesado o su representante, una vez que cualquiera de ellos se haya identificado, le entregará copia del auto o la resolución que deba notificarse y recabará su firma, asentando los datos del documento oficial con el que se identifique. Asimismo, se deberán asentar en el acta de notificación, los datos de identificación del servidor público que la practique. En caso de que la persona notificada no comprenda suficientemente el español, o bien cuando tenga alguna

182

discapacidad que le impida comprender el sentido de la notificación, la misma se hará por cualquier medio que garantice su conocimiento.

Artículo 87. Notificación a persona ausente.

Cuando la persona por notificar no sea encontrada en el domicilio señalado, la notificación será entendida a cualquier persona que viva o trabaje ahí, debiendo asentarse esa circunstancia y el nombre de la persona que la recibió.

No encontrándose a nadie en el domicilio señalado, se fijará una cita para el día siguiente en la puerta del lugar donde se practique el acto. Si en la fecha indicada no se encontrara a nadie, se fijará la copia de la resolución a notificar en el mismo sitio, asentando constancia de dicha actuación, sin perjuicio de la obligación de fijar otra copia en los estrados del Tribunal correspondiente.

Artículo 88. Notificación por edictos.

Cuando se ignore el lugar donde se encuentra la persona que deba ser notificada, la resolución se le hará saber por edicto que se publicará en el diario de mayor circulación nacional o estatal, según corresponda, sin perjuicio de emplear otros medios de comunicación masiva en la región, o de adoptar otras medidas convenientes para localizarlo.

Artículo 89. Forma especial de notificación.

Cuando el interesado lo acepte expresamente, podrá notificársele por cualquier medio electrónico; en este caso, la notificación surtirá efecto al día hábil siguiente a aquél en que por sistema se confirme que recibió el archivo electrónico correspondiente.

Asimismo, podrá notificarse mediante otros sistemas autorizados **por** los poderes judiciales, siempre que no causen indefensión. También podrá notificarse por

correo certificado y el plazo correrá a partir del día siguiente hábil en que fue recibida la notificación.

Artículo 90. Nulidad de la notificación.

La notificación será nula, siempre y cuando cause indefensión para la persona a quien va dirigida, por alguna de las siguientes causas:

I. Haya existido error sobre la identidad de la persona notificada;

II. La resolución haya sido notificada en forma incompleta;

III. En la diligencia no conste la fecha y hora en que se llevó a cabo o, cuando corresponda, la fecha de entrega de la copia;

IV. Falte alguna de las firmas requeridas;

V. Exista discrepancia entre el original y la copia recibida por el interesado;

VI. Se realice en un domicilio distinto al de la persona a notificar;

VII. Se realice por un medio distinto al señalado por la persona a notificar y autorizado por el Tribunal;

VIII. Se realice en contravención con las formalidades previstas en el presente Capítulo; o

IX. En cualquier otro supuesto que cause indefensión.

La nulidad de notificación podrá reclamarse por la parte interesada o el Tribunal podrá repetir las notificación irregular o defectuosa en cualquier tiempo aunque no lo pidan las partes.

Artículo 91. Convalidación de la notificación.

Si a pesar de no haberse hecho la notificación en la forma que este Código previene, la persona que deba ser notificada se muestra sabedora de la providencia, ésta surtirá efectos legales.

Artículo 92. Citación.

Toda persona está obligada a presentarse ante el órgano jurisdiccional o el Ministerio Público, cuando sea citada. Quedan exceptuados de esa obligación el Presidente de la República y los servidores públicos a que se refieren los párrafos primero y quinto del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, los magistrados federales y las personas impedidas por su edad, enfermedad grave o por alguna otra imposibilidad física, psicológica que dificulte su comparecencia.

Cuando haya que examinar a los servidores públicos o las personas señaladas en el párrafo anterior, el Tribunal dispondrá que su testimonio sea desahogado en el juicio por sistemas de reproducción a distancia de imágenes y sonidos o cualquier otro medio que permita su trasmisión, en sesión cerrada.

La citación a quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público, distintos a los señalados en este artículo, se hará por conducto del superior jerárquico respectivo, a menos de que el éxito de la tramitación requiera que no se haga así.

En el caso de cualquier persona que se haya desempeñado como servidor público y no sea posible su localización, el juez solicitará a la institución donde se desempeñó la información del domicilio, número telefónico, y en su caso, los datos necesarios para su localización, a efecto de que comparezca a la audiencia respectiva.

Artículo 93. Forma de realizar las citaciones.

185

Cuando, para algún acto procesal, sea necesaria la presencia de una persona, la autoridad que conoce del asunto deberá ordenar su citación mediante oficio, correo certificado, telegrama con aviso de entrega o cualquier otro medio de comunicación que garantice la autenticidad del mensaje, cuando menos con cuarenta y ocho horas de anticipación, salvo que la parte oferente se comprometa a presentarla y, en caso de no cumplir su ofrecimiento de presentar a los testigos, se le tendrá por desinteresado de la prueba, a menos que justifique la imposibilidad que tuvo para presentarla.

Para llevar a cabo la citación, deberá hacerse saber la denominación y domicilio de la autoridad ante la que deberá presentarse el citado, el día y hora en que debe comparecer, el objeto de la citación, el proceso en el que ésta se dispuso y la firma de la autoridad que ordena la citación, además, se deberá advertir que si la orden no se obedece se le impondrá la medida de apremio que para tal efecto determine el Tribunal.

También podrá citarse por teléfono a la persona que haya manifestado expresamente su voluntad para que se le cite por este medio, siempre que haya proporcionado su número, sin perjuicio de que si no es posible realizar tal notificación, se pueda realizar por alguno de los otros medios señalados en este Capítulo.

Artículo 94. Citación al imputado.

En los casos en que sea necesaria la presencia del imputado para realizar un acto procesal, el Ministerio Público o el Tribunal, según corresponda, lo citará, junto con su defensor, a comparecer, con indicación precisa del hecho atribuido y del objeto del acto, el lugar al que debe comparecer y el nombre del servidor público que lo requiere.

186

Se advertirá que en caso de incomparecencia injustificada se le impondrá como medida de apremio, su arresto o conducción por la fuerza pública.

La citación contendrá el domicilio, el número telefónico y, en su caso, los datos necesarios para comunicarse con la autoridad que expide la citación.

Artículo 95. Comunicación de actuaciones del Ministerio Público.

Cuando en el curso de una investigación el Ministerio Público deba comunicar alguna actuación a una persona, podrá hacerlo por cualquier medio que garantice la recepción del mensaje. Serán aplicables, en lo que corresponda, las disposiciones de este Capítulo.

CAPÍTULO VI Plazos

Artículo 96. Reglas generales.

Los actos procesales serán cumplidos en los plazos establecidos. Los plazos legales serán perentorios e improrrogables.

Los plazos sujetos al arbitrio judicial serán determinados conforme a la naturaleza del proceso y a la importancia de la actividad que se deba de desarrollar, teniendo en cuenta los derechos de las partes.

Los plazos serán comunes para los interesados y correrán a partir del día siguiente a aquél en que se surtió efecto la notificación.

No se incluirán en los plazos establecidos en días, los sábados, los domingos ni los días que sean determinados inhábiles por las leyes orgánicas de los poderes judiciales y los acuerdos de los Consejos de la Judicatura respectivosu otros ordenamientos legales aplicables, salvo que se trate de providencias precautorias, poner al imputado a disposición de los tribunales, de resolver la legalidad de la

detención, de formular la imputación, de resolver sobre la procedencia de las medidas cautelares y decidir sobre la procedencia de la vinculación a proceso.

Con la salvedad de la excepción prevista en el párrafo anterior, los demás plazos que venzan en día inhábil, se tendrán por prorrogados hasta el día hábil siguiente.

Los plazos establecidos en horas correrán de momento a momento.

Artículo 97. Renuncia o abreviación.

Las partes en cuyo favor se haya establecido un plazo, podrán renunciar a él o consentir en su abreviación mediante manifestación expresa. En caso de plazo común deben expresar su voluntad todas las partes a las que les es oponible.

Cuando sea el Ministerio Público el que renuncie a un plazo o consienta en su abreviación, deberá oírse a la víctima u ofendido para que manifieste lo que a su interés convenga.

Artículo 98. Reposición del plazo.

Quien no haya podido observar un plazo por causa no atribuible a él, podrá solicitar de manera fundada y motivada su reposición total o parcial, con el fin de realizar el acto omitido o ejercer la facultad concedida por la ley. El juez podrá ordenar la reposición, escuchando a las partes.

CAPÍTULO VII Nulidades

Artículo 99. Principio General.

No podrán ser valorados para fundar una decisión judicial, ni utilizados como presupuesto de ella, los actos que impliquen violación a derechos fundamentales, ejecutados con inobservancia de las formas esenciales, salvo que el defecto sea oportunamente saneado, de acuerdo con las normas previstas por este código.

Artículo 100. Afectación a la víctima y al Ministerio Público.

Tampoco podrán ser valorados los actos ejecutados con inobservancia de las formas que obstaculicen el ejercicio del derecho a la tutela judicial de la víctima u ofendido o impidan el ejercicio de los deberes del Ministerio Público.

Artículo 101. Saneamiento.

Los defectos mencionados en los artículos anteriores deberán ser inmediatamente saneados, renovando el acto, rectificando el error o realizando el acto omitido, de oficio o a petición del interesado.

La autoridad judicial que constate un defecto formal saneable en cualquier etapa, recurso o instancia, lo comunicará al interesado y le otorgará un plazo para corregirlo, el cual no será mayor de tres días. Si el defecto formal no se corrige en el plazo conferido, se resolverá lo correspondiente.

La autoridad judicial podrá corregir en cualquier momento, de oficio o a petición de parte, los errores puramente formales contenidos en sus actuaciones o resoluciones, respetando siempre los derechos y garantías de los intervinientes.

Se entenderá que el acto se ha saneado cuando, no obstante la irregularidad, ha conseguido su fin respecto de todos los interesados.

Artículo 102. Convalidación.

Los defectos que afectan al Ministerio Público o a la víctima u ofendido quedarán convalidados cuando:

I. Ellos no hayan solicitado su saneamiento mientras se realiza el acto;

II. Dentro de las veinticuatro horas siguientes a haberse practicado el acto no se solicita su saneamiento, por quien no estuvo presente al realizarse

189

aquél. Si por las circunstancias del acto ha sido imposible advertir oportunamente el defecto, el interesado deberá reclamarlo dentro de las veinticuatro horas después de advertirlo; o

III. Hayan aceptado, expresa o tácitamente, los efectos del acto.

Artículo 103. Declaración de nulidad.

Cuando no sea posible sanear o convalidar un acto, los Tribunales, de oficio o a petición de parte, deberán, en forma fundada y motivada, declarar su nulidad o señalarla expresamente en la resolución respectiva; especificarán, además los actos a los que alcanza la nulidad por su relación con el acto anulado y, si ello es posible, ordenarán que se renueven o rectifiquen.

La nulidad podrá reclamarse por la vía incidental o al interponer un recurso.

Artículo 104. Sujetos legitimados.

Sólo podrá solicitar la declaración de nulidad el interviniente perjudicado por un vicio en el procedimiento siempre que no hubiere contribuido a causarlo, con las excepciones que este Código señala.

TÍTULO IV SUJETOS PROCESALES Y SUS AUXILIARES

CAPÍTULO I Disposiciones comunes

Artículo 105. Sujetos del proceso penal.

Son sujetos del proceso penal, los siguientes:

I. La víctima u ofendido, por sí o a través de su asesor jurídico;

II. El imputado;

III. El defensor;

IV. El Ministerio Público;

V. El Tribunal

Artículo 106. Reserva sobre la identidad.

Los integrantes de las instituciones de seguridad pública, los defensores, los asesores jurídicos, así como los demás servidores públicos, que intervengan durante el proceso en cualquier etapa, no podrán informar a terceros no legitimados acerca de la identidad de los detenidos, imputados, víctimas u ofendidos, testigos, ni de otras personas que se encontraren o pudieren resultar vinculadas a la investigación de un hecho punible, en protección de sus derechos y de la función investigadora.

Toda violación al deber de reserva por parte de los sujetos señalados en el párrafo anterior, será sancionada por la ley penal.

CAPÍTULO II Víctima u ofendido

Artículo 107. Víctima u ofendido.

Se considera ofendido del delito al sujeto pasivo de la conducta delictiva.

Se considera víctima al titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción u omisión prevista en la ley penal como delito.

Se considera víctimas a las agrupaciones, en los delitos que afecten intereses colectivos o difusos siempre que su objeto se vincule directamente con aquéllos; y a las comunidades indígenas en los hechos punibles que impliquen discriminación o genocidio respecto de los integrantes de la etnia o generen regresión

demográfica, depredación de su hábitat, contaminación ambiental, explotación económica o alienación cultural.

En los delitos cuya consecuencia fuera la muerte de la víctima u ofendido o en el caso en que éste no pudiere ejercer personalmente los derechos que este Código le otorga, se considerarán como víctimas a los familiares o cualquier otra persona que tenga relación afectiva reconocida por la ley, en el siguiente orden de prelación:

I. Al cónyuge;
II. Al conviviente legalmente reconocido;

III. A la concubina o al concubinario;

IV. A los parientes por consanguinidad en la línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado y en la colateral por consanguinidad hasta el segundo grado, inclusive; y

V. A los dependientes económicos.

La víctima podrá coadyuvar con el Ministerio Público en cualquier etapa del proceso, por sí o a través de un asesor jurídico. No obstante en los actos procesales deberá hacerlo a través de un licenciado en derecho.

Artículo 108. Condición de víctima u ofendido

La condición de víctima u ofendido del delito deberá acreditarse ante el Ministerio Público y, en su caso, ante el Tribunal. Dicha condición se tiene con independencia de que se identifique, aprehenda, vincule a proceso o condene al autor, coautor o partícipe del delito.

Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido.

192

La víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos. La policía, el Ministerio Público y sus auxiliares, y la autoridad judicial, garantizarán a éstos el acceso a la justicia para ejercerlos:

I. Ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, este Código y demás ordenamientos aplicables en la materia;

II. Contar con información sobre los servicios que en su beneficio existan, como ser atendidos por personal del mismo sexo cuando así lo requieran y recibir desde la comisión del delito atención médica y psicológica de urgencia:

III. A comunicarse, inmediatamente después de haberse cometido el delito, con un familiar o, en su caso, con su asesor jurídico para informales sobre su situación y ubicación;

IV. Ser informado, cuando así lo solicite del desarrollo del proceso penal;

V. Ser tratado con la atención y el debido respeto a su dignidad humana;

VI. Recibir un trato sin discriminación, a fin de evitar que se atente contra la dignidad humana y se anulen o menoscaben sus derechos y libertades, por lo que la protección de sus derechos se hará sin distinción alguna;

VII. Acceder a la justicia de manera pronta, gratuita e imparcial respecto de sus denuncias o querellas;

VIII. Participar en los mecanismos alternativos de solución de controversias;

IX. Recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor desde la denuncia hasta la conclusión del proceso penal, cuando la víctima u ofendido

193

pertenezca a un grupo étnico o pueblo indígena o no conozca o no comprenda el español;

X. A que se le proporcione asistencia migratoria cuando sea de otra nacionalidad;

XI. A que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, siempre que sean pertinentes, tanto en la investigación como en el proceso;

XII. Intervenir en todo el proceso e interponer los recursos, conforme se establece en este Código, por sí o través de su asesor jurídico;

XIII. Solicitar la realización de actos de investigación que, en su caso, correspondan, salvo que el Ministerio Público considere que no es necesario;

XIV. Recibir y ser canalizado a instituciones que le proporcionen atención médica, psicológica y protección especial de su integridad física y psíquica cuando así lo solicite y, en caso de delitos que atenten contra la libertad sexual y el normal desarrollo psicosexual;

XV. Solicitar providencias precautorias y medidas cautelares, en su caso;

XVI. Solicitar el traslado de la autoridad al lugar en donde se encuentre, para ser interrogada o participar en el acto para el cual fue citada, cuando por su edad, enfermedad grave o por alguna otra imposibilidad física o psicológica se dificulte su comparecencia, a cuyo fin deberá requerir la dispensa, por sí o por un tercero, con anticipación;

XVII. Impugnar por sí o por medio de su representante, en los términos de este Código y las demás disposiciones legales que prevean las leyes, las omisiones, abandono o negligencia en la función investigadora del delito por parte del Ministerio Público, por sí o a través de su asesor jurídico;

194

XVIII. Tener acceso a los registros durante el proceso, así como a obtener copia de éstos, salvo que la información esté sujeta a reserva declarada por el juez;

XIX. Ser restituido en sus derechos, cuando éstos estén acreditados;

XX. A que se le repare el daño causado por el delito, pudiendo solicitarlo directamente al juez, sin perjuicio de que el Ministerio Público lo solicite;

XXI. Al resguardo de su identidad y demás datos personales cuando sean menores de edad, se trate de delitos de violación, contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, violencia familiar, secuestro, trata de personas o a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa;

XXII. Ser notificado del desistimiento de la acción penal y de todas las resoluciones que finalicen el proceso, si hay noticia de su domicilio;

XXIII. Solicitar la reapertura del proceso cuando se haya decretado su suspensión; y

XXIV. Los demás que establezcan este Código y otras leyes aplicables.

Artículo 110. Restablecimiento de las cosas al estado previos.

En cualquier estado del proceso, la víctima u ofendido podrá solicitar al Tribunal, ordene como medida provisional, cuando la naturaleza del hecho lo permita, la restitución de sus bienes, objetos, instrumentos o productos del delito, la reposición o restablecimiento de las cosas al estado que tenían antes del hecho, siempre que haya suficientes elementos para decidirlo.

CAPÍTULO III Imputado

Artículo 111. Denominación.

195

Se denominará genéricamente imputado a quien sea señalado por el Ministerio Público como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señale como delito en cualquier etapa del proceso.

Además, se denominará acusado a aquél contra quien se ha formulado acusación y sentenciado a aquél sobre quien ha recaído una sentencia aunque no haya sido declarada firme.

Artículo 112. Derechos del imputado.

El imputado derecho a:

I. Ser considerado y tratado como inocente;

II. Comunicarse por cualquier medio con un familiar o con su defensor cuando sea detenido, brindándole el Ministerio Público todas las facilidades;

III. Declarar o a guardar silencio el cual no será utilizado en su perjuicio;

IV. Declarar con asistencia de su defensor y a entrevistarse en privado previamente con él;

V. Que su defensor esté presente en el momento de rendir su declaración, así como en cualquier actuación en la que intervenga;

VI. Que se le informe desde el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten, así como, en su caso, el motivo de la privación de su libertad y el servidor público que la ordenó, exhibiéndosele, según corresponda, la orden emitida en su contra;

196

VII. No ser sometido a técnicas ni métodos que induzcan o alteren su libre voluntad o atenten contra su dignidad;

VIII. Solicitar ante la autoridad judicial su libertad, en los casos en que se encuentre detenido y así lo prevea este Código;

IX. Tener acceso él o su defensa a los registros de investigación cuando se encuentre detenido, se pretenda entrevistarlo o recibirle su declaración y a obtener copia de los mismos;

X. Que se le reciban los testigos y los demás medios pertinentes de prueba que ofrezca, concediéndole el tiempo necesario para tal efecto y auxiliándolo para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite y que no pueda presentar directamente, en términos de lo establecido por este Código;

XI. Ser juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa;

XII. Tener una defensa adecuada por licenciado en derecho o abogado, con cédula profesional, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención y, a falta de éste, por un defensor público, así como a reunirse o entrevistarse con él en estricta confidencialidad;

XIII. Ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma español;

XIV. Ser presentado al Ministerio Público o al Juez de Control, según el caso, inmediatamente después de ser detenido;

XV. No ser expuesto a los medios de comunicación o presentado ante la comunidad como culpable; y

XVI. Los demás que establezca este Código y otras disposiciones aplicables.

Artículo 113. Entrevista del imputado.

El Ministerio Público podrá entrevistar al imputado, con pleno respeto a los derechos que lo amparan en presencia del defensor.

Sin embargo, en caso que el imputado manifieste a la policía su deseo de declarar sobre los hechos que se investigan, ésta deberá comunicar ese hecho al Ministerio Público para que se inicien los trámites a efecto de que se reciban sus manifestaciones con las formalidades previstas en este Código

CAPÍTULO IV . Defensor

Artículo 114. Derecho a designar defensor.

El imputado tendrá el derecho de designar a un defensor de su elección desde el momento de su detención.

Si el imputado se encontrare privado de libertad, cualquier persona podrá proponer para aquél un defensor, o bien solicitar se le nombre uno. Conocerá de dicha petición el Ministerio Público o el Juez de Control competente.

La intervención del defensor no menoscabará el derecho del imputado de intervenir, a formular las peticiones y hacer observaciones por sí mismo.

Artículo 115. Acreditación.

Los defensores designados deberán acreditar su profesión desde el inicio de su intervención, mediante cédula profesional legalmente expedida.

198

Artículo 116. Nombramiento posterior.

Durante el transcurso del proceso el imputado podrá designar un nuevo defensor, sin embargo, hasta en tanto el nuevo defensor no comparezca a aceptar el cargo conferido, el Tribunal o el Ministerio Público le designarán al imputado uno público, a fin de no dejarlo en estado de indefensión.

Artículo 117. Inadmisibilidad y apartamiento.

Cuando el defensor en el proceso haya sido testigo del hecho o cuando fuere coimputado de su defendido, sentenciado por el mismo hecho o imputado por ser autor o partícipe del encubrimiento o favorecimiento de ese mismo hecho concreto, no se admitirá su intervención o en su caso, se le apartará de la participación ya acordada. En ese supuesto, el imputado deberá elegir nuevo defensor.

Si no existiere otro defensor o el imputado no ejerciere su facultad de elección, se le designará un defensor público.

Artículo 118. Renuncia y abandono.

Cuando el defensor renuncie o abandone la defensa, el Ministerio Público o el juez le harán saber al imputado que tiene derecho a designar a otro, sin embargo, en tanto no lo designe o no quiera o pueda nombrarlo, se le designará un defensor público.

Artículo 119. Garantía de la defensa técnica.

Siempre que el Juez o Tribunal adviertan que existe una manifiesta y sistemática incapacidad técnica del defensor, declarará abandonada la defensa y prevendrá al imputado que designe a otro defensor y si no lo hace se le designará uno público.

Artículo 120. Nombramiento del defensor público.

Cuando el imputado, no quiera o no designe defensor particular, el Ministerio Público o el juez, en su caso, le nombrarán un defensor público que lleve la representación de la defensa desde el primer acto en que intervenga.

Artículo 121. Número de defensores.

El imputado podrá designar los defensores que considere convenientes, pero en las audiencias tomarán la palabra actuando en orden y respeto.

Artículo 122. Defensor común.

La defensa de varios imputados en un mismo proceso por un defensor común no será admisible, a menos que se acredite que no existe incompatibilidad ni conflicto de intereses de las defensas de los imputados. Si se autoriza el defensor común y la incompatibilidad se advierte en el curso del proceso, será corregida de oficio y se proveerá lo necesario para reemplazar al defensor.

Artículo 123. Entrevista con los detenidos.

El imputado que se encuentre detenido por cualquier circunstancia, particularmente antes de rendir declaración, tendrá derecho a entrevistarse privadamente con su defensor cuando así lo solicite en el lugar que para tal efecto se designe. La autoridad del conocimiento tiene la obligación de implementar todo lo necesario para el libre ejercicio de este derecho.

Artículo 124. Entrevista con otras personas.

Si antes de una audiencia, con motivo de su preparación, el defensor tuviera necesidad de entrevistar a una persona que se niega a recibirlo, podrá solicitar el auxilio judicial, explicándole las razones que tornan necesaria la entrevista. El

juzgador, en caso de considerar fundada la necesidad, expedirá la orden de que esa persona reciba al defensor en el lugar y en el momento que, en principio, ella misma decida, o la citará en el lugar que el Tribunal determine para que la entrevista se desarrolle.Esta autorización no se concederá en aquellos casos en que, a solicitud del Ministerio Público, el Juez estime que la víctima o los testigos deben estar sujetos a protocolos especiales de protección.

CAPÍTULO V Ministerio Público

Artículo 125. Competencia del Ministerio Público

Compete al Ministerio Público conducir la investigación y resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar los actos de investigación pertinentes y útiles para demostrar o no la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión.

Artículo 126. Deber de lealtad.

El Ministerio Público deberá actuar durante todas las etapas del proceso en que intervenga con absoluta lealtad hacia el objeto del proceso y hacia las partes.

El deber de lealtad consiste en el deber de información veraz sobre la investigación cumplida y los conocimientos alcanzados, y el deber de no ocultar a los intervinientes elemento alguno que pudiera resultar favorable para la posición que ellos asumen, sobre todo cuando ha resuelto no incorporar alguno de esos elementos al proceso, salvo la reserva que en determinados casos la ley autorice en las investigaciones.

Artículo 127. Deber de objetividad.

La investigación debe ser objetiva y referirse tanto a los elementos de cargo como de descargo. Igualmente, al concluir la investigación complementaria puede

solicitar el sobreseimiento del proceso, o bien, en la audiencia de juicio, puede concluir requiriendo la absolución o una condena más leve que aquélla que sugiere la acusación, cuando en ésta surjan elementos que conduzcan a esa conclusión, de conformidad con lo previsto en este Código.

Durante la investigación, el imputado o su defensor podrán requerir al Ministerio Público medidas para verificar la inexistencia de un hecho punible o la existencia de circunstancias que excluyan el delito o atenúen la punibilidad o su culpabilidad.

Artículo 128. Obligaciones del Ministerio Público.

El Ministerio Público tendrá las siguientes obligaciones:

I. Recibir las denuncias, querellas o su equivalente que le presenten en forma oral, por escrito o a través de medios digitales, incluso mediante informaciones anónimas, en términos de las disposiciones aplicables, sobre hechos que puedan constituir delito, así como ordenar, en su caso, a la policía que investigue la veracidad de los datos aportados;

II. Ejercer la conducción y mando de la investigación de los delitos;

III. Dictar, en su caso, medidas y providencias necesarias para impedir que se pierdan, destruyan o alteren los indicios, una vez que tenga noticia delos mismos, así como cerciorarse de que se han seguido las disposiciones para su preservación y procesamiento;

IV. Ordenar a la policía y a sus auxiliares, en el ámbito de su competencia, la práctica de actos de investigación conducentes para el esclarecimiento del hecho delictivo, así como analizar las que dichas autoridades hubieren practicado;

202

V. Instruir o asesorar, en su caso, a las policías, sobre la legalidad, conducencia, pertinencia, suficiencia y fuerza demostrativa de los indicios recolectados o por recolectar, así como las demás actividades de investigación;

VI. Requerir informes o documentación a otras autoridades y a particulares, así como solicitar la práctica de peritajes y demás actos de investigación;

VII. Solicitar a la autoridad jurisdiccional la autorización de técnicas de investigación y demás actuaciones que las requieran;

VIII. Solicitar a la autoridad jurisdiccional la autorización de providencias precautorias y medidas cautelares en los términos de este Código;

IX. Ordenar la detención de los imputados en caso urgente;

X. Decidir la aplicación de criterios de oportunidad;

XI. Realizar las acciones necesarias para garantizar la seguridad y proporcionar auxilio a víctimas, ofendidos, testigos, jueces, magistrados, agentes del Ministerio Público, policías, peritos y, en general, de todos los sujetos que con motivo de su intervención en el proceso, exista un riesgo objetivo para su vida o integridad corporal;

XII. Ejercer la acción penal cuando proceda;

XIII. Solicitar cuando fuere procedente la orden de aprehensión o de comparecencia;

XIV. Poner a disposición de la autoridad judicial a las personas dentro de los plazos establecidos por la ley;

XV. Promover la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias o formas anticipadas de terminación del proceso penal; y

XXVI. Las demás que señale este Código y otras disposiciones aplicables.

CAPÍTULO VI Policía

Artículo 129. Obligaciones de la policía.

Las policías actuarán bajo la conducción y el mando del Ministerio Público en la investigación de los delitos y quedarán obligadas a:

I. Recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delito e informar inmediatamente al Ministerio Público;

II. Realizar detenciones en los casos que autoriza la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

III. Realizar actos de investigación y en aquellos que impliquen un acto de molestia solicitar a través del Ministerio Público la autorización judicial correspondiente;

IV. Poner inmediatamente a disposición de las autoridades ministeriales competentes a las personas detenidas;

V. Registrar, la detención de cualquier persona, así como remitir sin demora y por cualquier medio la información al Ministerio Público;

VII. Preservar y procesar, en su caso, el lugar de los hechos o del hallazgo, la integridad de los indicios, así como dar aviso al Ministerio Público conforme a las disposiciones aplicables.

VIII. Entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato o elemento para la investigación;

IX. Requerir a las autoridades competentes y a las personas físicas o morales, informes y documentos para fines de la investigación, en caso de negativa, informarán al Ministerio Público para que, en su caso, éste lo requiera en los términos de este Código;

XI. Proporcionar atención a víctimas u ofendidos o testigos del delito; y

XIV. Las demás que le confieran este Código y demás disposiciones aplicables.

Artículo 130. Informe Policial.

La policía llevará un control y seguimiento de cada actuación que realice y dejará constancia de las mismas.

CAPÍTULO VII Jueces y Magistrados

Artículo 131. Competencia jurisdiccional

Para los efectos de este Código, la competencia jurisdiccional comprende a los siguientes órganos:

I. Juez de Control, con competencia para ejercer las atribuciones que este Código le reconoce desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura de juicio;

II. Tribunal de juicio, con competencia para ejercer las atribuciones que este Código le concede en el juicio; y

III. Tribunal de segunda instancia, quien conocerá de los medios de impugnación y demás asuntos que prevé este Código, con excepción de aquéllos en los que se señale a una autoridad diversa.

Artículo 132. Atribuciones comunes de los jueces.

Son atribuciones de los jueces las siguientes:

I. Resolver los asuntos sometidos a su consideración dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios que orientan el ejercicio de la función jurisdiccional y los del proceso;

II. Respetar, garantizar y velar por la salvaguarda de los derechos de quienes intervienen en el proceso;

III. Guardar reserva sobre los asuntos relacionados con su función, aún después de haber cesado en el ejercicio del cargo;

IV. Atender oportuna y debidamente las peticiones dirigidas por los sujetos que intervienen dentro del proceso penal; y

V. Las demás establecidas en las leyes orgánicas de los poderes judiciales, en este Código y otras disposiciones aplicables.

CAPÍTULO VIII Auxiliares de las partes

Artículo 133. Consultores técnicos.

Si por las particularidades del caso, las partes que intervienen en el proceso consideran necesaria la asistencia de un consultor en una ciencia, arte o técnica, así lo plantearán al Tribunal. El consultor técnico podrá acompañar en las audiencias a la parte con quien colabora, para apoyarla técnicamente.

206



TÍTULO V PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS, FORMAS DE CONDUCCIÓN DEL IMPUTADO AL PROCESO Y MEDIDAS CAUTELARES

CAPÍTULO I Disposiciones generales

Artículo 134. Principio general.

Las providencias precautorias, las formas de conducción del imputado a proceso y las medidas cautelares en contra del imputado son exclusivamente las autorizadas por este código, se aplicarán con carácter restrictivo y, salvo las excepciones previstas en este código, sólo pueden ser impuestas mediante resolución judicial fundada y motivada, por el tiempo absolutamente indispensable y para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad.

Las resoluciones judiciales que versen sobre providencias precautorias o medidas cautelares son revisables en cualquier estado del proceso. Esta disposición no será aplicable para los casos en que se imponga prisión preventiva por delitos que merezcan su aplicación oficiosa.

CAPÍTULO II Providencias Precautorias

Artículo 135. Procedencia de las providencias precautorias.

El Ministerio Público o la víctima u ofendido, durante la investigación inicial podrán solicitar al juez providencias precautorias personales para evitar la destrucción, alteración u ocultamiento de los indicios, la intimidación o amenaza o influencia a las víctimas, los testigos del hecho o para la protección de personas o bienes jurídicos. Asimismo, podrán solicitar la providencia precautoria real para garantizar la reparación del daño.

207

Para resolver sobre la necesidad de las providencias precautorias, el Tribunal tomará en consideración, en lo que resulte conducente, los criterios aplicables para las medidas cautelares previstas en este Código.

Artículo 136. Providencias precautorias personales.

Son providencias precautorias personales las siguientes:

I. Prohibición de acercarse o comunicarse con alguien;

II. La separación inmediata del domicilio;

III. Limitación para asistir o acercarse a determinados lugares;

IV. Prohibición de abandonar un municipio, entidad federativa o el país;

V. Vigilancia policial; o

VI. Obligación de comunicar previamente cualquier cambio de domicilio o empleo.

Artículo 137. Procedimiento para la imposición de providencias precautorias personales.

Con excepción del supuesto previsto en el artículo 139 (peligro en la demora), la imposición de providencias precautorias personales se determinará en audiencia mediante resolución debidamente fundada y motivada, escuchando a la persona afectada en presencia de su defensor y deberá señalarse su duración que no podrá ser mayor de dos meses.

Cuando persistan las condiciones que dieron origen a la medida precautoria, el Ministerio Público deberá fundar y motivar tal circunstancia, solicitando la prórroga del periodo establecido ante el juez competente hasta por un mes más y se procederá de la misma forma señalada en el párrafo anterior, en caso de no hacerlo así, la providencia precautoria decretada dejará de surtir efectos.

208

Cuando hubiere desaparecido la causa que dio origen a la providencia decretada, el imputado, su defensor o el Ministerio Público podrán solicitar al Juez de Control que la deje sin efectos.

En caso de incumplimiento de las providencias precautorias, el juez podrá imponer alguna de las medidas de apremio previstas en este Código.

Artículo 138. Providencia precautoria real.

Para garantizar la reparación de los posibles daños y perjuicios provocados por el hecho punible, la víctima, el ofendido o el Ministerio Público, previo al dictado del auto de vinculación a proceso, podrán solicitar al Tribunal, el embargo precautorio de bienes.

El Tribunal, dentro de las doce horas de recibida la solicitud resolverá por escrito sobre la misma. De estimarlo necesario, lo hará en audiencia privada con el agente Ministerio Público.

El Tribunal ordenará el embargo, siempre y cuando de los antecedentes expuestos se desprenda el posible daño o perjuicio y la probabilidad de que la persona en contra de la cual se pide el embargo precautorio sea responsable de reparar dicho daño.

El Ministerio Público deberá formular imputación, solicitar la orden de aprehensión o de comparecencia en un plazo no mayor de dos meses, en caso contrario el embargo precautorio quedará sin efecto.

Artículo 139. Peligro en la demora.

Cuando el Ministerio Público estime que existe riesgo inminente de que ocurran los supuestos previstos en el primer párrafo del artículo 135 (Procedencia de las

providencias precautorias) podrá, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará la aplicación de providencias precautorias idóneas. Doce horas después de la aplicación de la providencia se celebrará una audiencia ante el Juez de Control para que la ratifique, modifique o cancele, de conformidad con las reglas generales previstas en este código.

CAPÍTULO III Formas de conducción del imputado al proceso

SECCIÓN I Orden de comparecencia y orden de aprehensión

Artículo 140. Procedencia de la orden de comparecencia.

La orden de comparecencia procederá a solicitud del agente del Ministerio Público o del particular que ejerza la acción penal, por delito que sea sancionado con pena no privativa de la libertad, pena alternativa o, pena privativa de la libertad siempre que su comparecencia no pueda verse demorada o dificultada, y obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión.

Artículo 141. Procedencia de la orden de aprehensión.

A solicitud del Ministerio Público, con el fin de formular la imputación a aquellas personas cuya comparecencia pudiera verse demorada o dificultada, el Tribunal podrá ordenar la aprehensión del imputado para que sea conducido a su presencia, cuando exista denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión.

También se decretará la aprehensión del imputado que incumpla una orden de comparecencia sin causa justificada, siempre y cuando se reúnan, en lo aplicable, los requisitos previstos en el párrafo anterior. Si el imputado ha sido vinculado a proceso, bastará con que se haga referencia al auto de vinculación a proceso para tener por justificados los requisitos de fondo.

Los cuerpos de seguridad pública al ejecutar una orden de aprehensión, entregarán al imputado copia de los resolutivos de la orden y lo conducirán inmediatamente ante la presencia del Juez o Tribunal que la hubiere expedido. Una vez que la persona aprehendida sea puesta a disposición del órgano jurisdiccional, éste convocará de inmediato a la audiencia respectiva.

Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión.

En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos que le atribuya, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y expondrá las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior.

Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad o en audiencia privada con el Juez de Control.

Artículo 143. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión.

La petición de orden de aprehensión deberá ser resuelta por la autoridad judicial de manera inmediata por cualquier medio que garantice su autenticidad, en un plazo que no exceda de las doce horas siguientes a que la haya recibido.

Si la resolución se registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de aprehensión deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público.

En caso de que el juez niegue la orden o que requiera la ampliación de la información proporcionada, el Ministerio Público complementará la solicitud para satisfacer los requisitos necesarios, si correspondiere.

SECCIÓN II Flagrancia y caso urgente.

Artículo 144. Detención en caso de flagrancia.

Cualquier persona podrá detener a quien sorprendiere en casos de flagrancia, debiendo entregar inmediatamente al detenido a la autoridad más próxima y ésta con la misma prontitud a la del Ministerio Público.

Los cuerpos de seguridad pública estarán obligados a detener a quienes sorprendieren en la comisión de un delito. En este caso o cuando reciban de cualquier persona o autoridad a una persona detenida, deberán ponerla de inmediato a disposición del Ministerio Público.

Artículo 145. Supuestos de flagrancia.

Se podrá detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando:

I. La persona es detenida en el momento de estarlo cometiendo;
II. Inmediatamente después de cometerlo es detenido en virtud de que:
    a. Es sorprendido cometiendo el delito y es perseguido material e ininterrumpidamente; o
    b. Es señalado por alguien que haya presenciado los hechos.

Artículo 146. Detención en flagrancia por delitos que requieran querella.

Cuando se detenga a una persona por un hecho que pudiera constituir un delito que requiera querella de parte ofendida, será informado inmediatamente quien pueda presentarla. Se le concederá para tal efecto un plazo razonable, de acuerdo a las circunstancias del caso, que en ningún supuesto podrá ser mayor de veinticuatro horas. Si transcurrido este plazo no se presenta la querella, el detenido será puesto en libertad de inmediato.

Artículo 147. Registro de la detención.

Las autoridades que intervengan en la detención deberán elaborar un registro detallado de las circunstancias de la misma, estableciendo con claridad:

I. Los motivos de la detención;
II. Lugar, fecha y hora de la detención;
III. Descripción de la persona;
IV. El nombre del detenido y apodo, en su caso;
V. Descripción de estado físico aparente;
VI. Objetos que le fueron encontrados, en su caso;
VII. Autoridad a la que fue puesto a disposición; y
VIII. Lugar, fecha y hora en que el detenido fue puesto a disposición.

Artículo 148. Control del Ministerio Público

En los casos de flagrancia, el Ministerio Público debe examinar las condiciones en las que se realizó la detención inmediatamente después de que la persona es puesta a su disposición. Si la detención no fue conforme a las disposiciones de la ley, dispondrá la libertad inmediata de la persona y, en su caso, velará por la aplicación de las sanciones disciplinarias o penales que correspondan.

213

Artículo 149. Supuesto de caso urgente.

Habrá caso urgente cuando concurran las siguientes circunstancias:

I. Exista sospecha fundada de que el imputado ha participado en alguno de los delitos que merezcan prisión preventiva oficiosa;
II. Exista riesgo fundado de que el imputado pueda sustraerse a la acción de la justicia, y
III. Por razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, no pueda el Ministerio Público ocurrir ante autoridad judicial para solicitar la orden de aprehensión.

Artículo 150. Detención en caso urgente.

De actualizarse los supuestos del caso urgente, el Ministerio Público podrá ordenar por escrito la detención del imputado y expresará en dicha orden los antecedentes de la investigación y los indicios que motivan su proceder.

Los cuerpos de seguridad pública que ejecuten una orden de detención por caso urgente, deberán presentar sin demora al imputado ante el Ministerio Público que haya emitido dicha orden.

Artículo 151. Información acerca de la detención para protección consular.

En el caso de que el detenido sea extranjero, se le hará saber que tiene derecho a recibir protección consular.

El agente del Ministerio Público y la policía deberán informar a quien lo solicite, previa identificación, si una persona está detenida y, en su caso, la autoridad a cuya disposición se encuentre.

Artículo 152. Plazo de retención.

Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a que el imputado detenido en flagrancia fuera puesto a disposición del Ministerio Público, éste deberá ponerlo a disposición del Tribunal.

En el supuesto de caso urgente deberá ponerlo a disposición inmediatamente.

Artículo 153. Notificación a la Oficina de Servicios Previos al juicio.

En caso de aprehensión por orden judicial, o de detención por flagrancia o caso urgente, el Ministerio Público notificará a la Oficina de Servicios Previos al Juicio para que pueda entrevistar al aprehendido o detenido antes de la audiencia inicial.

Artículo 154. Libertad del imputado ante el Ministerio Público.

En los casos de detención por flagrancia, antes de la audiencia inicial, el Ministerio Público podrá disponer la libertad del imputado bajo palabra, cuando no tenga previsto solicitar alguna medida cautelar o cuando acuerde la libertad a solicitud del imputado.

Artículo 155. Providencia precautoria a solicitud del imputado.

Si en el curso de las cuarenta y ocho horas de retención, el imputado solicita su libertad bajo fianza o con aplicación de alguna otra medida cautelar distinta a la prisión preventiva y el Ministerio Público está de acuerdo, concurrirán ante el juez para que la imponga. El juez una vez que haya verificado el acuerdo entre las partes impondrá la medida cautelar solicitada.

Si el Ministerio Público no está de acuerdo con la aplicación de la medida cautelar anticipada, ello no impedirá que el imputado reitere la solicitud ante el Juez de Control.

215

Esta medida será examinada en la audiencia inicial, sin perjuicio de revisarla con anterioridad si fuese necesario.

CAPÍTULO IV Medidas cautelares

SECCIÓN I Medidas cautelares personales

Artículo 156. Procedencia de medidas cautelares.

Salvo lo dispuesto para la prisión preventiva oficiosa, el Tribunal podrá aplicar la medida cautelar que resulte procedente, cuando concurran las circunstancias siguientes:

I. Se haya vinculado a proceso al imputado; y

II. Exista una presunción razonable de que la medida es necesaria, porque en el caso se presenta alguna de las siguientes circunstancias: que el imputado no comparecerá al proceso; se requiera para permitir el desarrollo de la investigación o para proteger a la víctima, a los testigos o a terceros.

El Tribunal podrá prescindir de toda medida cautelar, cuando estime que la promesa del imputado de someterse al proceso sea suficiente para descartar los motivos que autorizarían su imposición.

Artículo 157. Tipos de medidas cautelares.

A solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, el juez podrá imponer al imputado una o varias de las siguientes medidas cautelares:

I. Presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquél designe;

II. La exhibición de una garantía económica;

III. La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez;
IV. Resguardo en su propio domicilio, sin vigilancia alguna o con las modalidades que el Juez disponga;
V. Sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento en institución determinada;
VI. La colocación de localizadores electrónicos;
VII. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o de visitar ciertos lugares;
VIII. La prohibición de convivir o comunicarse con determinadas personas o con las víctimas u ofendidos o testigos;
IX. La separación inmediata del domicilio;
X. La suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por servidores públicos;
XI. La suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral;
XII. Vigilancia policial; o
XIII. La prisión preventiva.

Artículo 158. Principio de proporcionalidad.

El juez al imponer una o varias de las medidas cautelares previstas en este Código deberá observar el principio de proporcionalidad, para lo cual tomará en consideración los elementos que la Oficina de Servicios Previos al Juicio le proporcione, en términos del párrafo segundo del artículo 19 constitucional, procurando criterios de mínima intervención según las circunstancias de cada persona.

Artículo 159. Imposición de medidas cautelares.

217

Las solicitudes de medidas cautelares serán resueltas por el Tribunal únicamente en audiencia con presencia de las partes.

A solicitud fundada y motivada del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, el juez podrá imponer una de las medidas cautelares previstas en este Código o combinar varias de ellas, según resulte adecuado al caso o imponer una diversa a la solicitada siempre que no sea más grave. La prisión preventiva no podrá combinarse con otras medidas cautelares previstas en el artículo 158 de este Código, salvo la prevista en la fracción VIII.

En ningún caso el juez está autorizado a aplicar estas medidas desnaturalizando su finalidad ni a imponer otras más graves que las solicitadas o cuyo cumplimiento resulta imposible.

Artículo 160. Contenido de la resolución.

La resolución que imponga una medida cautelar, al menos deberá contener:

I. La indicación de la medida y las razones por las cuales el juez estima que los presupuestos que la motivan concurren en el caso;
II. Los lineamientos para la aplicación de la medida; y
III. La vigencia de la medida.

Artículo 161. Impugnación de las decisiones judiciales.

Todas las decisiones judiciales relativas a las medidas cautelares reguladas por este Código son apelables. La presentación del recurso no suspende la ejecución de la resolución.

Artículo 162. Revisión de la medida.

Cuando hayan variado de manera objetiva las condiciones que justificaron la imposición de una medida cautelar, las partes podrán solicitar al Tribunal, la

revocación, sustitución o modificación de la misma, en este caso, el Tribunal podrá citar a todos los intervinientes a una audiencia con el fin de abrir debate sobre la subsistencia de las condiciones o circunstancias que se tomaron en cuenta para imponer la medida y la necesidad de mantenerla o no y resolver en consecuencia.

Artículo 163. Audiencia de revisión de las medidas cautelares.
De no ser desechada de plano la solicitud de revisión, la audiencia se llevará a cabo dentro de las cuarenta y ocho horas contadas a partir de la presentación de la solicitud.

Artículo 164. Medios de pruebas para la revisión de la medida.
Las partes pueden ofrecer medios de prueba para que se confirme, modifique o revoque, según el caso, la medida cautelar.

Artículo 165. Evaluación y supervisión de medidas cautelares.
La evaluación, supervisión y ejecución de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva corresponderá a la Oficina de Servicios Previos al Juicio que la Federación y las entidades federativas establezcan.

Para decidir sobre la necesidad de la imposición o revisión de las medidas cautelares, la Oficina de Servicios Previos al Juicio, proporcionará a la las partes la información necesaria para ello, de modo que puedan hacer la solicitud correspondiente al órgano jurisdiccional.

Para tal efecto, la Oficina de Servicios Previos al Juicio, contará con una base de datos para dar seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.

Las partes podrán obtener la información disponible de las Oficinas de Servicios Previos al Juicio, cuando así lo solicite, previo a la audiencia para debatir la solicitud de medida cautelar.

Artículo 166. Aplicación de la prisión preventiva.

Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. La prisión preventiva sólo podrá ser ordenada conforme a los términos y condiciones de este Código y la misma se ejecutará del modo que perjudique lo menos posible a los afectados, se cumplirá en sitio distinto y completamente separado del que se destinare para la extinción de las penas.

La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha dictado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares.

Artículo 167. Excepciones.

En el caso de una persona afectada por una enfermedad grave o terminal, el Tribunal podrá ordenar que la prisión preventiva se lleve a cabo en el domicilio de la persona imputada o, de ser el caso, en un centro médico o geriátrico, bajo las medidas de vigilancia que procedan.

No gozarán de la prerrogativa, quienes a criterio del juez puedan sustraerse de la acción de la justicia o manifiesten una conducta que haga presumible un riesgo procesal.

Artículo 168. Causas de procedencia.

El Ministerio Público en los términos que al efecto prescriba este Código, sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad.

El juez ordenará de manera oficiosa la prisión preventiva, en los casos previstos por el artículo 172 de este Código.

Artículo 169. Garantía de la comparecencia del imputado.

Para decidir si está garantizada o no la comparecencia del imputado en el proceso, el juez tomará en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias:

I. Arraigo en el lugar del hecho, el Estado o el país, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto;

II. La importancia del daño que debe ser resarcido, el máximo de la pena que en su caso pueda llegar a imponerse de acuerdo al delito de que se trate y la actitud que voluntariamente adopta el imputado ante éste;

III. El comportamiento del imputado durante el proceso o en otro anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse o no a la persecución penal; y

IV. Los antecedentes penales en la medida en que revelen información de que existe riesgo de que no se someterá al proceso.

Artículo 170. Peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación.

Para decidir acerca del peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación, el juez tomará en cuenta especialmente, que existan elementos suficientes para estimar como probable que el imputado:

I. Destruirá, modificará, ocultará o falsificará elementos de prueba; o

II. Influirá para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera reticente o inducirá a otros a realizar tales comportamientos,

Artículo 171. Riesgo para la víctima u ofendido, testigos o para la comunidad.

Hay riesgo fundado para la víctima u ofendido, testigos o la comunidad, cuando existan datos de prueba de que el imputado puede cometer un delito doloso contra la propia víctima u ofendido, alguno de los testigos que depongan en su contra, servidores públicos que intervengan en el proceso, o contra algún tercero.

Artículo 172. Prisión preventiva oficiosa.

El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios, como armas y explosivos, que impliquen violencia grave así como delitos contra la seguridad de la nación, y contra el libre desarrollo de la personalidad, en los términos que establezcan los códigos sustantivos.

También procederá la prisión preventiva oficiosa por delitos contra la salud, previstos en los artículos 194, fracciones I, II y III; 195, párrafo primero; 196; 196 ter; 197, párrafo primero, en el supuesto de menores de edad o incapaces para comprender la relevancia de la conducta o para resistir al agente y 198, párrafo cuarto, del Código Penal Federal;

La tentativa punible de los ilícitos penales mencionados, también ameritarán la prisión preventiva oficiosa.

Artículo 173. Revisión de la prisión preventiva.

222

Salvo lo dispuesto sobre la prisión preventiva oficiosa, el imputado y su defensor o el Ministerio Público pueden solicitar la revisión de la prisión preventiva en cualquier momento, cuando estimen que no subsisten las circunstancias por las cuales se decretó, para lo cual deberán señalar las nuevas razones y los antecedentes de la investigación o pruebas en que se sustente la petición.

Si en principio el juez estima necesaria la realización de la audiencia, ésta se celebrará dentro de las cuarenta y ocho horas contadas a partir de la presentación de la solicitud de revisión y, según el caso, ordenará en la propia audiencia la continuación, revocación, modificación o sustitución por otra medida. En caso de considerar la petición notoriamente improcedente la desechará de plano.

Artículo 174. Cesación de la prisión preventiva.

La prisión preventiva finalizará cuando:

I. Nuevos datos o medios de prueba demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente su sustitución por otra medida, o

II. Transcurra el tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso, el cual en ningún caso podrá ser superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado.

Cuando las condiciones personales del imputado se agraven de tal modo que su internamiento implique condiciones precarias para su salud, se estará a lo previsto por el artículo 167 (excepciones) de este Código.

Artículo 175. Prórroga del plazo máximo de la prisión preventiva.

Si se ha dictado sentencia condenatoria y ésta ha sido impugnada, el plazo máximo de prisión preventiva podrá prorrogarse por seis meses más.

223

Excepcionalmente y de oficio, la autoridad judicial podrá autorizar una prórroga de la prisión preventiva más allá del plazo anterior sin que en ningún caso exceda de seis meses cuando se haya ordenado la reposición del juicio.

Vencidos esos plazos, no se podrá acordar una nueva ampliación, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares.

Artículo 176. Presentación de la garantía económica.

Al decidir sobre la medida cautelar consistente en garantía económica, el Tribunal fijará el monto y apreciará la idoneidad de la modalidad elegida por el imputado. Para resolver sobre dicho monto, el Tribunal deberá tomar en cuenta la naturaleza, modalidades y circunstancias del delito, las características del imputado, su capacidad económica, la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo, el monto estimado de las sanciones pecuniarias que en su caso puedan imponérsele. La autoridad judicial hará la estimación de modo que constituya un motivo eficaz para que el imputado se abstenga de incumplir sus obligaciones y deberá fijar un plazo razonable para exhibir la garantía.

Artículo 177. Tipo de garantía.

Las garantías podrán constituirse de las siguientes maneras:

I. Depósito en efectivo;

II. Fianza de institución autorizada;

III. Hipoteca, o

IV. Prenda.

El imputado y el garante podrán sustituirla por otra equivalente, previa audiencia del Ministerio Público, la víctima u ofendido, si estuviese presente, y autorización del juez.

Estas garantías se regirán por las reglas generales previstas en el Código Civil y demás legislaciones aplicables.

El depósito en efectivo, será igual a la cantidad señalada como garantía económica y se hará en la institución de crédito autorizada para ello, pero cuando por razones de la hora o por ser día inhábil en que no pueda constituirse el depósito, el juez recibirá la cantidad en efectivo, asentará registro de ella y la ingresará el primer día hábil a la institución de crédito autorizada.

Artículo 178. Ejecución de la garantía.

Cuando el imputado incumpla con cualquiera de las obligaciones procesales que se le hayan hecho saber de conformidad con el artículo 157 (tipos de medidas cautelares) de este Código, la autoridad judicial requerirá al imputado para que dentro del término de tres días justifique dicho incumplimiento o requerirá al garante para que lo presente en un plazo no mayor a ocho días, advertidos de que si no lo hicieren o no justificaren la incomparecencia, se hará efectiva la garantía, sin perjuicio de ordenar la aprehensión del imputado o su comparecencia ante el juez, a solicitud del Ministerio Público.

Artículo 179. Cancelación de la garantía.

La garantía se cancelará y se devolverán los bienes afectados por ella, cuando:

I. Se revoque la decisión que la decreta;

II. Se dicte el sobreseimiento o sentencia absolutoria, o

III. El imputado se someta a la ejecución de la pena o la garantía no deba ejecutarse.

SECCIÓN II Medidas cautelares reales

Artículo 180. Medidas cautelares reales.

Son medidas cautelares reales:

I. Embargo de bienes; y

II. El aseguramiento de cuentas.

Artículo 181. Procedencia.

Para garantizar la reparación de los daños causados por el hecho punible, el Ministerio Público o la víctima u ofendido pueden solicitar al juez el embargo de bienes del imputado o el aseguramiento de cuentas.

Artículo 182. Aplicación supletoria.

El embargo precautorio de bienes se regirá en lo conducente por las reglas generales del embargo previstas en el código civil y demás disposiciones aplicables.

CAPÍTULO V Servicios Previos al Juicio.

Artículo 183. Ubicación.

La ubicación orgánica de los servicios previos al juicio dependerá de la Federación y cada entidad federativa, y su funcionamiento se ajustará a los principios generales previstos en este código.

Artículo 184. Objeto de los servicios.

Los servicios previos al juicio, tienen por objeto proporcionar a las partes información necesaria para que argumenten sobre la necesidad de imponer medidas cautelares, de modo que el imputado cumpla con sus obligaciones procesales.

Artículo 185. Principios.

Los funcionarios de los servicios previos al juicio se regirán por los siguientes principios:

I. Imparcialidad. Los funcionarios trabajan para auxiliar al juez en la toma de decisiones sobre medidas cautelares y en la supervisión de los imputados, sin inclinarse indebidamente a favor o en contra de alguna de las partes;
II. Objetividad. Los funcionarios deberán ser objetivos en la elaboración de sus reportes y no discriminarán a la personas por motivos de raza, religión, origen nacional o étnico, género, orientación sexual, condición social o por cualquier otro motivo;
III. Confidencialidad. Los funcionarios deben guardar reserva y abstenerse de proporcionar información a terceros ajenos al propósito del servicio.

Artículo 186. Utilización de la información suministrada por el imputado.

Para incentivar que el imputado suministre información veraz y completa al personal de la Oficina de Servicios Previos al Juicio, la información no podrá ser usada para demostrar su participación en el delito que se le atribuye. Salvo las excepciones previstas por la ley, la información sólo se usará para decidir acerca de la necesidad de imponer medidas cautelares.

La información recabada durante la supervisión podrá ser utilizada cuando verse sobre la comisión de un nuevo delito o un delito cuya comisión continúe durante el periodo de aplicación de la medida cautelar, así como para la aplicación de la suspensión del proceso a prueba.

Artículo 187. Incumplimiento de obligaciones.

Cuando el incumplimiento o la violación a las medidas impuestas pueda implicar que se deba librar una orden de aprehensión o de cateo, la Oficina de Servicios Previos al Juicio procederán de inmediato a comunicarle la situación al Tribunal y al Ministerio Público, para que éstos dispongan lo que corresponda.

Libro Segundo EL PROCESO PENAL

TÍTULO I FORMAS ANTICIPADAS DE TERMINACIÓN DEL PROCESO

CAPÍTULO I Acuerdos Reparatorios.

Artículo 188. Definición.

Es el acuerdo entre la víctima u ofendido y el imputado que una vez aprobado por el Tribunal y cumplido en sus términos, tiene como efecto la conclusión del proceso.

Artículo 189. Procedencia.

Procederán los acuerdos reparatorios en los siguientes delitos:

I. Cometidos por culpa;

II. En los que proceda el perdón de la víctima u ofendido; o

III. Patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas.

Quedan expresamente exceptuados los casos que se sigan por delitos en contra de la libertad y seguridad sexuales y el normal desarrollo psicosexual, violencia familiar y los delitos cometidos por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas y los realizados por sujetos que pertenezcan a alguna asociación delictuosa u organización criminal.

228

Tampoco procederán los acuerdos reparatorios en los casos en que el imputado haya celebrado anteriormente otros acuerdos por hechos de la misma naturaleza; quedan libres de esta excepción, los casos relativos a delitos culposos cometidos sin el uso de sustancias tóxicas.

Artículo 190. Oportunidad.

Los acuerdos reparatorios procederán hasta antes de decretarse el auto de apertura de juicio.

El Juez de Control, a petición de las partes, podrá suspender el proceso penal hasta por treinta días para que las partes negocien, medien o concilien. En este proceso deberá participar personal especializado en métodos alternos a la solución del conflicto. En caso de interrumpirse la negociación, mediación o conciliación, cualquiera de las partes puede solicitar la continuación del proceso.

Artículo 191. Trámite.

Desde su primera intervención, el Ministerio Público o en su caso, el Juez de Control, invitarán a los interesados a que lleguen a acuerdos reparatorios en los casos en que proceda, y les explicará los efectos y los mecanismos de mediación o conciliación disponibles.

El juzgador no aprobará los acuerdos reparatorios cuando tenga fundados motivos para estimar que alguno de los intervinientes no está en condiciones de igualdad para celebrar el acuerdo o ha actuado bajo coacción o amenaza.

La información que se genere en los procedimientos respectivos no podrá ser utilizada en perjuicio de las partes dentro del proceso penal.

El plazo fijado para el cumplimiento de las obligaciones suspenderá el trámite del proceso y la prescripción de la acción penal.

Si el imputado incumple sin justa causa las obligaciones pactadas dentro del término acordado, o en caso de no establecerlo dentro de un año, contado a partir del día siguiente de la aprobación del acuerdo, el proceso continuará como si no se hubiera arribado a acuerdo alguno.

El cumplimiento de lo acordado impedirá el ejercicio de la acción penal o, en su caso, extinguirá la ya iniciada.

CAPÍTULO II Suspensión condicional del proceso

Artículo 192. Definición.

Es el planteamiento formulado por el Ministerio Público o el imputado a través de su defensor que contenga un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento a una o varias de las condiciones que refiere este Código, que justifiquen, una efectiva tutela de los derechos procesales de la víctima y que en caso de cumplirse, permite la extinción de la acción penal.

Artículo 193. Procedencia.

En los casos en que el auto de vinculación a proceso se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena no exceda de cinco años, el imputado no haya sido condenado por delitos dolosos, no tenga o haya tenido otro proceso bajo suspensión condicional y no exista oposición fundada del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, procederá la suspensión condicional del proceso a solicitud del imputado o del Ministerio Público con acuerdo de aquél.

230

Artículo 194. Oportunidad.

Una vez dictado el auto de vinculación a proceso, la suspensión condicional del mismo podrá solicitarse en cualquier momento hasta antes de acordarse la apertura de juicio, y no impedirá el ejercicio de la acción civil ante los Tribunales respectivos. Si efectuada la petición ya existe acusación, se estará a los hechos precisados en ésta.

Artículo 195. Plan de reparación.

En la audiencia en donde se resuelva sobre la solicitud de suspensión del proceso a prueba, el imputado deberá plantear, en su caso, un plan de reparación del daño causado por el delito y plazos para cumplirlo.

Artículo 196. Condiciones por cumplir durante el período de suspensión condicional del proceso.

El Juez de Control fijará el plazo de suspensión del proceso a prueba, que no podrá ser inferior a seis meses ni superior a tres años, y determinará imponer al imputado una o varias de las condiciones que deberá cumplir, entre ellas las siguientes:

I. Residir en un lugar determinado;

II. Frecuentar o dejar de frecuentar determinados lugares o personas;

III. Abstenerse de consumir drogas o estupefacientes o de abusar de las bebidas alcohólicas;

IV. Participar en programas especiales para la prevención y tratamiento de adicciones;

V. Aprender una profesión u oficio o seguir cursos de capacitación en el lugar o la institución que determine el Juez de Control;

VI. Prestar servicio social a favor del Estado o de instituciones de beneficencia pública;

VII. Someterse a tratamiento médico o psicológico, de preferencia en instituciones públicas;
VIII. Tener un trabajo o empleo, o adquirir, en el plazo que el Juez de Control determine, un oficio, arte, industria o profesión, si no tiene medios propios de subsistencia;
IX. Someterse a la vigilancia que determine el Juez;
X. No poseer ni portar armas;
XI. No conducir vehículos;
XII. Abstenerse de viajar al extranjero; y
XIII. Cumplir con los deberes de deudor alimentario.

Para fijar las condiciones, el Juez de Control puede disponer que el imputado sea sometido a una evaluación previa. El Ministerio Público, la víctima u ofendido, podrán proponer al Juez condiciones a las que consideran debe someterse el imputado.

El Juez de Control preguntará al imputado si se obliga a cumplir con las condiciones impuestas y, en su caso, lo prevendrá sobre las consecuencias de su inobservancia.

Artículo 197. Trámite.
La víctima u ofendido serán citados a la audiencia, pero su incomparecencia no impedirá que el Juez resuelva sobre la procedencia y términos de la solicitud.

En la resolución se fijarán las condiciones bajo las cuales se suspende el proceso o se rechaza la solicitud, y aprobará el plan de reparación propuesto por el imputado, mismo que podrá ser modificado por el Juez en la audiencia. La sola falta de recursos del imputado no podrá aducirse para rechazar la suspensión condicional del proceso.

Artículo 198. Conservación de los registros de investigación y medios de prueba

En los asuntos suspendidos en virtud de las disposiciones de este Capítulo, el Ministerio Público tomará las medidas necesarias, para evitar la pérdida, destrucción o ineficacia de los registros y medios de prueba conocidos y los que soliciten los sujetos que intervienen en el proceso.

Artículo 199. Revocación de la suspensión.

Si el imputado se aparta considerablemente y en forma injustificada de las condiciones impuestas, no cumple con el plan de reparación, o posteriormente es condenado en forma ejecutoriada por delito doloso o culposo, cuando el proceso suspendido se refiera a delito de esta naturaleza, el Juez de Control, previa petición del agente del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, convocará a las partes a una audiencia en la que se debatirá sobre la revocatoria y resolverá de inmediato, acerca de la reanudación de la persecución penal. En lugar de la revocatoria, el Juez de Control podrá ampliar el plazo de la suspensión a prueba hasta por dos años más. Esta extensión del término puede imponerse sólo por una vez.

Si la víctima u ofendido ha recibido pagos durante la suspensión del proceso a prueba que posteriormente es revocada, ellos se destinarán a la indemnización por daños y perjuicios que le pudiere corresponder.

Artículo 200. Cesación provisional de los efectos de la suspensión del proceso a prueba.

La obligación de cumplir con las condiciones establecidas y el plazo de suspensión cesarán mientras el imputado esté privado de su libertad por otro proceso. Pero se reanudarán una vez que obtenga su libertad.

233

Si el imputado está sometido a otro proceso y goza de libertad, la obligación de cumplir con las condiciones y el plazo seguirá su curso, pero no podrá decretarse la extinción de la acción penal sino cuando quede firme la resolución que lo exime de responsabilidad por el nuevo hecho.

Artículo 201. Efectos de la suspensión del proceso a prueba.
Durante el período de suspensión condicional del proceso quedará suspendida la prescripción de la acción penal.

Cumplidas las condiciones y el plan de reparación en el plazo que se fije sin que la suspensión fuere revocada, se extinguirá la acción penal, debiendo el Tribunal dictar de oficio o a petición de parte el sobreseimiento.

TÍTULO II PROCEDIMIENTO ORDINARIO

CAPÍTULO I Etapas del procedimiento

Artículo 202. Etapas del proceso penal.
El proceso comprende las siguientes etapas:
I. La de investigación, que abarca desde la presentación de la denuncia, querella o su equivalente y se agota en cada caso una vez concluido el plazo que conceda el Juez de Control para su finalización antes de la acusación, el sobreseimiento o la decisión de algún medio alternativo de solución de controversias, y comprende las siguientes fases:

a) Investigación inicial, que comprende desde la presentación de la denuncia, querella o su equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de Control.

b) Investigación complementaria, que comprende desde el auto de vinculación a proceso y se agota una vez concluido el plazo que conceda el Juez de Control para su conclusión antes de la acusación, el sobreseimiento o la decisión de algún medio alternativo de solución de controversias.

La investigación no se interrumpe ni suspende durante el tiempo en que se lleva a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. Tampoco pierde, el Ministerio Público, la dirección de la investigación una vez ejercida la acción penal.

II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura a juicio; y

III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la emisión de la sentencia que pone fin al proceso.

CAPÍTULO II Etapa de Investigación

SECCIÓN I Disposiciones para la investigación

Artículo 203. Deber de investigación penal

Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la investigación penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos previstos en la ley.

La investigación debe realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el

esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión.

Artículo 204. Objeto de la investigación.

La investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal y la eventual acusación contra el imputado.

Artículo 205. Principios que rigen la investigación.

Las autoridades encargadas de desarrollar la investigación de los delitos se regirán por los principios de certeza, legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, imparcialidad, lealtad, honradez, disciplina y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales ratificados por el Estado Mexicano.

Artículo 206. Obligación de suministrar información.

Toda persona o servidor público están obligados a proporcionar oportunamente la información que requiera el Ministerio Público o la policía, en el ejercicio de sus funciones de investigación, los que no podrán excusarse de suministrarla salvo en los casos expresamente previstos en la ley.

En el caso de que se negaren a proporcionar la información requerida sin estar impedidos para hacerlo, o no se corrobore la veracidad de la información proporcionada, la policía inmediatamente y por cualquier medio lo hará del conocimiento del Ministerio Público, conjuntamente con los datos de que disponga respecto de las circunstancias que se relacionen con la persona y el hecho ilícito, para que éste pueda ordenar lo que corresponda para que proporcione información o solicitar al Juez de Control se realice la entrevista.

En caso de incumplimiento de este mandato será sancionado de conformidad con las leyes aplicables.

Artículo 207. Proposición de actos de investigación.

Durante la investigación, tanto el imputado, cuando haya comparecido o haya sido entrevistado, como su defensor, así como la víctima o el ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todas aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público ordenará que se lleven a cabo aquellos que sean conducentes. La solicitud deberá resolverse en un plazo máximo de tres días.

Artículo 208. Registro de los actos de investigación.

El Ministerio Público y la policía deberán dejar registro de todas las actuaciones que se realicen en la investigación del delito, utilizando al efecto cualquier medio que permita garantizar la fidelidad e integridad de la información, así como el acceso a la misma de aquellos que de acuerdo a la ley tuvieren derecho a exigirlo.

El registro de cada actuación deberá consignar por lo menos la indicación de la fecha, hora y lugar de realización, de los servidores y demás personas que hayan intervenido y una breve descripción de la actuación y, en su caso, de sus resultados.

Artículo 209. Reserva de los actos de investigación.

Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados. A ellos tendrán acceso únicamente el imputado, su defensor y la víctima o el ofendido en los términos de este Código.

237



El imputado y su defensor podrán tener acceso a las actuaciones de investigación una vez que aquél comparezca como imputado, sea detenido, se pretenda recibir su declaración o entrevistarlo. A partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa. En ningún caso la reserva de los actos de investigación podrá darse una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo establecido en artículo 210 (excepciones al acceso a la información).

Antes de su primera comparecencia ante juez, el imputado y su defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y a que se les entregue copia de los mismos con la oportunidad debida para preparar la defensa.

En caso que el Ministerio Público se niegue a entregar al imputado o a su defensa copias de los registros que existan en la investigación, éstos podrán acudir ante Juez de Control solicitando su intervención a fin de que el mismo ordene al Ministerio Público la entrega de los registros requeridos en un plazo no mayor de cuarenta y ocho horas.

Artículo 210. Excepciones para el acceso a la información.

El Ministerio Público podrá solicitar excepcionalmente al juez que cierta información se mantenga bajo reserva aún después de la vinculación a proceso, cuando sea necesario para evitar la destrucción, alteración u ocultamiento de pruebas, la intimidación o amenaza o influencia a los testigos del hecho, a fin de asegurar el éxito de la investigación, o para la protección de personas o bienes jurídicos.

238

Si el juez considera procedente la solicitud así lo resolverá y determinará el plazo de la reserva, siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa. La reserva podrá ser prorrogada cuando sea estrictamente necesario, pero no más allá de la formulación de la acusación.

Artículo 211. Acceso a evidencia bajo cadena de custodia.

La defensa o el imputado podrán tener acceso a cualquier evidencia que se encuentre bajo cadena de custodia dentro de la investigación con el fin de tomar muestras, fotografías, video o realizar peritajes, siempre y cuando no exista riesgo de destrucción de la misma.

En este caso, el agente del Ministerio Público ordenará a la persona que tenga bajo su custodia la evidencia, que realice la apertura del embalaje y permita llevar a cabo los análisis pertinentes en base a los protocolos establecidos, debiendo dejar constancia de ello en la respectiva cadena de custodia.

Si el agente del Ministerio Público no autoriza el acceso, el imputado a través de su defensor, podrá acudir ante el Juez de Control para que en caso de ser procedente la petición, ordene al agente del Ministerio Público que permita el acceso en un plazo no mayor a cinco días.

SECCIÓN II Inicio de la investigación

Artículo 212. Formas de inicio,

La investigación de los delitos podrá iniciarse por denuncia, por querella o por su equivalente cuando la ley lo exija. El Ministerio Público y la policía están obligados a proceder sin mayores requisitos a la investigación de los hechos que la ley señale como delitos de que tengan noticia.

Tratándose de delitos que deban perseguirse de oficio, bastará para el inicio de la investigación la comunicación que haga cualquier persona o parte informativo que rinda la policía, en los que se haga del conocimiento de la autoridad investigadora hechos que pudieran ser delictivos. A la comunicación o parte informativo se acompañarán los elementos que sean conducentes para la investigación.

Tratándose de informaciones anónimas, la policía constatará la veracidad de los datos aportados mediante los actos de investigación que consideren conducentes para este efecto. De confirmarse la información, se iniciará la investigación correspondiente, observándose, además, lo dispuesto en el siguiente párrafo de este artículo.

Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la probable comisión de un hecho delictivo cuya persecución dependa de querella o de cualquier otro requisito equivalente que deba formular alguna autoridad, lo comunicará por escrito y de inmediato a ésta, a fin de que resuelva lo que a sus facultades o atribuciones corresponda. Las autoridades harán saber por escrito al Ministerio Público la determinación que adopten.

El Ministerio Público podrá aplicar el criterio de oportunidad en los casos previstos por las disposiciones legales aplicables o no iniciar investigación cuando resulte evidente que no hay conducta que perseguir. Las decisiones del Ministerio Público serán impugnables en los términos de Ley, por quien resulte agraviado.

Artículo 213. Deber de denunciar.

Toda persona que tenga conocimiento de la comisión de un hecho que la ley señale como delito, está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público y en caso de urgencia ante cualquier agente de policía.

240

Quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito, está obligado a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público, o a comunicar la denuncia recibida por caso de urgencia, proporcionándole todos los datos que tuviere, poniendo a su disposición a los imputados, si hubieren sido detenidos en flagrancia. Quien tenga el deber jurídico de denunciar y no lo haga, será acreedor a las sanciones correspondientes.

No estarán obligados a denunciar el tutor, curador, pupilo, cónyuge, concubina, concubinario o conviviente legalmente reconocido del imputado, ni sus parientes por consanguinidad o por afinidad en la línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado y en la colateral por consanguinidad o afinidad, hasta el cuarto grado inclusive.

Artículo 214. Forma y contenido de la denuncia.

La denuncia podrá formularse por cualquier medio y deberá contener, salvo los casos de denuncia anónima o reserva de identidad, la identificación del denunciante, su domicilio, la narración circunstanciada del hecho, la indicación de quien o quienes lo habrían cometido y de las personas que lo hayan presenciado o que tengan noticia de él y todo cuanto le constare al denunciante.

En el caso de la denuncia verbal se levantará un registro en presencia del denunciante, quien lo firmará junto con el servidor público que la reciba. La denuncia escrita será firmada por el denunciante.

En ambos casos, si el denunciante no pudiere firmar estampará su huella digital, previa lectura que se le haga de la misma.

Artículo 215. Trámite de la denuncia.

241

Cuando la denuncia sea presentada directamente ante el Ministerio Público, éste iniciará la investigación conforme a las reglas de este Código.

Cuando la denuncia sea presentada a la policía en los términos señalados por este Código, ésta informará al Ministerio Público de manera inmediata.

Artículo 216. Querella u otro requisito equivalente.

La querella es la expresión de la voluntad de la víctima u ofendido o del legalmente facultado para ello, mediante la cual manifiesta expresa o tácitamente ante el Ministerio Público su deseo de que se inicie la investigación de uno o varios hechos que la ley señale como delitos y que requieran un requisito de procedibilidad y, en su caso, se ejerza la acción penal correspondiente.

La querella deberá contener, en lo conducente, los mismos requisitos de la denuncia. El Ministerio Público deberá cerciorarse que éstos se encuentren debidamente satisfechos a fin de poder continuar la investigación y, en su caso, ejercer la acción penal.

Artículo 217. Personas menores de edad o que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho.

Tratándose de personas menores de dieciocho años o personas que no tengan capacidad de comprender el significado del hecho, la querella podrá ser presentada por quienes ejerzan la patria potestad o la tutela o sus representantes legales, sin perjuicio de que puedan hacerlo por sí mismos, por sus hermanos o un tercero, cuando se trate de delitos cometidos en su contra por quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o sus propios representantes.

SECCIÓN III Actuaciones derivadas del conocimiento de un hecho delictuoso

Artículo 218. Actos de investigación inmediatos.

Inmediatamente que el Ministerio Público, la policía o los funcionarios encargados de practicar en su auxilio de actos de investigación tengan conocimiento de la probable existencia de un delito que deba perseguirse de oficio, dictarán todas las medidas y providencias necesarias para:

I. Proporcionar seguridad y auxilio a las víctimas y testigos;

II. Impedir que se pierdan, destruyan o alteren los indicios, objetos, instrumentos o productos del delito;

III. Saber qué personas fueron testigos;

IV. evitar que el delito se siga cometiendo; y

V. En general, impedir que se dificulte la investigación, procediendo a la detención de los que intervinieron en su comisión en los casos de delito flagrante y su registro inmediato.

Artículo 219. Atención médica de lesionados.

La atención médica de quienes hayan sufrido lesiones provenientes del delito y sean considerados imputados, se hará en los hospitales públicos.

Cuando por la urgencia del caso o la gravedad de la lesión se requiera la intervención médica inmediata y no fuese posible recurrir a un hospital que preste servicios al público en general, se recurrirá, para la atención que corresponda, a los establecimientos de salud de organismos de la administración pública más cercanos al lugar en que se encuentre el lesionado, salvo que éste expresamente solicite ser trasladado a una institución de salud privada, en cuyo caso, los gastos deberán ser asumidos por aquél.

Si el lesionado no debe estar privado de libertad, la autoridad que conozca del caso podrá permitir que sea atendido en lugar distinto en donde además se le podrá realizar la clasificación legal de las lesiones. Este permiso se concederá sin

perjuicio de que la autoridad se cerciore del estado del lesionado cuando lo estime oportuno.

Siempre que se deba explorar físicamente a personas, la atención correspondiente deberá ser proporcionada, a petición del interesado, por médicos del sexo que éste elija, salvo que esto no sea posible en el momento y sitio en que deba efectuarse la exploración, en cuyo supuesto el propio interesado podrá proponer quién lo atienda.

Será responsabilidad del Ministerio Público, o de la policía en caso de urgencia, garantizar la seguridad de las personas lesionadas, de las instalaciones y del personal médico de las instituciones de salud pública o privada a las que se remita a una persona lesionada en un hecho de naturaleza delictiva. Dicha guardia y protección deberá ajustarse a las circunstancias del caso, evaluando el peligro de que se continúe la agresión o se amenace la integridad de la víctima o imputado, éste pueda sustraerse o ser sustraído de la acción de la justicia o que la integridad del personal médico que lo atiende también corra riesgo.

Si la persona detenida presenta lesiones, o la autoridad observa indicios de violaciones al artículo 22 constitucional, la policía o el Ministerio Público, tomarán medidas inmediatas para asegurarse de la atención médica del imputado y de las valoraciones psicológicas para determinar la naturaleza de las lesiones. Si de ello se deriva alguna lesión a garantías y derechos humanos, iniciará una investigación de oficio.

Artículo 220. Cadena de custodia.

La cadena de custodia es el sistema de control y registro que se aplica al indicio u objeto, instrumento o producto del hecho delictuoso, desde su localización, descubrimiento o aportación, hasta que la autoridad competente ordene su

244

conclusión, en los términos de los lineamientos manuales, protocolos y demás disposiciones aplicables que emitan las autoridades federales o de las entidades federativas.

La aplicación de la cadena de custodia es responsabilidad de los servidores públicos que entren en contacto con los indicios y su debida ejecución deberá ser verificada por el Ministerio Público. Lo anterior será aplicable a quien por el cumplimiento de las funciones propias de su encargo, en especial el personal de los servicios de salud o de protección civil, entre en contacto con los indicios o llegue al lugar de los hechos o del hallazgo.

Artículo 221. Aseguramiento de bienes, instrumentos, objetos o productos del delito.

Los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que existan huellas o pudieran tener relación con éste, siempre que guarden relación directa con el lugar de los hechos o del hallazgo, serán asegurados durante el desarrollo de la investigación a fin de que no se alteren, destruyan o desaparezcan.

Invariablemente, la policía deberá informar al Ministerio Público sobre los aseguramientos que realice, a fin de que éste determine su legalidad y procedencia y si resulta necesario llevar a cabo actos procesales adicionales.

El resguardo, custodia, administración, entrega y en su caso disposición o destrucción de los bienes asegurados, se realizarán de conformidad con la legislación que resulte aplicable.

Artículo 222. Procedimiento para el aseguramiento de bienes.

245

Con excepción de los aseguramientos derivados de una detención en flagrancia, los mismos se realizarán conforme al siguiente procedimiento:

I. La policía deberá elaborar un inventario de todos y cada uno de los bienes asegurados, el cual deberá estar firmado por el imputado o la persona con quien se atienda el acto de investigación. Ante su ausencia o negativa, la relación deberá ser firmada por dos testigos presenciales;

II. En el caso de que los productos, instrumentos u objetos del delito por su naturaleza constituyan indicios, la policía deberá tomar las providencias necesarias, para la debida preservación del lugar de los hechos o del hallazgo y de los indicios, huellas, o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito; y

III. Realizado el aseguramiento, a la brevedad se pondrán mediante el inventario respectivo, los bienes a disposición de la autoridad competente de conformidad con las disposiciones aplicables.

Artículo 223. Notificación del aseguramiento y abandono.

El Ministerio Público deberá notificar al interesado o a su representante legal el aseguramiento del objeto, instrumento o producto del delito, dentro de los sesenta días naturales siguientes a su ejecución, entregando o poniendo a su disposición, según sea el caso, una copia del registro de aseguramiento, para que manifieste lo que a su derecho convenga.

Cuando se desconozca la identidad o domicilio del interesado, la notificación se hará por dos edictos que se publiquen en un periódico de circulación nacional o estatal, según corresponda, con un intervalo de diez días hábiles entre uno y otro. En la notificación se apercibirá al interesado o a su representante legal para que

246

se abstenga de ejercer actos de dominio sobre los bienes asegurados y se le apercibirá que de no manifestar lo que a su derecho convenga, en un término de noventa dias naturales siguientes al de la notificación, los bienes causarán abandono a favor del Gobierno Federal o de las entidades federativas, según corresponda.

La declaratoria de abandono a que se refiere el presente artículo será emitida por el Ministerio Público y notificada, en su caso, a la autoridad competente que tenga los bienes bajo su administración, para los efectos que correspondan.

Artículo 224. Aseguramiento de indicios de gran tamaño.

Los indicios de gran tamaño, como naves, aeronaves, vehículos automotores, máquinas, grúas y otros similares, después de ser examinados por peritos para recoger indicios que se hallen en ellos, podrán grabarse en videocinta o se fotografiarán en su totalidad y se registrarán del mismo modo los sitios en donde se hallaron huellas, rastros, narcóticos, armas, explosivos o similares que puedan ser objeto o producto de delito.

Los indicios mencionados en este artículo, después de que sean examinados, fotografiados, grabados o filmados, podrán ser devueltos, con o sin reservas, al propietario, poseedor o al tenedor legítimo según el caso, previa demostración de la calidad invocada, siempre y cuando no hayan sido medios eficaces para la comisión del delito.

Artículo 225. Aseguramiento de inmuebles.

El Ministerio Público podrá ordenar el aseguramiento de inmuebles, los cuales podrán quedar en posesión de su propietario o poseedor, siempre y cuando no se afecte el interés social ni el orden público. Quienes queden en posesión de los

247

inmuebles no podrán ejercer actos de dominio y quedarán sujetos a lo que establezca la legislación aplicable.

Artículo 226. Efectos del aseguramiento en actividades lícitas.

El aseguramiento no será causa para el cierre o suspensión de actividades de empresas, negociaciones o establecimientos con actividades licitas.

Artículo 227. Cosas no asegurables.

No estarán sujetas al aseguramiento:

I. Las comunicaciones entre el imputado y las personas que puedan abstenerse de declarar como testigos por razón de parentesco, secreto profesional o cualquiera otra establecida en la Ley; y

II. Las notas que hubieran tomado las personas señaladas en la fracción anterior sobre comunicaciones confiadas por el imputado o sobre cualquier circunstancia, a las cuales se extiende el derecho de abstenerse a declarar o el secreto profesional.

Si en cualquier momento del proceso se constata que las cosas aseguradas son de las comprendidas en este artículo, éstas serán inadmisibles como fuente de información o medio de prueba.

No habrá lugar a estas excepciones cuando existan indicios de que las personas mencionadas en este artículo, distintas al imputado, estén involucradas como autoras o partícipes del hecho punible o existan indicios fundados de que están encubriéndolo ilegalmente.

Artículo 228. Causales de procedencia para la devolución de bienes asegurados.

La devolución de bienes asegurados procede en los casos siguientes:

I. Cuando el Ministerio Público resuelva el no ejercicio de la acción penal, la aplicación de un criterio de oportunidad, la reserva, se abstenga de acusar, o levante el aseguramiento de conformidad con las disposiciones aplicables; o
II. Cuando la autoridad judicial levante el aseguramiento o no decrete el decomiso, de conformidad con las disposiciones aplicables.

Artículo 229. Entrega de bienes asegurados.

Cuando proceda la devolución de bienes asegurados, éstos quedarán a disposición de quien acredite tener derecho a ellos. La autoridad judicial o el Ministerio Público notificarán su resolución al interesado o al representante legal dentro de los treinta días siguientes, para que en el plazo de noventa días a partir de la notificación se presente a recogerlos, bajo el apercibimiento que de no hacerlo los bienes causará abandono a favor del Gobierno Federal o de las entidades federativas.

Cuando se haya hecho constar el aseguramiento de los bienes en los registros públicos, la autoridad que haya ordenado su devolución ordenará su cancelación.

Artículo 230. Devolución de bienes asegurados.

La devolución de los bienes asegurados incluirá la entrega de los frutos que, en su caso, hubieren generado.

La devolución de numerario comprenderá la entrega del principal y, en su caso, de sus rendimientos durante el tiempo en que haya sido administrado, a la tasa que cubra la Tesorería de la Federación por los depósitos a la vista que reciba.

La autoridad que haya administrado empresas, negociaciones o establecimientos, al devolverlas rendirá cuentas de la administración que hubiere realizado a la

249

persona que tenga derecho a ello, y le entregará los documentos, objetos, numerario y, en general, todo aquello que haya comprendido la administración.

Previo a la recepción de los bienes por parte del interesado, se dará oportunidad a éste para que revise e inspeccione las condiciones en que se encuentren los mismos, a efecto de que verifique el inventario correspondiente.

Artículo 231. Devolución de bienes que hubieren sido enajenados o sobre los que exista imposibilidad de devolverlos.

Cuando se determine por la autoridad competente la devolución de los bienes que hubieren sido previamente enajenados o exista la imposibilidad de devolverlos se estará a lo dispuesto por las disposiciones legales que resulten aplicables.

Artículo 232. Decomiso

La autoridad judicial, mediante sentencia en el proceso penal correspondiente, podrá decretar el decomiso de bienes, con excepción de los que hayan causado abandono en los términos de este Código o respecto de aquellos sobre los cuales haya procedido la acción de extinción de dominio.

Artículo 233. Otorgamiento de recompensas.

Se podrá ofrecer y entregar recompensa en los términos y condiciones que, por acuerdo específico del titular del Ministerio Público determine, a quien o a quienes proporcionen información veraz y útil que permita el auxilio eficaz, efectivo y oportuno para:

I. Localizar víctimas u ofendidos del delito;

II. Identificar, localizar, detener o aprehender a imputados, respecto de los cuales exista la probabilidad de que cometieron o participaron en un hecho que la ley señale como delito;

250

III. Localizar o asegurar indicios, objetos, instrumentos o productos del hecho delictuoso, o

IV. Identificar y localizar recursos, derechos o bienes relacionados o susceptibles de ser vinculados en operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Artículo 234. Control judicial de actos de investigación.

Ningún acto de investigación requiere de autorización previa del Juez de Control, salvo los siguientes:

I. La exhumación de cadáveres;

II. Las órdenes de cateo;

III. La intervención de comunicaciones privadas y correspondencia;

IV. La toma de muestras de fluido corporal, vello o pelo, extracciones de sangre u otros análogos cuando la persona requerida se niegue a proporcionar la misma, excepto que se trate de la víctima u ofendido;

V. El reconocimiento o examen físico de una persona cuando aquélla se niegue a ser examinada; y

VI. Las demás que señalen las leyes aplicables.

SECCIÓN IV Formas de terminación de la investigación

Artículo 235. Facultad de abstenerse de investigar.

El Ministerio Público podrá abstenerse de investigar, cuando los hechos relatados en la denuncia, querella o acto equivalente, no fueren constitutivos de delito o cuando los antecedentes y datos suministrados permitan establecer que se encuentra extinguida la acción penal o la responsabilidad penal del imputado. Esta decisión será siempre fundada y motivada y podrá ser impugnada por quien resulte agraviado en los términos de la legislación aplicable.

Artículo 236. Archivo temporal.

El Ministerio Público, de conformidad con los lineamientos aplicables, podrá archivar temporalmente aquellas investigaciones en fase inicial en las que no se encuentren antecedentes suficientes que permitan desarrollar actividades conducentes al esclarecimiento de los hechos, en tanto se obtengan datos que permitan continuarla a fin de ejercitar la acción penal.

El archivo temporal concluirá con la extinción de la acción penal por caducidad o prescripción según sea el caso.

El Ministerio Público deberá realizar la desestimación temprana del hecho del que tuvo conocimiento si los datos de prueba son notoriamente insuficientes o de la declaración de la víctima y del ofendido no se desprenden elementos que permitan realizar una investigación. En este caso, el Ministerio Público deberá notificar a la víctima o al ofendido en un término que no excederá de cinco días hábiles, el archivo temporal de la investigación y explicarle de manera comprensible las razones que fundan y motivan el archivo temporal.

Artículo 237. No ejercicio de la acción.

Antes de la audiencia inicial, el Ministerio Público podrá decretar el no ejercicio de la acción penal cuando los antecedentes le permitan concluir que en el caso concreto se actualiza alguna de las causales de sobreseimiento previstas en este Código.

Artículo 238. Casos en que operan criterios de oportunidad

El Ministerio Público deberá ejercer la acción penal en todos los casos en que sea procedente, con arreglo a las disposiciones de la ley. No obstante, siempre que esté satisfecha la reparación del daño, podrá prescindir total o parcialmente, de la persecución penal, limitarla a alguno o varios hechos delictivos o a alguna de las

252

personas que participaron en los mismos en los casos que establezcan las disposiciones normativas de la Federación y las entidades federativas, según sea el caso, las que en todo caso deberán observar lo siguiente:

I. Se trate de un hecho socialmente insignificante o de mínima o exigua culpabilidad del imputado, salvo que afecte gravemente un interés público o lo haya cometido un servidor público en el ejercicio de su cargo o con motivo de él.

No podrá aplicarse criterios de oportunidad en los casos de delitos contra el libre desarrollo de la personalidad y de violencia familiar, por afectar gravemente el interés público.

II. Se trate de delitos que sean de investigación compleja, con independencia que ameriten prisión preventiva oficiosa, siempre y cuando el imputado colabore eficazmente con la misma y brinde información esencial para evitar que continúe el delito o se perpetren otros, ayude a esclarecer el hecho investigado u otros conexos o proporcione información útil para probar la participación de otros imputados, y siempre que, en todos los casos, su participación sea menos grave que la de estos últimos o los hechos delictivos por el cometido resulten considerablemente más leves que aquellos cuya persecución facilita o cuya continuación evita;

III. El imputado haya sufrido, a consecuencia del hecho, daño físico o psicológico grave que torne desproporcionada la aplicación de una pena;

IV. La pena o medida de seguridad que pueda imponerse por el hecho de cuya persecución se prescinde, carezca de importancia en consideración a la pena o medida de seguridad ya impuesta, o la que se le impuso en un proceso tramitado en otro fuero.

253

El agente del Ministerio Público aplicará los criterios de oportunidad sobre la base de razones objetivas y sin discriminación, valorando las pautas descritas en cada caso individual, según los criterios generales que para tal efecto haya dictado el titular del Ministerio Público.

Artículo 239. Efectos del criterio de oportunidad.

Por la aplicación de un criterio de oportunidad, se produce la extinción de la acción penal con respecto al autor o partícipe en cuyo beneficio se dispuso la aplicación de dicho criterio.Si la decisión se funda en la insignificancia del hecho, sus efectos se extenderán a todos los que reúnan las mismas condiciones.

No obstante, en el caso de las fracciones II (investigación compleja) y IV (eventual consecuencia jurídica por imponer) del artículo 238, se suspenderá el ejercicio de la acción penal en relación con los hechos o las personas en cuyo favor se aplicó el criterio de oportunidad, hasta quince días naturales después de que quede firme la sentencia respectiva, momento en que el Juez, a solicitud del agente del Ministerio Público, deberá resolver definitivamente sobre el cese de esa persecución.

Artículo 240. Control judicial.

Las decisiones del Ministerio Público sobre el archivo temporal, abstenerse de investigar, aplicación de un criterio de oportunidad y no ejercicio de la acción penal, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido ante el Juez de Control, dentro de los diez días posteriores a la notificación. En estos casos, el Juez de Control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su defensor. En caso de incomparecencia de la víctima, el ofendido o sus

representantes legales a la audiencia, a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de Control declarará sin materia la impugnación.

La resolución que se dicte no admitirá recurso alguno.

SECCIÓN V Datos de prueba, medios de prueba y prueba

Artículo 241. Medio de prueba

Es la fuente directa de la información que habrá de registrarse en un acto de investigación o de producirse como prueba. Tratándose de medios probatorios que se desahoguen en audiencias preliminares sólo para los efectos de la decisión que tome el Juez de Control.

Artículo 242. Antecedente de investigación

Es todo registro incorporado en la carpeta de investigación que sirve de sustento para aportar datos de prueba.

Artículo 243. Dato de prueba.

Es la información que emana del antecedente de investigación que se invoca para sustentar decisiones tomadas en audiencias preliminares al juicio.

Artículo 244. Prueba.

Es la información que emana del medio de prueba desahogado en juicio o en anticipo de prueba y al que puede otorgarse valor para dictar la sentencia.

Artículo 245. Derecho a ofrecer medios de prueba.

Las partes tendrán el derecho de ofrecer medios de prueba para sostener sus planteamientos, bajo los presupuestos indicados en este Código.

255

Artículo 246. Licitud probatoria.

Los datos y las pruebas deberán ser obtenidos, producidos y reproducidos lícitamente, también deberán ser admitidos y desahogados en el proceso del modo que autoriza este Código.

Para efectos de la sentencia dictada en el juicio sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio, salvo en el caso de la prueba anticipada.

Artículo 247. Nulidad de prueba ilícita.

Cualquier dato o prueba obtenidos con violación de los derechos humanos será nulo.

Las partes harán valer la nulidad, en cualquier etapa del proceso y el juez o tribunal tendrá que pronunciarse al respecto.

Artículo 248. Reglas para la admisión de los medios de prueba.

Todo medio de prueba ofrecido por las partes habrá de admitirse. No habrá lugar a la admisión cuando se excluya un medio de prueba en virtud de la actualización de los siguientes supuestos:

a) Por generar efectos dilatorios en virtud de ser:

I. Sobreabundantes: Si el juez estima que la aprobación en los mismos términos en que las pruebas testimonial y documental hayan sido ofrecidas, produciría efectos puramente dilatorios en la audiencia de debate, dispondrá también que la parte que las ofrezca reduzca el número de testigos o de documentos, cuando mediante ellos desee acreditar los mismos hechos o circunstancias que no guarden pertinencia sustancial con la materia que se someterá a juicio. El juzgador podrá determinar cuántos peritos deban intervenir, según la

256

importancia del caso y la complejidad de las cuestiones por resolver, después de escuchar a las partes o podrá limitar su número cuando resulten excesivos y pudieran entorpecer la realización del juicio;

II. Impertinentes: por no referirse a los hechos controvertidos;

III. Innecesarias: por referirse a hechos públicos, notorios o incontrovertidos

b) Por ser ilícitas;

c) Por ser haber sido declaradas nulas; o

d) Por ser de aquellas que la ley señala como inadmisibles.

Artículo 249. Valoración de los datos y pruebas

El juez asignará libremente el valor correspondiente a cada uno de los datos y pruebas, con aplicación estricta de las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, a la luz de la sana crítica, debiendo justificar adecuadamente el valor otorgado a los datos y pruebas y, con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios, deberá explicar las razones que le permiten arribar al hecho que se considere probado.

SECCIÓN VI Actos de investigación

Artículo 250. Inspección.

La inspección es un acto de investigación sobre el estado que guardan lugares, objetos, instrumentos o productos del delito que podrá ser registrado por cualquier medio.

Será materia de la inspección todo aquello que pueda ser directamente apreciado por los sentidos. Si se considera necesario, la policía se hará asistir de peritos.

257

Al practicarse una inspección podrá entrevistarse a las personas presentes que puedan proporcionar algún dato útil para el esclarecimiento de los hechos.

Artículo 251. Revisión de personas.

En la investigación de los delitos, la policía podrá realizar la revisión sobre una persona y sus posesiones, en caso de flagrancia o cuando existan indicios de que oculta entre sus ropas o que lleva adheridos a su cuerpo, instrumentos, objetos o productos relacionados con el hecho considerado como delito que se investiga, respetando en todo momento su dignidad. Antes de la revisión, la persona afectada será informada del motivo de ésta.

La revisión consistirá en una exploración externa de la persona y sus posesiones, en la que no se afecte su dignidad.

Artículo 252. Revisión corporal.

La policía durante la investigación podrá solicitar a cualquier persona la aportación voluntaria de muestras de fluido corporal, vello o cabello, exámenes corporales de carácter biológico, extracciones de sangre u otros análogos, así como que se le permita fotografiar alguna parte del cuerpo, siempre que no implique riesgos para la salud y la dignidad.

La policía deberá informar previamente a la persona el motivo de la aportación y del derecho que tiene a negarse a proporcionar dichas muestras.

Las muestras o imágenes deberán ser obtenidas por personal especializado y del sexo que elija la persona a la que se le practica la revisión, con estricto apego al respeto a la dignidad. Las muestras o imágenes obtenidas serán analizadas y dictaminadas por los peritos en la materia. El material obtenido será confidencial.

258

En caso de que se niegue a aportar la muestra se estará a lo dispuesto en el articulo 253 (toma de muestras)

Artículo 253. Toma de muestras cuando la persona requerida se niegue a proporcionarlas.

En el supuesto de que la persona requerida se niegue a proporcionar la muestra de fluido corporal, vello o pelo, extracciones de sangre u otros análogos o imagen, la policía podrá solicitar al Ministerio Público que se comunique por cualquier medio con el Tribunal para solicitar la inmediata autorización de la práctica de dicho acto de investigación, justificando la necesidad de la medida y expresando la persona o personas en quienes haya de practicarse, el tipo y extensión de muestra o imagen a obtener, a lo que únicamente se limitará el acto . De concederse la autorización requerida, el juez deberá facultar al Ministerio Público para que, en el caso de que la persona a inspeccionar ya no se encuentre ante él, ordene su localización y presentación a efecto de que tenga verificativo el acto correspondiente.

El juez al resolver respecto de la solicitud de la medida hecha por el Ministerio Público, deberá tomar en consideración el principio de proporcionalidad y motivar que la medida resulta necesaria, es decir, que no existe otra menos gravosa para la persona que habrá de ser examinada o para el imputado, que resulte igualmente eficaz e idónea para el fin que se persigue, justificando la misma en atención a la gravedad del hecho que se investiga y por personal médico del sexo que elija la persona a examinar o el imputado.

En este acto procesal siempre deberá estar presente una persona de confianza del examinado o el abogado defensor en caso de que se trate del imputado, quien será advertido previamente de tal derecho. Tratándose de menores de edad o de

259

inimputables estará presente quien ejerza la patria potestad, la tutela o curatela del sujeto.

Cuando exista peligro de desvanecimiento del medio de la prueba, la solicitud se hará por cualquier medio y el Tribunal deberá autorizar inmediatamente la práctica del acto de investigación, siempre que se cumpla con las condiciones señaladas en este artículo.

Artículo 254. Inspección de vehículos.

La policía podrá realizar la inspección de un vehículo cuando existan indicios de que se ocultan en él personas, instrumentos, objetos o productos relacionados con el delito que se investiga.

La inspección que lleve a cabo la policía consistirá en una exploración sobre el vehículo y las pertenencias que se encuentren en el mismo.

Artículo 255. Levantamiento e identificación de cadáveres.

En los casos en que se presuma muerte por causas no naturales, además de otros actos de investigación que sean procedentes, se practicará la inspección, el levantamiento y traslado del cadáver, así como su descripción y peritajes correspondientes.

En todo caso, practicada la inspección o la necropsia correspondiente, se procederá a la sepultura inmediata, pero no se podrá incinerar el cadáver.

Cuando de la investigación no resulten datos para presumir la existencia de algún delito, el Ministerio Público podrá autorizar la dispensa de la necropsia.

260

En los casos en que se desconozca la identidad del cadáver, su identificación se efectuará por los peritajes idóneos. Una vez identificado, se entregará a los parientes o a quienes invoquen titulo o motivo suficiente, previa autorización del Ministerio Público, tan pronto la necropsia se hubiere practicado o, en su caso, dispensado.

Artículo 256. Peritajes.

Durante la investigación, el Ministerio Público podrá disponer la práctica de los peritajes que sean necesarios para la investigación del hecho. El informe escrito no exime al perito del deber de concurrir a declarar en la audiencia de juicio.

Artículo 257. Acceso a los indicios.

Los peritos que vayan a elaborar el informe pericial, tendrán en todo momento, acceso a los indicios a que se refiere el dictamen pericial o a los que se hará referencia en el interrogatorio.

Artículo 258. Peritaje irreproducible.

Cuando un peritaje recaiga sobre objetos que se consuman al ser analizados, no se permitirá que se verifique el primer análisis sino sobre la mitad de la sustancia, a no ser que su cantidad sea tan escasa que los peritos no puedan emitir su opinión sin consumirla por completo. En este caso o cualquier otro semejante que impida se practique un peritaje independiente con posterioridad, el Ministerio Público se encuentra obligado a notificar al defensor del imputado, si éste ya se encontrase individualizado o al defensor público, en caso contrario, para que, si lo desea, designe perito para que conjuntamente con el perito designado por el Ministerio Público practiquen el examen, o bien, para que acuda a presenciar la realización de la pericia practicada por aquél.

261

Aun cuando no comparezca a la realización del peritaje, el perito designado por el defensor del imputado, o éste omita designar uno para tal efecto, la pericial podrá ser admitida como medio de prueba.

En caso de no darse cumplimiento a la obligación prevista en este artículo, la pericial en cuestión deberá ser desechada como medio de prueba si es ofrecida como tal.

Artículo 259. Peritajes especiales

Cuando deban realizarse diferentes peritajes a personas agredidas sexualmente o cuando la naturaleza del hecho delictuoso lo amerite, deberá integrarse, en un plazo no mayor a tres horas, un equipo interdisciplinario con profesionales capacitados en atención a víctimas, con el fin de concentrar en una misma sesión las entrevistas que ésta requiera.

Antes de la entrevista, el equipo de profesionales deberá elaborar un protocolo y designará, cuando lo estime conveniente, a uno de sus miembros para que se encargue de plantear las preguntas.

Salvo que exista un impedimento insuperable, en la misma sesión deberá realizarse el examen físico de la víctima, respetando la dignidad de la persona. En el examen físico estará presente sólo ese personal esencial para realizarlo y lo realizará una persona del sexo que la víctima elija.

Artículo 260. Aportación de comunicaciones entre particulares.

Las comunicaciones entre particulares podrán ser aportadas voluntariamente a la investigación o al proceso penal, cuando hayan sido obtenidas directamente por alguno de los participantes en la misma.

262

Las comunicaciones que obtenga alguno de los participantes con apoyo de la autoridad, también podrán ser aportadas al proceso, siempre que conste la solicitud previa de apoyo del particular a la autoridad.

Las comunicaciones aportadas por los particulares, deberán estar estrechamente vinculadas con el delito que se investiga, por lo que en ningún caso el juez admitirá comunicaciones que violen el deber de confidencialidad respecto de los sujetos a que se refiere el artículo 17 (defensa técnica) de este Código, ni la autoridad prestará el apoyo a que se refiere el párrafo anterior cuando se viole dicho deber. No se viola el deber de confidencialidad cuando se cuente con el consentimiento expreso de la persona con quien se guarda dicho deber.

Artículo 261. Procedimiento para reconocer personas.

El reconocimiento de personas deberá practicarse con la mayor reserva posible.

En la práctica del acto de investigación se observará el siguiente procedimiento:

I. Antes del reconocimiento, quien deba hacerlo será interrogado para que describa a la persona de que se trata, diga si la conoce o si, con anterioridad, la ha visto personalmente o en imágenes;

II. Además, deberá manifestar si después del hecho ha visto nuevamente a la persona, en qué lugar y por qué motivo;

III. La persona que haga el reconocimiento será instruido acerca de sus obligaciones y de las responsabilidades por su incumplimiento;

IV. Posteriormente, se invitará a la persona que debe ser sometida a reconocimiento a que escoja su colocación entre otras de aspecto físico y de

263

vestimenta semejantes, y se solicitará a quien lleva a cabo el reconocimiento que diga si entre las personas presentes se halla la que mencionó y, en caso afirmativo, la señale con precisión. Cuando la haya reconocido, expresará las diferencias y semejanzas observadas entre el estado de la persona señalada y el que tenía en la época a que alude su declaración anterior; y

V. La diligencia se hará constar en un registro, donde se consignarán las circunstancias útiles, incluso el nombre y domicilio de los que hayan formado la fila de personas.

El reconocimiento procederá aún sin consentimiento del imputado, pero siempre en presencia de su defensor. Quien sea citado para reconocer deberá ser ubicado en un lugar desde el cual no sea visto por las personas susceptibles de ser reconocidas. Se adoptarán las previsiones necesarias para que el imputado no altere u oculte su apariencia.

Tratándose de personas menores de edad o en tratándose de víctima u ofendidos por los delitos de secuestro, trata de personas o violación, que deban participar en el reconocimiento de personas, el Ministerio Público dispondrá medidas especiales para su participación en tales actos procesales, con el propósito de salvaguardar su identidad e integridad emocional. En la práctica de tales actos procesales, el Ministerio Público deberá contar, en su caso, con el auxilio de peritos y la asistencia del representante del menor de edad.

Artículo 262. Pluralidad de reconocimientos.

Cuando varias personas deban reconocer a una sola, cada reconocimiento se practicará por separado, sin que se comuniquen entre sí. Si una persona debe reconocer a varias, el reconocimiento de todas podrá efectuarse en un solo acto, siempre que no perjudique la investigación o la defensa.

264

Artículo 263. Reconocimiento por fotografía.

Cuando sea necesario reconocer a una persona que no esté presente, podrá exhibirse su fotografía legalmente obtenida, a quien deba efectuar el reconocimiento, junto con la de otras personas con características semejantes, observando en lo conducente las reglas de reconocimiento de personas. Se deberá guardar registro de las fotografías exhibidas.

Artículo 264. Reconocimiento de objeto.

Antes del reconocimiento de un objeto se invitará a la persona que deba reconocerlo a que lo describa. Acto seguido se presentará el objeto o el registro del mismo para llevar a cabo el reconocimiento.

Artículo 265. Otros reconocimientos.

Cuando se disponga reconocer voces, sonidos y cuanto pueda ser objeto de percepción sensorial, se observarán, en lo aplicable, las disposiciones previstas para el reconocimiento de personas.

Artículo 266. Entrega vigilada.

La entrega vigilada es la técnica especial de investigación mediante la cual se autoriza, en los términos de este Código y las disposiciones que para tal efecto se emitan, el transporte dentro del territorio nacional, así como la entrada o salida del mismo, de mercancía, bienes o productos cuya posesión, transporte, enajenación, compra, alquiler o simple tenencia sea ilícita o prohibida, o bienes o productos por los que se haya sustituido, bajo la vigilancia de la policía. Queda totalmente prohibida la participación de cualquier tipo de personas ajenas a la investigación.

El titular del Ministerio Público o el servidor público se haya delegado dicha facultad, podrá autorizar la entrega vigilada con el objeto de investigar el delito e

identificar a las personas involucradas en su comisión cuando se tenga motivos fundados para considerar que la persona investigada dirige o interviene en alguna de esas conductas. La autorización deberá contener las circunstancias en que se autoriza y las modalidades de la sustitución así como los responsables de la entrega vigilada.

La información obtenida con motivo del desarrollo de la entrega vigilada que no tenga relación con el delito que se investiga, deberá ser destruida.

Artículo 267. Modalidades de las operaciones encubiertas.

El Ministerio Público podrá ordenar las operaciones encubiertas para la investigación en las siguientes modalidades:

I. La disposición de los recursos y medios necesarios con objeto de aparentar la realización de actividades ilícitas; y

II. La infiltración de agentes.

Artículo 268. Operaciones encubiertas.

La investigación de los delitos podrá abarcar el conocimiento de las formas de organización, de operación y ámbitos de actuación e identidad de los miembros del grupo delictivo. Para tal efecto, el titular del Ministerio Público o el servidor público en quien éste haya delegado dicha facultad, podrá autorizar, en los términos de este Código y las disposiciones que para tal efecto se emitan, la realización de operaciones encubiertas en la medida que se justifique su necesidad y proporcionalidad. Queda totalmente prohibida la participación de cualquier tipo de personas ajenas a la investigación.

La información obtenida con motivo del desarrollo de una operación encubierta que no tenga relación con el delito que se investiga, deberá ser destruida, salvo que dé lugar a un delito diverso, en este caso, deberá ser materia de una investigación por separado.

Artículo 269. Autorización ministerial para actuar como agente infiltrado.

El titular del Ministerio Público o el servidor público en quien éste haya delegado dicha facultad, podrá autorizar a los investigadores, mediante resolución fundada y motivada, teniendo en cuenta los fines de la investigación, a actuar bajo identidad supuesta infiltrándose en el grupo delictivo y a adquirir y transportar los objetos, instrumentos o productos del delito y, en su momento, a retenerlos y ponerlos a disposición del Ministerio Público competente.

La identidad supuesta será otorgada por el tiempo indispensable para cumplir con el objetivo.

La autorización deberá contemplar la identidad supuesta con la que actuará en el caso concreto el agente infiltrado, la motivación, fundamentación y alcances en la actuación del agente infiltrado, especificando el objeto y fin de la operación encubierta, así como las licencias oficiales para la portación de armas emitidas en términos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que se han de portar o utilizar. La verdadera identidad será reservada y solamente será del conocimiento del titular del Ministerio Público y de los funcionarios en quienes haya delegado esta facultad.

Artículo 270. Términos y condiciones para llevar a cabo las operaciones encubiertas.

Las operaciones encubiertas, en su modalidad de infiltración de agentes, se llevarán a cabo en los términos, limitaciones, modalidades y condiciones que en cada caso concreto, atendiendo a la naturaleza del grupo delictivo, que por escrito determine el titular del Ministerio Público o el servidor público en quien éste haya delegado dicha facultad, previamente a la realización de la operación.

Las instancias que realicen operaciones encubiertas operarán bajo métodos de recolección de información y actividades cuyo ejercicio no coaccione o violente derechos humanos.

Artículo 271. Deber de confidencialidad.

Las operaciones encubiertas se deberán realizar bajo la más estricta confidencialidad. La identidad de los agentes infiltrados será información reservada y será protegida en términos de la legislación sobre transparencia y acceso a la información pública gubernamental que resulte aplicable.

Artículo 272. Colaboración para las operaciones encubiertas.

El titular del Ministerio Público o el servidor público en quien éste haya delegado dicha facultad, requerirá a las dependencias y entidades de la administración pública y organismos constitucionales autónomos, excepto a las comisiones de derechos humanos, que presten la colaboración más eficaz para efectos de la ejecución de las operaciones encubiertas, en el ámbito de sus respectivas competencias. Asimismo, acordará con las autoridades competentes lo necesario para efectos de lo dispuesto en el presente artículo. Toda la información sobre este tema será clasificada como reservada y confidencial.

Artículo 273. Deberes de los agentes infiltrados.

Los agentes infiltrados, de conformidad con lo dispuesto en este Código y en las disposiciones aplicables, proporcionarán al agente del Ministerio Público

responsable de la investigación, la información, documentos, registros, grabaciones y todo aquello que sirva de elementos o datos de prueba sobre los delitos competencia de las autoridades a que se refiere este Código. Los datos de prueba o medios de prueba que proporcionen durante la investigación al agente del Ministerio Público, serán manejados con absoluta reserva, en términos de las disposiciones aplicables.

Los agentes encubiertos estarán facultados para intervenir en el tráfico comercial, asumir obligaciones, ingresar y participar en reuniones con integrantes de la organización infiltrada o con el individuo cuya conducta se investiga y, si fuere necesario, realizar transacciones con ellos. Igualmente, si el agente encubierto encuentra que en los lugares donde ha actuado existe información útil para los fines de la investigación, lo hará saber al Ministerio Público para que este disponga el desarrollo de una operación especial, por parte de la policía, con miras a que se recoja la información y los medios de prueba hallados.

Artículo 274. Cumplimiento de un deber.

En las actividades que desarrollen los agentes infiltrados, conforme a lo dispuesto en este Código y demás disposiciones aplicables, se considerará que actúan en cumplimiento de un deber, siempre que su actuación se apegue a los lineamientos, términos, modalidades, limitaciones y condiciones de la autorización.

Toda actuación que implique desapego a instrucciones o infiltraciones no autorizadas serán sancionadas en términos de lo dispuesto en la ley correspondiente.

Artículo 275. Autorización para practicar actos de investigación sin conocimiento del afectado.

269

Los actos de investigación que de conformidad con este Código requieran autorización judicial previa, podrán ser solicitados por el Ministerio Público aún antes de la vinculación a proceso del imputado.

Si el Ministerio Público requiere que ellas se lleven a cabo sin previa comunicación al afectado, el juez autorizará que se proceda en la forma solicitada cuando la gravedad de los hechos o la naturaleza del acto de investigación de que se trate permitan presumir que dicha circunstancia resulta indispensable para su éxito.

Si con posterioridad a la vinculación del imputado al proceso, el Ministerio Público solicita proceder de la forma señalada en el párrafo precedente, el juez lo autorizará cuando la reserva resulte estrictamente indispensable para la eficacia del acto de investigación.

Artículo 276. Exhumación de cadáveres.

En los casos en que se presuma muerte por causas no naturales, el Ministerio Público podrá solicitar la autorización del Juez de Control para la exhumación de cadáver a fin de que sean practicados los actos de investigación que resulten procedentes y, una vez realizados, se procederá a la inhumación inmediata del occiso.

Artículo 277. Solicitud de orden de cateo.

Cuando en la investigación el Ministerio Público estime necesaria la práctica de un cateo, en razón de que el lugar a inspeccionar es un domicilio o una propiedad privada sin acceso público, solicitará por cualquier medio, la autorización para practicar el acto de investigación correspondiente. Deberá existir un registro de dicha solicitud, en el que se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que han de aprehenderse y los objetos que se buscan, señalando los motivos e indicios que sustentan la necesidad de la orden.

Si el lugar a inspeccionar es de acceso público y forma parte del domicilio particular, este último no será sujeto de cateo, a menos que así se haya ordenado.

Artículo 278. Resolución que ordena el cateo.

La resolución judicial que ordena el cateo deberá contener cuando menos:

I. El nombre y cargo del juez que lo autoriza y la identificación del proceso en el cual se ordena;

II. La determinación concreta del lugar o los lugares que habrán de ser cateados y lo que se espera encontrar en éstos;

III. El motivo del cateo, debiéndose indicar o expresar los indicios de los que se desprenda la posibilidad de encontrar en el lugar la persona o personas que hayan de aprehenderse o los objetos que se buscan;

IV. El día y hora en que deba practicarse el cateo o la determinación que de no ejecutarse dentro de los tres días siguientes a su autorización, quedará sin efecto, cuando no se precise fecha exacta de realización; y

V. Los servidores públicos autorizados para practicar e intervenir enel cateo.

La petición de orden de cateo deberá ser resuelta por la autoridad judicial de manera inmediata por cualquier medio que garantice su autenticidad, en un plazo que no exceda de las seis horas siguientes a que la haya recibido.

Si la resolución se registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de cateo deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público.

271

Artículo 279. Negación del cateo.

En caso de que el juez niegue la orden, el Ministerio Público podrá subsanar las deficiencias y solicitar nuevamente la orden o podrá apelar la decisión. En este caso la apelación debe ser resuelta en un plazo no mayor de veinticuatro horas a partir de que se interponga.

Artículo 280. Medidas de vigilancia.

Aun antes de que el juez competente dicte la orden de cateo, el Ministerio Público podrá disponer las medidas de vigilancia que estime convenientes para evitar la fuga del imputado o la sustracción, alteración, ocultamiento o destrucción de documentos o cosas que constituyen el objeto del cateo.

Artículo 281. Cateo en otros locales.

Para el cateo de oficinas públicas, locales públicos, establecimientos militares, templos o sitios religiosos, establecimientos de reunión o de recreo, mientras estén abiertos al público y no estén destinados para habitación, podrá prescindirse de la orden judicial, con el consentimiento expreso y libre de las personas a cuyo cargo estuvieren los locales. Si ello fuere perjudicial para el resultado procurado con el acto, se requerirá el consentimiento al superior jerárquico en el servicio o al titular del derecho de exclusión. De no ser otorgado el consentimiento o no ser posible recabarlo, el Ministerio Público solicitará la orden de cateo correspondiente.

Quien haya prestado el consentimiento será invitado a presenciar el acto.

Artículo 282. Formalidades del cateo.

Será entregada una copia de los puntos resolutivos de la orden de cateo a quien habite o esté en posesión del lugar donde se efectúe o, cuando esté ausente, a su

encargado y, a falta de éste, a cualquier persona mayor de edad que se halle en el lugar.

Cuando no se encuentre a alguien, se fijará la copia de los puntos resolutivos a la entrada del inmueble, ello se hará constar en el acta y se hará uso de la fuerza pública para ingresar.

Al concluir el cateo se levantará acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique el cateo, pero la designación no podrá recaer sobre los elementos que pertenezcan a la autoridad que lo practicó. Cuando no se cumplan estos requisitos, el cateo carecerá de todo valor probatorio, sin que sirva de excusa el consentimiento de los ocupantes del lugar.

Al terminar el cateo, se cuidará que los lugares queden cerrados y de no ser posible inmediatamente, se asegurará que otras personas no ingresen en el lugar, hasta lograrlo.

Artículo 283. Descubrimiento de un delito diverso.

Si durante el cateo se descubren objetos o documentos que hagan presumir la existencia de un hecho punible distinto del que constituye la materia de la investigación en el cual la orden se libró, se podrá proceder a su descripción. Dichos objetos o documentos serán registrados por el Ministerio Público quien comunicará al Tribunal esta circunstancia.

Artículo 284. Excepciones a la orden de cateo.

Podrá determinarse el ingreso a un lugar cerrado sin orden judicial cuando:

I. Existan claros indicios que en el interior de un lugar cerrado se está cometiendo un hecho punible que pone en peligro la vida, la integridad o la libertad personal;

273

II. Los cuerpos de seguridad pública persigan materialmente a un sujeto en los supuestos de flagrancia, con el objeto de detenerlo; o
III. Se denuncie que personas extrañas han sido vistas mientras se introducen en un local, con indicios manifiestos de que pretenden cometer un delito.

Los motivos que determinaron la inspección sin orden judicial constarán detalladamente en el acta que al efecto se levante.

Artículo 285. Intervención de las comunicaciones privadas.

Cuando en la investigación, el Ministerio Público considere necesaria la intervención de comunicaciones privadas y existan datos que establezcan que el imputado cometió o participó en la comisión de un hecho punible que se investiga, el Procurador General de la República o el funcionario en quien haya delegado la atribución, o el titular del Ministerio Público en las entidades federativas, solicitará al juez competente, por cualquier medio, la autorización para practicar la intervención, expresando el objeto y necesidad de la misma.

La solicitud deberá ser resuelta por la autoridad judicial de manera inmediata, por cualquier medio que garantice su autenticidad, en un plazo que no exceda de las seis horas siguientes a que la haya recibido.

Si la resolución se registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la autorización deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público.

Los servidores públicos autorizados para la ejecución serán responsables de que se realice en los términos de la resolución judicial.

Artículo 286. Requisitos de la solicitud

La solicitud de intervención deberá estar fundada y motivada. Deberá precisar la persona o personas que serán investigadas; la identificación del lugar o lugares donde se realizará, si fuere posible; el tipo de comunicación privada a ser intervenida; su duración; el proceso y equipos para la intervención; y, en su caso, la identificación de la persona a cuyo cargo está la prestación del servicio a través del cual se realiza la comunicación objeto de la intervención.

El plazo de la intervención incluyendo sus prórrogas no podrá exceder de seis meses. Después de dicho plazo, sólo podrán autorizarse nuevas intervenciones cuando el Ministerio Público acredite nuevos elementos que así lo justifiquen.

Artículo 287. Contenido de la resolución judicial que autoriza la intervención de las comunicaciones privadas.

En la autorización, el Juez de Control determinará las características de la intervención, sus modalidades, límites y, en su caso, ordenará a instituciones públicas o privadas, modos específicos de colaboración.

Artículo 288. Objeto de la intervención.

Podrán ser objeto de intervención las comunicaciones privadas que se realicen de forma oral, escrita, por signos, señales o mediante el empleo de aparatos eléctricos, electrónicos, mecánicos, alámbricos o inalámbricos, sistemas o equipos informáticos, así como por cualquier otro medio o forma que permita la comunicación entre uno o varios emisores y uno o varios receptores.

En ningún caso podrá autorizar intervenciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor o correspondencia que bajo cubierta circule por estafetas.

275

El juez podrá en cualquier momento, verificar que las intervenciones sean realizadas en los términos autorizados y, en caso de incumplimiento, podrá decretar su revocación parcial o total.

Artículo 289. Conocimiento de delito diverso.

Si en la práctica de una intervención de comunicaciones privadas se tuviera conocimiento de la comisión de un delito diverso de aquéllos que motivan la medida, se hará constar esta circunstancia en el registro, para dar inicio a una nueva investigación si correspondiere.

Artículo 290. Ampliación de la intervención a otros sujetos.

Cuando de la intervención de comunicaciones privadas se advierta la necesidad de ampliar a otros sujetos o lugares la intervención, el Ministerio Público competente presentará al juez la solicitud respectiva.

Artículo 291. Registro de las intervenciones.

Las intervenciones de comunicación deberán ser registradas por cualquier medio que no altere la fidelidad, autenticidad y contenido de las mismas, por la policía o por el perito técnico que intervenga, a efecto de que aquélla pueda ser ofrecida como medio de prueba en los términos que señala este Código.

Artículo 292. Registro.

De toda intervención se levantará registro por la policía, que contendrá las fechas de inicio y término de la intervención; un inventario pormenorizado de los documentos, objetos y los medios para la reproducción de sonidos o imágenes captadas durante la misma; de ser posible, la identificación de quienes hayan participado en los actos de investigación, así como los demás datos que considere relevantes para la investigación. Las cintas originales y el duplicado de cada una



de ellas, se numerarán progresivamente y contendrán los datos necesarios para su identificación.

Artículo 293. Conclusión de la intervención.

Al concluir la intervención, la policía, de manera inmediata, informará al Ministerio Público sobre su desarrollo, así como de sus resultados y levantará el acta respectiva. A su vez, con la misma prontitud el Ministerio Público que haya solicitado la intervención o su prórroga lo informará al juez.

Las intervenciones realizadas sin las autorizaciones antes citadas o fuera de los términos en ellas ordenados, carecerán de valor probatorio, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa o penal a que haya lugar.

Artículo 294. Acceso y copia de los registros.

Los registros de las comunicaciones intervenidas se pondrán a disposición del imputado, su defensor y, en su caso, los peritos de la defensa quienes podrán escucharlos o verlos íntegramente bajo la supervisión de la autoridad encargada de los registros, quien velará por la integridad de los medios de prueba.

El imputado o su defensor podrán solicitar copia de los registros y el Ministerio Público deberá proporcionarlos sin edición alguna. Sólo habrá lugar a la edición de los registros para salvaguardar información reservada y confidencial sujeta a protección conforme a las leyes de la materia, o que pudiera afectar derechos de terceros o no tenga relación con el proceso. La copia del registro ya editado se entregará al imputado o su defensor. En caso de inconformidad sobre la edición se requerirá control judicial.

Artículo 295. Destrucción de los registros.

El Tribunal ordenará la destrucción de aquellos registros de intervención de comunicaciones privadas que no se relacionen con los delitos investigados, o con otros delitos que hayan ameritado la apertura de una investigación, salvo que la defensa solicite que sean preservados por considerarlos útiles para su labor.

Asimismo, ordenará la destrucción de los registros de intervenciones no autorizadas o cuando éstos rebasen los términos de la autorización judicial respectiva.

Los registros serán destruidos cuando se decrete el archivo definitivo, el sobreseimiento o la absolución del imputado. Cuando el Ministerio Público decida archivar temporalmente la investigación, los registros podrán ser conservados hasta que el delito prescriba.

Artículo 296. Colaboración con la autoridad

Los concesionarios, permisionarios y demás titulares de los medios o sistemas susceptibles de intervención, deberán colaborar eficientemente con la autoridad competente para el desahogo de dichos os actos de investigación, de conformidad con la normatividad aplicable y la orden judicial que así lo establezca. El incumplimiento a este mandato será sancionado conforme a las disposiciones penales aplicables.

Artículo 297. Deber de secrecía

Quienes participen en alguna intervención de comunicaciones privadas deberán observar el deber de secrecía sobre el contenido de las mismas.

SECCIÓN VII Prueba anticipada

Artículo 298. Prueba anticipada.

Hasta antes de la celebración de la audiencia de juicio se podrá practicar anticipadamente cualquier medio de prueba pertinente, siempre que se satisfagan los siguientes requisitos:

I. Que sea practicada ante el Juez de Control;

II. Que sea solicitada por alguna de las partes, quienes deberán expresar las razones por las cuales el acto se debe realizar con anticipación a la audiencia de juicio a la que se pretende desahogar y se torna indispensable en virtud de que se estime probable que algún testigo no podrá concurrir a la audiencia de juicio, por vivir en el extranjero, por existir motivo que hiciere temer su muerte, su incapacidad física o mental que le impidiese declarar o algún otro obstáculo semejante;

III. Que sea por motivos fundados y de extrema necesidad y para evitar la pérdida o alteración del medio probatorio; y

IV. Que se practique en audiencia y en cumplimiento de las reglas previstas para la práctica de pruebas en el juicio.

Artículo 299. Procedimiento para prueba anticipada.

Cuando se solicite prueba anticipada, el juez citará a audiencia a todos aquellos que tuvieren derecho a asistir a la audiencia de juicio y luego de escucharlos decidirá sobre su práctica.

El imputado que estuviere detenido será trasladado a la sala de audiencias para la práctica de la prueba anticipada.

279

En caso de que todavía no exista imputado identificado se designará un defensor público para que intervenga en la audiencia. Si una vez identificado el imputado existen condiciones para repetir la audiencia de anticipo de prueba, éste tendrá derecho a solicitar su repetición, en cuyo caso ésta será la que se incorpore en el juicio.

Artículo 300. Registro y conservación de la prueba anticipada.

La audiencia en la que se desahogue la prueba anticipada deberá registrarse en su totalidad.

Concluido el desahogo de la prueba anticipada se entregará el registro correspondiente a las partes.

Si el obstáculo que dio lugar a la práctica del anticipo de prueba no existiera para la fecha de la audiencia de juicio, se desahogará el medio de prueba correspondiente en la misma.

Toda prueba anticipada deberá conservarse de acuerdo con las medidas dispuestas por el Juez de Control.

SECCIÓN VIII Audiencia inicial

Artículo 301. Audiencia inicial.

En la audiencia inicial se informarán al imputado sus derechos constitucionales y legales, si no se le hubiese informado de los mismos con anterioridad; se realizará el control de detención, si correspondiere; se formulará la imputación; se dará la oportunidad de declarar al imputado; se resolverá sobre las solicitudes de vinculación a proceso y medidas cautelares; y se definirá el plazo para el cierre de la investigación.

A esta audiencia deberá concurrir el agente del Ministerio Público, el imputado y su defensor. La víctima u ofendido o su asesor jurídico, podrán asistir si así lo desean, pero su presencia no será requisito de validez de la audiencia.

Artículo 302. Control de Detención.

Inmediatamente después de que el imputado detenido en flagrancia o caso urgente sea puesto a disposición del Juez de Control, se citará a la audiencia inicial en la que se realizará el control de la detención antes de que se proceda a la formulación de la imputación. El agente del Ministerio Público deberá justificar las razones de la detención y el Juez procederá a calificarla, examinará el cumplimiento del plazo de retención y los requisitos de procedibilidad, ratificándola en caso de encontrarse ajustada a derecho o decretando la libertad con las reservas de ley, en caso contrario.

Ratificada la detención en flagrancia o caso urgente, y cuando se hubiere ejecutado una orden de aprehensión, el imputado permanecerá detenido durante el desarrollo de la audiencia inicial, incluso en caso de prórroga de la audiencia, hasta que se defina su situación jurídica y en su caso se disponga la aplicación de una medida cautelar a solicitud del Ministerio Público, en los plazos establecidos en este Código. Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 136 y 172 (medida cautelar anticipada y procedencia oficiosa de la prisión preventiva) de este Código.

En caso de que al inicio de la audiencia, el agente del Ministerio Público no esté presente, el Juez de Control declarará en receso la audiencia hasta por una hora y ordenará a la administración del Tribunal para que se comunique con el superior jerárquico de aquél, con el propósito de que lo haga comparecer o lo sustituya. Concluido el receso sin obtener respuesta, se procederá a la inmediata liberación del detenido.

281

Artículo 303. Oportunidad para formular la imputación a personas detenidas.

En el caso de imputados detenidos en flagrancia o caso urgente, el agente del Ministerio Público deberá formular la imputación después de que el Juez de Control califique de legal la detención, acto seguido solicitará la vinculación del imputado a proceso y la aplicación de las medidas cautelares si las estima procedentes, sin perjuicio de la prórroga que pueda invocar el imputado o su defensor.

Artículo 304. Oportunidad para formular la imputación a personas en libertad.

El agente del Ministerio Público podrá formular la imputación cuando considere oportuno la intervención judicial con el propósito de resolver la situación jurídica del imputado.

Si el Ministerio Público deseare formular imputación a una persona que no se encontrare detenida, solicitará al Juez de Control que señale fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia inicial, la que se llevará a cabo dentro de los quince días siguientes a la presentación de la solicitud.

Para lograr la presencia del imputado en la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público deberá solicitar la orden de aprehensión o de comparecencia, según sea el caso y el Juez de Control resolverá lo que corresponda. Las solicitudes y resoluciones deberán realizarse en los términos que señalan los artículos 142 y 143 del presente Código.

Artículo 305. Formulación de la imputación.

La formulación de la imputación es la comunicación que el agente del Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del Juez de Control, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos determinados.

Artículo 306. Procedimiento para formular la imputación.

Una vez que el imputado se encuentra en la audiencia inicial, por haberse ordenado su comparecencia, por haberse ejecutado en su contra una orden de aprehensión, o ratificado de legal la detención y después de haber verificado el Juez de Control que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, se ofrecerá la palabra al agente del Ministerio Público para que éste exponga al imputado el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador, salvo que, a consideración del juzgador, sea necesario reservar su identidad en los supuestos autorizados por la Constitución y por la ley.

El Juez de Control, de oficio o a petición del imputado o de su defensor, podrá solicitar las aclaraciones o precisiones que considere necesarias respecto a la imputación formulada por el Ministerio Público.

Artículo 307. Oportunidad para declarar.

Formulada la imputación, el Juez de Control le preguntará al imputado si la entiende y si es su deseo contestar al cargo. En caso de que el imputado manifieste su deseo de declarar, su declaración se rendirá conforme a lo dispuesto en el artículo 378 de este Código (declaración del imputado). Cuando se trate de

varios imputados, sus declaraciones serán recibidas sucesivamente, evitando que se comuniquen entre si antes de la recepción de todas ellas

Artículo 308. Oportunidad para resolver la solicitud de vinculación a proceso.

Después de que el imputado emitió su declaración, o manifestó su deseo de no hacerlo, el agente del Ministerio Público pedirá al Juez de Control, la oportunidad para desarrollar la solicitud de vinculación a proceso. Antes de escuchar al agente del Ministerio Público, el Juez se dirigirá al imputado y le explicará los momentos en los cuales puede resolverse la solicitud que desea plantear el Ministerio Público.

El Juez de Control cuestionará al imputado si renuncia al plazo de setenta y dos horas para que se resuelva sobre su vinculación a proceso, o si solicita la duplicación de dicho plazo. En caso de que el imputado renuncie al plazo de setenta y dos horas, el agente del Ministerio Público deberá solicitar y motivar la vinculación del imputado a proceso, exponiendo en la misma audiencia los datos de prueba con los que considera que se establece un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. El Juez de Control otorgará la oportunidad a la defensa para que conteste la solicitud y si considera necesario permitirá la réplica y dúplica. Hecho lo anterior, resolverá la situación jurídica del imputado.

Si el imputado no renuncia al plazo de las setenta y dos horas para que se resuelva sobre su vinculación o no a proceso, o solicita la duplicación de dicho plazo, el Juez de Control citará a la continuación de la audiencia en la que resolverá lo conducente, dentro de las setenta y dos o ciento cuarenta y cuatro horas, de acuerdo con la naturaleza del caso. Estos plazos correrán a partir del

inicio de la audiencia cuando el imputado comparezca en libertad, o a partir de que sea puesto a disposición del Juez de Control, si el imputado estuviese detenido. La ampliación del plazo se deberá notificar a la autoridad competente en donde se encuentre internado el imputado, para los efectos a que se refiere la última parte del cuarto párrafo del artículo 19 constitucional.

Artículo 309. Auxilio judicial al imputado.

Si el imputado requiere del auxilio judicial para citar testigos o peritos a la audiencia inicial celebrada en el plazo constitucional o su prórroga, deberá solicitarlo al menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la hora y fecha señaladas para su celebración. En caso contrario, deberá presentar sus medios de prueba a la audiencia.

Artículo 310. Continuación de la audiencia inicial.

Cuando el imputado no renuncie al plazo constitucional, la audiencia inicial continuada comenzará, en su caso, con la admisión de los medios de prueba ofrecidos por el imputado y su posterior desahogo, en el que se seguirán en lo conducente las reglas previstas para tal efecto en la audiencia de debate de juicio. Desahogados los medios de prueba, si los hubo, se le concederá la palabra en primer término al agente del Ministerio Público y posteriormente a la defensa; se otorgarán las oportunidades de réplica y dúplica que se estimen necesarias y el Juez de Control resolverá sobre la vinculación o no del imputado a proceso.

En casos de extrema complejidad, el Juez de Control podrá decretar un receso que no podrá exceder de dos horas, antes de resolver sobre la situación jurídica del imputado.

Artículo 311. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso.

El Juez de Control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que:

I. Se haya formulado la imputación;
II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar;
III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo; y
IV. No se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, alguna causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito.

El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, pero el juez podrá no admitir alguno de ellos u otorgarles libremente una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa.

El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente.

Artículo 312. Contenido del auto de vinculación a proceso.

El auto de vinculación a proceso deberá contener:

I. Los datos personales del imputado;

II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior; y

III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho.

Artículo 313. Efectos del auto de vinculación a proceso.

El auto de vinculación a proceso producirá los siguientes efectos:

I. Interrumpirá el curso de la prescripción de la acción penal;

II. Comenzará a correr el plazo previsto en este Código para el cierre de la investigación complementaria, determinado judicialmente; y

III. Establecerá el hecho o los hechos delictivos sobre los cuales se continuará el proceso o para determinar las formas anticipadas de terminación del proceso, la apertura a juicio o el sobreseimiento.

Artículo 314. Auto de no vinculación a proceso.

En caso de que no se reúna alguno de los requisitos previstos en el artículo 311 (requisitos para dictar auto de vinculación), el Juez de Control dictará un auto de no vinculación del imputado a proceso y, en su caso, ordenará la libertad inmediata del imputado, para lo cual revocará las providencias precautorias y las medidas cautelares anticipadas que se hubiesen decretado.

El auto de no vinculación a proceso no impide que el Ministerio Público continúe con la investigación y posteriormente formule de nueva cuenta la imputación.

Artículo 315. Solicitud de medidas cautelares en la audiencia inicial.

287

Después de que el Juez de Control dictó el auto de vinculación a proceso, en la audiencia inicial el agente del Ministerio Público podrá solicitar la imposición de alguna de las medidas cautelares previstas en los artículos 157 (medidas cautelares personales) y 180 (medidas cautelares reales) de este Código. El debate se sustentará preferentemente en los datos de prueba que se desprendan de los antecedentes de la investigación; no obstante, las partes podrán desahogar excepcionalmente los medios de prueba que estimen necesarios para sustentar la decisión judicial.

Artículo 316. Plazo judicial para el cierre de la investigación.

El Juez de Control, de oficio o a petición de parte, después de resolver sobre la vinculación del imputado a proceso y en su caso, de las medidas cautelares, fijará un plazo para la investigación complementaria, tomando en cuenta la naturaleza de los hechos atribuidos y su complejidad, sin que pueda ser mayor a dos meses, en caso de que el delito merezca pena máxima que no exceda de dos años de prisión, o de seis meses, si la pena excediere de ese tiempo.

Artículo 317. Otras peticiones.

Si las partes plantean otras peticiones, el Juez de Control abrirá debate sobre ellas y resolverá lo conducente.

Artículo 318. Valor de las Actuaciones.

Los antecedentes de la investigación y elementos de convicción desahogados en la audiencia de vinculación a proceso, que sirvan como base para el dictado del auto de vinculación a proceso y de las medidas cautelares, carecen de valor probatorio para fundar la sentencia, salvo las excepciones expresas previstas por la Ley.

SECCIÓN IX Cierre de investigación

Artículo 319. Plazo para declarar el cierre de la investigación.

Transcurrido el plazo para el cierre de la investigación, esta se tendrá por cerrada, salvo que el Ministerio Público, la víctima u ofendido o el imputado hayan solicitado justificadamente prórroga del mismo al Juez, dentro de diez días previos a la conclusión del plazo que se pretende prorrogar, observándose los límites máximos previstos en el artículo 316 (plazo para cierre de investigación). Si el Juez estima que la prórroga no se justifica, denegará la petición.

Artículo 320. Cierre de la investigación.

Cerrada la investigación, y dentro de los diez días siguientes, el Ministerio Público podrá:

I. Formular la acusación;

II. Solicitar el sobreseimiento de la causa; o

III. Solicitar la suspensión del proceso.

Si transcurrido este plazo el agente del Ministerio Público no ha dado cumplimiento a lo previsto en este artículo, el Juez de Control lo apercibirá e informará a su superior jerárquico, para que dentro de diez días cumpla con la obligación. En caso de incumplimiento el Juez de Control, de oficio declarará extinguida la acción penal y decretará el sobreseimiento, sin perjuicio de la responsabilidad en que pueda incurrir el agente del Ministerio Público y su superior jerárquico.

Artículo 321. Sobreseimiento.

El Juez de Control, a petición del agente del Ministerio Público, del imputado o su defensor, decretará el sobreseimiento cuando:

I. El hecho no se cometió o no constituye delito;
II. Apareciere claramente establecida la inocencia del imputado;

III. El imputado esté exento de responsabilidad penal;

IV. Agotada la investigación, el Ministerio Público estime que no cuenta con los elementos suficientes para fundar una acusación;

V. Se hubiere extinguido la acción penal por alguno de los motivos establecidos en la ley;

VI. Una nueva ley quite el carácter de ilícito al hecho por el cual se viene siguiendo el proceso;

VII. El hecho de que se trate haya sido materia de un proceso penal en el que se hubiera dictado sentencia firme respecto del imputado; y

VIII. En los demás casos en que lo disponga la ley.

Recibida la solicitud, el Juez la notificará a las partes y citará, dentro de las veinticuatro horas siguientes, a una audiencia donde se resolverá lo conducente. La incomparecencia de la víctima u ofendido debidamente citados no impedirá que el Juez se pronuncie al respecto.

Artículo 322. Efectos del sobreseimiento.

El sobreseimiento firme tiene efectos de sentencia absolutoria, pone fin al proceso en relación con el imputado en cuyo favor se dicta, inhibe una nueva persecución penal por el mismo hecho y hace cesar todas las medidas cautelares que se hubieran dictado.

Artículo 323. Suspensión del proceso.

El Juez decretará la suspensión del proceso cuando:

I. Se advierta que el delito por el que se está procediendo es de aquellos que no pueden perseguirse sin previa querella del ofendido y ésta no ha sido presentada, o cuando no se ha satisfecho un requisito previo que la ley exija para que pueda incoarse el procedimiento. En estos casos, decretada la suspensión, se levantarán las medidas cautelares personales que se hubieran dispuesto;

II. Se declare formalmente al imputado sustraído a la acción de la justicia;

III. Después de cometido el delito, el imputado adquiera una discapacidad psicosocial o intelectual transitoria que le impida comprender el significado del proceso; y

IV. En los demás casos en que la ley expresamente lo ordene.

A solicitud de cualquiera de las partes, el Juez podrá decretar la reapertura del proceso cuando cese la causa que haya motivado la suspensión.

Artículo 324. Sobreseimiento total o parcial.

El sobreseimiento será total cuando se refiera a todos los delitos y a todos los imputados, y parcial cuando se refiera a algún delito o a algún imputado, de los varios a que se hubiere extendido la investigación y que hubieren sido objeto de vinculación a proceso.

Si el sobreseimiento fuere parcial, se continuará el proceso respecto de aquellos delitos o de aquellos imputados a los que no se extendiere aquél.

Artículo 325. Facultades del Juez respecto del sobreseimiento.
Si la víctima u ofendido se opone a la solicitud de sobreseimiento formulada por el Ministerio Público, el imputado o su defensor, el Juez se pronunciará con base en los argumentos expuestos por las partes y el mérito de la causa.

Si el Juez admite las objeciones de la víctima u ofendido, denegará la solicitud de sobreseimiento.

De no mediar oposición, la solicitud de sobreseimiento se declarará procedente, sin perjuicio del derecho de las partes a recurrir.

Artículo 326. Reapertura de la investigación.
Hasta antes del fin de la audiencia intermedia, las partes podrán reiterar la solicitud de actuaciones precisas de investigación que hubieren formulado al Ministerio Público después de dictado el auto de vinculación a proceso y éste las hubiera rechazado.

Si el Juez acoge la solicitud, ordenará al Ministerio Público reabrir la investigación y proceder al cumplimiento de las actuaciones, en el plazo que le fijará. En dicha audiencia, el Ministerio Público podrá solicitar la ampliación del plazo, por una sola vez.

El Juez no decretará ni renovará aquellos actos de investigación que en su oportunidad se hubieren ordenado a petición de las partes y no se hubieren cumplido por negligencia o hecho imputable a ellas, ni tampoco las que fueren

manifiestamente impertinentes, las que tuvieren por objeto acreditar hechos públicos y notorios, ni todas aquellas que hubieren sido solicitadas con fines puramente dilatorios.

Vencido el plazo o su ampliación, la investigación sujeta a reapertura se considerará cerrada; o aún antes de ello, si se hubieren cumplido las actuaciones que la motivaron y se procederá en la forma señalada en el artículo 320 (cierre de investigación).

CAPÍTULO III Etapa intermedia

SECCIÓN I Objeto

Artículo 327. Objeto de la etapa intermedia,

La etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio.

Esta etapa se compondrá de dos partes, una escrita y otra oral. La fase escrita iniciará con el escrito de acusación que formule el Ministerio Público y comprenderá todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. La segunda dará inicio con la celebración de la audiencia intermedia y culminará con el dictado del auto de apertura a juicio.

SECCIÓN II Fase escrita

Artículo 328. Contenido de la acusación.

Una vez concluido el plazo concedido para el cierre de investigación, cuando el Ministerio Público estime que la investigación proporciona fundamento para

someter a juicio público al acusado presentará la acusación requiriendo la apertura a juicio.

La acusación del Ministerio Público, deberá contener en forma clara y precisa:

I. La individualización del o los acusados;

II. La individualización de la víctima u ofendido;

III. La relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos atribuidos en modo, tiempo y lugar;

IV. Calificación jurídica;

VII. Los medios de prueba que el Ministerio Público pretende presentar en el juicio, como la prueba anticipada que se haya desahogado previamente en la fase de investigación;

VIII. El monto de la reparación del daño;

IX. La pena a imponer;

X. Los medios de prueba que el Ministerio Público pretende presentar para la individualización de la pena;

XI. La solicitud de decomiso de los bienes asegurados;

XII. En su caso, la solicitud de que se aplique alguna forma de terminación anticipada del proceso; y

XIII. La propuesta de acuerdos probatorios, en su caso.

La acusación sólo podrá formularse por los hechos y personas señaladas en el auto de vinculación a proceso.

Artículo 329. Acusaciones alternativas o subsidiarias.

294

El agente del Ministerio Público podrá hacer valer pretensiones alternativas o subsidiarias y también formular una distinta calificación jurídica de los hechos precisados en el auto de vinculación a proceso.

Artículo 330. Acusación por hechos conexos.

El Ministerio Público podrá formular acusación por diversos hechos, siempre que sean conexos o se trate del mismo imputado acusado de hechos distintos.

Artículo 331. Disposiciones Generales.

Presentada la acusación, el juez competente ordenará su notificación a las partes al día siguiente. Al acusado y, en su caso, a la víctima u ofendido por conducto de su asesor jurídico se les entregará copia de la acusación, además se le pondrán a su disposición para ser consultados, todos los antecedentes acumulados durante la investigación.

Artículo 332. Actuación de la víctima u ofendido.

Dentro de los siete días siguientes de la notificación de la acusación formulada por el Ministerio Público, la víctima u ofendido por escrito, podrá constituirse en coadyuvante del Ministerio Público, en cuyo caso designará a un asesor jurídico para:

I. Señalar los vicios formales de la acusación y requerir su corrección;

II. Ofrecer los medios de prueba que estime necesarios para complementar la acusación del Ministerio Público, y

III. Solicitar el pago de la reparación del daño y cuantificar su monto.

Artículo 333. Coadyuvancia en la acusación.

Si la víctima u ofendido se constituye en coadyuvante en la acusación formulada por el Ministerio Público, deberá realizar su gestión por escrito y le serán aplicables, en lo conducente, las formalidades previstas para la acusación de aquél y, en dicho escrito ofrecerá los medios de prueba que pretenda sean desahogados en la audiencia de juicio.

La coadyuvancia en la acusación por parte de la víctima u ofendido no alterará las facultades concedidas por ley al Ministerio Público, ni le eximirá de sus responsabilidades.

Artículo 334. Pronunciamiento del Ministerio Público.

El Ministerio Público se pronunciará sobre la coadyuvancia y las observaciones de la víctima dentro del plazo de cinco días de haber sido notificado.

El pronunciamiento del Ministerio Público se notificará a las demás partes dentro de las veinticuatro horas siguientes.

Artículo 335. Corrección de la acusación.

Dentro de los diez días siguientes de notificada la acusación coadyuvante, el acusado o su defensor podrán:

I. Señalar vicios formales al escrito de acusación y pronunciarse sobre las observaciones del coadyuvante y si lo consideran pertinente, requerir su corrección;

II. Solicitar la acumulación o separación de acusaciones;

III. La exclusión de medios de prueba ofrecidos el Ministerio Público y el coadyuvante, los argumentos en que se sustenta y en su caso, la prueba para acreditar la ilicitud de los mismos;



IV. Hacer valer las excepciones de previo y especial pronunciamiento y ofrecer la prueba respectiva;

V. Exponer los argumentos de defensa que considere necesarios y señalar los medios de prueba que se producirán en la audiencia de juicio y en la de individualización de las sanciones y reparación del daño; y

VI. Manifestarse sobre los acuerdos probatorios

En caso de que el imputado o su defensor pretendan que en la audiencia se debata alguna o varias de las cuestiones señaladas en este artículo, deberá presentarlas por escrito dentro de los quince días siguientes a que se le hubiere notificado la acusación.

El escrito del imputado o su defensor se notificarán al Ministerio Público y al coadyuvante, en su caso, dentro de las veinticuatro horas siguientes.

Artículo 336. Del descubrimiento probatorio

No podrá celebrarse la audiencia intermedia sin que previamente se hubiere llevado a cabo el descubrimiento probatorio entre las partes intervinientes.

El descubrimiento probatorio, consiste en la entrega material que las partes intervinientes deberán hacerse de los medios de prueba con los que cuenten y que pretendan llevar a juicio, de conformidad con el siguiente párrafo. Todo medio de prueba que las partes pretendan sea desahogado en juicio, deberá ser objeto de descubrimiento y ofrecido en la audiencia intermedia. El Ministerio Público está obligado a descubrirle a la defensa absolutamente todos los registros de su investigación, incluso aquellos que no pretenda ofrecer como medios de prueba. La defensa sólo está obligada a descubrirle al Ministerio Público los registros respecto a los medios de prueba que pretenda ofrecer.

SECCIÓN III Fase oral

Artículo 337. Audiencia intermedia.

Efectuado el descubrimiento probatorio, el Juez de Control citará a la audiencia intermedia, la que deberá tener lugar en un plazo que no podrá ser menor a veinticinco ni exceder de treinta y cinco días a partir de notificada la acusación.

Artículo 338. Inmediación en la audiencia intermedia.

La audiencia intermedia será dirigida por el Juez de Control, quien la presidirá en su integridad y se desarrollará oralmente. La presencia permanente del juez, el Ministerio Público, y el defensor durante la audiencia constituye un requisito de validez.

La víctima u ofendido que se haya constituido como coadyuvante deberá concurrir a la audiencia, pero su inasistencia no suspende el acto.

Artículo 339. Unión y separación de acusaciones.

Cuando el Ministerio Público formule diversas acusaciones que el Juez de Control considere conveniente someter a una misma audiencia del debate, y siempre que ello no perjudique el derecho de defensa, podrá unirlas y decretar la apertura de un solo juicio, si ellas están vinculadas por referirse a un mismo hecho, a un mismo acusado o porque deben ser examinadas los mismos medios de prueba.

El Juez de Control podrá dictar autos de apertura del juicio separados, para distintos hechos o diferentes acusados que estén comprendidos en una misma acusación, cuando, de ser conocida en una sola audiencia del debate, pudiera provocar graves dificultades en la organización o el desarrollo de la audiencia del debate o afectación del derecho de defensa, y siempre que ello no implique el riesgo de provocar decisiones contradictorias.

Artículo 340. Desarrollo de la audiencia.

Al inicio de la audiencia, por su orden, el Ministerio Público, la víctima u ofendido si lo hubiere y, el acusado por sí o por conducto de su defensor podrán deducir las cuestiones que versen sobre competencia, cosa juzgada, extinción de la acción penal y falta de requisitos de procedibilidad y señalar los vicios formales existentes en el escrito de acusación y solicitar su corrección.

Hecho lo anterior, el juez se hará cargo de la depuración de la acusación, de la admisión de los medios de prueba propuestos por las partes en términos del artículo 248 (reglas de admisión de la prueba) y, en su caso, de la fijación de los acuerdos probatorios. Finalmente dictará el auto de apertura a juicio.

Artículo 341. Auto de apertura a juicio.

Antes de finalizar la audiencia, el juez dictará la resolución de apertura de juicio que deberá indicar:

I. El Tribunal competente para celebrar la audiencia de juicio;

II. Individualización de los acusados;

III. La o las acusaciones que deberán ser objeto del juicio y las correcciones formales que se hubieren realizado en ellas y el hecho o hechos materia de la acusación.

IV. Los acuerdos probatorios a los que llegaron las partes;

V. Admitirá los medios de prueba que deberán ser desahogados en la audiencia de juicio, así como la prueba anticipada.

VI. Los medios de pruebas que, en su caso, deban de desahogarse en la audiencia de individualización de las sanciones y de reparación de daño;

VII. Las medidas de resguardo de identidad y datos personales que procedan en términos de este Código; y

299

VIII. Las personas que deban ser citadas a la audiencia de debate.

La resolución de apertura de juicio es irrecurrible. El Juez de Control hará llegar el auto de apertura al juez competente dentro de los tres dias siguientes de haberse dictado y pondrá a su disposición los registros, así como al acusado.

Artículo 342. Acuerdos probatorios.

Se entiende por acuerdos probatorios los celebrados entre el Ministerio Público y el imputado y su defensor, sin oposición fundada de la víctima u ofendido, para aceptar como probados alguno o algunos de los hechos o sus circunstancias.

Si la víctima u ofendido se opusiere, el juez determinará si es fundada y motivada la oposición, de lo contrario el Ministerio Público podrá realizar el acuerdo probatorio.

El Juez de Control autorizará el acuerdo probatorio, siempre y cuando lo considere justificado por existir antecedentes de la investigación con los que se acredite el hecho

CAPÍTULO IV Etapa de Juicio

SECCIÓN I Disposiciones Previas

Artículo 343. Juicio.

El juicio es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso. Se realizará sobre la base de la acusación y asegurará la concreción de los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, contradicción y continuidad.

Artículo 344. Fecha, lugar, integración y citaciones.

El Juez de Control hará llegar el auto de apertura del juicio al Tribunal competente, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su emisión. También pondrá a su

disposición a las personas sometidas a prisión preventiva u otras medidas cautelares personales.

Una vez recibido el auto de apertura a juicio se señalará la fecha para la celebración de la audiencia de debate, la que deberá tener lugar no antes de veinte ni después de sesenta días naturales desde dicha radicación. Se enviará cita a todos los obligados a asistir al debate. El acusado deberá ser citado, por lo menos, con siete días de anticipación al comienzo de la audiencia.

Artículo 345. Prohibición de intervención.

Los jueces que participen en el Tribunal de Juicio no debieron haber intervenido en el mismo caso en etapas anteriores.

SECCIÓN II Principios

Artículo 346. Inmediación.

El debate se realizará con la presencia ininterrumpida del Tribunal de Juicio y de las demás partes legítimamente constituidas en el proceso, de sus defensores y de sus representantes. El acusado no podrá retirarse de la audiencia sin permiso del Tribunal.

Si el acusado se rehúsa a permanecer en la audiencia, será custodiado en una sala próxima y representado para todos los efectos por su defensor. Cuando sea necesario para el desarrollo de la audiencia, se le hará comparecer para la realización de actos particulares en los cuales su presencia resulte imprescindible. Si el defensor no comparece al debate o se aleja de la audiencia, se considerará abandonada la defensa y se procederá a su reemplazo inmediato por un defensor público, hasta en tanto el acusado designe un defensor de su elección, conforme a las reglas respectivas de este Código.

301

Si el Ministerio Público no comparece al debate o se retira de la audiencia sin causa justificada, se procederá a su reemplazo inmediato, según los mecanismos que determinen en el ámbito de sus respectivas competencias, las Procuradurías Generales de Justicia de las entidades federativas y la General de la República.

El Ministerio Público sustituto o el defensor, podrán solicitar al Tribunal que aplace el inicio de la audiencia por un plazo razonable para la adecuada preparación de su intervención en juicio. El Tribunal resolverá considerando la complejidad del caso, las circunstancias del abandono del Ministerio Público y las posibilidades de aplazamiento.

Si la víctima u ofendido o su asesor jurídico no concurren al debate o se retiran de la audiencia, la misma continuará sin su presencia, sin perjuicio de que pueda obligársele a comparecer en calidad de testigo.

Artículo 347. Acusado en juicio.

El acusado asistirá a la audiencia libre en su persona, pero el Juez que presida podrá disponer la vigilancia necesaria para impedir que se sustraiga a la acción de la justicia o resguardar la seguridad y el orden.

Si el imputado estuviere en libertad, el Tribunal podrá disponer para asegurar la realización del debate o de un acto particular que lo integre, su conducción por la fuerza pública; de no lograrse su comparecencia el Ministerio Público solicitará al Tribunal que ordene su presentación para el efecto que se le haga comparecer; podrá también variar las condiciones bajo las cuales goza de libertad el imputado o imponer alguna medida cautelar.

Artículo 348. Publicidad.

El debate será público, pero el Tribunal podrá resolver excepcionalmente, aún de oficio, que se desarrolle total o parcialmente a puertas cerradas, cuando:

I. Pueda afectar la integridad física de alguna de las partes, o de alguna persona citada para participar en él;

II. El orden público o la seguridad del Estado puedan verse gravemente afectados;

III. Peligre un secreto oficial, particular, comercial o industrial, cuya revelación indebida sea punible; o

IV. Esté previsto específicamente en este Código o en otra ley.

La resolución será fundada y constará en el registro del debate de juicio.

Desaparecida la causa, se permitirá ingresar nuevamente al público y quien presida el debate informará brevemente sobre el resultado esencial de los actos cumplidos a puertas cerradas, cuidando de no afectar el bien protegido por la reserva. El Tribunal podrá imponer a las partes en el acto el deber de reserva sobre aquellas circunstancias que han presenciado, decisión que constará en el registro del debate de juicio.

El Tribunal señalará en cada caso las condiciones en que se ejercerá el derecho a informar y podrá restringir o prohibir por los medios de información, mediante resolución fundada, la grabación, fotografía, edición o reproducción de la audiencia, cuando puedan resultar afectados algunos de los intereses señalados en este artículo o cuando se limite el derecho del acusado o de la víctima u ofendido a un juicio imparcial y justo.

Artículo 349. Medios de Comunicación.

Los representantes de los medios de información que expresen su voluntad de presenciar la audiencia tendrán un privilegio de asistencia frente al público; pero estará prohibida la transmisión simultánea, oral o audiovisual, de la audiencia o su grabación.

Artículo 350. Restricciones para el acceso.

303

Los asistentes a la audiencia deberán guardar orden y permanecer en silencio mientras no estén autorizados para exponer o responder a las preguntas que se les formulen. No podrán portar armas u otros elementos aptos para interrumpir el desarrollo de la audiencia, ni manifestar de cualquier modo opiniones o sentimientos.

Artículo 351. Suspensión.

Excepcionalmente, la audiencia de debate de juicio podrá suspenderse por un plazo máximo de diez días hábiles cuando:

I. Se deba resolver una cuestión incidental que no pueda, por su naturaleza, resolverse inmediatamente;

II. Tenga que practicarse algún acto fuera de la sala de audiencias, incluso cuando una revelación inesperada torne indispensable una investigación suplementaria y no sea posible cumplir los actos en el intervalo de dos sesiones;

III. No comparezcan testigos, peritos o intérpretes, deba practicarse una nueva citación y sea imposible o inconveniente continuar el debate hasta que ellos comparezcan, incluso coactivamente, por medio de la fuerza pública;

IV. Algún miembro del Tribunal o el acusado se enfermen a tal extremo que no puedan continuar interviniendo en el debate;

V. El defensor, no pueda ser reemplazado inmediatamente en el supuesto de la fracción anterior, o en caso de muerte o incapacidad permanente;

VI. Alguna catástrofe o algún hecho extraordinario torne imposible su continuación; o

VII. Alguna otra prevista en este código.

El Tribunal verificará la autenticidad de la causal de suspensión invocada, pudiendo para el efecto allegarse de los medios de prueba correspondientes, y decidirá la suspensión y anunciará el día y la hora en que continuará la audiencia; ello valdrá como citación para todas las partes. Antes de reanudar la audiencia, quien la presida resumirá brevemente los actos cumplidos con anterioridad.

El Tribunal, en su caso, ordenará los aplazamientos que se requieran, indicando la hora en que continuará el debate. No será considerado aplazamiento ni suspensión el descanso de fin de semana y los días inhábiles de acuerdo con la ley que corresponda.

Artículo 352. Interrupción.

Si la audiencia de debate de juicio no se reanuda a más tardar al undécimo día después de ordenada la suspensión, se considerará interrumpido y deberá ser reiniciado ante un Tribunal distinto, y lo actuado será nulo.

Artículo 353. Motivación.

Las decisiones del Tribunal de Juicio, así como las de su Presidente serán verbales, con expresión de sus fundamentos y motivos cuando el caso lo requiera o las partes así lo soliciten, quedando todos notificados por su emisión.

SECCIÓN III Dirección y disciplina

Artículo 354. Dirección del debate de juicio.

El Presidente del Tribunal de Juicio, ordenará y autorizará las lecturas pertinentes, hará las advertencias que correspondan, tomará las protestas legales y moderará la discusión; impedirá intervenciones impertinentes o que no resulten admisibles, sin coartar por ello el ejercicio de la persecución penal ni la libertad de defensa. Asimismo, resolverá las objeciones que se formulen durante el desahogo de la prueba.

Si alguna de las partes en el debate se queja, por vía de revocación, de una disposición del Presidente, decidirá el Tribunal.

Artículo 355. Disciplina en la audiencia.

El Presidente del Tribunal de Juicio ejercerá el poder de disciplina en la audiencia, y cuidará que se mantenga el buen orden y de exigir que les guarde, tanto al Tribunal como a los asistentes, el respeto y consideraciones debidas, corrigiendo en el acto las faltas que se cometieren, para lo cual podrá aplicar cualquiera de las siguientes medidas:

I. Apercibimiento;

II. Multa de uno a cien salarios mínimos;

III. Expulsión de la sala de audiencia;

IV. Arresto hasta por treinta y seis horas; y

V. Desalojo público de la sala de audiencia.

Si el infractor fuere el Ministerio Público, el acusado, su defensor, la víctima u ofendido, o el acusador coadyuvante, y fuere necesario expulsarlos de la sala de audiencia, se aplicarán las reglas conducentes para el caso de su ausencia.

En caso de que, a pesar de las medidas adoptadas, no pueda reestablecerse el orden, quien preside la audiencia la suspenderá hasta en tanto se encuentren reunidas las condiciones que permitan continuar con su curso normal.

SECCIÓN IV Disposiciones generales sobre la prueba

Artículo 356. Libertad de prueba.

Todos los hechos y circunstancias pertinentes para la adecuada solución del caso sometido a juicio, podrán ser probados por cualquier medio producido e incorporado de conformidad con este Código.

Artículo 357. Regla de mejor evidencia.

Cualquier instrumento que garantice mejor la autenticidad de su contenido deberá prevalecer sobre otro.

Artículo 358. Legalidad de la prueba.

Los elementos de prueba no tendrán valor si han sido obtenidos por un medio ilícito, o si no fueron incorporados al proceso conforme a las disposiciones de este Código.

Artículo 359. Oportunidad para la recepción de la prueba.

La prueba que hubiere de servir de base a la sentencia deberá desahogarse durante la audiencia de debate de juicio, salvo las excepciones expresamente previstas en la Ley.

Artículo 360. Valoración de la Prueba.

El Tribunal asignará el valor correspondiente a los medios de prueba, con aplicación estricta de las reglas de la sana crítica. El Tribunal apreciará la prueba según su libre convicción extraída de la totalidad del debate, conforme a las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia; sólo serán valorables y sometidos a la crítica racional, los medios de prueba obtenidos por un proceso permitido e incorporados al debate conforme a las disposiciones de la ley.

El Tribunal deberá hacerse cargo en su motivación de toda la prueba desahogada, incluso de aquélla que haya desestimado, indicando en tal caso las razones que tenga en cuenta para hacerlo. Esta motivación deberá permitir la reproducción del

razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones contenidas en la resolución jurisdiccional. Sólo se podrá condenar al acusado si se llega a la convicción de su culpabilidad más allá de toda duda razonable.

APARTADO 1 Prueba Testimonial

Artículo 361. Deber de testificar.

Salvo disposición en contrario, toda persona tendrá la obligación de concurrir al llamamiento judicial y de declarar la verdad de cuanto conozca y le sea preguntado; asimismo, no deberá ocultar hechos, circunstancias ni elementos.

El testigo no estará en la obligación de declarar sobre hechos que le puedan deparar responsabilidad penal.

Artículo 362. Facultad de abstención.

Salvo que fueren denunciantes, podrán abstenerse de declarar el cónyuge, concubina o concubinario o la persona que hubiere vivido de forma permanente con el imputado durante por lo menos dos años anteriores al hecho, el tutor, el curador o el pupilo del imputado y sus ascendientes, descendientes o parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad o civil y tercero de afinidad.

Deberá informarse a las personas mencionadas de la facultad de abstención antes de declarar, pero si aceptan rendir testimonio, no podrán negarse a contestar las preguntas formuladas.

Artículo 363. Deber de guardar secreto.

Es inadmisible el testimonio de personas que, respecto del objeto de su declaración, tengan el deber de guardar secreto con motivo del conocimiento en razón del oficio o profesión, tales como los ministros religiosos, abogados, notarios, visitadores de derechos humanos, médicos, psicólogos, farmacéuticos y

enfermeros, así como los funcionarios públicos sobre información que no es susceptible de divulgación según las leyes de la materia.

Sin embargo, estas personas no podrán negar su testimonio cuando sean liberadas por el interesado del deber de guardar secreto.

En caso de ser citadas, deberán comparecer y explicar el motivo del cual surge la obligación de guardar secreto y de abstenerse de declarar.

Artículo 364. Citación de testigos.

Para el examen de testigos se librará orden de citación. En los casos de urgencia, los testigos podrán ser citados por cualquier medio que garantice la recepción de la citación, lo cual se hará constar. Además, el testigo podrá presentarse a declarar sin previa cita.

Si el testigo reside en un lugar lejano al asiento del órgano judicial y carece de medios económicos para trasladarse, se dispondrá lo necesario para asegurar su comparecencia.

Tratándose de testigos que fueren servidores públicos, la dependencia en la que se desempeñen adoptará las medidas correspondientes para garantizar su comparecencia. En caso de que estas medidas irroguen gastos, correrán a cargo de esa dependencia.

Artículo 365. Comparecencia obligatoria de testigos.

Si el testigo, debidamente citado, no se presenta a la citación o haya temor fundado de que se ausente o se oculte, se le hará comparecer en ese acto por medio de la fuerza pública sin necesidad de agotar ningún otro medio de apremio.

Las autoridades están obligadas a auxiliar oportuna y diligentemente al Tribunal para garantizar la comparecencia obligatoria de los testigos. El Tribunal podrá

emplear contra las autoridades los medios de apremio que establece esta ley en caso de incumplimiento o retardo a sus determinaciones.

Artículo 366. Excepciones a la obligación de comparecencia.

No estarán obligados a concurrir al llamamiento judicial de que tratan los artículos precedentes, y podrán declarar en la forma señalada para los testimonios especiales:

I. Respecto de los servidores públicos federales, el Presidente de la República; los Secretarios de Estado de la Federación; el Procurador General de la República; los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y los Diputados y Senadores del Congreso de la Unión;

II. Respecto de los servidores públicos estatales, el Gobernador; los Secretarios de Estado; el Procurador General de Justicia; los Diputados del Congreso; los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal Estatal Electoral y los Consejeros del Instituto Electoral estatal;

III. Los extranjeros que gozaren en el país de inmunidad diplomática, de conformidad con los tratados vigentes sobre la materia; y

IV. Los que, por enfermedad grave u otro impedimento calificado por el Tribunal, se hallaren en imposibilidad de hacerlo.

Si las personas enumeradas en las fracciones anteriores renunciaren a su derecho a no comparecer, deberán prestar declaración conforme a las reglas generales.

Artículo 367. Testimonios especiales.

Cuando deba recibirse testimonio de menores de edad víctimas del delito, y se tema por su afectación psicológica o emocional, así como en caso de víctimas de los delitos de violación o secuestro, el juzgador, a petición de las partes, podrá ordenar su recepción con el auxilio de familiares o peritos especializados. Para

ello deberán utilizarse las técnicas audiovisuales adecuadas, y que favorezcan evitar la confrontación con el imputado.

Las personas que no puedan concurrir al Tribunal, por estar físicamente impedidas, serán examinadas en el lugar donde se encuentren y su testimonio será trasmitido por sistemas de reproducción a distancia.

Estos procedimientos especiales deberán llevarse a cabo sin afectar el derecho a la confrontación y a la defensa.

Artículo 368. Protección a los testigos.

El Tribunal podrá disponer medidas especiales destinadas a proteger la integridad física y psicológica del testigo y sus familiares. Dichas medidas durarán el tiempo razonable que el Tribunal dispusiere y podrán ser renovadas cuantas veces fuere necesario.

De igual forma, el Ministerio Público o la autoridad que corresponda adoptarán las medidas que fueren procedentes para conferir la debida protección a las víctimas, ofendidos, testigos, antes o después de prestadas sus declaraciones, y a sus familiares, y en general, a todos los sujetos que intervengan en el proceso.

APARTADO 2 Prueba Pericial

Artículo 369. Prueba pericial.

Podrá ofrecerse la prueba pericial cuando, para el examen de personas, hechos, objetos o circunstancias relevantes para la causa, fuere necesario o conveniente poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, técnica u oficio.

Artículo 370. Título oficial.

Los peritos deberán poseer título oficial en la materia relativa al punto sobre el cual dictaminarán y no tener impedimentos para el ejercicio profesional, siempre que la ciencia, el arte, la técnica o el oficio sobre la que verse la pericia en cuestión esté reglamentada; en caso contrario, deberá designarse a una persona de idoneidad manifiesta y que preferentemente pertenezca a un gremio o agrupación relativa a la actividad sobre la que verse la pericia.

No se exigirán estos requisitos para quien declare como testigo sobre hechos o circunstancias que conoció espontáneamente, aunque para informar sobre ellos utilice las aptitudes especiales que posee en una ciencia, arte, técnica u oficio.

Artículo 371. Medidas de protección.

En caso necesario, los peritos y otros terceros que deban intervenir en el procedimiento para efectos probatorios, podrán pedir a la autoridad correspondiente que adopte medidas tendientes a que se les brinde la protección prevista para los testigos.

Artículo 372. Declarantes en la audiencia de juicio.

Antes de declarar, los testigos no podrán comunicarse entre si, ni ver, oír o ser informados de lo que ocurriere en la audiencia, permanecerán en una sala distinta a la de la audiencia, advertidos por el presidente acerca de la regla anterior, y serán llamados en el orden establecido. Esta regla no aplica al acusado ni a la víctima, salvo que esta última hubiere sido también ofrecida para declarar en juicio como testigo.

El Presidente del Tribunal de Juicio identificará al perito o testigo, le tomará protesta de conducirse con verdad y le advertirá de las penas que se imponen si se incurre en falsedad de declaraciones.

Durante la audiencia, los peritos y testigos deberán ser interrogados personalmente. Su declaración personal no podrá ser sustituida por la lectura de los registros en que constaren anteriores declaraciones o de otros documentos que las contuvieren.

Artículo 373. Reglas de interrogatorio

Las declaraciones de los testigos y peritos se sujetarán al interrogatorio de las partes. Los interrogatorios serán realizados, en primer lugar, por la parte que hubiere ofrecido la respectiva prueba y posteriormente por las restantes. Si el juicio se realiza en contra de dos o más acusados, se concederá sucesivamente la palabra al Ministerio Público y a cada uno de los defensores de los acusados, según corresponda.

Finalmente, los miembros del Tribunal podrán formular preguntas al testigo o perito con el fin de aclarar sus dichos.

Artículo 374. Examen directo y contraexamen.

Las partes pueden objetar la pregunta, siempre que no sean realizados conforme a lo dispuesto en este Código.

En ningún caso se admitirán preguntas capciosas, engañosas, ambiguas, compuestas, conclusivas, impertinentes o irrelevantes, vagas, argumentativas así como aquéllas destinadas a coaccionar ilegítimamente al testigo o perito.

Las preguntas sugestivas sólo se permitirán por la parte que no ofreció al testigo que declara en el examen directo. También podrán confrontar al perito o testigo con sus propios dichos u otras versiones de los hechos presentados en el juicio.

Las preguntas serán también objetables cuando llamen a dar opinión personal de un testigo, y las ya contestadas,

Estas normas se aplicarán al imputado cuando consienta prestar declaración.

313

Artículo 375. Testigo hostil.

El Tribunal de Juicio permitirá al oferente de la prueba realizar preguntas sugestivas cuando advierta que se está conduciendo de manera hostil.

Artículo 376. Lectura de declaraciones anteriores en la audiencia de juicio.

Durante el interrogatorio al acusado, testigo o perito, se podrá leer parte de sus declaraciones anteriores, documentos por ellos elaborados o cualquiera otro registro de actos en los que hubieran participado emitiendo una declaración, cuando fuere necesario para apoyar la memoria o para demostrar o superar contradicciones, o con el fin de solicitar las aclaraciones pertinentes.

Artículo 377. Incorporación por lectura de declaraciones anteriores.

Podrán incorporarse al juicio, previa lectura o reproducción, los registros en que consten anteriores declaraciones o informes de testigos, peritos o acusados, únicamente en los siguientes casos:

I. El testigo o coimputado haya fallecido, perdido la razón o la capacidad para declarar en juicio y, por esa razón, no hubiese sido posible solicitar su desahogo anticipado; y

II. La incomparecencia de los testigos, peritos o coimputados, fuere atribuible al acusado.

APARTADO 3 Declaración y facultades del acusado

Artículo 378. Declaración del acusado en juicio.

El acusado podrá rendir su declaración en cualquier momento durante la audiencia. En tal caso, el titular del órgano jurisdiccional que presida la audiencia le permitirá que lo haga libremente o a preguntas de las partes. En este caso se

podrán utilizar las declaraciones, previas rendidas por el acusado, para apoyo de memoria, evidenciar o superar contradicciones.

El Tribunal podrá formularle preguntas destinadas a aclarar su dicho.

El acusado podrá solicitar ser oído, con el fin de aclarar o complementar sus manifestaciones, siempre que preserve la disciplina en la audiencia.

El acusado declarará siempre con libertad de movimiento, sin el uso de instrumentos de seguridad, salvo cuando sea absolutamente indispensable para evitar su fuga o daños a otras personas.

Artículo 379. Ausencia de declaración del acusado en juicio.

Si el acusado decide no declarar en el juicio, ninguna declaración previa que haya rendido puede ser incorporada a éste como prueba, ni se podrán utilizar en juicio bajo ningún concepto.

Artículo 380. Derechos del acusado en juicio.

En el curso del debate, el acusado podrá solicitar la palabra para efectuar todas las precisiones o argumentaciones que considere pertinentes y siempre que les corresponda el uso de la palabra, incluso si antes se hubiere abstenido de declarar, siempre que se refieran al objeto del debate. El Presidente del Tribunal de Juicio impedirá cualquier divagación y, si el acusado persiste en ese comportamiento, podrá proponer al Tribunal alejarlo de la audiencia. El acusado podrá, durante el transcurso del debate, hablar libremente con su defensor, sin que por ello la audiencia se suspenda; no lo podrá hacer, en cambio, durante su declaración o antes de responder a preguntas que le sean formuladas; en este momento tampoco se admitirá sugerencia alguna.

APARTADO 4 Prueba Documental y Material

Artículo 381. Concepto de documento.

315

Se considerará documento a todo soporte material que contenga información sobre algún hecho.

Quien cuestione la autenticidad del documento tendrá la carga de demostrar sus afirmaciones.

El juez, a solicitud de los interesados, podrá prescindir de la lectura íntegra de documentos o informes escritos, o de la reproducción total de una grabación, para leer o reproducir parcialmente el documento o la grabación, en la parte pertinente.

Artículo 382. Prohibición de incorporación de antecedentes procesales

No se podrá invocar, dar lectura ni admitir o desahogar como medio de prueba al debate ningún antecedente que tenga relación con la proposición, discusión, aceptación, procedencia, rechazo o revocación de una suspensión condicional del proceso, de un acuerdo reparatorio, de conciliación, de mediación o la tramitación de un procedimiento abreviado.

Artículo 383. Prohibición de lectura e incorporación al juicio de registros de la investigación y documentos.

Con excepción de los supuestos expresamente previstos en este Código, no se podrán incorporar o invocar como medios de prueba ni dar lectura durante el debate, a los registros y demás documentos que den cuenta de actuaciones realizadas por la policía o el Ministerio Público en la investigación.

Nunca se podrán incorporar como medio de prueba o dar lectura a actas o documentos que den cuenta de actuaciones declaradas nulas o en cuya obtención se hayan vulnerado derechos fundamentales.

Artículo 384. Incorporación de prueba material.

316

Sólo se podrá incorporar como prueba material aquella que haya sido previamente acreditada.

APARTADO 5 Otros Medios de Prueba

Artículo 385. Otros elementos de prueba.

Además de los previstos en este Código, podrán utilizarse otros medios probatorios distintos, siempre que no afecten los derechos fundamentales.

Artículo 386. Constitución del tribunal en lugar distinto.

Cuando así se hubiere solicitado por las partes, para la adecuada apreciación de determinadas circunstancias relevantes del caso, el Tribunal podrá constituirse, en un lugar distinto de la sala de audiencias.

Artículo 387. Incorporación por lectura.

Sólo se podrá dar lectura a un documento que haya sido previamente acreditado.

Artículo 388. Medios de prueba supervenientes y de refutación.

El Tribunal de Juicio podrá ordenar la recepción de medios de pruebas sobre hechos supervenientes o de las que no fueron ofrecidas oportunamente por alguna de las partes, cuando justificare no haber sabido de su existencia.

Si con ocasión de la rendición de un medio de prueba surgiere una controversia, el Tribunal de Juicio podrá autorizar la presentación de nuevos medios de prueba, aunque ellas no hubieren sido ofrecidas oportunamente y siempre que no hubiere sido posible prever su necesidad.

El medio de prueba debe ser ofrecido antes de que se cierre el debate y el Tribunal de Juicio deberá salvaguardar la oportunidad de la contraparte del oferente de los medios de prueba superveniente, para preparar los

317

contrainterrogatorios de testigos o peritos, según sea el caso, y para ofrecer la práctica de diversos medios de prueba encaminados a controvertirlos.

SECCIÓN V Desarrollo de la Audiencia de Debate

Artículo 389. Apertura de la audiencia de debate.

En el día y la hora fijados, el Tribunal de Juicio se constituirá en el lugar señalado para la audiencia. Quien la presida, verificará la presencia de los demás jueces, de las partes, de los testigos, peritos o intérpretes que deban participar en el debate y de la existencia de las cosas que deban exhibirse en él, y lo declarará abierto.

Luego advertirá al acusado y al público sobre la importancia y el significado de lo que va a ocurrir, indicará al acusado que esté atento a aquello que va a acontecer.

Cuando un testigo o perito no se encuentre presente al iniciar la audiencia, pero haya sido debidamente notificado para asistir en una hora posterior y se tenga la certeza de que comparecerá, el debate podrá iniciarse.

El Presidente del Tribunal de Juicio señalará las acusaciones que deberán ser objeto del juicio contenidas en el auto de apertura de juicio y los acuerdos probatorios a que hubiesen llegado las partes.

Artículo 390. Incidentes en la audiencia de debate de juicio.

Los incidentes promovidos en el transcurso de la audiencia de debate de juicio se resolverán inmediatamente por el Tribunal, salvo que por su naturaleza sea necesario suspender la audiencia.

Las decisiones que recayeren sobre estos incidentes no serán susceptibles de recurso alguno.

Artículo 391. División del debate único.

Si la acusación tuviere por objeto varios hechos punibles atribuidos a uno o más imputados, el Tribunal de Juicio podrá disponer, incluso a solicitud de parte, que los debates se lleven a cabo separadamente, pero en forma continua.

El Tribunal de Juicio podrá disponer la división de un debate en ese momento y de la misma manera, cuando resulte conveniente para resolver adecuadamente sobre la pena y para una mejor defensa delos acusados.

Artículo 392. Alegato de apertura.

Verificadas las condiciones para llevar a cabo el inicio de la audiencia, se concederá la palabra al agente del Ministerio Público para que exponga su acusación, posteriormente al coadyuvante, y por último se ofrecerá la palabra al defensor, quien podrá exponer lo que a su derecho convenga en relación a las bases de su defensa.

Artículo 393. Orden de recepción de las pruebas en la audiencia de juicio.

Cada parte determinará el orden en que desahogará sus medios de prueba. Corresponde recibir primero los medios de prueba admitidos al Ministerio Público, posteriormente los de la coadyuvancia, y finalmente los de la defensa.

Artículo 394. Formalidades y oralidad en la audiencia.

La audiencia será oral tanto en lo relativo a los alegatos y argumentos de las partes, como en el desahogo de la prueba y, en general, en toda intervención de quienes participen en la audiencia, con las salvedades previstas en la ley.

Artículo 395. Decisiones en la audiencia.

Las decisiones serán emitidas oralmente. En las audiencias se presume la actuación legal de las partes y del órgano jurisdiccional, por lo que no es necesario invocar los preceptos legales en que se fundamentan, salvo los casos en que

durante las audiencias alguna de las partes solicite la fundamentación expresa de la parte contraria o de la autoridad judicial porque exista duda sobre ello. En las resoluciones escritas se deberán invocar los preceptos en que se fundamentan.

Artículo 396. Reclasificación jurídica.

En su alegato de apertura o de clausura, el Ministerio Público podrá plantear una clasificación jurídica distinta de los hechos a la invocada en su escrito de acusación. En tal caso, con relación a la nueva clasificación jurídica planteada, el titular del órgano jurisdiccional que presida la audiencia de debate de juicio dará al imputado y a su defensor inmediatamente oportunidad de expresarse al respecto, y les informará sobre su derecho a pedir la suspensión del debate para ofrecer nuevas pruebas o preparar su intervención. Cuando este derecho sea ejercido, el Tribunal de Juicio suspenderá el debate por un plazo que, en ningún caso, podrá ser superior al establecido para la suspensión del debate previsto por este Código.

Artículo 397. Alegatos de clausura y cierre del debate.

Concluido el desahogo de las pruebas, el Presidente del Tribunal de Juicio otorgará sucesivamente la palabra al Ministerio Público, al acusador coadyuvante y al defensor, para que expongan sus alegatos de clausura.

Seguidamente, se otorgará al Ministerio Público y al defensor la posibilidad de replicar y duplicar. La réplica sólo podrá referirse a lo expresado por el defensor en su alegato de clausura y la dúplica a lo expresado por el Ministerio Público o el acusador coadyuvante en la réplica.

Se otorgará la palabra a la víctima u ofendido y por último al acusado para que manifieste lo conveniente. A continuación, se declarará cerrado el debate.

SECCIÓN VI Deliberación, fallo y sentencia

Artículo 398. Deliberación.

Inmediatamente después de cerrado el debate, el Tribunal de Juicio pasará a deliberar de manera continua y en privado hasta por un plazo de cuarenta y ocho horas, a fin de emitir el fallo correspondiente. Este plazo podrá suspenderse únicamente en caso de enfermedad grave de alguno de los jueces y por un término máximo de cinco días, luego de los cuales, de no emitirse fallo, se decretará la nulidad del juicio.

Artículo 399. Emisión de Fallo.

Una vez concluida la deliberación, el Tribunal de Juicio se constituirá nuevamente en la sala de audiencias, después de ser convocadas oralmente todas las partes, con el propósito de que el Juez relator comunique el fallo respectivo.

El fallo deberá señalar:

I. La decisión de absolución o de condena;
II. Si la decisión se tomó por unanimidad o por mayoría de miembros del tribunal, y
III. La relación sucinta de los fundamentos y motivos que lo sustentan.

Comunicada a las partes la decisión absolutoria, el Tribunal de Juicio dispondrá en forma inmediata el levantamiento de las medidas cautelares que se hubieren decretado en contra del imputado ordenando en consecuencia su inmediata libertad, sin que puedan mantenerse dichas medidas para la realización de trámites administrativos.

En caso de absolución, el Tribunal de Juicio podrá diferir la redacción de la sentencia hasta por un plazo de cinco días, la que será comunicada a las partes.

En caso de condena, en la misma audiencia se señalará la fecha en que se celebrará la de individualización de las sanciones y reparación del daño, dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco dias.

321

El Tribunal de Juicio dará lectura y explicará la sentencia en audiencia pública. En caso de que en la fecha y hora fijadas para la celebración de dicha audiencia no asistiere persona alguna, se dispensará de la lectura y la explicación y se tendrá por notificada a todas las partes.

Artículo 400. Convicción del Tribunal de Juicio.

El Tribunal de Juicio apreciará la prueba según su libre convicción extraída de la totalidad del debate, conforme a las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia; sólo serán valorables y sometidos a la crítica racional, los medios de prueba obtenidos por un proceso permitido e incorporados al debate conforme a las disposiciones de la ley.

En la sentencia, el Tribunal de Juicio deberá hacerse cargo en su motivación de toda la prueba producida, incluso de aquélla que hubiere desestimado, indicando en tal caso las razones que hubiere tenido en cuenta para hacerlo. Esta motivación deberá permitir la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llegare la sentencia.

Nadie podrá ser condenado sino cuando el Tribunal que lo juzgare adquiriere, más allá de toda duda razonable, la convicción de que realmente se hubiere cometido el hecho punible objeto de la acusación y que en él hubiere correspondido al imputado una participación culpable y penada por la ley. La duda siempre favorece al acusado.

No se podrá condenar a una persona con el solo mérito de su propia declaración.

Artículo 401. Requisitos de la sentencia.

La sentencia contendrá:

I. La mención del Tribunal de Juicio y el nombre de los jueces que lo integran;

II. La fecha en que se dicta;

III. Identificación del acusado y la víctima u ofendido;

IV. La enunciación de los hechos y de las circunstancias o elementos que hayan sido objeto de la acusación; en su caso, los daños y perjuicios reclamados, la pretensión reparatoria y las defensas del imputado;

V. Una breve y sucinta descripción del contenido de la prueba;

VI. La valoración de los medios de prueba que fundamentaren las conclusiones alcanzadas por el Tribunal de Juicio;

VII. Las razones que sirvieren para fundar la resolución;

VIII. La determinación precisa y circunstanciada del hecho que el Tribunal de Juicio estime acreditado;

IX. Los resolutivos de absolución o condena; la que, en su caso, se pronuncie sobre la reparación del daño y fije el monto de las indemnizaciones correspondientes; y

X. La firma de los integrantes del Tribunal de Juicio.

Artículo 402. Redacción de la sentencia.

La sentencia será siempre redactada por uno de los miembros del Tribunal de Juicio; el voto particular será redactado por su autor.

Artículo 403. Sentencia absolutoria.

En la sentencia absolutoria, el Tribunal de Juicio ordenará que se tome nota del levantamiento de las medidas cautelares, en todo índice o registro público y policial en el que figuren y será ejecutable inmediatamente.

Artículo 404. Sentencia condenatoria.

La sentencia condenatoria fijará las penas y se pronunciará sobre la suspensión de las mismas y la eventual aplicación de alguna de las medidas alternativas a la privación o restricción de libertad previstas en la Ley.

La sentencia que condenare a una pena privativa de la libertad, fijará el tiempo de detención o prisión preventiva que deberá servir de base para su cumplimiento.

La sentencia condenatoria dispondrá también el decomiso de los instrumentos o efectos del delito o su restitución, cuando fuere procedente.

El Tribunal de Juicio condenará a la reparación del daño cuando resulte procedente.

Cuando la prueba producida no permita establecer con certeza el monto de los daños y perjuicios, o de las indemnizaciones correspondientes, el Tribunal de Juicio podrá condenar genéricamente a reparar los daños y los perjuicios y ordenar que se liquiden en ejecución de sentencia por vía incidental, siempre que éstos se hayan demostrado, así como su deber de repararlos.

Artículo 405. Congruencia de la sentencia y prohibición de la reclasificación.

La sentencia de condena no podrá sobrepasar los hechos probados en juicio.

Artículo 406. Medios de prueba en la individualización de las consecuencias jurídicas del delito.

El desahogo de los medios de prueba para la individualización de las consecuencias jurídicas del delito después de haber resuelto sobre la responsabilidad del sentenciado, y no antes.

El debate sobre las consecuencias jurídicas del delito comenzará con el desahogo de los medios de prueba que se hubieren ofrecido antes o en ese momento para determinarlas.

Artículo 407. Audiencia de individualización de las consecuencias jurídicas del delito.

Después de la apertura de la audiencia e individualización de los intervinientes, el Tribunal de Juicio señalará la materia de la audiencia, solicitará a las partes que determinen el orden en que desean el desahogo de los medios de prueba y declarará abierto el debate. El debate iniciará con el desahogo de los medios de prueba y continuará con los alegatos finales de las partes.

Cerrado el debate, el Tribunal de Juicio deliberará brevemente y procederá a manifestarse con respecto a la sanción a imponer al sentenciado y sobre el daño causado a la víctima u ofendido y su reparación. Asimismo, fijará las penas y se pronunciará sobre la eventual aplicación de alguna de las medidas alternativas a la pena de prisión o sobre su suspensión, e indicará en qué forma deberá, en su caso, repararse el daño.

Artículo 408. Lectura y explicación de las sentencias.

El Tribunal de Juicio deberá explicar toda sentencia de absolución o condena.

Artículo 409. Sentencia firme

En cuanto no sean oportunamente recurridas, las resoluciones judiciales quedarán firmes y serán ejecutables, sin necesidad de declaración alguna.

Artículo 410. Remisión de la sentencia

El Tribunal, de Juicio dentro de los tres días siguientes a que la sentencia condenatoria quede firme, deberá remitir copia autorizada de la misma al juez de

ejecución y las autoridades penitenciarias que intervienen en el proceso de ejecución para su debido cumplimiento.

Dicha disposición también será aplicable en los casos de las sentencias condenatorias dictadas en el procedimiento abreviado.

CAPÍTULO V Ajustes al procedimiento ordinario

SECCIÓN I Ajustes de procedimiento para personas inimputables

Artículo 411. Procedimiento para la aplicación de ajustes razonables en la audiencia inicial.

Si en el curso de la audiencia inicial, aparecen indicios de que el imputado está en alguno de los supuestos de inimputabilidad previstos en los códigos sustantivos, la audiencia continuará con las mismas reglas generales pero se proveerán los ajustes razonables que determine el Tribunal para garantizar el acceso a la justicia de la persona.

En los casos en que la persona este retenida, el Ministerio Público deberá aplicar ajustes razonables para evitar un mayor grado de vulnerabilidad y el respeto a su integridad personal. En los casos en que no proceda prisión preventiva oficiosa, podrán ser aplicables otras medidas cautelares, incluso anticipadamente.

Artículo 412. Identificación de los supuestos de inimputabilidad.

Si el imputado ha sido vinculado a proceso y se estima que esta en una situación de inimputabilidad, las partes podrán solicitar al Tribunal que se lleve a cabo un procedimiento para determinar si se acredita tal extremo.

Artículo 413. Ajustes al procedimiento.

Si se determina el estado de inimputabilidad del sujeto, el procedimiento ordinario se aplicara observando las mismas reglas generales del debido proceso pero con los ajustes razonables que en el caso concreto acuerde el Tribunal, con el objeto de acreditar la participación de la persona inimputable en el hecho atribuido y, en su caso, determinar la aplicación de medidas de seguridad.

Artículo 414. Medidas cautelares aplicables a inimputables.

Las medidas cautelares se aplicarán con las mismas reglas del proceso ordinario, con los ajustes razonables que disponga el Tribunal para el caso en que resulte procedente. No podrá aducirse como motivación para la procedencia de una medida cautelar la existencia de una discapacidad como el trastorno mental o análogas.

Artículo 415. Prohibición de procedimiento abreviado para inimputables.

El procedimiento abreviado no será aplicable a personas inimputables.

Artículo 416. Resolución del caso.

Si se comprueba la existencia del hecho que la ley señala como delito y que el inimputable intervino en su comisión, ya sea como autor o como partícipe, sin que a su favor opere alguna causa de justificación prevista en los códigos sustantivos, el Tribunal resolverá el caso indicando que hay base suficiente para la imposición de la medida de seguridad que resulte aplicable, si se estima que ésta es necesaria y procedente en los términos de los códigos sustantivos respectivos. Asimismo, corresponderá al Tribunal determinar la individualización de la medida, en atención a las necesidades de prevención especial positiva, y respetando los criterios de proporcionalidad y de mínima intervención. La medida de seguridad en ningún caso podrá tener mayor duración a la pena que pudiera corresponder al sujeto, en caso de que fuera imputable.

327

Si no se acreditan los requisitos señalados en el párrafo anterior, el Tribunal absolverá al inimputable.

Artículo 417. Acciones libres en su causa.

En todo caso, para los efectos de determinar la responsabilidad o no del inimputable, el Ministerio Público deberá determinar si el sujeto se encontraba en ese estado de inimputabilidad al momento de realizar el hecho típico y, además, si él no se provocó o colocó en esa situación de manera dolosa o culposa, pues si éste fuere el caso él responderá penalmente de ese hecho, siempre y cuando se constate que él lo previó o, al menos, le fue previsible. La resolución que se dicte será apelable.

SECCIÓN II Pueblos y comunidades indígenas

Artículo 418. Pueblos y comunidades indígenas.

Cuando se trate de delitos que afecten bienes jurídicos propios de un pueblo o comunidad indígena o bienes personales de alguno de sus miembros, y tanto el imputado como la víctima o, en su caso, sus familiares, acepten el modo como la comunidad ha resuelto el conflicto conforme a sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, se declarará la extinción de la acción penal.

En estos casos, cualquier miembro de la comunidad indígena podrá solicitar que así se declare ante el juez competente.



TÍTULO III PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

CAPÍTULO I Procedimiento abreviado

Artículo 419. Procedencia.

El procedimiento abreviado se tramitará previa solicitud del Ministerio Público y procederá siempre que:

I.- El acusado admita su responsabilidad en el hecho materia de la acusación;

II. Existan datos de prueba que hagan verosímil la responsabilidad del imputado;
III.- No haya debate sobre la licitud de los registros de investigación;
IV.- El acusado expresamente renuncie al juicio;
V. El acusado consienta en la aplicación de este procedimiento; y
VI. La víctima u ofendido, o si se constituyo como acusador coadyuvante, en su caso, no presente oposición fundada.

La existencia de coimputados no impide la aplicación de estas reglas a alguno de ellos. La incomparecencia injustificada del acusador coadyuvante de la víctima u ofendido a la audiencia no impedirá que se resuelva sobre la procedencia del procedimiento abreviado y en su caso, se dicte la sentencia respectiva.

El procedimiento abreviado procederá por cualquier delito, sin embargo, la pena que en el caso concreto solicite el Ministerio Público no podrá exceder de cuarenta años.

Artículo 420. Oportunidad.

329

El Ministerio Público podrá solicitar la apertura del procedimiento abreviado una vez dictado el auto de vinculación del imputado a proceso y hasta antes del pronunciamiento del auto de apertura de juicio.

Si la solicitud se realiza antes de la etapa intermedia, la acusación podrá formularse oralmente. En caso de que el Juez rechace el procedimiento abreviado antes de la etapa intermedia, la acusación quedará sin efectos. Si la solicitud del procedimiento tiene lugar en la audiencia intermedia, se estará a la acusación formulada por escrito, salvo la solicitud de la pena.

El Ministerio Público podrá solicitar la aplicación de una pena inferior, cuya reducción podrá ser hasta de un tercio menos de la mínima señalada para el delito por el cual acusa.

Las Procuradurías están obligadas a establecer directrices o lineamientos en torno a la solicitud del procedimiento.

Artículo 421. Verificación del Juez de Control.

Antes de resolver sobre la solicitud del Ministerio Público, el Juez de Control verificará que el imputado:

I. Conoce su derecho a exigir un juicio, y renuncia voluntariamente a ese derecho y acepta ser juzgado con base en los antecedentes recabados en la investigación;

II. Entiende los términos del acuerdo y las consecuencias que éste pudiera implicarle;

III. Acepta su responsabilidad en los hechos materia de la acusación en forma inequívoca y de manera libre y espontánea; y

IV. Presta su conformidad al procedimiento abreviado en forma libre, voluntaria e informada con la asistencia de su defensor.

Artículo 422. Resolución sobre la solicitud de procedimiento abreviado.

El Juez de Control aceptará la solicitud del Ministerio Público cuando considere actualizados los requisitos correspondientes.

Aun habiéndose declarado la procedencia del abreviado en cualquier momento que el Juez de Control advierta que hay debate, dejará sin efecto la declaración de procedencia y se continuará con el procedimiento ordinario.

Cuando por cualquier motivo de los previstos el Juez de Control rechace el procedimiento abreviado, dejará saber a los intervinientes que el requerimiento sobre la pena no vincula al Ministerio Público durante el juicio; además que la aceptación de los hechos materia de acusación no podrá ser utilizada en perjuicio del imputado y que quedarán a salvo sus derechos para debatir la ilicitud de los medios de prueba.

Artículo 423. Trámite en el procedimiento abreviado.

Acordado el procedimiento abreviado, el Juez de Control otorgará la palabra a las partes para que expongan lo que a su derecho convenga. En todo caso, la exposición final corresponderá siempre al acusado.

Artículo 424. Sentencia en el procedimiento abreviado.

Una vez que el Juez de Control ha escuchado a los intervinientes y habiendo verificado los requisitos de procedencia, emitirá su fallo sobre condena o absolución en la misma audiencia, y dará lectura pública a la sentencia, dentro de un plazo de cuarenta y ocho horas.

331

En caso de ser condenatoria, el pacto sobre la pena vincula al juez, salvo que viole derechos fundamentales.

El Juez de Control sólo puede cuestionar el hecho cuando no existan elementos que hagan verosímil el reconocimiento.

El Juez de Control solo podrá conceder beneficios preliberacionales cuando los mismos sean procedentes tomando como base la pena mínima prevista en los códigos sustantivos para el delito de que se trate.

CAPÍTULO II Procedimiento para personas jurídicas

Artículo 425. Ejercicio de la acción penal.

Cuando algún miembro o representante de una persona jurídica, con excepción de las instituciones estatales, cometa un hecho delictivo con los medios que para tal objeto le proporcione dicha persona jurídica, de modo que, resulte cometido a nombre, bajo el amparo o en beneficio de aquélla, el Ministerio Público ejercerá acción penal en contra de ésta sólo si también ha ejercido acción penal en contra de la persona física que deba responder por el delito cometido.

Artículo 426. Investigación.

Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la posible comisión de un delito en los que se encuentre involucrada alguna persona jurídica en los términos previstos en el artículo anterior iniciará la investigación correspondiente.

En caso de que durante la investigación se ejecute el aseguramiento de bienes y sea necesario que alguna de las personas físicas a que se refiere el anterior

artículo, deba acudir ante el Ministerio Público, éste dará vista al representante de la persona jurídica a efecto de hacerle saber sus derechos y manifieste lo que a su derecho convenga.

En ningún caso, el representante de la persona jurídica que tenga el carácter de imputado, podrá representarla.

Artículo 427. De la formulación de la imputación y vinculación a proceso.

En la audiencia inicial llevada a cabo para formular imputación a la persona física, se darán a conocer al representante de la persona jurídica, asistido por el defensor particular que designe, los cargos que se formulen en contra de la persona jurídica, para que dicho representante o su defensor manifiesten lo que a su derecho convenga.

El representante de la persona jurídica, asistido por el defensor designado, podrá participar en todos los actos del proceso. En tal virtud se les notificarán todos los actos que tengan derecho a conocer, se les citarán a las audiencias, podrán ofrecer medios de prueba, desahogar pruebas, promover incidentes, formular alegatos e interponer los recursos procedentes en contra de las resoluciones que a la persona jurídica perjudiquen.

La autoridad judicial dictará auto por la que determine si la persona jurídica de que se trate debe o no estar vinculada a proceso.

Artículo 428. Formas de terminación anticipada.

Durante el proceso, para determinar la responsabilidad penal de la persona jurídica, se podrán aplicar las formas anticipadas de terminación del proceso y en lo conducente, los procedimientos especiales previstos en este Código.

333

Artículo 429. De la sentencia.

En la sentencia que se dicte, el Tribunal resolverá lo pertinente a la persona física imputada y a la persona jurídica, imponiendo a ésta, en su caso, la sanción procedente.

En cuanto a las demás reglas del proceso, se aplicarán en lo que sea compatible el presente Código y demás disposiciones aplicables respecto a las personas físicas.

CAPÍTULO III Acción penal por particulares.

Artículo 430. Acción penal por particular.

El ejercicio de la acción penal corresponde al Ministerio Público, pero podrá ser ejercida por los particulares que tengan la calidad de víctima u ofendido en los casos y conforme a lo dispuesto en este Código.

Artículo 431. Procedencia.

El particular que sea víctima u ofendido en alguno de los delitos previstos en este Capítulo podrá acudir ante el Juez de Control, sin necesidad de acudir previamente al Ministerio Público, ejerciendo la acción penal, en caso de que cuente con datos que establezcan la existencia del hecho que la ley señala como delito y exista probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, deberá aportar los datos de prueba que sustenten la acción.

Artículo 432. Reglas generales.

Si la víctima u ofendido decide ejercer la acción penal, por ninguna causa podrá acudir al Ministerio Público a solicitar su intervención para que investigue los mismos hechos.

La carga de la prueba para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad del imputado corresponde al particular que ejerza la acción penal. Las partes, en igualdad procesal, podrán aportar todo elemento de prueba con que cuenten e interponer los medios de impugnación que legalmente procedan.

A la acusación de la víctima u ofendido por delito de acción penal promovida por particulares, le serán aplicables las reglas previstas para la acusación del Ministerio Público.

De igual forma, salvo disposición legal en contrario, en la substanciación de la acción penal promovida por particulares, se observaran en todo lo que resulte aplicable las disposiciones relativas al proceso previstas en este Código.

Artículo 433. Delitos en los que procede la acción penal por particulares.

La víctima u ofendido, podrá ejercer la acción penal únicamente en los siguientes delitos perseguibles por querella cuya pena mínima no exceda de tres años.

Artículo 434. Escrito para el ejercicio de la acción penal promovida por particulares.

El escrito en el que el particular proceda al ejercicio de la acción penal contendrá los requisitos siguientes:

I. El nombre y el domicilio de la víctima u ofendido;

II. El nombre del imputado y, en su caso, cualquier dato que permita su localización;

III. El señalamiento de los hechos que se consideran delictivos, los datos de prueba que los establezcan y determinen la probabilidad de que el imputado los cometió o participó en su comisión, los que acrediten los daños causados y su

335

monto aproximado, así como aquéllos que establezcan la calidad de víctima u ofendido;

IV. Los fundamentos de derecho en que se sustenta la acción;

V. La petición que se formula, expresada con claridad y precisión; y

VI. La firma del particular que la ejercita o del representante legal en el caso de la persona jurídica.

Si la víctima o el ofendido es una persona jurídica, se indicará su razón social y su domicilio fiscal, así como el de su representante legal.

Artículo 435. Solicitudes

El particular al ejercer la acción penal ante el Juez de Control podrá solicitar lo siguiente:

I. La orden de aprehensión o de comparecencia en contra del imputado o su citación a la audiencia inicial;

II. La providencia precautoria que proceda; y

III. El reclamo de la reparación del daño.

Artículo 436. Admisión de la acción penal promovida por el particular.

Admitida la acción penal promovida por el particular, el Juez de Control citará al imputado a la audiencia de vinculación a proceso, que deberá celebrarse dentro de los cinco a diez días siguientes, y le entregará copia del escrito señalado en el artículo 434 para que manifieste lo que considere conveniente a su defensa, ofrezca los medios de prueba conforme a las reglas comunes y oponga las

excepciones que estime convenientes, previniéndole el nombramiento de defensor, apercibido de que de no hacerlo le nombrará un defensor público.

Artículo 437. Audiencia de actos previos al juicio.

Al inicio de la audiencia de vinculación a proceso, si el particular que ejerce la acción penal o el imputado no lo propusieron, el Juez de Control los invitará a que lleguen a acuerdos para la reparación y les explicará los efectos y los mecanismos alternativos de solución de controversias disponibles. Si las partes lo consideran necesario el Juez de Control podrá autorizar la intervención de las personas u organismos especializados en mecanismos alternativos de solución de controversias, para lo cual se puede disponer la suspensión del procedimiento hasta por treinta días.

Si las partes no admiten mecanismos alternativos de solución de controversias o, acudiendo ante los especialistas no se produce ningún acuerdo o la retractación, se dispondrá la continuación de la audiencia y se procederá a discutir y resolver sobre la vinculación a proceso conforme a las reglas comunes.

Si se vincula a proceso al imputado se seguirán las normas del procedimiento ordinario, salvo disposición en contrario.

Artículo 438. Acumulación de causas.

No procederá la acumulación de procedimientos de acción penal por particulares con procedimientos de acción penal pública.

Artículo 439. Desistimiento de la acción.

El particular que ejerció la acción penal podrá desistirse expresamente de ésta en cualquier estado del proceso. Se tendrá por desistida la acción penal por particular cuando la víctima u ofendido o su asesor jurídico no concurran, sin justa causa, a cualquiera de las audiencias del proceso.

337

En los casos de incomparecencia, la justa causa deberá acreditarse antes de la iniciación de la audiencia o dentro de dos días de la fecha fijada para aquélla.

CAPÍTULO IV Asistencia jurídica internacional en materia penal

Artículo 440. Peticiones de asistencia jurídica internacional.

El Ministerio Público de la Federación dará trámite a las peticiones de asistencia jurídica internacional formuladas por autoridades extranjeras con base en los instrumentos internacionales aplicables o en la reciprocidad internacional, conforme a lo dispuesto en dichos instrumentos y a lo previsto en este Código.

Artículo 441. Desahogo de solicitudes de asistencia jurídica.

Para el desahogo de solicitudes de asistencia jurídica, el Ministerio Público y los Tribunales tendrán, en lo conducente, las atribuciones y facultades que las leyes les otorgan dentro del proceso penal regulado por este Código.

Artículo 442. Requisitos de las solicitudes.

Las solicitudes que sean formuladas por las autoridades extranjeras con base en la reciprocidad, ante la ausencia de instrumento internacional aplicable, sólo serán desahogadas si se satisfacen los siguientes requisitos:

I. Que la solicitud de asistencia jurídica sea recibida por la vía diplomática y la Secretaría de Relaciones Exteriores la remita para su atención a la Procuraduría General de la República. En estos casos, los documentos respectivos deberán estar traducidos al español y no requerirán legalización alguna en términos de lo dispuesto por el artículo 49 fracción VI de este Código;

II. Que la solicitud del país requirente contenga la manifestación de que el Tribunal resolutor haya tenido competencia para conocer y juzgar el asunto y que durante

el proceso se respetaron al sentenciado el derecho de audiencia y el ejercicio de sus defensas, así como la manifestación del gobierno extranjero de que ofrece reciprocidad, fundada en su orden jurídico interno, en los casos análogos que le sean presentados por las autoridades mexicanas;

III. Que la ejecución de la solicitud no sea contraria al orden jurídico mexicano;

IV. Que el delito objeto de investigación o proceso penal en el extranjero no sea considerado de carácter político, o delitos del fuero militar no previstos en la legislación penal ordinaria;

V. Que la atención de la solicitud no afecte un proceso penal en curso, la soberanía, seguridad, el orden público o el interés nacional de los Estados Unidos Mexicanos: y

VI. Que tratándose de solicitudes de ejecución de medidas cautelares, de apremio, cateos domiciliarios u otras medidas coercitivas, la conducta por la que se instruye el proceso penal en el extranjero esté tipificada como delito en los Estados Unidos Mexicanos y se agoten los supuestos exigidos por el derecho mexicano para la ejecución de dichas medidas.

Artículo 443. Desahogo de la solicitud.

Cuando el Ministerio Público reciba una petición de asistencia jurídica internacional que cumpla con las disposiciones que establezcan los instrumentos internacionales aplicables o, en su defecto, con las de este Capítulo, cuyo objeto sea el aseguramiento o decomiso de bienes, procederá a su localización, a la identificación de las personas que aparezcan como propietarias, poseedoras o que se conduzcan como dueños de los bienes, y a su aseguramiento, debiendo

339

entregarlos al órgano encargado de su administración conforme a las disposiciones sobre la materia.

Artículo 444. Requisitos adicionales.

Cuando las solicitudes se fundamenten en la reciprocidad internacional, ante la ausencia de tratado aplicable, deberán satisfacerse además de los previstos en el artículo 442 de este Código, los requisitos siguientes:

I. Que los bienes de que se trate constituyan instrumentos, objetos o productos del delito materia de la petición de la autoridad extranjera correspondiente: y

II. Que en el caso de que la persona a quien se imputan los hechos aun no hubiere sido sentenciada y existan datos que hagan probable su participación en los hechos que se le imputan.

Artículo 445. Vigencia del aseguramiento.

El aseguramiento de los bienes decretado de conformidad con los instrumentos internacionales aplicables y lo dispuesto en el presente Capítulo se mantendrá vigente hasta en tanto la autoridad requirente deje sin efectos la orden del aseguramiento, retire su solicitud o la autoridad judicial extranjera resuelva su decomiso. En ningún caso el aseguramiento podrá exceder los plazos de prescripción que se establezcan en la legislación del país requirente o en el Código Penal Federal.

Mientras el aseguramiento continúe vigente se aplicarán las disposiciones de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y demás aplicables, relativas al proceso de abandono.

Artículo 446. Verificación.

340

En caso de que el país requirente solicite mediante asistencia jurídica la ejecución de una resolución o sentencia que implique el decomiso de los bienes, el Ministerio Público deberá verificar:

I. Que dicha resolución o sentencia tenga el carácter de cosa juzgada en el país en que fueron dictados; y

II. Que la petición de asistencia jurídica se ajuste a lo dispuesto en los instrumentos internacionales aplicables y, en lo conducente, a las disposiciones del presente Capítulo.

El Ministerio Público podrá requerir a las autoridades extranjeras correspondientes que amplíen la información o documentación necesaria para dar debido cumplimiento a la petición de asistencia jurídica internacional de que se trate.

Artículo 447. Ejecución de la resolución extranjera.

Una vez verificados los supuestos previstos en el artículo anterior, el Ministerio Público deberá promover ante el órgano jurisdiccional federal competente la ejecución de la resolución extranjera y poner los bienes que hubieren sido asegurados a su disposición, indicando el lugar en que dichos bienes se encuentren y, en su caso, la persona o personas ante las cuales hayan sido depositados, los administren o los tengan bajo su guarda y custodia, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y demás disposiciones aplicables.

Artículo 448. Documentación.

El Ministerio Público deberá acompañar a su promoción la siguiente documentación:

I. La petición de asistencia jurídica que hubiere presentado el país requirente junto con la documentación correspondiente, entre la cual deberá constar la sentencia o resolución irrevocable;

II. La manifestación del país requirente de que el Tribunal resolutor haya tenido competencia para conocer y juzgar el asunto y que durante el proceso se respetaron al sentenciado el derecho de audiencia y el ejercicio de sus defensas; y

III. Tratándose de solicitudes de asistencia jurídica que no se hayan fundado en un instrumento internacional aplicable, la manifestación del gobierno extranjero de que ofrece reciprocidad en los casos análogos que le sean presentados por las autoridades mexicanas.

Artículo 449. Competencia.

Es competente para conocer del proceso de ejecución de resoluciones extranjeras de decomiso de bienes a que se refiere el presente Capítulo, el Tribunal en cuya circunscripción territorial se hallen los bienes o el Tribunal con residencia en el Distrito Federal.

Artículo 450. Ratificación del aseguramiento.

El Tribunal que conozca del asunto dispondrá la ratificación del aseguramiento y notificará a las personas que hayan sido identificadas presuntamente como propietarias, poseedoras o a quienes se conduzcan como dueños de éstos y al Ministerio Público.

Las notificaciones a que se refiere este artículo se practicarán de manera personal, de conformidad con lo dispuesto en el presente Código.

En caso de que se ignore dónde se encuentra el propietario, poseedor o quien se conduce como dueño de los bienes, la notificación se hará por edictos que contendrán una relación sucinta de la solicitud de asistencia jurídica y de la

342

identificación de los bienes materia del proceso, los cuales se mandarán publicar por tres veces en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en la República.

Artículo 451. Oposición

Los interesados podrán oponerse a la ejecución de la resolución extranjera y ofrecer las pruebas pertinentes dentro de los treinta días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación a que se refiere el artículo anterior. Las defensas sólo podrán consistir en:

I. Que no se cumplieron con las formalidades establecidas por los instrumentos internacionales aplicables o con las disposiciones de este Capítulo; o

II. Que los bienes fueron adquiridos legítimamente como tercero de buena fe.

Artículo 452. Audiencia.

Fenecido el término señalado en el artículo anterior, el juez citará a una audiencia dentro de los quince días siguientes y, si no se presenta oposiciones el Tribunal resolverá de plano en la misma sobre la ejecución de la resolución o sentencia extranjera que ordenó el decomiso. Si se presentó posición, se desahogarán las pruebas ofrecidas, se oirán alegatos y el Tribunal dictará la resolución correspondiente.

El Tribunal no podrá decidir sobre el fondo del fallo de la autoridad judicial extranjera, ni sobre las motivaciones o fundamentos de hecho o de derecho en que se hubiere apoyado, limitándose únicamente a examinar su autenticidad y si ésta debe o no ejecutarse atendiendo a que la solicitud de asistencia jurídica se haya ajustado a los instrumentos internacionales aplicables y a las disposiciones de este Capítulo. Si el juez determina improcedente el desahogo de la solicitud de asistencia jurídica, ordenará de inmediato el levantamiento del aseguramiento y la devolución de los bienes respectivos.

343

La resolución que ponga fin al proceso no admitirá recurso alguno.

Artículo 453. Destino de bienes decomisados.

La autoridad judicial extranjera que ordenó el decomiso, dispondrá el destino de los bienes decomisados.

Artículo 454. Exhortos y cartas rogatorias del extranjero

En el desahogo de exhortos y cartas rogatorias del extranjero las autoridades judiciales podrán aplicar, en lo conducente, las disposiciones en materia de asistencia jurídica internacional del presente Capítulo.

TÍTULO IV RECURSOS

CAPÍTULO I Disposiciones comunes

Artículo 455. Reglas generales.

Las resoluciones judiciales podrán ser recurridas sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos en la ley.

El derecho de recurrir corresponderá tan sólo a quien le sea expresamente otorgado y pueda resultar afectado por la resolución.

En el proceso penal sólo se admitirán los siguientes recursos, según corresponda:

I. Revocación;

II. Apelación;

III. Revisión.

Artículo 456. Condiciones de interposición.

Los recursos se interpondrán en las condiciones de tiempo y forma que se determinan en este Código, con indicación específica de la parte impugnada de la resolución recurrida.

Artículo 457. Agravio.

Las partes sólo podrán impugnar las decisiones judiciales que pudieran causarles agravio, siempre que no hayan contribuido a provocarlo, salvo el caso del imputado, en que se lesionen derechos fundamentales previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en tratados internacionales ratificados por México. El recurso deberá sustentarse en la afectación que causa el acto impugnado, así como los motivos que originaron ese agravio.

Artículo 458. Recurso de la víctima u ofendido.

La víctima u ofendido puede impugnar las resoluciones que versen sobre la reparación del daño causado por el delito, cuando estime que hubiere resultado perjudicado por la misma, así como aquellas decisiones que pongan fin al proceso y las que se produzcan en la audiencia de juicio, solo si en este último caso hubiere participado en ella.

Aun cuando la víctima o el ofendido no se constituya como coadyuvante, podrá presentar solicitud motivada al Ministerio Público para que interponga los recursos que sean pertinentes, dentro de los plazos legales.

Cuando el Ministerio Público no presente la impugnación, explicará por escrito al solicitante la razón de su proceder a la mayor brevedad.

Artículo 459. Pérdida y desistimiento del recurso.

345

Se tendrá por perdido el derecho a recurrir cuando:

I. Se haya consentido expresamente la resolución contra la cual procediere; o

II. Concluido el plazo que la ley señala para interponer algún recurso, éste no se haya interpuesto.

Quienes hubieren interpuesto un recurso, podrán desistir de él antes de su resolución. En todo caso, los efectos del desistimiento no se extenderán a los demás recurrentes o a los adherentes del recurso.

El Ministerio Público podrá desistirse del recurso interpuesto, mediante determinación motivada y fundada. Para que el defensor desista, se requerirá la autorización expresa del imputado.

Artículo 460. Alcance del recurso.

El Tribunal que conociere de un recurso solo podrá pronunciarse sobre los agravios expresados por los recurrentes, quedándole prohibido extender el examen de la decisión recurrida a cuestiones no planteadas por ellos o más allá de los límites del recurso, a menos que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales del imputado o acusado.

Si solo uno de varios imputados por el mismo delito interpusiera algún recurso contra una resolución, la decisión favorable que se dictare aprovechará a los demás, a menos que los fundamentos fueren exclusivamente personales del recurrente.

Artículo 461. Prohibición de modificación en perjuicio.

Cuando el recurso ha sido interpuesto sólo por el imputado o su defensor, no podrá modificarse la resolución recurrida en perjuicio del imputado.

346

Artículo 462. Efecto no suspensivo.

La interposición de un recurso no suspenderá la ejecución de la decisión, salvo que la ley disponga lo contrario.

Artículo 463. Rectificación.

Los errores de derecho en la fundamentación de la sentencia o resolución impugnadas, que no hayan influido en la parte resolutiva, así como los errores de forma en la designación o el cómputo de las penas, no anularán la resolución, pero serán corregidos en cuanto sean advertidos o señalados por alguna de las partes, o aun de oficio.

CAPÍTULO II Revocación

Artículo 464. Procedencia del recurso de revocación

La revocación procede contra todas las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin substanciación o contra las cuales no se concede por este Código recurso de apelación, a fin de que el mismo juez o tribunal que las pronunció examine nuevamente la cuestión recurrida y dicte la resolución que corresponda.

Artículo 465. Trámite

Para la tramitación de la revocación son aplicables las siguientes reglas:

I. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante audiencia, deberá promoverse tan pronto se dictaren y solo será admisible cuando no hubieren sido precedidas de debate. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo;

II. Si el recurso se hace valer contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, deberá interponerse por escrito dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de la resolución impugnada, expresando los motivos por los cuales se solicita. El juez o tribunal se pronunciará de plano, pero podrá oír previamente a las demás partes si se hubiere deducido en un asunto cuya complejidad así lo amerite.

III. La resolución que decida la revocación deberá emitirse dentro de las veinticuatro horas siguientes a su interposición, no siendo susceptible de recurso alguno y se ejecutará de inmediato.

La interposición del recurso implica la reserva de recurrir en apelación, si el vicio no es saneado y la resolución provoca un agravio al recurrente, siempre y cuando dicha resolución sea susceptible de apelarse en los términos de este Código.

CAPÍTULO III Apelación.

SECCIÓN I Reglas generales de la apelación.

Artículo 466. Materia del recurso.

La materia del recurso de apelación se limitará exclusivamente a resolver sobre la parte o partes impugnadas de la resolución recurrida conforme a los agravios expresados.

Si el recurrente es el imputado, el Tribunal estará facultado para reparar oficiosamente violaciones a derechos fundamentales que se adviertan en función de la expresión de agravios. En caso de que el Tribunal no encuentre violaciones a derechos fundamentales que, en tales términos, deba reparar de oficio, no estará obligado a dejar constancia de ello en la resolución.

Artículo 467. Interposición

El recurso de apelación se podrá interponer oralmente en la respectiva audiencia o por escrito ante el mismo juez o tribunal que dictó la resolución, dentro del plazo que este Código establezca, contado a partir de la notificación de la resolución impugnada.

Si el recurso se interpusiera oralmente, el apelante debe expresar por escrito los agravios que considere le causan la resolución recurrida, dentro del plazo que este Código señala para apelar, de lo contrario se desechará de plano el recurso. Si se interpusiere por escrito, los agravios deben expresarse en el mismo escrito de interposición.

Cuando el Tribunal competente para conocer de la apelación tenga su sede en un lugar distinto al del origen del recurso, las partes deberán fijar un nuevo lugar y la forma para recibir notificaciones.

Artículo 468. Elevación

Interpuesto el recurso, el juez o tribunal, sin más trámite, enviará los registros correspondientes al Tribunal que deba conocer del mismo.

Artículo 469. Inadmisibilidad del recurso.

El Tribunal de Apelación declarará inadmisible el recurso cuando:

I. Haya sido interpuesto fuera del plazo;

II. Se hubiese deducido en contra de resolución que no fuere impugnable por medio de apelación;

III. Lo interpusiese persona no legitimada para ello; o

IV. El escrito de interposición careciere de fundamentos de agravio o de peticiones concretas.

349

Artículo 470. Trámite

Recibida la resolución apelada y los registros de la audiencia de origen, el Tribunal de alzada se pronunciará de plano sobre la admisión del recurso.

Artículo 471. Emplazamiento a las otras partes

Admitido el recurso, se correrá traslado a las otras partes con la copia de los agravios y en ese mismo acto se decretará lugar y fecha para la celebración de la audiencia, la que deberá tener lugar no antes de cinco días ni después de quince días desde la notificación del auto de radicación o de la formulación de agravios del adherente, en caso de que los exprese.

Artículo 472. Derecho a la adhesión.

Quien tenga derecho a recurrir podrá adherirse, dentro del término del emplazamiento, al recurso interpuesto por cualquiera de las otras partes, siempre que cumpla con los demás requisitos formales de interposición. Quien se adhiera podrá formular agravios. Sobre la adhesión se dará traslado a las demás partes por el término de tres días. La adhesión al recurso sigue la suerte procesal de éste.

Artículo 473. Audiencia

La audiencia se celebrará con las partes que comparezcan. En caso de que ninguna parte comparezca el Tribunal de Alzada resolverá por escrito.

Una vez abierta la audiencia, se concederá la palabra a la parte recurrente para que exponga verbalmente los agravios manifestados por escrito o abunde en ellos, sin que pueda plantear nuevos conceptos de agravio.

Por último, se le concederá el uso de la palabra a las demás partes que hayan acudido a la audiencia.

En la audiencia, el Tribunal de Alzada podrá interrogar a las partes sobre las cuestiones planteadas en sus agravios.

Artículo 474. Conclusión de la audiencia

Concluido el debate, el Tribunal de Alzada pronunciará oralmente la sentencia de inmediato, o si no fuere posible dentro de los tres días siguientes a la celebración de la audiencia. La sentencia comunicada oralmente deberá ser documentada dentro de los siete días siguientes a la fecha de su emisión

SECCIÓN II Apelación contra resoluciones emitidas por el Juez de Control.

Artículo 475. Resoluciones apelables.

Serán apelables las siguientes resoluciones dictadas por el Juez de Control:

I. Las que pusieren término al procedimiento, hicieren imposible su prosecución o lo suspendieren;

II. Las que se pronunciaren sobre las medidas cautelares;

III. Las que concedieren, negaren o revocaren la suspensión del proceso a prueba;

IV. La sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado;

V. El auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso;

VI. La negativa de orden de aprehensión:

351

VII. Las resoluciones denegatorias de prueba, dictadas hasta en el auto de apertura de juicio;

VIII. La negativa de abrir el procedimiento abreviado;

IX. Las que nieguen la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios; y

X. Las demás que este Código señale.

Artículo 476. Efecto.

En caso de sentencia dictada en procedimiento abreviado, la interposición del recurso suspenderá el efecto de la sentencia condenatoria, salvo que conceda algún beneficio sin requisito alguno.

Artículo 477. Plazo.

El recurso de apelación al que se refiere esta sección deberá ser interpuesto dentro de los siete días siguientes a la notificación de la resolución impugnada.

Artículo 478. Sentencia.

La sentencia que resuelva el recurso al que se refiere esta sección, confirmará, modificará o revocará la resolución impugnada.

SECCIÓN III Apelación contra sentencia o sobreseimiento dictados en juicio.

Artículo 479. Objeto del recurso.

El recurso de apelación a que se refiere esta sección, tiene como objeto invalidar la audiencia de debate de juicio, o la sentencia o resolución de sobreseimiento dictada en dicha audiencia, cuando hubiere quebranto a las formalidades esenciales del procedimiento o infracción a la legalidad en la formación de las resoluciones aludidas. La jurisdicción del Tribunal de Apelación se limitará a

352

establecer, en su caso, la nulidad del juicio y de la sentencia o sólo la de esta última, sin perjuicio de que, en este supuesto, esté facultado para emitir sentencia de reemplazo en las condiciones previstas en este código.

La apelación sólo será admisible si el interesado ha interpuesto el recurso de revocación, reclamado oportunamente el saneamiento del vicio procesal o ha hecho protesta de recurrir en apelación, salvo el caso de violación de derechos fundamentales y los producidos después de la audiencia de juicio.

Artículo 480. Efecto de la interposición del recurso.

La interposición del recurso de apelación suspende los efectos de la sentencia condenatoria recurrida.

Artículo 481. Plazo.

El recurso de apelación al que se refiere esta sección deberá ser interpuesto dentro de los quince días siguientes a la notificación de la resolución impugnada.

Artículo 482. Apelación por vicios de procedimiento.

El recurso será procedente cuando, en la tramitación de la audiencia de debate de juicio, se hubieren infringido derechos fundamentales asegurados por la Constitución Federal, constituciones locales o los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano que se encuentren vigentes.

En estos casos, el Tribunal de Apelación ordenará la celebración de un nuevo juicio, enviando el auto de apertura de juicio a un Tribunal de Juicio competente, integrado por jueces distintos a los que intervinieron en el juicio anulado.

Artículo 483. Apelación por vicios de la sentencia.

La sentencia será motivo de nulidad cuando violara, en lo que atañe al fondo de la cuestión debatida, un derecho fundamental o la garantía de legalidad.

353

En estos casos, el Tribunal de Apelación invalidará la sentencia y, de acuerdo con las circunstancias particulares del caso, determinará si pronuncia directamente una resolución de reemplazo, o si ordena la reposición de la audiencia de debate de juicio, en los términos del artículo 482. Si se invocó como agravio defecto en la justificación de la valoración de la prueba, el Tribunal de Apelación no podrá dictar sentencia de reemplazo si ello compromete el principio de inmediación.

Artículo 484. Defectos no esenciales.

No causan nulidad los errores de la sentencia recurrida que no influyeren en su parte dispositiva, sin perjuicio de que el Tribunal de Apelación pueda corregir los que advirtiere durante el conocimiento del recurso.

Artículo 485. Prueba.

Podrá ofrecerse prueba cuando el recurso se fundamente en un defecto del proceso y se discuta la forma en que fue llevado a cabo un acto, en contraposición a lo señalado en los registros del debate o en la sentencia.

Artículo 486. Improcedencia de recursos.

La resolución que fallare un recurso de apelación regulado en esta sección no será susceptible de recurso alguno, sin perjuicio de la revisión de la sentencia condenatoria firme de que se trata en este Código.

Tampoco será susceptible de recurso alguno la sentencia que se dictare en el nuevo juicio que se realizare como consecuencia de la resolución que hubiere acogido el recurso de apelación. No obstante, si la sentencia fuere condenatoria y la que se hubiere anulado hubiese sido absolutoria, procederá el recurso de apelación en favor del acusado, conforme a las reglas generales.

CAPÍTULO IV Revisión.

Artículo 487. Procedencia.

354

La revisión procederá contra la sentencia firme, en todo tiempo, y únicamente a favor del imputado, cuando:

I. La sentencia impugnada se haya fundado en prueba cuya falsedad se haya declarado en fallo posterior firme o resulte evidente aunque no exista un proceso posterior;

II. La sentencia condenatoria haya sido pronunciada a consecuencia de cohecho, violencia o en cualquiera de las hipótesis a que se refieren los códigos sustantivos, en lo relativo a los delitos en contra del adecuado desarrollo de la justicia u otros que impliquen conductas fraudulentas, cuya existencia se haya declarado en fallo posterior firme;

III. Después de la sentencia sobrevengan hechos nuevos o elementos de prueba que solos o unidos a los ya examinados en el proceso, hagan evidente que el hecho no existió, que el condenado no lo cometió o que el hecho cometido no es punible o corresponda aplicar una norma más favorable; o

IV. Corresponda aplicar una ley más benigna, o una amnistía, o se produzca un cambio en la jurisprudencia que favorezca al condenado.

Artículo 488. Legitimación.

Podrán promover este recurso:

I. El condenado;

II. El cónyuge, concubina o concubinario, conviviente legalmente reconocido, parientes consanguíneos o civiles dentro del tercer grado o dentro del segundo, si es de afinidad, y el heredero declarado judicialmente, si el condenado ha fallecido; y

III. El Ministerio Público.

355

Artículo 489. Interposición.

El recurso de revisión se interpondrá por escrito ante el Tribunal que deba resolverlo.

Deberá contener la concreta referencia de los motivos en que se funda y las disposiciones legales aplicables. Junto con el escrito se ofrecerán las pruebas y se acompañarán las documentales.

Artículo 490. Procedimiento.

Para el trámite del recurso de revisión regirán las reglas establecidas para el de apelación, en cuanto sean aplicables.

El Tribunal competente para resolver podrá disponer todas las indagaciones y actos de investigación preparatorios que considere útiles y delegar su ejecución en alguno de sus miembros.

Artículo 491. Anulación.

El Tribunal competente podrá anular la sentencia cuando resulte una absolución.

Artículo 492. Restitución.

Cuando resulte la anulación de la sentencia recurrida, se ordenará la restitución de la cantidad pagada, en concepto de pena pecuniaria y los objetos decomisados o su valor, siempre que sea posible, salvo que la anulación se base en una amnistía o en la aplicación retroactiva de una ley o tesis de jurisprudencia más benignas.

Artículo 493. Disminución de la pena.

En caso de que una ley posterior disminuya la sanción aplicable por un delito, que ha sido impuesta en la sentencia recurrida, el Tribunal dictará una nueva resolución imponiendo las nuevas sanciones al sentenciado.

Artículo 494. Rechazo.

El rechazo de la solicitud de revisión no impedirá la interposición de un nuevo recurso fundado en motivos distintos.

Transitorios

Artículo Primero. Declaratoria

Para los efectos señalados en el párrafo tercero del artículo segundo transitorio del decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se declara que la presente legislación recoge el sistema procesal penal acusatorio y entrará en vigor de acuerdo a los artículos siguientes.

Artículo Segundo. Vigencia federal

Esta ley entrará en vigor gradualmente, para las autoridades federales y sus disposiciones se aplicarán a los hechos delictivos que ocurran en los Circuitos Judiciales indicados a continuación y a partir de las siguientes fechas:

a) Circuitos Judiciales Décimo séptimo (Chihuahua), Décimo tercero (Oaxaca), Décimo quinto (Baja California), Segundo (Estado de México), Décimo octavo (Morelos), Vigésimo tercero (Zacatecas), Décimo Cuarto (Yucatán), Vigésimo quinto (Durango), Décimo sexto (Guanajuato), Cuarto (Nuevo León), Vigésimo (Chiapas), a partir de las cero horas de 18 de junio de 2014.

b) Circuitos judiciales, Octavo (Coahuila), Sexto (Puebla), Décimo primero (Michoacán), Vigésimo noveno (Hidalgo), Décimo noveno (Tamaulipas), Séptimo (Veracruz), Décimo (Tabasco-Veracruz), Vigésimo octavo

357

(Tlaxcala), Vigésimo Séptimo (Quintana Roo), Vigésimo (Chiapas), a partir de las cero horas del 18 de enero de 2015.

c) Circuitos judiciales, Noveno (San Luis Potosí), Trigésimo segundo (Colima), Vigésimo Sexto (Baja California Sur), Trigésimo primero (Campeche), y Primero (Distrito Federal), a partir de las cero horas del 18 de junio de 2015.

d) Circuitos judiciales Trigésimo (Aguascalientes), Tercero (Jalisco), Vigésimo cuarto (Nayarit), Décimo segundo (Sinaloa), Vigésimo segundo (Querétaro), Quinto (Sonora), Vigésimo primero (Guerrero), a partir de las cero horas del 18 de enero de 2016.

Artículo Tercero. Vigencia estatal

Para dar cumplimiento a los criterios que garanticen el proceso de implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en la Federación, los estados y el Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo transitorio segundo del decreto por el que se reforman los artículos 73, fracción XXI, párrafo primero y 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso H), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la entrada en vigencia del presente Código deberá sujetarse a los siguientes supuestos:

a) El Código del Procesal Penal para la República Mexicana entrará en vigor a los 180 días naturales siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación en aquellas Entidades Federativas que a la fecha de la publicación referida cuenten con un código adjetivo penal de corte acusatorio expedido por el Congreso local o la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, vigente en la totalidad de su territorio.

En el caso de que el código adjetivo penal de corte acusatorio expedido por el Congreso local o la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se encuentre vigente de forma parcial por virtud de alguna de las modalidades establecidas para tal efecto, el Código Procesal Penal para la República Mexicana entrará en vigor en las regiones, delitos o demás modalidades en que ya se aplicaba el Código adjetivo penal de corte acusatorio anterior, dentro de los 180 dias naturales siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que respecta a las regiones o delitos en donde no se aplica el código adjetivo penal de corte acusatorio expedido por el Congreso local o la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se estará a lo dispuesto en el siguiente inciso.

En aquellas entidades federativas en que se haya expedido un código adjetivo penal de corte acusatorio por el Congreso local o la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y este no haya entrado en vigor a la fecha de publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, o bien las entidades federativas no cuenten con uno expedido, el Código del Procesal Penal de la República Mexicana entrará en vigor en los plazos, modalidades y términos que al efecto se establezca en la declaratoria a que se refiere el párrafo tercero del artículo Transitorio Segundo del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, teniendo como fecha máxima de inicio de vigencia en la totalidad de su territorio las cero horas del dia diecinueve de junio de 2016.

Artículo Cuarto. Abrogación

El Código Federal de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación, el jueves 30 de agosto de 1934, y los de las respectivas entidades federativas, seguirán rigiendo, en lo conducente, para los hechos ocurridos con

359

anterioridad a la vigencia del presente código y quedarán abrogados cuando los procedimientos iniciados para el conocimiento de dichos hechos, queden agotados.

Artículo Quinto. Derogación tácita de preceptos incompatibles.

Quedan derogadas todas las normas que se opongan al presente decreto.

Artículo Sexto. Delitos permanentes y continuados.

El procedimiento penal relativo a hechos delictuosos de carácter permanente, continuo o continuado que iniciaron bajo la vigencia del Código Federal de Procedimientos Penales de 1934 y de las entidades federativas que continúen desarrollándose después de la entrada en vigor del presente ordenamiento, serán tramitados conforme a lo dispuesto los códigos citados.

Artículo Séptimo. Prohibición de acumulación de procesos.

No procederá la acumulación de procesos sobre hechos delictuosos, cuando alguno de ellos esté sometido al presente Código y otro al abrogado.

Artículo Octavo. De los planes de implementación y del presupuesto.

El Consejo de la Judicatura Federal, el Instituto de la Defensoría Pública Federal, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y toda dependencia de las entidades federativas a la que se confieran responsabilidades directas o indirectas por la entrada en vigor de esta ley, deberán elaborar los planes y programas necesarios para una adecuada y correcta implementación del presente Código, así como establecer dentro de los proyectos de presupuesto respectivos, a partir del que se proyecte este año y en lo sucesivo, las partidas necesarias para atender la ejecución de esos programas, las obras de infraestructura, la contratación de

360

personal, la capacitación, y todos los demás requerimientos que sean necesarios para cumplir los objetivos para la entrada en vigor del presente Código.

Artículo Noveno. Legislación complementaria.

Seis meses después de publicado el presente Decreto, la Federación y las entidades federativas deberán publicar las reformas a sus leyes orgánicas que resulten necesarias para la implementación de este ordenamiento.

A los 30 días del mes de abril del año 2013

ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ ROBERTO GIL ZUARTH

MANUEL CAMACHO SOLIS PABLO ESCUDERO MORALES

ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ OMAR FAYAD MENESES

361

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE EL CÓDIGO PROCESAL PENAL PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO DOLORES PADIERNA LUNA

LAYDA SANSORES SAN ROMÁN

362

DE LA SEN. IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE UNA NUEVA LEY MINERA, QUE ABROGA LA LEY MINERA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 26 DE JUNIO DE 1992.



SEN. IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE UNA NUEVA LEY MINERA QUE ABROGA LA LEY MINERA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 26 DE JUNIO DE 1992.

Senadora **IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA**, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 164, 169 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Cámara de Senadores **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE** LA LEY MINERA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Con objeto de cumplir con los mandatos constitucionales y de los Tratados Internacionales ratificados por el Congreso de la Unión, equiparables en jerarquía con nuestra Carta Magna, lo mismo que armonizar los avances alcanzados con las recientes reformas constitucionales, es jurídica y socialmente necesario actualizar y superar anacronismos remanentes en leyes secundarias como la actual Ley Minera, entre otras.

Es generalizada la percepción social, política y legislativa de que a la par de evidentes anacronismos, existen en la vigente Ley Minera elementos de inconstitucionalidad, carentes de congruencia por el mandato constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Razón suficiente para que sea la vía legislativa acción idónea para superar esas deficiencias, además de dar cumplimiento al deber que el propio primer artículo constitucional establece acerca de que el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley (Artículo 1 Constitucional).

El propósito jurídico de esta Iniciativa es sin lugar a dudas, cumplir con el mandato actualmente vulnerado de ofrecer seguridad jurídica a todos los actores de nuestra sociedad, a los habitantes de las comunidades integradas en los municipios, entidades federativas, regiones y todo el país, así como aquellos organizados para actividades lucrativas.

Mediante la acción legislativa se propone armonizar el marco jurídico de la actividad minera, excluyendo la actividad sobre hidrocarburos y minerales radioactivos, con el marco de garantía plena de los derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales, del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y de otros instrumentos del derecho internacional relacionados con la garantía y ejercicio de los derechos socio-ambientales en los que nuestro país participa en su construcción en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, específicamente la convención del Cambio Climático y el Protocolo de Kioto.

Se busca reforzar la capacidad institucional de regulación, inspección y vigilancia sobre la actividad minera a la vez que hacer efectivo el cumplimiento de los derechos y obligaciones respecto de las garantías de ejercicio de los Derechos de los Pueblos Indígenas (Convenio 169, Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas); adicionalmente, se trata de introducir mandatos preventivos frente al peligroso crecimiento del pasivo ambiental minero, así como de fortalecer compromisos de cooperación ambiental,

entre ellos el fortalecer los instrumentos vinculantes de Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, derivados de actividades económicas como la minera y otros asociados el Acuerdo Paralelo de Cooperación Ambiental del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

El marco jurídico vigente de la minería fue aprobado el 26 de junio de 1992 en el contexto de negociaciones internacionales del tratado de nuestro país con los Estados Unidos y Canadá, y en el imaginario político conceptual de que el retiro del Estado en el ejercicio de sus funciones tradicionales daría paso a una mayor hegemonía del mercado, a una mayor eficiencia económica, y a una auto-regulación de consecuencias positivas para la sociedad.

En ese contexto, la Ley Minera fue parte de un amplio paquete de decenas de reformas legislativas. Se reformó, entre otros ordenamientos, el artículo 27 constitucional y sus leyes reglamentarias, como son la Ley de Aguas Nacionales, la Ley Agraria, la Ley de Inversión Extranjera, la Ley Minera, cuyo fin fue formalmente otorgar las facilidades necesarias para atraer inversiones de capital extranjero que diera paso al "desarrollo" de la economía.

A 20 años de su vigencia y a 18 de la entrada del Tratado de Libre Comercio TLCAN se han develado numerosos hechos y tendencias que ponen en entredicho los conceptos, propósitos y fines que sustentaron las reformas a la Ley Minera de 1992.

Un anacronismo central que contiene el artículo 6 de la legislación minera vigente es haber dejado el concepto de utilidad pública, perteneciente al pasado donde el actor económico dominante era el Estado y combinarlo con el mandato de que la actividad minería *será preferente sobre cualquier uso o aprovechamiento del terreno*…". Actualmente los actores económicos privados trasnacionales son dominantes en la minería (no de hidrocarburos y materiales radioactivos), y es constitucional la primacía del ejercicio de los derechos humanos sobre cualquier otra actividad.

Entre las consecuencias de la letra e interpretación laxa que los funcionarios gubernamentales federales y estatales hacen de los conceptos citados es la peligrosa y carente de control emisión de concesiones mineras que literalmente sobrepasan la superficie nacional que el régimen de la dictadura porfirista "deslindó" de terrenos de comunidades y nacional. Así, la Secretaría de Economía declara la existencia de 27.210 títulos mineros que ocupan casi un 30 % de muestro territorio nacional. Si bien es cierto que las concesiones mineras no implican la parte superficial del terreno, la actual Ley Minera **sí lleva implícita la ocupación de la misma,** tan es así, que si la empresa no logra el despojo "pacífico" con los posesionarios de la tierra a base de promesas, presiones, amenazas y trabajo de cabildeo y convencimiento del cual se encarga la Procuraduría Agraria, y si persiste la resistencia de las comunidades en no ceder sus tierras, los dueños de las concesiones mineras aplican los artículos 7, Frac. VII, 21, 26 frac. II de la actual Ley Minera y 55, 56, 57 y 58, de su reglamento y solicitan a través de la Secretaría de Economía ya sea la expropiación o la ocupación temporal y constitución de servidumbres hasta por 50 años renovables por otro término igual, con lo cual se despoja y deja a los dueños o posesionarios de **las tierras en completo estado de indefensión en violación a los más elementales derechos humanos y constitucionales.**

La discordancia constitucional de la Ley Minera para con otras leyes, genera conflictos jurídicos que entorpecen la instalación de estas empresas por la vía legal, situación que las ha obligado a crear extensas redes de corrupción dentro de los tres niveles y poderes de gobierno, tampoco escapan las militares, religiosas y académicas, por lo cual el conflicto causado por la actividad minera se ha convertido en un asunto de gobernabilidad y seguridad nacional.

El despojo de la tierra en forma arbitraria va implícito en la Ley Minera, en su artículo 6º estatuye que la exploración y explotación de los minerales es de utilidad pública y es preferente sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno. Esto ha ocasionado que tan solo la inversión minera se transforme en un poder en casi una tercera parte de nuestro territorio y que el campo mexicano sea un escenario de ruina y desastre provocando la expulsión obligada de cientos de miles de campesinos a emigrar al extranjero, o

buscar otras formas de sobrevivencia, el impacto en la producción agrícola, el abandono de la familia, la pérdida del patrimonio, de identidad y costumbres, y es obvio que han coadyuvado en el clima de delincuencia e inseguridad que enfrenta nuestro país. Es así, que el creciente conflicto a nivel nacional causado por la actual actividad minera, insistimos, es indiscutiblemente un asunto de gobernabilidad y de seguridad nacional.

La vigente Ley Minera es contraria al texto del artículo 27 constitucional que pretende reglamentar y carece de toda justificación social, moral y ética.

El artículo 27 de la Constitución, en su segundo párrafo ordena que las expropiaciones solo podrán hacerse por causas de **utilidad pública** y mediante indemnización. Y en párrafos siguientes precisa que la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el **interés público,** así como de regular**, en beneficio social,** el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población; asimismo, que corresponde a la nación el dominio directo de los recursos naturales.

De ahí que de una interpretación integral y sistemática del contenido de **todo** este artículo podemos deducir la inconstitucionalidad de la Ley Minera, y muy en especial de su artículo 6º, pues es obvio que las actividades como la minería en manos de unas cuantas empresas privadas de mayoría transnacionales, dedicadas al saqueo de nuestros recursos no renovables hacia otros países, en ejercicio de prácticas especulativas y un diáfano interés particular no implican **interés público,** y mucho menos **utilidad pública,** cuando estas empresas para llevar a cabo sus proyectos tienen que despojar a las comunidades de sus tierras, en muchos casos con la desaparición de los poblados y sus servicios públicos; tampoco puede ser del interés y/o utilidad pública los actos de represión que con sus grupos de paramilitares llevan a cabo estas empresas mineras golpeando y asesinando a los que se inconforman con sus actividades y que para actuar al margen de la ley y gozar de impunidad tiene que crear grandes redes de corrupción dentro de los tres niveles y poderes de gobierno.

En este contexto de amplias facilidades a la inversión y las empresas mineras, y de un Estado omiso, es evidente que se ha producido un crecimiento de variables macroeconómicas que inunda el discurso de los promotores de la vieja política, pero veamos los resultados concretos y podremos evidenciar impactos diversos de magnitud alarmante para la viabilidad de amplios territorios, pueblos y ecosistemas de nuestro país.

La actividad extractiva, tanto en su dimensión de valor como de volumen se ha incrementado notablemente, pero hoy queda claro que el aumento de variables estadísticas no necesariamente es reflejo ni de desarrollo nacional, ni de mejora de las condiciones de vida de la población, y si puede entrañar costos graves para la población, el Estado y la Nación.

El análisis detallado y crítico de los datos oficiales muestran por un lado que, la extracción de minerales creció de más de 20 millones de toneladas y 132 millones de pesos (constantes de 1982) en el periodo 1993-2002 a más de 32 millones de toneladas. Y 243 millones de pesos en el siguiente periodo de 2013-2012. Las exportaciones para iguales periodos se multiplicaron por seis en su valor promedio anual 1,282 millones de dólares a 7,950 millones de dólares. Algo menor sucedió con la inversión privada que duplicó su valor, pasando del promedio anual de 619 millones de dólares (constantes de 1993) a 1,326 millones de dólares. En tanto que inversión extranjera directa se septuplicó al pasar del promedio anual de 103 millones de dólares a 742 millones (constantes de 1993). En resumen, la riqueza generada en la explotación de minerales, medida por el Valor Agregado Bruto (de lo extraído) se ha triplicado, pasando de un acumulado de 22,303 millones de dólares en el periodo 1993-2002 a los 64,814 millones de dólares en el periodo 2003-2011.

El discurso empresarial y oficial dejó de brillar como el oro. Pero el panorama y el análisis que las organizaciones ciudadanas preocupadas por el modelo extractivo han realizado de manera más integral

demuestra una tendencia que día a día se aleja a los propósitos que la Constitución, y en particular el Artículo 27 Constitucional, fijan para justificar la explotación de los recursos de la Nación.

La evidencia científica, surgida del análisis de los datos oficiales del INEGI muestra que el reparto de la riqueza generada en la extracción cada vez se vuelve más injusto e insostenible en términos jurídicos, económicos, sociales y éticos.

Así, en los últimos 20 años, bajo el marco de la Ley Minera, del TLCAN y la violación reiterada a la Ley Laboral el reparto del pastel minero cada día queda bajo el más absurdo control de las empresas mineras y sus funcionarios en el gobierno. La participación porcentual de la Masa Salarial ("remuneraciones" de los trabajadores según los términos de INEGI) se ha reducido y el Excedente de Explotación (de "operación" INEGI dixit) se ha aumentado, mientras los impuestos indirectos a la producción son prácticamente insignificantes.

De una tajada del 24.6% que constituían los salarios del pastel construido por los trabajadores en el periodo de 1993 a 2002, se redujo a un mísero 13.4%, una caída de 45%; en tanto que la tajada empresarial creció, para iguales periodos de 74.9% a 86%, una de las medidas de desigualdad más brutales del mundo laboral y minero. Para tener una situación de referencia comparativa, en Chile, Perú y Colombia el reparto a la masa salarial minera es cercano al 28%.

Se trata de una tendencia que atenta no únicamente con los propósitos de los artículos 27 y 123 constitucionales, sino del artículo 1 sobre la primacía de los derechos humanos, de la simple y llana justicia.

En términos numéricos constantes y para ilustrar el porqué tenemos multimillonarios mineros en las revistas mundiales, y mineros y comunidades en pie de lucha, el acumulado millonario del excedente de explotación pasó de 613 mil millones (de pesos de 1982) entre 1993-2002 a 1,592,795 millones (pesos de 1982) en el periodo 2003-2011. En tanto que la masa salarial "creció" de 197 mil millones a 209 mil millones (también pesos de 1982).

La situación no únicamente se refleja en los anteriores macro-indicadores registrados por el INEGI, sino en el salario diario de los trabajadores mineros. El salario Mínimo General y de las tres zonas del país perdieron 10 puntos porcentuales de poder de compra a partir de 1993, siendo mayor la pérdida en el primer tramo de 1993-2002. Lo mismo sufrieron los salarios profesionales (reconocidos como los operadores de buldozer, de draga y de traxcabo) de la minería.

El empleo en la extracción minera, la otra dimensión social que frecuentemente ha quedado sepultada por falso discurso empresarial y de sus funcionarios en puestos de gobierno es un indicador más de un modelo extractivo donde los grandes capitales, usan gran tecnología y poca mano de obra. Así que analíticamente no es sorpresa que haya sido insignificante la cantidad de empleo directo creado por la extracción minera.

Desde la reforma a la Ley Minera hasta 2011 (último dato disponible en INEGI), se han creado 8 mil 393 puestos de trabajo. Lo que entraña una tasa media de crecimiento anual de 0.14 %. Así, de los 100,409 empleos directos existentes en 1993, se registró una caída del empleo de 9,045 puestos alcanzando su punto más bajo en 2002 con 90,764 puestos, es decir, una pérdida neta de 9,045 empleos en ese periodo. Y en el periodo de 2003 a 2011 se crearon apenas 8,393 empleos directos.

No obstante, las estadísticas oficiales no registran claramente el fenómeno generalizado de "terciarizar" (pasarle las responsabilidades a un tercero) las responsabilidades legales laborales, de salud, riesgo, conflicto y riesgo. Ha crecido el llamado "outsourcing" que las grandes empresas trasnacionales (mexicanas o extranjeras) usan para disminuir costos y pagos fiscales y fomentan la proliferación de "contratistas" y de irresponsabilidades.

Es así, que la actividad minera no regula el beneficio social de los elementos naturales no renovables que son del dominio directo de la nación y claves en el desarrollo del país, ni comparte una distribución social equitativa de sus beneficios. ¿Cómo podría conservar nuestra riqueza pública una actividad que utiliza sistemas altamente agresivos con impactos irreversibles al medio ambiente y, por consecuencia, a la salud de los seres vivos? Y menos cuando los beneficios reales son canalizados hacia otros países.

Es así, que la actividad minera no regula el beneficio social de los elementos naturales no renovables que son del dominio directo de la nación y claves en el desarrollo del país, ni comparte una distribución social equitativa de sus beneficios. ¿Cómo podría conservar nuestra riqueza pública una actividad que utiliza sistemas altamente agresivos con impactos irreversibles al medio ambiente y por consecuencia a la salud de los seres vivos? Y menos cuando los beneficios reales son canalizados hacia otros países.

Los sistemas de explotación minera actual tampoco generan actividad trasformativa en nuestro país, o sea, manufactura de los productos minerales, por lo que no hay crecimiento económico ni creación de empleos y los pocos que genera se manejan por el sistema de outsourcing, (subempleo). Una actividad como la minera que por su naturaleza es temporal, que cuando agota los recursos explotables desaparece y lo único que deja es desempleo, tierras y aguas contaminadas e improductivas, **no es una actividad progresiva.** Podría entenderse la utilidad pública en la actividad minera, cuando esta industria en sus fases extractivas y transformativas quedarán bajo el dominio pleno y directo de la nación con claros impactos de beneficio social. Como claro ejemplo, la nacionalización del petróleo impulsada en el gobierno del Presidente Lázaro Cárdenas fue sin duda un acto de **utilidad pública.**

La actual Ley Minera no ofrece algún beneficio social a nivel comunal o nacional, en la práctica la minería nos está dejando un país indigno de vivir. Por un lado, el saqueo indiscriminado de nuestros recursos minerales; por el otro, los irreparables daños que en todos sentidos provoca esta actividad como son los ambientales y sociales, con la complacencia de las diversas autoridades. De esto se aprovechan las empresas para aplicar lo que se conoce como Responsabilidad Social Empresarial que consiste en hacer algunas obras como pintar el templo, arreglar algún camino que más bien le beneficia a la empresa, regalar una computadora a la escuela del lugar, una despensa a los obreros, etcétera. Estas acciones son parte de la estrategia de las empresas para legitimarse socialmente, dividir a los habitantes de la comunidad apoyando económicamente a una parte y excluyendo a otra; por otro lado, les otorgan poder y dominio sobre las autoridades municipales al desplazar a estas en sus responsabilidades en cuanto a obra pública hacia las empresas y asegurar las licencias y permisos municipales sin los cuales no puede funcionar este tipo de proyectos.

El aprovechamiento de los recursos naturales no renovables como es el caso de la actividad minera, requiere concepciones de visión de largo plazo y de responsabilidad generacional. Requiere que el Estado cumpla con su obligación jurídico-política y que la comunidad acreciente su papel de actor con derechos y obligaciones. La importancia de la actividad minera es un hecho, pero no podemos soslayar su negativa trascendencia, en la vida económica, social y política de nuestro país delimitada por diversos factores que la condicionan y determinan provocando su necesaria revisión integral que surge por necesidad de los resultados de la vigencia de la actual Ley Minera.

La propuesta en el rubro de responsabilidad social de esta iniciativa incluye el planteamiento de que las empresas asuman compromisos económicos, sociales y ambientales no con carácter filantrópico o caritativo sino de obligatoriedad jurídica como sería la libertad de asociación sindical y sus respectivos contratos colectivos de trabajo con empleos estables y prestaciones sociales.

Por lo tanto, es necesario considerar e incluir en esta iniciativa, propuestas relacionadas con la estabilidad y el futuro laboral de los obreros mineros, sus familias, y habitantes en general de las comunidades afectadas**. Que la Ley Minera incluya la figura de la licencia social de las comunidades para el desarrollo de esta actividad, que la Secretaría de Economía no otorgue las concesiones mineras hasta que los afectados mediante la consulta ciudadana sin presiones, previa información cierta y oportuna den su**

consentimiento, deben contar con un estudio de factibilidad social, jurídica, económica y ambiental, así como del comportamiento y capacidad de las fuentes de agua, priorizando el abasto familiar y de actividades agrícolas y ganaderas, cuidando un desarrollo equilibrado, armónico con la economía y la sustentabilidad ambiental.

El país tiene una historia oficialmente enterrada de impactos socio-ambientales de la actividad extractiva, una historia que, sin embargo, está presente silenciosamente en todos aquellos sitios mineros que acumularon jales sin estabilización y que día a día tienen impacto en suelos, agua, aire y sobre todo la salud pública de las comunidades.

Pero aún más, **como le han demostrado las organizaciones de comunidades afectadas por la minería, como REMA y FAO, la magnitud e impacto socio-ambiental de la actividad extractiva de los últimos diez años posee una velocidad y capacidad de daño como nunca en la historia del país habíamos registrado.**

Actualmente, y después de muchos esfuerzos ciudadanos, tenemos acceso a los datos que las empresas, incluyendo las mineras, deben obligatoriamente informar periódicamente al Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC). Un mecanismo público que tiene un creciente registro, iniciado en el 2004, aunque todavía incompleto pues únicamente un estimado de 50 % de las mineras (medianas y grandes) informan de las emisiones y transferencia de substancias contaminantes que emiten o depositan en suelo, agua, aire o sitios específicos.

Un análisis detallado de la información oficial revela que pese a ser incompleto el registro, en el periodo reciente de 2004 a 2010 (último año disponible al público) la cantidad de substancias tóxicas emitidas (muchas de ellas los propios metales pesados usados de alta bio-acumulación, toxicidad y permanencia) alcanzó las 472 mil toneladas. Níquel y plomo son dominantes, pero arsénico, cianuro, mercurio, cadmio o cromo son contaminantes comunes arrojados por las mineras en el país, lo mismo que otras substancias cancerígenas como los bifenilos policlorados o los asbestos.

Está pendiente el mejoramiento del registro de tóxicos contaminantes por las mineras, pero es materia de seguridad nacional adoptar medidas verdaderamente eficaces para detener esta tendencia creciente de mayor contaminación. La reforma o creación de una nueva ley minera puede de manera directa o indirecta influir en la construcción de esa política pública.

Para ilustrar la gravedad del impacto señalaremos el cálculo inicial que REMA ha hecho del costo que significaría remediar las miles de toneladas ya emitidas al ambiente. Si a cada tonelada de substancia contaminante se le multiplica por el costo estándar (conservador) en dólares que entraña limpiar o controlar, la cantidad resultante es mayor en 10% al valor acumulado para el mismo periodo (2004-2010) de la producción minera total o el total del valor de las exportaciones del periodo.

Así, el costo de mitigar las emisiones contaminantes mineras, del periodo 2004-2010, se calcula en 55,910 millones de dólares, mientras que el valor de la producción minera fue de 50,929 millones de dólares.

¿Quiénes pagan la irresponsabilidad de los contaminadores? ¿Quiénes pagan la inacción o complicidad de los funcionarios e instituciones que tienen mandato para actuar? ¿Qué valor pueden tener los certificados de Responsabilidad Social Empresarial o de Industria Limpia que se entregan a sí mismos los organismos empresariales o sus funcionarios que ocupan cargos en las instituciones gubernamentales.

Tomar medidas urgentes al respecto implica, por ejemplo, establecer la obligatoriedad de las empresas de adquirir una fianza de riesgo por la actividad contaminante, y por cierre y rehabilitación de sitio.

No hacer nada para detener y modificar el daño ambiental es actuar en connivencia con aquellos que de manera criminal trasladan los costos a la sociedad y privatizan las ganancias.

La otra cara inmediata que las comunidades aledañas a las empresas mineras sufren es el impacto ambiental de las emisiones y la contaminación del agua.

El impacto que sufren las fuentes de agua superficiales o subterráneas a causa de los sistemas minero metalúrgicos es realmente criminal, no solo por las grandes cantidades de agua que utilizan sino también por el uso que le dan, como ejemplo: En Mazapil, Zacatecas, para el proceso de lixiviación la empresa minera utiliza 94 millones de litros diarios para mezclarla con cianuro de sodio, esta agua contaminada por infiltración hacia el subsuelo, por escurrimiento superficial y por la evaporación que sufre en el proceso lixiviante, contamina todo el ciclo hidrológico; el caso de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, la empresa New Gold-Minera San Xavier utiliza 32 millones de agua al día para el mismo proceso, en los dos casos son zonas desérticas con acuíferos sobreexplotados, el agua que consume Minera San Xavier sería suficiente para dotar de agua a 300,000 gentes con 100 litros diarios, cuando en la ciudad de San Luis carecen cientos de miles de personas sin este vital líquido. No es posible que por el desarrollo de un proyecto minero con una capacidad de actividad-tiempo limitado, que lo único que produce es saqueo, contaminación, desestabilidad social, se sacrifique el consumo humano y se cancelen de por vida actividades perenes, sustentables y de incuestionable **utilidad pública** como son las agrícolas y ganaderas.

La laxitud de las normas de importación de venenos contaminantes, la discrecionalidad, permisividad e incluso complicidad de funcionarios nos ha llevado a ocupar el deshonroso primer lugar en las listas mundiales de países importadores (y rexportadores) de substancias tóxicas y peligrosas como el Cianuro de Sodio.

En el periodo 2003-2012 se ha importado un volumen de 517 millones de toneladas de tóxicos altamente peligrosos (312 millones de ton de Cianuro de Sodio y 204 millones de ton de Xantatos).

Esta cantidad de importaciones de Cianuro de Sodio para procesos de lixiviado (disolución) y extracción de metales del mineral molido ha colocado a México en el primer lugar de la lista negra mundial de importadores del veneno.

El promedio anual importado en los años recientes ha sido de 51 mil toneladas (31 de cianuro y 20 de xantatos) tiene una capacidad de contaminación de agua imposible de recuperar.

Tan sólo las toneladas de cianuro de sodio importadas entre 2003 y 2012 tienen, el potencial de contaminar 626 millones de metros cúbicos de agua. Cantidad equivalente al 20% de la disponibilidad de aguas del Valle de México, o el 8% de la disponibilidad de aguas de la región hidrológica del Noroeste del país. Reiteramos que es el daño potencial.

Sin embargo, cada día la Red de Afectados por la Minería (REMA) acumula evidencias del tamaño del daño ambiental y social que las empresas mineras, sobre todo metálicas producen en el país. Una ilustración es la cantidad de cianuro empleado y la cantidad de agua contaminada por las principales 16 empresas mineras de oro que en 2011 extrajeron 72 toneladas de oro equivalente al 85% del total de oro extraído.

Proporcional a las 72 toneladas de oro extraído, se usaron un mínimo de 32 mil toneladas de cianuro de sodio y contaminaron un mínimo de 10 millones de metros cúbicos de agua. Se llevaron un aproximado de 4 mil millones de dólares por la venta de las 72 toneladas, y nos dejaran una deuda ecológica mayor al valor de su ganancia.

Los estudios que por años ha estado llevando a cabo Fomento Minero, manifiestan que más del 70 % de nuestro país está mineralizado, por lo tanto se antoja aberrante que las empresas mineras se empeñen en desarrollar sus actividades precisamente en zonas habitadas y agrícolas cuando sobran espacios más adecuados, pero además, según su dicho, tienen que "tumbar" una tonelada de material para sacar casi medio gramo de oro, una condición para la extracción de recursos minerales, podría ser otorgar concesiones mineras

solo en lugares donde los impactos característicos de esta actividad no afecten poblaciones, tierras de cultivo y utilizando **sistemas de respeto al agua con la eliminación del uso de sustancias químicas nocivas al medio ambiente.**

Es importante actuar con objetividad, entender que nuestra propuesta de socializar la Ley minera implica el desafío de recuperar los mandatos constitucionales por encima de intereses privados que han acumulado demasiado poder, pero atentan contra la propia norma de justicia constitucional, lo mismo que con la racionalidad implícita con el funcionamiento real del Estado.

Otro de los grandes obstáculos son las grandes redes de corrupción oficializada, las dependencias involucradas en otorgar autorizaciones, licencias o permisos para las diferentes actividades que requiere esta industria interactúan en forma coordinada para facilitar la actividad seudo-legal de los proyectos. El caso de New Gold-Minera San Xavier en el poblado de Cerro de San Pedro en San Luis Potosí es el caso más relevante y evidente que deja al descubierto estas grandes redes de corrupción oficializada, por regla general las dependencias otorgan los permisos en forma irresponsable como premeditada.

La **autonomía que la vigente Ley Minera que le concede a la Secretaría de Economía, la faculta para disponer a discreción del territorio nacional sin limitaciones legales y/o constitucionales, otorga concesiones mineras sin perjuicio de que la superficie del terreno concesionado goce de alguna protección que pudiera ser ecológica, de preservación, zona de monumentos etc. Es obvio que aunque supuestamente la concesión** no implica la parte superficial, la empresa tiene la necesidad de utilizarla, y en la mayoría de los casos hay oposición de los afectados y/o posesionarios, generando por lo tanto controversia jurídica legal. La Secretaría de Economía se justifica afirmando que de ninguna manera concesionó la superficie del terreno, pero, como ya anotamos en párrafos anteriores, la actual legislación de hecho la faculta para cederle a las empresas también la superficie. Por lo anterior es necesario que en la nueva Ley Minera se elimine esa facultad.

Del mismo, establecer en el proyecto de ley la condición de que los pueblos indígenas sean consultados antes de autorizar o emprender cualquier programa de prospección, exploración o explotación de recursos mineros existentes en sus tierras, en cumplimiento **del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como también incluir la licencia social de las comunidades no consideradas indígenas.**

No es recomendable la creación de las llamadas procuradurías, las cuales con el disfraz de entidades autónomas, no vinculantes, como es la Procuraduría Agraria que en vez de defender el carácter social de la tierra en manos de los campesinos, despliega la actividad de sus funcionarios a convencer a los ejidatarios o comuneros a que vendan o renten sus tierras a las empresas mineras. Así su misión ha consistido en realidad en facilitar el despojo "legal" de las tierras, dado que la Ley Minera en su Reglamento, Artículo 56 estatuye en el caso de ocupaciones temporales o constituciones de servidumbre sobre tierras ejidales o comunales, se estará a lo dispuesto por la Ley Agraria. Resulta que en la Ley Agraria no existen estas figuras de despojo. Es así que las empresas mineras en contubernio con la Secretaría de Economía obtienen ocupaciones y servidumbres, amparándose en los artículos 9, 21, y 26 de la Ley Minera pero violando su reglamento.

Es por ello que el diseño de una nueva legislación minera, resulta imprescindible la objetividad, considerar el grado de corrupción oficializado que padece nuestro país y que de ninguna manera se va a resolver con promesas electorales ni por decreto, es un problema que va para largo y al cual se le debe cerrar el paso en lo posible, debemos reflexionar en las grandes redes de corrupción que han tejido las empresas mineras y que son del dominio público, tienen cooptados los tres niveles y poderes gubernamentales incluyendo instancias académicas, militares, religiosas, partidos políticos y más. Por lo tanto no hay las condiciones para que comités formados por académicos mediante su entender y saber avalen o desechen los proyectos mineros, esta es una estrategia de las empresas mineras, algo que ya se hace desde hace muchos años, las empresas mineras como en el caso de Minera San Xavier en San Luis Potosí, utilizaron a la Universidad Autónoma para que diera el aval técnico a su proyecto cuya intención principal radicaba en ganarse la confianza de la sociedad que ve en las universidades autónomas supuestas entidades honestas al servicio de la sociedad,

cuando es sabido que reciben regalías de parte de las empresas mineras, los resultados de este criminal proyecto están a la vista.

Lo mismo sucede con los comités ciudadanos formados para vigilar que las empresas mineras den cabal cumplimiento a las condicionantes que las diversas autoridades les imponen para poder operar; caso similar el de colegios oficialistas de académicos, vulnerables a actos de corrupción, seleccionados ex profeso por autoridades y empresarios interesados en la instalación de proyectos dañinos. Por lo que, además de no ser entes jurídicamente vinculantes, estos mecanismos no pasan de ser trampas engañosas para confundir y dividir la opinión pública.

Es el supuesto también de la mal llamada responsabilidad social corporativa, teoría que apareció hace cerca de cien años y que deposita su aplicación en manos de la delincuencia empresarial organizada como en este caso son las empresas mineras, las cuales la utilizan para darle rostro humano a lo inhumano, estas empresas ni siquiera se responsabilizan por los obreros que llevan a cabo la explotación y beneficio de los minerales, subcontratan el personal a través de otras empresas (outsourcing), y como todos sabemos por este sistema los obreros carecen de seguridad laboral. La responsabilidad social consiste en el hecho de pagarle los gastos funerarios a los obreros que mueren por causas inherentes a su actividad, o dar servicio médico de pésima calidad a los que contraen enfermedades incurables por las mismas causas, pero como la actividad minera es pasajera, por periodos cortos de tiempo, las empresas acaban con el yacimiento mineralizado y se van, luego, ¿quién se hace responsable de las montañas de desechos contaminados , agua y tierra contaminada y comunidades desamparadas con enfermedades incurables?.

Por esto se incluye en la nueva legislación la aplicación de la "**Moratoria"** para los casos en los que las mineras ya estén operando o deciden operar cuando enfrentan juicios relacionados con su actividad y se encuentran Subjudice, Juicios que posteriormente pierden las empresas, pero los daños ocasionados por éstas, son ya irremediables. Un caso muy trascendente en este orden, es el caso de la ahora Minera New Gold en Cerro de San Pedro S.L.P., en tres ocasiones el mismo Tribunal ha dictado sentencia definitiva de nulidad del proyecto. No obstante, la empresa sigue operando. De allí, que antes de mover una piedra, se exigencia de inicio de operaciones que la empresa cuente con todas y cada una de las licencias, permisos, autorizaciones y sus similares que el desarrollo de estos proyectos requiere de acuerdo con las diversas normatividades jurídicas y sociales aplicables.

Lo más adecuado para atender el daño y el descontento social, es la aplicación de medidas preventivas, legislar como lo han hecho otros países, el caso más reciente, Costa Rica. Se debe incluir en esta legislación la prohibición de sustancias químicas como son los xantatos y el cianuro entre otros en los procesos minero metalúrgicos, medidas que obliguen a las empresas a la aplicación de sistemas minero metalúrgicos más responsables y respetuosos con el medio ambiente, que reconozcan al ser humano no como objeto, sino como lo que es, un sujeto con derecho al respeto a una vida digna implícita en las garantías individuales y colectivas constitucionales y tratados internacionales firmados por nuestro país.

Estas medidas son de suma importancia, el máximo problema de los actuales sistemas de explotación y beneficio de minerales es la utilización de miles de toneladas de sustancias químicas y el depósito de millones de toneladas de material corrosivo y contaminante en los patios de lixiviación, presas de jales o confinado en las obras de la actual minería subterránea, o la cancelación de los drenajes naturales de abastecimiento de los acuíferos y otros depósitos de agua superficiales o subterráneos cuyo control esta fuera de los alcances técnicos y que las empresas no incluyen en sus planes económicos de cierre de la mina y abandono del sitio, históricamente no se conoce de alguna empresa que restituya o siquiera cumpla con los superficiales compromisos que adquirió en la autorización ambiental para la remediación del sitio. Le sobran a las empresas estrategias para eludir esos compromisos, además de que es imposible remediar lo irreversible.

Las empresas mineras en algunas de sus Manifestaciones de Impacto Ambiental son claras al declarar que los impactos al agua y la tierra son irreversibles y permanentes pero que buscarán formas de mitigación, y

mitigar no implica subsanar, es imposible reconstruir una montaña que fue eliminada de la faz de la tierra, o reponer los drenajes naturales subterráneos que alimentan los acuíferos y que son destruidos, desviados o bloqueados por la construcción del tajo o galerías subterráneas, así como es imposible estabilizar la nocividad de las montañas de sulfuros y sus drenajes ácidos, y lo peor, restablecer la salud de las poblaciones con enfermedades incurables causadas por los efectos de este tipo de proyectos. Todos estos impactos van a repercutir indudablemente en las futuras generaciones.

En este orden de ideas, y dada la presencia de cientos de proyectos mineros asentados en nuestro país en vías de explotación que de llevarse a cabo pondrían a nuestro país en real peligro de un colapso ambiental y al borde de la ruina, la forma más efectiva y sencilla de evitarlo es la prohibición de los sistemas hidro-metalúrgicos a base de sustancias químicas, o sea, legislar para que se respete la calidad potable del agua con sustento en las normatividades constitucionales y tratados internacionales considerados en el artículo 1º y 4º constitucional, en este rubro no se puede negar la **utilidad pública del elemento agua.**

Otro aspecto importante es el aspecto administrativo de las concesiones mineras por parte de la Secretaría de Economía, gran cantidad de empresas de mayoría extranjeras están operando en nuestro país, sin embargo, no aparecen concesiones registradas a su nombre, esto en su momento puede ser una estrategia de las empresas para eludir en su momento responsabilidades y constituye una irresponsabilidad de la Secretaría de Economía cuya principal actividad es promocionar en otros países la entrega incondicional de nuestros recursos minerales, ni siquiera certifica la veracidad de los informes que entregan los concesionarios mineros en cuanto al inventario de reservas probadas en el proceso de exploración, explotación, beneficio de los valores metálicos y de las cantidades que salen del país, sobre todo oro y plata. En sí, la actividad minera goza de una total autonomía y discrecionalidad administrativa y fiscal.

Normalmente en sus estudios resultados de la exploración, las empresas manifiestan cantidades bajísimas en cuanto a recursos y reservas sobre todo en lo que se refiere a oro y plata, muy por debajo de 1 gramo de oro por tonelada de material, lo cual es difícil de creer. Una forma de evitar esto es no otorgarle a las empresas las autorizaciones necesarias para la explotación cuando los resultados de su exploración manifiesten cantidades menores de tres gramos de oro por tonelada, esto por no ser compatible con el costo ambiental.

En esta propuesta de Ley se atiende también a una regulación adecuada de la minería no metálica en especial la dedicada a la elaboración de materiales para construcción, en nuestro país hay miles de canteras dedicadas a esta actividad desde grandes cementeras y caleras hasta pequeñas explotaciones de materiales pétreos como grava y arena. La ley minera actual y su reglamento no hacen consideraciones serias sobre este tipo de minería, que se maneja a tajo a cielo abierto y que como en el caso de las cementeras y caleras, generan graves daños ambientales por la gran polución de polvos que generan, este tipo de industrias se instalan incluso dentro de la mancha urbana por lo cual se debe reglamentar esta actividad de manera sustentable.

En vista de las anteriores consideraciones, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide una Nueva Ley Minera que abroga la Ley Minera publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 1992.

ARTÍCULO PRIMERO. Se expide la Ley Minera, para quedar como sigue:

LEY MINERA

CAPITULO PRIMERO
Disposiciones Generales

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia minera y sus disposiciones son de orden público, interés social y de observancia obligatoria en todo el territorio nacional. Su aplicación corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Economía.

Artículo 2. Se sujetarán a las disposiciones de esta Ley y de los demás ordenamientos aplicables, la exploración, explotación, y beneficio de los minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, así como de las salinas formadas directamente por las aguas marinas provenientes de mares actuales, superficial o subterráneamente, de modo natural o artificial y de las sales y subproductos de éstas.

Las facultades que no están expresamente concedidas por esta ley, se entienden reservadas a las entidades federativas y los municipios.

Artículo 3.- Para los efectos de la presente Ley se entiende por:

I. Exploración: Las obras y trabajos realizados en el subsuelo con el objeto de identificar depósitos de minerales o sustancias, al igual que de cuantificar y evaluar las reservas económicamente aprovechables que contengan;

II. Explotación: Las obras y trabajos destinados a la preparación y desarrollo del área que comprende el depósito mineral, así como los encaminados a desprender y extraer los productos minerales o sustancias existentes en el mismo;

III. Exploración, explotación y beneficio: Los trabajos para preparación, tratamiento, fundición de primera mano y refinación de productos minerales, en cualquiera de sus fases, con el propósito de recuperar u obtener minerales o sustancias, al igual que de elevar la concentración y pureza de sus contenidos;

IV.- Asignación minera: Título que otorga el ejecutivo federal a través de la Secretaría de Economía para actividades de exploración, explotación y beneficio de los minerales descritos en esta Ley, en un lote minero de profundidad indefinida limitado por planos verticales cuya cara superior es la superficie del terreno sobre el cual se determina el perímetro del dicho lote sin que la superficie forme parte de la concesión;

V. Concesión minera: Título que otorga el ejecutivo federal a través de la Secretaría de Economía para actividades de exploración, explotación y beneficio de los minerales descritos en esta Ley, en un lote minero de profundidad indefinida limitado por planos verticales cuya cara superior es la superficie del terreno sobre el cual se determina el perímetro del dicho lote sin que la superficie forme parte de la concesión;

VI. Ley: La Ley Minera;

VII. Utilidad Pública: la definida en el artículo 3º de la iniciativa nuestra;

VIII. Desarrollo Sustentable: Proceso evaluable mediante criterios de carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras;

IX. Recursos naturales: Los elementos naturales susceptibles de ser aprovechados en beneficio del ser humano;

X. Contaminante: Toda materia o energía en cualquiera de sus estados físicos y formas, que al incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier elemento natural, altere o modifique su composición y condición natural;

XI. Equilibrio ecológico: La relación de interdependencia entre los elementos que conforman el medio ambiente que hace posible la existencia, transformación y desarrollo del ser humano y demás seres vivos;

XII. Restauración: Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales;

XIII. Residuos Peligrosos: Todos aquellos residuos en cualquier estado físico que por sus características, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas representen un peligro para el equilibrio ecológico del ambiente;

XIV. Registro: El Registro Público de Minería;

XV. Secretaría: La Secretaría de Economía;

XVI. Consejo: El Consejo de Recursos Minerales

XVII. Zona de Protección o amortiguamiento: La aja de terreno inmediata a las obras y espacios propios de la actividad minera.

Artículo 4. Son minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos constituyen depósitos distintos de los componentes de los terrenos los siguientes:

I. Minerales o sustancias de los que se extraigan antimonio, arsénico, bario, berilio, bismuto, boro, bromo, cadmio, cesio, cobalto, cobre, cromo, escandio, estaño, estroncio, flúor, fósforo, galio, germanio, hafnio, hierro, indio, iridio, itrio, lantánidos, litio, magnesio, manganeso, mercurio, molibdeno, niobio, níquel, oro, osmio, paladio, plata, platino, plomo, potasio, renio, rodio, rubidio, rutenio, selenio, sodio, talio, tantalio, telurio, titanio, tungsteno, vanadio, zinc, zirconio y yodo;

II. Minerales o grupos de minerales de uso industrial siguientes: actinolita, alumbre, alunita, amosita, andalucita, anhidrita, antofilita, azufre, barita, bauxita, biotita, bloedita, boemita, boratos, brucita, carnalita, celestita, cianita, cordierita, corindón, crisotilo, crocidolita, cromita, cuarzo, dolomita, epsomita, estaurolita, flogopita, fosfatos, fluorita, glaserita, glauberita, grafito, granates, halita, hidromagnesita, kainita, kieserita, langbeinita, magnesita, micas, mirabilita, mulita, muscovita, nitratina, olivinos, palygorskita, pirofilita, polihalita, sepiolita, silimanita, silvita, talco, taquidrita, tenardita, tremolita, trona, vermiculita, witherita, wollastonita, yeso, zeolitas y zircón;

III. Diatomita;

IV. Piedras preciosas: agua marina, alejandrina, amatista, amazonita, aventurina, berilo, crisoberilo, crocidolita, diamante, dioptasa, epidota, escapolita, esmeralda, espinel, espodumena, jadeita, kuncita, lapislázuli, malaquita, morganita, olivino, ópalo, riebeckita, rubí, sodalita, tanzanita, topacio, turmalina, turquesa, vesubianita y zafiro;

V. Sal gema;

VI. Los productos derivados de la descomposición de las rocas cuando su explotación necesite trabajos subterráneos, como las arcillas en todas su variedades, tales como el caolín y las montmorillonitas, al igual que las arenas de cuarzo, feldespatos y plagioclasas;

VII. Las materias minerales u orgánicas siguientes, susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes: apatita, colófano, fosfosiderita, francolita, variscita, wavelita y guano;

VIII. El carbón mineral en todas sus variedades;

IX. Los demás que determine el Ejecutivo Federal, mediante decreto que será publicado en el Diario Oficial de la Federación, atendiendo a su uso industrial debido al desarrollo de nuevas tecnologías, a su cotización en los mercados internacionales, priorizando la necesidad de promover la explotación racional y la preservación de los recursos no renovables en beneficio de la sociedad.

Quienes estén realizando la exploración o explotación de los minerales o sustancias a que se refiere la fracción IX anterior, con base en las disposiciones del derecho común, tendrán derecho preferente para obtener la concesión minera correspondiente, siempre que la soliciten en los términos de esta Ley y su Reglamento.

Artículo 5. Se exceptúan de la aplicación de la presente Ley:

I.- El petróleo y los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos; el gas asociado a los yacimientos de carbón mineral;

II.- Los minerales radiactivos;

III.- Las sustancias contenidas en suspensión o disolución por aguas subterráneas, siempre que no provengan de un depósito mineral distinto de los componentes de los terrenos;

IV.- Las rocas o los productos de su descomposición que sólo puedan utilizarse para la fabricación de materiales de construcción o se destinen a este fin;

V. Los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su explotación se realice por medio de trabajos a cielo abierto, y

VI.- La sal que provenga de salinas formadas en cuencas endorréicas.

Artículo 6.- La exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta Ley se someterán a consulta pública previa, bajo sanción de nulidad absoluta de las concesiones y asignaciones que se otorguen. No se considerarán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno, y su autorización estará sujeta y condicionada a lo que establezcan otras leyes para preservar los derechos fundamentales de toda persona a la protección de la salud, a la alimentación, a gozar de un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, y al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

Sólo se considerará de utilidad pública la exploración, explotación, beneficio e industrialización de los minerales amparados en los términos de esta Ley cuando se lleven a cabo directamente por y bajo el dominio directo e integral aprovechamiento de la nación sin la participación de particulares.

Artículo 7. Son atribuciones de la Secretaría:

I.- Regular y promover la exploración y explotación, al igual que el aprovechamiento racional y preservación de los recursos minerales de la Nación;

II.- Elaborar y dar seguimiento al programa sectorial en materia minera y coordinar la elaboración y evaluación, así como dar seguimiento a los programas institucionales, regionales y especiales de fomento a la pequeña y mediana minería y al sector social;

III.- Opinar ante las dependencias del Ejecutivo Federal en los asuntos de la competencia de éstas relacionados con la industria minerometalúrgica;

IV.- Participar con las dependencias competentes en la elaboración de las normas oficiales mexicanas y las normas mexicanas relativas a la industria minero-metalúrgica en materia de higiene y seguridad en las minas, salud ocupacional y de equilibrio ecológico y protección al ambiente;

V.- Emitir las opiniones técnicas que su propio reglamento interior señale;

VI.- Someter a la consideración del Ejecutivo Federal los proyectos de decreto para determinar la concesibilidad de minerales o sustancias, así como los relativos a la incorporación de zonas de reservas mineras;

VII.- Expedir títulos de concesión y de asignación mineras, al igual que resolver sobre su nulidad o cancelación o la suspensión e insubsistencia de los derechos que deriven de las mismas, cuando se demuestre que existe inseguridad jurídica, ambiental o social para el desarrollo de las actividades mineras;

VIII.- Integrar el expediente y resolver en los términos de la presente Ley y de las disposiciones de los demás ordenamientos jurídicos aplicables sobre las solicitudes de expropiación, ocupación temporal o constitución de servidumbre de terrenos indispensables para llevar a cabo la exploración, explotación y beneficio de minerales o sustancias sujetos a la aplicación de esta Ley;

IX.- Resolver sobre las controversias que se susciten con respecto a la negativa de las personas que beneficien mineral a recibir el de terceros;

X. Solicitar y recibir, con carácter público, información sobre la producción, beneficio y destino de los minerales, geología de los yacimientos y reservas del mineral, así como sobre los estados económicos y contables de empresas mineras y metalúrgicas;

XI.- Llevar el Registro Público de Minería y la Cartografía Minera y realizar toda clase de levantamientos topográficos y geodésicos con el fin de mantener actualizada esta última;

XII.- Corregir administrativamente los errores que encuentre en un título de concesión o de asignación, previa audiencia al titular y sin perjuicio de tercero;

XIII.- Verificar el cumplimiento de los deberes y obligaciones que impone la presente Ley a quienes lleven a cabo la exploración, explotación o beneficio de minerales o sustancias concesibles e imponer las sanciones administrativas derivadas de su inobservancia;

XIV.- En conjunto con la Secretaría de Energía, formular y actualizar las políticas de recuperación y aprovechamiento de los yacimientos de carbón mineral, para asegurar su aprovechamiento racional y promover su uso eficiente;

XV.- En conjunto con las Secretarías respectivas, establecer los términos y condiciones, así como disposiciones administrativas de carácter técnico, laboral y ambiental para la recuperación y aprovechamiento de los yacimientos de carbón mineral;

XVI.- En conjunto con la Secretaría de Energía, evaluar la factibilidad de los proyectos de recuperación y aprovechamiento del gas asociado a los yacimientos de carbón mineral y su congruencia con la política de energía;

XVII.- Resolver los recursos que se interpongan conforme a lo previsto por esta Ley, y

XVIII.- Las demás que le confieren expresamente otras leyes.

La Secretaría podrá solicitar la colaboración de otras autoridades federales, estatales y municipales en ejercicio de las facultades de verificación que le confiere la presente Ley.

Artículo 8.- La Secretaría formulará los programas de fomento a la pequeña y mediana minería y al sector social, señalados en la fracción II del artículo anterior, y coordinará las acciones necesarias para su ejecución.

El Reglamento de esta Ley establecerá los mecanismos para la instrumentación de los programas y acciones previstos por este artículo y precisará las características del pequeño y mediano minero por mineral o sustancia, con base en sus ingresos por ventas, el tonelaje total que extraigan o su participación en la producción nacional.

Artículo 9. Para promover el mejor aprovechamiento de los recursos minerales y generar la información geológica básica de la Nación, la Secretaría se apoyará en el Servicio Geológico Mexicano, organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, coordinado sectorialmente por dicha dependencia.

El Servicio Geológico Mexicano tendrá su domicilio legal en Pachuca, Hidalgo. Su patrimonio se integrará con las aportaciones del Gobierno Federal, las primas por descubrimiento y las contraprestaciones económicas que provengan de los concursos a que se refiere esta Ley, los ingresos por los servicios que proporcione y los bienes que adquiera por cualquier otro título.

La administración del Servicio Geológico Mexicano estará a cargo de un Órgano de Gobierno y de su Director General.

El Órgano de Gobierno estará integrado por:

El titular de la Secretaría de Economía, quien lo presidirá;

Dos representantes de la Secretaría de Economía;

Un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

Un representante de la Secretaría de Desarrollo Social;

Un representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

Un representante de la Secretaría de Energía;

Un representante del Fideicomiso de Fomento Minero;

Asimismo, asistirán como invitados, con voz pero sin voto y previa invitación nominativa del Presidente del Órgano de Gobierno, hasta tres representantes de organizaciones del sector privado minero mexicano, un representante de los sindicatos del sector minero y un representante de organizaciones de la minería social.

Para la validez de sus reuniones se requerirá de la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus miembros y siempre que la mayoría de asistentes sean representantes de la administración pública federal. Sus resoluciones se tomarán por mayoría de los miembros presentes y, en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.

El Director General será designado por el Presidente de la República, a través del titular de la Secretaría, debiendo recaer en persona que reúna los requisitos indicados en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Las facultades y obligaciones del Órgano de Gobierno y las del Director General de la dependencia serán las establecidas por la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento, así como las indicadas en el Reglamento de esta Ley y el Estatuto Orgánico del organismo.

La vigilancia del Servicio Geológico Mexicano estará a cargo de un Comisario Público, propietario y suplente, designados por la Secretaría de la Función Pública, quienes asistirán con voz pero sin voto a las reuniones del Órgano de Gobierno; las atribuciones del Comisario serán las indicadas en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento. Las bases de la organización del organismo así como las facultades y funciones que correspondan a las distintas áreas del mismo se regirán por su Estatuto Orgánico.

Las relaciones laborales de los servidores públicos del Servicio Geológico Mexicano se regirán por el apartado A) del artículo 123 constitucional y sus leyes reglamentarias.

Para el cumplimiento de su objeto señalado en el párrafo primero de este Artículo, el Servicio Geológico Mexicano tendrá las siguientes funciones:

I. Promover y realizar la investigación geológica, minera y metalúrgica para el mejor aprovechamiento de los recursos minerales del país;

II. Identificar y estimar los recursos minerales potenciales del país;

III. Inventariar los depósitos minerales del país;

IV. Proporcionar el servicio público de información geológica, geofísica, geoquímica y minera del país;

V. Elaborar y mantener actualizada la Carta Geológica de México, en las escalas requeridas;

VI. Proveer la información geoquímica del territorio nacional obtenida de acuerdo a normas internacionales y establecer las características geofísicas del subsuelo, proveer información geohidrológica del comportamiento, disponibilidad y calidad del agua de las fuentes superficiales y subterráneas que podrían ser afectadas por un determinado proyecto minero, y proporcionar su interpretación;

VII. Dar a la pequeña y mediana minería, y al sector social, asesoría técnica en materia de evaluación de depósitos minerales, procesos metalúrgicos y análisis físico-químicos de muestras de minerales, para su aprovechamiento;

VIII. Proporcionar el servicio de laboratorio y el estudio e interpretación de análisis químicos, físico-químicos, metalúrgicos y geológicos de muestras en estado sólido, líquido o gaseoso;

IX. Participar en fondos de inversión de riesgo compartido para exploración;

X. Aportar elementos de juicio a la Secretaría, con relación a la determinación de los minerales y sustancias concesibles y la incorporación de zonas a reservas mineras;

XI. Coordinarse con otras entidades e instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que realicen investigaciones geocientíficas;

XII. Prestar a clientes externos los servicios descritos en este artículo, dentro del territorio nacional o en el extranjero, mediante contratos con personas físicas o morales, instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras;

XIII. Brindar asistencia técnica en materia de planeación de uso del suelo, aportando estudios de: riesgo geológico, ecológicos, territoriales, geohidrológicos y geotécnicos, que se requieran para este fin;

XIV. Obtener y conservar la información de ciencias de la tierra, para incrementar el acervo del servicio público de información geológica, geohidrológica, geofísica, geoquímica y minera del país;

XV. Participar en las reuniones geocientíficas nacionales e internacionales;

XVI. Formar parte del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas, conforme al artículo 56 bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento;

XVII. Proporcionar la información geológica, geoquímica, geofísica y geohidrológica y asesoría técnica sobre el uso y aprovechamiento, actuales y potenciales, de los recursos minerales, que les deberá ser requerida en los términos del artículo 58 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente;

XVIII. Identificar y promover ante la Secretaría la ejecución de obras de infraestructura que propicien el desarrollo de distritos mineros;

XIX. Desarrollar, introducir y adaptar nuevas tecnologías, a fin de mejorar la exploración, explotación y aprovechamiento de los recursos minerales de la Nación de forma sustentable y respeto a la biodiversidad y evitando el uso de sustancias químicas en los procesos de beneficio de los valores metálicos;

XX. Auxiliar a la Secretaría en los concursos a que se refiere esta Ley;

XXI. Actuar como órgano de consulta y verificación de la Secretaría, a solicitud de la misma, en los peritajes y visitas de inspección en que ésta intervenga;

XXII. Certificar reservas minerales a petición del interesado;

XXIII. Celebrar contratos mediante licitación pública para llevar a cabo obras y trabajos dentro de los lotes que amparen las asignaciones mineras expedidas en su favor, en los términos previstos al efecto por el Reglamento de la presente Ley;

XXIV. Fijar y ajustar los precios de los servicios que preste, con excepción de aquellos que se determinen por acuerdo del Ejecutivo Federal;

XXV. Coordinarse con las autoridades estatales y municipales para impulsar y difundir el conocimiento de la actividad geológica, a través de la historia minera y metalúrgica, sus diferentes impactos económicos, ambientales y sociales, mediante la promoción del establecimiento de museos de minería, proveyendo para ello, de conformidad con las disposiciones aplicables, las asignaciones presupuestales que se contemplen en los convenios que se celebren para el efecto con los gobiernos de las entidades federativas.

XXVI. Realizar las actividades que le confieren expresamente otras leyes, sujetándose estrictamente a las facultades que le otorgan.

CAPITULO SEGUNDO
De las Concesiones, Asignaciones y Reservas Mineras.

Artículo 10. La exploración y explotación de los minerales o sustancias a que se refiere el artículo 4, así como de las salinas formadas directamente por las aguas marinas provenientes de mares actuales, superficial o subterráneamente, de modo natural o artificial, y de las sales y subproductos de éstas, sólo podrá realizarse por personas físicas de nacionalidad mexicana, ejidos y comunidades agrarias, pueblos y comunidades indígenas a que se refiere el artículo 2o. Constitucional reconocidos como tales por las Constituciones y Leyes de las Entidades Federativas, y sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, mediante concesiones mineras otorgadas por la Secretaría.

La exploración del territorio nacional con el objeto de identificar y cuantificar los recursos minerales potenciales de la Nación se llevará a cabo por el Servicio Geológico Mexicano, por medio de asignaciones mineras que serán expedidas únicamente a favor de este organismo por la Secretaría y cuyo título deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

Por causas de utilidad pública o para la satisfacción de necesidades futuras del país podrán establecerse zonas de reservas mineras, mediante decreto del Ejecutivo Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación. Sobre las zonas incorporadas a dichas reservas no se otorgarán concesiones ni asignaciones mineras.

Los títulos de concesión y de asignación mineras y los decretos de incorporación de zonas a reservas mineras se expedirán, siempre y cuando se satisfagan las condiciones y requisitos establecidos por esta Ley y su Reglamento, sin perjuicio de tercero.

Artículo 11.- Se consideran legalmente capacitadas para ser titulares de concesiones mineras las sociedades constituidas y obligadas conforme a las leyes mexicanas:

I.- Cuyo objeto social se refiera a la exploración o explotación de los minerales o sustancias sujetos a la aplicación de la presente Ley o de otros ordenamientos aplicables;

II.- Que tengan su domicilio legal en la República Mexicana, y

III.- En las que la participación de inversionistas extranjeros, en su caso, se ajuste a las disposiciones de la ley de la materia.

Artículo 12.- Toda concesión, asignación o zona que se incorpore a reservas mineras deberá referirse a un lote minero, sólido de profundidad indefinida, limitado por planos verticales y cuya cara superior es la superficie del terreno, que no queda incluida en la concesión, pero sobre la cual se determina el perímetro que comprende.

Los lados que integran el perímetro del lote deberán estar orientados astronómicamente Norte-Sur y Este-Oeste y la longitud de cada lado será de cien o múltiplos de cien metros, excepto cuando estas condiciones no puedan cumplirse por colindar con otros lotes mineros.

La localización del lote minero se determinará con base en un punto fijo en el terreno, denominado punto de partida, ligado con el perímetro de dicho lote o ubicado sobre el mismo.

La liga del punto de partida será perpendicular preferentemente a cualquiera de los lados Norte-Sur o Este-Oeste del perímetro del lote.

Artículo 13.- El terreno libre que se encuentre rodeado por terrenos amparados por concesiones o asignaciones mineras y que tenga una superficie máxima de 10 hectáreas constituirá un lote minero denominado hueco, cuya concesión podrá ser solicitada con arreglo a lo siguiente:

El titular de la concesión o asignación minera con mayor perímetro colindante con el hueco, tendrá derecho preferente para que se le otorgue la concesión correspondiente sobre el mismo.

En caso de que el titular antes señalado no ejerza su derecho, la preferencia pasará al siguiente titular de la concesión o asignación minera con mayor perímetro colindante con el hueco y así sucesivamente.

Cuando existan titulares de concesiones o asignaciones mineras cuyos lotes tengan igual perímetro colindante con el hueco, la preferencia se definirá mediante un sorteo entre ellos.

En caso de que una persona distinta al titular señalado en el segundo párrafo de este artículo solicite la concesión minera sobre el hueco, la Secretaría notificará, dentro de los 30 días siguientes a la presentación de los trabajos periciales, a los titulares de las concesiones o asignaciones mineras que colinden con el hueco para que ejerzan su derecho preferente con arreglo a las disposiciones anteriores. Los interesados contarán con un plazo de 30 días contados a partir de la fecha en que surtan efectos tales notificaciones para presentar la solicitud de concesión correspondiente.

Si no se presenta solicitud alguna para ejercer el derecho preferente sobre el hueco dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, la Secretaría expedirá el título en favor del solicitante original, previo cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la Ley y su Reglamento.

Artículo 14. Las concesiones y las asignaciones mineras se otorgarán sobre terreno libre al primer solicitante en tiempo de un lote minero, siempre que se cumplan las condiciones y requisitos que establecen la presente Ley y su Reglamento.

Cuando por surtir efecto la publicación de una declaratoria de libertad de terreno de un lote minero, se presenten de manera simultánea una o más solicitudes de concesión minera y una o más solicitudes de asignación minera, tendrán preferencia para su admisión y trámite las solicitudes de concesión sobre las de asignación.

Por ningún motivo se asignaran concesiones para actividades minero metalúrgicas en áreas ocupadas por asentamientos humanos; áreas naturales protegidas identificadas en el artículo 46 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, zonas históricas de monumentos y arqueológicas así como las zonas y/o áreas de amortiguamiento o protección de las mismas establecidas en esta Ley y su Reglamento.

En el caso de asignaciones que se cancelen o de las zonas de reservas mineras cuya desincorporación se decrete, las concesiones mineras se podrán otorgar mediante concurso, antes de que se declare la libertad de terreno.

Solamente podrán incorporarse a reservas mineras zonas cuya exploración haya sido realizada previamente por el Servicio Geológico Mexicano mediante asignación, se justifique su incorporación con base en el potencial minero de la zona, determinado mediante obras y trabajos de exploración a semidetalle, y se acredite la causa de utilidad pública o se trate de minerales o sustancias considerados dentro de las áreas estratégicas a cargo del Estado.

Artículo 15.- Los concursos mediante los cuales se otorguen las concesiones a que se refiere el artículo anterior deberán garantizar las mejores condiciones económicas, ambientales y sociales para el Estado, y se realizarán conforme a lo siguiente:

I.- La Secretaría publicará la convocatoria por lo menos en el Diario Oficial de la Federación;

II.- Las bases del concurso incluirán, como mínimo:

a) La descripción de los terrenos o zonas de que se trate, los estudios realizados sobre los mismos, así como los planos de su localización, geológicos y de muestreo;

b) Los requisitos con los que los participantes acreditarán su capacidad jurídica, técnica y económica, y

c) La modalidad para la presentación de las propuestas de contraprestación económica y prima por descubrimiento, que podrá ser en sobre cerrado o alguna otra que se determine, y

d) el clausulado del contrato que, en su caso, deberá otorgarse para garantizar el cumplimiento de la contraprestación económica y la prima por descubrimiento que se ofrezca.

III.- Las concesiones se otorgarán a quien acredite el cumplimiento de los requisitos que se prevean en las bases y presente la mejor propuesta económica, para lo que se tomará en consideración, exclusivamente, la contraprestación económica y prima por descubrimiento ofrecidas, así como las condiciones laborales a los trabajadores, de mitigación de impactos sociales y de conservación del medio ambiente.

Artículo 16.- Se considera terreno libre el comprendido dentro del territorio nacional, con excepción del ubicado en o amparado por:

I.- Zonas incorporadas a reservas mineras;

II.- Concesiones y asignaciones mineras vigentes;

III.- Solicitudes de concesiones y asignaciones mineras en trámite;

IV.- Concesiones mineras otorgadas mediante concurso y las derivadas de éstas que hayan sido canceladas;

V.- Los lotes respecto de los cuales no se hubieran otorgado concesiones mineras por haberse declarado desierto el concurso respectivo.

En los supuestos de las fracción V, la Secretaría dispondrá de un plazo de noventa días naturales contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la cancelación de la concesión o la resolución que declaró desierto el concurso, para publicar en el Diario Oficial de la Federación, la resolución que determine la celebración de un nuevo concurso en la totalidad o en parte de los terrenos, o la declaratoria de libertad de los mismos.

En los demás casos en que se cancelen concesiones, así como cuando se desaprueben o sean objeto de desistimiento solicitudes de concesiones o asignaciones, la Secretaría, dentro de los quince días naturales siguientes a aquél en que surta efectos la notificación respectiva, publicará en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de libertad del terreno correspondiente.

Los terrenos serán libres a los treinta días naturales de que se publique la declaratoria de libertad de los mismos.

Cuando se cancelen concesiones y asignaciones por sustitución, solamente se liberará, en su caso, la porción del terreno que se abandone.

Artículo 17.- No se concederán concesiones, asignaciones o reservas mineras:

I.- En las áreas naturales protegidas clasificadas por la Ley General de Equilibrio Ecológico y la de Protección al Ambiente;

II.- En las áreas de protección y/o amortiguamiento alrededor de las obras mineras como tajos, patios de lixiviación, los tiraderos conocidos como escombreras o tepetateras, presas o diques de jales y otras similares

cuyas distancias se sujetarán a las especificadas en el reglamento de esta Ley y de las disposiciones relativas de otras leyes aplicables;

III.- En distancias menores de 25 kilómetros de de zonas de recarga de acuíferos, zonas de monumentos públicos, históricos, arqueológicos, santuarios de la naturaleza, zonas de preservación ecológica o poblaciones mayores de mil habitantes;

IV.- Para ampliación de concesiones o de un proyecto minero metalúrgico si el actual no ha sido concluido en todas sus etapas, incluyendo la de cierre y remediación del sitio, así como con todos los compromisos y condicionantes que le fueron impuestas para el desarrollo del mismo.

V.- En regiones con veda hídrica determinada por la ley respectiva, y

VI.- En áreas destinadas a cultivos básicos para la alimentación de la población.

Artículo 18.- Las concesiones mineras conferirán derechos sobre todos los minerales o sustancias sujetos a la aplicación de la presente Ley.

Las concesiones mineras tendrán una duración igual a la expresada y demostrada por la empresa minera en su proyecto de explotación y beneficio de minerales que presentará para la adquisición de las diversas autorizaciones, licencias, permisos y similares requeridos por las diferentes dependencias e instancias de la administración pública que deban intervenir de conformidad con sus atribuciones. En todo caso, el plazo de duración de las concesiones mineras no excederá de 20 años.

Artículo 19.- Las asignaciones mineras conferirán derechos sobre todos los minerales o sustancias sujetos a la aplicación de esta Ley y tendrán una duración improrrogable de seis años, contados a partir de la fecha de publicación del título respectivo en el Diario Oficial de la Federación.

El Servicio Geológico Mexicano, antes del término de la vigencia de cada asignación, deberá rendir a la Secretaría un informe escrito sobre los resultados obtenidos con motivo de los trabajos llevados a cabo para que ésta proceda a declarar:

I.- La cancelación de la asignación y la consiguiente libertad del terreno;

II. La cancelación de la asignación y la celebración de uno o más concursos para el otorgamiento de concesiones mineras sobre la totalidad o parte del terreno, así como la libertad del terreno que en su caso se abandone, o

III.- La cancelación de la asignación y la incorporación a reservas mineras de la totalidad o parte del terreno amparado, al igual que la libertad del que en su caso se abandone.

Las anteriores resoluciones deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación. De no publicarse cualquiera de ellas antes del término de vigencia de la asignación de que se trate, la Secretaría deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación su cancelación y la consiguiente libertad del terreno que ampare, dentro de los 30 días naturales siguientes al vencimiento de su vigencia.

Artículo 20.- Cuando por utilidad pública cambien los supuestos que motivaron la incorporación de una zona a reservas mineras, el Ejecutivo Federal dispondrá su desincorporación mediante decreto que será publicado en el Diario Oficial de la Federación, a fin de que la Secretaría proceda a:

I.- Declarar la libertad del terreno amparado, o

II. Convocar a concurso para el otorgamiento de una o más concesiones mineras y declarar la libertad del terreno que en su caso se abandone.

De no publicarse en el Diario Oficial de la Federación cualquiera de las resoluciones previstas por las fracciones anteriores dentro de los 90 días naturales siguientes a la fecha de publicación del decreto de desincorporación, el terreno amparado por la referida zona se considerará libre al día siguiente del vencimiento del plazo señalado.

Artículo 21.- Cuando la Secretaría encuentre que los datos consignados en un título de concesión o de asignación mineras son erróneos o no corresponden al terreno que legalmente deba amparar, lo comunicará a su titular para que, dentro de un plazo de 30 días naturales, manifieste lo que a su derecho convenga y proporcione los datos y documentos que le sean requeridos.

La Secretaría dictará resolución con base en la contestación del interesado y las constancias del expediente y, de proceder, ordenará la corrección del título, así como su inscripción en el Registro Público de Minería.

No se concederá ampliación de concesiones o de un proyecto minero metalúrgico si el actual no ha sido concluido en todas sus etapas, incluyendo la de cierre y remediación del sitio, así como con todos los compromisos y condicionantes que le fueron impuestas para el desarrollo del mismo.

CAPÍTULO TERCERO
De la Explotación Minera y de los Derechos de los Pueblos Indígenas

Artículo 22.- Los pueblos indígenas y sus comunidades tienen derecho a usar y aprovechar los recursos naturales existentes en sus tierras y territorios, incluido el uso cultural, ceremonial y espiritual que en ellos se realicen.

De igual manera, tienen derecho a participar y beneficiarse del aprovechamiento de los recursos minerales existentes en sus tierras y territorios, así como a que no se destruyan a causa de esa actividad y se preserve su hábitat.

Para el caso de que por alguna causa se destruya, tienen derecho a una reparación justa, que correrá a cargo del responsable y en su caso del Estado.

Artículo 23.- Los pueblos indígenas y sus comunidades tienen derecho preferente para obtener las concesiones mineras cuando el mineral sobre el que recaigan se encuentre en sus tierras o territorios. Cuando manifiesten su voluntad de obtenerlas, el Estado, a través de la Dependencias o Entidades correspondientes, deberá brindarles el apoyo y la asesoría técnica necesaria para el ejercicio de este derecho.

Artículo 24.- El Ejecutivo Federal no podrá otorgar ninguna concesión sobre tierras o territorios indígenas sin contar con el consentimiento previo, libre e informado, otorgado por los pueblos o comunidades indígenas que pudieran verse afectados con motivo de dicho otorgamiento.

Artículo 25.- El consentimiento a que se refiere el párrafo anterior deberá ser otorgado por los pueblos indígenas o sus comunidades, según el caso, por medio de consultas que se lleven a cabo a través de las autoridades representativas de dichos pueblos indígenas o sus comunidades y mediante los procedimientos que acostumbran utilizar para discutir y tomar acuerdos sobre los problemas de su interés.

Artículo 26.- Es responsabilidad de la Secretaría la realización de la consulta, cuando pretenda obtener el consentimiento previo al otorgamiento de concesiones mineras en territorios indígenas. Para llevarla a cabo deberá proporcionarles toda la información necesaria para que tomen una decisión razonada sobre su pretensión y acordar con ellos el mecanismo de consulta, así como los objetivos específicos de ella.

Artículo 27.- En el caso de que los pueblos indígenas o sus comunidades, según el caso, otorguen su consentimiento, antes de autorizar las concesiones, el estado deberá asegurarse que las actividades de exploración, explotación y beneficio que se pretenden realizar no pongan en peligro la existencia de los pueblos indígenas o sus comunidades. Se entiende que se pone en peligro la existencia de los pueblos indígenas o sus comunidades, cuando se pueden presentar los siguientes casos.

I.- Impliquen el desplazamiento de los pueblos;

II.- Se afecten sus fuentes de obtención de alimentos para la población, o provoque daños de gravedad a la salud;

III.- Disminuya la capacidad de captación de agua para el consumo humano o la producción de alimentos;

IV.- Se destruyan o modifiquen sustancialmente sus lugares sagrados, espirituales y de la reproducción cultural;

V:- La actividad minera represente una causa preponderante de migración de los miembros de los pueblos indígenas o sus comunidades.

Artículo 28.- Cumplidos los requisitos anteriores el Ejecutivo Federal podrá otorgar las concesiones mineras, pero antes de comenzar las actividades de exploración o explotación que amparen, las empresas deberán pactar con los pueblos indígenas o sus comunidades, y con la participación del estado, mínimamente los siguientes:

I.- Las condiciones en que se desarrollarán las actividades de exploración, explotación y beneficio de los valores metálicos;

II.- Las medidas para evitar la contaminación o destrucción de sus tierras, territorios, los recursos naturales, el medio ambiente, incluidos sus lugares sagrados, espirituales o culturales;

III.- Las formas de remediar los daños anteriores que pudieran causarse, a pesar de las medidas tomadas y en forma de garantizar que se lleven acabo, y;

IV.- Los beneficios que los pueblos y comunidades indígenas obtendrán de la explotación minera, entre los cuales se consideran:

a).- Por lo menos un 5% del valor de los minerales extraídos, para destinarlos a proyectos, obras o actividades de desarrollo comunitario;

b).- Las posibilidades de asociación de los pueblos o comunidades indígenas con la empresa concesionaria, en los términos de la legislación aplicable.

Artículo 29.- Será nulo de pleno derecho, todo acto que se realice en contravención de lo dispuesto en este capítulo.

CAPITULO CUARTO
De los Derechos que Confieren las Concesiones y Asignaciones Mineras

Artículo 30. Las concesiones mineras confieren derecho a:

I.- Tramitar en los términos del artículo 32 de esta ley la expropiación, ocupación temporal o constitución de servidumbre de los terrenos indispensables para llevar a cabo las obras y trabajos de exploración, explotación

y beneficio, así como para el depósito de terreros, jales, escorias y graseros, al igual que constituir servidumbres subterráneas de paso a través de lotes mineros;

II.- Aprovechar las aguas provenientes del laboreo de las minas para la exploración o explotación y beneficio de los minerales o sustancias que se obtengan y el uso doméstico del personal empleado en las mismas;

III.- Lo establecido en las fracciones IV y V, estarán sujetas a lo señalado en el artículo 4º constitucional y en los términos de la ley en la materia;

IV.- Reducir, dividir e identificar la superficie de los lotes que amparen, o unificarla con la de otras concesiones colindantes;

V.- Desistirse de las mismas y de los derechos que de ellas deriven;

VI.- Agrupar dos o más de ellas para efectos de comprobar obras y trabajos previstos por esta Ley y de rendir informes estadísticos y técnicos;

VII.- Solicitar correcciones administrativas o duplicados de sus títulos;

VIII.- Solicitar la prórroga en las concesiones minera por igual término de vigencia, de acuerdo con lo previsto por esta Ley, siempre y cuando la empresa haya dado cabal cumplimiento a las condicionantes exigidas por las diferentes dependencias y entidades que otorgaron las diversas autorizaciones, licencias, permisos y sus similares, incluyendo la etapa de cierre y remediación del sitio.

Artículo 31.- Las obras y trabajos de exploración y explotación de carbón en todas sus variedades, en terrenos amparados por asignaciones petroleras sólo podrán ejecutarse con autorización de la Secretaría, la que solicitará opinión a la Secretaría de Energía para fijar las condiciones técnicas a que deben sujetarse los mismos.

Las obras y trabajos de exploración y de explotación que se realicen dentro de poblaciones, presas, canales, vías generales de comunicación y otras obras públicas, en los zócalos submarinos de islas, cayos y arrecifes, el lecho marino y el subsuelo de la zona económica exclusiva, en las áreas naturales protegidas, así como las que se efectúen dentro de la zona federal marítimo terrestre, únicamente podrán realizarse con autorización, permiso, o concesión según el caso, de las autoridades que tengan a su cargo los referidos bienes, zócalos, lecho marino, subsuelo, las áreas o las zonas citadas, en los términos que señalen las disposiciones aplicables.

Artículo 32.- La ocupación temporal, las servidumbres y las expropiaciones para uso minero deberán ser resueltas por los ejidatarios, comuneros, pobladores, y demás propietarios y poseedores de los predios, previa consulta libre, veraz e informada sin presión o engaño. En caso contrario, estos actos serán nulos de pleno derecho y los servidores públicos y demás persona involucradas deberán reparar los daños y perjuicios ocasionados, con independencia de las demás sanciones aplicables.

Tratándose de expropiaciones, cuando se trate de tierras ejidales y comunales, se repondrá a los afectados la misma cantidad de terreno, de la misma calidad productiva y lo más cerca de la parte expropiada.

Las ocupaciones temporales y servidumbres en bienes ejidales y comunales se sujetarán a lo dispuesto por la legislación agraria.

La omisión de las obligaciones a que se refieren los párrafos anteriores, será causa para la cancelación de la concesión.

Artículo 33. Las solicitudes de reducción, división, identificación o unificación de superficies procederán cuando el nuevo lote o lotes estén comprendidos dentro de la superficie amparada por la concesión o concesiones de que deriven y no se afecten derechos de terceros inscritos en el Registro Público de Minería.

Declarada procedente la solicitud, la Secretaría expedirá el o los nuevos títulos que correspondan en sustitución del o de los que deriven, con iguales derechos y obligaciones. En los casos de unificación, los títulos se expedirán por la vigencia restante del más antiguo.

Artículo 34.- La transmisión de la titularidad de concesiones mineras o de los derechos que de ellas deriven surtirá sus efectos legales ante terceros y la Secretaría a partir de su inscripción en el Registro Público de Minería.

Cuando se transmita la titularidad de una concesión el adquirente se subrogará en los derechos y obligaciones de la misma. Será responsabilidad del adquirente cerciorarse que la concesión se encuentra vigente y que su titular está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones. La Secretaría podrá expedir, a petición y costa de parte interesada, constancia de lo anterior.

Los contratos y convenios por los que el adquirente de derechos derivados de una concesión asuma obligaciones cuyo incumplimiento se sancione con la cancelación de la misma, no relevan a su titular de la responsabilidad de cumplirlas, si el primero no lo hace.

Los actos, contratos y convenios relativos a la transmisión de la titularidad de concesiones o de los derechos que de ellas deriven, al igual que las controversias que se susciten con motivo de los mismos, se sujetarán en lo no previsto por la presente Ley a las disposiciones de la legislación mercantil.

Artículo 35.- La trasmisión de las concesiones se realizara de acuerdo a la presente ley.

Artículo 36.- Los desistimientos debidamente formulados sobre la titularidad de concesiones mineras o los derechos que de ellas deriven surtirán sus efectos a partir de la fecha de presentación en la Secretaría del escrito correspondiente, cuando no se afecten derechos de tercero inscritos en el Registro Público de Minería.

Artículo 37.- El agrupamiento de concesiones mineras procederá cuando los lotes sean colindantes o constituyan una unidad minera o minero-metalúrgica desde el punto de vista técnico y administrativo, conforme al artículo 23 de esta Ley y su Reglamento y sus titulares no hayan incurrido en las causales de cancelación establecidas por la misma.

Artículo 38.- Las asignaciones mineras confieren derecho a:

I.- Realizar obras y trabajos de exploración dentro del lote minero que amparen, sujeto a lo previsto por el artículo 20 de la presente Ley;

II.- Obtener la ocupación temporal o constitución de servidumbre de los terrenos indispensables para llevar a cabo las obras y trabajos de exploración, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 32 de esta ley;

III.- Reducir e identificar la superficie que amparen, y

IV.- Desistirse de las mismas o de los derechos que de ellas deriven;

Las asignaciones serán intransmisibles y no podrán ser objeto de gravamen alguno.

CAPITULO QUINTO

De las Obligaciones que Imponen las Concesiones y Asignaciones Mineras y el Beneficio de Minerales

Artículo 39. Los titulares de concesiones mineras, independientemente de la fecha de su otorgamiento, están obligados a:

I. Ejecutar y comprobar las obras y trabajos previstos por esta Ley y las demás que condicionan la actividad minero metalúrgica en los términos y condiciones que establecen las mismas y su Reglamento;

II.- Pagar los derechos, impuestos y regalías sobre minería y el producto del beneficio de los minerales según lo establezca la ley;

IV. Sujetarse a las disposiciones generales y a las normas oficiales mexicanas aplicables a la industria minero-metalúrgica en materia de seguridad en las minas y de equilibrio ecológico y protección al ambiente;

V.- No retirar las obras permanentes de fortificación, los ademes y demás instalaciones necesarias para la estabilidad y seguridad de las minas;

VI.- Conservar en el mismo lugar y mantener en buen estado la mojonera o señal que precise la ubicación del punto de partida;

VII.-Durante la explotación se llevarán registros e inventarios actualizados de la producción en boca o borde de mina y en sitios de acopio, para establecer en todo tiempo los volúmenes de los minerales en bruto y de los entregados a las plantas de beneficio y si fuere del caso, a las de transformación. Estos registros e inventarios se suministrarán, con la periodicidad que señale la autoridad, al Registro Público de Minería;

VII.- Rendir a la Secretaría los informes estadísticos, técnicos y contables en los términos y condiciones que señale el Reglamento de la presente Ley;

VIII.- Permitir al personal comisionado por la Secretarías y organismos públicos la práctica de visitas de inspección cuantas veces sea necesario;

IX.- Rendir a la Secretaría un informe geológico-minero cuando la concesión minera correspondiente se cancele por terminación de su vigencia, desistimiento, sustitución por reducción, infracción o resolución judicial. El informe describirá los trabajos de exploración y explotación realizados en el lote minero, o en la superficie que se abandona, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de esta Ley;

La Secretaría entregará al Servicio Geológico Mexicano dicho informe para que sea incorporado en el sistema público de información del propio Servicio;

X.- Rendir al Servicio Geológico Mexicano, en el caso de concesiones otorgadas mediante concurso, un informe semestral en los meses de enero y julio de cada año, de los trabajos realizados y de la producción obtenida en el lote amparado por la concesión minera, para efectos de control del pago de la prima por descubrimiento o cualquier otra contraprestación económica contemplada a favor de dicho organismo;

XI.- Dar aviso a la Secretaría de Energía sobre el inicio y suspensión de las actividades relacionadas con la recuperación y aprovechamiento del gas asociado a los yacimientos de carbón mineral, que se realice al amparo de su concesión minera;

XII. Acumular, registrar y proporcionar periódicamente información geológica a la Secretaría de Energía relacionada con la recuperación y aprovechamiento de gas asociado a los yacimientos de carbón mineral;

XIII.- Avisar a la Secretaría de Energía sobre el descubrimiento de gas no asociado a los yacimientos de carbón mineral, como producto de las concesiones que amparan la exploración y explotación de yacimientos de carbón mineral, y;

XIV.- Entregar el gas asociado a los yacimientos de carbón mineral en el punto de conexión que indique Petróleos Mexicanos, en caso de que no se destine al autoconsumo;

XV.- Al celebrarse el contrato de concesión de exploración, explotación y beneficio de minerales, el concesionario deberá constituir una póliza de garantía, que ampare el cumplimiento de todas las obligaciones mineras y ambientales adquiridas por el mismo, así como el pago de las multas;

En el evento en que la póliza se haga efectiva, subsistirá la obligación de reponer dicha garantía.

El valor asegurado se calculará con base en los siguientes criterios:

a) Para la etapa de exploración, un 5% del valor anual de la cuantía de la inversión prevista en exploración para la respectiva anualidad;

b) Para la etapa de construcción y montaje el 5% de la inversión anual por dicho concepto;

c) Para la etapa de explotación equivaldrá a un 10% del resultado de multiplicar el volumen de producción anual estimado del mineral objeto de la concesión, por el precio en boca de mina del referido mineral fijado anualmente por el Gobierno;

Dicha póliza, que habrá de ser aprobada por la autoridad concedente, deberá mantenerse vigente durante la vida de la concesión, de sus prórrogas y por tres (3) años más. El monto asegurado deberá siempre corresponder a los porcentajes establecidos en el presente artículo.

Los titulares de concesiones mineras otorgadas mediante concurso o de aquellas que las sustituyan estarán obligados a cubrir, adicionalmente, la prima por descubrimiento y las contraprestaciones económicas ofrecidas.

Cuando se transmitan los derechos derivados de una concesión, las obligaciones a las que se hace mención en este artículo estarán a cargo del adquiriente, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 34 de esta Ley.

Artículo 40. La ejecución de obras y trabajos se comprobará por medio de la realización de inversiones en el lote que ampare la concesión minera o mediante la obtención de minerales económicamente aprovechables. El Reglamento de la presente Ley fijará los montos mínimos de la inversión por realizar y del valor de los productos minerales por obtener.

La obligación de ejecutar las referidas obras y trabajos iniciará 90 días naturales después de la fecha de inscripción de la concesión en el Registro Público de Minería.
Los informes de comprobación deberán presentarse a la Secretaría durante el mes de mayo de cada año y se referirán a las obras y trabajos desarrollados en el período de enero a diciembre del año inmediato anterior, aun en los casos de sustitución de concesiones por cualquiera de las causas previstas por esta Ley. Los informes se publicaran en la página web de la secretaría.
En un plazo máximo de 60 días la secretaría emitirá dictamen respecto a la veracidad de los informes de comprobación, documentos que serán públicos.

Artículo 41. La comprobación de obras y trabajos mediante la realización de inversiones se aceptará indistintamente en los rubros que a continuación se indican:

I.- Obras mineras directas, tales como zanjas, pozos, tajos, socavones y todas aquéllas que contribuyan al conocimiento geológico del lote minero o a la cubicación de reservas;
II.- Perforaciones;

III.- Levantamientos topográficos, fotogramétricos y geodésicos;

IV.- Levantamientos geológicos, geofísicos y geoquímicos;

V.- Análisis físico-químicos;

VI.- Pruebas de experimentación metalúrgica;

VII.- Desarrollo y rehabilitación de obras mineras;

VIII.- Adquisición, arrendamiento y mantenimiento de equipos para perforación y desarrollo de obras mineras;

IX.- Adquisición, arrendamiento y mantenimiento de equipos de laboratorio físico-químicos y de investigación metalúrgica;

X.- Adquisición, arrendamiento y mantenimiento de vehículos de trabajo y para la transportación del personal;

XI.- Obras y equipos destinados a la seguridad en el trabajo y a la prevención de la contaminación o la recuperación del medio ambiente;

XII.- Instalaciones de almacenes, oficinas, talleres, campamentos, casas habitación y servicios a los trabajadores;

XIII.- Adquisición, arrendamiento, construcción y mantenimiento de obras y equipos relacionados con vías de acceso, generación y conducción de energía eléctrica, extracción, conducción y almacenamiento de agua e infraestructura en general;

XIV.- Adquisición, arrendamiento y mantenimiento de equipo para minado, acarreo y servicios generales en la mina, y;

XV.- Adquisición, arrendamiento, instalación y mantenimiento de equipo para operaciones de beneficio y presas de jales.

Las inversiones se aplicarán de acuerdo con los criterios que fije el Reglamento de la presente Ley.

Artículo 42. La comprobación de las obras y trabajos previstos por esta Ley por medio de la obtención de minerales económicamente aprovechables se hará con base en el valor de facturación o liquidación de los mismos.

Artículo 43. Se tendrá por suspendida temporalmente la obligación de ejecutar las obras y trabajos previstos por esta Ley cuando se acredite a la Secretaría, al efectuarse la comprobación anual, que fue imposible la realización de éstos por causas técnicas, económicas, laborales, judiciales o de fuerza mayor.

La suspensión temporal por causas técnicas y económicas podrá acreditarse por una sola vez hasta un máximo de tres años consecutivos, dentro de un período de diez años.

Artículo 44.- Cuando la cotización o demanda de un mineral sufra disminuciones que ocasionen la incosteabilidad temporal de las explotaciones en forma generalizada, la Secretaría podrá reducir los montos mínimos de la inversión por realizar o del valor de los productos minerales por obtener, o conceder prórrogas para su cumplimiento. Para tal fin, publicará en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se

precisarán los requisitos necesarios para acogerse al mismo, las sustancias y tipos de yacimientos afectados, las cotizaciones con base en las cuales surtirá efecto y su vigencia.

Artículo 45.- La superficie que se pretenda liberar o abandonar con motivo del desistimiento o reducción de una concesión no causará los derechos sobre minería a partir de la fecha de presentación del escrito correspondiente, siempre y cuando dichas solicitudes sean resueltas favorablemente por la Secretaría. En caso de ser desaprobadas, se deberán cubrir los derechos omitidos, con la actualización y recargos que determinen las disposiciones fiscales.

La Secretaría dispondrá de veinte días naturales para desaprobar el desistimiento o solicitud de reducción, cuando no se satisfagan las condiciones y requisitos establecidos en esta Ley y su Reglamento.

Artículo 46. Los titulares de concesiones mineras o quienes lleven a cabo obras y trabajos mediante contrato, deberán designar como responsable del cumplimiento de las normas de seguridad en las minas a un ingeniero legalmente autorizado para ejercer, siempre y cuando las obras y trabajos involucren a más de nueve trabajadores en el caso de las minas de carbón y más de cuarenta y nueve trabajadores en los demás casos.

El responsable deberá dedicarse fundamentalmente a verificar el cumplimiento de dichas normas, cerciorarse de que se tomen las medidas necesarias para prevenir accidentes y notificar de inmediato aquéllas que no se hayan adoptado, al titular de la concesión de explotación o a quien lleve a cabo estos trabajos.

Artículo 47. El informe a que se refiere el artículo 39, fracción IX de esta Ley, describirá los trabajos de exploración y explotación realizados en el lote minero o en la superficie que se abandone, conforme a lo que establezca el Reglamento de la presente Ley, y deberá ser presentado junto con la solicitud de desistimiento o reducción, o dentro de los sesenta días naturales siguientes a la terminación de la vigencia de la concesión minera o a la notificación de su cancelación por infracción o resolución judicial. La Secretaría entregará al Servicio Geológico Mexicano dicho informe en un término de sesenta días naturales a partir de que lo reciba para que éste lo incorpore en su sistema público de información dentro de los sesenta días naturales de que a su vez lo reciba.

Artículo 48. El Servicio Geológico Mexicano, como titular de asignaciones mineras, e independientemente de la fecha de expedición de éstas, estará obligado a rendir a la Secretaría un informe escrito anual de carácter público sobre los resultados obtenidos con motivo de las obras y trabajos llevados a cabo, así como dar cumplimiento a las obligaciones que señalan los artículos 39, fracciones II, en lo conducente, IV, V, VI y VIII de esta Ley.

Artículo 49.- Las personas que beneficien minerales o sustancias sujetos a la aplicación de la presente Ley están obligadas a:

I.- Dar aviso a la Secretaría del inicio de operaciones de beneficio;

II. Sujetarse a las disposiciones generales y a las normas oficiales mexicanas aplicables a la industria minero-metalúrgica en materia de seguridad y del equilibrio ecológico y protección al ambiente;

III.- Rendir a la Secretaría los informes estadísticos, técnicos y contables en los términos y condiciones que señale el Reglamento de esta Ley;

IV.- Contar con todas y cada una de las respectivas autorizaciones, licencias, permisos y sus similares, incluyendo licencia social;

V.- Procesar el mineral de pequeños y medianos mineros y del sector social en condiciones competitivas hasta por un mínimo del 15 % de la capacidad de beneficio instalada, cuando ésta sea superior a cien toneladas en veinticuatro horas, y;

VI.- Permitir al personal comisionado por la Secretaría la práctica de visitas de inspección en ejercicio de las facultades de verificación que le confiere la presente Ley.

Artículo 50.- Las personas a que alude el artículo anterior no estarán obligadas a recibir minerales de terceros cuando:

I.- Los minerales que se pretendan introducir no se adapten al sistema de beneficio o afecten su operación normal;

II.- Comprueben estar recibiendo minerales de pequeños y medianos mineros y del sector social por un mínimo del 15 % de la capacidad de beneficio instalada, o;

III.- Los lotes de mineral que se presenten para tratamiento sean inferiores a diez toneladas;

A solicitud escrita del interesado, el responsable de la operación de beneficio estará obligado a manifestar también por escrito la explicación fundada de su negativa a recibir mineral. De existir controversia, la Secretaría resolverá lo conducente.

Artículo 51.- En las actividades de exploración, explotación y beneficio de minerales o sustancias, los concesionarios mineros deberán dar cabal cumplimiento al cuidado del medio ambiente y la protección ecológica, de conformidad con la legislación y la normatividad de la materia.

CAPITULO SEXTO

De la Nulidad, Cancelación, Suspensión e Insubsistencia de Derechos

Artículo 52.- Las concesiones y asignaciones mineras serán nulas cuando:

I.- Se pretenda amparar con las mismas desde su otorgamiento la obtención de minerales o sustancias no sujetos a la aplicación de esta Ley

II.- Se expidan en favor de persona no capacitada por la presente Ley para obtenerlas; o

III.- El lote minero objeto de la concesión o asignación abarque total o parcialmente terreno no libre al momento de presentación de la solicitud respectiva, aunque con posterioridad sea publicada la declaratoria de libertad de dicho terreno, excepto cuando se trate de concesiones otorgadas mediante concurso;

IV.- Si no cumple con lo establecido en el artículo 49 fracción IV;

Si el lote minero objeto de la concesión o asignación comprende parcialmente terreno no libre únicamente será nula por dicha porción, en cuyo caso la Secretaría expedirá un nuevo título en sustitución del que derive por la superficie que legalmente ampare, con iguales derechos y obligaciones.

Artículo 53. Serán nulas las trasmisiones de la titularidad de concesiones mineras o de los derechos que de ellas deriven cuando se pacten a favor de persona no capacitada legalmente para obtenerlas.

No procederá la nulidad cuando se trate de adjudicación en pago de créditos o por herencia y los derechos correspondientes se trasmitan a persona legalmente capacitada dentro de los 365 días naturales siguientes a la fecha de su adjudicación.

Artículo 54.- Las concesiones y las asignaciones mineras se cancelarán por:

I.- Terminación de su vigencia;

II.- Desistimiento debidamente formulado por su titular;

III. Sustitución con motivo de la expedición de nuevos títulos derivados de la reducción, división, identificación o unificación de superficie amparada por concesiones mineras;

IV.- Comisión de alguna de las infracciones señaladas en el artículo 67 de esta Ley;

V.- Resolución judicial, o lo establecido en el artículo 49 fracción IV de esta ley;

VI.- comprobar que la capacidad del acuífero de donde la empresa va a extraer el agua para sus actividades tiene problemas de sobreexplotación.

Artículo 55.- El derecho para realizar las obras y trabajos previstos por esta Ley se suspenderá cuando éstos:

I.- Pongan en peligro la vida o integridad física de los trabajadores o de los miembros de la comunidad, en observancia al principio precautorio;

II.- Causen o puedan causar daño a bienes de interés público, a un servicio público o de propiedad privada, o no se cumpla con lo establecido en el artículo 17 de esta ley;

III.- Si carece de uno o más permisos, licencias, autorizaciones o sus similares, requeridos por las diferentes dependencias públicas y privadas y lo establecido en el artículo 49 fracción IV;
Si la visita de inspección que se practique solicitada por posibles afectados, revela peligro o daño inminente, la Secretaría dispondrá de inmediato la suspensión provisional de las obras y trabajos, al igual que las medidas de seguridad por adoptarse dentro del plazo que al efecto fije. De no cumplirse en el plazo señalado, ordenará la suspensión definitiva de tales obras y trabajos.

Artículo 56.- Procederá la reversión de los bienes expropiados y la declaración de insubsistencia de las resoluciones de ocupación temporal o constitución de servidumbre, cuando:

I.- Las obras o trabajos por desarrollar no se inicien dentro de los 365 días naturales siguientes a la fecha de inscripción de la resolución respectiva en el Registro Público de Minería, sin que medie causa de fuerza mayor;

II.- Las obras o trabajos por ejecutar se suspendan por el término de un año, salvo en los casos a que alude el artículo 31 de la presente Ley;

III.- El terreno objeto de las mismas sea destinado a un uso distinto de aquél que justificó la afectación;

IV.- El terreno Objeto de las mismas ya esté destinado o sea posteriormente destinado por decreto a un uso distinto al de la actividad minera;

V.- Se incumpla el pago de la indemnización;

VI.- Se declare nula o cancele la concesión con base en la cual se ejerció el derecho a obtenerla, excepto por las causas previstas por los artículos 52, párrafo final, y 54, fracción III, de esta Ley, o

VII.- Judicialmente así se ordene, por lo establecido en esta ley;

En los casos de expropiación, la reversión de los bienes en favor del afectado procederá cuando su causa ocurra dentro de los cinco años siguientes a la fecha de notificación del decreto respectivo.

Artículo 57.- Las nulidades señaladas por el artículo 52, fracciones I y III, así como la suspensión o insubsistencia a que se refieren los artículos 55 y 56, fracciones I a V, se resolverán a petición de parte afectada mediante el procedimiento que determine el Reglamento de la presente Ley.

Las nulidades, las cancelaciones a que alude el artículo 54, fracción IV, las suspensiones e insubsistencia, se declararán por la Secretaría, previo respeto de la garantía de audiencia a la parte afectada dentro de un plazo de 60 días naturales, transcurrido el cual dictará resolución.

CAPITULO SÉPTIMO
Del Registro Público de Minería y la Cartografía Minera

Artículo 58.- La Secretaría llevará el Registro Público de Minería en el que deberán inscribirse los actos y contratos que a continuación se mencionan:

I.-Los títulos de concesión minera, sus prórrogas y las declaratorias de su nulidad o cancelación;

II.- Los títulos de asignación minera y las declaratorias de nulidad o cancelación de las mismas;

III.- Los decretos que establezcan reservas mineras o que desincorporen zonas de éstas;

IV.- Las resoluciones de ocupación temporal y constitución de servidumbre, al igual que las que se emitan sobre su insubsistencia;

V.- Las resoluciones expedidas por autoridad judicial o administrativa que afecten concesiones mineras o los derechos que de ellas deriven;

VI. Los actos o contratos relativos a la transmisión de la titularidad de concesiones o de los derechos que de ellas deriven, los de promesa para celebrarlos, los gravámenes u obligaciones contractuales que se constituyan en relación con las mismas, así como los convenios que los afecten;

VII. Las sociedades a que se refiere el artículo 11 de esta Ley, al igual que su disolución, liquidación y las modificaciones a los estatutos de dichas sociedades que determine el Reglamento de la misma;

VIII.- Los avisos notariales preventivos con motivo de la celebración de contratos;

IX.- Las anotaciones judiciales preventivas derivadas de reclamaciones por negativa, rectificación modificación, nulidad o cancelación de inscripciones, y

X.- Las anotaciones preventivas para interrumpir la cancelación de inscripciones de contratos y convenios sujetos a temporalidad;

En relación con lo dispuesto por esta Ley, los actos y contratos previstos en las fracciones V al X anteriores surtirán efectos contra terceros desde la fecha y hora de presentación en la Secretaría de la promoción respectiva; los correspondientes a las fracciones I y IV a partir de su fecha de inscripción, y los relativos a las fracciones II y III el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 59.- Los actos a que aluden las fracciones I a IV del artículo anterior se inscribirán de oficio y los relativos a las restantes fracciones a petición de parte interesada, por orden de presentación y cuando se satisfagan los requisitos que establezca el Reglamento de la presente Ley.

Artículo 60.- Toda persona podrá consultar el Registro Público de Minería y solicitar a su costa certificaciones de las inscripciones y documentos que dieron lugar a las mismas, así como sobre la inexistencia de un registro o de inscripciones posteriores en relación con una determinada.

Artículo 61.- Los derechos que confieren las concesiones mineras y los actos, contratos y convenios que las afecten se acreditarán por medio de la constancia de su inscripción en el Registro Público de Minería.

Artículo 62.- Para proceder al remate de una concesión minera y de los derechos que de ella deriven será requisito la expedición por parte del Registro Público de Minería de una certificación sobre los antecedentes y afectaciones que obren inscritos en relación con la misma. Dicha certificación deberá agregarse a las actas de las diligencias de adjudicación o en las escrituras respectivas.

Artículo 63.- La Secretaría, por conducto del Registro Público de Minería, podrá rectificar o modificar una inscripción cuando sea solicitada por el afectado, se acredite la existencia de la omisión o error y no se perjudiquen derechos de tercero o medie consentimiento de parte legítima en forma auténtica. Asimismo, procederá a la cancelación de la inscripción de un contrato o convenio cuando conste fehacientemente la voluntad de las partes.

Se tendrá por cancelada la inscripción de los contratos y convenios sujetos a temporalidad 90 días naturales después del término de su vigencia, si no obra constancia en contrario.

Las reclamaciones por negativa, rectificación, modificación o cancelación de inscripciones que perjudiquen derechos de tercero, así como las que se refieran a la nulidad de éstas, deberán tramitarse judicialmente.

Artículo 64.- La Secretaría llevará la Cartografía Minera para constatar el carácter libre de los lotes que sean objeto de solicitudes de concesión y asignación mineras. En dicha Cartografía se representarán gráficamente la ubicación y el perímetro de los lotes amparados por concesiones, asignaciones y reservas mineras vigentes, al igual que por solicitudes de concesión y asignación mineras en trámite.

Toda persona podrá examinar la Cartografía Minera y solicitar a su costa planos de la misma.

CAPITULO OCTAVO
De las Inspecciones, Sanciones y Recursos

Artículo 65.- Las Secretarías y organismos públicos, en ejercicio de las facultades que les confiere la Ley, podrá practicar visitas de inspección con arreglo a las disposiciones siguientes:

I.- Designará uno o más inspectores, a los que comunicará su nombramiento y la orden de visita;

II.- Notificará a la persona a quien deba practicarse la inspección: el nombre del inspector; el objeto de la misma; los elementos, datos o documentos que deberá proporcionar; así como el lugar, fecha y hora de su verificación para que concurra por sí o debidamente representada;

III.- El inspector, una vez que se identifique, practicará la visita en el lugar y fecha señalados, ante la persona notificada o su representante debidamente acreditado. Si el lugar o domicilio no corresponden al visitado o éste se niega a proporcionar los elementos, datos o documentos que se le requieran, el inspector levantará acta donde hará constar lo anterior, firmada por dos testigos. En este último caso, se presumirá que el visitado incurrió en el incumplimiento de la obligación por verificar, salvo prueba en contrario;

IV.- Desahogada la inspección, el inspector levantará acta pormenorizada que deberá contener relación de los hechos y las manifestaciones del visitado, y será firmada por los asistentes al acto; si alguno se niega a firmarla se hará constar en ella, sin que tal circunstancia afecte el valor probatorio del documento. De dicha acta se entregará copia a quienes la suscriban;

V.- El inspector deberá rendir a la Secretaría un informe sobre el resultado de la inspección, dentro de un plazo máximo de 15 días naturales siguientes a su desahogo. Si los elementos de juicio que aporte el informe son insuficientes, la Secretaría ordenará se practique nueva inspección;

VI.- La Secretaría, con base en el informe y las pruebas documentales que se ofrezcan, fundamentará, motivará y dictará resolución;

VII.- En casos de urgencia las visitas de inspección podrán ejecutarse en cualquier momento;

VII.- En caso de obstaculización a las visitas de inspección, el inspector podrá hacer uso de medidas de apremio efectivas, incluyendo el auxilio de la fuerza pública;

Artículo 66.- Las infracciones a las disposiciones de la presente Ley se sancionarán con la cancelación de la concesión o asignación minera o multa;

Las infracciones serán sancionadas administrativamente por la Secretaría.

Artículo 67.- Se sancionará con la cancelación de la concesión minera cualquiera de las infracciones siguientes:

I.- Efectuar al amparo de la misma la explotación de minerales o sustancias no sujetos a la aplicación de la presente Ley;

II. No ejecutar y comprobar las obras y trabajos previstos por esta Ley en los términos y condiciones que señalan la misma y su Reglamento;

III.- Dejar de cubrir los derechos sobre minería;

IV. No tener en regla todas las licencias, permisos o autorizaciones que la actividad minera requiere para su funcionamiento;

V. No cumplir con los pagos por concepto de la prima por descubrimiento o de la contraprestación económica que en su caso corresponda cubrir, así como no rendir al Servicio Geológico Mexicano los informes semestrales a que se refiere el artículo 39, fracción X, de esta Ley;

VI. No sujetar las obras y trabajos de exploración o de explotación de carbón en todas sus variedades en terrenos amparados por asignaciones petroleras a las condiciones técnicas que fije la Secretaría;

VII. Realizar las obras y trabajos previstos por esta Ley sin las autorizaciones que señala el artículo 61 fracciones II, III,y IV de la presente Ley;

VIII.- Agrupar concesiones que amparen lotes mineros no colindantes para efectos de comprobación que no constituyan una unidad minera o minero-metalúrgica desde el punto de vista técnico y administrativo;

IX.- Recuperar, almacenar, transportar y prestar servicio de entrega del gas asociado que se derive de la recuperación y aprovechamiento de los yacimientos de carbón mineral, sin la autorización a que se refiere el artículo 19, fracción XIII, de esta Ley;

X.- Recuperar, almacenar, transportar y prestar servicio de entrega del gas asociado a los yacimientos de carbón mineral a que se refiere el artículo 30, fracción XIII, de esta Ley, simulando sin realizar las actividades para las que fue otorgada la concesión;

XI.- Enajenar el gas asociado que se derive de la recuperación y aprovechamiento de los yacimientos de carbón mineral;

XII.- Omitir información respecto al gas no asociado a los yacimientos de carbón mineral descubierto en las fases de exploración y explotación de los yacimientos de dicho mineral, o

XIII.- Perder la capacidad para ser titular de concesiones.

XIV. La autoridad de aplicación tendrá amplias facultades para verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los beneficiarios que deriven del régimen establecido por esta ley e imponer las sanciones pertinentes. A los fines de la presente ley constituyen incumplimiento las siguientes infracciones:

a) Falsedad de las informaciones presentadas bajo declaración jurada;

b) Omitir la presentación de las declaraciones juradas, vencido el plazo legal establecido y aquel que fijare la intimación que curse la autoridad de aplicación;

c) Omitir información, entrega de documentación u otras obligaciones que le fueran requeridas por la autoridad de aplicación, en virtud de las disposiciones establecidas en la presente ley, su reglamentación o de las normas complementarias y/o aclaratorias que ésta dice vencidos los plazos legales establecidos o aquellos que fijare la intimación que curse la autoridad de aplicación;

d) Reticencia en exhibir libros, información, documentación y/o comprobantes que le fueran requeridos por la autoridad de aplicación, en virtud de las disposiciones establecidas en la presente ley, su reglamentación o de las normas complementarias y/o aclaratorias que ésta dicte, vencidos los plazos legales;

e) Desafectar los bienes de capital, partes, accesorios e insumos introducidos al amparo de la liberación de los derechos y gravámenes establecida por el artículo 21 de la presente ley, para destinarlo a actividades no mineras, sin haber dado cumplimiento a los requisitos de desafectación establecidos por la presente ley

Se sancionará con la cancelación de la asignación minera que corresponda cualquiera de las infracciones previstas por las fracciones II, III, VI o VII anteriores, en lo conducente.

Artículo 68.- No procederá la cancelación por infracción cuando, dentro de un plazo de 60 días naturales, contados a partir de la fecha en que se notifique al interesado el inicio del procedimiento correspondiente, se acredite en relación con las causas señaladas en la fracciones II, III, V del artículo 69, respectivamente:

I. La presentación del o de los informes omitidos de comprobación a que se refiere el artículo 40 de esta Ley, así como el pago de la multa que determina el artículo 69, fracción XI de la misma;

II.- El pago de los derechos sobre minería omitida y demás accesorios originados por el incumplimiento, de acuerdo con las disposiciones fiscales aplicables;

III.- El pago actualizado de la prima por descubrimiento, conforme lo determine el Reglamento de la presente Ley, y

IV.- Que está sujeta a resolución administrativa o judicial la negativa de autorización por parte de la autoridad que tenga a su cargo los bienes, zona o áreas a que alude el artículo 20, párrafo segundo, de esta Ley.

Artículo 69.- Se sancionarán con multa equivalente de diez a dos mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, las infracciones siguientes:

I.- Extraer minerales o sustancias sujetos a la aplicación de esta Ley sin ser titular de la concesión minera o de los derechos correspondientes;

II.- Impedir sin derecho la realización de las obras y trabajos previstos por la presente Ley y su Reglamento a persona legalmente autorizada para efectuarlos;

III.- Retirar o destruir las obras permanentes de fortificación, los ademes y demás instalaciones necesarias para la estabilidad y seguridad de las minas;

IV.- Impedir u obstaculizar las visitas de inspección que practique el personal comisionado por la Secretaría;

V.- No concurrir por sí o debidamente representado a las visitas de inspección que practique la Secretaría, sin que medie causa justificada;

VI.- No designar al ingeniero responsable del cumplimiento de las normas de seguridad en las minas o encomendarle actividades que le impidan el desarrollo de sus funciones propias;

VII.- Omitir la notificación prevista en el artículo 46, párrafo segundo, de esta Ley, sobre las medidas necesarias para prevenir accidentes que no se adopten, cuando pongan en peligro la vida o integridad física de los trabajadores o de los miembros de la comunidad, o bien, no tomar las medidas procedentes, en caso de haberse recibido tal notificación;

VIII.- No dar aviso a la Secretaría del inicio de operaciones de beneficio;

IX.- Negarse a beneficiar el mineral de pequeños y medianos mineros y del sector social en condiciones competitivas, sin acreditar causa que lo justifique, de acuerdo con lo establecido por el artículo 49, fracción V, de esta Ley;

X.- Modificar la ubicación o dañar a la mojonera o señal que sirva para identificar al punto de partida de un lote minero;

XI. Comprobar extemporáneamente la ejecución en tiempo de las obras y trabajos previstos por esta Ley, a fin de dejar sin efecto el procedimiento de cancelación de una concesión minera, y

XII.- No rendir oportuna y verazmente los informes estadísticos, técnicos y contables en los términos y condiciones que fije el Reglamento de la presente Ley;

De existir reincidencia se podrá imponer hasta dos tantos del importe de la multa y cuando se trate de la infracción a que se refiere la fracción I hasta cien tantos del importe de dicha multa.

Para la imposición de la multa, la Secretaría tomará en cuenta la gravedad de la infracción, los daños y perjuicios que haya causado, al igual que los antecedentes, circunstancias personales y capacidad económica del infractor.

La aplicación de las multas establecidas en el presente artículo será sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiere resultar.

Artículo 70. Corresponde al titular de la concesión minera, al causahabiente de éste o al titular de la asignación minera, reclamar ante la autoridad judicial competente la extracción ilegal y la recuperación de los minerales o sustancias concesibles comprendidas dentro del lote minero amparado por la concesión o asignación minera.

Corresponde a la Secretaría reclamar ante las autoridades judiciales competentes la extracción ilegal y la recuperación de los minerales o sustancias concesibles, únicamente cuando se realice en terrenos libres, zonas de reservas mineras, áreas correspondientes a concesiones otorgadas mediante concurso y que posteriormente hayan sido canceladas, y lotes respecto de las cuales se hayan declarado desiertos los concursos respectivos.

Artículo 71.- La facultad de la Secretaría para verificar el cumplimiento de los deberes y obligaciones que impone esta Ley, así como para sancionar su inobservancia, se extinguirá en un plazo de diez años contados a partir de la fecha del incumplimiento o, si éste es de carácter continuo, a partir del día en que cese. La relativa al pago de los derechos sobre minería prescribirá de acuerdo con lo previsto por las disposiciones de la materia.

Artículo 72. Las resoluciones que dicte la Secretaría con motivo de la aplicación de la presente Ley y su Reglamento, podrán ser recurridas conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor 30 días naturales después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se abroga la Ley Minera publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 1992.

TERCERO.- El Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento de la presente Ley en un plazo máximo de 90 días, en tanto, en lo que no se oponga a la misma, se aplicará el Reglamento de la Ley Minera publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 1992.

CUARTO.- Las asignaciones y concesiones mineras expedidas a favor de particulares pierden por naturaleza su carácter inalienable e imprescriptible, así como el dominio directo del Estado en las actividades de la explotación y beneficio de minerales, en esas condiciones, al no reunir los requisitos obligados por el artículo 27 constitucional, renuncian al carácter de utilidad pública.

QUINTO.- Los trámites de cualquier naturaleza pendientes de resolución a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, se desahogarán ustentarán conforme a las disposiciones que la misma establece.

SEXTO.- Se respetarán Los tiempos de duración de las concesiones otorgadas con anterioridad al inicio de vigencia de esta Ley, en los espacios con evidente actividad minera.

Sede del Senado de la República a los veintinueve días del mes de abril de dos mil trece.

SENADORA IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA

DE LA SEN. CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN MATERIA DE TRABAJO INFANTIL.



SEN. MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR

INICIATIVA QUE PRESENTA LA SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DE LA LXII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJO INFANTIL.

La que suscribe, **MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR**, Senadora de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1; 164 numeral 1; 169 y 172 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Lo anterior, conforme a la siguiente:

Exposición de Motivos

El trabajo infantil, definido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es positivo siempre y cuando la participación de las niñas, los niños y los adolescentes en un trabajo no atente contra su salud y su desarrollo personal, ni interfiera con su escolarización. Usualmente este término es utilizado para definir todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico.

Las causas que lo originan y la búsqueda de mecanismos para erradicarlo, son temas que han generado un gran interés en la sociedad en general. En realidad el trabajo de los niños es una grave violación a los derechos elementales de la infancia ya que en México, según los últimos resultados publicados, hay 3,647,067 trabajadores de entre 5 y 17 años de edad, de un total de 29,203,394 niñas y niños en este mismo rango de edad. Esto significa que el 12,5 por ciento de la población infantil de 5 a 17 años está trabajando; más de la décima parte.

La problemática del trabajo infantil está estrechamente vinculada con el entorno social, cultural y económico de nuestro país, por lo que sus causas son muy diversas.

Una grieta en la legislación actual permite el trabajo desde los 14 años de edad sin importar qué tipo de trabajo realiza el menor y sin limitación alguna para laborar, edad que no es recomendada por la OIT, la cual es un factor determinante, ya que provoca que los niños que no han acabado su educación básica entren a trabajar, y tal vez nunca dejen de hacerlo, renunciando a su derecho a la educación básica.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) afirma que la educación de las niñas, niños y adolescentes resulta altamente rentable individual y socialmente. Es recomendable la dedicación de la niñez al estudio por lo menos de 10 a 12 años, y preferentemente llegar a un nivel de educación secundaria completa. Se estima que esto se traduciría en 80 por ciento de probabilidad de no caer en la pobreza.

Para poder interpretar de manera adecuada el problema del trabajo infantil, hay que tener en cuenta ciertas cifras y datos. Según la definición de trabajo infantil adoptada en el Módulo de Trabajo Infantil 2007 realizado por la OIT y UNICEF, son clasificados como trabajadores aquellos niñas y niños que han llevado a

cabo una actividad económica, por lo que en los más de 3,6 millones de trabajadores infantiles del país no están incluidos quienes trataron de obtener algún ingreso cuidando automóviles en las calles, limpiando parabrisas en los cruceros, cantando en el transporte público u ofreciendo diversos tipos de entretenimiento como las niñas y los niños "traga fuego", los que se acuestan sobre cristales rotos o los "payasitos", lo cual aumenta la cifra oficial de manera considerable, haciéndonos notar que puede ser que más de 5 por ciento de toda la población en México sean niños trabajando, evidenciando una gran deficiencia en el sector laboral.

La mayor parte de las niñas y los niños que trabajan ha cumplido los 14 años, específicamente 69 por ciento; pero 31 de cada 100 tienen entre 5 y 13 años; es decir, 31 por ciento de todos los trabajadores infantiles de México, casi la tercera parte, no tiene la edad mínima establecida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Ley Federal del Trabajo para incorporarse a las actividades laborales.

El tipo de actividad que llevan a cabo las niñas y los niños que trabajan y el tiempo que dedican a su trabajo son dos de los aspectos más importantes en la definición internacional del trabajo infantil, por el impacto negativo que ambos pueden tener en el desarrollo durante la niñez. El conocimiento de las circunstancias específicas en que se produce el trabajo permite identificar las condiciones adversas y la exposición a riesgos. La duración de la jornada laboral puede representar también una clara amenaza para el pleno goce de los derechos de los niños y las niñas cuando interfiere en el proceso de aprendizaje –asistencia a la escuela y desempeño escolar–, o cuando impide el ejercicio de otras actividades, como el juego y esparcimiento.

Una aproximación a la magnitud del problema es analizar la distribución de las niñas y los niños según el tiempo que invierten en su trabajo. El 35.5 por ciento de los trabajadores entre 5 y 17 años dedica un mínimo de 35 horas a la semana al trabajo, lo que significa un promedio de 5 horas diarias trabajando todos los días de la semana, ó 7 horas si lo hacen de lunes a viernes; a esto se le agrega que 14 de cada 100 niños y niñas que trabajan no tienen un horario regular.

Una de las consecuencias más reprobables del trabajo infantil se manifiesta en las dificultades que presentan las niñas y los niños que trabajan para asistir a la escuela; y, cuando sí asisten, las adversidades para lograr un desempeño adecuado.

En su expresión más aguda, el trabajo infantil tiene un efecto pernicioso en el proceso de formación escolar, interfiriendo en el ejercicio de uno de los derechos fundamentales de la niñez. Aunque existen varias razones por las que las niñas y los niños pueden no asistir a la escuela –no todas ellas vinculadas siempre con el trabajo– es importante conocer en qué medida la condición de estar en actividades laborales impide la asistencia escolar, afectando a este segmento de la población.

En México, la tasa de escolarización para el total de la población entre 5 y 17 años es de 89.5 por ciento, lo que significa que 10.5 por ciento de los niños y las niñas de este mismo rango de edad no asiste a la escuela. Este porcentaje se traduce, en términos absolutos, en 3,074,874 niños y niñas, de los cuales 52 por ciento son niños y 48 por ciento niñas. Asimismo, la incidencia de la inasistencia escolar está distribuida de manera similar en ambos grupos, dado que no concurren a un centro escolar el 10.9 por ciento de los niños y el 10.1 por ciento de las niñas.

Esto muestra que en México un alto porcentaje de las niñas y los niños que trabajan no están dedicando el tiempo necesario a la escuela para lograr una preparación adecauada y así poder tener en un futuro un trabajo bien remunerado.

Según las investigaciones de la CEPAL, cada año menos de educación básica se refleja en un 10 por ciento menos de ingresos en la vida adulta; y si trabajan y no asisten a la escuela, pueden percibir hasta seis veces menos ingresos que los que sí asistieron. Todo ello justifica plenamente que la infancia en edad escolar, entendida como la etapa de vida anterior a los quince años, se dedique exclusivamente a la escuela.

Un reciente estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha puesto de manifiesto que la erradicación del trabajo infantil en las economías en transición y en desarrollo puede generar beneficios económicos casi siete veces superiores a los costos, que están asociados con las inversiones en mejores tasas de escolaridad y en mejores servicios sociales.

El trabajo infantil es una violación de los derechos humanos fundamentales, habiéndose comprobado que entorpece el desarrollo de los niños y que, potencialmente, les produce daños físicos y psicológicos para toda la vida. Se ha demostrado en diversos estudios que existe un fuerte vínculo entre la pobreza de los hogares y el trabajo infantil, y que éste perpetúa la pobreza durante generaciones, dejando a los hijos de las familias con menores ingresos fuera de la escuela y limitando así sus posibilidades de ascender en la escala social.

Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión; considerando que el niño debe estar plenamente preparado para una vida independiente en sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las Naciones Unidas, en particular en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad; esta iniciativa tiene como objeto hacer valer todos estos derechos, empezando desde lo más básico al establecer en Ley la edad mínima para trabajar recomendada por la Organización Internacional del Trabajo.

Teniendo presente que la necesidad de proporcionar al niño una protección especial ha sido enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño, en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en los estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño, es menester reformar la legislación vigente para que se cumplan los tratados internacionales en la materia, proporcionando a las niñas y niños mexicanos un mejor desarrollo.

Debemos recalcar que esta problemática repercute no sólo en el destino de la niñez trabajadora, disminuyendo o anulando sus posibilidades de desarrollo –en una violación evidente de los derechos de la infancia–, sino que igualmente incide en el destino de México como nación.

Es por lo anterior que, a falta de la ratificación del Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual especifica que la edad mínima para empezar a laborar es de quince años, se propone establecer en la legislación vigente que la edad mínima para trabajar sea la pactada por la OIT, porque como se hace notar en la información anterior, nuestro país tiene que emprender una lucha en contra del trabajo infantil, garantizando los derechos fundamentales de los niños, procurando que las y los niños mexicanos asistan a la escuela como mínimo hasta cumplir la edad recomendada, completando los estudios de educación básica antes de emprender una vida laboral.

En medio de la creciente preocupación sobre el impacto de la desaceleración económica, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) advirtió en un informe que los esfuerzos para eliminar las peores formas de trabajo infantil están perdiendo fuerza, y exhortó a "revitalizar" la campaña mundial para erradicar esta práctica.

Adicionalmente, en su Informe global sobre trabajo infantil dice que el número mundial de niños trabajadores ha disminuido de 222 millones a 215 millones durante el período 2004 – 2008, es decir un 3 por ciento, lo cual representa "una desaceleración en el ritmo de reducción a nivel mundial". El informe también menciona la preocupación de que la crisis económica mundial pueda "frenar" el avance hacia el objetivo de eliminar las peores formas de trabajo infantil para el año 2016.

Las peores formas de trabajo infantil, según el Artículo 3 del Convenio número 182 de la OIT, son aquellas que ponen en peligro el desarrollo, físico, mental o moral del niño, sea par su naturaleza o por las condiciones en las que se efectúa.

a) "todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud como la venta y la trata de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados;
b) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas;
c) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se definen en los tratados internacionales pertinentes, y
d) el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños."

En el informe de la OIT, "Intensificar la lucha contra el trabajo infantil", se presentan estimaciones detalladas sobre esta práctica. El más alto mejoramiento se ha registrado entre las niñas y los niños de 5 a 14 año, en este grupo, la incidencia disminuyó en un 10 por ciento. Entre las niñas disminuyó de manera considerable en un 15 por ciento; sin embargo, aumentó entre los niños en un 7 por ciento. Además, el trabajo infantil entre los jóvenes de 15 a 17 años aumentó en un 20 por ciento, de 52 millones a 62 millones.

Dando seguimiento a la discusión sobre el Informe Global durante la Conferencia Internacional del Trabajo en junio de 2010, el Consejo de Administración de la OIT, integrado por representantes de Alemania, Brasil, China, Estados Unidos, Francia, India, Italia, Japón, Reino Unido y Federación de Rusia, países con mayor importancia industrial, aprobó, en noviembre de ese mismo año, el Plan de Acción Mundial para la Eliminación de las Peores Formas de Trabajo Infantil para 2016 –el ambicioso objetivo que se propuso por primera vez en el Informe global sobre trabajo infantil de 2006. El Plan de Acción Mundial de 2010 presenta un programa estratégico y un plan de acción para la OIT y, en particular, para el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC), que se aplicará durante los próximos años hacia el logro de su objetivo en 2016. El Plan de Acción incorpora y hace referencia específicamente a la Hoja de Ruta adoptada durante la Conferencia Mundial sobre Trabajo Infantil, llevada a cabo en La Haya, en mayo de 2010

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de Senadora de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único: se adicionan los artículos 23bis, 23 ter, 23 quarter y 173 bis, 173 ter y 173 quarter a la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 23 Bis.- Queda estrictamente prohibido el trabajo de menores de 14 años en todo el territorio nacional.

Artículo 23 ter.- A los efectos del presente ordenamiento, el término "niño" designa a toda persona menor de 14 años.

Artículo 23 quarter.- La definición de peores formas de trabajo infantil, abarca, entre otros:

a. todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y la trata de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados;
b. la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas;
c. la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se definen en los tratados internacionales pertinentes, y
d. el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.

Artículo 173bis.- La autoridad competente tendrá la obligación de realizar inspecciones periódicas con el fin de localizar dónde se practican los tipos de trabajo infantil y proceder a su denuncia ante el ministerio público.
Deberá examinar periódicamente y, en caso necesario, revisar la lista de los tipos de trabajo determinados al tenor de lo establecido en el artículo 23 quarter,

Articulo 173 ter.- Las autoridades competentes tales como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Procuraduría General de la República y aquellas que se consideren pertinentes deberán establecer o designar mecanismos apropiados para vigilar la aplicación de las disposiciones por las que se dé efecto al presente ordenamiento.

Artículo 173 quarter.- Las autoridades competentes mencionadas deberán elaborar y poner en práctica programas de acción para eliminar, como medida prioritaria, el trabajo infantil.

Dichos programas de acción deberán elaborarse y ponerse en práctica en consulta con las instituciones gubernamentales competentes y las organizaciones de empleadores y de trabajadores, tomando en consideración las opiniones de otros grupos interesados, según proceda.

Asimismo, se deberán adoptar, teniendo en cuenta la importancia de la educación para la eliminación del trabajo infantil, medidas efectivas y en un plazo determinado con el fin de:

a) impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil;
b) prestar la asistencia directa necesaria y adecuada para librar a los niños de las peores formas de trabajo infantil y asegurar su rehabilitación e inserción social;
c) asegurar a todos los niños que hayan sido librados de las peores formas de trabajo infantil el acceso a la enseñanza básica gratuita y, cuando sea posible y adecuado, a la formación profesional;
d) identificar a los niños que están particularmente expuestos a riesgos y entrar en contacto directo con ellos, y
e) tener en cuenta la situación particular de las niñas.

El titular del Ejecutivo deberá designar a la autoridad competente encargada de la aplicación de las disposiciones por las que se dé efecto al presente ordenamiento.

Artículo transitorio: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEN. CRISTINA DÍAZ SALAZAR

DEL SEN. MARIO DELGADO CARRILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 5 Y 31 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE ABOLICIÓN DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL.



SEN. MARIO DELGADO CARRILLO

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES EN MATERIA DE ABOLICIÓN DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL.

MARIO DELGADO CARRILLO, Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72, 73, fracción XIV y 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1, fracción I, 163, numeral 1, fracción I, 164, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa, misma que se presenta en conjunto con la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN y ABROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE ABOLICIÓN DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL, como reglamentación secundaria de las disposiciones superiores que resultan de la presente, de conformidad a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las obligaciones constitucionales toman su sentido propio con la historia. Se contextualizan y, en la mayoría de los casos, alcanzan nuevos sentidos a partir de su evolución histórica.

Entre derecho e historia hay un lazo común, pues a cada etapa de la historia corresponde un derecho, y el derecho es también expresión normativa de la realidad social.

El Servicio Militar Mexicano puede definirse como el mandato constitucional que los jóvenes en edad militar están obligados a cumplir encuadrados o a disponibilidad en los diversos centros de adiestramiento militar. Dicha instrucción militar obligatoria, se lleva a cabo para todos los ciudadanos mexicanos de sexo masculino, entre los 18 y los 40 años.

La importancia del Servicio Militar Nacional radica en disponer de reservas para coadyuvar en la seguridad y defensa de la Nación, contribuir al auxilio de la población civil en caso de necesidades públicas o de desastres naturales, así como para fortalecer los valores, el respeto por los símbolos patrios y mantener el sentimiento de unidad nacional y amor a la Patria.

Sin embargo, hoy en día el Servicio Militar en México ha evolucionado de su sentido original, tanto por razones históricas, económicas, sociales y culturales.

El enrolamiento voluntario forma a los contingentes armados, que después, organizados debidamente, se institucionalizan para servir a la Patria, en el Ejército y Fuerza Armada actuales.

Con la historia como su justificación, el sistema de reclutamiento hubo de expandir sus horizontes. Las necesidades de la Defensa Nacional así lo determinaron; en 1939, con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, fue necesaria la reorganización del Ejército y Fuerza Armada Mexicanos, mediante el reclutamiento extenso de civiles, lo cual implicó su entrenamiento inminente para afrontar el servicio. Estas consideraciones, hicieron indispensable recurrir al sistema de alistamiento para el reclutamiento del personal del Ejército.

En tal virtud, se juzgó conveniente resolver los aspectos de la Defensa Nacional, relacionados con la Instrucción Militar y al Servicio Militar Nacional obligatorio, para lo cual fue necesario fortalecer los efectivos del Ejército con reservas capaces de responder con éxito a las exigencias militares.

De tal suerte, para resolver los problemas que enfrentaba la Defensa de la Nación, se adoptó el sistema del Servicio Militar obligatorio a fin de poner en las reservas del Ejército a todos los habitantes útiles del país y hacer posible, llegado el caso, la movilización de cuantos contingentes necesitara la Patria para enfrentarse a cualquier peligro exterior.

Adicionalmente, para solventar tal situación se crearon leyes y se implementaron programas para adiestrar y alojar a soldados del Servicio Militar Nacional.

En este contexto, el 19 de agosto de 1940, se reguló el Servicio Militar Nacional, con la promulgación de su Ley y Reglamento específicos, iniciándose la materialización de este servicio con los jóvenes varones en edad militar.

Así, con base en la legislación en la materia, el servicio de las armas se debe prestar de manera obligatoria, por un año en el Ejército activo, por parte de los ciudadanos masculinos que tengan 18 años de edad.

En un principio, el Servicio Militar Nacional se cumplía acuartelado bajo banderas; así, dependiendo de los resultados de los sorteos, se encuadraba el personal que resultaba agraciado.

En ese tenor, a partir de 1949, durante 30 años, el Servicio Militar Nacional se llevó a cabo mediante sesiones dominicales de 5 horas de duración; fungiendo como instructores de los centros de adiestramiento, en su minoría personal de Jefes, Oficiales y Tropa del Activo; en su mayoría, Generales, Jefes, Oficiales y Tropa Retirados; Oficiales de Complemento (surgidos de los mismos conscriptos) por lo regular Subtenientes Profesores de Educación Física y Deportes; así como Maestros de Escuela.

Ahora bien, a partir de 1979, se llevó a cabo la reestructuración del Servicio Militar Nacional, disponiendo que fuese impartido en las unidades, escuelas, dependencias y unidades del Servicio Militar Voluntario del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, únicamente el personal que estuviera en capacidad de adiestrarse, organización que prevaleció hasta el año de 1996.

En 1997, se reorientó el cumplimiento del Servicio Militar Nacional, a efecto de que los conscriptos coadyuvarán con el desarrollo del país aplicando 5 programas de beneficio social, a saber: educativo, deportivo, rescate del acervo cultural, marcha contra las adicciones y de labor social; dicha estructura, prevaleció hasta el año de 2005 y a partir de 2006 únicamente se desarrolló el programa de adiestramiento militar.

Desde entonces, el personal excedente, después de haber cubierto las cuotas asignadas a los centros de adiestramiento, cumple en situación de disponibilidad.

Como puede notarse, el Servicio Militar Nacional ha ido evolucionando según las relaciones internacionales, la institucionalización del país, y las condiciones sociales de un México con mayor población, pero también con necesidades básicas y de justicia social que enfrentar.

No obstante lo anterior, en la actualidad, por lo que hace a la práctica del Servicio Militar obligatorio, los encuadrados realizan labores de trabajo social, mediante las cuales desempeñan actividades relacionadas con la cultura cívica y el desarrollo social del país, como por ejemplo: entrenamiento físico (marchar, correr, saltar obstáculos y bardas); clases de primeros auxilios; servicio a la comunidad (alfabetización, educación física en parques, poda de árboles, pinta de guarniciones y banquetas, limpia de parques, barrancas y calles), principalmente.

En virtud de lo anterior, proponemos de manera respetuosa se analice la viabilidad de abolir el Servicio Militar Nacional obligatorio, toda vez que el servicio militar encuentra su debida protección en el enrolamiento voluntario, conforme a las leyes que lo rigen, allende que los jóvenes y la población en general ejercitan con mayor empuje los actuales derechos humanos de la paz, de la solidaridad y de la cultura, entre otros, todos de tercera generación de derechos, y por lo tanto, los compromisos morales de solidaridad con los más necesitados pueden ser cumplidos a través de otros campos de acción y otras vías institucionales.

En ese tenor, el de los derechos de asumir plenamente la libertad individual y el compromiso con la justicia para todos, el Servicio Militar Nacional debe evolucionar, manteniendo la obligación de servir a la Patria, hacia una decisión directa y personal.

México es un país que busca la paz, la solución pacífica de los conflictos, y para garantizar su seguridad interior y exterior, cuenta con profesional cuerpo de Seguridad Nacional, como son el Ejército, la Fuerza Área y la Marina.

Es importante mencionar, que el objeto del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Mexicanos, tal y como lo señalan sus leyes orgánicas, es brindar el Servicio de las Armas.

México está agradecido con su Ejército, Fuerza Aérea y Armada. El pasado 19 de febrero de 2013, se conmemoró el centenario de la creación del Ejército Mexicano, donde se reconocieron las acciones de una de las instituciones que más confianza genera en la población: el personal militar.

En este sentido, es incuestionable la labor encomiable del Ejército y la Armada de México en los asuntos de la Defensa Nacional.

La Defensa Nacional está garantizada. En el Sexto Informe de Gobierno se reporta que hasta junio de 2012, el número de efectivos ascendió a 263,930 elementos. Del total, 209,716 (79.5%) fueron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y 54,214 (20.5%) de la Secretaría de la Marina-Armada de México (SEMAR), lo que representó un incremento del 1.8% y 1.1%, respectivamente, en relación con 2011.

Es preciso también reconocer que hoy en día, la realidad global y local es muy distinta a la del siglo pasado. De una situación de conflicto bélico latente o presente, hemos de dar paso decidido a un México en paz.

La actualización del marco jurídico en las materias fundamentales, requiere apreciar el paso de la historia, y mucho más cuando se trata de las obligaciones de los mexicanos y de los ciudadanos.

Ayer la obligatoriedad del Servicio Militar Nacional en un contexto de conflicto, hoy una libertad y una responsabilidad social libremente asumida en un contexto de paz.

En síntesis, mantener la obligatoriedad para que los ciudadanos en edad castrense cumplan con el Servicio Militar Nacional, hoy resulta alejada de la esfera del tiempo.

Hoy la historia propone una abolición y toca a los legisladores hacer una valoración para ampliar los márgenes de libertades públicas y de ejercicios sociales que beneficien a los que menos tienen, en un acto de justicia social.

Un tiempo de libertades, un tiempo para la paz.

Por las razones, antecedentes y elementos de información señalados, tengo a bien someter a la consideración de esta Honorable Cámara, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 5 y 31 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN

MATERIA DE ABOLICIÓN DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL.

ARTÍCULO PRIMERO: Se reforman los artículos 5 y 31 de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS para quedar como sigue:

Artículo 5. …
…
...
En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los términos que establezcan las leyes respectivas, el de los jurados, así como el desempeño de los cargos concejiles y los de elección popular, directa o indirecta. Las funciones electorales y censales tendrán carácter obligatorio y gratuito, pero serán retribuidas aquéllas que se realicen profesionalmente en los términos de esta Constitución y las leyes correspondientes. Los servicios profesionales de índole social serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley y con las excepciones que ésta señale.
…
...
...
...

Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:

I. Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, para obtener la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, en los términos que establezca la ley.
II. Asistir, en los días y horas designados por el Ayuntamiento del lugar en que residan, para recibir instrucción cívica que los mantenga aptos en el ejercicio de los derechos de ciudadano.
III ...
IV…

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación.

SEGUNDO.- Publíquese en el Diario Oficial Federal para su debida observancia.

TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República
a 30 de abril de 2013

DEL SEN. MARIO DELGADO CARRILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, DE LA LEY ORGÁNICA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ARMADA DE MÉXICO, DEL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR Y SE ABROGA LA LEY DEL SERVICIO MILITAR.



SEN. MARIO DELGADO CARRILLO

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN y ABROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE ABOLICIÓN DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL.

MARIO DELGADO CARRILLO, Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72, 73, fracción XIV y 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1, fracción I, 163, numeral 1, fracción I, 164, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa, misma que se presenta en conjunto con la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES EN MATERIA DE ABOLICIÓN DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL, como reglamentación secundaria de las disposiciones superiores que resultan de la presente, de conformidad a la siguiente:

Exposición de Motivos

La presente iniciativa reglamenta las disposiciones constitucionales contenidas en la diversa CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES EN MATERIA DE ABOLICIÓN DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL.

Por medio de ambas propuestas, se pretende la abolición del Servicio Militar Nacional toda vez que, dada la fecha histórica en la que se concibió la obligatoriedad del Servicio Militar Nacional, fue forzoso constituir las reservas militares necesarias para la Defensa de la Nación de manera circunstancial; no obstante, en la actualidad las previsiones legales no han evolucionado a la par de la historia.

El Servicio Militar Mexicano puede definirse como el mandato constitucional que los jóvenes en edad militar están obligados a cumplir encuadrados o a disponibilidad en los diversos centros de adiestramiento militar. Dicha instrucción militar obligatoria, se lleva a cabo para todos los ciudadanos mexicanos de sexo masculino, entre los 18 y los 40 años.

La importancia del Servicio Militar Nacional radica en disponer de reservas para coadyuvar en la seguridad y defensa de la Nación, contribuir al auxilio de la población civil en caso de necesidades públicas o de desastres naturales, así como para fortalecer los valores, el respeto por los símbolos patrios y mantener el sentimiento de unidad nacional y amor a la Patria.

Sin embargo, hoy en día el Servicio Militar en México ha evolucionado de su sentido original, tanto por razones históricas, económicas, sociales y culturales.

A diferencia del año de creación del Servicio Militar Nacional, en la actualidad, México no se encuentra inmerso ni cercano a un conflicto bélico.

Esta divergencia entre evolución histórica y expresión legal, se hace patente cuando se revisan los diversos instrumentos legales que le dieron fundamento y razón de ser.

La Ley Orgánica de la Armada de México dispone que la Armada de México es una institución militar nacional, de carácter permanente, cuya misión es emplear el poder naval de la Federación para la defensa exterior y coadyuvar en la seguridad interior del país; en los términos que establece la Carta Magna, las leyes que de ella derivan y los tratados internacionales.

Por otro lado, la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, establece que el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos son instituciones armadas permanentes que tienen las misiones generales de defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación; garantizar la seguridad interior; auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas; realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país; y en caso de desastre, prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas.

Asimismo, la Ley del Servicio Militar y su Reglamento declaran obligatorio y de orden público el servicio de las armas para todos los mexicanos por nacimiento o naturalización, quienes lo prestarán en el Ejército o en la Armada, como soldados, clases u oficiales, de acuerdo con sus capacidades y aptitudes.

Concatenando lo anterior, se advierte que los elementos que integran tanto la Armada como el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos deben ser organizados, adiestrados y equipados conforme a los requerimientos que reclame el cumplimiento de sus misiones, y para ello están en capacidad legal para realizar el servicio de manera voluntaria.

En este contexto, a lo largo de la historia de nuestro país el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Mexicanos han demostrado la legalidad, el profesionalismo y la lealtad a la Patria.

En esa tesitura, cabe reiterar, que esta iniciativa de ley valora las siguientes precisiones:

1. La inadecuación de las normas jurídicas del Servicio Militar Nacional con la realidad actual.

2. La inserción en el Servicio de las Armas debería ser una decisión libre y personal en lugar de ser una obligación legal.

3. El Servicio de las Armas requiere convicción, vocación, conocimiento, experiencia y profesionalismo.

4. Actualmente, de hecho y jurídicamente, el Servicio Militar Nacional no corresponde con su génesis histórica ni a los actuales tiempos de derechos de la paz, la solidaridad y la cultura, propios de la tercera generación de derechos.

Ahora bien, por lo que refiere a la propuesta de eliminar la obligatoriedad del Servicio de las Armas, se debe considerar que México es un país que apuesta por la paz, que el personal de las armas se alista de manera voluntaria, tal y como lo prevé la normatividad actual, que el Ejército, la Fuerza Aérea y Armada Mexicanos deben seguir prestando sus servicios leales a la Patria realizando actividades que estén vinculadas inherentemente al Servicio de las Armas.

Por los elementos expuestos, tengo a bien someter a la consideración de esta Honorable Cámara, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 29 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL; 5/O, 149, 180 Y 181 DE LA LEY ORGÁNICA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS; 48, 50, 72 Y 88 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ARMADA DE MÉXICO Y 275 DEL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR, SE DEROGA EL ARTÍCULO 7/O DE LA LEY ORGÁNICA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS, Y SE ABROGA LA LEY DEL SERVICIO MILITAR.

ARTÍCULO PRIMERO: Se reforma el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 29.- A la Secretaría de la Defensa Nacional, corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I.- ...
II.- Se deroga.
III a la XX. ...

ARTÍCULO SEGUNDO: Se reforman los artículos 5/o, 7/o, 149, 180 y 181 de la LEY ORGÁNICA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS para quedar como sigue:

ARTICULO 5/o. Los miembros del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, por norma Constitucional pertenecen al Servicio Militar.

ARTICULO 7/o. Se deroga.

ARTICULO 149. El Reclutamiento del personal de tropa del Ejército y Fuerza Aérea, se llevará a cabo por enganche voluntario, seleccionando a los individuos que lo soliciten, bajo las condiciones estipuladas en los contratos de enganche correspondientes.

ARTICULO 180. La primera reserva se integra con:

I. …
II. Los Cabos y Soldados del Servicio Militar que cumplan su tiempo de enganche en el activo, quienes permanecerán en esta reserva, hasta los 36 años de edad;
III. Se deroga.
IV. Se deroga.
V …
VI...

ARTICULO 181. …

I. Los Cabos y Soldados del Servicio Militar hasta los 45 años de edad;
II. Se deroga; y
III. Los demás mexicanos a que se refiere la fracción V del Artículo anterior hasta los 40 años de edad.

ARTÍCULO TERCERO: Se reforman los artículos 48, 50, 72 y 88 de la LEY ORGÁNICA DE LA ARMADA DE MÉXICO para quedar como sigue:

Artículo 48.- El reclutamiento del personal de marinería se efectuará por contrato de enganche voluntario, de acuerdo con las condiciones y términos establecidos en el mismo.

Artículo 50.- El personal de la milicia auxiliar se reclutará por contrato de enganche voluntario, según las condiciones y términos establecidos en el mismo. Podrá reengancharse o causar baja de acuerdo a lo contenido en la presente Ley y los reglamentos correspondientes.

Artículo 72.- El personal se encuentra en servicio activo cuando está:

I. Prestando sus servicios en unidades y establecimientos navales;
II a la V …

Artículo 88.- La primera reserva se integra con personal físicamente apto de:

I. …
II…
III. Oficiales, clases y marinería hasta las edades de treinta y seis, treinta y tres y treinta años, respectivamente;
IV a la VIII …

ARTÍCULO CUARTO: Se reforma el artículo 275 del CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR, para quedar como sigue:

Artículo 275.- Lo que por causas legítima se hubieren dispersado del cuerpo de tropas o buque a que pertenezcan, serán castigados como desertores, según las circunstancias que hayan intervenido en su separación, si tan luego como les fuera posible, no se presentaren a su mismo cuerpo de tropas o buque o a otras fuerzas o buques de guerra nacionales o a la autoridad militar, marítima o consular más próxima.

Las mismas reglas se observarán respecto de los militares que habiendo caído prisioneros de guerra, no se presenten oportunamente a quien corresponda después de recobrar su libertad.

Se impondrá la pena de un mes de prisión al miembro de las reservas del Ejército o de la Guardia Nacional, que, sin impedimento justificado, no se presente al lugar que se le designe en el llamamiento, dentro del plazo correspondiente.

Se deroga.

Se deroga.

ARTÍCULO QUINTO: Se abroga la LEY DEL SERVICIO MILITAR.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación.

SEGUNDO.- Publíquese en el Diario Oficial Federal para su debida observancia.

TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al presente Decreto.

CUARTO.- Todos los recursos financieros presupuestados para dar cumplimiento a las disposiciones del Servicio Militar nacional que a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto no hayan sido ejercidos por las autoridades militares o navales correspondientes, o cualquier otra autoridad federal, deberán ser reintegrados dentro de los 30 días naturales siguientes a la Tesorería de la Federación. La Secretaría de Educación Pública deberá realizar las adecuaciones presupuestales correspondientes para que dichos recursos sean destinados a los programas de estímulos a la educación media superior.

SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República
a 30 de abril de 2013.

DEL SEN. MARIO DELGADO CARRILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, PARA CREAR EL PROGRAMA PREPA SÍ A NIVEL NACIONAL Y EVITAR LA DESERCIÓN ESCOLAR.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES LEGALES PARA CREAR EL PROGRAMA PREPA SÍ A NIVEL NACIONAL Y EVITAR LA DESERCIÓN ESCOLAR

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CÁMARA DE SENADORES
H. CONGRESO DE LA UNIÓN
PRESENTE

SEN. MARIO DELGADO CARRILLO, SEN. ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO, SEN. ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ, SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, SEN. RAÚL MORÓN OROZCO, SEN. MIGUEL BARBOSA HUERTA, SEN. RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, SEN. FIDEL DEMEDICIS HIDALGO, SEN. ADOLFO ROMERO LAINAS y SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, quienes suscriben**,** Senadoras y senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72, 73, fracción XXV y 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1, fracción I, 163, fracción I, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, me permito presentar a esta Honorable Cámara de Senadores la presente Iniciativa con proyecto de Decreto, de conformidad a la siguiente:

Exposición de Motivos

Los países que más han crecido en los últimos años han invertido de manera importante en educación. La economía de hoy está enlazada firmemente al conocimiento y éste depende, en última instancia, de la educación.

Toda sociedad tiene la capacidad de aumentar su potencial de desarrollo económico y social a través de la educación. Con ella, los individuos conocen sus capacidades intelectuales, artísticas y deportivas; reciben información que los estimula a desarrollar sus aptitudes y habilidades al máximo, permitiéndoles conocer el lenguaje de la ciencia, la técnica y el arte. Se hacen parte de una sociedad al conocer su historia, leyes, tradiciones y costumbres. Gracias a la educación se forma una nación y se educa a sus miembros. La importancia personal y social de la educación es fundamental.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 1 de cada 4 mexicanos son jóvenes. 7.8 millones de jóvenes no estudian ni trabajan. México tiene aproximadamente 27 millones de estudiantes, alrededor de 1.1 millones de docentes y 220,000 escuelas. Como señala OCDE, la amplia cobertura de la educación obligatoria ha sido un gran logro nacional. Aunque la proporción de jóvenes que ha alcanzado el nivel medio superior casi se ha duplicado, alcanzando un 44%, sigue siendo aproximadamente la mitad del promedio de OCDE que es de 82%; esto sin considerar que la tasa de deserción escolar sigue siendo elevada.

OCDE, *en Getting it Right,* señala que ampliar las oportunidades de empleo para los jóvenes y los grupos desfavorecidos en México requiere no sólo medidas para aumentar el nivel de educación y preparación, sino

también facilitar la transición de la escuela al mercado laboral; también se requieren iniciativas que fortalezcan el desarrollo local en aquellas zonas donde la pobreza es la más elevada.

En la crisis económica de 2008-2009, los más afectados en el mercado laboral fueron las personas menos calificadas y los jóvenes (OCDE, *Getting it Right).* Incluso los jóvenes mucho más que la población con poca calificación para el trabajo. Aunque el empleo formal se redujo 5 por ciento, la tasa de pérdida de empleos fue dos o tres veces mayor entre los trabajadores no calificados y los jóvenes.

La proporción de jóvenes que no trabajan ni estudian es la segunda más grande entre los países OCDE después de Turquía. El bajo nivel de educación se refleja cuando se observa que menos de la mitad de los adultos jóvenes (de edades entre los 25 y 34 años) habían terminado su educación media superior en 2010 (OCDE, *Getting it Right),* cuando el promedio OCDE supera el 80 por ciento.

En 2012, el país estableció la obligatoriedad de la educación media superior. Sin embargo, la meta planteada de universalidad para 2022 se podrá ver en entredicho a menos que se ataquen las causas de la deserción escolar, entre las que destaca la falta de recursos económicos. OCDE señala que los niveles de participación de los estudiantes menos favorecidos podrían elevarse con una mejor orientación vocacional y servicios de asesoría, así como con esquemas de apoyo económico.

Hoy lo que se presenta como reto es hacer una verdadera educación desde la perspectiva de los jóvenes y apoyarlos ante las carencias económicas. Se trata de una carencia que tiene que ser solucionada de raíz. No podemos dejar que los jóvenes pierdan, por falta de equidad y justicia, sus oportunidades.

I. La realidad de los jóvenes

Si bien en nuestro país se ha avanzado en los últimos años en la construcción de planteles escolares suficientes para garantizar la cobertura en todos los niveles, los jóvenes están abandonando su educación por falta de recursos. Según la organización civil, Mexicanos Primero, de cada cien niños que inician la primaria, sólo 64 la terminarán adecuadamente; 45 acabarán la secundaria; 27 terminarán el bachillerato, 13 egresan de licenciatura y sólo 2 concluyen un posgrado[1]. Eso implica falta de eficiencia de los recursos económicos aplicados al rubro educativo del país y que los talentos y habilidades de miles de personas no se desarrollen totalmente.

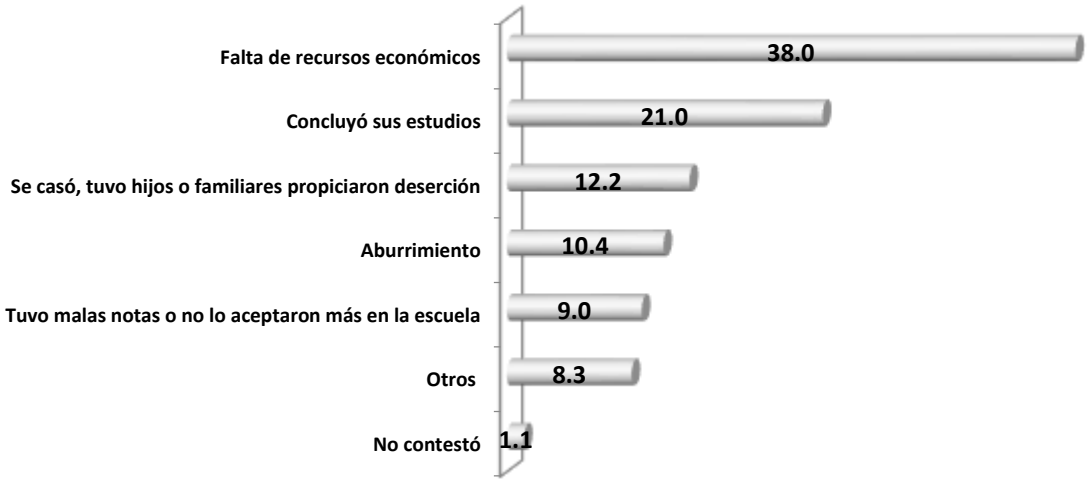
Es necesario que se atiendan las causas de esa deserción y en especial aquéllas que se vinculan a la falta de recursos económicos para continuar en la escuela.

Entre los motivos de deserción podemos mencionar principalmente los gastos educativos (materiales, libros etc); los costos de traslado, que por existir menor número de planteles los desplazamientos casa-escuela y viceversa son más largos y consumen más tiempo y dinero; o el costo de oportunidad educacional, que se da en aquellos que revaloran la conveniencia de la meta de ser un profesionista –ya que les falta 4 a 7 años, según el periodo escolar y la carrera elegida-, porque las ofertas laborales casi no cambian; es decir, que en algunos casos no existe gran diferencia económica entre aquel que tiene secundaria completa y aquel que es pasante, por lo que el costo de oportunidad educacional de un estudiante que tiene que trabajar es relativamente alto prolongado y constante.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Juventud 2010, el motivo principal para que los jóvenes dejen la escuela es por falta de recursos económicos, ya sea porque tienen que trabajar, porque no tienen dinero o porque no pueden pagar la escuela.

PROPORCIÓN PORCENTUAL DE LOS FACTORES QUE INCIDEN EN QUE LOS JÓVENES DEJEN SUS ESTUDIOS.

[1] Fuente: Mexicanos Primero (2010) con datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP)



Fuente: ENJUVE 2010

Entre otras razones, esos son los motivos por los que actualmente hay 7 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan. Se ha lanzado a una generación socialmente excluida que reproduce y agrava la desigualdad estructural en México.

A pesar de que diversos sectores sociales coinciden en la necesidad de invertir en la educación; de invertir en nuestros jóvenes y su futuro educativo, en México se tienen pocos y eficientes esquemas para invertir en esa formación e integración del capital humano al desarrollo, desaprovechando la situación única e histórica en términos poblacionales: aun tenemos por delante dos décadas de bono demográfico.

De continuar con el actual escenario, de bajas tasas de crecimiento económico y productividad marginal del trabajo negativa, la bonanza demográfica de jóvenes que bien pudieran acelerar el crecimiento económico y como consecuencia reducir la pobreza, se verá traducida en una generación empleada con bajos salarios y poca movilidad social.

Además, la delincuencia organizada, el narcotráfico y la violencia, han afectado con mayor crueldad a los jóvenes. Prueba de ello es que un tercio de las víctimas de la delincuencia en nuestro país tiene menos de 20 años.

La reorientación del gasto público para la educación y formación de los jóvenes debe ser una prioridad del Gobierno Federal porque, entre otras cosas, se tiene que compensar la desigualdad de oportunidades que de origen ha sido generada por la inequitativa estructura de distribución del ingreso.

El presente proyecto busca fomentar que la educación de los jóvenes en los niveles medio superior sea continua y evitar con ello la deserción por medio de una reorientación del gasto público canalizado eficiente y directamente a un sistema de estímulos a escala nacional. Con esta medida no sólo se verían beneficiados de manera inmediata millones de jóvenes, sino que ayudaría a romper con la reproducción de patrones de conducta que son resultado de la histórica estructura de inequidades en el país; impulsaría una economía más competitiva gracias a la formación de capital humano, propiciaría una mejor distribución del ingreso y en consecuencia incentivaría un mayor desarrollo para la Nación.

II. El bono demográfico y la educación media superior

El bono demográfico de nuestro país, entendido como el bloque de grupos de jóvenes en edad normativa de estudio en diversos niveles, es todavía de dos décadas, lo que significa que somos un país de jóvenes y que la tasa de dependencia económica alcanzará su punto más bajo para 2020.

Lo anterior porque la relación de personas activas (entre 15 y 64 años), será mayor que la de personas inactivas (de 0 a 14 años y mayores de 65), como una situación única en la historia moderna de nuestro país. Esto es una bonanza poblacional porque hay pocos niños y adultos mayores dependientes de la población que está en edad de trabajar, condición que bajo escenarios de crecimiento económico permitiría obtener un ahorro interno tal, que en un periodo corto de tiempo fomentaría las inversiones necesarias para generar más empleos y sostener a los dependientes económicos.

Según datos del Censo 2010, México tiene una población de 112.3 millones de personas, de las cuales, casi 30 millones son jóvenes cuya edad va de los 15 a 29 años, lo que representa el 26.4% de la población nacional.

En este segmento de jóvenes se encuentran aquéllos entre los 15 y 19 años, y se consideran dentro de la edad normativa para cursar el nivel educativo medio superior. Representan 11 millones de personas y el 9.8% del total de habitantes en el país.

Sin embargo, según el último informe de labores de la Secretaría de Educación Pública (SEP, 2012), de esos 11 millones, sólo 4.3, el 38.8%, se encuentra estudiando el nivel medio superior. De igual forma, de esos estudiantes, aproximadamente 1.3 millones reciben alguna beca, lo cual representa el 30.5% de esos alumnos y el 11.6**%** de la población entre 15 y 19 años.

Si relacionamos el bono demográfico con la inversión en educación de los jóvenes entre 15 y 19 años, podemos observar que ésta ha sido insuficiente e incapaz de absorber la demanda. Mientras que a nivel básico existe una cobertura mayor de 91.5 por ciento, en promedio de 1990-2012, para la educación media superior la cobertura asciende a 69.3%[2] para el 2012.

En resumen, casi 32% de jóvenes entre los 15 y 19 años de edad en México sigue sin acceso a la educación media superior, y con esto pierden la posibilidad de insertarse competitivamente a una vida laboral y mejorar sus condiciones de desarrollo.

La Iniciativa de Decreto que se propone no sólo fomentaría de manera inmediata que ese nivel de estudiantes en activo se mantuviera, si no que combatiría de manera significativa la deserción y desalentaría campos negativos de acción que no corresponden a los jóvenes.

III. Cobertura e igualdad de oportunidades en el acceso al nivel educativo medio superior

En los últimos 20 años, la cobertura en todos los niveles de educación pasó de 41.6% en 1990 a 73%[3] en 2012. Para el caso específico de la educación de nivel medio superior, de 1990 a 2012, la cobertura aumentó 33.3%, ya que de 36.0% avanzó a 69.3%[4] el año anterior.

A pesar de los logros, México enfrenta diferentes retos en la materia y sin duda uno de los principales es el combate a la desigualdad en las oportunidades educativas. En nuestro país las familias con menores posibilidades de desarrollo, reciben una calidad de educación más pobre (especialmente en zonas marginadas y rurales), en los niveles de educación media superior. En otras palabras, este tipo de desigualdades se presentan en la calidad de la educación y la posibilidad de permanecer en el aula y no abandonar los estudios por razones principalmente económicas.

---

2 http://sexto.informe.calderon.presidencia.gob.mx/pdf/INFORME_ESCRITO/03_CAPITULO_IGUALDAD_DE_OPORTUNIDADES/3_03_Transformacion_Educativa.pdf

3 http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/igualdad-de-oportunidades/transformacion-educativa.html

4 http://sexto.informe.calderon.presidencia.gob.mx/pdf/INFORME_ESCRITO/03_CAPITULO_IGUALDAD_DE_OPORTUNIDADES/3_03_Transformacion_Educativa.pdf

Las brechas educativas en México se encuentran asociadas no solamente al esfuerzo y mérito interpersonal, sino también a las dificultades propias de la condición social y la diversidad institucional que transforma las desventajas de origen social en oportunidades educativas.

La demanda educativa para el nivel medio superior se ha incrementado, entre otras razones por la universalización de la educación básica y por el aumento de jóvenes en la estructura demográfica con edad para cursarlo; con el decreto firmado en febrero de 2012 por el Ejecutivo Federal, se establece la obligatoriedad de la educación media superior en México, y los gobiernos locales y municipales están en el deber de elaborar las políticas públicas necesarias para que se generalice la aplicación de un sistema de nivel medio superior obligatorio.

Sin embargo, obligatoriedad del Estado de garantizar la educación media superior se realizará de manera gradual y creciente a partir del ciclo escolar 2012-2013 y ello no obsta para que la desigualdad en acceso a la educación media superior sea un tema prioritario para el país, porque estas etapas educativas son clave para la movilidad social y para mejorar las trayectorias de vida de los jóvenes.

Como ya se mencionó, del total de jóvenes en edad de estudiar el nivel medio superior en el país, sólo el 38.8% se encuentra estudiando (4.3 millones), esto representa una baja demanda educativa cubierta o atendida de nivel medio superior, pese a los programas que están dirigidos a incentivar el acceso a la escuela.

En la tabla siguiente, se observa que los jóvenes estudiantes se distribuyen en 4 tipos de sostenimiento o inversión educativa, donde se destaca el estatal sobre los demás con poco menos de 2 millones de alumnos matriculados. Así mismo, es de subrayar que la modalidad de bachillerato abarca el 91% de esos matriculados, y deja sólo 9% de matrícula para de la educación con perfiles técnicos.

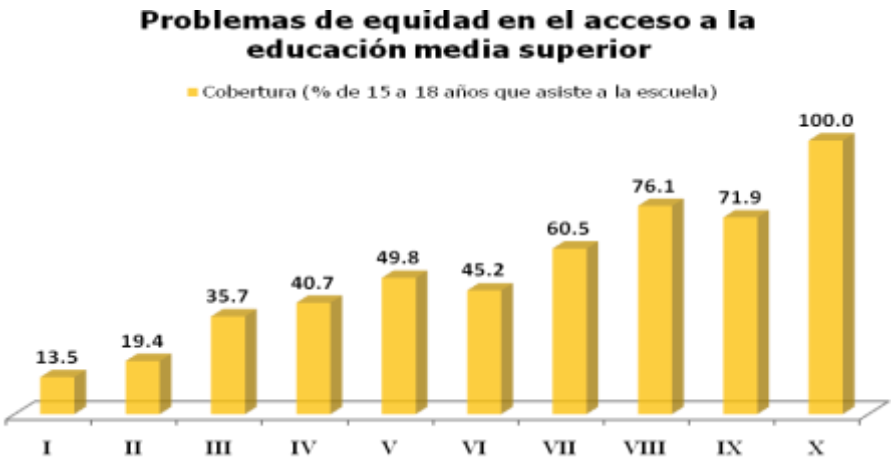
Cifras del nivel educativo Medio Superior en México
Ciclo escolar 2011-2012

Sostenimiento	Matrícula (miles de alumnos)			Escuelas			Relación Alumno/Escuela		
	Modalidad			Modalidad			Modalidad		
	Profesional Técnico	Bachillerato	Total	Profesional Técnico	Bachillerato	Total	Profesional Técnico	Bachillerato	Total
Total	**395.9**	**3,887.1**	**4,283.0**	**1,421**	**13,996**	**15,417**	279	278	**278**
Federal	57.8	1,006.0	**1,063.8**	108	1,315	**1,423**	535	765	**748**
Estatal	257.8	1,691.5	**1,949.3**	502	6,974	**7,476**	514	243	**261**
Particular	58.8	681.1	**739.9**	770	4,879	**5,649**	76	140	**131**
Autónomo	21.4	508.4	**529.8**	41	828	**869**	522	614	**610**

Fuente: Quinto Informe de Labores. 2011. SEP

La educación media superior en México además de enfrentar un problema de inequidad en el acceso a la educación, reproduce las estructuras de desigualdad en el ingreso que arrastra desde hace años. Los jóvenes que deberían tener la posibilidad de educarse y formarse, los más necesitados, son los que menos lo pueden hacer.

Como podemos ver en siguiente gráfica, del 10% más pobre de la población, solamente el 13.5% de los jóvenes en edad para cursar el nivel medio superior lo puede hacer, mientras que del 10% más rico lo hace la totalidad.



DECILES DE NIVEL DE INGRESOS

Fuente: John Scott 2005, en Székely Pardo, 2010

Como se aprecia en el gráfico anterior, entre más aumenta la capacidad económica en el nivel de ingreso, más oportunidad existe de tener acceso a la educación media superior; con lo cual el modelo educativo actual subraya y aumenta las desigualdades sociales; y no permite generar oportunidades a quienes menos tienen.

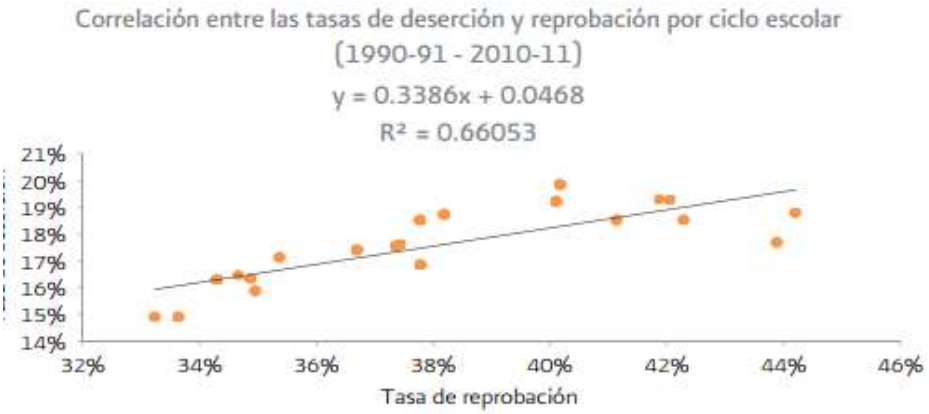
IV. La deserción educativa en México.

Para el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INNE), en *Panorama Educativo de México 2012. Indicadores del Sistema Educativo Nacional. Educación Básica y Media Superior* (INNE, 2013), el problema más apremiante de la educación media superior es la deserción. Mientras que la reprobación es un fenómeno de especial importancia en educación primaria, presente sobre todo en los primeros grados, abatir la deserción se convierte en el principal reto tanto en educación secundaria como en educación media superior.[5]

La deserción, la reprobación y la eficiencia terminal constituyen tres de los indicadores más representativos para evaluar la eficiencia del sistema educativo. El índice de reprobación permite conocer el "porcentaje de alumnos que no han obtenido los conocimientos necesarios establecidos en los planes y programas de estudio de cualquier grado o curso y que, por lo tanto, se ven en la necesidad de repetir ese grado o curso" (UPEPE-SEP, 2005, p. 105). Para el ciclo escolar 2010-2011, el índice de reprobación en la Educación Media Superior fue de 31.7% y ha mostrado una tendencia decreciente en los últimos 20 años, pues en el ciclo escolar 1990-1991 fue de 44%.[6]

[5] http://www.inee.edu.mx/images/stories/2013/publicaciones/Panorama2012/Versin180413.pdf

[6] Reporte de la Encuesta Nacional de Deserción en la Educación Media Superior, http://www.siguele.sems.gob.mx/siguele/encuesta.php



Fuente: SEMS, con información de las Estadísticas Básicas del Sistema Educativo Nacional, DGP, SEP.

En la Educación Media Superior, la eficiencia terminal para el ciclo escolar 2010-2011 fue de 62.2%, mejorando en 7 puntos en los últimos 20 años, como lo muestra la gráfica siguiente. Lo que significa que del total de alumnos que ingresaron a primer grado de la Educación Media Superior en el ciclo escolar 2008-2009, el 62.2% la terminó y el 37.8% desertó o interrumpió sus estudios o retrasó su egreso debido a la reprobación.



Fuente: SEMS, con información de las Estadísticas Básicas del Sistema Educativo Nacional, DGP, SEP.

El coeficiente de correlación por ciclo escolar entre estas dos variables indica que existe entre ellas una relación importante, es decir, la deserción explica a la eficiencia terminal en casi 94%.

Deserción, reprobación y eficiencia terminal

Ciclo Escolar	Deserción	Eficiencia Terminal	Reprobación
1990-91	18.8%	55.2%	44.2%
1991-92	18.5%	55.8%	41.1%
1992-93	17.7%	56.6%	43.9%
1993-94	19.3%	54.4%	42.0%
1994-95	19.3%	55.1%	41.9%
1995-96	18.5%	55.5%	42.3%
1996-97	19.8%	54.4%	40.2%
1997-98	19.2%	55.6%	40.1%
1998-99	18.5%	55.1%	37.8%
1999-00	18.7%	55.6%	38.2%
2000-01	17.5%	57.0%	37.4%
2001-02	16.9%	57.2%	37.8%
2002-03	17.4%	59.3%	36.7%
2003-04	17.6%	58.4%	37.4%
2004-05	17.2%	58.0%	35.4%
2005-06	16.5%	58.3%	34.7%
2006-07	16.3%	58.0%	34.9%
2007-08	16.3%	58.9%	34.3%
2008-09	15.9%	60.9%	35.0%
2009-10	14.9%	62.0%	33.6%
2010-11	14.9%	62.2%	32.7%
2011-12*	14.4%	61.8%	32.5%

Fuente: Estadísticas básicas del Sistema Educativo Nacional, DGP, SEP.

La edad reglada para calcular la cobertura en el nivel medio superior es de los 16 a los 18 años. Sin embargo, en la actualidad no todas las personas en la edad establecida para estudiar la Educación Media Superior cuentan con los requisitos académicos necesarios para cursarla; es decir, debido a la deserción y al rezago educativo no todos cuentan con la Educación Básica terminada.

Matrícula de la Educación Media Superior por grupos de edad

Ciclo Escolar	Matrícula Total	Matrícula 16-18	Matrícula 16-18 (%)
1990-91	2,100,520	1,251,120	59.6%
1991-92	2,136,194	1,283,747	60.1%
1992-93	2,177,225	1,314,383	60.4%
1993-94	2,244,134	1,351,844	60.2%
1994-95	2,343,477	1,394,928	59.5%
1995-96	2,438,676	1,464,117	60.0%
1996-97	2,606,099	1,525,624	58.5%
1997-98	2,713,897	1,611,125	59.4%
1998-99	2,805,534	1,653,710	58.9%
1999-00	2,892,846	1,712,454	59.2%
2000-01	2,955,783	1,768,515	59.8%
2001-02	3,120,475	1,859,411	59.6%
2002-03	3,295,272	1,981,731	60.1%
2003-04	3,443,740	2,084,651	60.5%
2004-05	3,547,924	2,174,750	61.3%
2005-06	3,658,754	2,237,571	61.2%
2006-07	3,742,943	2,340,025	62.5%
2007-08	3,830,042	2,416,533	63.1%
2008-09	3,923,822	2,471,027	63.0%
2009-10	4,054,709	2,596,444	64.0%
2010-11	4,187,528	2,696,764	64.4%
2011-12	4,333,589	2,790,585	59.6%

Fuente: Estadísticas básicas del Sistema Educativo Nacional, DGP, SEP.

De acuerdo con la información de las Estadísticas Básicas del Sistema Educativo Nacional, de los 4’187,528 alumnos que iniciaron el ciclo escolar 2010-2011 en la Educación Media Superior, abandonaron los estudios 625,142, lo que representa una tasa anual de deserción del 14.93%.

Del total de desertores, 282,213 fueron mujeres y 342,929 hombres, lo que representa 45% y 55% respectivamente, alcanzando una tasa de deserción del 16.67% en hombres y del 13.25% en mujeres.

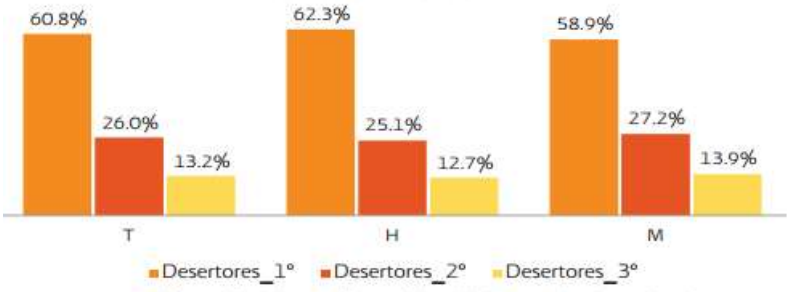
Evolución de la deserción total en hombres y mujeres e índice de masculinidad (2000-2011)

Ciclo	Matrícula Total	Desertores Totales	Desertores Hombres	Desertores Mujeres	Hombres (%)	Mujeres (%)	Índice de Masculinidad
2000-01	2,939,108	501,520	295,667	205,853	59.0%	41.0%	1.44
2001-02	3,120,475	526,788	304,356	222,432	57.8%	42.2%	1.37
2002-03	3,295,272	574,727	324,866	249,861	56.5%	43.5%	1.30
2003-04	3,443,740	607,209	345,462	261,747	56.9%	43.1%	1.32
2004-05	3,547,924	608,500	347,359	261,141	57.1%	42.9%	1.33
2005-06	3,658,754	602,336	337,785	264,551	56.1%	43.9%	1.28
2006-07	3,742,943	611,184	342,253	268,931	56.0%	44.0%	1.27
2007-08	3,830,042	624,684	347,961	276,723	55.7%	44.3%	1.26
2008-09	3,923,822	622,830	336,543	286,287	54.0%	46.0%	1.18
2009-10	4,054,709	605,567	341,231	264,336	56.3%	43.7%	1.29
2010-11	4,187,528	625,142	342,929	282,213	54.9%	45.1%	1.22

Fuente: SEMS, con información de las Estadísticas Básicas del Sistema Educativo Nacional, DGP, SEP.

La deserción no muestra un comportamiento uniforme dentro de un ciclo escolar, es decir, en la Encuesta Nacional de Deserción en la Educación Media Superior se observan diferencias importantes en cada grado. Por ejemplo, el 60.8% de los desertores abandonan sus estudios en el primer año (casi 380 mil alumnos), 26% en el segundo (cerca de 163 mil alumnos) y 13.2% en el tercero o posteriores (alrededor de 83 mil alumnos).

Proporción de la deserción total por grado escolar y sexo
Ciclo escolar 2010-2011



Fuente: SEMS, con información de las Estadísticas Básicas del Sistema Educativo Nacional, DGP, SEP.

Deserción total, intra e inter curricular en la Educación Media Superior
Ciclo escolar 2010-2011

Variables		Absolutos			Porcentajes (%)		
		Total	Hombres	Mujeres	T	H	M
Matrícula		4,187,528	2,057,262	2,130,266	100.00	100.00	100.00
Deserción Intracurricular	Desertores_1°	233,621	130,456	103,165	5.58	6.34	4.84
	Desertores_2°	92,357	48,929	43,428	2.21	2.38	2.04
	Desertores_3°	32,158	18,515	13,643	0.77	0.90	0.64
	Total Desertores	358,136	197,900	160,236	8.55	9.62	7.52
Deserción Intercurricular	Desertores_1°	146,180	83,079	63,101	3.49	4.04	2.96
	Desertores_2°	70,416	37,060	33,356	1.68	1.80	1.57
	Desertores_3°	50,410	24,890	25,520	1.20	1.21	1.20
	Total Desertores	267,006	145,029	121,977	6.38	7.05	5.73
Deserción Total	Desertores_1°	379,801	213,535	166,266	9.07	10.38	7.80
	Desertores_2°	162,773	85,989	76,784	3.89	4.18	3.60
	Desertores_3°	82,568	43,405	39,163	1.97	2.11	1.84
	Total Desertores	625,142	342,929	282,213	14.93	16.67	13.25

Fuente: SEMS, con información de las Estadísticas Básicas del Sistema Educativo Nacional, DGP, SEP.

La deserción en las entidades federativas muestra que en Chiapas es del 10% mientras que en Nuevo León supera el 23%. La media nacional es de 14.9%.

Tasa de deserción por entidad federativa y sexo.
Ciclo escolar 2010-2011

	Entidad Federativa	Tasa de Deserción Total	Tasa de Deserción Hombres	Tasa de Deserción Mujeres
1	Aguascalientes	15.2	17.0	13.6
2	Baja California	16.2	18.0	14.4
3	Baja California Sur	14.6	16.4	12.8
4	Campeche	16.3	18.2	14.4
5	Coahuila	17.4	19.3	15.5
6	Colima	13.7	15.1	12.4
7	Chiapas	10.4	9.3	11.4
8	Chihuahua	17.6	19.8	15.4
9	Distrito Federal	18.5	20.5	16.5
10	Durango	15.8	17.0	14.7
11	Guanajuato	17.5	19.9	15.2
12	Guerrero	12.8	14.4	11.4
13	Hidalgo	14.9	17.4	12.6
14	Jalisco	15.4	17.5	13.4
15	Estado de México	15.2	17.9	12.8
16	Michoacán	13.0	15.1	11.2
17	Morelos	17.5	19.9	15.3
18	Nayarit	13.4	13.1	13.7
19	Nuevo León	23.6	24.2	22.9
20	Oaxaca	14.2	16.0	12.4
21	Puebla	10.1	11.4	8.9
22	Querétaro	13.8	16.0	11.7
23	Quintana Roo	14.0	15.8	12.1
24	San Luis Potosí	12.6	13.8	11.5
25	Sinaloa	13.4	14.9	11.8
26	Sonora	14.4	15.9	13.0
27	Tabasco	12.0	13.1	10.8
28	Tamaulipas	12.9	14.4	11.4
29	Tlaxcala	14.6	16.8	12.6
30	Veracruz	12.0	13.4	10.7
31	Yucatán	16.3	18.8	13.7
32	Zacatecas	14.3	16.2	12.5
	Nacional	14.9	16.7	13.3

Fuente: SEMS, con información de las Estadísticas Básicas del Sistema Educativo Nacional.

onal

La falta de dinero, por mucho, es la razón principal manifiesta de la deserción[7]

[7] Reporte de la Encuesta Nacional de Deserción en la Educación Media Superior, http://www.siguele.sems.gob.mx/siguele/encuesta.php



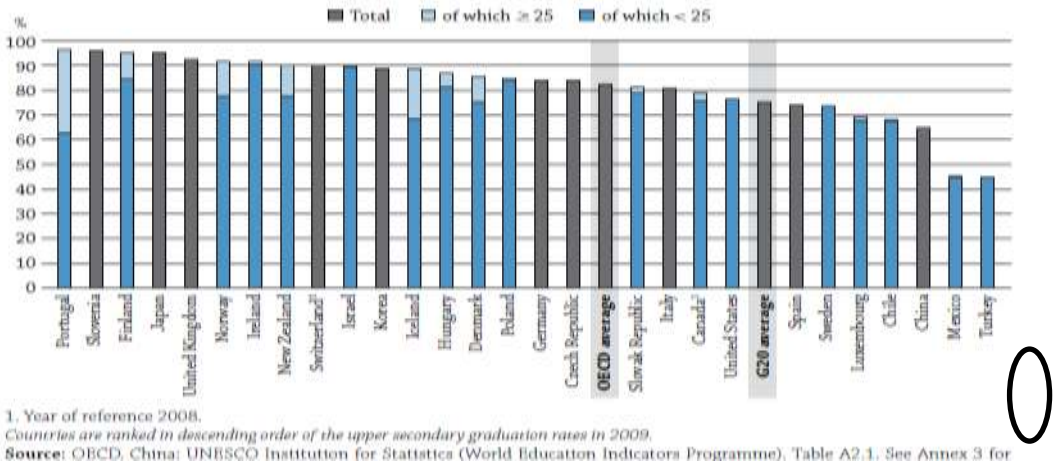
Según datos del Sistema Nacional de Información Educativa de la Secretaría de Educación Pública (SNIE-SEP), el promedio nacional de deserción en México en 2012 fue de 9.0%[8]. Este promedio considera los niveles: primaria, secundaria, media superior y superior.

El problema de la deserción escolar en México se concentra en el nivel de educación media superior, como lo acaba de mencionar el INNE. Es en este lapso de la vida escolar, donde los jóvenes están abandonando de manera temporal o definitiva la escuela por factores principalmente económicos, familiares y de adaptación.

Por otra parte, únicamente el 45% de los estudiantes que logran entrar a la educación media superior se gradúan. Esto ubica a México como el país con el segundo menor porcentaje de graduados en este nivel educativo del grupo de países OCDE, sólo después de Turquía.

TASA DE TERMINACIÓN EN EL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR DE LOS PAÍSES OCDE

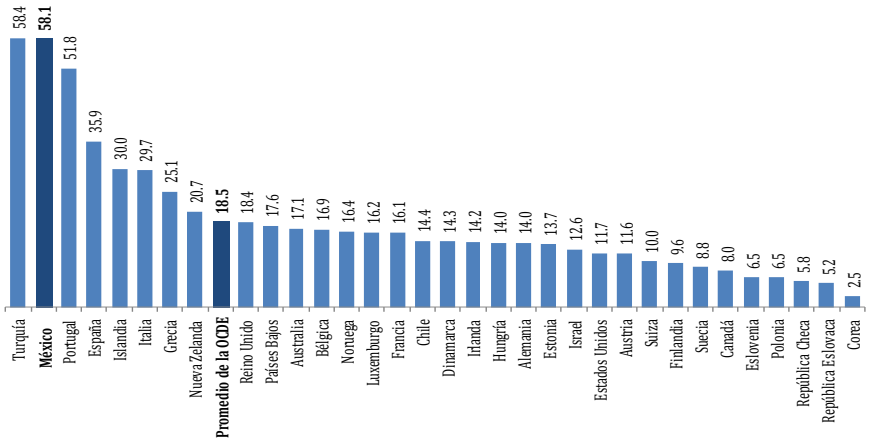
[8] http://www.snie.sep.gob.mx/indicadores_y_pronosticos.html



1. Year of reference 2008.
Countries are ranked in descending order of the upper secondary graduation rates in 2009.
Source: OECD, China: UNESCO Institution for Statistics (World Education Indicators Programme), Table A2.1. See Annex 3 for

Según cifras OCDE, México y Turquía comparten los primeros lugares entre los países cuyo número de jóvenes de entre 25 y 34 años que no concluyeron su bachillerato. En nuestro país esta proporción es de 58 por ciento, lo que quiere decir que 6 de cada 10 jóvenes no lo concluyen. En contraste, Corea, las Repúblicas Eslovaca y Checa, así como Polonia, tienen menos del 10 por ciento de jóvenes en este rango de edad sin bachillerato.

PORCENTAJE DE JÓVENES DE 25 A 34 AÑOS DE EDAD QUE NO CONCLUYERON SUS ESTUDIOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR EN LOS PAÍSES MIEMBROS OCDE



Nota: *Education at Glance* 2011. OCDE

Al Gobierno Federal le ha tomado 10 años reducir la deserción en 6.3% en la modalidad de educación profesional técnica y solamente 3.1% en la de bachillerato, lo cual resulta 3.7% en todo el nivel medio superior, según se muestra:

Evolución histórica de la deserción en educación media superior a nivel nacional

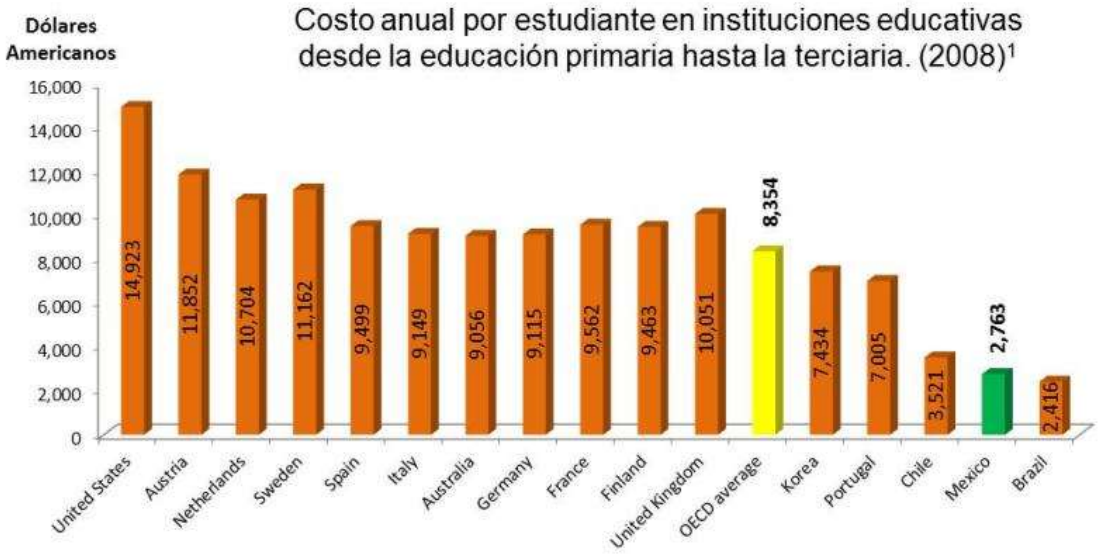
Deserción (%)

Ciclo Escolar	Media Superior	Profesional Técnico	Bachillerato
2000-2001	17.5	24.8	16.5
2001-2002	16.9	25.4	15.8
2002-2003	17.4	25.3	16.4
2003-2004	17.6	24.7	16.8
2004-2005	17.2	26.0	16.1
2005-2006	16.5	23.9	15.7
2006-2007	16.3	24.6	15.5
2007-2008	16.3	24.5	15.5
2008-2009	15.9	23.6	15.1
2009-2010	14.9	23.2	14.1
2010-2011	14.5	20.9	13.8
2011-2012	13.9	18.5	13.4

Fuente: Serie Histórica y pronósticos de Indicadores Educativos. SEP.

V. El insuficiente gasto público en educación

Existen diferentes estimaciones sobre el porcentaje del PIB nacional destinado a la educación en México. Según datos OCDE, en 2008, el gasto en educación como porcentaje del PIB estuvo por arriba del promedio de sus países miembro; nuestro gasto en educación fue de 6.5 por ciento del PIB cuando los países OCDE invirtieron el 5.8 en promedio. Esto a pesar de que esa misma organización recomienda que el porcentaje destinado al tema educativo sea por lo menos del 8. Sin embargo, el gasto por alumno es de los más bajos según la misma organización. México es el penúltimo país en cuanto a la inversión anual por estudiante en escuelas públicas: casi 5,600 dólares menos que el promedio OCDE.



Fuente: OCDE. Education at a Glance 2011

Organizaciones de la sociedad civil advierten que actualmente en México alrededor de 75 mil jóvenes y adolescentes se encuentran trabajando dentro del crimen organizado y los cárteles del narcotráfico. En este contexto el futuro de esos jóvenes se concentra en dos opciones, terminar encerrado en cárceles o morir incluso, a causa de la rivalidad delincuencial.[9] Eso sin mencionar los reportes de cientos de jóvenes desaparecidos en el país, a manos del crimen, según la organización Human Rights Watch.

La escuela o los estudios en sí mismos no reducen el crimen, pero sí un mayor número de años de estudio va aparejado a la posibilidad de obtener mayores salarios en el futuro. En Estados Unidos, diversos estudios muestran evidencia empírica en los cuales se muestra que entre mayor es la escolaridad promedio, menores son los índices de delitos en los que se ejerce violencia (violación, robo con violencia, asesinatos).

También en Estados Unidos, según estudios realizados en 2002, un año adicional en la escolaridad promedio tenía impactos en la reducción de las tasas de arresto en 11 por ciento, del crimen violento en 11 por ciento, de asalto y asesinato en 30 por ciento, en robo de vehículos de 20 por ciento, por señalar algunos casos. Estos resultados muestran, más allá de los datos, una misma dirección, razón por la cual es importante considerar que la inversión en educación para la juventud tiene consecuencias positivas reflejadas en un mayor bienestar social al reducir los incentivos para la criminalidad.

VI. La necesidad de un sistema de estímulos eficiente y con cobertura nacional

A pesar de que México es de los países que más eroga recursos en educación, sus resultados no corresponden a ese nivel importante de gasto.

La Secretaría de Educación Pública ha puesto en marcha diversos programas de becas para la educación media superior concentradas principalmente en el Programa de Becas de Educación Media Superior (PROBEMS), en donde ofrece diferentes opciones: Becas para retención, Becas de apoyo, Becas de excelencia académica y las que se canalizan a través del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.

[9] Mesas de Discusión sobre Seguridad, Tribuna Ciudadana. Serie Foro Electoral. Organizado por el periódico Excelsior. Participan organizaciones ciudadanas como *Causa Común; México SOS; Cauce Ciudadano* y *México Evalúa. México, mayo 2012.*

El Programa de Becas de Educación Media Superior (PROBEMS), administrado por el Gobierno Federal, otorga becas que consisten en un apoyo monetario cuyo monto es variable según el promedio escolar, grado escolar, género y programa educativo en el que el estudiante se encuentre inscrito. La beca cubre doce meses al año, por el tiempo que dure el programa de estudios.

- Para programas de profesional técnico, de dos a cuatro años, según la duración oficial del programa de estudios.

- Para programas de bachillerato general o bachillerato tecnológico, de dos a tres años, según la duración oficial del programa de estudios.

En cuanto al monto del apoyo, para el ejercicio fiscal 2013[10], el monto mensual de las becas fue de $500 hombres y $525 mujeres en el primer grado de bachillerato; de $525 hombres a $575 mujeres en el segundo y de $575 hombres a $625 mujeres en el tercero, todo ello en el promedio mínimo de 6.0.

En el siguiente nivel de promedios (8.0), los estudiantes de bachillerato fueron apoyados con un monto que fluctuó entre los 625 a 700 pesos en el primer grado, dependiendo si era bachillerato general o tecnológico; así mismo para el segundo grado, con montos de 650 a 750 pesos. En el tercer y cuarto grado, bajo los mismos criterios, fue de 700 a 790 pesos en el primer caso y de 790 a 830 en el segundo.

Para el caso del máximo promedio o excelencia académica, en el promedio de 9.0 a 9.4 el apoyo está en el rango de 850 a los 900 pesos; el promedio de 9.5 a 9.7 obtiene de 900 a 950 pesos y de 9.8 en promedio a 10.0 les da derecho a cobrar de 950 a mil pesos, por mes por estudiante.

En el ciclo escolar 2011-2012 se otorgaron un total de 920,499 becas, lo que significó un incremento de 194.1%[11] respecto al ciclo escolar 2010-2011 en el que se entregaron a nivel nacional 313,028 becas. En el ciclo 2008-2009 se entregaron 292,576 becas.

Por otra parte, existe el **Programa de Desarrollo Humano *Oportunidades,*** que durante el ciclo escolar 2011-2012[12], entregó más de 899 mil[13] becas a estudiantes que cursan educación Media Superior, lo que derivó en un incremento de 9 por ciento con respecto al ciclo previo.

En el tema específico de educación, se otorgan becas educativas para educación básica y media superior; así como apoyos para la adquisición de útiles escolares para educación básica (EB) y media superior (EMS) o la entrega de un paquete de útiles escolares a los alumnos de los planteles de educación primaria y secundaria atendidos por el CONAFE, o un incentivo para la conclusión de la educación media superior.

En educación media superior, contempla a jóvenes de entre 14 y 21 años, inscritos en cualquiera de los grados (semestres, cuatrimestres, trimestres) en escuelas de EMS, modalidad escolarizada (bachillerato, profesional técnico o estudios equivalentes).

Es importante señalar que no se otorgan los estímulos educativos a los jóvenes inscritos en escuelas de modalidad abierta. En cuanto a los montos de los apoyos, éstos son mensuales, y se actualizan cada semestre según el caso.

[10] http://www.becasmediasuperior.sep.gob.mx/IMAGENES/PDF/1-becas.pdf
[11] http://sexto.informe.calderon.presidencia.gob.mx/pdf/INFORME_ESCRITO/03_CAPITULO_IGUALDAD_DE_OPORTUNIDADES/3_03_Transformacion_Educativa.pdf
[12] ibídem
[13] Ibídem

Para el nivel de educación media superior, en el primer grado los apoyos son de 785 pesos para hombres o de 900 pesos para el caso de las mujeres; en el mismo criterio para el segundo grado, de 855 a 960 pesos y en el tercer y cuarto nivel el apoyo es de 895 pesos para los varones y de 1,020 pesos para las mujeres.

En el caso de las becas educativas para el llamado *modelo urbano*, y con cifras de enero a junio de 2012, el nivel escolar de educación media superior, otorgó para el primer grado, y bajo el criterio de hombres y mujeres un monto de 980 y 1,100 pesos; el segundo grado, de 1,055 pesos y 1,175 pesos y para el tercer y cuarto grado, además de un pago único de 350 pesos para útiles escolares, se entregó un monto de 1,115 a 1,240 pesos por alumno por mes.

Por otro lado, se aplica el Programa de Becas Prep@rate, que brinda un espacio innovador a jóvenes, para que estudien vía Internet el nivel medio superior, a través de alguna de las prestigiadas instituciones educativas participantes.

Los alumnos que se integren al programa Prep@rate reciben una beca académica, derecho a la matrícula en la Institución académica designada por el programa e inscripción en la Institución académica designada por el programa; de igual modo, un apoyo económico bimestral que oscila entre los 925 y 1,050 pesos y un equipo de cómputo. En el ciclo escolar 2010-2011 se inscribieron en el programa 706 nuevos alumnos, lo que significó 49.3% más respecto a los del ciclo anterior. En las cuatro generaciones se han beneficiado a 2,330 alumnos[14].

Lo anterior refleja que existe una red de estímulos que debido a la participación de las múltiples instancias, hace que se requiera de un sistema coordinado para hacer más eficiente el uso de los recursos disponibles.

VII. Programa de Estímulos para el Bachillerato Universal del Gobierno del Distrito Federal, Prepa Sí.

Como referencia del proyecto que aquí se presenta, el Gobierno del Distrito Federal puso en marcha desde 2007 el programa de estímulos *Prepa Sí*, de cobertura universal, para invertir más en los jóvenes y asegurar que los que cursan sus estudios de bachillerato puedan hacerlo con éxito y no lo tengan que abandonar por falta de recursos.

Con 200 mil beneficiarios es uno de los programas educativos más importantes del país y entre sus becarios se fomenta también la realización de actividades comunitarias que brindan al joven estudiante un sentido de pertenencia y cuidado a la comunidad, lo que refuerza en gran medida sus principios y valores sociales.

Actualmente el sistema en el que funciona el Programa Prepa Sí otorga estímulos económicos mensuales durante el periodo que dura el ciclo escolar a todos los alumnos inscritos en programas de bachillerato –en cualquiera de sus modalidades- en instituciones públicas ubicadas en el Distrito Federal y hace extensivo el apoyo por un año escolar más a los beneficiarios del programa que hayan egresado del bachillerato y se encuentren inscritos en el primer año en instituciones de educación superior públicas en la entidad.

El estímulo económico que se otorga a los jóvenes oscila entre 500.00 y 700.00 pesos, de acuerdo con el promedio escolar, y busca como principal objetivo desincentivar la deserción escolar por motivos económicos.

Los montos establecidos son:

Promedio General	Monto del estimulo mensual / Anual (10 meses)
6.0.-7.5	$500.00 / $5,000.00
7.6-9.0	$600.00 / $6,000.00

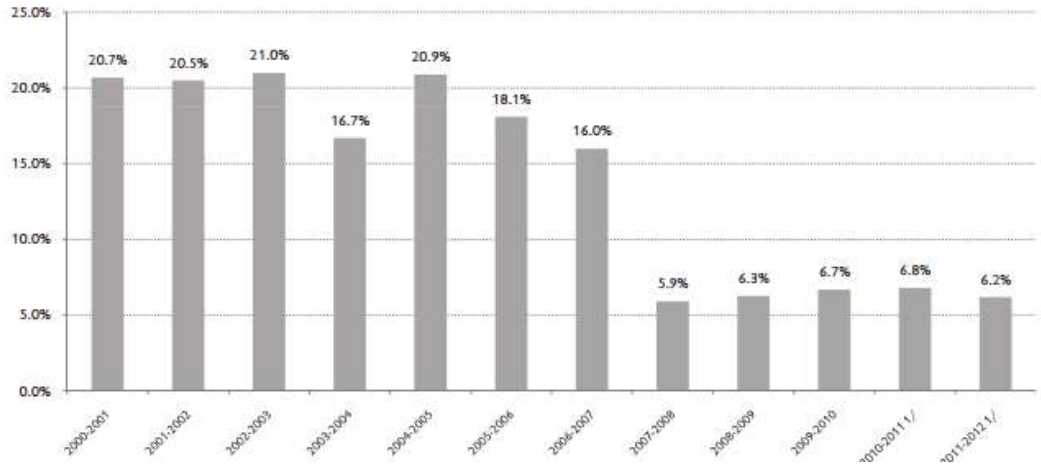
[14] Fuente: Quinto Informe de Labores 2011, SEP.

9.1-10	$700.00 / $7,000.00

Fuente: Aniversario Prepa Sí. Documento. Ceremonia de Conmemoración Prepa Sí 2007-2011. Diciembre de 2011

A un año de la aplicación del Programa Prepa Sí la tasa de deserción entre el grupo de beneficiarios, en el nivel medio superior en la Ciudad de México bajó del 16.0% en 2006-2007 a 5.92 en el ciclo escolar 2007-2008, para el ciclo escolar 2008-2009 a 6.3 %, en 2009-2010 a 6.68% y para el ciclo 2011-2012 se estimó en 6.19%. El Programa ha ido creciendo de forma que en el ciclo escolar 2007- 2008 se logró atender a una población de 180,362 estudiantes, en tanto que al último ciclo 2011-2012, se tienen 193,664 beneficiarios.

Porcentaje de Deserción de Educación Media Superior en el Distrito Federal
Ciclos Escolares 2000-2001 al 2011-2012

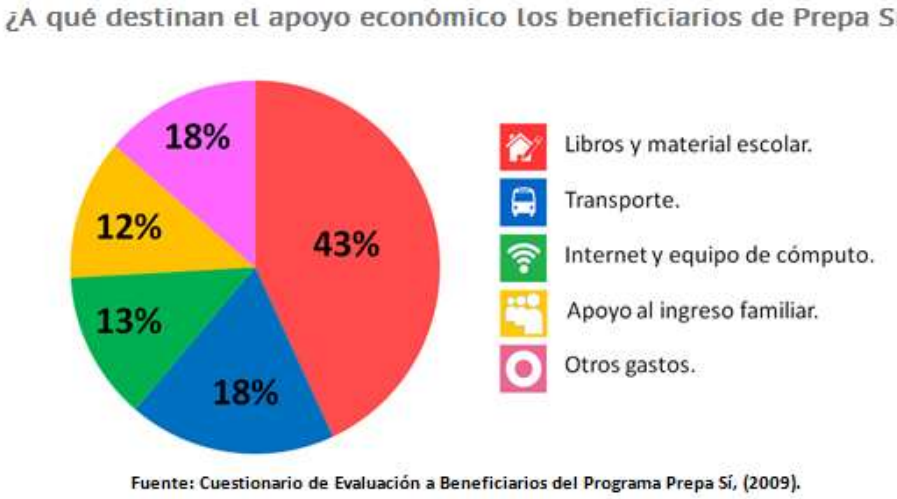


Delegación	Deserción
2000-2001	20.7%
2001-2002	20.5%
2002-2003	21.0%
2003-2004	16.7%
2004-2005	20.9%
2005-2006	18.1%
2006-2007	16.0%
2007-2008	5.9%
2008-2009	6.3%
2009-2010	6.7%
2010-2011	6.8%
2011-2012 V/	6.2%

Nota: El porcentaje de deserción del ciclo escolar 2007-2008 a 2011-2012 está calculada para la población beneficiaria del Programa Prepa Sí. (Datos preliminares)
Fuente: SEP, Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos, del Ciclo Escolar 2000-2001 al 2007-2008. Para el ciclo 2007-2008 al 2011-2012. Cálculos realizados por la Dirección de Evaluación del Fideicomiso Educación Garantizada con datos de la Dirección de Información del Programa *Prepa Sí,* 2008 y Documento de Conmemoración Prepa Sí 2007-2011. Diciembre de 2011

El programa se concibió en un contexto donde los jóvenes estaban abandonando temporal o definitivamente la escuela en mayor medida en estos niveles escolares. En el año 2010 la Encuesta Nacional de la Juventud (ENJ), realizada en por el Instituto de la Juventud del Distrito Federal, reveló que una de las principales razones por la que los jóvenes dejaban los estudios era por "razones económicas", éste motivo representó el 39.1% de los encuestados.

Los beneficiarios del programa destinan su incentivo mayoritariamente a gastos para obtención de materiales escolares y libros, y en menor medida a transporte; internet y equipo de cómputo; así como apoyo al ingreso familiar y otros gastos.



Fuente: Cuestionario de Evaluación a Beneficiarios del Programa Prepa Sí, (2009).

La primera generación de beneficiarios del ciclo escolar 2007-2008 inició con una calificación promedio de 7.65, y para el fin de ese ciclo, el promedio de calificaciones incrementó a 8.15. Para el inicio del ciclo escolar 2008-2009 el promedio de calificaciones de la primera generación del programa Prepa Sí incrementó a 8.39 y alcanzó un promedio de calificaciones de 8.41. Por otra parte, en lo referente a la segunda generación de beneficiarios que ingresó en el ciclo escolar 2008-2009 el impacto en calificaciones pasó de un promedio de 7.78 al inicio a 8.11 final.

Variación promedio de aprovechamiento de los beneficiarios del programa Prepa Sí por ciclo escolar 2007-2008 a 2010-2011

Generación del Programa Prepa Sí.	Ciclos							
	2007-2008		2008-2009		2009-2010		2010-2011	
	Inicio	Final	Inicio	Final	Inicio	Final	Inicio	Final*
1ª	7.65	8.39	8.39	8.41	8.41	8.47	8.47	8.61
2ª			7.78	8.11	8.11	8.13	8.13	8.22
3ª					7.98	8.04	8.04	8.14
4ª							8.08	8.13

*Estimado.

Fuente: Dirección de Evaluación del Fideicomiso de Educación Garantizada (*FIDEGAR*), con datos de la Coordinación Ejecutiva del Programa de Estímulos para el Bachillerato Universal *(PREBU)*, 2011.

Sin el programa, en los cinco ciclos escolares que han transcurrido desde su creación, poco más de 150 mil jóvenes hubieran desertado del nivel medio superior.

Número de Jóvenes por Ciclo Escolar que hubieran desertado de Bachillerato de no Existir Prepa Sí

Concepto/Ciclo Escolar	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	Total Abandonaría
Matrícula Total Pública	289,767	291,419	212,124	180,305*	**153,248***
Abandonarían	47,319*	45,84*0	33,006*	27,082*	

Fuente: Dirección de Evaluación, Cálculos Propios con Información de las Principales Cifras de los Ciclos Escolares 2007-2008, 2008-2009 y 2009-2010 de la Secretaría de Educación Pública.
*Nota: Cifras Estimadas

Los beneficiarios del programa participan además en acciones comunitarias que buscan robustecer el sentido de pertenencia del alumno en su comunidad y revalorarla como parte de su entorno de desarrollo.

El cúmulo de actividades que el Programa les ofrece ha generado una imagen de colaboración importante para combatir tanto la estigmatización hacia los jóvenes, como la sensación de soledad e incomprensión a la que tradicionalmente habían sido sometidos.
En resumen, los resultados de este programa demuestran que invertir en la educación media superior con estímulos económicos ha ampliado el acceso y disminuido las tasas de deserción. De igual forma ha contribuido a disminuir la desigualdad de oportunidades y fomentado la formación de capital humano, al incluir a jóvenes de todas las modalidades de la enseñanza de nivel medio superior.

Buscar alternativas como el bachillerato a distancia, además de mantener a los jóvenes en las escuelas, fomentando el incremento del desempeño académico, debe ser una ruta de trabajo en la cual todos debemos participar.

Los jóvenes deben y pueden continuar estudiando; hay que desterrar la deserción educativa en este país.

VIII. Implicaciones presupuestales de la creación de un Fondo de Aportaciones para los Estímulos de Educación Media Superior (FAEMS).

Con base en la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) para el 2010 3’862,986 personas asisten a preparatoria pública, de las cuales el 50.3% son mujeres y 49.7% hombres.

Cuadro 1. Personas que asisten a preparatoria pública

Sexo	Personas	Participación (%)
Hombre	1,921,204	49.7
Mujer	1,941,782	50.3
Total	**3,862,986**	**100.0**

Asimismo, del total de personas que asisten a preparatoria pública 546,159 trabajaron durante el mes pasado, siendo en su mayoría hombres, es decir 62.1% de dichas personas.

Cuadro 2. Estatus laboral de las Personas que asisten a preparatoria pública.

Concepto	Trabajó mes pasado			No trabajó el mes pasado		
	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total
Personas	339,188	206,971	546,159	1,582,016	1,734,811	3,316,827

Participación (%)	62.1	37.9	100.0	47.7	52.3	100.0

En cuanto al grado de preparatoria en el que se encuentran, se observa que el 44.3% de la población que asiste a preparatoria pública se encuentra en el primer año, 30.3% en el segundo y el 25.4% en tercero.

Se destaca el hecho de que durante el primero y tercer año, es mayor el número de mujeres que cursa la preparatoria.

Cuadro 3. Grado en el que se encuentran las Personas que asisten a preparatoria pública

Sexo	Grado de Preparatoria			Total
	1°	2°	3°	
Hombre	831,092	605,139	484,973	1,921,204
Mujer	879,212	565,762	496,808	1,941,782
Total	**1,710,304**	**1,170,901**	**981,781**	**3,862,986**
Participación (%)	**44.3**	**30.3**	**25.4**	**100.0**

Por otra parte, del total de personas que asisten a preparatoria pública, 908,549 recibieron beca o crédito educativo, es decir, 23.5% de la población, concentrándose dichos apoyos en la población femenina (57%).

Cuadro 4. Personas que asisten a preparatoria pública con beca o crédito educativo

Sexo	Beca o crédito	Sin apoyo	Total
Hombre	387,950	1,533,254	1,921,204
Mujer	520,599	1,421,183	1,941,782
Total	**908,549**	**2,954,437**	**3,862,986**
Participación (%)	**23.5**	**76.5**	**100.0**

En cuanto al rango de edad, el 89.7% de la población que asiste a preparatoria pública se concentra entre los 14 y los 18 años.

Cuadro 5. Rango de Edad de las Personas que asisten a preparatoria pública

Sexo	Rango de edad			Total
	14 a 18	19 a 30	Mayor a 30	
Hombre	1,696,905	204,582	19,717	1,921,204
Mujer	1,769,449	139,120	33,213	1,941,782
Total	**3,466,354**	**343,702**	**52,930**	**3,862,986**

Con base en la información anterior, sin consideramos como población beneficiaria a aquellos estudiantes que asisten a preparatoria pública, de 14 a 18 años, sin ninguna beca o crédito educativo, tenemos que el costo anual de la implementación del Programa PREPA Sí a nivel nacional seria aproximadamente 24,817 millones de pesos.

Cuadro 7. Población Beneficiaria y Costo (anual y mensual)

Población beneficiaria / Costo	Total	Hombre	Mujer
Preparatoria pública	**3,862,986**	1,921,204	1,941,782
14 – 18 años	**3,466,354**	1,696,905	1,769,449
Sin beca o crédito educativo	**2,954,437**	1,533,254	1,421,183
Costo mensual (Estímulo máximo - $700)	**2,068.1 mdp**	1,073.3 mdp	994.8 mdp
Costo ANUAL (Estímulo máximo - $700)	**24,817.3 mdp**	**12,879.3 mdp**	**11,937.9 mdp**

Nota: Los cálculos del costo del programa PREPA Sí, **no** incluyen el estímulo por concluir estudios satisfactoriamente.

Ahora bien, con la finalidad de cuantificar con mayor detalle los costos anuales, tomaremos en cuenta el grado de preparatoria en el que se encuentran los estudiantes.

En un escenario donde se eliminara la deserción escolar, y el total de alumnos pasara de grado, el costo superaría apenas los 35,264.8 mdp anuales.

El costo del programa PREPA SÍ a nivel nacional, sería menor o equivalente:

- A la inversión en materia de seguridad pública del gobierno federal para 2103 que es de 41 mil 217.1 millones de pesos.
- La inversión en la educación de nivel medio superior que se propone mediante Prepa Sí, sería menos de la mitad del presupuesto para Marina y Defensa Nacional que sumados llegan a 82 mil 675.4 millones de pesos para este año.
- Prepa Sí representaría una séptima parte del gasto asignado al Ramo 11 (Educación Pública) que para 2013 es de 260 mil 277.2 millones de pesos.

El Fondo de Aportaciones para los Estímulos de Educación Media Superior se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente con recursos federales por un monto equivalente al 1.5 por ciento de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2o. de esta Ley.

Los montos del fondo a que se refiere este artículo se enterarán mensualmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a los Estados y al Distrito Federal de manera ágil y directa, de acuerdo con la fórmula siguiente:

$$FAEMS_{i,t} = (0.65C_1 + 0.25C_2 + 0.10C_3)FAEMS_t$$

En donde:

$$C_1 = \left(\frac{Matr_i}{\sum_i Matr_i} \right)$$

$$C_2 = \left(\frac{Deser_i}{\sum_i Deser_i} \right)$$

$$C_3 = \left(\frac{\frac{1}{PIBpc_i}}{\sum_i \frac{1}{PIBpc_i}} \right)$$

Considerando que:

$FAEMS_t$, es el total de recursos aportados al fondo para el año fiscal t, conforme lo establecido en este artículo.

$FAEMS_{i,t}$, son los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Garantizada al nivel Media Superior que le corresponde a la entidad federativa i, durante el año fiscal t.

$Matr_i$, es el número total de alumnos matriculados en nivel media superior (Bachillerato) de la entidad i, de aquellas instituciones educativas públicas, cuyo sostenimiento proviene de recursos federales y estatales, con base en las cifras publicadas por el Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos correspondientes al último ciclo escolar con información disponible.

$Deser_i$, es el porcentaje de Deserción presentada en nivel media superior (Bachillerato) de la entidad i, con base en las cifras publicadas por el Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos correspondientes al último ciclo escolar con información disponible.

$PIBpc_i$, se refiere al Producto Interno Bruto (PIB) per capita no minero y no petrolero de la entidad i, el cual se obtendrá de la diferencia entre el Producto Interno Bruto Estatal total y el Producto Interno Bruto Estatal Minero, partiendo de la última información oficial del PIB por Entidad Federativa dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, así como de la cifra de población que para dicho año haya estimado el Consejo Nacional de Población.

Los recursos del Fondo de Aportaciones para los Estímulos de Educación Media Superior se utilizarán para el otorgamiento de un estímulo económico a todos los estudiantes de nivel medio superior en la república mexicana, que cursan sus estudios de bachillerato en instituciones públicas, en cualquiera de sus modalidades, con la finalidad de que las autoridades educativas apoyen a los estudiantes para que no tengan que abandonar sus estudios por falta de recursos.

Las aportaciones federales que integran este Fondo, se destinarán exclusivamente a aquellos estudiantes de nivel medio superior que se consideren regulares de acuerdo a la institución educativa de la que formen parte y no reciban becas de apoyo educativo, al mismo tiempo que se les otorga el estímulo económico.

El estímulo económico que otorguen las Entidades Federativas a cada estudiante de nivel medio superior, con cargo al Fondo de Aportaciones para los Estímulos de Educación Media, no será superior a 36 meses.

IX. Conclusiones

Las acciones para avanzar hacia una educación para todos, forman parte ineludible de la finalidad de cualquier gobierno. La equidad educativa pasa necesariamente por brindar condiciones de desarrollo y de

educación a los grupos de población más vulnerables, al mismo tiempo que la inclusión educativa pasa por brindar condiciones para que nadie deje de estudiar por motivos económicos.

Invertir en la educación de los jóvenes es una tarea que no podemos evadir si es que queremos tomarnos los derechos de los jóvenes en serio.

Hay que invertir con mucha seriedad en educación y dejar de hacerlo como lo hemos venido realizando, siendo de los más bajos de OCDE por alumno: reorientar y dirigir el gasto público educativo a lo que verdaderamente importa, los estudiantes de México.

Con Prepa Sí a nivel nacional es posible realizar cambios en el corto plazo que impulsen la equidad y la inclusión en la educación y dar mayores oportunidades a nuestros jóvenes y que permita lograr los siguientes objetivos:

1. Reducir la tasa de deserción a nivel nacional en los próximos años.
2. Disminuir la brecha de desigualdad de oportunidades educativas y regionales entre los jóvenes.
3. Mejorar el desempeño académico y formar sentido de comunidad entre los jóvenes.
4. Evitar que millones de jóvenes caigan en las redes de la delincuencia debido a la falta de oportunidades y disminuir los índices delictivos en el país.
5. Aumentar el PIB per cápita, si aumentamos los años de escolaridad.

Es momento de tomarnos los derechos de los jóvenes en serio.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72, 73, fracción XXV, 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 163, fracción I, 164, fracción I y 172 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración de la Honorable Cámara de Senadores la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adicionan la fracción IX del artículo 25 y los artículos 47-A y 47-B de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como a continuación se indica:

Artículo 25.- …

I. a VIII. …

IX.- Fondo de Aportaciones para los Estímulos de Educación Media Superior.

…

Artículo 47-A.- El Fondo de Aportaciones para los Estímulos de Educación Media Superior se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente, con recursos federales por un monto equivalente al 1.50 por ciento de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2o. de esta Ley.

Los montos del fondo a que se refiere este artículo se enterarán mensualmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a los Estados y al Distrito Federal de manera ágil y directa, de acuerdo con la fórmula siguiente:

$$FAEMS_{i,t} = (0.65C_1 + 0.25C_2 + 0.10C_3)FAEMS_t$$

En donde:

$$C_1 = \left(\frac{Matr_i}{\sum_i Matr_i} \right)$$

$$C_2 = \left(\frac{Deser_i}{\sum_i Deser_i} \right)$$

$$C_3 = \left(\frac{\frac{1}{PIBpc_i}}{\sum_i \frac{1}{PIBpc_i}} \right)$$

Considerando que:

$FAEMS_t$, es el total de recursos aportados al fondo para el año fiscal t, conforme lo establecido en este artículo.

$FAEMS_{i,t}$, son los recursos del respectivo Fondo de Aportaciones para la Educación Garantizada al nivel Media Superior que le corresponde a la entidad i, durante el año fiscal t.

$Matr_i$, es el número total de alumnos matriculados en nivel media superior de la entidad i, de aquellas instituciones educativas públicas, cuyo sostenimiento proviene de recursos federales y estatales, con base en las cifras publicadas por el Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos correspondientes al último ciclo escolar con información disponible.

$Deser_i$, es el porcentaje de Deserción presentada en nivel media superior de la entidad i, con base en las cifras publicadas por el Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos correspondientes al último ciclo escolar con información disponible.

$PIBpc_i$, se refiere al Producto Interno Bruto (PIB) per capita no minero y no petrolero de la entidad i, el cual se obtendrá de la diferencia entre el Producto Interno Bruto Estatal total y el Producto Interno Bruto Estatal Minero, partiendo de la última información oficial del PIB por entidad dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, así como de la cifra de población que para dicho año haya estimado el Consejo Nacional de Población.

Artículo 47-B.- Los recursos del Fondo de Aportaciones para los Estímulos de Educación Media Superior se utilizarán para el otorgamiento de un estímulo económico mensual a todos los estudiantes de nivel medio superior en la República Mexicana, que cursan sus estudios de nivel medio superior en instituciones públicas, en cualquiera de sus modalidades, con la finalidad de incentivar la permanencia y conclusión de sus estudios y disminuir la deserción escolar por falta de recursos.

Las aportaciones federales que integran este Fondo, se otorgarán a los estudiantes de nivel medio superior en la República Mexicana de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Educación.

Las Secretarías de Educación Pública y de Hacienda y Crédito Público, de manera conjunta, emitirán las reglas de operación para la presupuestación, ministración, ejercicio, control, evaluación y fiscalización de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Estímulos de Educación Media Superior.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman los artículos 14, añadiendo una nueva fracción XIII, recorriéndose la actual fracción y la subsecuente, y el artículo 33, añadiendo una fracción XV, recorriéndose la actual y la subsecuente, de la Ley General de Educación, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 14.- Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 12 y 13, corresponden a las autoridades educativas federal y locales de manera concurrente, las atribuciones siguientes:

I. a XII. …

XIII. Otorgar estímulos económicos con cargo al Fondo de Aportaciones para los Estímulos de Educación Media Superior que incentiven la permanencia y conclusión de estudios de nivel medio superior y disminuyan la deserción escolar en las instituciones públicas del sistema educativo nacional, en cualquiera de sus modalidades, y

XIV. Las demás que con tal carácter establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables.
…

Artículo 33.- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:

I. a XIV …

XV. Otorgarán un estímulo económico a todos los estudiantes de nivel medio superior que cursan sus estudios en instituciones públicas, en cualquiera de sus modalidades, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, fracción XIII, de esta Ley.

El estímulo económico no podrá ser menor a medio salario mínimo mensual vigente en la zona que corresponda y sólo podrá ser otorgado por las autoridades educativas federales y locales con cargo al Fondo de Aportaciones para los Estímulos de Educación Media Superior y en los términos establecidos en los artículos 25, 47-A y 47-B de la Ley de Coordinación Fiscal.

El estímulo sólo podrá otorgarse hasta por un plazo máximo de 36 meses, contados a partir del registro y sólo durante el curso de estudios de nivel medio superior, siempre que:

a. Cursen sus estudios en instituciones públicas, en cualquiera de sus modalidades;

b. Se consideren estudiantes regulares en la institución educativa pública en la que cursen sus estudios, y

c. No reciban alguna otra beca de apoyo educativo o estímulo de cualquier tipo al momento del registro o por el tiempo en que se le otorgue el estímulo económico.

La Secretaría de Educación Pública emitirá los lineamientos para el otorgamiento de los estímulos. En dichos lineamientos deberán preverse reglas para asegurar un trato equitativo, igualitario, que respete los derechos

humanos del estudiante y la universalidad del estímulo. La contravención a esos principios, será sancionado conforme a la normatividad aplicable.

Queda a cargo de la Secretaría de Educación Pública la implementación del Registro Nacional de los Estímulos otorgados por las autoridades educativas. Las Entidades Federativas y el Distrito Federal implementarán un registro estatal con base en los lineamientos que al efecto expida la Secretaría de Educación Pública.

Los registros deberán contener, cuando menos, el beneficiario, la institución pública en la que se cursa la educación medio superior, el ciclo escolar correspondiente, el monto del estímulo otorgado, la periodicidad de su entrega y la fecha de registro.

La Secretaría de Educación Pública y las respectivas autoridades educativas locales, deberán publicar en sus portales de internet la información contenida en los registros, salvaguardando los datos confidenciales de conformidad con las disposiciones federales y locales en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales.

XVI. Apoyarán y desarrollarán programas destinados a que los padres y/o tutores apoyen en circunstancias de igualdad los estudios de sus hijas e hijos, prestando especial atención a la necesidad de que aquellos tomen conciencia de la importancia de que las niñas deben recibir un trato igualitario y que deben recibir las mismas oportunidades educativas que los varones.

El Estado también llevará a cabo programas asistenciales, ayudas alimenticias, campañas de salubridad y demás medidas tendientes a contrarrestar las condiciones sociales que inciden en la efectiva igualdad de oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Publíquese en el Diario Oficial de la Federación para su debida observancia y aplicación.

TERCERO.- Las autoridades competentes realizarán las gestiones administrativas y presupuestales necesarias para que al inicio del ciclo escolar siguiente a la entrada en vigor del Presente Decreto, se hayan publicado los lineamientos para el otorgamiento del estímulo económico y los beneficiarios del estímulo estén en aptitud de tramitarlo y recibirlo, cumpliendo los requisitos que en esos lineamientos se señalen.

Honorable Cámara de Senadores a 30 de abril de 2013

Suscriben

SEN. MARIO DELGADO CARRILLO

SEN. ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO

SEN. ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ

SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA

SEN. RAÚL MORÓN OROZCO

SEN. MIGUEL BARBOSA HUERTA

SEN. RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO

SEN. FIDEL DEMEDICIS HIDALGO

SEN. ADOLFO ROMERO LAINAS

SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ

DEL SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL INCISO XVIII AL ARTÍCULO 3 Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 7, 9-A Y 50 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES.



SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL INCISO XVIII AL ARTÍCULO 3, Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 7, 9-A, Y 50, DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES.

SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Senador de la República para la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8° numeral 1, fracción I; 164 numeral 1; 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL INCISO XVIII AL ARTÍCULO 3, Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 7, 9-A, Y 50, DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Uno de los aspectos que no están incluidos en la legislación, representada fundamentalmente por la Ley Federal de Telecomunicaciones –LFT– (vigente desde 1995 y con ningún cambio en este tópico) es el servicio universal de telecomunicaciones que, por el contrario, sí ha sido regulado en la mayoría de los países alrededor del mundo.

El servicio universal de telecomunicaciones debe tener un contenido mínimo, compuesto por tres elementos esenciales: acceso, calidad y precio. Esto es, acceso a los servicios de telecomunicaciones (originalmente sólo se trataba de acceso telefónico, pero con el paso del tiempo se han incluido el acceso a Internet, a otros servicios avanzados y otras prerrogativas), con una calidad mínima que permita un consumo adecuado y pertinente, con la característica de la asequibilidad. No es muy funcional un acceso que es caro o que no tiene la calidad suficiente para que realmente, con el uso de las telecomunicaciones y las TIC, se vaya minimizando la brecha digital.

Además, el acceso a la información, a la comunicación y a la difusión de libre de las ideas son derechos consagrados por los artículos 6° y 7° de nuestra Constitución, así como en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su artículo IV a la letra dice:

> "Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio.[15]"

De la misma manera, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 13 declara que:

> "1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras ya sea oralmente por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección."[16]

El servicio universal es aquella prestación consistente en que todos los hogares deben tener servicio telefónico. Éste debe implicar, por lo menos, la oportunidad de instalación de un teléfono en cualquier hogar que lo solicite, por su parte, el acceso universal tiene que ver con la prestación de servicios de

[15] DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE (Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana Bogotá, Colombia, 1948)
http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/4.DECLARACION%20AMERICANA.pdf

[16] CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (Pacto de San José)
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf

telecomunicaciones a la comunidad o a las comunidades de forma general. Vale decir, que éste se cumple con la instalación de centros o nodos de acceso al servicio telefónico fijo e Internet. A través del acceso universal también se pueden desarrollar otros servicios como el de telemedicina para los hospitales públicos, conectividad en banda ancha para instituciones educativas públicas o conectividad a centros de gestión empresarial, que son puntales para el desarrollo económico y social de cualquier país.[17]

Garantizando y promoviendo el desarrollo del acceso universal se acatan las normas internacionales que definen las obligaciones de los Estados en cuanto a la protección de los derechos económicos y sociales, la preservación de los derechos culturales y, por supuesto, la libertad de expresión y comunicación.

En países desarrollados, el concepto de acceso universal ha sido superado y, por ello, sólo se tiene en cuenta el de servicio universal, toda vez que las necesidades básicas insatisfechas de las poblaciones más apartadas han sido cubiertas por los diferentes operadores y por el mismo Estado, según el modelo que se tenga. En países como México, el acceso universal es un elemento fundamental para cubrir ciertos servicios que por diversas razones, no son atractivos para los operadores de telecomunicaciones.

Son embargo, no podemos seguir sin promover políticas que garanticen los derechos fundamentales de cualquier mexicano. Con estas políticas se cierra tanto la brecha de acceso como la brecha de eficiencia en el mercado.

Para la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), debe proporcionarse acceso universal a los servicios de telecomunicaciones en las comunidades rurales y remotas, mediante la instalación de varias líneas a través de medios técnicos apropiados en un punto central conveniente, administradas y orientadas de manera comercial, facilitando a precios basados en el costo, líneas y conectividad a las instituciones del sector público y de servicios públicos, al igual que las empresas comerciales y los abonados privados.

De hecho, el acceder a ciertos territorios lejanos implica no sólo pensar en términos de desarrollo a través de redes alámbricas, bien sea de fibra óptica o de cobre con la tecnología sino en telecomunicaciones a través de redes inalámbricas que, en el caso de países como Colombia, son satelitales.

En cuanto a la relación entre esta planeación y el servicio universal de telecomunicaciones, tal vez sea interesante mencionar también que en diversos países se han hecho planes, programas y estrategias para el impulso y desarrollo de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (SIC), en donde uno de los núcleos básicos es precisamente el acceso y servicio universal, como elementos *sine qua non* para transitar hacia dicha SIC y garantizar y proteger otros derechos conexos.[18]

Uno de esos, ya lo hemos dicho, es el derecho a la información en sentido amplio. Ambos, derecho a la información y servicio universal, forman parte de esas nuevas generaciones de derechos que se han ido garantizando paulatinamente en los textos constitucionales alrededor del mundo. Los dos tienen una relación muy directa con las telecomunicaciones y se ven potenciados por las mismas y por el proceso de convergencia, además de tener un fundamento teórico y de análisis en los postulados del Derecho de la Información.

Al cierre del 2011 se contaba con 94 millones 565 mil suscripciones a teléfonos celulares móviles, de las cuales 45% se ubican en las doce principales ciudades del país, las suscripciones de acceso a Internet de Banda Ancha Fija y Móvil crecieron a una tasa de 40.4 por ciento anual. En 2011, las suscripciones de acceso

[17] Barbosa Delgado, Francisco Roberto. El servicio y acceso universal en el derecho de las telecomunicaciones y su aplicación en la libertad de expresión

[18] Arellano Toledo, Wilma. El servicio universal de telecomunicaciones en México y en la experiencia comparada. http://www.mediatelecom.com.mx/index.php/agencia-informativa/colaboradores/item/18619-el-servicio-universal-de-telecomunicaciones-en-mexico-

a Internet de banda ancha fija y móvil ascendieron a 20 millones 70 mil, de las cuales el 58.4 por ciento corresponden a Banda Ancha Fija alámbrica y 41.6 por ciento a banda ancha inalámbrica (Fija y Móvil).

Es por eso que en estas reformas que se están impulsando, no podemos olvidar ni dejar de garantizar el acceso y servicios universales en telecomunicaciones, si en verdad queremos que todos los mexicanos contemos con oportunidades reales de desarrollo y equidad en las mismas. No es posible que actualmente todavía los más de 10 millones de mexicanos, principalmente indígenas que viven en pequeñas comunidades, no cuenten con estos servicios fundamentales.

En 2012 años apenas se alcanzó una penetración de 87% en telefonía móvil, con la mayoría de las áreas rurales sin cobertura
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno, el siguiente proyecto de:

DECRETO

ÚNICO.- Se adiciona el inciso XVIII al artículo 3, y se reforman los artículos 7, 9-A, y 50, de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I a XVII…

XVIII. Acceso y servicio universal en telecomunicaciones
Se entiende por acceso y servicio universal de telecomunicaciones a un conjunto definido de servicios de telecomunicaciones que habrán de prestarse con una calidad determinada y ser accesibles, a un precio asequible, a todos los usuarios, con independencia de su localización geográfica. En relación con la calidad en la prestación del servicio universal y con la accesibilidad y el carácter asequible del precio

Para la consecución de los objetivos de cohesión económica y social y de igualdad territorial, dentro del servicio universal de telecomunicaciones se deberá garantizar, inicialmente:

a) Que todos los ciudadanos, en todo el territorio nacional, puedan conectarse a la red telefónica pública fija y móvil, acceder a la prestación del servicio telefónico fijo disponible al público. La conexión debe ofrecer al usuario la posibilidad de emitir y de recibir servicios nacionales e internacionales de voz, fax y datos.
b) Que exista una oferta suficiente de teléfonos públicos de pago situados en el dominio público de uso común, en todo el territorio nacional.
c) Que las personas discapacitadas o con necesidades sociales especiales tengan acceso al servicio telefónico fijo disponible para el público, en condiciones que les equiparen al resto de los usuarios.

La imposición de obligaciones de servicio universal no deberá discriminar una tecnología determinada.

Artículo 7. La presente Ley tiene como objetivos promover un desarrollo eficiente de las telecomunicaciones; ejercer la rectoría del Estado en la materia, para garantizar la soberanía nacional; fomentar una sana competencia entre los diferentes prestadores de servicios de telecomunicaciones a fin de **garantizar el acceso y servicio universal en telecomunicaciones.**

…

…

Artículo 9-A. La Comisión Federal de Telecomunicaciones es el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría, con autonomía técnica, operativa, de gasto y de gestión, encargado de regular, promover y

supervisar el desarrollo eficiente y la **y servicio universal en telecomunicaciones** en México, y tendrá autonomía plena para dictar sus resoluciones. Para el logro de estos objetivos, corresponde a la citada Comisión el ejercicio de las siguientes atribuciones:

…

…

Sección II
Del acceso y servicio universal en telecomunicaciones

Artículo 50. La Secretaría procurará la adecuada provisión de servicios de telecomunicaciones en todo el territorio nacional, con el propósito de que exista acceso a las redes públicas de telecomunicaciones para la atención de servicios públicos y sociales, de las unidades de producción y de la población en general.

Tomando en cuenta las propuestas de los gobiernos de las entidades federativas, de los concesionarios de redes públicas de telecomunicación y otras partes interesadas, la Secretaría elaborará los programas de a**cceso y servicio universal en telecomunicaciones** correspondientes, los cuales podrán ser ejecutados por cualquier concesionario **para garantizar el acceso y servicio universal a todas las comunidades descritas en el artículo 3 inciso XVIII**.

La Secretaría asegurará la disponibilidad de bandas de frecuencias en los casos en que un proyecto de a**cceso y servicio universal en telecomunicaciones** así lo requiera, a cuyo efecto podrá negociar con los concesionarios la utilización de las bandas de frecuencias que no estén aprovechando, o bien otorgar nuevas bandas de frecuencias.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se contrapongan al presente decreto.

Dado en EL Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores a los veinticinco días del mes de abril de 2013.

SUSCRIBE
SENADOR SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ

DE LA SEN. ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY GENERAL PARA LA SALUD ALIMENTARIA Y LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LA OBESIDAD, EL SOBREPESO Y LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA.



SEN. MARÍA ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES
H. CONGRESO DE LA UNIÓN.
P R E S E N T E

La suscrita Senadora **MARÍA ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO** integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, en uso de las facultades que me confieren los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 8 numeral 1, fracción I, 164, y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de esta H. Cámara de Senadores la presente **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY GENERAL PARA LA SALUD ALIMENTARIA Y LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LA OBESIDAD, EL SOBREPRESO Y LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA** al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La obesidad en México es un problema de salud pública cuya solución requiere del trabajo conjunto de instituciones, especialistas, personas, capaces de instrumentar métodos y técnicas a través de programas que den como resultado la prevención y la preservación de la salud. Resultados de estudios recientes hechos en 2012, elaborados por la Academia de Medicina, la Academia Mexicana de Cirugía, el Instituto Nacional de Salud Pública, la Academia Mexicana de Pediatría y la Universidad Nacional Autónoma de México, afirman que en México, coinciden en que la obesidad se ha convertido en una enfermedad de curso crónico, con un origen multifactorial en el que interactúan agentes genéticos, sociales y ambientales, además de los estilos de vida que regularmente se determinan por indicadores sociales y económicos.

Ello habla de lo complejo que resulta plantear una solución al problema de la obesidad en nuestro país. De hecho, la Organización Mundial de la Salud hizo la advertencia a México de que la prevención y control de la obesidad y sus comorbilidades requieren de una estrategia nacional, multisectorial, que involucre a los distintos niveles de gobierno y a los poderes Ejecutivo y Legislativo, y que atienda factores de riesgo específicos que se generan en el hogar, la escuela, la comunidad, los centros de trabajo y los espacios públicos y de esparcimiento, además de comprometer a actores directamente responsables con el problema como son el sector privado, especialmente la industria de alimentos, los medios de comunicación masiva, las agrupaciones de consumidores y la academia.

El reto es muy grande, por ello se requiere de una estrategia integral en materia de salud en cuanto a alimentos y prevención y atención de la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria. Esto es urgente porque los mismos estudios antes citados concluyen de manera determinante que la obesidad es ya un problema de salud pública que está asociada con una pérdida de salud. Científicamente se ha comprobado que es un factor de riesgo para el desarrollo de diabetes tipo 2, hipertensión arterial, dislipidemias, enfermedades cardiovasculares (especialmente la cardiopatía isquemia y los infartos cerebrales).[19]

[19] Rivera Domaarco et all (2012), *Obesidad en México: recomendaciones para una política de Estado*, UNAM.

El análisis de las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) demuestran que en tan sólo cuatro décadas el perfil epidemiológico de México ha cambiado de una situación en que la desnutrición y las enfermedades infeccionas eran los mayores problemas de salud pública, a uno dominado por la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades crónicas no transmisibles relacionadas con la nutrición.

México registra uno de los incrementos más rápidos en el mundo de la prevalencia de peso excesivo (sobrepeso y obesidad) y sus comorbilidades. De 1980 a 2000, de forma casi paralela se identificó un incremento alarmante de 47 % en la mortalidad por diabetes mellitus tipo 2, pasando de ser la novena causa de mortalidad en 1980 a la tercera en 1997 y a la segunda causa de mortalidad en el país en 2010, con cerca de 83 000 defunciones.[20]

Mediciones nacionales

Desde 1988 diversas instituciones del sector salud realizaron mediciones probabilísticas con cobertura nacional para contar con información representativa y confiable sobre la alimentación y el estado nutricio de la población materno-infantil. En aquel año se reveló la existencia de elevadas prevalencias de desnutrición aguda (emaciación) y de desnutrición crónica (baja talla) en niños menores de cinco años y de una gran inequidad en el estado nutricio de la población.

Once años más tarde, en 1999, el Instituto Nacional de Salud Pública realizó la segunda encuesta nacional probabilística, en la que se obtuvo por primera vez información sobre la prevalencia de anemia; una disminución marcada de la desnutrición aguda en niños y mujeres y una reducción de la desnutrición crónica inferior a la lograda por países de ingresos similares. Sin embargo, uno de los resultados más sorprendentes de la encuesta de 1999 fue el descubrimiento de una verdadera epidemia de obesidad en las mujeres adultas. Los aumentos en obesidad documentados por la encuesta de 1999 se encuentran entre los mayores registrados en el mundo.

Para 2006 la Encuesta Nacional de Salud ENASUT también reveló que el sobrepeso y la obesidad continuaban su aumento en todas las edades, regiones y grupos socioeconómicos, con lo que se colocaron entre los problemas de salud pública más importantes.

La obesidad se caracteriza por un aumento en los depósitos de grasa corporal y por ende ganancia de peso, causados por un balance positivo de energía, que ocurre cuando la ingestión de energía de los alimentos excede al gasto energético y, como consecuencia, el exceso se almacena en forma de grasa en el organismo.

La última encuesta nacional de salud y nutrición (Ensanut 2012) obtuvo información antropométrica y realizó estimaciones poblacionales sobre prevalencia de peso excesivo (sobre peso u obesidad) en adultos (20 años y más), en niños en edad escolar (cinco-11 años) y en adolescentes (12-19 años) en México.

La prevalencia fueron peso excesivo de 73% en mujeres y 69.4% en hombres adultos, 35.8% en adolescentes de sexo femenino, 34.1% en adolescentes varones y 32% en las niñas y 36.9% en niños en edad escolar. Durante el lapso de 24 años estudiado, entre 1988 y el año 2012, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad tuvo un aumento sostenido en mujeres adultas y en adolescentes.

Desde el primer periodo de encuestas la velocidad 5 de aumento ha ido decreciendo, hasta llegar a la menor tasa de aumento, observada de 2006 a 2012. En el caso de los niños en edad escolar, la tasa de aumento entre 2006 y 2012 fue ligeramente negativa (de 32.3% a 32.0%). En suma, actualmente alrededor de 7 de cada 10 adultos (más de 49 millones) y 1 de cada tres niños de 5-19 años (alrededor de 12 millones) presentan peso excesivo (sobrepeso u obesidad).10-12

[20] INEGI, Estadísticas vitales. Mortalidad. Consulta en abril de 2012. Disponible en: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/registros/vitales/mortalidad/tabuladores/ConsultaMortalidad.asp.

Costos económicos

Dado su papel como causa de enfermedad, la obesidad aumenta la demanda de servicios de salud, además de afectar el desarrollo económico y social de los mexicanos. El costo de la obesidad ha sido estimado en 67 mil millones de pesos en 2008 y se calcula que para el 2017 fluctúe entre $151 mil millones y $202 mil millones de pesos, según estimaciones de *Obesidad en México: Recomendaciones para una política de Estado, de diversas instituciones como la UNAM*.

Los costos elevados directos e indirectos de la obesidad y sus comorbolidades, así como los efectos de éstas, imponen la necesidad urgente de actuar con base en la mejor evidencia científica disponible para su prevención y control, se cita en el mismo estudio.

Los efectos económicos de la obesidad han sido estimados por investigadores de la Unidad de Análisis Económico (UAE) de la Secretaría de Salud. Se analizó el costo en dos de sus externalidades negativas: el costo directo anual en atención médica para el sistema públicos de salud de 14 complicaciones derivadas de cuatro grupos de enfermedades vinculadas con la obesidad –diabetes mellitus tipo 2, enfermedades cardiovasculares, cáncer de mama y osteoartitis-, que para el 2008 se estimó en 42 mil millones de pesos bajo un escenario base de 13 % del gasto total en salud de ese año.

La externalidad financiera medida a través del costo indirecto por pérdida de productividad se estimó para 2008 en 25 mil millones de pesos. La suma total estimada de los costos directos e indirectos para 2008 fue de 67 000 millones de pesos. En 2017 se estima que el costo directo fluctúe entre 151 mil millones y 202 mil millones de pesos.

Según los estudios realizados por la UNAM, el impacto económico se estimó en 2008 en más de 40 000 millones de pesos y se calcula que dentro de cinco años esta cifra prácticamente se habrá duplicado. Esto es delicado. Sin embargo, todavía es más delicado reconocer que una de cada cuatro defunciones que se registran en el país tienen relación con el peso excesivo y que casi tres cuartas partes de las defunciones totales, que se acercaron a 600 000 en el 2012, entran en la clasificación de aquellas debidas a las enfermedades crónicas no transmisibles relacionadas con la nutrición.

Con el propósito de ejemplificar, es oportuno mencionar que la diabetes es responsable de más de 80 000 defunciones anuales en el país, además que representa la causa de uno de cada siete fallecimientos o 14 % del total.

Para sostener tal afirmación, los estudios que aquí se citan se refieren además a un análisis sobre costos por caloría en México. Se encontró que los patrones de consumo de los hogares mexicanos entre 1992-2010 son diferentes según el nivel de ingreso: Los hogares con menor ingreso toman decisiones de gasto que les permiten consumir un mayor nivel de calorías a un menor precio, pero de menor calidad nutricional; mientras que en los ingresos altos se consumieron alimentos de mayor costo por caloría. Se observó que era más económico consumir energía en 2010 que en 1992.

El costo de mil calorías ha disminuido en términos reales y eso permite obtener más calorías a un menor precio de lo que se obtenía en 1992. El nivel de ingreso en México es por tanto un determinante de la estructura y las decisiones de consumo de los individuos, volviendo a las personas con menores ingresos más proclives al sobrepeso y la obesidad, como sugieren los datos epidemiológicos mencionados anteriormente.

Obesidad infantil y en adolescentes

La obesidad se ha convertido en una epidemia. En el caso de los niños y niñas en México, el peso excesivo aumenta en casi dos puntos porcentuales cada año. En el caso de los adolescentes, entre 1988 y 2006, el

incremento de peso excesivo en ese grupo poblacional ascendió a 3.5 veces, en tanto que para la obesidad el aumento fue de cinco veces en menos de 20 años (Ensanut 2012).

Está comprobado que si un niño es obeso, tiene un 100 % de probabilidades de que sea un adulto obeso. La misma encuesta arrojó datos tales como que de 1999 a 2012, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad pasó de 25.5 % a 32 %, 0.5 puntos porcentuales (2%) por año.

En el caso de los niños de edad escolar, la tasa de aumento entre 2006 y 2012 fue ligeramente negativa (de 32.3 a 32%). En suma, actualmente alrededor de siete de cada 10 adultos (más de 49 millones) y uno de cada tres niños de cinco-19 años (alrededor de 12 millones) presentan peso excesivo (sobrepeso u obesidad)

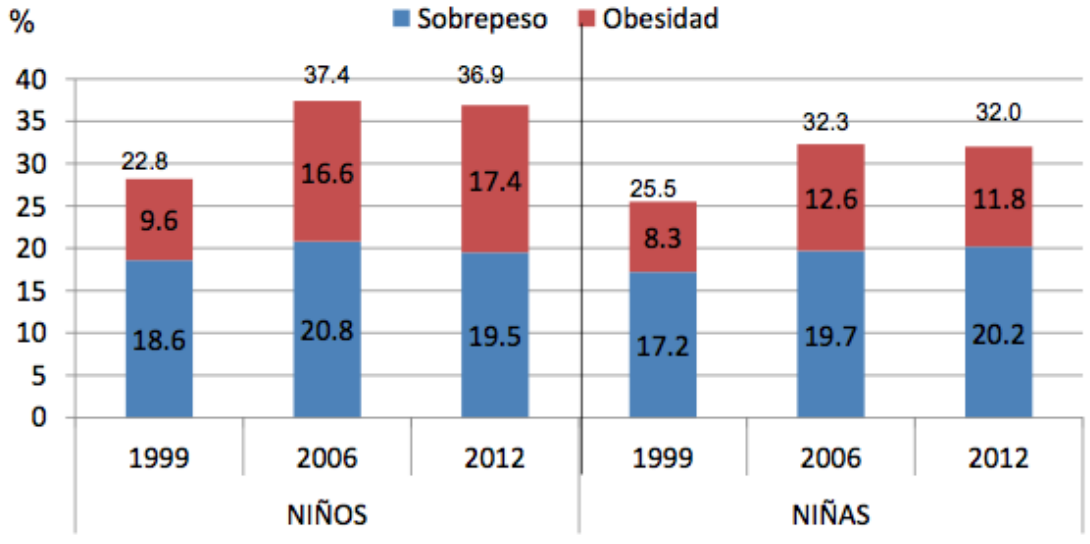
Prevalencia

De acuerdo con la ENSANUT 2012, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en menores de cinco años ha registrado un ascenso de 2 puntos porcentuales en los últimos 25 años. El principal aumento se registra en la región norte del país que alcanza una prevalencia de 12% en 2012, esto es 2.3% más que el promedio nacional.

Las y los niños en edad escolar (5 a 11 años), presentaron una prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad de 34.4%; de los cuales 19.8% corresponde a sobrepeso y 14.6% a obesidad. Estas prevalencias en niños en edad escolar representan alrededor de 5 millones 664 mil 870 niños con sobrepeso y obesidad en el ámbito nacional.

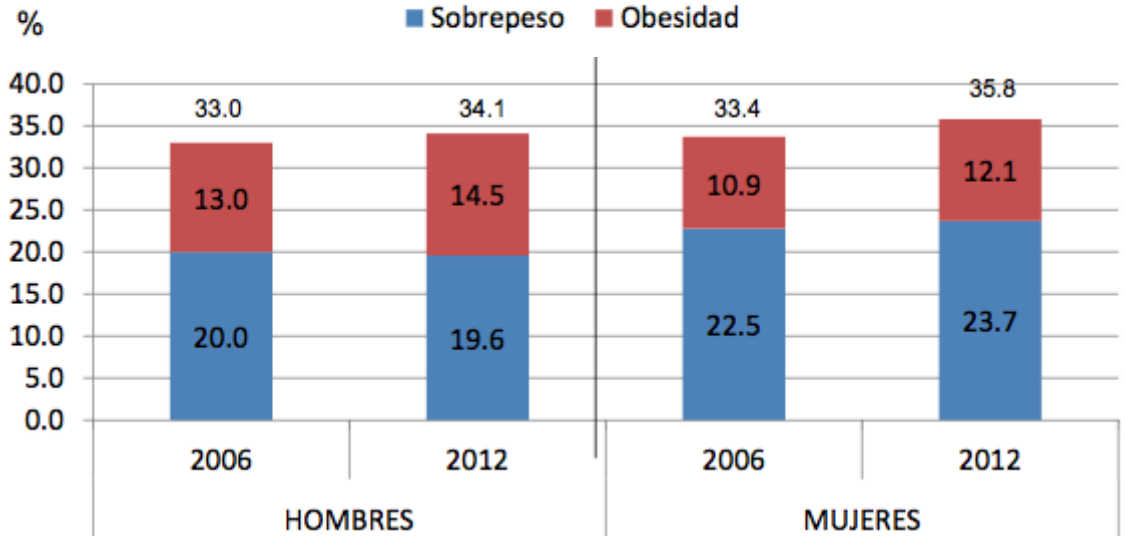
Por su parte, los adolescentes (12 a 19 años) presentan una prevalencia de 34.9% en ambas enfermedades. A ello corresponde 21.6% a sobrepeso y 13.3% a obesidad. En el ámbito nacional esto representa alrededor de 6 millones 325 mil 131 individuos entre 12 y 19 años de edad con sobrepeso u obesidad. Es decir que actualmente, uno en cada cinco adolescentes presenta sobrepeso y uno en cada diez, obesidad.

Prevalencia porcentual de Sobrepeso y Obesidad en niños y niñas en edad escolar (5 a 11 años)
1999 – 2012



Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2012. Secretaría de Salud. Disponible en http://ensanut.insp.mx/doctos/ENSANUT2012_Nutricion.pdf

Prevalencia porcentual de Sobrepeso y Obesidad en adolescentes (12 a 19 años)
2006 – 2012



Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2012. Secretaría de Salud. Disponible en http://ensanut.insp.mx/doctos/ENSANUT2012_Nutricion.pdf

En los últimos 6 años, revela la ENSANUT 2012, las tendencias de prevalencia de obesidad de niños y niñas en edad escolar han permanecido sin cambios, sin embargo en el caso de los adolescentes ha habido un aumento del sobrepeso y obesidad; entre 2006 y 2012 fue de 5% para ambos sexos en promedio, y desagregado fue de 7% en el caso de las mujeres y del 3% en el caso de los hombres. El incremento más notorio fue en la prevalencia de obesidad, al pasar de 10.9 a 12.1% (11.0%) en el sexo femenino, y de 13 a 14.5% (11.5%) en varones.

Activación física

En un rubro de estudio adicional referente a la actividad física, la ENASUT 2012, revela más de la mitad de los niños y adolescentes entre 10 y 14 años de edad no realizaron ninguna actividad formal (como deportes de equipo, organizados con entrenadores), en los últimos 12 meses previos a la encuesta y que 33% de los niños y adolescentes encuestados pasa menos de dos horas (el tiempo máximo recomendado) frente a pantallas.

La encuesta de 2012 no encuentra diferencias entre las localidades rurales y urbanas de acuerdo al número de actividades realizadas en los últimos 12 meses, sin embargo, el porcentaje de niños y adolescentes que pasa menos de dos horas frente a pantallas es significativamente mayor en las localidades rurales. En el caso de los adolescentes entre 15 y 18 años, se encontró que más de 50% de los adolescentes cumplen con las recomendaciones de actividad física, de acuerdo con los criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud y únicamente 36.1% de los adolescentes encuestados pasa menos de dos horas frente a pantallas, lo que es más frecuente en localidades rurales que urbanas.

Referencias internacionales

Estamos hablando de un problema multifactorial, que afecta a todos los estratos sociales, con grandes costos económicos que pueden causar un colapso de los servicios públicos de salud, y que además, tiene alcances no sólo nacionales sino internacionales. Datos de la Organización Mundial de la Salud refieren que a nivel mundial, 43 millones de menores de cinco años padecen obesidad o sobrepeso, de los cuales, cerca de 35 millones viven en países en desarrollo. Ante esta epidemia, la Organización recomienda diversas acciones preventivas y de activación física ya que hasta el 6% de la mortalidad mundial podría estar relacionada con la inactividad.

Por otra parte, en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

OCDE, existen naciones en donde la tercera parte del grupo poblacional comprendido entre los 5 a 17 tiene sobrepeso entre otros Grecia (41%); Estados Unidos (35.5%); Italia (31.7%); México (28.6%); Nueva Zelanda (28.5%) y Chile (27.9%), cuando el promedio para los países integrantes de la OCDE es de 22.2%.

Contenido de la iniciativa

Al tenor de lo referido en los apartados anteriores, la presente iniciativa pretende atender de manera integral el problema de la obesidad entendida como una epidemia global y un dilema de salud pública, de difícil solución y atención para el Estado mexicano. De manera especial quiere atenderse la obesidad infantil bajo la premisa simple de que un niño obeso será un adulto obeso.

Por ellos se propone la creación de una Ley General para la Salud Alimentaria y la Prevención y Atención Integral de la Obesidad y los Trastornos de la Conducta Alimentaria. El propósito es establecer en un solo instrumento jurídico las herramientas necesarias para asegurarle al Estado un buen desempeño a fin de garantizar los derechos fundamentales y así empoderar a los ciudadanos y las comunidades a fin de responsabilizarse de su salud en un ambiente que no promueva la obesidad y que ofrezca mejores oportunidades para la adopción de estilos de vida saludables.

La propuesta de Ley establece las competencias de cada una de las dependencias del gobierno federal involucradas en el problema e identifica la necesidad de que el gobierno trabaje sobre el entorno promotor de obesidad, buscando hacerlo más propicio para la práctica de alimentación saludable y actividad física por parte de la población.

Prevé que para modificar los patrones de alimentación y actividad física de los individuos y las colectividades, es necesario impulsar cambios en el ambiente de tal manera que la disponibilidad de alimentos saludables y oportunidades para la actividad física sean la regla en las escuelas los centros de trabajo y las comunidades.

Se propone la creación de un Consejo Nacional para la Prevención y Atención Integral de la Obesidad y los Trastornos de la Conducta Alimentaria, como un órgano colegiado el cual tiene por objeto el diseño, consulta y evaluación, coordinación y desarrollo de las estrategias y programas en materia de prevención y atención integral del sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria.

El objetivo es responder a la necesidad de implementar una serie de intervenciones intersectoriales de políticas públicas de prevención, control y seguimiento que incidan en las fallas de mercado para reducir el impacto de la obesidad en la salud de la población mexicana. De hecho, existe ya un Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria establecido desde 2012, y este Consejo que se propone se prevé como un instrumento que opere esas intervenciones intersectoriales.

Contenido de la iniciativa

De conformidad con lo referido, la presente iniciativa se establece el objeto de satisfacer el derecho a la salud, por la vía de la prevención y de la atención del sobrepeso y la obesidad, así como los problemas que derivan de estos; bajo este presupuesto se parte de un componente de orden público e interés social, ubicando así un carácter necesario para asegurar el diseño y participación activa del Estado ante este problema, desde su prevención, pero también para su atención focalizada, con las diferentes estrategias, acciones y recursos institucionales.

Siendo una legislación de carácter general, se propone que en el diseño de estrategias y en su implementación, se haga por la vía de la concurrencia de los órdenes de gobierno que marcan nuestro federalismo, atendiendo a una propuesta nacional para la atención al grave problema de salud pública que actualmente se enfrenta en todo el país.

Se incluye un apartado de definiciones, estableciendo conceptos funcionales de aplicación en la ley. Primeramente se define a las acciones preventivas, las cuales serán de aplicación e interacción con los sectores público, privado y social de conformidad con el cumplimiento del objeto de la Ley General. Otros conceptos de aplicación en el marco de la ley son el de obesidad, sobrepeso, trastorno nutricional, salud alimentaría. Es importante señalar que en cuanto a las definiciones médicas estas no son restringidas, sino que se prevé que sean complementadas con otros instrumentos tales, como las Normas Oficiales Mexicanas enfocadas en esta materia.

Finamente en este apartado se incluye el Programa Nacional para la Salud Alimentaría y la Prevención y la Atención Integral de la Obesidad y Sobrepeso; así como el Consejo Nacional para la Prevención y la Atención Integral de la Obesidad y los Trastornos de la Conducta Alimentaria, ambos se desarrollan en un Capitulo III y IV, respectivamente.

Se establece que el Ejecutivo Federal tenga una participación activa y definida para el combate a este problema de salud pública; se propone que sea el principal promotor a nivel nacional de las acciones acordes al cumplimiento del derecho a la salud, tales como la atención medica, la nutrición adecuada, la promoción de la actividad física, también el desarrollo de estrategias para facilitar el acceso de la sociedad a la información y orientación adecuada que coadyuve como estrategia ante esta pandemia, otra atribución que se incluye para el Ejecutivo Federal, es la promoción de la investigación científica especializada; se propone que también se encargue de conformar un diagnostico integral a nivel nacional, incluso coordinándose con los diagnósticos locales que se vinculan también en esta iniciativa, contando así con una herramienta indispensable en el diseño, y en su caso la modificación de las acciones derivadas de la Ley .

Ahora bien, como parte de esta participación federal, se incluye a las Secretarías de Gobernación, Salud y Educación Pública, como instancias que llevarán a cabo acciones, enfocándose por las actividades propias de su competencia.

De este diseño se plantea que la Secretaría de Gobernación participe en la promoción, vigilancia y aplicación de sanciones en contenidos de medios de información a efecto de la erradicación de los problemas asociados con la obesidad, el sobrepeso y los trastornos de la alimentación. Se considera que estas acciones son fundamentales, ya que en alguna medida los hábitos e información acerca del consumo alimenticio se difunden en estos medios. Se propone finalmente que la Secretaría, en su caso, coordine las acciones derivadas de esta ley con las entidades federativas, generándose un vínculo entre la federación y los estados, al mismo tiempo de que se puedan aplicar las acciones tendientes a los objetivos de la ley.

Por lo que hace a la Secretaría de Salud, se establece que sea la encargada de fomentar y proporcionar la atención médica especializada, teniendo una participación relevante en cuanto a las instancias medicas que tiene a su cargo, también se incluye la realización de diagnósticos tempranos. Se propone que diseñe y coordine campañas de prevención y orientación dentro de los espacios de salud, de esta forma se establece que la elaboración de una guía para la población en general. Finalmente se posibilita la participación de la sociedad organizada a efecto de fortalecer las acciones encaminadas desde esta Secretaría.

Se propone que la Secretaría de Educación Pública participe en el ámbito de la educación; si bien se reconoce la obesidad, el sobrepeso y los trastornos alimentarios como problemas de salud pública, también lo es que la educación forma parte de las medidas principalmente preventivas para contrarrestar dicha pandemia. De esta forma se incluye la posibilidad de que puedan fomentar actividades físicas como parte de las actividades permanentes al interior de los centros educativos. Se propone también que se proporcione la orientación, capacitación a todos los actores involucrados en el entorno escolar: alumnos, profesores, autoridades escolares y madres y padres de familia. Así como campañas de difusión de la información necesaria. Una facultad importante en esta materia es que fomente el consumo de alimentos saludables al interior y al rededor de las escuelas.

El Programa Nacional para la Prevención y la Atención Integral de la Obesidad y los Trastornos de la Conducta Alimentaria, planteándose una serie de objetivos entre los que se considera tener las estrategias necesarias desde la prevención y la atención, también se incluyen la obligación de que se tengan los lineamientos o estrategias para fomentar la alimentación saludable, estilos de vida saludable, y las actividades físicas. Finalmente de este Programa habrá de derivarse la Estrategia Especial para el combate a la obesidad.

En cuanto a la Estrategia Especial para el Combate, Atención y Disminución de la Obesidad, Sobrepeso y Trastornos de la Conducta Alimentaria, se propone que sea una estrategia integral derivada del Programa Nacional, con principal énfasis en la niñez y adolescentes. Lo anterior, como se ha comentado, se fundamenta en el grave problema que enfrenta este sector de la sociedad respecto del problema de obesidad, sobrepeso y otros trastornos alimenticios.

Se establecen como objetivos el diseño de estrategias, protocolos para la identificación, evaluación y atención de la obesidad, el sobrepeso y los trastornos de la conducta alimentaría; también se propone la generación de hábitos alimenticios sanos y un estilo de vida saludable a través de la instrumentación de campañas informativas; también se incluye la práctica del deporte y el fomento de las actividades físicas, no solo dentro de las actividades escolares, sino como parte de las actividades cotidianas. Finalmente se incluye la participación del sector público, social y privado para que en conjunto promuevan las acciones que se formulen a partir de esta Estrategia Especial.

Un elemento que es de resaltar es la creación de un Consejo Nacional para la Prevención y Atención Integral de la Obesidad, Sobrepeso y los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Esta órgano estará encargado de diseñar, desarrollar, coordinar y evaluar, el Programa Nacional; en su integración colegiada se propone que participe el Ejecutivo federal, en calidad de presidente, los titulares de la Secretaria de Salud y de Educación Pública, así como un representante del Congreso de la Unión. Lo anterior se fundamenta en el hecho de involucrar a estas autoridades en una política estratégica de alcance social en todo el territorio nacional, en donde se integren visiones en una sola ruta, para ello también se propone la invitación permanente de la Academia Nacional de Medicina y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición en su carácter científico especializado en el tema; también se propone que dichos Consejo invite a otros especialistas, instituciones públicas y privadas, así como cualquier funcionario público, siempre que conforme a la naturaleza de sus actividades representen ana aportación a las actividades del Consejo.

Se propone que sesione dos veces al año, como un tiempo pertinente para la aplicación y en consecuencia la evaluación del Programa Nacional. Sin embargo dichos términos no son limitativos, pues podrá convocarse a sesión extraordinaria, siempre que sea hecha por el presidente del órgano. Se incluye la posibilidad de que en el desarrollo de sus trabajos se creen comités o grupos de trabajo para temas o asuntos especializados.

Como atribuciones de este Consejo, se propone que diseñe el Programa Nacional para la Prevención y Atención Integral de la Obesidad y los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Es de mencionar que también se incluye la evaluación; se propone que sea un órgano de consulta permanente, con la capacidad de vinculación y coordinación entre los sectores público, social y privado. Finalmente se otorga la posibilidad de firmar instrumentos necesarios para la consecución de los fines que se contemplan.

Un tema importante en el diseño de esta iniciativa es lo relativo a la distribución de competencias y el respeto irrestricto al federalismo. De esta manera, si se parte de la idea de una política pública a nivel nacional y de gran alcance, es necesario que se involucren decididamente los tres ámbitos de gobierno en el combate a este problema de salud pública. Para ello se incorpora un Capítulo V de la distribución de competencias en el que las Entidades federativas, el Distrito Federal y los Municipios actúen de forma concurrente, partiendo de la elaboración de diagnósticos para conocer la problemática y poder enfrentarla desarrollando acciones en concordancia con el objeto de la ley y del Programa Nacional; se incluye la promoción de hábitos alimenticios y de nutrición; políticas preventivas y de atención, la promoción de la participación de los sectores sociales y privados, también la atención médica especializada, el fomento de espacios y de actividades para las actividades físicas y deportivas para toda la población; la promoción de la investigación

científica , procurar que en la publicidad oficial no se utilicen imágenes que distorsionen los hábitos como herramienta necesaria para coadyuvar en la solución de este problema.

Con esta iniciativa se está proponiendo contar con una base que permita contar con las herramientas necesarias que aseguren la participación del Estado y sus niveles de gobierno, garantizando el derecho a la salud en su vertiente de la salud alimentaria y hábitos sanos como las actividades deportivas, generando un espacio de interacción con la ciudadanía en los ámbitos público, privados y social.

Finalmente es de mencionar que con la propuesta que se presenta ante este Senado, se advierte la necesidad de modificar los patrones de alimentación y actividad física de los individuos y las colectividades, siendo necesario impulsar cambios en el ambiente de todos los sectores sociales, fundamentalmente entre las niñas, niños y adolescentes, de tal manera que la disponibilidad de alimentos saludables y oportunidades para la actividad física sean la regla en las escuelas públicas y privadas, comunidades, centros rurales y urbanos, centros de trabajo y espacios públicos.

En razón de lo expuesto y fundado presento la siguiente iniciativa que contiene el siguiente proyecto de Decreto

ÚNICO.- SE CREA LA LEY GENERAL PARA LA SALUD ALIMENTARIA Y LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LA OBESIDAD, EL SOBREPRESO Y LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA.

DECRETO
LEY GENERAL PARA LA SALUD ALIMENTARIA Y LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LA OBESIDAD, EL SOBREPRESO Y LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA

Capítulo I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social, y tiene por objeto garantizar el derecho a la salud establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a través de la prevención y atención integral de la obesidad y sobrepeso, y los trastornos de la conducta alimentaria, mediante acciones coordinadas y concurrentes entre la Federación, Entidades federativas, Distrito Federal y Municipios.

Será de aplicación supletoria la Ley General de Salud y las Normas Oficiales Mexicanas, de conformidad con el objeto de esta Ley.

Artículo 2. Para efectos de la presente Ley, se entenderá por:

I. Acciones preventivas: Acciones del sector público, privado y social que se realizan de conformidad con el objeto establecido en la presente Ley.
II. Ley: Ley General para la Salud Alimentaria y la Prevención y Atención de la Obesidad, el Sobrepeso y los Trastornos de la Conducta Alimentaria.
III. Obesidad: Enfermedad caracterizada por el aumento de grasa corporal, generalmente acompañada de sobrepeso
IV. Programa: Programa Nacional para la Prevención y la Atención Integral de la Obesidad, el Sobrepeso y los Trastornos de la Conducta Alimentaria.
V. Sobrepeso: Exceso de peso con riesgo de obesidad
VI. Salud alimentaria: Mantenimiento de equilibrio energético
VII. Trastornos nutricionales: Exceso o defecto de alimentos y nutrimentos
VIII. Consejo: Consejo Nacional para la Prevención y la Atención Integral de la Obesidad, el Sobrepeso y los Trastornos de la Conducta Alimentaria.

Artículo 3. Corresponde al Ejecutivo Federal:

I. Promover mediante acciones enfocadas el derecho a la salud alimentaria y a la actividad física.
II. Promover las acciones de atención médica necesaria, con carácter preventivo y de tratamiento.
III. Promover las políticas públicas en materia de nutrición y la actividad física, así como su vigilancia y evaluación.
IV. Promover la adopción de los mejores hábitos nutricionales y de alimentación en la sociedad, mediante acciones en las que involucre a instancias públicas, privadas y l a sociedad civil.
V. Facilitar el acceso de la sociedad a la información para prevenir y combatir la obesidad, el sobrepeso y los trastornos de la conducta alimentaria.
VI. Propiciar la participación social, pública y privada en la prevención y combate de la obesidad, sobrepeso y trastornos de la conducta alimentaria.
VII. Promover hábitos de alimentación saludable y actividades físicas en los espacios y centros laborales.
VIII. Promover las actividades de investigación científica especializada para prevenir la obesidad, el sobrepeso y los trastornos alimentarios, garantizando el conocimiento y difusión de esa información.
IX. Rendir un informe anual ante el Congreso de la Unión sobre los avances del Programa.
X. Elaborar un diagnostico nacional sobre la problemática de la obesidad, el sobrepeso y los trastornos alimentarios.
XI. Las demás de conformidad con esta Ley y las aplicables.

Artículo 4. Corresponde a la Secretaría de Gobernación:

I. Promover que en los medios de comunicación se favorezcan la erradicación de los problemas de salud pública de sobrepeso y obesidad, además de mostrar las complicaciones derivadas de éstas;
II. Vigilar y promover que en los medios de comunicación se eviten acciones que propicien trastornos de la conducta alimentaria, así como la distorsión de los hábitos de alimentación;

III. Vigilar y promover que en las campañas publicitarias del Gobierno Federal, se eviten acciones que propicien trastornos de la conducta alimentaria, así como la distorsión de los hábitos de alimentación;
IV. Aplicar sanciones a los medios de comunicación, de conformidad con la legislación en la materia, que no cumplan con lo estipulado en las fracciones anteriores; y
V. Coordinar y evaluar con las entidades federativas y el Distrito Federal, las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la Ley.

Artículo 5. Corresponde a la Secretaría de Salud:

I. Fomentar y proporcionar una atención medica, interdisciplinaria e integral para revertir los problemas del sobrepeso y obesidad, así como los trastornos nutricionales, a través de las instituciones especializadas a su cargo;
II. Coordinar, campañas de prevención, para favorecer la nutrición y salud alimentaria, difundiendo en los centros de salud, hospitales, planteles escolares y espacios públicos, las causas que provocan el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria, así como las formas de prevenir y atender estos problemas;
III. Aplicar un programa masivo para incentivar una alimentación saludable y actividad física en la salud, con énfasis en la población infantil, a través de estrategias, campañas, mensajes, actividades de concientización y conocimiento;
IV. Diseñar e instrumentar acciones para la prevención, diagnóstico temprano y atención de las personas que presenten algún trastorno de la conducta alimentaria, con énfasis en la anorexia y la bulimia nerviosas;
V. Implementar campañas de información dirigidas especialmente a adolescentes y jóvenes, sobre los efectos adversos de los trastornos de la conducta alimentaria en la salud y que los planes de alimentación sean prescritos por profesionales en nutrición, así como para la disminución de otros factores de riesgo, coordinándose con las instancias y autoridades escolares correspondientes;

VI. Proporcionar una atención personalizada, interdisciplinaria e integral de los trastornos de la conducta alimentaria, sobre anorexia y la bulimia nerviosas y, en su caso, la referencia oportuna a la institución especializada;
VII. Elaborar una guía para la población en general y, de manera particular para los padres y madres, donde se incluya de forma didáctica información básica sobre el sobrepeso, la obesidad y los trastornos nutricionales, con énfasis en la anorexia y la bulimia nerviosas, la forma de detectarlas, el perfil de las personas que las padecen y las actitudes que pueden adoptarse en el ámbito familiar, considerando la diversidad de su constitución;
VIII. Generar y coordinar bases de datos, desagregadas por grupos de edad, sexo y ubicación geográfica en el territorio nacional, que registren la incidencia de trastornos de la conducta alimentaria en la población, indicando peso, talla y masa corporal; y
IX. Promover la participación de las organizaciones de la sociedad civil que trabajen en la materia**.**

Artículo 6. Corresponde a la Secretaría de Educación Pública:

I. Fomentar las actividades físicas dentro de las instituciones de educación, como practica integral permanente dentro de la oferta curricular;
II. Brindar la orientación y capacitación permanente sobre los problemas derivados de la obesidad, sobrepeso y los trastornos alimenticios tanto a profesores, alumnos, y autoridades escolares;
III. Vigilar que no se distribuyan, ni comercialicen, dentro del entorno escolar los productos alimenticios perjudiciales a la salud alimentaria;
IV. Fomentar y vigilar el consumo de alimentos saludables en los planteles educativos y en sus alrededores, en coordinación con las autoridades educativas en cada entidad federativa bajo el ámbito de su competencia, prohibiendo la comercialización y el fomento del consumo de alimentos y bebidas con bajo valor nutricional que contenga altos contenidos de azucares refinados, sal, colesterol, ácidos grasos saturados y transaturados;
V. Realizar campañas de difusión en los planteles escolares, tanto de educación pública como privada, previa celebración de los convenios respectivos, sobre el mejoramiento de los hábitos de alimentación de las y los estudiantes de todos los niveles educativos, respecto a la prevención de la obesidad, el sobrepeso y los trastornos de la conducta alimentaria, con énfasis en la anorexia y la bulimia nerviosas; e
VI. Incentivar la práctica del ejercicio y el deporte, como una medida para prevenir y contrarrestar el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria, poniendo énfasis en la población infantil y adolescente.

Capítulo II

PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA

Artículo 7. El Programa Nacional para la Prevención y la Atención Integral de la Obesidad, el Sobrepeso y los Trastornos de la Conducta Alimentaria tendrá los siguientes objetivos:

I. Asegurar las estrategias necesarias para prevenir y atender la obesidad, el sobrepeso y los trastornos de la conducta alimentaria;
II. Establecer los lineamientos y estrategias fomentar la alimentación saludable, la promoción de las actividades físicas y hábitos de vida saludable; y
III. Establecer mediante la Estrategia Especial los lineamientos y estrategias para prevenir, atender y contrarrestar la Obesidad, el sobrepeso y Trastornos de la Conducta Alimentaria enfocada en Niños y Jóvenes.

Capítulo III

DE LA ESTRATEGIA ESPECIAL DE ATENCIÓN A LA OBESIDAD, EL SOBREPESO Y TRANSTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Artículo 8.- La Estrategia Especial de Atención a la Obesidad, el Sobrepeso y Trastornos de la Conducta Alimentaria en niñas, niños y adolescentes, establece las acciones de coordinación entre la Federación, Entidades federativas y el Distrito Federal, y que tendrá los objetivos siguientes:

I. Establecer los lineamientos y protocolos para la identificación y evaluación para atender la obesidad, el sobrepeso y los trastornos de la conducta alimentaria en niñas, niños y adolescentes;

II. Instrumentar campañas informativas y estrategias de difusión focalizada en niñas, niños y adolescentes, para generar hábitos alimenticios y estilos de vida saludable;
III. Incentivar y promover el desarrollo de actividades encaminadas a la investigación y estudio de los trastornos de la conducta alimentaria en niñas, niños y adolescentes;
IV. Promover actividades físicas y la práctica del deporte de manera continua y sistemática, procurando que en su caso formen parte de los programas escolares; y
V. Promover la participación del sector público, social y privado en acciones referentes a la identificación y prevención de la obesidad, el sobrepeso y los trastornos de la conducta alimentaria en niñas, niños y jóvenes.

Capítulo IV

CONSEJO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA OBESIDAD, EL SOBREPESO Y LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA

Artículo 9.- Se crea el Consejo Nacional para la Nutrición Alimentaria y la Prevención y Atención Integral de la Obesidad y los Trastornos de la Conducta Alimentaria como un órgano colegiado el cual tiene por objeto el diseño, consulta, desarrollo, coordinación y evaluación de las estrategias y programas en materia de prevención y atención integral del sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria.

Artículo 10.- El Consejo Nacional está integrado por:

I. El titular del Ejecutivo Federal, que presidirá;
II. El titular de la Secretaría de Salud, como Vicepresidente;
I. El titular de la Secretaría de Educación Pública;
II. El titular de la Secretaria de Gobernación; y
III. Un representante del Congreso de la Unión.

Todos los integrantes del Consejo tienen carácter honorario y cuentan con los mismos derechos de voz y voto.

A las reuniones del Consejo podrán ser invitados especialistas, instituciones públicas o privadas y funcionarios públicos, cuya trayectoria profesional o actividades los vincule con los objetivos del Consejo.

La Academia Nacional de Medicina, y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición tendrán el carácter de invitados permanentes ante el Consejo.

Artículo 11.- El Pleno del Consejo sesionará dos veces al año y de manera extraordinaria cada vez que se convoque por el Presidente.

El Consejo podrá crear comités y grupos de trabajo, tanto de carácter permanente como transitorio, para el estudio y atención de los asuntos específicos relacionados con sus atribuciones.

La integración de los comités, así como la organización y funcionamiento del Consejo, se sujetará a lo que disponga su Reglamento Interno, que deberá ser elaborado por el Secretario Técnico de conformidad a lo dispuesto en esta Ley.

Artículo 12.- El Consejo tendrá las siguientes atribuciones:

I. Diseñar el Programa Nacional para la Prevención y la Atención Integral de la Obesidad, el Sobrepeso y los Trastornos de la Conducta Alimentaria;
II. Evaluar las políticas de prevención y atención integral relacionadas con el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria, así como en materia del fomento y adopción social de hábitos de alimentación y nutricional correcta;
II. Funcionar como un organismo de consulta permanente y coordinación para la formulación y desarrollo de estrategias y programas encaminados hacia la prevención y atención integral del sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria, así como de fomento y adopción social de hábitos de alimentación y nutricionales correctos;
III. Desempeñarse como un organismo de vinculación entre el sector público, social y privado, en materia de prevención y atención integral del sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria, así como de fomento y adopción social de hábitos de alimentación y nutricional correcto;
IV. Proponer la firma de acuerdos, convenios, bases de colaboración o los instrumentos jurídicos que se requieran para la prevención y atención integral del sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria con instituciones y organismos de los sectores público, social y privado, así como con otras entidades de la Federación u organismos internacionales;
IV. Expedir su reglamento interno, y
VI. Las demás en los términos de la presente Ley.

Capítulo V

DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA OBESIDAD, EL SOBREPESO Y LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA

Artículo 13.- Corresponde a las Entidades Federativas, Distrito federal y Municipios, de manera concurrente dentro del ámbito de sus jurisdicciones y como asunto prioritario de salud pública en la prevención y atención integral de la obesidad y sobrepeso, así como de los trastornos de la conducta alimentaria.

I. Desarrollarán acciones para dar cumplimiento al objeto de la presente Ley;
II. Elaborar un diagnostico integral de la sobre la problemática de la obesidad, el sobrepeso y los trastornos alimentarios;
III. Coadyuvar a la consolidación de los objetivos y estrategias del Programa Nacional para la Prevención y la Atención Integral de la Obesidad, el Sobrepeso y los Trastornos de la Conducta Alimentaria;
IV. Coadyuvar en el cumplimiento de la Estrategia Especial de Atención a la Obesidad, el Sobrepeso y Trastornos de la Conducta Alimentaria en niñas, niños y adolescentes;
V. Desarrollar programas estratégicos focalizados con las necesidades locales en materia de salud alimentaria y la prevención, atención integral del problema de obesidad, el sobrepeso y los trastornos de la conducta alimentaria;
VI. Promover los hábitos de alimentación y nutrición saludable en la sociedad;

VII. Instrumentarán las políticas de prevención y atención integral relacionadas con el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria de conformidad con esta Ley;
VIII. Promover la participación de los sectores sociales y privados en la formulación de políticas de atención;

IX. Brindar la atención médica especializada, a través de las instituciones de salud a su cargo;
X. Fomentar espacios deportivos y de recreación, con las características necesarias a efecto de que se promuevan las actividades físicas gratuitas y de acceso libre en beneficio de la salud;
XI. Facilitar el acceso libre y gratuito para niñas, niños y adolescentes en los lugares públicos para la práctica del deporte, actividades físicas o la recreación ubicados;
XII. Promover permanentemente la investigación científica en materia de prevención y atención de la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria;
XIII. Procurar que en los instrumentos de publicidad y difusión de acciones o servicios oficiales no se utilicen imágenes de personas con extrema delgadez como estereotipos de salud o belleza, así como en la transmisión de mensajes que induzcan a conductas que propicien trastornos de la conducta alimentaria y distorsionen los hábitos de la alimentación correcta; y
XIV. Fomentar rutinas de actividad física dentro de sus instalaciones, que permitan modificar hábitos laborales de sedentarismo y brinden beneficios a la salud de las y los trabajadores. Asimismo, promoverán espacios deportivos y de recreación para que su personal pueda acceder de manera gratuita. Para el desarrollo de estas acciones, deberán coordinarse con la instancia de Salud correspondiente.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Ejecutivo Federal emitirá el Reglamento de la Ley dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.

TERCERO. El Consejo Nacional a que se refiere este Ley, se integrará dentro de los 60 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.

CUARTO. El Ejecutivo Federal realizará la propuesta dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para efecto de asignar el presupuesto necesario para garantizar el cumplimiento de los objetivos del Programa y objetivos de esta ley.

QUINTO. Las Legislaturas de los Estados y Asamblea Legislativa del Distrito Federal, promoverán las reformas necesarias de conformidad con los fines de la presente Ley, dentro de un término de 6 meses, contados a partir de la entrada en vigor de la misma.

SUSCRIBE

_____

SEN. ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO

Dado en el Pleno de la H. Cámara de Senadores, México, Distrito Federal, a 30 de abril de 2013.

DE LA SEN. ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.



SEN. MARÍA ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES
H. CONGRESO DE LA UNIÓN.
P R E S E N T E

La suscrita Senadora **MARÍA ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO** integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, en uso de las facultades que me confieren los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 8 numeral 1, fracción I,164 numerales 1 y 2, y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de esta H. Cámara de Senadores la presente **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, LEY DE ASISTENCIA SOCIAL, LEY FEDERAL DEL TRABAJO, LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES,** al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El derecho a la alimentación está garantizado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que "toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará". En ese contexto, el derecho a recibir alimentos forma parte de la protección necesaria para obtener los medios que garanticen el desarrollo y sustento de la vida humana.

Como parte de su evolución, el derecho de familia se ha considerado bajo una serie de principios y valores que han sido entendidos bajo un plano legal a partir de su reconocimiento constitucional y también su protección en diversos tratados internacionales. La finalidad de esta realidad legal ha sido la de proteger la estabilidad de la familia, la regulación de las conductas de sus integrantes entre sí, pero también para delimitar las relaciones conyugales, de concubinato y de parentesco, resaltando la protección indispensable respecto de los menores, los incapacitados, la mujer y los adultos mayores, teniendo incluso una consideración de orden público e interés social. [21]

Jurídicamente se establece que las relaciones familiares constituyen una fuente variada de derechos y obligaciones, dentro de éstas se encuentra la de proporcionar alimentos, que surge en diferentes supuestos: por el parentesco consanguíneo, por la concertación formal del matrimonio o concubinato y, en algunos casos, como consecuencia del divorcio necesario.[22]

La Suprema Corte de Justicia de la Nacional ha definido al derecho de alimentos como:

[21] Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito; Jurisprudencia civil. [J]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXIII, Marzo de 2011; Pág. 2133

[22] Pérez Contrera, María Monserrat coord. (2008). *Supuestos de Procedencia del Derecho de la Ex Cónyuge inocente a recibir alimentos*, Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

> La facultad jurídica que tiene una persona denominada acreedor alimentista para exigir a otra, deudor alimentario, lo necesario para vivir como consecuencia del parentesco consanguíneo, del matrimonio, del divorcio y, en determinados casos, del concubinato; por lo que los alimentos se hacen consistir en proporcionar la asistencia debida para el adecuado sustento de una o varias personas por disposición imperativa de la ley, caracterizándose esta obligatoriedad legal por ser recíproca.[23]

Es oportuno mencionar que el movito por el cual se considera a la obligación de proporcionar alimentos como una sanción, responde a que la disolución del vínculo matrimonial mediante un divorcio necesario o contencioso, a diferencia del voluntario, se da por existir una causal determinada, es decir, responde a la violación de alguno de los deberes u obligaciones conyugales o filiales. Por tanto, si la conducta de alguno de los cónyuges encuadra en cualquiera de las causas de divorcio, genera un acto ilícito, ya que es contrario a las normas de orden público que regulan el matrimonio, de ahí que se le obligue a proporcionar los alimentos al cónyuge inocente.[24]

Respecto de las relaciones de concubinato, la obligación alimentaria existe en tanto dicho vínculo subiste.[25] Esto es, a diferencia de lo que ocurre con el matrimonio, el concubinato es la relación que se crea entre un hombre y una mujer por el hecho de vivir como marido y esposa durante un tiempo determinado por la ley, la que no puede dejar de reconocer que también mediante este tipo de relación se constituyen lazos familiares de afecto y ayuda mutua, sobre todo si se procrean hijos. Por tanto, el derecho a recibir alimentos, sólo procede si esa relación subsiste al momento de solicitarlos.[26]

De lo expuesto en los párrafos anteriores, se puede concluir que para que se genere el derecho a solicitar alimentos deben darse las siguientes condiciones: 1) la existencia de una relación jurídica que genere la obligación alimentaria, la cual surge a consecuencia del matrimonio, concubinato o parentesco consanguíneo o civil, y 2) la necesidad del acreedor alimentario y la capacidad del deudor para suministrar alimentos.[27]

Interés superior del niño

En México, con la reforma del año 2000, se elevaron a rango constitucional los derechos de niñas, niños y adolescentes al establecer su derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Además, se hicieron las modificaciones siguientes: se incorpora el concepto de "niño" en la pretensión de sustituir paulatinamente el término "menor"; se establece la obligación del Estado de proveer lo necesario para el respeto a la dignidad de la niñez y la efectividad en el ejercicio de sus derechos, y se considera el deber de los padres, tutores y custodios de preservar tales derechos.[28]

El principio del interés superior del niño ha tenido una importante evolución histórica y jurídica, no solo como un componente para su desarrollo --a grado tal de tener un reconocimiento y evolución en gran parte de las legislaciones del orbe--, sino también como un principio de la debida protección de los derechos de la infancia revelándose una característica uniforme: el reconocimiento de los derechos de las y los niños como

[23] Véase la ejecutoria de la contradicción de tesis 49/2007-PS, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Tomo XXVII, febrero de 2008, p. 59; IUS: 20729.
[24] Véase la ejecutoria de la contradicción de tesis 86/2001-ps, publicada en el *Semanario…* op. cit. Novena Época, Tomo XVI, noviembre de 2002, p. 6; IUS: 1728.
[25] *Ibidem*, Tomo XXI, junio de 2005, p. 757, tesis XXI, 2° C.T.27 C: IUS 178248.
[26] *Seminario…*, op cit. Novena Época. Tomo VII, junio de 1998, p. 626, tesis I 4°. C.20c; IUS: 196108.
[27] *Ibidem*, Tomo XXIII, marzo de 2006, p. 17, tesis 1ª./J. 472006; IUS 175690
[28] González Contró, Mónica, Mauricio Padrón y Daniel Márquez Gómez (2012), *Propuesta teórico-metodológica para la armonización legislativa desde el enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes.* Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2012

un proceso gradual que parte de un reconocimiento como personas sujetos de derecho y que solamente se protegían jurídicamente las facultades, generalmente muy discrecionales, de los padres.

Por ello, la legislación internacional observa un aumento en la preocupación por los niños y se empiezan a reconocer aquellos intereses jurídicamente protegidos. En América Latina esta evolución es más evidente en el derecho de familia, para presentarse con mucha claridad a partir de la legislación de protección dictada a comienzos de este siglo. [29]

La evolución de los instrumentos internacionales de los derechos de los niños revela la presencia de la noción de interés superior del niño, tales son los casos de la Declaración de Ginebra, la Declaración de los Derechos del Niño, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño e incluso la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (Artículos 5 y 16).

El derecho de la infancia se funda en que los derechos del niño derivan de su condición de persona; en consecuencia, se establece que los dispositivos de protección de los derechos de la infancia son complementarios -nunca sustitutivos- de los mecanismos generales de protección de derechos reconocidos a todas las personas. Los niños gozan de una supraprotección o protección complementaria de sus derechos que no es autónoma, sino fundada en la protección jurídica general.[30]

El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud, el bienestar, y especialmente la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales. Sostiene que la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia y que todos los niños nacidos dentro o fuera del matrimonio tienen igual derecho a la protección social.

En el mismo sentido, la Convención sobre los Derechos del Niño determina el derecho de los infantes a la protección y el cuidado necesarios para su bienestar, considerando los derechos y deberes de los padres, tutores o personas responsables de su desarrollo y cuidado; en ello, se tomarán las medidas legislativas administrativas adecuadas.

Por su parte, el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que los Estados tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad del derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptando, individualmente y mediante la cooperación internacional, las medidas, incluidos los programas concretos.

El artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus párrafos octavo, noveno y décimo garantizan que en todas las decisiones y actuaciones del Estado, se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, la cual se sitúa en un plano de concordancia con la protección del derecho a la familia, como una realidad dinámica y evolutiva. Que en ello, las y los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Estadísticas nacionales

En el 2011, a nivel nacional se registraron 91 mil 285 divorcios por un total de 570 mil 954 matrimonios.[31] En promedio, en México los hombres se casan a los 29.2 años de edad, mientras que las mujeres lo hacen a los

[29] Cillero, Miguel. El interés superior del niño en el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Disponible en: http://www.iin.oea.org/cursos_a_distancia/el_interes_superior.pdf
[30] Ibídem.
[31] Datos del INEGI a 2011. Disponibles en: http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/continuas/vitales/nupcialidad/2011/Est_mat_div_2011.pdf

26.3 años. En cuanto a divorcios los hombres promedian 39.0 años al momento de separarse, mientras que las mujeres promedian 36.4 años. De esta referencia, se infiere que en promedio las parejas en México que se separan, tras 10 años de matrimonio.

La separación mediante juicio de divorcio es una práctica que ha aumentado de manera significativa en nuestro país. Actualmente, se presentan 16 divorcios por cada 100 matrimonios; esta cifra contrasta con lo arrojado en 2008 cuando por cada 100 matrimonios hubo casi 14 divorcios; hace poco más de 30 años, en 1980, por cada 100 se registraban apenas 4 divorcios.

El Distrito Federal ocupa el primer lugar en número de divorcios, registrándose 32.4 divorcios por cada 100 matrimonios, representando así un total de 11 mil 385 separaciones por un total de 35 mil 086 matrimonios. Chihuahua, que ocupó el segundo sitio, tuvo 5 mil 694 divorcios por un total de 16 mil 295 matrimonios, es decir 34.2 divorcios por cada 100 habitantes.

Los datos oficiales señalan que con frecuencia, las mujeres que se divorcian no vuelven a unirse, significa que 14.4% de las mujeres de 30 a 59 años está separada, divorciada o viuda. Esta condición aumenta a 46% en las mujeres de 60 años y más. Mientras que del total de los hombres de edad entre 30 y 59 años solo el 6.1% está divorciado, separado o viudo; las mujeres de ese mismo rango de edad representan 14.4%, es decir más del doble respecto de los varones.

Del total de divorcios 91 mil 285, las mujeres que presentaron actividad laboral, es decir, que trabajaban fue de 49 mil 887; mientras que las que no trabajaban fue de 26 mil 340, de este total 24 mil 460 se dedicaron al hogar, 964 como estudiantes, 401 pensionadas o jubiladas, 6 rentistas, 15 incapacitadas y 494 en búsqueda de trabajado.

Del total de divorcios, en 46 mil 990 casos se asigna la custodia de los hijos a la madre, el padre únicamente en 2 mil 041 casos, en 3 mil 579 casos se les otorgó a ambos. En 91 mil 285 casos totales de divorcio, en 23 mil 641 no hubo ningún hijo en custodia, en 25 mil 474 casos hubo un hijo, en 19 mil 115 hubo dos hijos, en 6 mil 282 tres; en mil 035 cuatro hijos, en 142 casos con cinco hijos, y en 548 con nueve hijos.

Del total de divorcios en 2011, existieron 25 mil 474 hijos únicos menores de edad; ningún hijo 23 mil 641; en 19 mil 115 casos se presentaron con dos hijos menores de edad; en 6 mil 282 con tres, mil 035 con cuatro; 142 con cinco, 29 con cinco, 10 con siete; 3 con ocho; 554 con nueve; 4 con diez.[32]

En México, aproximadamente 67.3% de las mujeres madres solteras no reciben pensión alimenticia. La pensión alimenticia es la suma de dinero pagada periódicamente al acreedor alimentario determinado por el juez después de realizado el divorcio; en los divorcios judiciales con hijos menores de edad, en 91% de los casos el acreedor son los hijos, 8.1% son la esposa y los hijos, y en 0.9% son los hijos y el esposo.[33]

En 2011, del universo de divorcios nacionales, respecto de la pensión a alimenticia en 47 mil 914 casos se le asignó a los hijos, solo en 4 mil 247 se asignó a esposa e hijos, y solo en 845 casos únicamente a la esposa; respecto del DF de los 8 mil 292 divorcios totales, en 5 mil 004 casos se resolvió la pensión alimenticia a favor de los hijos.

La Primera Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, encargada de la Coordinación del Programa para Asuntos de la Familia, la Niñez, Personas Adultas Mayores y Discapacidad revela que uno en cada 3 hogares es sostenido por mujeres y que 3 de cada 4 hijos de padres separados no reciben la pensión alimenticia.

[32] Disponible en: http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?#Regreso&c=12238
[33] Disponible en: http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/estadisticas/2013/matrimonios0.pdf

Contenido de la iniciativa

Al tenor de lo referido en los apartados anteriores la presente iniciativa parte de una realidad que gira en torno al cumplimiento de la obligación alimentaria derivada de la relación o parentesco familiar, ya sea derivadas del matrimonio, concubinato o incluso de una relación de convivencia jurídica.

De esta manera se propone como objetivo fundamental la creación de un Registro Público de Información sobre Deudores Alimentarios Morosos que esté a cargo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia , con la intención de tener un registro a nivel nacional de aquellas o aquellos que teniendo la obligación de ministrar alimentos se nieguen o incumplan. Con lo anterior se establece un mecanismo institucional de cooperación entre el gobierno Federal, de las Entidades Federativos, del Distrito Federal, y de los Municipios, en sus respectivas competencias, previsto ya en la Ley de Asistencia Social, como una herramienta para hacer efectivo este derecho.

El objetivo de la asistencia social, según la Ley, es que todos los integrantes de una sociedad gocen de los mismos derechos y oportunidades. La obligatoriedad alimentaria debe entenderse como una parte del conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impiden el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de las personas en estado de necesidad, en este caso los niños, las niñas y los adolescentes.

La asistencia social comprende acciones de protección, previsión, prevención, protección y rehabilitación. La inclusión del Registro Público de Información sobre Deudores Alimentarios Morosos como parte del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, queda plenamente justificado en el Artículo 4 de la Ley de Asistencia Social que establece que "tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar.

Con base en lo anterior, son sujetos de la asistencia social, preferentemente:

I. Todas las niñas, niños y adolescentes, en especial aquellos que se encuentren en situación de riesgo o afectados por:

a)… c)

d) Abandono, ausencia o irresponsabilidad de progenitores en el cumplimiento y garantía de sus derechos;…"

Por lo que respecta al Código Civil Federal, se incluye la definición de deudor alimentario moroso, teniendo como carácter normativo el que deje de cumplir con dicha obligación por tres meses o más, a partir de ese incumplimiento. De esta manera se propone contar con un mecanismo institucional a nivel nacional, el cual servirá bajo una premisa de coordinación con las entidades federativas, y en el respeto absoluto a su ámbito jurisdiccional, como herramienta para primero, establecer una base de información sobre aquellas o aquellos deudores alimentarios incumplidos, con lo cual al mismo tiempo se podrá utilizar como herramienta para coadyuvar en el cumplimiento de esa obligación independientemente del lugar en el que se encuentre la persona; ya que se propone que sea de acceso coordinado para la autoridad local que en primer lugar verifique el cumplimiento de dicha obligación.

El mecanismo inicial que se prevé es que la autoridad local, sea por medio de los jueces o tribunales que conozcan de la causa de origen, y a petición de parte con interés jurídico, den aviso inmediatamente al Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos. Este aviso surtirá los efectos antes mencionados.

Se propone así que esa información sea a partir de la coordinación entre la autoridad local y la autoridad a nivel federal encargada de la integración de los datos, esto se postula en concordancia y respeto al

federalismo, así como las facultades locales que derivan de esa autonomía. Sin embargo también es de reconocerse, que ante un aspecto que rebasa muchas veces las condiciones locales, y la inexistencia de herramientas de coordinación, como lo es una base de registro de todos los deudores a nivel nacional, se deriva en un aspecto material para que el obligado se eluda con facilidad de la autoridad.

Bajo esta idea, os datos que se envíen serán de manera coordinada y actualizada, integrándose en el nombre y domicilio del deudor, el número de acreedores alimentarios, la cantidad de cuotas adeudadas y la referencia de la causa jurisdiccional de origen.

Es importante señalar el carácter público de los mismos, afecto de ponderar un derecho de protección que sea también oponible a terceros que pudieran ser afectados por el desconocimiento de la condición jurídica del obligado alimentario.

No es óbice resaltar que dentro de esta reforma se dejan salvos los derechos de aquel que cumpla con su obligación, pues en caso de que pague los adeudos generados por este concepto, podrá solicitar ante el juez de conocimiento la cancelación en el Registro.

Se dispone que el Registro Público de Información sobre Deudores Alimentarios Morosos quede a cargo de Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para ello se propone modificar la Ley de Asistencia Social, estableciendo también conforme a los objetos de la misma, la paternidad responsable la de ministrar alimentos. De ahí que se proponga que dicho registro también esté coordinado con las entidades federativas.

Otra propuesta que se incluye en la presente iniciativa, es la reforma a la Ley Federal del Trabajo, la cual contempla que los patrones tengan la posibilidad y responsabilidad de verificar la identidad del trabajador en el Registro Público de Información sobre Deudores Alimentarios Morosos, con la intención de que en caso de encontrar algún registro, pueda dar aviso a la autoridad jurisdiccional competente.

Otro aspecto dentro de este mismo aspecto que a dicha autoridad le sea permitida la inspección en los registros de trabajo a fin de evitar alguna evasión respecto de la obligación de ministrar alimentos.

Una herramienta de consideración es el hecho de que el patrón en caso de que no se cerciore de la identidad del deudor en el Registro y que por dicha omisión o que por simulación o protección no de parte a la autoridad, en su caso, sea responsable solidario de las obligaciones alimentarías de aquel.

Dentro de esta iniciativa se incluyen una modificación a la Ley de Instituciones de Crédito, a fin de que en el momento de otorgar o renovar un crédito, préstamo o financiamiento sea negado en caso de que el solicitante se encuentre inscrito en el Registro Público de Información sobre Deudores Alimentarios Morosos le sea negado por parte de la institución crediticia.

Otro ordenamiento que se incluye en la propuesta de conocimiento, es en la Ley para la Protección de los Derechos de niñas, niños y adolescentes, estableciéndose el principios de coordinación entre la autoridad Federal a cargo del Registro y las entidades federativas como parte de la protección al derecho de alimentos de estos menores y adolescentes; estableciendo así un engarce de protección y garantía de la autoridad para la protección de ese derecho.

Como parte de los objetivos que asume esta ley se establece que las autoridades locales, respetando atribuciones estatales, establezcan los medios, mecanismos o instrumentos necesarios para cumplir con el derecho alimentario de las niñas y niños, así como adolescentes, por lo que también se propone otorgarles la facultad, derivado de esta ley para que puedan conformar a nivel local los registros de los deudores alimentarios para que a su vez puedan coordinarse con el Registro Nacional.

En razón de lo expuesto y fundado presento la siguiente iniciativa que contiene el siguiente proyecto de:

DECRETO

PRIMERO.- Se agrega un segundo párrafo al artículo 309; un párrafo segundo, tercero y cuarto del artículo 321; un párrafo segundo y las fracciones I, II, III, IV y V al artículo 323, del Código Civil Federal, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 309.- El obligado a dar alimentos cumple la obligación asignando una pensión competente al acreedor alimentario o incorporándolo, a la familia. Si el acreedor se opone a ser incorporado, compete al juez, según las circunstancias, fijar la manera de ministrar los alimentos.

Deudor alimentario moroso es aquel que teniendo la obligación de proporcionar alimentos deje de ministrarlos o que derivado de controversias de orden familiar se niegue a su cumplimiento, ya sea por pensión alimenticia provisional o definitiva, adeudando en ello tres meses o más desde el momento en que se registra el primer adeudo.

Artículo 321.- El derecho de recibir alimentos no es renunciable, ni puede ser objeto de transacción.

Los jueces y tribunales de lo familiar conforme sus facultades y a solicitud de parte interesada darán aviso en tiempo al Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos, de aquellas personas que incumplan con su obligación de ministrar pensión alimenticia, independientemente de la causa que la origine.

Los datos a que se refiere el párrafo anterior se enviarán en su caso de forma coordinada y actualizada para el ingreso y publicación en el Registro.

La cancelación en el Registro se hará a solicitud del obligado por la vía incidental ante el juez o tribunal de origen, y una vez cumplida con la obligación originaria con todos sus intereses generados a la fecha.

Artículo 323.- El cónyuge que se haya separado del otro, sigue obligado a cumplir con los gastos a que se refiere el artículo 164. En tal virtud, el que no haya dado lugar a ese hecho, podrá pedir al Juez de lo familiar de su residencia, que obligue al otro a que le ministre los gastos por el tiempo que dure la separación en la misma proporción en que lo venía haciendo hasta antes de aquella, así como también satisfaga los adeudos contraídos en los términos del artículo anterior. Si dicha proporción no se pudiera determinar, el juez, según las circunstancias del caso, fijará la suma mensual correspondiente y dictará las medidas necesarias para asegurar su entrega y de lo que ha dejado de cubrir desde que se separó.

El Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos llevará un registro que tendrá carácter público, mismo que contendrá:

I. Nombre y en su caso domicilio del deudor alimentario.
II. Número de acreedores alimentarios.
III. Cantidad de cuotas no cubiertas por concepto de pensión provisional o definitiva, así como el monto de la obligación pendiente hasta la fecha;
IV. Referencia de expediente o causa jurisdiccional de la que deriva su inscripción; y
V. Órgano jurisdiccional de la entidad que ordena el registro.

SEGUNDO.- Se adiciona a la fracción IV del artículo 12; y el inciso e del artículo 28, ambos de la Ley de Asistencia Social para quedar como sigue:

Artículo 12. …

I. … a III. …

IV. El fomento de acciones de paternidad responsable **como la obligatoriedad alimentaria a fin de propiciar** la preservación de los derechos de la niñez a la satisfacción de sus necesidades y a la salud física y mental.

Artículo 28. El Organismo será el coordinador del Sistema, y tendrá las siguientes funciones:

a)... d)

e) **Coordinar con los Estados y el Distrito Federal un Registro Nacional de Deudores Alimentarios, a efecto de hacer público los datos de identificación para coadyuvar en el cumplimiento de la obligación entendido como un servicio de asistencia social. Dicho Registro se integrará con el nombre y domicilio del deudor, número de acreedores y cantidad adeudada, así como la autoridad que conoce de origen el adeudo.**

f) Poner a disposición del Ministerio Público, los elementos a su alcance para la protección de los derechos familiares.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Remítase al titular del Poder Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

TERCERO.- Se modifica la fracción XXIII Bis del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones:

…

XXIII Bis. Hacer las deducciones y pagos correspondientes a las pensiones alimenticias previstas en la fracción V del artículo 110. **Bajo su más estricta responsabilidad verificará la identidad del trabajador e**n **Registro Público de Información sobre Deudores Alimentarios Morosos a efecto de colaborar** con la autoridad jurisdiccional competente**, permitiendo también la inspección de los registros en el trabajo**. **En caso de omisión o simulación este será deudor solidario respecto de las obligaciones alimentarias de aquel.**

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Remítase al titular del Poder Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

CUARTO.- Se agrega el artículo 48 Bis 6 de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 48 Bis 6. Las instituciones están obligadas a verificar previamente al otorgamiento o en su caso para la renovación de créditos, préstamos o financiamientos, que el solicitante no se encuentre inscrito en el Registro Público de Información sobre Deudores Alimentarios Morosos a efecto de negarlo y dejar salvos los derechos alimentarios.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Remítase al titular del Poder Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

QUINTO.- Se agrega un tercer párrafo del apartado A, y se modifica el segundo y tercer párrafo del apartado B, ambos del artículo 11; y se modifica el apartado I del artículo 49, todos la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescente, de la para quedar de la siguiente manera:

Artículo 11. Son obligaciones de madres, padres y de todas las personas que tengan a su cuidado niñas, niños y adolescentes:

A. Proporcionarles una vida digna, garantizarles la satisfacción de alimentación, así como el pleno y armónico desarrollo de su personalidad en el seno de la familia, la escuela, la sociedad y las instituciones, de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo.

Para los efectos de este precepto, la alimentación comprende esencialmente la satisfacción de las necesidades de comida, habitación, educación, vestido, asistencia en caso de enfermedad y recreación.

La Federación a través de la autoridad facultada establecerá en coordinación con los Estados y el Distrito Federal un Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos, a efecto hacer publico los datos de identificación para coadyuvar en el cumplimiento de la obligación. Dicho Registro se integrará con el nombre y domicilio del deudor, numero de acreedores y cantidad adeudada, así como la autoridad que conoce de origen el adeudo.

B. …

Las normas dispondrán lo**s medios, instrumentos y mecanismos** necesario**s** para garantizar el cumplimiento de los deberes antes señalados. En todo caso, se preverán los procedimientos y la asistencia jurídica necesaria para asegurar que ascendientes, padres, tutores y responsables de niñas, niños y adolescentes cumplan con su deber de dar alimentos. Se establecerá en las leyes respectivas la responsabilidad penal para quienes incurran en abandono injustificado.

Las autoridades federales, del Distrito Federal, estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas atribuciones, impulsarán la prestación de servicios de guardería, así como auxilio y apoyo a los ascendientes o tutores responsables que trabajen. **De igual manera velaran en todo momento por los medios, instrumentos y mecanismos necesarios el efectivo cumplimiento de las obligaciones alimentarías.**

Artículo 49. Las instituciones señaladas en el artículo anterior, tendrán las facultades siguientes:
A. … a H. …

I. Integrar un Registro con aquellos datos que permitan identificar a los padres, madres o quienes incumplan con su deber de proporcionar alimentos, coordinándose para conformar una base de datos a nivel nacional con la autoridad facultada a efecto de procurar el mejor cumplimiento de la obligación.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Remítase al titular del Poder Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SUSCRIBE

_____

SEN. ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO

Dado en el Pleno de la H. Cámara de Senadores, México, Distrito Federal, a 30 de abril de 2013.

DE LOS SENADORES ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ Y ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE EL QUE SE DEROGAN, ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA.



SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ



SEN. ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
H. CÁMARA DE SENADORES
PRESENTE

La suscrita **ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ** y el suscrito **ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ ,** Senadores de la República de la LXII Legislatura, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN, ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA**, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Los progresos de la biología y la medicina en torno a la reproducción humana asistida en los últimos años plantean la necesidad de regular las técnicas de reproducción asistida, a fin de asegurar en todo momento el respeto a los derechos humanos, incluidos los derechos reproductivos. El acceso a las diferentes técnicas de reproducción asistida implica el ejercicio de una serie de derechos, reconocidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) como en los tratados internacionales que México ha ratificado y que de acuerdo con el artículo 1º constitucional son parte integrante de la Constitución, entre ellos el derecho a fundar una familia, a la igualdad y no discriminación, a la autonomía reproductiva, a la salud y a beneficiarse del progreso científico.

Por un lado, la CPEUM consagra en su artículo 4º el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de las hijas y los hijos. Ese derecho a la libre decisión reproductiva se traduce en el hecho de que las decisiones que las personas adopten no pueden ni deben ser condicionadas, bajo ninguna circunstancia, por acciones del gobierno; por el contrario, las políticas de salud reproductiva deben ser absolutamente respetuosas de la libertad y la dignidad de las personas, y tendientes a facilitar la toma de decisiones informadas en esa materia con las características establecidas en la propia Constitución.

La libre decisión reproductiva no implica exclusivamente la garantía de acceso a esquemas anticonceptivos, tema en el cual nuestro país ha avanzado sustancialmente, sino que también comprende la obligación del Estado de promover lo conducente para que todas las personas tengan acceso a los mecanismos necesarios para ejercer su derecho a la libre decisión reproductiva, el cual incluye el acceso a las técnicas de reproducción asistida.

Ahora bien, en el ámbito internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso *Artavia Murillo y otras ("Fecundación In Vitro") vs. Costa Rica,* recientemente determinó que el Estado debe garantizar el acceso a las técnicas de reproducción asistida sin discriminación respetando los derechos humanos de las personas a la integridad personal, la libertad personal, la vida privada y familiar, en relación con la autonomía personal, la salud sexual y reproductiva y el derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico.

En este sentido, la Corte estableció que el derecho a la vida privada incluye la decisión de ser madre o padre en el sentido genético o biológico, siendo la posibilidad de procrear parte del derecho a fundar una familia. Además, señaló que el derecho a la vida privada se relaciona con la autonomía reproductiva, y el acceso a servicios de salud reproductiva, lo cual involucra el derecho de acceder a la tecnología médica necesaria para ejercer ese derecho.[34]

El contenido y alcance de los derechos humanos antes mencionados ha sido desarrollado a lo largo de los más de treinta y cinco años del nacimiento de Louise Joy Brown, la primer "bebé de probeta" en el mundo. A partir de entonces, la fertilización *in vitro* (FIV) abrió una nueva perspectiva en salud reproductiva que ha permitido dar solución puntual a los problemas relacionados con la infertilidad. Al día de hoy, más de 3 millones de nacimientos han sido producto de esas técnicas en el mundo. Anualmente se realizan 600 mil ciclos de FIV en 52 países, dando como resultado cerca de 122 mil personas recién nacidas.

La infertilidad se define como la incapacidad para lograr un embarazo, después de un año de búsqueda intencionada sin el uso de algún método anticonceptivo. La Organización Mundial de la Salud señala a la infertilidad como una enfermedad creciente y sostiene que en más del 90% de los casos que se presentan existe solución con la aplicación de la tecnología reproductiva actual.
La infertilidad es un problema de Salud Pública que afecta a 80 millones de personas en el mundo. En México, cifras presentadas por el Consejo Nacional de Población indican que el 17% de las y los mexicanas en edad reproductiva cursa con algún trastorno relacionado con la infertilidad, lo que evidencia la creciente necesidad de servicios de salud para atender esa problemática.

En las últimas décadas se ha evidenciado una disminución progresiva en la capacidad reproductiva tanto de hombres como de mujeres. Los estilos de vida, los agentes mutágenos y teratógenos en la alimentación, el estrés cotidiano, el consumo de tabaco, las infecciones de transmisión sexual y la exposición a procedimientos quirúrgicos en órganos reproductivos son algunos de los factores que han contribuido a esta problemática.

Avances recientes en la fisiología humana han demostrado un papel fundamental del factor masculino en la problemática reproductiva, evidenciando que el 50% o más de las causas de infertilidad son debidas a éste en forma aislada o en asociación con algún trastorno reproductivo en la mujer.

Desafortunadamente, para finales del siglo XX el conocimiento en materia reproductiva no sólo era poco entendido, sino que se le rodeaba de creencias y mitos que, más que dar una solución objetiva a los problemas de infertilidad, ponían en riesgo la salud integral de hombres y mujeres. Esto contribuyó a generar una situación de desesperanza para las personas y una estigmatización social por la incapacidad para lograr un embarazo.

El costo moral, psicológico, físico y económico de la infertilidad se convirtió en la tónica acompasada de un total desconocimiento en la materia y del uso de herramientas diagnósticas y tecnológicas en extremo limitadas para su tiempo.

La reproducción humana asistida ya ha sido materia de legislación en otros países, entre los cuales destacan Inglaterra, Francia, Estados Unidos y España. Esas leyes coinciden en el objetivo de garantizar el derecho de las personas de procrear y regular prácticas que, tal y como sucede hoy en México, antes se llevaban a cabo sin el suficiente control y vigilancia.

En nuestro país, ante el incremento del número de mujeres y hombres que se ven afectados por la infertilidad, se ha convertido en una imperiosa necesidad que el Estado Mexicano de certeza para que las personas que acuden a las técnicas de reproducción asistida cuenten con seguridad jurídica, obligando a los hospitales,

[34] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Artavia Murillo y otros ("Fecundación In Vitro") vs. Costa Rica, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2012.

clínicas y establecimientos de salud en los que se llevan a cabo estas prácticas a que cumplan con las especificaciones y requerimientos necesarios que permitan garantizar que los servicios que se presten sean de calidad y se obtengan los mejores resultados posibles.

Es también imperativo legislar en materia de reproducción asistida atendiendo a los avances de la ciencia y pleno respeto a los derechos humanos, ya que la omisión de regulación específica impide el pleno ejercicio de los derechos constitucionales a la libertad reproductiva y a la protección de la salud que tienen todos los hombres y las mujeres de nuestro país, así como el derecho a la no discriminación y a fundar una familia, reconocidos todos en los diferentes tratados internacionales en la materia suscritos por nuestro país.
En ese sentido, y ante la ausencia de regulación específica en la materia, la presente iniciativa busca legislar sobre los aspectos fundamentales de la reproducción humana asistida y brindar seguridad jurídica tanto a quienes necesitan auxiliarse de la misma para procrear, como a quienes los asisten para lograr ese objetivo.

Por tal motivo, esta iniciativa contempla todos los aspectos científicos contenidos en iniciativas anteriores:

- la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley de Reproducción Humana Asistida y se reforman distintos artículos de la Ley General de Salud, de los Senadores Fernando Castro Trenti y Ernesto Saro Boardman, presentada el 28 de abril de 2008;

- la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones a la Ley General de Salud en materia de Reproducción Asistida, de los Senadores María del Socorro García Quiroz, María de los Ángeles Moreno y Ramiro Hernández García, presentada el 26 de agosto de 2009;

- la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, para regular y controlar la aplicación de técnicas de reproducción asistida, de la Diputada María Cristina Díaz Salazar, presentada el 8 de abril de 2010;

- la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de reproducción asistida, de la Diputada María del Pilar Torre Canales, presentada el 22 de abril de 2010;

- la iniciativa que crea la Ley Federal de Subrogación Gestacional y adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Diputada Leticia Quezada Contreras, presentada el 28 de julio de 2010;

- la Iniciativa del Senador Julio Aguirre Méndez presentada el 14 de diciembre de 2010, que reforma la Ley General de Salud en materia de reproducción asistida; la iniciativa de la Senadora Cristina Díaz presentada el 23 de octubre de 2012, que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de Reproducción Humana Medicamente Asistida;

- la iniciativa de la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez y legisladores de diversos grupos parlamentarios, presentada el 20 de diciembre de 2012, que crea la Ley de Reproducción Humana Asistida y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud; y,

- la iniciativa de la Senadora Cristina Díaz y otros legisladores por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, presentada el 28 de febrero de 2013.

El objeto coincidente de las iniciativas referidas en los antecedentes previos es legislar sobre los aspectos fundamentales de la reproducción humana asistida y brindar certeza y seguridad jurídica en el tema, razón por la cual las comisiones dictaminadoras debieran considerar las diferentes iniciativas existentes y desechar aquellas que son violatorias de derechos humanos y adolecen de inconstitucionalidad.

La reproducción humana asistida es un tema eminentemente sanitario. En ese sentido, la presente iniciativa plantea la adición de un Capítulo VI Bis, al que se le denominará Reproducción Asistida, dentro del Título Tercero de la Ley General de Salud. Dicho Capítulo constaría de 25 artículos cuyo contenido se describe a continuación.

En el artículo **71 Bis** se definen una serie de conceptos que resultan fundamentales en materia de reproducción humana asistida. Entre las definiciones contempladas destaca aquella que delimita el objeto mismo de la iniciativa: las técnicas de reproducción humana asistida, las cuales deben entenderse como las técnicas biomédicas que facilitan la interacción entre las células germinales femeninas y masculinas en los procesos de fertilización.

El artículo **71 Bis 1** señala como personas beneficiarias de las técnicas de reproducción asistida a todos las personas mayores de edad y en pleno uso de sus facultades, previo otorgamiento del consentimiento informado. Esta disposición reconoce que en la actualidad existe una diversidad en las formas en las cuales se pueden integrar las familias, además de ser congruente con el derecho a la no-discriminación reconocido en el artículo 1º Constitucional.

En el caso de que las personas solicitantes sean casadas, el artículo 71 Bis 1 señala que se debe contar, además, con el consentimiento informado preferentemente de ambos cónyuges.

A través del artículo **71 bis 2** se faculta a la Secretaría de Salud a emitir las normas a las que deberá sujetarse el uso de las técnicas de reproducción humana asistida, así como las relativas a la obtención, conservación, traslado, manejo y disposición de las células germinales y óvulos fertilizados.

Dentro del artículo **71 bis 3** se obliga a los establecimientos en los que se practiquen técnicas de reproducción asistida a obtener una licencia sanitaria, previo cumplimiento de los requisitos siguientes, mismos que están incluidos en el artículo **71 bis 12**:

I. Contar con suficiente personal profesional y técnico capacitado;
II. Contar con un Comité Médico Interno de especialistas certificados en la materia;
III. Contar con un responsable sanitario especialista en biología de la reproducción humana;
IV. Contar con las instalaciones, equipo, instrumental e insumos suficientes y adecuados según lo que establezcan la Ley General de Salud, sus reglamentos y las normas aplicables, y
V. Los demás requisitos previstos en la Ley General de Salud, sus reglamentos y las normas aplicables.

Por su parte, para obtener la autorización de la Secretaría, los bancos donde se lleve a cabo la obtención, crioconservación y disposición de células germinales y óvulos fertilizados deberán cumplir, de acuerdo con el artículo **71 bis 7**, los siguientes requisitos:

I. Contar con suficiente personal profesional y técnico capacitado;
II. Contar con un Comité Médico Interno de especialistas certificados en la materia;
III. Contar con un responsable sanitario especialista en biología de la reproducción humana;
IV. Contar con instalaciones, equipo, instrumental e insumos suficientes y adecuados conforme a lo que establezcan esta Ley General de Salud, sus reglamentos y las normas aplicables, y
V. Los demás requisitos previstos en la Ley General de Salud, sus reglamentos y las normas aplicables.

En el caso de los bancos, la Secretaría de Salud, al otorgar la autorización respectiva, deberá especificar si el banco puede crioconservar células germinales, óvulos fertilizados, tejidos o todos ellos.

Los establecimientos autorizados para llevar a cabo técnicas de reproducción asistida podrán también crioconservar células germinales, óvulos fertilizados y tejidos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos al efecto en la iniciativa.

De acuerdo con el artículo **71 bis 11**, las técnicas de reproducción humana asistida sólo podrán llevarse a cabo en los establecimientos que, además de estar autorizados por la Secretaría de Salud, estén certificados por el Consejo de Salubridad General.

Ese mismo artículo establece que la aplicación de las técnicas de reproducción humana asistida sólo podrá realizarla personal médico especialista y que las técnicas de reproducción humana asistida autorizadas serán aquellas que reúnan las condiciones de acreditación científica y clínicamente indicadas, conforme a la medicina basada en evidencia y las mejores prácticas, de acuerdo con lo que establezcan las normas.

Mediante las disposiciones mencionadas se obliga a los establecimientos y bancos a contar con personas profesionales y técnicas de la salud capacitadas adecuadamente, así como a proporcionar un servicio que sea confiable y, sobre todo, seguro para que se proteja en todo momento la vida de las personas que se someten a ese tipo de tratamientos.

En el artículo **71 bis 8** se establecen las obligaciones de los Bancos de Células Germinales, entre las que destacan:

I. Solicitar y conservar en custodia el consentimiento expreso por escrito de las personas donantes y receptoras, los cuales deberán tener el carácter de confidenciales;
II. Conservar un tanto original de todos los contratos de depósito hasta cinco años después de la terminación de su vigencia. Para efectos de este capítulo, los contratos de depósito son aquellos mediante los cuales las personas receptoras dejan en custodia y para crioconservación en el Banco células germinales u óvulos fertilizados;
III. Solicitar al Registro Nacional de Reproducción Humana Asistida información, según sea el caso, respecto de la persona receptora, donadora y la mujer héterogestante;
IV. Rechazar la donación cuando las condiciones psicofísicas y médicas de las personas donantes no sean las adecuadas;
V. Guardar estricta confidencialidad respecto a las identidades y demás datos de las personas donantes y las receptoras, mismos que sólo se revelarán a las personas y en los casos que establezcan las disposiciones aplicables o lo ordenen las autoridades judiciales, y
VI. Rendir informes anuales respecto a sus actividades a la Secretaría de Salud.

El artículo **71 bis 4** prohíbe expresamente una serie de conductas que son contrarias a la dignidad humana, tales como:

I. La comercialización de células germinales y óvulos fertilizados;
II. Las transferencias de óvulos fertilizados entre seres humanos y otras especies con fines reproductivos;
III. La clonación con fines reproductivos, y
IV. La producción de híbridos o quimeras con fines reproductivos.

Por otra parte, la iniciativa autoriza mediante el artículo **71 bis 5** la realización de diagnóstico genético preimplantacional como parte del procedimiento, siempre y cuando su único propósito sea detectar y, en su caso, prevenir enfermedades genéticas o cromosómicas.

En el artículo **71 bis 6** de la iniciativa se pretende obligar a mantener los óvulos fertilizados en condiciones adecuadas de desarrollo en beneficio de las personas receptoras, de acuerdo con las normas que emita la Secretaría de Salud. Asimismo, se establece que los óvulos fertilizados que no sean utilizados inmediatamente para su transferencia serán crioconservados durante un periodo máximo de cinco años a partir de su formación, excepto cuando no hayan sido transferidos porque el estado de salud de la mujer lo impida momentáneamente, en cuyo caso, podrán ser crioconservados por un plazo equivalente a la vida fértil de la mujer, con el objeto de que se le puedan transferir una vez que su salud haya mejorado y si ella así lo desea.

Las personas podrán donar en todo momento, de acuerdo con el propio artículo **71 bis 6,** los óvulos fertilizados formados y crioconservados. Cuando se trate de personas casadas o en concubinato, si se produce un divorcio, la cesación de los efectos civiles o la anulación del matrimonio, los óvulos fertilizados podrán ser donados, previo otorgamiento del consentimiento informado de ambos miembros de la pareja.

El artículo **71 bis 9** señala que los destinos que podrán darse a las células germinales y óvulos fertilizados crioconservados son:

I. La fertilización homóloga, que es la realizada con células germinales provenientes de la pareja que se someterá a una técnica de reproducción humana asistida;
II. La fertilización heteróloga, que es la fecundación asistida realizada con células germinales de un miembro de la pareja y/o de personas donantes anónimas;
III. La investigación, y
IV. El destino final, que en el caso de los óvulos fertilizados es el conjunto de procesos biológicos mediante los cuales el óvulo fertilizado se inactiva y autolimita, y que se inicia con un proceso de lisis, continúa con la autofagocitación, seguida de un proceso de fragmentación y concluye con su disolución.

El artículo **71 bis 10** establece las reglas a las cuales debe sujetarse la utilización de células germinales, siendo éstas las siguientes:

I. Las personas mayores de dieciocho años de edad podrán donar en todo momento sus células germinales a un banco en el marco de esta Ley;
II. Las células germinales crioconservadas de las personas donantes podrán conservarse durante el tiempo que se señale en esta Ley y las normas y, en el caso de que la persona receptora sea la depositante, se podrán conservar durante toda su vida;
III. Las células germinales crioconservadas de una persona donante podrán ser utilizadas con fines de reproducción asistida sin que se exceda un máximo de seis personas nacidas vivas;
IV. Las personas podrán ser receptoras de células germinales u óvulos fertilizados en términos de esta Ley, siempre que sean mayores de dieciocho años de edad y hayan prestado su consentimiento por escrito de manera libre, consciente y expresa; y,
V. La utilización en técnicas de reproducción asistida de células germinales de una persona fallecida está prohibida, salvo en aquellos casos en que ésta las haya donado expresamente para tales efectos, en términos de lo que señala el artículo 322 de esta Ley e incluyendo los elementos a los que se refiere este capítulo. Tratándose de cónyuges o personas en concubinato, en caso de fallecimiento de alguna de las partes se requiere de previo consentimiento escrito de ésta para que sus células germinales puedan ser utilizadas por la parte supérstite.

En el artículo **71 bis 13** se obliga a las personas profesionales de la salud a que, previo al inicio de la aplicación de alguna de las técnicas de reproducción humana asistida, lleven a cabo una evaluación completa del estado de salud de cada persona, con el propósito de brindar la mejor opción terapéutica en materia de reproducción asistida, así como la consejería genética necesaria en caso de enfermedades cromosómicas o de transmisión hereditaria.
Se obliga también a los establecimientos autorizados a conceder a las personas una entrevista con el personal médico responsable, en la que se les provea con información completa, adecuada y comprensible sobre todos los aspectos relevantes de la técnica de reproducción asistida elegida, en la que se incluya lo relativo a las posibilidades de obtener un resultado favorable y los riesgos que ésta implique. Las entrevistas informativas deberán efectuarse con las personas y, en su caso, sus parejas, garantizando en todo momento su derecho a la intimidad y a la confidencialidad.

Si los establecimientos autorizados agotan o descartan la posibilidad de proceder a la fertilización asistida de una persona , se le deberá suministrar información detallada de los motivos, debidamente sustentada en la ciencia actual. En este caso, a las personas solicitantes se les deben señalar las alternativas con las que cuenten.

Por virtud del artículo **71 bis 14** se pretende evitar, en la medida de lo posible, la gestación múltiple, la generación de óvulos fertilizados supernumerarios y la práctica de la reducción embrionaria. Para estos efectos, se obliga a utilizar esquemas de inducción ovulatoria que permitan un adecuado reclutamiento ovocitario y a transferir un máximo de tres óvulos fertilizados por cada tratamiento, tomando en consideración la edad y condiciones de salud de la mujer conforme a lo recomendado por las mejores prácticas, la medicina basada en evidencia y las normas que emita la Secretaría de Salud.

En el artículo **71 bis 15** se establece específicamente que la donación de células germinales y óvulos fertilizados deberá ser en todo momento altruista. Sin perjuicio de lo anterior, se autoriza a fijar una compensación económica destinada exclusivamente a resarcir a las personas donantes por las molestias físicas que, en su caso, se presenten y los gastos de desplazamiento y laborales que se puedan derivar de la donación. Se señala que dicha compensación nunca podrá ser menor a cinco veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate por cada día en que se desplace para efectos de la donación.

En congruencia, se señala que cualquier actividad de publicidad o promoción por parte de los bancos que incentive la donación de óvulos o espermatozoides deberá respetar el carácter altruista de aquélla.

El artículo **71 bis 16** define los requisitos que deberán cumplir las personas donantes, mientras que el **71 bis 17** establece los supuestos específicos en los cuales se podrán utilizar células germinales de una persona donante.

Asimismo, con la iniciativa se busca garantizar que los datos de identidad de las personas donantes se manejen confidencialmente, salvo en aquellos casos en que se otorgue expresamente autorización para que se difundan.

Mediante el artículo **71 bis 18** se autoriza solicitar la colaboración de una mujer en aquellos casos en que la mujer que desea procrear carece de útero funcional por causas genéticas o quirúrgicas, por elección, o por ausencia de una pareja femenina. A la mujer que colabora en estos casos se le denomina en la iniciativa mujer héterogestante y se señalan los requisitos que ésta deberá reunir, así como las condiciones específicas bajo las cuales podrá permitir el uso de su útero.

En el artículo **71 bis 19** se otorga a las mujeres héterogestantes el derecho a recibir, desde la realización de los estudios médicos previos y hasta un año después del nacimiento del producto de la gestación, atención médica de parte de las personas que hayan solicitado su colaboración. Sin perjuicio de lo anterior, también se

podrá fijar una compensación económica destinada exclusivamente a resarcir a las mujeres héterogestantes por las molestias físicas que, en su caso, se presenten y los gastos de alimentación, vestido, medicamentos,desplazamiento y laborales que se puedan derivar de la colaboración.

Las formalidades que deberán observarse en todos los actos contemplados en el capítulo que se pretende adicionar a la Ley General de Salud se enumeran en el artículo **71 bis 20** y son las siguientes:

I. Para la donación de células germinales u óvulos fertilizados se requiere consentimiento expreso por escrito que deberá ser otorgado en términos del artículo 322 de la Ley General de Salud, incluyendo los elementos a los que se refiere el presente capítulo;
II. Para el depósito de células germinales u óvulos fertilizados de las personas receptoras se suscribirá un contrato para la crioconservación de acuerdo con lo previsto en esta Ley y demás disposiciones aplicables;
III. Para la transferencia de células germinales u óvulos fertilizados a las personas receptoras se requiere del consentimiento informado de éstas, y
IV. Para obtener la colaboración de una mujer héterogestante se requiere rendir consentimiento expreso, absoluto y pleno ante fedatario público, de conformidad con las disposiciones civiles aplicables, además del consentimiento informado para las intervenciones médicas que se le practiquen.

Los consentimientos podrán ser revocados por la persona donadora, receptora y la mujer héterogestante, según corresponda, hasta antes de la captura ovular o del proceso de transferencia.

La donación será revocable cuando los donantes requieran para sí las células germinales donadas, siempre que en la fecha de la revocación aquéllas aún estén disponibles.

Los **artículos 71 bis 21 y 71 bis 22** establecen cuáles son los datos que, como mínimo, deberán contener el consentimiento expreso para la donación de células germinales y óvulos fertilizados y el consentimiento informado que las personas receptoras deberán signar ante los establecimientos autorizados, respectivamente.

En el artículo **71 bis 23** se crea el Registro Nacional de Reproducción Humana Asistida y se atribuye a la Secretaría de Salud la facultad de coordinarlo. Dicho registro se encargaría de:

I. Integrar y actualizar los datos de las personas receptoras, donantes, mujeres héterogestantes y las fechas de los procedimientos respectivos;
II. Proporcionar a los bancos la información relativa a las personas receptoras, donantes y mujeres héterogestantes para los efectos de lo establecido en la fracción I del artículo 71 bis 22;
III. Compilar los datos estadísticos de las personas nacidas mediante técnicas de reproducción humana asistida para los efectos de lo establecido en la fracción III del artículo 71 bis 10;
IV. Integrar y actualizar la relación de los establecimientos autorizados conforme a este capítulo, y
V. Integrar y actualizar la relación de la cantidad de óvulos fertilizados crioconservados en cada establecimiento.

Por otra parte, en el artículo **71 bis 24** se responsabiliza a los bancos de células germinales de la comprobación fehaciente de la identidad y los antecedentes de las personas donantes. Esa comprobación podrá hacerse mediante consulta de la inscripción correspondiente en el Registro Nacional de Reproducción Humana Asistida. Asimismo, se obliga a los bancos a llevar un registro interno de las actividades que realicen; dicha información se entregará al Registro Nacional con la periodicidad que se señale en las normas.

Por lo que se refiere a la investigación, el artículo **71 bis 25** señala que las células germinales femeninas y masculinas podrán utilizarse de manera independiente con fines de investigación. No obstante, se prohíbe la transferencia a una mujer de células germinales previamente destinadas a la investigación, así como su uso para originar óvulos fertilizados con fines de procreación.

En esa misma línea, el artículo **71 bis 26** establece que para autorizar la investigación con óvulos fertilizados se deberán cumplir los siguientes requisitos:

I. Que se trate de óvulos fertilizados donados de acuerdo con lo que señala el propio capítulo;
II. Que el óvulo fertilizado no se haya desarrollado in vitro más allá de 14 días después de la fecundación del óvulo, descontando el tiempo en el que pueda haber estado crioconservado, y
III. Los demás que establecen la Ley General de Salud, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables.

Por tratarse de un tema que es materia civil, el **artículo 71 bis 27** refiere a la legislación aplicable en esa materia para los aspectos de filiación de las hijas e hijos nacidos mediante técnicas de reproducción humana asistida.

En correspondencia con lo anterior, en el artículo **71 bis 28** se establece que en los casos no contemplados en la Ley se dirimirán en los juzgados civiles, familiares o penales, según corresponda.

La presente iniciativa también pretende adicionar una fracción V bis al artículo 198, una I bis al artículo 313, una II bis al artículo 315 y una VI bis al artículo 375, todos ellos de la Ley General de Salud. Mediante esas modificaciones se busca:

1. Incluir a los establecimientos en los que se practiquen técnicas de reproducción asistida entre aquellos que requieren autorización sanitaria;
2. Facultar a la Secretaría de Salud para que, por conducto de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, ejerza el control sanitario de los bancos dedicados a la obtención, crioconservación y disposición de células germinales y óvulos fertilizados, así como de los establecimientos en los que se practiquen técnicas de reproducción asistida;
3. Sujetar a la obtención de un permiso la internación en el territorio nacional o la salida de células germinales o de óvulos fertilizados, y
4. Derogar la fracción I del artículo 314 de la Ley General de Salud, ya que la definición de células germinales que ahí se encuentra se reubicaría en el nuevo capítulo.

En correspondencia a lo anterior se deroga la fracción I del artículo 314.

A efecto de establecer sanciones para la violación de los preceptos contemplados en el capítulo que se adiciona, se reforman los artículos 421, 421 bis y 466 y se adiciona un artículo 466 Bis. Este último señala que se impondrán de seis a diecisiete años de prisión y multa por el equivalente de ocho mil a diecisiete mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate a quien realice transferencias de óvulos fertilizados entre especies o lleve a cabo experimentos con el propósito de crear seres humanos por clonación o de producir híbridos o quimeras con fines reproductivos.

En cuanto al régimen transitorio de la iniciativa, éste consta de tres artículos. El primero de ellos señala que la reforma entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. El segundo compromete a la Secretaría de Salud a emitir las normas oficiales mexicanas a las que se alude en el articulado de la iniciativa en un plazo que no excederá los 260 días a partir de la entrada en vigor del Decreto

de reformas respectivo y el tercero da un plazo de 120 días para instalar el Registro Nacional de Reproducción Humana Asistida.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos al pleno de esta soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN, REFORMAN Y DEROGAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE REPRODUCCIÓN ASISITIDA.

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un Capítulo VI Bis al Título Tercero; se adicionan los artículos 71 Bis al 71 Bis 28; se adicionan una fracción V bis al artículo 198; una I bis al artículo 313; se deroga la fracción I del artículo 314; se deroga la fracción I del artículo 314; se adiciona una fracción II bis al artículo 315 y una VI bis al artículo 375; se reforman los artículos 421 y 421 bis; se deroga el artículo 466; y, se adiciona un artículo 466 Bis; todos ellos de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

CAPÍTULO VI Bis
Reproducción Asistida

Artículo 71 bis. Para efectos de este capítulo, se entiende por:

- **I. Bancos: A los establecimientos autorizados por la Secretaría de Salud en términos de esta Ley para la obtención, crioconservación y disposición de células germinales y óvulos fertilizados;**
- **II. Células germinales: A las células reproductoras masculinas y femeninas capaces de dar origen a un óvulo fertilizado;**
- **III. Fertilización: A la penetración de la célula germinal femenina por la masculina con la consiguiente fusión de material genético;**
- **IV. Crioconservación: A la técnica de preservación de tejidos, células germinales y óvulos fertilizados a bajas temperaturas;**
- **V. Destino final de los óvulos fertilizados: Al conjunto de procesos biológicos mediante los cuales el óvulo fertilizado se inactiva y autolimita; se inicia con un proceso de lisis, continúa con la autofagocitación, seguida de un proceso de fragmentación y concluye con su disolución;**
- **VI. Persona donante: A la mujer o el hombre, mayores de dieciocho años de edad que autoriza la utilización de sus células germinales, así como a las parejas que autorizan la utilización de sus óvulos fertilizados en términos de esta Ley;**
- **VII. Fertilización homóloga: A la realizada con células germinales provenientes de la pareja que se someterá a una técnica de reproducción humana asistida;**
- **VIII. Fertilización heteróloga: A la realizada con células germinales de la persona que se someterá a una técnica de reproducción asistida y/o de personas donantes anónimas;**
- **IX. Infertilidad: A la incapacidad para lograr un embarazo después de un año de búsqueda intencionada sin el uso de algún método anticonceptivo;**
- **X. Mujer Héterogestante: A la mujer que presta su útero de manera altruista, para el desarrollo del óvulo fertilizado hasta el nacimiento del producto, en términos de lo señalado en este capítulo;**
- **XI. Registro Nacional: Registro Nacional de Reproducción Humana Asistida;**
- **XII. Persona receptora: La persona que recibe células germinales u óvulos fertilizados para someterse a un tratamiento de reproducción humana asistida, y**
- **XIII. Técnicas de reproducción humana asistida: A las técnicas biomédicas que facilitan la interacción entre las células germinales femeninas y las masculinas en los procesos de fertilización; éstas pueden clasificarse en dos grupos: las de baja complejidad, que incluyen la inseminación intrauterina; y las de alta complejidad, que incluyen la fertilización in vitro.**

Artículo 71 bis 1. Podrán beneficiarse de las técnicas de reproducción asistida todas las personas mayores de dieciocho años de edad y en pleno uso de sus facultades, previo otorgamiento del

consentimiento informado, de acuerdo con lo que establecen la presente Ley y demás disposiciones aplicables.

En el caso de que las personas solicitantes sean casadas, se deberá contar, preferentemente, con el consentimiento informado de ambos cónyuges.

Artículo 71 bis 2. La Secretaría de Salud emitirá las normas a las que deberá sujetarse el uso de las técnicas a que se refiere este capítulo, así como las relativas a la obtención, conservación, traslado, manejo y disposición de las células germinales y óvulos fertilizados conforme a lo que señala la presente Ley.

Artículo 71 bis 3. Los establecimientos en los que se practiquen técnicas de reproducción asistida deberán contar con licencia sanitaria en términos de los artículos 198 y 315 de esta Ley, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente capítulo.

Artículo 71 bis 4. Se prohíbe:

I. La comercialización de células germinales y óvulos fertilizados;
II. Las transferencias de óvulos fertilizados entre seres humanos y otras especies con fines reproductivos;
III. La clonación con fines reproductivos, y
IV. La producción de híbridos o quimeras con fines reproductivos.

Artículo 71 bis 5. Cuando la técnica de reproducción asistida lo permita, se deberá realizar diagnóstico genético preimplantacional para detectar y, en su caso, prevenir enfermedades genéticas o cromosómicas.

Artículo 71 bis 6. Los óvulos fertilizados deberán mantenerse en condiciones adecuadas de desarrollo en beneficio de las personas receptoras, de acuerdo con las normas que emita la Secretaría.

Los óvulos fertilizados que no sean utilizados inmediatamente para su transferencia podrán ser crioconservados durante un periodo máximo de cinco años a partir de su formación, excepto cuando no hayan sido transferidos porque el estado de salud de la mujer que se someterá a la técnica de reproducción asistida lo impida momentáneamente, en cuyo caso, podrán ser crioconservados hasta por todo el tiempo en el que la mujer se encuentre en su etapa de vida fértil, con el objeto de que pueda serle transfieran una vez que su salud haya mejorado, si ella así lo desea.

Las personas podrán donar en todo momento los óvulos fertilizados y crioconservados en el marco de esta Ley. Tratándose de cónyuges o personas en concubinato, si dentro del plazo al que se refiere el párrafo previo se produce un divorcio, la cesación de los efectos civiles o la anulación del matrimonio, los óvulos fertilizados podrán ser donados, previo otorgamiento del consentimiento informado de ambas partes otorgado con arreglo a la presente Ley, sus reglamentos y las demás disposiciones aplicables.

Artículo 71 bis 7. Para obtener la autorización de la Secretaría, los bancos a los que se refiere el artículo 71 bis fracción I, deberán cumplir los siguientes requisitos:

I. Contar con suficiente personal profesional y técnico capacitado;
II. Contar con un Comité Médico Interno de especialistas certificados en la materia;
III. Contar con un responsable sanitario especialista en biología de la reproducción humana;
IV. Contar con las instalaciones, equipo, instrumental e insumos que establezcan esta Ley, sus reglamentos y las normas aplicables, y
V. Los demás requisitos previstos en la presente Ley, sus reglamentos y las normas aplicables.

La Secretaría, al otorgar la autorización a que se refiere este artículo, deberá especificar si el banco puede crioconservar células germinales, óvulos fertilizados, tejidos o todos ellos.

Los establecimientos autorizados para llevar a cabo técnicas de reproducción asistida en términos de esta Ley podrán también crioconservar células germinales, óvulos fertilizados y tejidos, siempre que cumplan con lo que establece el presente capítulo para el caso de los bancos.

Artículo 71 bis 8. Los bancos a los que se refiere el artículo 71 bis fracción I deberán:

I. Solicitar y conservar en custodia el consentimiento expreso por escrito de las personas donantes y receptoras, los cuales deberán tener el carácter de confidenciales;

II. Conservar un tanto original de todos los contratos de depósito hasta cinco años después de la terminación de su vigencia. Para efectos de este capítulo, se consideran contratos de depósito aquellos mediante los cuales la persona receptora deja en custodia y para crioconservación en el banco células germinales u óvulos fertilizados;

III. Solicitar al Registro Nacional información, según sea el caso, respecto de la persona receptora, donante y de la mujer heterogestante;

IV. Rechazar la donación cuando las condiciones psicofísicas y médicas de la persona donante no sean las adecuadas;

V. Guardar estricta confidencialidad respecto a las identidades y demás datos de las personas receptoras y donantes, mismos que sólo se revelarán a las personas y en los casos que establezcan las disposiciones aplicables o en los casos en que las autoridades judiciales los ordenen;

VI. Rendir, de acuerdo con lo que establecen el presente capítulo y el Título Sexto de esta Ley, informes anuales respecto a sus actividades a la Secretaría de Salud, y

VII. Las demás obligaciones que les señalen esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables.

71 bis 9. Los destinos que podrán darse a las células germinales y óvulos fertilizados crioconservados conforme a lo que establece el presente capítulo serán:

I. Fertilización homóloga;

II. Fertilización heteróloga;

III. Investigación, y

IV. Destino final. En el caso de los óvulos fertilizados, se estará a lo que establece la fracción V del artículo 71 bis.

Artículo 71 bis 10. La utilización de células germinales se sujetará a las siguientes reglas:

I. Las personas mayores de dieciocho años de edad podrán donar en todo momento sus células germinales a un banco en el marco de esta Ley;

II. Las células germinales crioconservadas de las personas donantes podrán conservarse durante el tiempo que se señale en esta Ley y las normas y, en el caso de que la persona receptora sea la depositante, se podrán conservar durante toda su vida;

III. Las células germinales crioconservadas de una persona donante podrán ser utilizadas con fines de reproducción asistida sin que se exceda un máximo de seis personas nacidas vivas;

IV. Las personas podrán ser receptoras de células germinales u óvulos fertilizados en términos de esta Ley, siempre que sean mayores de dieciocho años de edad y hayan prestado su consentimiento por escrito de manera libre, consciente y expresa; y,

V. La utilización en técnicas de reproducción asistida de células germinales de una persona fallecida está prohibida, salvo en aquellos casos en que ésta las haya donado expresamente para tales efectos, en términos de lo que señala el artículo 322 de esta Ley e incluyendo los elementos a los que se refiere este capítulo. Tratándose de cónyuges o personas en concubinato, en caso de fallecimiento de alguna de las partes se requiere de previo consentimiento escrito de ésta para que sus células germinales puedan ser utilizadas por la parte supérstite.

Artículo 71 bis 11. Las técnicas de reproducción humana asistida sólo podrán llevarse a cabo en los establecimientos autorizados por la Secretaría de Salud y certificados por el Consejo de Salubridad General.

La aplicación de las técnicas de reproducción humana asistida sólo podrá realizarla personal médico certificado en la materia.
Las técnicas de reproducción humana asistida autorizadas serán aquellas que reúnen las condiciones de acreditación científica y clínicamente indicadas, conforme a la medicina basada en evidencia y las mejores prácticas, y de acuerdo con lo que establezcan las normas que emita la Secretaría.

Artículo 71 bis 12. Para obtener la autorización de la Secretaría, los establecimientos en los que se practiquen técnicas de reproducción asistida deberán cumplir los siguientes requisitos:

- **I. Contar con suficiente personal profesional y técnico capacitado;**
- **II. Contar con un Comité Médico Interno de especialistas certificados en la materia;**
- **III. Contar con un responsable sanitario especialista en biología de la reproducción humana;**
- **IV. Contar con las instalaciones, equipo, instrumental e insumos que establezcan esta Ley, sus reglamentos y las normas aplicables, y**
- **V. Los demás requisitos previstos en la presente Ley, sus reglamentos y las normas aplicables.**

Artículo 71 bis 13. Previo al inicio de la aplicación de alguna de las técnicas de reproducción humana asistida, se deberá llevar a cabo una evaluación completa del estado de salud de la persona receptora, y en su caso, donante involucradas en el procedimiento, con el propósito de brindarles la mejor opción terapéutica, así como la consejería genética necesaria en caso de enfermedades cromosómicas o de transmisión hereditaria.
Los establecimientos autorizados deberán ofrecer a las personas a las que se refiere el párrafo anterior una entrevista con los médicos responsables en la que se les provea con información completa, adecuada y comprensible sobre todos los aspectos relevantes de la técnica de reproducción asistida elegida, y se incluyan datos relativos a las posibilidades de obtener un resultado favorable y los riesgos que ésta implique.
Las entrevistas informativas deberán efectuarse con las personas solicitantes y, en su caso, sus parejas, garantizando en todo momento su derecho a la intimidad y a la confidencialidad.
Si los establecimientos autorizados agotan o descartan la posibilidad de proceder a la fertilización asistida de una persona, se le deberá brindar información detallada de los motivos, debidamente sustentada en la evidencia científica reciente. En este caso, a las personas solicitantes se les deberán señalar las alternativas con las que cuenten.
Artículo 71 bis 14. Se deberán utilizar esquemas de inducción ovulatoria que permitan un adecuado reclutamiento ovocitario y se transferirá un máximo de tres óvulos fertilizados por cada tratamiento, tomando en consideración la edad y condiciones de salud conforme a lo recomendado por las mejores prácticas y la medicina basada en evidencia y de acuerdo con lo que establezcan las normas.
Artículo 71 bis 15. La donación de células germinales y óvulos fertilizados será en todo momento altruista. Sin perjuicio de lo anterior, se podrá fijar una compensación económica destinada exclusivamente a resarcir a las personas donantes por las molestias físicas que, en su caso, se presenten y los gastos de desplazamiento y laborales que se puedan derivar de la donación. Dicha compensación nunca podrá ser menor a cinco veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate por cada día en que se desplace para efectos de la donación.
Cualquier actividad de publicidad o promoción por parte de los bancos que incentive la donación de óvulos o espermatozoides deberá respetar el carácter altruista de aquélla.
Los datos de identidad de la persona donante deberán ser manejados confidencialmente, salvo en aquellos casos en que ésta otorgue expresamente su autorización para que se difundan o en aquellos casos en que las autoridades jurisdiccionales así lo ordenen.

Artículo 71 bis 16. Las personas donantes deberán cumplir los siguientes requisitos:

I. Ser mayores de dieciocho años de edad y estar en pleno uso de sus facultades;
II. Rendir consentimiento expreso de donación absoluta para lo cual se deberá cumplir con los requisitos a que se refiere el artículo 322 de la Ley General de Salud;
III. Estar en buen estado de salud física y mental, y
IV. Cumplir con las exigencias de un protocolo obligatorio de tamizaje que incluirá enfermedades infectocontagiosas, enfermedades no transmisibles, perfil bioquímico y metabólico, análisis toxicológico, así como la evaluación de las condiciones psicológicas de idoneidad para ser persona donante, de conformidad con las normas.

Artículo 71 bis 17. Se podrán utilizar células germinales de personas donantes para fertilización homóloga o heteróloga a solicitud de una persona o pareja cuando se hayan cumplido los requisitos establecidos en la presente Ley.

Artículo 71 bis 18. Cuando se solicite la colaboración de una mujer heterogestante, ésta deberá cumplir los siguientes requisitos:
I. Ser mayor de dieciocho años de edad y estar en pleno uso de sus facultades;
II. Rendir consentimiento expreso, absoluto y pleno ante fedatario público, de conformidad con las disposiciones civiles aplicables;
III. Estar en buen estado de salud física y mental, y
IV. Cumplir con las exigencias de un protocolo obligatorio de tamizaje que incluirá enfermedades infectocontagiosas, enfermedades no transmisibles, perfil bioquímico y metabólico, análisis toxicológico, así como la evaluación de las condiciones psicológicas de idoneidad para ser mujer héterogestante, de conformidad con las normas.

La mujer héterogestante únicamente podrá permitir y autorizar el uso de su útero en un máximo de dos ocasiones hasta lograr la viabilidad del producto o tres en caso de que se produzca un aborto natural.
La mujer héterogestante deberá preservar en todo momento las condiciones de salud que permitan el sano desarrollo del producto.

Artículo 71 bis 19. La mujer héterogestante recibirá, desde la realización del protocolo al que se refiere este artículo, y hasta un año después del nacimiento del producto de la gestación, atención médica con cargo a la o las personas que hayan solicitado su colaboración.
Sin perjuicio de lo anterior, también se podrá fijar una compensación económica destinada exclusivamente a resarcir a la mujer héterogestante por las molestias físicas que, en su caso, se presenten y los gastos de alimentación, vestido, medicamentos, desplazamiento y laborales que se puedan derivar de la colaboración.

Artículo 71 bis 20. Los actos contemplados en el presente capítulo deberán observar las formalidades siguientes:
I. Para la donación de células germinales u óvulos fertilizados se requiere consentimiento expreso por escrito que deberá ser otorgado en términos del artículo 322 de la Ley General de Salud, incluyendo los elementos a los que se refiere el presente capítulo;
II. Para el depósito de células germinales u óvulos fertilizados de las personas receptoras se suscribirá un contrato para la crioconservación de acuerdo con lo previsto en esta Ley y demás disposiciones aplicables;
III. Para la transferencia de células germinales u óvulos fertilizados a las personas receptoras se requiere del consentimiento informado de éstas, y
IV. Para obtener la colaboración de una mujer héterogestante se requiere rendir consentimiento expreso, absoluto y pleno ante fedatario público, de conformidad con las disposiciones civiles

aplicables, además del consentimiento informado para las intervenciones médicas que se le practiquen.

Los consentimientos otorgados conforme a las fracciones III y IV de este artículo podrán ser revocados por la persona donadora, receptora o por la mujer héterogestante, según corresponda, hasta antes de la captura germinal o del proceso de transferencia.

La donación a la que se refiere la fracción I de este artículo será revocable cuando las personas donantes requieran para sí las células germinales donadas, siempre que en la fecha de la revocación aquéllas aún estén disponibles.

Artículo 71 bis 21. El consentimiento expreso para la donación de células germinales y óvulos fertilizados deberá contener, por lo menos, los siguientes elementos:

I. Datos generales de la persona donante;
II. Datos generales del Banco;
III. Cláusula de estricta confidencialidad;
IV. Cláusula en la que la persona donante renuncia expresamente a conocer el destino de la donación que dichas células germinales tengan, y en su caso también de los óvulos fertilizados, y
V. Demás requisitos que la presente Ley, sus reglamentos y las normas establezcan al respecto.

Artículo 71 bis 22. El consentimiento informado que la persona receptora signará ante los establecimientos autorizados deberá contener, por lo menos, los siguientes elementos:

I. Datos generales de la persona receptora;
II. Datos generales del establecimiento autorizado;
III. Cláusula de estricta confidencialidad;
IV. Cláusula en la que la persona receptora renuncia expresamente a conocer el origen de las células germinales u óvulos fertilizados aceptados; y,
V. Los demás requisitos que la presente Ley y la legislación aplicable establezcan al respecto.

Artículo 71 bis 23. La Secretaría de Salud coordinará el Registro Nacional, mismo que se encargará de:

I. Integrar y actualizar los datos de las personas receptoras, donantes, mujeres héterogestantes y las fechas de los procedimientos respectivos;
II. Proporcionar a los bancos la información relativa a las personas receptoras, donantes y mujeres héterogestantes para los efectos de lo establecido en la fracción I del artículo 71 bis 22;
III. Compilar los datos estadísticos de las personas nacidas mediante técnicas de reproducción humana asistida para los efectos de lo establecido en la fracción III del artículo 71 bis 10;
IV. Integrar y actualizar la relación de los establecimientos autorizados conforme a este capítulo; y,
V. Integrar y actualizar la relación de la cantidad de óvulos fertilizados crioconservados en cada establecimiento.

Artículo 71 bis 24. Serán responsabilidades del Banco:

I. Comprobar de manera fehaciente la identidad y los antecedentes de las personas donantes. La comprobación de los antecedentes podrá hacerse mediante consulta en el Registro Nacional;
II. Obtener información sobre la salud de las personas nacidas mediante técnicas de reproducción asistida durante su primer año de vida, siempre que se hayan utilizado para su procreación células germinales de personas donantes anónimas, con el fin de que en el caso de que las o los nacidos vivos tengan alguna enfermedad genética o cromosómica, se evite la fertilización mediante la utilización de las células germinales de la persona donante, en tanto se compruebe que dicha enfermedad no fue transmitida por la persona donante.

En caso contrario, las células germinales que en su caso hayan sido obtenidas de dicha persona donante podrán destinarse únicamente a los fines descritos en las fracciones III y IV del artículo 71 BIS 9 de esta Ley;

III. Llevar un registro interno de las actividades que realicen. Las normas definirán la información que deberá contener ese registro interno, así como la periodicidad con la que se entregará al Registro Nacional.

Artículo 71 bis 25. Las células germinales femeninas y masculinas podrán utilizarse de manera independiente con fines de investigación.
Se prohíbe la transferencia a una mujer de células germinales previamente destinadas a la investigación, así como su uso para originar óvulos fertilizados con fines de procreación.

Artículo 71 bis 26. Para autorizar la investigación con óvulos fertilizados se deberán cumplir los siguientes requisitos:

I. Que se trate de óvulos fertilizados donados de acuerdo con lo que señala el presente capítulo;

II. Que el óvulo fertilizado no se haya desarrollado in vitro más allá de 14 días después de la fecundación del óvulo, descontando el tiempo en el que pueda haber estado crioconservado; y,

III. Los demás que establecen esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables.

Artículo 71 bis 27. La filiación de los hijos e hijas nacidos mediante técnicas de reproducción humana asistida se ajustará a lo que al efecto disponga la legislación civil.
Artículo 71 bis 28. Los casos no contemplados en la presente Ley se dirimirán en los juzgados civiles, familiares o penales, según corresponda.

Artículo 198. Únicamente requieren autorización sanitaria los establecimientos dedicados a:

I. …
II. …;
III. ….;
IV. …;
V. …;
VI. bis. Practicar técnicas de reproducción asistida, y
VII. ….

…
…

Artículo 313. Compete a la Secretaría de Salud:

I….

I bis. El control sanitario de los bancos dedicados a la obtención, crioconservación y disposición de células germinales y óvulos fertilizados, así como de los establecimientos en los que se practiquen técnicas de reproducción asistida, por conducto de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y

II….

Artículo 314.- Para efectos de este título se entiende por:

I. Se deroga.

Del I Bis al XXVII. …

Artículo 315. Los establecimientos de salud que requieren de autorización sanitaria son los dedicados a:

I….;
II….;

II bis. La obtención, crioconservación y disposición de células germinales y óvulos fertilizados;
III….
IV…
…
Artículo 375. Requieren de permiso:
I. …;
II. …;
III. …;
IV. …;
V…;
VI. **..;**
VI bis. La internación en el territorio nacional o la salida de él, de células germinales y óvulos fertilizados;
VII….;
VIII….;
IX…., y
X. …
…

Artículo 421. Se sancionará con una multa equivalente de seis mil hasta doce mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 67, **71 BIS 3, 71 BIS 6, 71 BIS 8, 71 BIS 12, 71 BIS 14, 71 BIS 20, 71 BIS 21, 71 BIS 22**, 101, 125, 127, 149, 193, 210, 212, 213, 218, 220, 230, 232, 233, 237, 238,240, 242, 243, 247, 248, 251, 252, 255, 256, 258, 266, 306, 308, 309, 315, 317, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 338, último párrafo, 342, 348, primer párrafo, 350 bis 1, 365, 367, 375, 376, 400, 411 y 413 de esta Ley.

Artículo 421 bis. Se sancionará con multa equivalente de doce mil hasta dieciséis mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos **71 BIS 9, 71 BIS 10, 71 BIS 11, 71 BIS 15, 71 BIS 16, 71 BIS 18, 71 BIS 19, 71 BIS 25, 71 BIS 26**, 100, 122, 126, 146, 205, 235, 254, 264, 281, 289, 293, 298, 325, 327 y 333 de esta Ley.
Artículo 466. **Se deroga**
Artículo 466 Bis. Se impondrán de seis a diecisiete años de prisión y multa por el equivalente de ocho mil a diecisiete mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate al que realice transferencias de óvulos fertilizados entre seres humanos y otras especies, así como aquellos que lleven a cabo experimentos con el propósito de crear seres humanos mediante clonación o de producir híbridos o quimeras con fines reproductivos.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La Secretaría de Salud emitirá las normas oficiales mexicanas a las que se alude en el presente Decreto en un plazo que no excederá los 260 días, contados a partir de su entrada en vigor.
Tercero. La Secretaría de Salud instalará el Registro Nacional de Reproducción Humana Asistida en un plazo que no excederá los 120 días, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Cámara de Senadores a los 29 días del mes de abril de 2013

ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ **ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ**

CONTINÚA TOMO II

SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL

Consulta la Gaceta del Senado en ***www.senado.gob.mx***





Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta y la que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”.